Promueve, dirige y gestiona:

Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO)

Centro de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

www.lippoupo.org
Universidad Pablo de Olavide
Ctra. de Utrera, km 1
41013 Sevilla, España.

Imprime: Aconcagua Libros.
Sevilla, España.
infoaconcagualibros@gmail.com
www.aconcagualibros.net

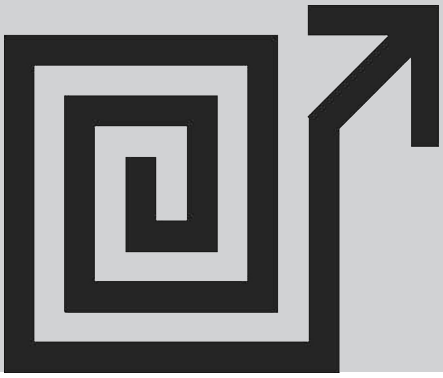
Colaboran:
Fundación Tercer Milenio
Universidad de Huelva
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ISSN 1885-589X
D.L.: SE-6612-05

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA

International Journal of Political Thought

Revista Internacional de Pensamiento Político



Número 19
2024

[RIPP] https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp

Revista Internacional de

Pensamiento

Político

Bases de indexación de la revista:

WEB OF SCIENCE (ESCI)
FECYT 2023
IN-RECS
CIRC
RESH
DICE
ISOC
DOAJ
LATINDEX
DULCINEA
ERIH PLUS
DIALNET
MIAR
CARHUS PLUS
REDIB
HEINONLINE
PROQUEST SOCIAL SCIENCE JOURNALS
PROQUEST POLITICAL SCIENCE
PHILOSOPHER´S INDEX
VLEX

ICDS de la revista: 9.7

RIPP se adhiere a las directrices EASE (European Asociation of Science Editors) y de COPE (Comitee on Publications Ethics)

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Resumen en español:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES



Índice

Monográfico: Zonas calientes en el actual escenario de los derechos humanos

Soriano González, María Luisa: PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO Pág. 11

Corpas Pastor, Luis: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO PRIVADO: LA CALIDAD DE VIDA Pág. 13

Garbellini Filho, Luiz H.: LA REGULACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS RELACIONADA CON SITUACIONES DE CONFLICTOS ARMADOS: ENTRE LAGUNAS Y ENFOQUE ESTATOCÉNTRICO EN LA (DES)PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Pág. 41

Monereo Atienza, Cristina: UNA ESPECULACIÓN FICTICIA SOBRE EL CONCEPTO DE SER HUMANO EN LA ERA TECNOLÓGICA: ONDA CEREBRAL DE POUL ANDERSON Pág. 67

Placín Vergillo, Francisco: EL DISCURSO DE ODIO ONLINE Y SU PERSECUCIÓN POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Pág. 87

Reyes Lobos, Maximiliano: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DERECHOS HUMANOS? NOTAS SOBRE EL FIN DE UNA ACCIÓN VIRTUOSA Pág. 103

In Memoriam: Toni Negri

Molina Campano, Eduardo: PRESENTACIÓN DE TONI NEGRI Pág. 121

Rodríguez Prieto, Rafael y Molina Campano, Eduardo: CONVERSATORIO SOBRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE TONI NEGRI Pág. 125

Estudios Varios

Arcos Fuentes, Israel: UN ACERCAMIENTO HISTÓRICO CONCEPTUAL A LA SUBSUNCIÓN DE LA PLURALIDAD DE CAMPOS EXISTENCIALES POR UN MONISMO PARTICULAR: POLÍTICA Y ECONOMÍA COMO FENÓMENOS TOTALITARIOS Pág. 137

Butiérrez, Luis Fernando: POLÍTICAS DE LO IMPOSIBLE: LA ONTOLOGÍA DE LA COMUNIDAD Y DEL PRÓJIMO EN SLAVOJ ŽIŽEK Pág. 161

Castro Trujillo, Jhonny: EMIGRACIÓN Y RETORNO DE POBLACIÓN VENEZOLANA: DOS CARAS DE UN MISMO FENÓMENO. MOVILIDAD HUMANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y POS-PANDEMIA Pág. 187

Delgado Rojas, Jesús Ignacio: LA COSMÓPOLIS EN GUERRA: LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL IDEAL COSMOPOLITA EN TIEMPOS DE BARBARIE Pág. 217

Gil Martín, Javier; Sánchez Piñeiro, David: LAS VICISITUDES DEL DERECHO HUMANO A LA PAZ: INFORME DE UN PROCESO DE CODIFICACIÓN INACABADO Pág. 241

Gómez Solano, Lorien; Seijo Boado, Ismael: «ESTRANGULAR AL TIGRE»: RADICALIZACIÓN Y AUGE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ULTRADERECHA EUROPEA: LOS CASOS DE GRECIA Y DE REINO UNIDO Pág. 261

Lucena Cid, Isabel: DEONTIC POWERS AND REASONS TO ACT INDEPENDENTLY OF DESIRE Pág. 291

Megías, Adrián; Moreno, Cristina; Villaplana, F. Ramón: DESAFECCIÓN POLÍTICA: UNA PROPUESTA DE RECONCEPTUALIZACIÓN Pág. 305

Niño Arnaiz, Borja: MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA, MERCADOS DE CIUDADANÍA Y RESISTENCIA MIGRATORIA Pág. 327

Rodríguez Pérez, Beatriz Cristina: GASLIGHTING ORGANIZACIONAL: UNA PUERTA ABIERTA AL SUICIDIO LABORAL. PERSPECTIVA ÉTICO-POLÍTICAS Pág. 351

Santibáñez Guerrero, Daniel: ALGORITMOS, DEMOCRACIA Y POLÍTICA Pág. 375

Saura García, Carlos; Calvo, Patrici: DEMOCRACIA DE LA VIGILANCIA: DATOS, ACTIVISMO Y CONTRAPODER Pág. 395

Soriano González, María Luisa: IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: EUROPA, PALESTINA/ISRAEL Y CUBA Pág. 419

Normas para los autores (www.upo/revistas/index.php/ripp)

Guidelines for authors (www.upo/revistas/index.php/ripp)

Publicaciones del LIPPO (www.upo/revistas/index.php/ripp)

Formulario de evaluación (www.upo/revistas/index.php/ripp)

Revista Internacional de

Pensamiento Político

Numero 19

2024

Comité Científico

Anthony Pagden (Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos)

Antonio Enrique Pérez Luño (Universidad de Sevilla, España)

Benjamin Barber (Universidad de Nueva York, Estados Unidos)

Carlos Alarcón (Universidad Pablo de Olavide, España)

David Kennedy (Universidad de Harvard, Estados Unidos)

Edgar Morin (Centro Nacional de la Investigación Científica, París, Francia)

Elías Díaz (Universidad Autónoma de Madrid, España)

Franz Himmkenlamert (Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica)

James Tully (Universidad de Victoria, Canadá)

Luigi Ferrajoli (Universidad de Roma III, Italia)

María Teresa Sierra (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)

Martti Koskenniemi (Universidad de Helsinki, Finlandia)

Noam Chomsky (Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos)

Norberto Bobbio (Universidad de Turín, Italia)

Quentin Skinner (Universidad de la Reina Mary, Londres, Reino Unido)

Rebecca Igreja (Universidade de Brasília, Brasil)

Ruth Rubio Marín (Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia)

Waldimeiry Correa da Silva (Universidad de Sevilla, España)

Will Kymlicka (Universidad de la Reina, Kingston, Canadá)

Revista Internacional de

Pensamiento

Político

Comité de Programación y Redacción

Director:

Ramón Luis Soriano Díaz, catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política [Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España].

Director adjunto:

David Sánchez Rubio, profesor titular de Filosofía del Derecho y Política [Universidad de Sevilla, Sevilla, España].

Secretario:

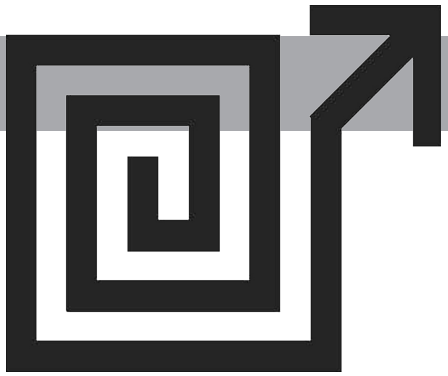
Sergio Marín Conejo, Profesor de Filología Inglesa [Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España].

Vicesecretaria:

María Nieves Saldaña Díaz, profesora titular de Derecho Constitucional [Universidad de Huelva, Huelva, España].

Vocalías:

Pierre Brunet [Université Paris X Nanterre-La Défense, Francia].
Ignacio de la Rasilla del Moral [Wuhan University Institute of International Law, Wuhan, China].
Stefan Gandler [University of California, EE.UU.].
Giuseppe Lorini [Università degli studi di Pavia, Italia].
Vincent Mosco [Queen ' s University, Reino Unido].
Jaime Rafael Nieto López [Universidad de Medellín, Colombia].
Gloria Trocello [Universidad de San Luis, Argentina].
Alberto Marco Ghibellini [Università degli studi di Torino, Italia]



Monográfico

Zonas calientes en el actual escenario de los derechos humanos

PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO

Zonas calientes en el actual escenario de los derechos humanos

El monográfico trata de zonas calientes de los derechos humanos en la sociedad actual. No son las únicas, pero no se puede desconocer que las seleccionadas sí lo son: la trata de seres humanos en conflictos bélicos, el problema de la eficacia del derecho medioambiental, la extensión de los derechos más allá de los seres humanos, la propagación de los mensajes y discursos del odio en los medios online y finalmente la cuestión nada pacífica del concepto y contenido de los derechos humanos.

Luiz H. Garbellíni Filho tiene por objeto en su análisis la trata de seres humanos en situaciones de conflictos armados, afirmando que los enfrentamientos bélicos agravan las prácticas de la trata de seres humanos, si los comparamos con la situación de la trata en tiempos y espacios de paz. Tiene como punto de referencia en su trabajo el *Protocolo de Palermo*, del que destaca dos problemas en su diseño: la ausencia de las circunstancias de las víctimas y el enfoque estatocéntrico, es decir, el Estado como centro de consideración en la normativa, dejando a un lado otros aspectos del fenómeno.

Luis Corpas Pastor atiende a un problema general que afecta a los derechos humanos de tercera generación, como es su escasa eficacia debido a que no son contemplados en el ordenamiento jurídico como derechos subjetivos de la persona esgrimibles ante los tribunales de justicia en caso de su vulneración. Por ello el autor se adentra en el ámbito del derecho positivo, singularmente el derecho civil, proponiendo innovaciones jurídicas que dotarían de eficacia jurídica a un derecho humanos de tercera generación de extraordinaria relevancia, el derecho medioambiental, que conllevaría una protección más efectiva del medio ambiente.

Cristina Monereo se vale de la obra *Onda cerebral*, de Poul Anderson, para tratar la situación de los humanos en su proyección al futuro, donde tiene que convivir con otros seres en circunstancias similares. Gira su reflexión sobre dos aspectos de la obra. El primero es la sobrevaloración de la inteligencia racional de los humanos y su autosuficiencia moral. El segundo es la condición humana de fragilidad y vulnerabilidad, en la que los humanos se parecen a otros seres del mundo, lo que es incompatible con una declaración de su excelencia y privilegio. De esta segunda característica deriva la crítica a la superioridad de los humanos según la autora y a la necesidad de la empatía con otros seres, que como nosotros son seres sintientes y por lo tanto titulares de derechos. Y en definitiva lleva al cuestionamiento de los derechos tal como actualmente son concebidos y repartidos entre los seres del planeta.

Francisco Placín Vergillo da cuenta de las facilidades de la propagación del odio en medios online, porque oculta la responsabilidad del autor, llega a un gran y diverso

público y se mantiene el mensaje en el tiempo. Como consecuencia algunos Estados piden responsabilidades a las empresas responsables de la difusión, dando lugar a una polémica entre el alcance de la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la persona. Por ello, considera de gran valor y eficacia el análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como regla común para resolver la polémica y norma directiva para todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

Maximiliano Reyes Lobos se enfrenta a la espinosa cuestión de qué son los derechos humanos y su contenido. Ya el término "derechos humanos" ofrece diversas interpretaciones especialmente si se le compara con expresiones semejantes, como "derechos fundamentales", "derechos de la persona", etc. ¿En qué se diferencia?. El autor da un enfoque a la definición de los derechos humanos, más allá de su clásica categorización en generaciones de derechos, teniendo en su propuesta como vector la dignidad humana. Propone un enfoque global de los derechos humanos basado en tres aspectos: disposiciones, criterios y sensibilidades.

María Luisa Soriano González

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

mlsorgon@upo.es

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO PRIVADO: LA CALIDAD DE VIDA

ON THE PROTECTION OF THIRD GENERATION HUMAN RIGHTS THROUGH PRIVATE LAW: THE QUALITY OF LIFE

Luis Corpas Pastor
Universidad de Málaga, Málaga, España
lcorpas@uma.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: calidad de vida, derechos humanos, derecho medioambiental, derecho privado, responsabilidad
Key words: quality of life, human rights, environmental law, private law, liability

Resumen: En este trabajo se resalta la importancia del derecho medioambiental y su relación con el derecho civil para la conservación y mejora del medioambiente como derecho humano a la calidad de vida. El derecho medioambiental como disciplina jurídica promueve la protección efectiva del derecho humano a la calidad de vida, regulando aspectos como la conservación de recursos naturales y la responsabilidad por daños ambientales. El derecho a un medioambiente saludable se identifica plenamente con el derecho a la calidad de vida en su conexión con la dignidad humana. Esto implica considerar el medioambiente como un conjunto de elementos interrelacionados, como recursos naturales y biodiversidad, que deben ser conservados y protegidos para garantizar un entorno sostenible. El derecho civil desempeña un papel clave al establecer la responsabilidad por daños ambientales y la reparación de estos, así como al regular la cesación de actividades dañinas y la compensación a las víctimas. Además, es fundamental revisar la legislación vigente para fortalecer estos aspectos y promover una mayor protección ambiental a través del derecho privado, incluyendo la posibilidad de acciones colectivas y la clarificación de los plazos de prescripción.

Abstract: The importance of environmental law and its relationship with civil law for the conservation and improvement of the environment as a human right to quality of life is highlighted in this paper. As a legal discipline, Enviromental Law promotes the effective protection of the human right to quality of life by

regulating aspects such as the conservation of natural resources and liability for environmental damage. The right to a healthy environment is fully identified with the right to quality of life in its connection with human dignity. This implies considering the environment as a set of interrelated elements, such as natural resources and biodiversity, which must be conserved and protected to ensure a sustainable environment. Civil law plays a key role by establishing liability for environmental damage and the reparation thereof, as well as regulating the cessation of harmful activities and compensation to victims. Furthermore, it is essential to review existing legislation to strengthen these aspects and promote greater environmental protection through private law, including the possibility of collective actions and the clarification of prescription periods.

1. Introducción[1]

1.1. Las sucesivas generaciones de derechos humanos

Pérez Luño (1991: 205), junto a gran parte de la doctrina, sitúa pacíficamente los derechos civiles y políticos en una *primera generación* de derechos humanos que han ido desarrollándose a lo largo de nuestra historia como salvaguardas de libertad individual frente a intromisiones del poder de imperio del Estado que han dado sentido a la defensa de la dignidad de los seres humanos tras las grandes revoluciones sociales desde el siglo XVI al XVIII, en el mundo occidental[2].

En línea con la doctrina más autorizada (por todos, Pérez Luño, 1991, y Martínez de Pisón, 2004), tras el advenimiento de los regímenes democráticos en nuestro contexto, y la toma de conciencia de la importancia de la colectividad, se produjo, fundamentalmente a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, una transformación más social de la concepción del ser humano en la que para la defensa de la dignidad se hace necesario una paralela expansión de ciertos derechos económicos, sociales y culturales que pueden englobarse en la *segunda generación* de derechos humanos (Martínez de Pisón, 2004: 417-423)[3].

Finalmente, en esta evolución, y como consecuencia de la "crisis del Estado social de Derecho y la búsqueda de mejores

1 El presente trabajo ha sido realizado en el seno del grupo de investigación SEJ-163 "Historia de las Instituciones Jurídicas". Facultad de Derecho. Universidad de Málaga.

2 *Cfr.* José Martínez de Pisón. "Las generaciones de derechos humanos", en Jerónimo Betegón Carrillo, Francisco Javier Laporta San Miguel, Luis Prieto Sanchís y Juan Ramón de Páramo Argüelles (Coords.). *Constitución y Derechos Fundamentales*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 412-417. *Vid.* Magdalena Aguilar Cuevas. "Las tres generaciones de los derechos humanos", *Derechos Humanos,* nº 30, 1998, p. 101.

3 *N.B.* En el mismo sentido, Magdalena Aguilar Cuevas. "Las tres generaciones de los derechos humanos", *Derechos Humanos,* nº 30, 1998, pp. 93-102. Igualmente, *vid.*. Juan Pablo Cabrera Vélez, María Concepción Chacón Abarca y Telmo Elías Yánez Olalla. "Los derechos humanos de primera y segunda generación y su realización por parte de los estados", *Magazine de las ciencias: revista de investigación e innovación*, 5(7), 2020, pp. 120-121.

condiciones en la calidad de vida de las personas" (Tello Moreno, 2007: 133-134), en una suerte de "lucha contra el miedo y la miseria" (Ballesteros: 2003, 29), se comienza a entrever la necesidad de luchar por otros derechos con gran componente colectivo para preservar la dignidad de los pueblos. De esta manera, surgen unos *derechos humanos de tercera generación*, derechos que se encuentran en formación (Pérez Luño: 1991, 210) y cuyos perfiles que se han ido definiendo durante los últimos años del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, pero que "aún son materia de discusión" (Martínez de Pisón, 2004: 423); alguno de los cuales ha ido alcanzando su positivación de una forma gradual a través de *soft law* y de instrumentos normativos de carácter internacional (Verdú Baeza, 2019: 444), como es el caso del "acceso a un medio ambiente limpio y sostenible", recientemente encuadrado como un derecho humano universal[4].

Los derechos de *tercera generación* trascienden los derechos individuales de forma radical, caracterizándose por "su pluralidad, por su referencia a la fraternidad, solidaridad, medio ambiente, justicia social, justicia entre generaciones", en palabras de Martínez de Pisón (2004: 423-424), como respuesta a las nuevas preocupaciones sociales vistas de manera comparada, o mejor dicho, conjuntamente de los pueblos, de las minorías que se relacionan con el resto pidiendo la autodeterminación o el derecho al desarrollo colectivo, o colaborativo que defienden de forma global la dignidad del ser humano. Avanzamos que se trata de "derechos de los pueblos o de solidaridad" (Aguilar Cuevas, 1998: 93), a través de los cuales se protege la dignidad del ser humano globalmente considerado, protegiendo a grupos de personas con un "interés colectivo común" (Aguilar Cuevas, 1998: 98) que simplemente reclaman su dignidad a través de la reivindicación de su propia "identidad cultural" (Martínez de Pisón, 2004: 411), a través de la defensa del "patrimonio común de la humanidad" (Gómez Isa, 2015: 120) y cómo no, el derecho a un medioambiente saludable, que posibilite la plena efectividad de los derechos humanos de las generaciones previas; que alguno lo sitúa en una cuarta generación, puesto en consonancia con su aspecto global (Espinosa González, 2012: 58).

Pérez Luño (1991: 206-210) ya había identificado como nuevos derechos de esta tercera generación el derecho a la paz, a la calidad de vida, la libertad informática, e incluso "las garantías frente a la manipulación genética, el derecho a morir con dignidad, el derecho al disfrute del patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho de los pueblos al desarrollo, el derecho al cambio de sexo, o a la reivindicación de los colectivos feministas de un derecho al aborto libre y gratuito". Como afirma Campoy Cervera (2022: 165-166), "los derechos necesariamente han de estar abiertos a la evolución de las necesidades humanas, a los cambios sociales y culturales; lo que justificará la necesaria incorporación de nuevos derechos en el catálogo de los derechos humanos. Por ello, Gómez Puerto (2020: 228) se refiere expresamente al "derecho a un medio ambiente saludable", equivalente al derecho a la calidad de vida, como necesario para el "progreso social y elevación del nivel de vida de

4 ONU. *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*. Resolución Asamblea General A/RES/76/300, de 28 de julio de 2022 (Pleno), 2022. [En línea] https://n9.cl/1af0j.

todos los pueblos" porque, no olvidemos, el ser humano gregario necesita de forma ineludible un medioambiente donde vivir dignamente y hay que hacerse a la idea que "las ciudades concentran un porcentaje muy elevado de la población a nivel mundial (alrededor del 56 %, 4 400 millones de habitantes según el Banco Mundial). Esta tendencia se espera siga aumentando, pudiendo llegar a doblarse para 2050, momento en el que casi 7 de cada 10 personas vivirán en grandes ciudades" (Martín Olmedo, 2023: 3).

El interés por la calidad de vida, siguiendo a Lorenzetti (2008: 69), "ha existido desde tiempos remotos, desde Aristóteles a los filósofos contemporáneos se ha teorizado e investigado sobre aquellos aspectos que hacen al bienestar del hombre" y como concepto autónomo, "remite al concepto de bienestar (`wellbeing´ o `welfare´ para los anglosajones); y esto depende de la posibilidad que tenga cada persona de pensar bien acerca de su propia vida" (Lorenzetti, 2008: 70). Además, la protección del medioambiente contiene una "relación simbiótica" con la eficacia de otras garantías fundamentales (Milano Sánchez, 2022: 202), que no es más que la prueba de la interconexión de los derechos humanos en la preservación de la dignidad del ser humano a través del derecho a un ambiente sano "como parte del haz de derechos humanos reconocidos" (en este caso, a nivel interamericano) "con lo cual se consolida en el marco del Derecho internacional de los derechos humanos, una garantía de contenido ambiental que se une a los derechos económicos, sociales y culturales"[5].

Por tanto, el derecho a la calidad de vida protege el ecosistema global como forma de repensar la convivencia humana en relación con el resto de seres del planeta incluidos los seres humanos en distintos pueblos, por lo que es posible que sí estemos ante un *derecho humano de cuarta generación*, al integrarse en una dimensión global su núcleo esencial.

En este trabajo se reconoce el derecho medioambiental como disciplina jurídica con entidad propia, en relación no solo con el derecho público, sino también con el derecho privado y la protección de los Derechos Humanos, en concreto del derecho a la calidad de vida, a través del derecho civil.

La importancia de considerarlo como una disciplina jurídica con entidad propia radica en la necesidad de abordar de manera específica y especializada las cuestiones legales relacionadas con la protección del medioambiente. Al reconocerlo como una disciplina independiente, se puede desarrollar un marco legal más completo y efectivo para abordar los desafíos ambientales actuales y futuros. Esto incluye la regulación de la conservación de recursos naturales, la prevención de la contaminación, la gestión de residuos, la

5 Aldo Milano Sánchez. "El 2021 y el derecho ambiental en Costa rica", en Gerardo García Álvarez, Jesús Jordano Fraga, Blanca Lozano Cutanda y Alba Nogueira López, (Coords.). *Observatorio de Políticas Ambientales 2022.* Madrid: Ed. CIEMAT, 2022, p. 202. Se refiere el autor a la "Opinión Consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el medio costarricense, que reconoce el "derecho al ambiente de modo independiente y autónomo en su integración a la nómina de derechos económicos sociales y culturales" de la Convención Americana de Derechos Humanos. No solo "por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta".

protección de la biodiversidad y la responsabilidad por daños medioambientales.

Como disciplina autónoma, se podrían crear normativas específicas, mecanismos de aplicación y sistemas de responsabilidad que aborden de manera integral los aspectos jurídicos relacionados con el medioambiente; lo que permite una mayor claridad y coherencia en la regulación, así como una mejor protección de los derechos humanos vinculados a un medio ambiente sano y sostenible. Considerarlo como una disciplina jurídica con entidad propia hace posible una atención especializada a las complejas interacciones entre la actividad humana y el entorno natural, promoviendo así la protección efectiva del medioambiente y el derecho humano a la calidad de vida y, por ende, los derechos asociados al mismo.

En la actualidad, como veremos más adelante, el derecho civil se relaciona con la protección del medioambiente de varias maneras, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad por daños medioambientales y la reparación de los mismos. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante unos daños especialmente difusos, complejo en cuanto a la determinación de la causalidad, y "sobre todo cuando los efectos negativos se manifiestan de forma progresiva y a largo plazo" (Fernández Aparicio, 1999: 1100).

Avanzamos a continuación diversas conexiones que vinculan el derecho civil con la protección del medioambiente. En primer lugar, porque el derecho civil establece las bases para la responsabilidad por daños causados al medio ambiente. Esto incluye la determinación de quién es responsable por la contaminación o degradación ambiental, así como la obligación de reparar los daños ocasionados a los particulares. En segundo lugar, permite el ejercicio de acciones de cesación en casos de afectación del medio ambiente, lo que implica la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil, a través de la acción negatoria, para detener actividades que estén causando daños ambientales. En tercer lugar, el derecho civil proporciona mecanismos indemnizatorios a particulares como consecuencia de daños medioambientales, incluyendo la compensación por daños materiales y morales derivados de la contaminación o alteración del entorno. Finalmente, el derecho privado protege bienes jurídicos relacionados con el medio ambiente, como el derecho humano a un medioambiente saludable, la propiedad sobre recursos naturales y la integridad de los ecosistemas.

Bajo este punto de vista, se puede afirmar que el derecho civil desempeña un papel fundamental en la protección del medioambiente al establecer las bases legales para el ejercicio de acciones de responsabilidad por daños, la reparación de los mismos y la protección de los bienes jurídicos privados vinculados al entorno natural.

1.2. El concepto de medioambiente

La Real Academia Española define el medioambiente como un "conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos"[6].

6 Real Academia Española. *Diccionario panhispánico del español jurídico*, 2023. [Online]. Disponible en https://dpej.rae.es/lema/medioambiente

Dicha definición parece excluir del concepto de medioambiente a las personas, pero, en nuestra opinión, las personas están también involucradas en el medioambiente; englobadas como "seres vivos" que se relacionan interactuando con el mismo. Por lo tanto, si bien, en principio, el medioambiente es un sistema externo a los seres vivos, claramente las personas pueden producir alteraciones en dicho sistema y, a su vez, el medioambiente puede afectar a las personas. En lo que a las personas nos interesa, podemos identificar en esta interacción, por un lado, la parte que contamina y, por otro, la que sufre un daño por dicha contaminación.

Siguiendo a Aviñó Belenguer (2015: 34), este concepto "hay que definirlo desde una concepción estricta, comprensiva del conjunto de elementos naturales (agua, suelo y aire) y organismos vivos que determinan las características de un lugar"; siguiendo las prescripciones del artículo 2.1 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental[7] (en adelante, LRM). Para este autor, la definición del concepto de medio ambiente es difícil, debido fundamentalmente a que existen "distintas disciplinas jurídicas que lo intentan delimitar" junto con otros factores tales como "la constante evolución" a la que se somete una interacción evidente entre el "desarrollo económico, el deterioro ambiental y la propia concienciación del mismo por el ser humano". Así, un sector doctrinal relaciona el concepto del medio ambiente con todos aquellos aspectos vinculados con el hombre, incluida la cultura o el patrimonio histórico (punto de vista amplio) […] Otros autores relacionan el concepto de medio ambiente con todos aquellos factores que fomentan un adecuado desarrollo físico, emocional y estético del hombre respecto de la naturaleza, incluidos, por ejemplo, aquellos factores naturales que pueden contribuir al goce o disfrute de los bienes de la naturaleza, como el silencio o la tranquilidad, o la calidad de vida. (Aviñó Belenguer, 2015: 33-34).

Jurisprudencialmente, como recogemos en un reciente trabajo[8], resulta clásica la alusión a la definición de "ambiente, entorno o medio" que hace el Tribunal supremo en su STS 70/2001, de 2 de febrero[9], cuando lo sintetiza como la sistematización de diferentes valores, fenómenos y procesos naturales, sociales y culturales, que condicionan en un espacio y momento determinados, la vida y el desarrollo de organismos y el estado de los elementos inertes, en una conjunción integradora, sistemática y dialéctica de relaciones de intercambio con el hombre y entre los diferentes recursos. (FD 5º).

Además, el concepto jurídico de medioambiente también ha sido concretado por el Tribunal Constitucional, que en su STC 102/1995, define el medioambiente de la siguiente forma[10]: el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de

7 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE núm. 255, de 24 de octubre.

8 *Cfr.* Luis Corpas Pastor, "Propuesta de *lege ferenda* desde el Derecho civil a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental", *Ius et Scientia*, núm. Extrarodinario. Monográfico: «Medio Ambiente, seguridad y salud», 2024, pp. 145-149.

9 STS núm. 70/2001, de 2 de febrero. Sala de lo Civil. Ponente Excmo. Sr. Luis Martínez-Calcerrada Gómez (Roj: STS 646/2001 - ECLI:ES:TS:2001:646).

10 STC 102/1995, de 26 de junio. BOE núm. 181, de 31 de julio.

posibilidades para hacer su vida […], en pocas palabras, el entorno vital del hombre en un régimen de armonía, que aúna lo útil y lo grato […] comprende una serie de elementos o agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionando su existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, desaparición o consunción (FJ 4º).

Como vemos, los elementos de este concepto incluyen el ambiente (asociado comúnmente con la naturaleza), pero "sumergido en los procesos sociales, en las formas como el individuo interactúa" (Prada Rodríguez, 2013: 233). Ello prueba que el medioambiente es algo más complejo de lo que a simple vista pueda parecer, como veremos más adelante, cuando estudiemos su dimensión no solo local, sino global, en una visión biunívoca del concepto.

1.3. El medioambiente y su conexión con la dignidad del ser humano

Como parece notorio, el derecho humano a la calidad de vida es una manifestación biunívoca de la dignidad humana y las reglas de justificación política, entrelazando dimensiones locales y globales en un mundo interconectado. Algunos autores coinciden en afirmar que existe cierta conexión entre el disfrute de los derechos humanos en general con las condiciones ambientales[11]. Otros dan un paso más, y sitúan el derecho en un siguiente escalón, como afirma Espinosa González (2012), por ser una evolución de los de tercera generación, plasmada en una corriente denominada "Justicia Ambiental", basada en un "retorno a un principio básico en la lucha por los derechos humanos: el de igualdad y no discriminación", en su conexión con la vertiente global del derecho humano a la calidad de vida y la lucha contra lo que se ha venido a denominar "racismo ambiental"; por lo que el derecho a la calidad de vida o derecho al medioambiente pasa a considerarse parte de los nuevos derechos o *derechos humanos de cuarta generación*[12]. Sea como fuere, en cada aspecto que miremos este derecho humano, estaremos ante una visión protectora de la dignidad del ser humano.

11 Entre ellos, Dinah Shelton. "Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized", en *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, vol. 35, nº 129, 2006, pp. 129-171; o Alan Boyle. "Human Rights and the Environment: Where next?", en *The European Journal of Environmental Law,* 2012, Vol. 23, nº 3, pp. 613-642.

12 Adriana Espinosa González. "La justicia ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano", en *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, nº 16, 2012, pp. 58-60. La autora sitúa la justicia ambiental se inserta en el seno de la lucha contra la globalización y sus efectos sobre las poblaciones vulnerables, con menos recursos, que ven sus hábitats convertidos en verdaderos vertederos. Se trata, en nuestra opinión, de un paso cualificado hacia adelante en la consideración colectiva y global de este derecho humano que podría situarse en su vertiente individual o local entre los derechos de tercera generación, pero en su vertiente global e interrelacionada con otros derechos humanos como la lucha contra la discriminación y la búsqueda de la igualdad de los seres humanos; situado en los derechos humanos de cuarta generación.

1.4. El derecho a la salud en su conexión con el derecho a la calidad de vida

El artículo 43 de la Constitución Española (en adelante, CE) garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, así como la obligación de los poderes públicos de tomar medidas para proteger la salud pública y proporcionar los servicios necesarios para lograr este objetivo. Por su parte, el artículo 45 CE reconoce el deber de los poderes públicos de garantizar la preservación del medio ambiente, al tiempo que señala que "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" (45.1 CE). Como afirma Carretero Sánchez (2023: 209), "ese «todos» […] es un ejemplo de universalidad: derecho de todos a disfrutarlo, deber de todos de conservarlo"[13].

Ambos artículos se refieren a derechos fundamentales relacionados respectivamente con la protección de la salud y el medio ambiente y establecen la responsabilidad de los poderes públicos en su protección y conservación. De hecho, algunos autores sostienen que el derecho humano a la protección de la salud positivado en el artículo 43 CE tiene una configuración constitucional análoga al derecho humano al medioambiente recogido en el artículo 45 CE, como "derecho prestacional, una norma de acción dirigida a los poderes públicos que supone una acción positiva del Estado como medio para llevar a la práctica una serie de derechos y conquistas sociales que van más allá del propio ámbito de los derechos subjetivos y personales" (Delgado Piqueras, 1993: 53).

De acuerdo con López Ramón (2015: 2), nuestra Constitución "fue una de las primeras del mundo en reflejar la preocupación social por la tutela del medio ambiente", siguiendo el modelo de la Constitución portuguesa de 1976. Propone una interpretación del derecho al medio ambiente como derecho subjetivo de goce o disfrute (y, por tanto, susceptible de tutela judicial), puesto en conexión con "la comprensión de la necesidad de que los elementos ambientales sean explotados, aunque conforme a los principios de `utilización racional de todos los recursos naturales´ y de `indispensable solidaridad colectiva´ (artículo 45.2 de la Constitución)"[14], como afirma más adelante López Ramón (2015: 9). Esta formulación constitucional sitúa a ambos derechos entre los principios rectores de la política social y económica del Estado (Carretero Sánchez, 2023: 209),

13 *Cfr*. STC 102/1995, de la que resalta Carretero Sánchez (2023, 209) que vincula los valores dignidad de la persona y calidad de vida, cuando afirma: "bajo el artículo 45 subyace el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con la dignidad reconocida en el artículo 10 de la Constitución".

14 *Cfr*. Fernando Simón Yarza. "El llamado derecho al medio ambiente: un desafío a la teoría de los derechos fundamentales". *Revista Española de Derecho Constitucional*, 94, 2012, pp. 178-179. Afirma el autor que prácticamente todos los textos constitucionales contienen algún tipo de previsión ambiental. "Ninguno admite, sin embargo, un auténtico derecho individual al medio ambiente como tal, esto es, un poder inmediatamente invocable para proteger el entorno natural", lo cual afirma ser "algo comprensible", teniendo en cuenta que el medioambiente se trata de un bien colectivo generalmente, cuya protección debe abarcarse "desde un *status procuratoris,* categoría que no se corresponde con el reconocimiento de un derecho individual".

por lo que no se trata de derechos que puedan invocarse directamente por los particulares, de acuerdo con determinada doctrina[15], pero se trata de principios informadores dotados de cierta "fuerza vinculante" a la hora de interpretar las normas (Beltrán Aguirre, 1994: 286). Se trata, en suma, de una positivación de un derecho humano a la calidad de vida que engloba, por tanto, el derecho a un medioambiente saludable.

La exigencia constitucional de una protección del medioambiente por parte de los poderes públicos parece compatible con su protección por parte del derecho privado común, como así, por otra parte, lo afirma la propia LRM que supuso un marcado impulso del derecho público en esta materia, quizás influenciado por ideas políticas socialdemócratas de nuestro entorno, y sin desdeñar la realidad de la protección privada del medioambiente, y, expresamente, el resarcimiento de daños a los particulares a través de los mecanismos habituales del derecho común; deja fuera de la misma cualquier otra consideración al respecto. Se fundamenta en la Constitución Española en dicho artículo 45 CE, precisamente, que promueve las sanciones pertinentes "en los términos que la ley fije" (concretamente, artículo 45.3 CE), "así como la obligación de reparar el daño causado" para quienes violen la protección del medioambiente que dispensa el artículo 45.2 CE, el cual insta a los poderes públicos a velar por el uso racional de todos los recursos naturales, con el fin de "proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente".

La obligación de reparar, por tanto, se corresponde con un mandato constitucional expresamente dirigido al legislador; de manera que este debe fijar legalmente los términos en los que se pueda hacerse efectiva dicha obligación. La LRM obliga a pagar a quien contamina el medioambiente. Es decir, establece la obligación de correr con los gastos de regeneración del equilibrio ambiental de quien lo ha roto, si bien no excluye los mecanismos habituales de reparación establecidos en el ordenamiento cuando se afecten bienes y derechos de las personas, incluidos daños a la salud como consecuencia de la contaminación del medioambiente y, a tenor literal del artículo 5.1 LRM que afirma que esta ley "no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental"[16].

15 *Cfr*. David Aviñó Belenguer. *Prevención y reparación de los daños civiles por contaminación industrial*, Cizur Menor: Aranzadi, 2015, p. 35.

16 *Vid.* Artículo 5.1 LRM. La exclusión también se extiende a las reclamaciones por daños a la propiedad privada, las demandas de indemnización por pérdidas económicas, y el ejercicio de derechos relacionados con estos tipos de daños que los particulares puedan presentar contra los responsables; pues estas acciones "se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación". Sin embargo, en nuestra opinión, esto no implica que no se pueda recurrir al principio de responsabilidad civil extracontractual (según el artículo 1902 del Código Civil), especialmente cuando se trata de reparar daños en general y, en particular, los artículos relacionados con el derecho de inmisiones (artículos 590 y 1908 del

Si bien es cierto que el derecho interno protege la salud de las personas a la par que el derecho a un medioambiente saludable, no es menos cierto que esta defensa se realiza también a través de no pocos tratados y convenciones. Porque como sostiene Campoy Cervera (2022: 166), "lo que hace a los derechos dignos de una especial veneración y respeto es que [...] es a través de su reconocimiento y protección que todas las personas podremos desarrollar una vida humana digna; lo que nos sitúa en el plano de la fundamentación de los derechos".

Abandonada la idea de única fundamentación de los derechos humanos a través de las Constituciones kelsenianas, no hay más remedio que acudir a nuevas formas de fundamentación. Así, es en los tratados internacionales en los que reconocemos la dimensión del derecho a la calidad de vida como derecho humano. Por ejemplo, la *Convención de Estocolmo* sobre contaminantes orgánicos persistentes de 2001 (Convención POP, por sus siglas en inglés), en vigor desde 2004, se ocupa del problema de ciertas sustancias químicas que "se acumulan en los organismos vivos poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente"; la *Convención de Rotterdam* de 1998, sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, en vigor desde 2004, que "se aplica a plaguicidas y productos químicos industriales cuyo comercio se prohíbe o se restringe por razones sanitarias o ambientales", la *Convención de Basilea* de 1989, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, en vigor desde 1992, que "regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y controla que su eliminación se realice protegiendo el medio ambiente"[17], o el *Convenio de Minamata* de 2013, sobre mercurio, en vigor desde 2017 que "tiene por objeto limitar las emisiones y liberaciones de mercurio y componentes de mercurio de origen antropocéntrico" (López Turcios y Chamizo García, 2023). Elemento que preocupa especialmente en Latinoamérica[18] "por ser una sustan-

Código Civil). Un eventual daño a las personas, sea patrimonial o extrapatrimonial como consecuencia de la contaminación podrá ser indemnizado conforme a las reglas generales, que, por regla general, una acción de responsabilidad civil por contaminación "se fundamenta en el artículo 1902 Cc cuando los daños son ocasionados por culpa o negligencia, lo que encuentra un acoplamiento más difícil en la responsabilidad por inmisiones en sentido estricto". Así, "se aplica el artículo 1902 Cc cuando se insta el resarcimiento por daño derivado de la lesión de un bien, salud, o derechos de la personalidad […] en lugar del 1908 Cc", específico para las inmisiones, abandonando su "aplicación exclusiva" debido a "la dificultad práctica que presentan a la hora de solucionar problemas medioambientales" *Cfr.* David Aviñó Belenguer. *Prevención y reparación de los daños civiles por contaminación industrial*, Cizur menor (Pamplona): Aranzadi, 2015, pp. 7-72.

17 *Cfr.* Rosa Fernández Egea. "Compromisos internacionales en materia del medio ambiente: los tímidos avances de Glasgow sobre cambio climático y Kunming sobre biodiversidad salvan la parálisis de las negociaciones por una pandemia que persiste", en Gerardo García Álvarez, Jesús Jordano Fraga, Blanca Lozano Cutanda y Alba Nogueira López, (Coords.). *Observatorio de Políticas Ambientales 2022.* Madrid: Ed. CIEMAT, 2022, pp. 36-37.

18 Rosa Inés López Turcios y Horacio Alejandro Chamizo García. "Exposición a la contaminación antropogénica por mercurio y sus efectos en la salud", en *Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci)*, 2023, Vol. 57, nº 2, pp. 1-24. Los autores sostienen que la evidencia científica aso-

cia perjudicial para el medio ambiente y para la salud humana" (Fernández Egea, 2022: 37), con probada toxicidad bien definida[19].

2. Hipótesis

En este trabajo nos centramos como objeto de estudio, concretamente, en el derecho humano a la calidad de vida, puesto que la dignidad del ser humano es presupuesto de los derechos humanos. Lo haremos Código Civil en mano, porque no olvidemos que la visión de protección del medioambiente no es patrimonio exclusivo de la filosofía del derecho o del derecho público, sino que también adquiere mucha importancia lo tangible de las acciones humanas, sin perder de vista que estamos trabajando con un contenido esencial y unos límites intrínsecos e inseparables de la naturaleza humana en un mundo global. Se trata de unos derechos humanos en los que, siguiendo la concepción de Peces-Barba, podemos evidenciar un dualismo en su configuración "que supone que la pretensión moral justificada sea técnicamente incorporable a una norma", en referencia a los derechos fundamentales (Peces-Barba, 1999: 109-110). Todo ello, porque, a fin de cuentas, lo que se protege con el reconocimiento a un derecho al medioambiente saludable no es más que la dignidad del ser humano a través del principio positivado de la solidaridad[20], pero afirmando la innegable globalización humana y basándose en la concepción "radical" del ser humano que exige una casa, un lugar para vivir, libre de contaminación (Ballesteros, 2003: 30). En definitiva, un lugar para vivir dignamente.

cia fuertemente la exposición a mercurio con riesgo a enfermar, no solo en mujeres embarazadas y niños, asociado a muerte fetal, anomalías congénitas, parto espontáneo y problemas de crecimiento; sino que las patologías vinculadas "con concentraciones de mercurio en sangre, en personas expuestas ocupacionalmente", fueron el deterioro cognitivo, la infertilidad, y defectos del tubo neural.

19 La autora hace mención a ciertos instrumentos como el *Acuerdo de Aarhus* de 1989, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como su paralelismo con el *Acuerdo de Escazú*, de 4 de marzo de 2018, en vigor desde abril de 2021, para América Latina y el Caribe.

20 *Cfr*. Gabriel Real Ferrer. "El derecho a una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Comentario al artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana", en *Drets. Revista valenciana de reformes democràtiques*, nº 6, 2022, p. 333. El autor cita doctrina consolidada que recoge este principio de la solidaridad como "el fundamento central, ético y jurídico", del derecho al medioambiente. Cita también una minoría que está "aisladamente en contra", con alusión a un antiguo trabajo. *Cfr*. Juan Sebastián Montoro Carrasco. "Solidaridad y derecho al medio ambiente", en *Boletín de la Facultad de Derecho,* nº 12, 1997, pp. 596-622. En este antiguo estudio, su autor niega vehementemente que este principio informador recogido en la Constitución española pueda ser el fundamento del derecho "a un medio ambiente adecuado" porque, según concluye, "la posibilidad de se establezca en la mentalidad humana este tipo de sentir solidario está dentro de los postulados más utópicos que podamos imaginar" y, sin embargo, en nuestra opinión, esa afirmación es fruto del momento en que se hizo: lo más coherente, a la vista de los cambios históricos que se han producido globalmente, sería probablemente que esa corriente estuviera en la senda correcta y que el pronunciamiento contrario fuese el equivocado, como aquél conductor que entra a la autovía por una salida y circula por ella a modo de *conductor suicida* por el carril contrario…

Por ello, nos planteamos como objetivos, en primer lugar, contextualizar qué se entiende por medioambiente, su concepto y elementos que lo componen, así como la conexión entre la dignidad del ser humano y el derecho humano a un medioambiente saludable. En segundo lugar, exploramos el derecho a un medioambiente saludable como derecho humano a la calidad de vida; la determinación de su contenido esencial y sus límites. Finalmente, como objetivo transversal, nos proponemos analizar la positivación actual del derecho a un medioambiente saludable y la trascendencia de los instrumentos internacionales en este ámbito tanto de *lege lata* como de *soft law*. Para, finalmente, plantear siquiera someramente, un acercamiento a la protección medioambiental a través del derecho privado con los instrumentos de los que disponemos actualmente, junto con una formulación de propuesta de *lege ferenda* de la vigente LRM.

3. Metodología

En este trabajo, hemos seguido un método jurídico de investigación tradicional inductivo que incluye, fundamentalmente, el acceso a aportaciones doctrinales sobre el derecho a un medioambiente saludable como derecho humano, con un apoyo puntual en las fuentes normativas internas de derecho subjetivo privado y público, así como internacionales en consonancia con el sistema de fuentes de *soft law* que caracteriza los derechos humanos de tercera generación, así como su encaje dentro del sistema que constituye el ordenamiento y la función que éste tiene como proyecto de orden social, con la finalidad de preservar la paz social.

4. El derecho humano a la calidad de vida

4.1. Contenido y límites del derecho humano a la calidad de vida

Hay un haz de facultades que constituyen la esencia biunívoca de todo derecho humano en sentido de traducción normativa de la emanación de la dignidad humana y reglas de justificación política y distingue con claridad al derecho humano claramente, por mucho que los mismos se encuentren interconectados. Es lo que señalaba Prieto Sanchís (1990) acerca del núcleo de certeza o contenido mínimo del concepto de derechos humanos , que comprende dos elementos, uno teleológico y otro funcional. De acuerdo con el primero, los derechos se identifican como la traducción normativa de los valores de dignidad, libertad e igualdad, como el vehículo que en los últimos siglos ha intentado conducir determinadas aspiraciones importantes de las personas desde el mundo de la moralidad a la órbita de la legalidad. El segundo significa que los derechos asumen una cualidad legitimadora del poder, que se erigen en reglas fundamentales para medir la justificación de las formas de organización política y, por tanto, para que éstas se hagan acreedoras a la obediencia voluntaria de los ciudadanos (Prieto Sanchís, 1990: 20).

En el caso del derecho humano a la calidad de vida, o a un medio ambiente saludable, veremos, la complejidad es aún más evidente. Resulta harto complicado establecer este contenido esencial del derecho humano a la calidad de vida, porque al tratarse de un derecho interconectado, de posible ejercicio individual, pero de indudable carga global y colec-

tiva, conceptualizar su contenido y sobre todo delimitarlo, resulta tarea compleja. A decir de Campoy Cervera (2022: 154), "la Moral, el Derecho, la realidad social y la realidad histórica" son elementos que reconocen las principales concepciones de los derechos humanos. Por lo tanto, nos aventuraremos a hacer una proposición kantiana, en la medida que la protección del medioambiente resulta necesaria para la subsistencia digna de los demás pueblos.

Por ahora, nos contentaremos con pensar que estamos ante un derecho humano muy complejo con dimensiones evidentemente locales (y muy importantes), pero también globales e interconectado con otra serie de derechos sociales de última generación, sin el cual es impensable la dignidad del ser humano, por cuanto vivimos en un mundo globalizado, con diferentes velocidades de desarrollo económico y con repercusiones colectivas de acciones individuales y repercusiones individuales de conductas colectivas.

4.2. Positivación de la calidad de vida como derecho humano fundamental

La positivación del derecho a la calidad de vida constituye una garantía del derecho humano a un medioambiente saludable que, en la perspectiva actual y como venimos sosteniendo, bien podría incardinarse en una *cuarta generación*. Es así porque ya no se trata únicamente de derechos de solidaridad en formación, sino que, además, se observa una dimensión globalizada e interrelacionada en la que en demasiadas ocasiones son las personas de los pueblos más pobres o los grupos de personas más pobres en diferentes lugares de la aldea global a quienes hay que protegerles su dignidad y con ella la dignidad del ser humano en general. Sin embargo, en nuestra opinión, a pesar de que esta sea la perspectiva predominante en la actualidad "la conservación y mejora del medioambiente podría tener un encaje jurídico propio y diferente de su articulación únicamente a través de instrumentos de derecho público" (Corpas Pastor, 2024: 140) porque como afirma Simón Yarza (2012: 158), existe una multiplicidad de bienes jurídicos "de titularidad múltiple –tanto individual como colectiva–" los cuales abarca el medioambiente y que protege el ordenamiento.

Como ya hemos avanzado, quizás el derecho medioambiental podría constituir una "disciplina jurídica con entidad propia, diferente del derecho administrativo propiamente dicho"; ya que el concepto derecho medioambiental engloba aspectos jurídicos tanto de derecho público como de derecho privado (Corpas Pastor, 2024: 140). En este sentido, Delgado Piqueras (1993: 54) afirmaba que "la conceptualización del derecho al ambiente es un desafío que corresponde asumir con valentía a la doctrina y a la jurisprudencia" y se trata de "una materia interdisciplinaria y de contenido complejo" donde el Derecho civil siempre ha estado presente, y fueron civiles sus primeros planteamientos, como recuerda Llodrá Grimalt, (2008: 21-23), haciendo referencia a los arts. 590 y 1908 Cc. La autora defendía una "utilidad medioambiental de las instituciones de Derecho civil" en sede de derecho de la

persona[21], del derecho de obligaciones[22] y de los derechos reales[23], disciplinas que se identifican claramente en el seno del Derecho privado.

En relación a la positivación del derecho fundamental a la calidad de vida, creemos necesario aventurar alguna propuesta concreta de reforma del artículo 590 CC. Ya en su (muy breve) comentario a este artículo, García García (2016: 2289-2291) refiere que para un sector "minoritario" de la doctrina y también de la jurisprudencia, este artículo "conserva su relevancia jurídico-privada, entendiendo además que la perspectiva del art. 590 CC es distinta y autónoma respecto de la del 1908 del propio Código. En el art. 590 CC de lo que se trata es de enjuiciar la normalidad del uso, la normalidad del ejercicio de las facultades inherentes al derecho de propiedad", todo ello compatible con la regulación administrativa "*con la posibilidad de que los tribunales civiles puedan y deban intervenir en cuantos problemas o conflictos se originan en el ámbito de las relaciones de vecindad, … y en aquellos otros que impliquen un abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo*", con cita de la STS de 3 de diciembre de 1987 (RJ 1987, 9176)[24].

21 *Vid.* Francesca Llodrà Grimalt. *Lecciones de Derecho ambiental civil,* Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2008. Remitimos al estudio contenido en este trabajo por la minuciosidad que la autora muestra en la concreción de un verdadero derecho civil medioambiental. La autora descubre utilidades ambientales en el derecho de la persona, a través de la "protección indirecta del Derecho al medio ambiente adecuado" a través de la protección de los derechos de la personalidad; y el papel relevante que pueden jugar algunas personas jurídicas de Derecho privado, como las fundaciones, en la protección ambiental.

22 Ídem. Se refiere a "cuestiones de las obligaciones en general", algunos "aspectos de formación del contrato", o "tipos de contrato con relevancia ambiental", el "incumplimiento contractual" y la "responsabilidad civil extracontractual por daños al medio ambiente" (aspecto que afirma es el "que más se ha tratado en Derecho del medio ambiente").

23 *N.B.* Remitimos decididamente al estudio pormenorizado que la autora realiza en este trabajo sobre las diferentes especialidades del derecho de propiedad, sus modificaciones en su contenido, la alusión a sus límites externos, relacionados con la "función social que éste cumple". Límites por interés público (arts. 390, 553.1 y 2, 589 CC y otros en leyes especiales) o particular (basados en las relaciones de vecindad y en las servidumbres); así como el Registro de la Propiedad como "oficina de información ambiental", poniendo como ejemplo la utilidad de la publicidad mediante nota marginal anotada en la escritura de que un suelo está "contaminado" y las implicaciones ello que tiene para ulteriores adquirientes "puesto que la transmisión del título no exime de las obligaciones contraídas", con una reflexión final sobre la protección jurídica del derecho de propiedad particular como "protección indirecta del medio ambiente" (con una cuidada revisión doctrinal sobre las inmisiones, la acción negatoria y la cesación como medios "para corregir las actividades contaminantes que dañen o pongan en peligro intereses particulares" y, de nuevo, la tutela sumaria prevista en la LEC, con la que estamos plenamente de acuerdo.

24 El art. 590 CC dispone textualmente, "Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.

A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen

En lo que nos ocupa, en su preámbulo, la LRM conecta el derecho a disfrutar de un medioambiente "adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona", anudando así dignidad y necesidad de protección del medioambiente basada en la obligación de "utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza" y la obligación a la reparación del daño causado "con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan" cuando se incumple la obligación anterior[25].

El respeto a la dignidad expresa un derecho fundamental que tienen todas las personas, amparado por el artículo 10 de la Constitución Española (CE) y reconocido al más alto nivel dentro de los derechos humanos. Según Parejo Alonso (2015), este respeto implica la exigencia de utilizar y gestionar los recursos de manera adecuada, preservando los equilibrios esenciales de los sistemas ecológicos, en consonancia con el "principio de responsabilidad con la naturaleza", argumentando que la justicia centrada en el ser humano no debe excluir a los recursos naturales del estatus jurídico que les garantiza protección, derivando de este valor y su construcción jurídica la obligación ineludible de respetar la vida, lo cual podría llevar al reconocimiento de derechos para sus componentes. Esto incluye, por extensión, a todos los elementos del mundo natural que forman la base de la vida (Parejo Alonso, 2015: 46 y ss.). Cosa que se confirma cuando recientemente se reconocido el derecho al "acceso a un medio ambiente limpio y sostenible" como uno de los derechos humanos universales[26], cuya protección incluye la exigibilidad de responsabilidad cuando se transgrede.

4.3. Conexión entre el derecho medioambiental y los ODS

Consideramos que la legislación medioambiental, en relación con la protección de la salud, debería tratar de disminuir la exposición a riesgos ambientales, como la contaminación del aire, del agua y del suelo, que puedan perjudicar la salud humana. Esto se lograría mediante la implantación

pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos".

No sería descabellado añadir en relación a la peligrosidad, toxicidad o capacidad de las emisiones nocivas para la salud, una referencia expresa en el artículo que remitiese al art. 1908 CC para la exigencia de la correspondiente responsabilidad del propietario de la construcción o dueño de la empresa contaminante, sin perjuicio de lo establecido en otras normas especiales. Ello, en nuestra opinión, sería interesante de cara a mejorar la protección privada del medioambiente saludable.

25 *Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad* Medioambiental. BOE núm. 255, de 24 de octubre. El artículo 5.1 LRMA especifica que "se regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación" las acciones por lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada, pérdidas económicas u otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños medioambientales, "aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental". Todo ello en consonancia con su Preámbulo, en el que se afirma que se separa la responsabilidad medioambiental "de la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial".

26 ONU. Resolución Asamblea General A/RES/76/300, de 28 de julio de 2022 (Pleno). *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*, 2022. [En línea] https://n9.cl/1af0j.

de normas que aseguren un entorno seguro y saludable de manera sostenible. En este contexto, la LRM desaprovechó una oportunidad inigualable para establecer un marco coherente que respalde esta protección. Todavía más hoy, si cabe, a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS), definidos en la Agenda 2030.

Si tenemos en cuenta que los ODS tienen a las personas como protagonistas[27], entendemos que merece la pena incidir en este aspecto si además de una seguridad jurídica para los posibles damnificados de los efectos tardíos de la contaminación, también se pretende una efectiva regulación de la responsabilidad ambiental. Entre otras cosas porque "las acciones locales juegan un papel fundamental en el cumplimiento de los ODS", por lo que es necesario un apoyo a los gobiernos y actores locales y regionales y sus asociaciones "en el desarrollo e intercambio de soluciones para avanzar en los ODS a nivel local" (Fernández Egea, 2022: 40).

Los postulados de la agenda 2030 alcanzan una serie de objetivos globales, entre los que se encuentra la defensa de un medioambiente sano. Los problemas relacionados con el cambio climático, el medio ambiente y las catástrofes se pueden considerar "una amenaza para el ser humano" debido a las "situaciones de crisis" que provocan (Bautista-Hernáez, 2018: 187). En este sentido, no podemos olvidar que "el escenario de cambio climático al que nos enfrentamos dibuja amenazas para nuestra salud que evidencian la necesidad de actuar simultáneamente sobre tres vectores: humano, animal y ambiental"[28]. Opinión coincidente con la de Carretero Sánchez (2023: 221-232). La jurisprudencia del TEDH en esta materia "allana el camino" hacia el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente (Fernández de Gatta Sánchez, 2023: 83) y su positivación.

Como muestra de la preocupación de los países de la Unión Europea acerca del cambio climático, baste recordar que el Acuerdo de París de 2015, ratificado por España en 2017[29], proponía para 2050 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero "de, al menos, un 40%" comparadas con 1990 (Lozano Cutanda, 2022: 232). Tras la propuesta del Pacto Verde Europeo en 2019, con el objetivo de alcanzar la «neutralidad climática» para 2050, se promulgó "la denominada «Ley Europea del Clima»" (Lozano Cutanda, 2022, 233), que fue adoptada en 2021 mediante un Reglamento Europeo[30].

A nivel estatal, la Ley del Cambio Climático[31] establece objetivos concretos para

27 ONU (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial.* [En línea] https://n9.cl/0jnr1

28 *Vid.* Silvia Fernández Marín, Laura Ronquillo Muñoz y María Teresa Cuerdo Vilches. "El impacto del cambio climático en la salud: una aproximación desde el contexto urbano con enfoque One Health", en *Rev. salud ambient*, 2023, vol. 23, nº 1, p. 63.

29 *Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015.* BOE núm. 28, de 2 de febrero de 2017.

30 *Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)*. DOUE núm. 243, de 9 de julio.

31 *Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.* BOE núm. 121, de 21 de mayo.

2030 en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aumento de energías renovables y eficiencia energética, con el fin de alcanzar la neutralidad climática para 2050, pero se quedó corta en opinión de Lozano Cutanda (Lozano Cutanda, 2022: 233) al fijar como meta la reducción de un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una diferencia abismal con la reducción del 55% con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030, prevista en el Reglamento "de fecha muy poco posterior a la Ley de Cambio Climático" (Lozano Cutanda, 2022: 233). La autora alaba el "principio de no regresión" que les aplica el art. 2 de la Ley a estos objetivos que "permite el control judicial de cualquier norma reglamentaria o plan menos ambicioso", a lo que añade, recogiendo una idea de López Ramón (2021), que "un instrumento planificador que rebajara cualquier de los objetivos establecidos legalmente podría ser anulado mediante el ejercicio de la correspondiente acción judicial". Mucho ruido y pocas nueces, porque "la ley dedica la mayor parte de sus preceptos a encomendar al Gobierno la aprobación de ulteriores normas y la adopción de diversos instrumentos de planificación" (Lozano Cutanda, 2022: 234).

Por otra parte, según López Ramón (2015: 9), el desarrollo sostenible es "aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias". Definición que toma del denominado "Informe Brundtland"[32] y se caracteriza por un medio ambiente adecuado, como "justo equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico".

En opinión de Carretero Sánchez (2023: 224), dicho desarrollo "va ligado con el propio desarrollo sostenible de la humanidad, pues todo aquello que pone en peligro el medio ambiente, de algún modo, si no bien hoy, sí en un futuro más o menos próximo, pone en peligro el desarrollo humano".

La interrelación entre el derecho al medio ambiente y el derecho a la protección de la salud adquiere una relevancia significativa con el reciente reconocimiento internacional del "acceso a un medio ambiente limpio y sostenible" como derecho humano universal[33], el cual venía gestándose desde antes, con la concreción de unos "Principios Marco sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente" (Nox & Del Viso, 2018: 83-89) aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Reconocimiento que parece más político que jurídico, pues la propia Resolución señala que la promoción de este derecho necesita la "plena implementación de acuerdos ambientales multilate-

32 *Cfr.* Gro Harlem Brundtland. *Our common Future*, Oxford, Oxford University Press. 1987. (Trad. en castellano como *Nuestro futuro común*, Madrid, Alianza Ed., 1988). *Vid.* David Aviñó Belenguer. *Prevención y reparación de los daños civiles por contaminación industrial*, Cizur Menor, Aranzadi, 2015, p. 35. Advierte el autor que dicho término "es insuficiente si se entiende desde la perspectiva «contaminador-pagador», pues puede convertirse en excusa para que el que tenga más posibilidades económicas contamine", proponiéndolo como un principio preventivo por el incentivo que el pago de los costes de reparación del daño provocado pueda tener para el eventual contaminador, con los consiguientes esfuerzos para la evitación del daño.

33 ONU. *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*. Resolución Asamblea General A/RES/76/300, de 28 de julio de 2022 (Pleno), 2022. [En línea] https://n9.cl/1af0j.

rales bajo los principios del derecho ambiental internacional" y reconoce que está relacionado con otros derechos y con el derecho internacional existente[34].

A nuestro entender, la dificultad estriba en que "los efectos de la contaminación sobre la salud, es decir, cuando la contaminación provoca enfermedad, suelen ser a largo plazo, y los mecanismos legales para lograr una indemnización en nuestro país pierden efectividad" (Corpas Pastor, 2024: 159) por la limitación del ámbito de aplicación de la LRM, la posible incompatibilidad con los mecanismos habituales indemnizatorios, la incongruencia legislativa cuando la propia CE ordena la reparación de daños, pero por otra parte, no se ha desarrollado suficientemente legislación apropiada y, finalmente, por la desconexión con la protección de la salud; ya que aunque nuestro derecho interno protege la salud a la par que un medio ambiente saludable, la defensa de estos derechos también se procura a través de tratados y convenciones internacionales; lo cual puede generar inconsistencias y vacíos en la protección efectiva a nivel nacional.

5. La tutela civil del medioambiente saludable

En nuestra opinión, la responsabilidad medioambiental es compatible con la reparación de daños civiles a consecuencia de la producción de daño medioambiental, a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la LRM, a pesar de dejarla fuera de su ámbito y de que las garantías obligatorias no cubran habitualmente los daños a particulares, que quedan fuera de la correspondiente cobertura de la póliza de seguros[35].

González Vaqué (2006: 5), recuerda que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Directiva 2004/35/CE, el ámbito temporal de exigencia de la responsabilidad medioambiental se establece de forma negativa en treinta años como máximo desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que causó los daños medioambientales, a tenor del artículo 4 LRM. Aunque hay una disparidad de plazos de prescripción de acciones de tutela que recoge la LRM con respecto a los daños propiamente ambientales, también treinta años, frente a los plazos contractual y extracontractual, cinco y un año, respectivamente que se extrae de la interpretación extensa de dicho artículo. (Recordemos que en su apartado 2, expresamente se especifica que "los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podrán exigir reparación ni indemnización por los daños medioambientales que se les hayan irrogado" y en opinión que recoge Llamas Pombo (2010) sobre la LRM, se puede afirmar con temor que "quien contamina paga, pero quien la

34 ONU. *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible*. Resolución Asamblea General A/RES/76/300, de 28 de julio de 2022 (Pleno), 2022. [En línea] https://n9.cl/1af0j.

35 *Vid.,* entre otros, Eliseo Sierra Noguero. *El seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación de buques. Especial referencia a los seguros obligatorios*. Madrid: Fundación MAPFRE, 2016. *Cfr.* Francisco José Marques Sampaio. *Evolución de la responsabilidad civil y reparación de daños ambientales*. Bosch editor, 2017; Andrés Betancor Rodríguez. *Responsabilidad y aseguramiento por daños ambientales. El caso Prestige.* Madrid: Agencia Estatal BOE, 2018.

sufre no cobra"[36]). Sin embargo, pese a la elocuencia de este pensamiento, pareciera derivarse de una lectura apresurada de este precepto, con ácida crítica. Pues, aunque así reza textualmente el artículo, se refiere a *daños medioambientales* en la medida en la que tales daños *queden reparados* bajo las previsiones de la LRM. De hecho, dicho apartado 5.2 *in fine* afirma textualmente que el responsable del daño medioambiental "que hubiera hecho frente a esa doble reparación podrá reclamar del perjudicado la devolución o la compensación que proceda" (Llamas Pombo (2010: 58). Por tanto, no tiene origen en la ley que quien sufra el daño medioambiental "no cobre", sino, más bien, que quien contamine pague, pero "no pague doble" … (Corpas Pastor, 2024: 142).

No cabe duda, y así lo hemos sostenido "que el derecho a gozar de una calidad del aire y del agua, a la biodiversidad y la prevención de la contaminación, la conservación y protección de los recursos naturales compartidos, como los océanos, ríos y bosques, y del patrimonio ecológico común […] son claramente tributarios de su regulación por instrumentos de derecho público" (Corpas Pastor, 2024: 143). No obstante, es igualmente cierto que hay otros bienes personales, como la salud, la integridad e incluso la dignidad de una persona, así como derechos patrimoniales más tangibles, como el derecho de propiedad, que pueden verse afectados por la degradación del medio ambiente[37] y, consecuentemente, surge para el responsable de la contaminación la obligación de indemnizar a los particulares.

Tanto autores con cierto prestigio jurídico, como el propio Tribunal Supremo han venido destacando la relevancia que

36 *N.B.* El autor sigue a Joaquím Martí Martí, entonces Profesor Colaborador de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, que en su aguda crítica al régimen de responsabilidad administrativa por los daños medioambientales y la obligación de reparar tales daños en la forma prevista en la LRM, afirmaba sin ambages que tras el estudio de la LRM, "sigue sin existir en el cuerpo normativo estatal una ley reguladora del medioambiente que reconozca el derecho del particular a ser indemnizado por el mal causado por la contaminación que ha sufrido". *Cfr.* Joaquim Martí Martí. "Ley de responsabilidad medioambiental «quien contamina paga» pero «quien la sufre no cobra»", *Diario La Ley (Estudios doctrinales),* núm. 6830, de 18 de octubre, 2007. Problema irresoluto que nosotros abordamos en este trabajo.

37 *N.B.* Alrededor de los años setenta del siglo pasado, se produjo en la sociedad americana un serio debate que supuso una toma de conciencia colectiva norteamericana sobre los efectos de la contaminación en la salud del ser humano, en concreto, sobre el uso de determinados pesticidas y otros productos químicos, denominado "ambientalismo". *Vid.* Cass R. Sunstein. *Riesgo y razón. Seguridad, ley y medio ambiente*, Katz Ed., 2006. El autor expone la necesidad de la evaluación medioambiental en términos de análisis coste-beneficio en la toma de decisiones ejecutivas o políticas, tomando buena nota sobre la reducción racional de riesgos, tomando en consideración parámetros científicos desde el punto de vista de la toxicidad (pero de toxicidad científica, no meras especulaciones sin base científica), presentando curvas "lineales" y "sublineales" de toxicidad de ciertas sustancias, "relaciones de umbral" en las que no existe peligro, siempre que la dosis se encuentre por debajo, y las "relaciones supralineales", donde la respuesta a la dosis excede de la proporcionalidad o las "relaciones en forma de u", como la de ciertas sustancias químicas (nutrientes esenciales, vitaminas, o flúor, por ejemplo, con efectos beneficiosos en dosis bajas, acoplados con efectos tóxicos en dosis altas); pero también del análisis de parámetros científicos sociales aparejados de morbo-mortalidad, en relación con los beneficios monetizados derivados de la regulación normativa medioambiental.

tiene la jurisdicción civil en la protección del medio ambiente. En este sentido, Conde-Pumpido (1989: 30) se refería a la jurisdicción civil como un "medio complementario de protección ambiental", defendiendo que "nada obsta para que los intereses y derechos de índole privada que están también afectados por una posible degradación del medio ambiente, puedan ser protegidos ejercitando acciones civiles". Esto está en consonancia con lo argumentado previamente por Auger Liñán (1988), quien destacaba que cuando se actúa civilmente en la protección de los derechos e intereses privados, resultan "beneficiados los intereses colectivos del medio ambiente" (Auger Liñán, 1988: 111).

Estos argumentos, aplicados al derecho civil, son compartidos por el Tribunal Supremo, como se recoge en la STS de 26 de noviembre de 2010[38] que expone (FD 6º) cómo el artículo 590 CC sirve para "proteger el medioambiente en las relaciones de vecindad", precepto genérico, que resulta efectivo porque la técnica utilizada en el mismo, la remisión a la legislación administrativa, facilita su adaptación a las necesidades de cada momento. Al no establecer directamente sanciones, sino únicamente los supuestos de hecho de la prohibición de lesión ambiental a las propiedades vecinas, debe completarse con lo dispuesto en el art.1908 CC.

Para el Alto Tribunal, la jurisdicción permanece en sede civil cuando se ejercita la acción de cesación al amparo de este art. 590 CC y como sigue diciendo la STS de 26 de noviembre de 2010, "la remisión a las normas administrativas efectuada en el art. 590 CC no implica que se produzca una `huida´ al derecho administrativo de toda la materia de las relaciones de vecindad por implicar la falta de competencia de la jurisdicción civil" (FD 3º). Ello implica, entre otras consecuencias que, dado el caso y si existiera una cobertura para ello en un hipotético seguro de daños como consecuencia de siniestros medioambientales, podría el perjudicado ejercitar la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre (Ley

38 STS núm. 793/2010, de 26 de noviembre. Sala de lo Civil. Ponente: Excma. Sra. María Encarnación Roca Trías (Roj: STS 6121/2010 - ECLI:ES:TS:2010:6121). Aporta la doctrina del Alto Tribunal al respecto, con cita de la "sentencia de 10 abril 1957, que declaró la ilicitud de un pozo negro construido junto a una finca, se apoyó en el art 590 CC. La sentencia de 27 octubre 1988 manifestó que la litigiosa era una cuestión estrictamente civil porque estaba regulada en el art. 590 CC […] Y ello porque cuando el art. 590 CC remite a los reglamentos reguladores de la actividad que está causando un daño a las propiedades vecinas, no está transformando la norma civil en norma administrativa, sino integrando en el ordenamiento civil los criterios para la calificación de la actividad que genera las inmisiones". *Vid.* David Aviñó Belenguer. *Prevención y reparación de los daños civiles por contaminación industrial*, Cizur Menor (Pamplona): Aranzadi, 2015, pp. 201-202. Opina el autor que "la indemnización de los daños y perjuicios no se encuentra entre las pretensiones de la acción negatoria por varias razones: i) no existe regulación de la acción negatoria en nuestro derecho civil, por lo que cualquier configuración de la misma ha de hacerse teniendo en cuenta las leyes, los principios generales y la jurisprudencia consolidada; ii) la acción negatoria tiene una naturaleza preventiva del daño, mientras que la acción de responsabilidad civil es eminentemente reparadora", distinguiendo perfectamente entre la acción de tutela preventiva pura ex artículo 590 CC (donde no es preciso la prueba del daño) de la tutela reparadora, "indemnización de daños y perjuicios", basada en la producción de un daño en cosa ajena, sobre los presupuestos de los artículos 1902 y 1908 CC.

del Contrato de Seguro[39]) para obtener la correspondiente indemnización, sin que quepa oponer frente al damnificado las excepciones que eventualmente tuviese la aseguradora con el agente contaminante.

Consideramos que la protección penal o administrativa explícita del medio ambiente, establecida por la LRM, puede ser la razón principal por la cual la protección civil del mismo "pasa casi desapercibida" (Corpas Pastor, 2024: 144). Y no digamos su dimensión como derecho humano... Quizás por ello, Llamas Pombo (2010: 105) se preguntaba si hubiera sido mejor potenciar los instrumentos propios de la responsabilidad civil clásica "que tanto parece despreciar la norma" para adecuarlos a las peculiaridades del "daño ambiental"[40]. Merecería la pena, por tanto, que se introdujera una especial previsión normativa relativa al seguro de responsabilidad civil obligatorio en todas las actividades que impliquen un riesgo potencial de daño medioambiental.

Esta línea de pensamiento hace aflorar el planteamiento que subyace a este trabajo de visibilizar la importancia del derecho civil en el régimen jurídico medioambiental, pues "los daños personales y patrimoniales como consecuencia de la alteración del medio ambiente son posibles, a la vez que difíciles de reparar en ocasiones, debido en parte a que los efectos de la contaminación (y probablemente el cambio climático subsiguiente) suelen ser de lenta evolución y difíciles de probar bajo parámetros jurisdiccionales estrictamente civiles" (Corpas Pastor, 2024: p. 144). No en balde, la declaración de responsabilidad civil se ve dificultada con frecuencia por la necesidad de probar la concurrencia del mecanismo de imputación subjetivo que le es propio a la responsabilidad aquiliana, y siguiendo a Lozano Cutanda (2008: 172), en esta materia "son muchos los supuestos en los que no es posible probar la culpabilidad o ilicitud de la conducta, pues el agente causante de los mismos puede escudarse en el cumplimiento de la normativa medioambiental protectora, en que tiene y cumple con todas las autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad, o en que la Administración no ha detectado, en las posibles inspecciones realizadas, ninguna anomalía o incumplimiento"[41]. Por ello, sería desea-

39 *Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro*. BOE núm. 250, de 17 de octubre.

40 *Cfr.* Eugenio Llamas Pombo. "Reflexiones sobre derecho de daños: casos y opiniones". *La Ley*, 2010, p. 105. "El llamado `daño ambiental´, que en realidad no es sino un daño a la persona o al patrimonio de ésta, derivado de la contaminación de algún elemento integrante del medioambiente, es siempre un daño de caracteres muy peculiares (despersonalizado, o anónimo, masivo, `inevitable´, continuado cuando no es permanente o progresivo, económicamente grave…). En algunos casos es `puramente económico´, y en otros casos una verdadera tragedia personal".

41 Blanca Lozano Cutanda. "Nuevas perspectivas en materia de responsabilidad ambiental en la Unión Europea (Directiva 2004/35/CE)", en Antonio Vercher Noguera. *Derecho europeo medioambiental: La protección del medio ambiente en la Unión Europea. Aspectos críticos*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008, p. 172. Nuestro Tribunal Supremo ha declarado que tales autorizaciones administrativas no eximen la responsabilidad por los daños (patrimoniales) irrogados a particulares, que tienen todo el derecho del mundo a pedir una indemnización por responsabilidad civil extracontractual, cuando de inmisiones nocivas se trata. *Cfr.* STS núm. 568/2008 de 12 de junio. Sala de lo Civil, Ponente: Excmo. Sr. Clemente Auger Liñán (Roj: STS 2906/2008 - ECLI:ES:TS:2008:2906) que afirma (FD 2º): "El ordenamiento jurídico no puede permitir que una forma concreta de activi-

ble una reforma de la LRM que precisara cómo abordar la reparación de los daños a los particulares irrogados como consecuencia de la inobservancia del deber de protección del medio ambiente; sobre todo si tenemos en cuenta que es a nivel local dónde hay que desarrollar los ODS y la visión global que desprende el derecho fundamental a la calidad de vida exige no solo un trabajo de conceptualización del derecho al medio ambiente saludable "de modo independiente y autónomo en su integración a la nómina de derechos económicos sociales y culturales", como defiende Milano Sánchez (2022: 204).

Siguiendo Jordano Fraga (2012: 139), si el derecho ambiental sufre de una falta de eficacia real, observada en muchos países, debería orientarse hacia "mecanismos que garanticen la efectiva aplicación del mismo". Por eso, algunos autores abogan por una reforma del Código Civil que incluya un "derecho de vecindad" (Nieto Alonso, 2017: 1063-1064) que desarrolle con mayor profundidad el problema de las inmisiones medioambientales, ubicado "en el Libro correspondiente a los Derechos reales"[42]. Sin embargo, en nuestra opinión, en la línea argumental de Revuelta Vaquero y Verduzco Moreno (2012: 107), "el derecho ambiental necesita un procedimiento especial -hermético- para blindar su adecuada instrumentación" que permita conjugar la justicia ambiental con un procedimiento ambiental accesible, flexible, acorde al derecho tutelado, sin preclusión de términos, obligando al juzgador a suplir defectos de forma y fondo […] siempre en aras de preservar el bien público […] con la finalidad de no permitir que por cuestiones procesales se exima al responsable de cumplir con la obligación de reparar el daño ocasionado (Revuelta Vaquero y Verduzco Moreno, 2012: 107).

Este modelo presenta oportunidades de mejora en su enfoque actual, a pesar de que, insistimos, no restringe la posibilidad de compensar los daños particulares a las personas (patrimoniales o morales, tales

dad económica, por el solo hecho de representar un interés social, disfrute de un régimen tan singular que se le autorice para suprimir o menoscabar, sin el justo contravalor, los derechos de los particulares, antes por el contrario el interés público de una industria no contradice la obligación de proceder a todas las instalaciones precisas para evitar los daños, acudiendo a los medios que la técnica imponga para eliminar las inmisiones, como tampoco excluye la justa exigencia de resarcir el quebranto patrimonial ocasionado a los propietarios de los predios vecinos", con cita de la STS de 12 de diciembre de 1980.

42 *N.B.* La autora propone básicamente incluir en el código civil dos preceptos de naturaleza bien diferente: uno de naturaleza permisiva que disciplinase "las inmisiones lícitas o tolerables, consecuencia del uso normal de los inmuebles, que, al resultar inocuas o causar perjuicios no sustanciales, deben permitirse", y otro dedicado a "las inmisiones ilícitas, actividades [incluso, actitudes] persistentes, que causen daño, a las personas y a las propiedades, en general". También argumenta, en relación a estas últimas, lo deseable de instrumentalizar "las acciones colectivas", tipo *class actions* americanas, "bien por medio de grupos perfectamente determinados o determinables, bien a través de asociaciones de vecinos; paralelamente, debería articularse la posibilidad de la responsabilidad colectiva de grupos o agrupaciones (por ejemplo, de empresas o de personas jurídicas), causantes de daños «medioambientales»" (1065). *Vid*. Viguri Perea (2009, 370), quien defiende que las acciones de clase o de defensa de intereses colectivos pueden ser de gran utilidad […], facilitan el acceso a la justicia de los grupos afectados por daños medioambientales, velando por la economía, la rapidez procesal, y la seguridad del tráfico jurídico, puesto que impiden la existencia de sentencias contradictorias".

como menoscabos corporales o daños psicobiológicos y relacionales) que hayan sido causados por la contaminación del medio ambiente. Pensamos que sería recomendable un procedimiento tuitivo similar al régimen de protección de los consumidores y usuarios o las acciones colectivas reconocidas en la LEC, como defienden, entre otros, Llamas Pombo (2010) o Nieto Alonso (2017), dadas las características de la responsabilidad civil derivada de daños medioambientales que causen además daños a particulares.

A nuestro juicio, es imperativo reorientar el enfoque normativo medioambiental. Más allá de la gestión de la protección de los recursos naturales mediante la prevención de la contaminación y la preservación de la biodiversidad a través de la imposición de prácticas sostenibles en diversas industrias, la regulación debería centrarse en la responsabilidad civil del responsable de la contaminación. Esta responsabilidad debe derivarse del daño efectivo causado, ya sea patrimonial o personal, incluyendo perjuicios a la salud como consecuencia de dicha contaminación.

Sin duda, la gestión de residuos, la prevención de derrames tóxicos y el uso de energías limpias son aspectos fundamentales, al mismo nivel que garantizar la indemnización a las personas que sufren daños directos e indirectos por contaminación. Sin embargo, es aún más importante promover el denominado principio de precaución, "paradigma del anclaje" del aquí y ahora al que se refiere Lorenzetti (2008) pensando en las generaciones futuras:

La ciencia y el progreso tienen las virtudes del navegante que se aventura en mares desconocidos. Cuando está en juego la naturaleza, se trata de navegar, pero conservando el mar y el cielo y las estrellas que nos guían. Los valores y bienes colectivos son esas estrellas que guían al navegante. Es un anclaje en los valores, en ir más despacio para no arruinar todo lo que tenemos que dejar para quienes continuarán en el uso de los bienes ambientales (113-114).

Se trata de cuidar con nuestras acciones presentes la calidad de vida de las generaciones posteriores. Sobre todo, ante la existencia de efectos como el cambio climático que "afecta a la salud ambiental, animal y –directa e indirectamente– a la humana" (Fernández Marín, Ronquillo Muñoz y Cuerdo Vilches, 2023: 56); también relacionados con la contaminación y son origen de desastres que son tributarios del estudio del bioderecho y la protección de los derechos humanos.

6. Conclusiones

La positivación del derecho a la calidad de vida constituye una garantía del derecho humano a un medioambiente saludable que, en la perspectiva actual, bien podría incardinarse en una cuarta generación. Esto implica entender el medioambiente como un conjunto de elementos interrelacionados, como recursos naturales y biodiversidad, que deben ser conservados y protegidos para garantizar un entorno sostenible y digno para todos ahora y para las generaciones venideras. Esto es así porque ya no se trata únicamente de derechos de solidaridad en formación, sino que, además, se observa una dimensión globalizada e interrelacionada en la que en demasiadas ocasiones son las personas de los pueblos más pobres o los grupos de personas más pobres en diferen-

tes lugares de la aldea global a quienes hay que protegerles su dignidad y con ella la dignidad del ser humano en general.

En nuestra opinión, de acuerdo con la filosofía kantiana, el derecho humano a la calidad de vida termina donde empieza el derecho de los demás. El derecho humano a un medioambiente saludable implica acciones locales con efectos generales y acciones globales con efectos individuales y se apoya en su positivación para justificar la justicia social, sin que ello obste para aplicar localmente nuestro derecho subjetivo privado, pues éste juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos de tercera generación y es esencial para garantizar la calidad de vida y la dignidad de todos y en todo momento.

Fortalecer este marco legal no solo garantiza la reparación de daños ambientales y la cesación de actividades perjudiciales, sino que también promueve acciones colectivas que pueden ampliar el acceso a la justicia ambiental. Así, se fortalece la protección del medioambiente y se asegura un entorno seguro y saludable para todos, en línea con los principios de los derechos humanos universales. Desde una posición de pensamiento político, en última instancia, la protección del medioambiente parece indispensable para la subsistencia digna de los pueblos; ya que el derecho a un ambiente saludable es esencial para la dignidad del ser humano en una realidad globalizada.

7. Bibliografía

AA. VV. (2022). *Observatorio de políticas ambientales*. En G. García Álvarez, J. Jordano Fraga, B. Lozano Cutanda, & A. Nogueira López (Coords.). Madrid: Ed. CIEMAT. [Online]. Disponible en https://n9.cl/dqdq3

AA. VV. (2023). *Observatorio de políticas ambientales*. En G. García Álvarez, J. Jordano Fraga, B. Lozano Cutanda, & A. Nogueira López (Coords.). Madrid: Ed. CIEMAT. [Online]. Disponible en https://n9.cl/xnnft

Aguilar Cuevas, M. (1998). Las tres generaciones de los derechos humanos. *Derechos Humanos*, 30, pp. 93-102.

Auger Liñan, C. (1988). Problemática de la responsabilidad civil en materia ambiental. *Poder Judicial, núm. Esp.* 4, pp. 111-123.

Aviñó Belenguer, D. (2015). Prevención y reparación de los daños civiles por contaminación industrial. Pamplona (Navarra): Aranzadi.

Ballesteros, J. (2003). ¿Derechos? ¿Humanos? *Persona y Derecho*, 48, pp. 27-45. https://n9.cl/i2w7a

Bautista-Hernáez, A. (2018). Climate Change and Disasters: the 2015 Paris Agreement legal standards applicable to disaster prevention. En M. I. Torres Cazorla & J. M. Sánchez Patrón (Eds.), *Bioderecho Internacional. Derechos humanos, salud pública y medio ambiente* (pp. 187-214). Valencia: Tirant lo Blanch.

Beltrán Aguirre, J. L. (1994). El medio ambiente en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. *Revista de Administración Pública*, 134, pp. 281-298.

Betancor Rodríguez, A. (2018). Responsabilidad y aseguramiento por daños ambientales. El caso Prestige. Madrid: Agencia Estatal BOE.

Brundtland, G. H. (1988). *Nuestro futuro común*. Madrid: Alianza Ed.

Boyle, A. (2012). Human Rights and the Environment: Where next? *The European Journal of Environmental Law*, 23(3), pp. 613-642.

Cabrera Vélez, J. P., Chacón Abarca, M. C., & Yánez Olalla, T. E. (2020). Los derechos humanos de primera y segunda generación y su realización por parte de los estados. *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, 5(7), pp. 116-124. https://n9.cl/4bxv1

Campoy Cervera, I. (2022). Una propuesta de concepto y fundamento de los derechos humanos. *Derechos y libertades*, 47, pp. 149-182. https://doi.org/10.20318/dyl.2022.6877

Carretero Sánchez, S. (2023). *La responsabilidad del Estado en sus nuevos frentes: sanitario, alimentario, energético y de inteligencia artificial.* Madrid: Colex.

Conde-Pumpido Touron, C. (1989). Protección civil del medio ambiente. *Jueces para la democracia*, *núm*. 8, pp. 30-35.

Corpas Pastor, L. (2024). Propuesta de *lege ferenda* desde el Derecho civil a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, *Ius et Scientia*, núm. Extraordinario. Monográfico: «Medio Ambiente, seguridad y salud», pp. 139-164.

Delgado Piqueras, F. (1993). Régimen jurídico del derecho constitucional al medio ambiente. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 13(38), pp. 49-79.

Espinosa González, A. (2012). La justicia ambiental, hacia la igualdad en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, 16, pp. 51-77.

Fernández Aparicio, J. M. (1999). La problemática de la tutela civil en materia ambiental. *Boletín del Ministerio de Justicia*, núm. 1844, pp. 1091-1128.

Fernández de Gatta Sánchez, D. (2023). "Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la exposición a la contaminación que sobrepasa el umbral permitido constituye un riesgo que implica una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos". En AA.VV. *Observatorio de Políticas Ambientales 2023*. G. García Álvarez, J. Jordano Fraga, B. Lozano Cutanda, & A. Nogueira López (Coords.), Madrid, Ed. CIEMAT, pp. 83-106.

Fernández Egea, R. M. (2022). "Compromisos internacionales en materia del medio ambiente: los tímidos avances de Glasgow sobre cambio climático y Kunming sobre biodiversidad salvan la parálisis de las negociaciones por una pandemia que persiste". En AA.VV. *Observatorio de Políticas Ambientales 2022*. G. García Álvarez, J. Jordano Fraga, B. Lozano Cutanda, & A. Nogueira López (Coords.), Madrid: Ed. CIEMAT, pp. 21-44.

Fernández Marín, S., Ronquillo Muñoz, L., & Cuerdo Vilches, M. T. (2023). El impacto del cambio climático en la salud: una aproximación desde el contexto urbano con enfoque One Health. *Rev. Salud ambient.*, 23(1), pp. 56-65.

García García, J. A. (2016). "Artículo 590". En AA. VV. *Código Civil comentado. Vol. I.* A. Cañizares Laso, P. De Pablo Contreras, J. Orduña Moreno & R. Valpuesta Fernández (Dirs.), Pamplona: Civitas Thomson Reuters, pp. 2289-2291.

Gómez Isa, F. (2015). Patrimonio común de la humanidad. *Estudios De Deusto*, 41(2), pp. 119-192. https://doi.org/10.18543/ed-41(2)-1993pp119-192.21

Gómez Puerto, Á. (2020). La protección jurídico-constitucional del medio ambiente.

Apuesta por el principio de proximidad institucional al cuidado del entorno como bien común. *Revista de Derecho Público*, 68(1), pp. 225-255. http://dx.doi.org/10.18543/ed-68(1)-2020pp225-255

González Vaqué, L. (2006). La responsabilidad medioambiental en la unión europea: la directiva 2004/35/CE. *Revista electrónica de estudios internacionales*, 11, pp. 1-11. https://n9.cl/4s8j3

Jordano Fraga, J. (2012). El futuro del derecho ambiental. *Revista Aranzadi de derecho ambiental*, 23, pp. 117-146.

López Turcios, R. I., & Alejandro Chamizo García, H. (2023). Exposición a la contaminación antropogénica por mercurio y sus efectos en la salud. *Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci)*, 57(2), pp. 1-24. https://doi.org/10.15359/rca.57-2.12

López Ramón, F. (2015). El medio ambiente en la Constitución Española. *Ambienta*, 113, pp. 2-9.

Lopez Ramón, F. (2021). "Notas a la ley de cambio climático". En AA. VV. *Los desafíos jurídicos de la transición energética*. F. Delgado Piqueras, R. Galán Vioque, N. Garrido Cuenca, & I. González Ríos. (Dirs.). Pamplona (Navarra): Aranzadi, pp. 79-100.

Lorenzetti, R. L. (2008). *Teoría del Derecho Ambienal*. México: Ed. Porrúa.

Lozano Cutanda, B. (2008). Nuevas perspectivas en materia de responsabilidad ambiental en la Unión Europea (Directiva 2004/35/CE). En A. Vercher Noguera (Ed.), *Derecho europeo medioambiental: La protección del medio ambiente en la Unión Europea. Aspectos críticos* (pp. 165-195). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

Lozano Cutanda, B., & Poveda Gómez, P. (2015). La reducción de las actividades a las que se exige garantía financiera obligatoria en el sistema de responsabilidad medioambiental (Real Decreto 183/2015). *Actualidad Jurídica Ambiental*, 6, pp. 1-6. https://n9.cl/6cziu

Llamas Pombo, E. (2010). *Reflexiones sobre derecho de daños: casos y opiniones*. Madrid: La Ley.

Llodrà Grimalt, F. (2008). *Lecciones de Derecho ambiental civil*. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.

Marques Sampaio, F. J. (2017). *Evolución de la responsabilidad civil y reparación de daños ambientales*. Barcelona: Bosch editor.

Martí Martí, J. (2007). Ley de responsabilidad medioambiental «quien contamina paga» pero «quien la sufre no cobra». *Diario La Ley (Estudios doctrinales)*, núm. 6830, 18 de octubre.

Martín Olmedo, P. (2023). Adaptabilidad al cambio climático. *Rev. salud ambient.*, 23(1), pp. 1-3.

Martínez de Pisón, J. (2004). Las generaciones de derechos humanos. En J. Betegón Carrillo, F. J. Laporta San Miguel, L. Prieto Sanchís, & J. R. de Páramo Argüelles (Coords.), *Constitución y Derechos Fundamentales* (pp. 409-435). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Milano Sánchez, A. (2022). El 2021 y el derecho ambiental en Costa Rica. En G. García Álvarez, J. Jordano Fraga, B. Lozano Cutanda, & A. Nogueira López (Coords.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2022* (pp. 187-212). Madrid: Ed. CIEMAT.

Montoro Carrasco, J. S. (1997). Solidaridad y derecho al medio ambiente. *Boletín*

de la Facultad de Derecho, 12, pp. 593-622.

Nieto Alonso, A. (2017). Derecho de vecindad: la tutela del Derecho civil frente a inmisiones «medioambientales» ilícitas. *ADC*, *tomo 70*, fasc. III, pp. 959-1071.

Nox, J., & Del Viso, N. (2018). Principios marco sobre derechos humanos y medio ambiente. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 142, pp. 83-89.

ONU. (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición Especial*. https://n9.cl/0jnr1

ONU. (2022). *El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Resolución Asamblea General A/RES/76/300, de 28 de julio de 2022 (Pleno)*. https://n9.cl/1af0j

Parejo Alonso, L. (2015). Cambio climático, riesgo global, innovación y Derecho. En L. Parejo Alonso (Ed.), *El derecho ante la innovación y los riesgos derivados del cambio climático* (pp. 15-54). Valencia: Tirant lo Blanch.

Pérez Luño, A.-E. (1991). Las generaciones de derechos humanos. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 10, pp. 203-217.

Peces-Barba Martínez, G. (1999). *Curso de derechos fundamentales. Teoría General*. Boletín Oficial del Estado, Madrid: Universidad Carlos III.

Prieto Sanchís, L. (1990). *Estudios sobre derechos fundamentales*. Madrid: Debate.

Real Ferrer, G. (2022). El derecho a una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Comentario al artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. *Drets. Revista valenciana de reformes democràtiques*, 6, pp. 331-345.

Revuelta Vaquero, B., & Verduzco Moreno, C. A. (2012). El derecho ambiental y su naturaleza jurídica. *De Iure*, *Tercera Época, Año* 11, pp. 84-109.

Shelton, D. (2006). Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized. *Denv. J. Int'l L. & Pol'y*, 35(129), pp. 129-171.

Sierra Noguero, E. (2016). *El seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación de buques. Especial referencia a los seguros obligatorios*. Madrid: Fundación MAPFRE.

Simón Yarza, F. (2012). El llamado derecho al medio ambiente: un desafío a la teoría de los derechos fundamentales. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 94, pp. 153-179.

Sunstein, C. R. (2006). *Riesgo y razón. Seguridad, ley y medio ambiente*. Buenos Aires: Katz Ed.

Tello Moreno, L. F. (2007). El patrimonio común de la humanidad y los derechos humanos. *Derechos Humanos México. Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos*, núm. 5, pp. 121-142.

Verdú Baeza, J. (2019). Derechos humanos y medio ambiente. Hacia una justicia climática en torno al cambio climático. *ADHDSS*, 19, pp. 411-444.

Viguri Perea, A. (2009). *Globalización y defensa del medio ambiente en el derecho privado: aplicación del principio "quien contamina paga" y régimen de responsabilidad civil objetiva: Derecho español, europeo, norteamericano y japonés*. Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

LA REGULACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS RELACIONADA CON SITUACIONES DE CONFLICTOS ARMADOS: ENTRE LAGUNAS Y ENFOQUE ESTATOCÉNTRICO EN LA (DES)PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

THE REGULATION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS RELATED TO ARMED CONFLICT SETTINGS: BETWEEN GAPS AND A STATE-CENTRIC APPROACH IN THE (DE) PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Luiz Henrique Garbellini Filho
Universidad de Sevilla, Sevilla, España
lgarbellini@us.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: trata de seres humanos, conflictos armados, enfoque estatocéntrico, derechos humanos.
Keywords: human trafficking, armed conflicts, state-centric approach, human rights.

Resumen: El artículo analiza el régimen regulatorio del enfrentamiento a la trata de seres humanos relacionada con situaciones de conflictos armados (TSHRSCA). Este análisis enfoca en el Protocolo de Palermo (PP) y en su controvertida aplicación a los casos de TSHRSCA. El argumento central es que existen dos principales problemáticas que amenazan la garantía holística e integral de los derechos de las víctimas y de las personas en riesgo de serlo. Una relativa a las lagunas sobre las particularidades de la TSHRSCA en las disposiciones legales del PP. La otra vinculada a su enfoque estatocéntrico desdoblado en la securitización de las migraciones procedentes de zonas de conflictos armados y en el enfoque criminal contra la TSHRSCA.

Abstract: The article analyzes the regulatory framework for combating human trafficking related to armed conflicts (HTAC). This analysis focuses on the Palermo Protocol (PP) and its controversial extension to HTAC cases. The central argument is that two main issues threaten the holistic and comprehensive protection of the rights of victims and those at risk of becoming a victim. One relates to the gaps regarding the specificities of HTAC within the PP legal provisions. The other is linked to its state-centered approach, manifested in the securitization of armed conflict-induced displacement and the criminal approach against HTAC.

1. Introducción[1]

Tras 24 años de su aprobación, el Protocolo de Palermo (PP) sigue siendo el principal documento internacional vinculante que recoge la definición de la trata de seres humanos (TSH) y sus cuestiones conexas, así como prevé su regulación jurídica y política a nivel transnacional. El PP ha establecido un compromiso con la prevención de la TSH, la protección a las víctimas y la persecución a los tratantes (marco del triple "P"). Con esto, ha lanzado las directrices que los Estados partes deben seguir para la confrontación a este fenómeno, incluyéndose el establecimiento de determinados estándares para las legislaciones y políticas anti-trata domésticas (Cano, 2019; Corrêa da Silva, 2022; Scarpa, 2020; Shin, 2018).

Su preámbulo pone de manifiesto que todas las iniciativas recogidas en el Protocolo están orientadas al amparo a los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las víctimas. A pesar de ello, el PP no está exento de críticas en relación con su debilidad en cubrir completamente las complejidades de la TSH y ofrecer un marco integralmente protector a los derechos de las personas que están expuestas o corren riesgo de exposición a esta práctica. En este sentido, una de las principales denuncias en la literatura es la falta de incorporación del "enfoque de derechos humanos"[2] (enfoque de DDHH) tanto en los documentos internacionales —como el PP— como en la puesta en práctica de sus disposiciones por parte de los Estados parte (Corrêa da Silva, 2019; Lee, 2011; McAdam, 2019; Obokata, 2006; Pourmokhtari, 2015; Shin, 2018).

1 El artículo recoge algunos resultados procedentes del proyecto de investigación del cual forma parte el autor: "Las migraciones circulares desde un enfoque de género interseccional: posibles contribuciones de la Política Exterior Feminista Española" (n. CNS2023-144884) financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

2 Este enfoque se basa en una perspectiva holística e integral que abarca el carácter amplio y multifacético de la TSH, abordando tanto sus complejas causas como sus múltiples consecuencias. Al reconocer la interconexión de la TSH con los derechos humanos, prioriza la protección de las víctimas y de las personas en situación de riesgo, buscando asegurar que sus derechos sean protegidos y su dignidad preservada en todas las fases de los programas anti-trata (Obokata, 2006). Como señala Correa da Silva (2019: 41), "el enfoque de DDHH se traduce en la centralización de la persona y sus necesidades en el centro de las acciones de enfrentamiento a la TSH," estructurándose además a través del empoderamiento de estas personas mediante un "bottom-up approach", como lo denomina Shin (2018: 278).

En caso de la no adecuación de los programas anti-trata a dicho enfoque, estas iniciativas corren el riesgo de no observar las tendencias y complejidades actuales de TSH, así como contribuir directa o indirectamente con la desprotección de los derechos. Siguiendo esta línea, este trabajo se ocupa de la problemática relativa a la no incorporación de la relación entre situación de conflictos armados (SCA) y TSH en la estructura jurídica del PP en consonancia con el enfoque de DDHH. Asimismo, explora algunas implicaciones de este problema en la (des)protección de los derechos humanos.

Es cierto que las SCA ya están siendo reconocidas por organismos internacionales como fenómenos que influencian la intensidad, la dinámica y las formas de TSH (ONU, 2016; ONU, 2017; UNODC, 2018; UNODC, 2022). Además, diversos estudios han situado la trata de seres humanos relaciona con situaciones de conflictos armados (TSHRSCA) como una de las principales tendencias de la TSH en las últimas décadas (Bowersox, 2019; Gallagher, 2015; Piotrowicz, 2021; Scevi, 2023), incluyéndose las prácticas que ocurren en cualquier de las etapas de los procesos migratorios hacia fuera de las zonas afectadas por las SCA (Correa da Silva y Reyes, 2023; Brunovskis y Surtees, 2017; Sahan Foundation y IGAD, 2016)[3].

Para alinearse al enfoque de DDHH, las iniciativas jurídicas y políticas anti-trata deberían tener en cuenta la complejidad de la SCA e impulsar prácticas sensibles a sus múltiples efectos en la TSH[4]. Sin embargo, persiste una laguna jurídica en el PP en prever disposiciones que contribuyan para la salvaguardia integral y holística de los derechos de las víctimas o personas expuestas a la TSHRSCA. A partir de esta constatación, surgen tres preguntas que guiarán el análisis: ¿De qué manera las disposiciones existentes en el PP fallan en abordar la asociación entre TSH y SCA? ¿Cómo este Protocolo se omite en integrar al ámbito de las obligaciones estatales la protección a los derechos de las víctimas de TSHRSCA o personas en riesgo de serlo? ¿Cuáles son las posibles implicaciones de las medidas anti-trata del PP para los derechos de aquellas personas que, buscando huir de las zonas afectadas, están expuestas a la TSHRSCA?

Se adopta una metodología cualitativa basada en la revisión bibliográfica y en el análisis crítico del PP como fuente primaria. El abordaje empleado es sociojurídico. En cuanto al marco analítico, son adoptados el enfoque de DDHH y el marco interseccional para examinar los elementos que conforman el marco regulatorio del PP y sus implicaciones en la regulación de la TSHRSCA.

Este trabajo es dividido en tres sesiones. La primera enfoca en las lagunas del PP en incorporar la relación entre TSH y SCA y sus repercusiones reduccionistas en la construcción jurídica de la TSHRSCA.

3 Es importante subrayar que este trabajo enfoca en las formas de TSHRSCA que suponen el cruce de fronteras internacionales. Se reconoce igualmente que la TSHRSCA se desarrolla también en los espacios geográficos localizados dentro de las fronteras de los Estados afectados por las SCA, impactando especialmente a las personas internamente desplazadas (Malinowski et. al., 2016).

4 En esta dirección, se orientan las recomendaciones de varios informes elaborados en el marco de la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de las Naciones Unidas, destacando los informes A/71/303, A/73/171, A/76/263 y A/78/172.

La segunda expone cómo las medidas de control fronterizo previstas por el PP pueden dar lugar a la securitización de los flujos migratorios procedentes de las regiones afectadas por las SCA. La tercera señala que la prevalencia del enfoque criminal del PP pone en riesgo el abordaje centralizado en la tutela de los derechos de las víctimas de TSHRSCA o personas en riesgo de serlo. Tras ello, el artículo concluye que las personas desplazadas que están expuestas a la TSHRSCA en diversas etapas de sus procesos de huida de las zonas afectadas no logran una cobertura integral de sus derechos.

2. La regulación de la TSHRSCA a partir del régimen regulatorio establecido por PP: las lagunas en incorporar las SCA y sus repercusiones reduccionistas

En esta sesión, se exploran las potencialidades y los límites en torno de la construcción jurídica de TSH por parte del PP, enfocando en su listado de finalidades de explotación y en su concepción restrictiva de vulnerabilidad que incluye y excluye determinados indicadores de desigualdad y colectivos.

2.1. Contextualización del PP

El PP el primer instrumento que ha proporcionado una definición acordada a nivel internacional sobre la TSH. Su adopción en el año 2000 se dio en el marco de los esfuerzos de la Comisión de Crimen de las Naciones Unidas en perseguir el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional (Goździak y Vogel, 2020). Este protocolo es uno de los tratados complementarios a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también adoptada el en mismo año. Actualmente, cuenta con 117 Estados signatarios y 182 Estados parte.

El Protocolo es el resultado de dos décadas de negociaciones que involucraron a una amplia gama de Estados miembros de la ONU, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, cada uno aportando diversas experiencias y perspectivas relativas al enfrentamiento a la TSH (Lobasz, 2019). Durante estas negociaciones, se presentaron diferentes intereses sobre elementos clave para la configuración del régimen internacional anti-trata[5]. Luego, el PP no solo representa un compromiso global contra la TSH, sino también un reflejo de las tensiones existentes en torno a la conceptualización y regulación de este fenómeno complejo. Pese a constituir un hito histórico, su marco regulatorio sigue siendo objeto de críticas, que se explorarán en este trabajo.

5 Por ejemplo, organizaciones religiosas y feministas como la *Coalition Against Trafficking in Women* (CATW) abogaban por enfocar en la trata sexual e incluir cualquier forma de reclutamiento para la prostitución en la definición de TSH. En contraste, el *Human Rights Caucus* y la *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) consideraban la prostitución consensuada como trabajo legítimo, y sostenían enfocar en la TSH para la prostitución forzada y en otras formas de explotación (Doezema, 2005). Además de las cuestiones relacionadas con las distintas formas de explotación, también surgieron debates sobre el consentimiento y la distinción entre TSH y tráfico de personas (Goździak y Vogel, 2020).

2.2. El PP y su extensión a TSHRSCA

Como punto de partida para el estudio, es importante concebir la definición de TSH establecida por el PP. El artículo 3 (a) del Protocolo señala que esta práctica ocurre a partir de a partir de diferentes medios, desde el uso de la fuerza, el engaño hasta el abuso de situación de vulnerabilidad, con el propósito de explotar a una persona. En seguida, el texto establece un listado enumerativo de las formas de explotación derivadas de la TSH que caracterizan sus finalidades. Deben incluir "*como mínimo*, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos." (ONU, 2000) (destaque mío).

La expresión "como mínimo" indica que el listado no es exhaustivo, lo que permite a los Estados parte tanto adherirse a las finalidades mencionadas como expandir el catálogo de propósitos de explotación. Esto brinda flexibilidad para ampliar el alcance de los programas de confrontación a la TSH (Cano, 2019; McAdam, 2019; Scarpa, 2020). Luego, la definición de la TSH plasmada en el PP es elástica, expansiva y relacional, dentro de ciertos límites establecidos por el protocolo (Corrêa da Silva, 2019). De ahí que cabe a los Estados parte adoptar, dentro de su jurisdicción, la definición de la TSH y de las explotaciones de ella derivadas, así como las medidas destinadas a prevención, represión y sanciones a la TSH.

Además, el Protocolo es aplicable en cualquier situación, ya sea en los contextos de paz o en los contextos en los cuales las SCA induzcan o contribuyan para que ocurra alguna de las modalidades de TSHRSCA (Scevi, 2023). De esta forma, su ámbito de aplicación tiene la potencialidad de alcanzar los casos de TSHRSCA que no están incluidos explícitamente en el rol de finalidades de explotación de TSH. Sin embargo, el convenio plantea algunos desafíos en la protección de los derechos humanos de las víctimas o de las personas en riesgo de serlo

2.3. La insuficiencia del listado de finalidades de explotación para cubrir las formas de TSHRSCA

La no inclusión en el PP de algunas finalidades de la TSH que pueden verse generadas o agudizadas en función de las SCA hace que exista lagunas en relación con graves formas de abuso de derechos humanos.

De hecho, dos estudios empíricos realizados en importantes rutas de huida de zonas afectadas por SCA han contribuido para documentar algunos propósitos de explotación de TSHRSCA no previstos explícitamente en el PP. Serían, por ejemplo, los casos documentados por el informe del Sahan Foundation y IGAD (2016) de personas que huyeron de Eritrea y, durante la "ruta del Cuerno de África" para llegar a Italia, fueron víctimas de TSHRSCA con propósito de conversión forzosa al islamismo por parte del ISIS y reclutamiento forzoso a las fuerzas combatientes que operan en los conflictos en Etiopia, Sudán y Libia. Además, se puede destacar las experiencias identificadas por Brunovikis y Surtess (2017) de desplazados procedentes de Afganistán, Iraq y Siria que, transitando por la «ruta de los

Balcanes» hacia los países de la UE, fueron convertidos en víctimas de TSHRSCA para finalidades como matrimonio forzoso, embarazo forzoso y participación forzosa en actividades criminales. Lo que estos estudios corroboran es que la TSH gana características específicas cuando derivada de las SCA en comparación las prácticas que ocurren en contextos de paz —incluyéndose las formas de explotación que no necesariamente ocurrirían si no hubiese estallado un enfrentamiento bélico— (Gallagher, 2015; UNODC, 2018; Žarković, Tasić y Ćurčić, 2019).

Por otra parte, considerándose la soberanía de los Estados parte del PP, no se les obliga a estos actores públicos incorporar en sus regulaciones jurídicas y políticas internas más formas de explotación aparte de las que ya están previstas en el Protocolo. Caso observe los propósitos dispuestos en el listado del artículo 3(a) del PP, el Estado parte no puede ser responsabilizado internacionalmente por incumplir lo pactado en tratado. De esta manera, está dentro del campo de discrecionalidad emprender iniciativas anti-trata que incluyan integralmente las modalidades de TSHRSCA, con la consecuente cobertura (o no) de las prácticas de explotación que vulneran los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Con esto, la no inclusión explícita de las finalidades asociadas a la TSHRSCA en el principal documento internacional vinculante contra la TSH es representativa de cómo estas lagunas pueden amenazar el alcance a las complejidades de este fenómeno en consonancia con el enfoque de DDHH. Luego, los programas anti-trata emprendidos por los Estados parte corren el riesgo de operar a través de una sobrerrepresentación de las formas más recurrentes de TSH en situaciones de paz y subrepresentación de las modalidades exclusivas o más vinculadas a la TSHRSCA.

2.4. La construcción jurídica de la vulnerabilidad de conversión en víctima de TSH y su relación con la SCA

El PP dispone sobre algunos factores de vulnerabilidad que pueden operar para la ocurrencia de la TSH. Esta inclusión puede ser visibilizada sobre todo en dos fragmentos del Protocolo. Uno relativo a la definición de la TSH[6] y el otro vinculado a las medidas que los Estados partes deben llevar a cabo para contrarrestar los factores que contribuyen para la ocurrencia TSH[7]. Sin embargo, el documento no incluye la SCA y sus efectos como factores que pueden provocar la vulnerabilidad de conversión en víctima de TSH. Esta omisión es configurada a través de tres debilidades interrelacionadas que se exploran en seguida.

6 El art. 3, (a) señala que uno de los medios a través de los cuales se configura la TSH es el abuso de la situación de vulnerabilidad.

7 El art. 9, párr. 4 indica que "los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes (…) a fin de mitigar factores como la *pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas* que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata" (ONU, 2000) (destaque mío).

2.4.1. El reduccionismo: entre las inclusiones y exclusiones de los colectivos expuestos a la TSHRSCA

La configuración de las disposiciones del PP en torno de la vulnerabilidad señala su especial preocupación con la exposición de las mujeres y de los niños a la TSH, aunque el documento no se restrinja solamente a estos dos colectivos. Por un lado, este abordaje sugiere el reconocimiento por parte del PP de la posición de desventaja que tienen estos grupos en los procesos de victimización por prácticas de TSH en comparación con otros colectivos. Además, indica la necesidad de protección en función de un mayor riesgo de victimización que las mujeres y los niños suelen estar expuestos a determinadas formas de explotación derivadas de la TSH (Thill y Giménez, 2016). Por otro lado, esta configuración puede dar lugar a medidas anti-trata con foco estereotipado en determinados grupos y formas de TSH en detrimento de otros (Aradau, 2008; Lobasz, 2019; O'Brien, 2018).

Como señalan Ditmore y Wijers (2003), el problema de la exclusión de determinados colectivos también expuestos a la TSH estaba presente desde el principio de las negociaciones sobre el PP. Denuncian que se priorizaron los términos lingüísticos asociados a las mujeres y a los niños, dejando a los hombres fuera de las prioridades de protección establecidas por el Protocolo. Un síntoma de este abordaje plasmado por el PP puede ser encontrado, por ejemplo, en la sesgada confusión en las políticas estatales entre TSH y trata sexual de mujeres con fines de explotación sexual. Lobasz (2009: 339) explora que los programas anti-trata a menudo asocian estas figuras de forma a reducir la complejidad de la TSH. Segundo la autora, este enfoque simplificado tiene impactos en la construcción de las nociones sobre las categorías "mujeres" y "hombres", una vez que tales programas "reflejan nociones de género sobre la agencia que presentan a los hombres como actores y a las mujeres como víctimas, es decir, aquellas sobre las que se actúa.». Luego, se revela la concepción frecuentemente limitada y restricta en torno a la TSH, que no considera adecuadamente la complejidad y la diversidad de las experiencias de todas las personas expuestas a esta práctica.

Esta problemática puede verse reproducida en la extensión de la aplicación del PP a la TSHRSCA. Como indicado, el abordaje del Protocolo sobre vulnerabilidad a la TSH no es sensible a la SCA como factor que contribuye para los abusos de derechos humanos. Una de las implicaciones de este abordaje es que el PP no se dirige explícitamente a todas las personas especialmente afectadas por la eclosión y desarrollo de un enfrentamiento bélico. Aunque las mujeres y los niños sean categorías utilizadas por el Protocolo para referenciarse a grupos que están altamente expuestos a la persecución por parte de los tratantes y/o actores armados, no solamente ellos corren riesgo de persecución en el contexto de la dinámica conflictiva. Restringirse a esta concepción limitada significaría no solamente reducir la identidad de las mujeres y niños a las únicas "víctimas" de la TSHRSCA, sino también, como será retomado en la sesión 3, desconsiderar a otros grupos afectados por las SCA como potenciales víctimas[8].

8 Contrastando este enfoque, Njoku, Akintayo y Mohammed (2022) documentaron, en las regiones del Lago Chad afectadas por SCA, hombres

Abordar los factores de exposición a la TSH y los grupos considerados especialmente vulnerables de forma restricta y reduccionista como hace el PP desencadena un riesgo de que las medidas anti-trata funcionen de forma discriminatoria y no incluyan suficientemente a otros colectivos cuyos derechos igualmente necesitan de tutela estatal. Los programas estatales de confrontación a la TSHRSCA pueden no ser sensibles a todos los grupos expuestos al riesgo de convertirse en víctima de y sus singularidades en los procesos de victimización por esta práctica. Especialmente porque pueden operar oscilando entre la subrepresentación y sobrerrepresentación de los colectivos. De un lado, la subrepresentación de determinados grupos que pueden ver su vulnerabilidad intensificada en función de las SCA o más bien generada por la eclosión y desarrollo de un enfrentamiento bélico. De otro, la sobrerrepresentación de las mujeres y de niños como categorías identitarias priorizadas por el PP.

2.4.2. La inclusión del enfoque múltiple sobre la vulnerabilidad en contraposición con la exclusión del enfoque interseccional

El referido impacto del PP en posibilitar programas que pueden operar entre la subrepresentación y sobrerrepresentación de los grupos expuestos a la TSHRSCA está asociado a la incorporación de un enfoque múltiple sobre la discriminación[9] en contraposición con la exclusión del enfoque interseccional. Pese a que las SCA contribuyan para las vulnerabilidades interseccionales (Rooney, 2018; Zarkov, 2018) y para el riesgo de convertirse en víctima de TSHRSCA (Correa da Silva y Reyes, 2023), el PP plasma un paradigma múltiple sobre la vulnerabilidad - que está asentado sobre la consideración de solamente dos indicadores de desigualdad que opera para producir posiciones de subalternidad simbólica y material (Hancock, 2007a)[10].

Para visibilizar las limitaciones del PP en relación con el paradigma interseccional, se desarrollan algunas contribuciones de los estudios que visibilizan la perspectiva múltiple e interseccional sobre la vulnerabilidad y exposición a la TSH.

que fueron objectos de persecución por parte de los combatientes y de tratantes y convertidos en víctima de TSHRSCA con diversas finalidades de explotación, inclusive la sexual.

9 Como indicado en la nota 7, el art. 9, párr. 4 del PP moviliza indicadores de desigualdad desde una perspectiva sumatoria/aditiva (género/sexo, edad y pobreza).

10 Un síntoma inicial de este abordaje por parte del PP reside en el hecho de que el documento enfoca en las mujeres y los niños, no considerando explícitamente que el género y la edad pueden intersecarse para generar la vulnerabilidad a la TSH. Cabe advertir, por otro lado, que PP recoge, en su art. 14, una cláusula de salvaguardia relativa a la interpretación y aplicación de las medidas previstas en el texto en consonancia con el principio de no discriminación. Interpretar y aplicar el PP de acuerdo con este principio tiene un conjunto de impactos, incluido el reconocimiento de cualquier de los motivos de discriminación que afectan a alguien y sus interacciones. Sin embargo, la mencionada cláusula de salvaguardia no tiene el poder de incorporar el paradigma interseccional sobre la vulnerabilidad como un modelo obligatorio que los Estados parte deben incorporar en sus programas anti-trata.

2.4.2.1. La perspectiva múltiple sobre los indicadores de desigualdad como factores aditivos de incremento de la vulnerabilidad a la TSHRSCA

El paradigma múltiple sobre la vulnerabilidad está asentado sobre el estudio de los factores que contribuyen para TSH a partir de una perspectiva aditiva. Encuentra su eje de desarrollo en las perspectivas feministas que indican el género como un indicador de desigualdad que se combina con otros indicadores para producir el incremento de la vulnerabilidad de la TSH como resultado de una interacción sumatoria.

En este sentido, Lobasz (2009) y Pourmokhtari (2015) destacan que la perspectiva de género en los estudios sobre TSH es importante para visibilizar el indicador género como una de las causas fundantes de las discriminaciones que exponen a mujeres y niñas a múltiples formas de TSH —y no solamente la trata sexual—. Sus trabajos ponen de manifiesto también la importancia de considerar otros indicadores de desigualdad que pueden operar de forma aditiva para la victimización por esta práctica —como la raza/etnia y la identidad—. Además, consiguen visibilizar las complejas experiencias, así como romper con los estereotipos y con las concepciones reduccionistas sobre la relación entre mujeres y TSH. Lo hacen a través de la confrontación del problema tradicional en el abordaje de la TSH que privilegia las categorías fijas de "mujer" y de "víctima" para reconocer a las mujeres como un grupo diversificado, heterogéneo y múltiple con distintas identidades, vivencias y trayectorias en la TSH.

Luego, el enfoque múltiple adoptado por las autoras posibilita incorporar, en los análisis y en los programas de enfrentamiento a la TSHRSCA, a otros colectivos desde una perspectiva aditiva sobre los factores que operan para generar la vulnerabilidad. Por otro lado, emplear aisladamente este enfoque sumatorio puede restringir la comprensión e intervención contra la victimización por TSHRSCA por no integrar la perspectiva de la interseccionalidad y sus potencialidades en los programas anti-trata.

2.4.2.2. La perspectiva interseccional sobre los indicadores de desigualdad como factores cruzados de incremento de la vulnerabilidad a la TSHRSCA

El paradigma interseccional se ha consolidado como un importante recurso de análisis y de praxis política y jurídica que ha roto con los límites de los paradigmas unitarios y múltiples sobre los factores de desigualdad y de exposición al riesgo de vulneración de los derechos humanos (Vigoya, 2023). Ha ampliado el reconocimiento de los indicadores de desigualdad que actúan de forma imbricada y rechazado la concepción de que operan de acuerdo con una sumatoria de factores cuyo resultado es siempre el mismo (Hancock, 2007a). Como bien señala Hancock (2007b), aunque se deba considerar igualmente todos los indicadores en el paradigma interseccional, la relación entre ellos es una pregunta empírica abierta y, diferentemente del paradigma múltiple, no se asume que juegan roles iguales en todos los contextos. El resultado de su interacción es "más que la suma de las partes".

Aplicándose el enfoque interseccional para los estudios sobre la TSH, ha emergido como un paradigma analítico con

mayor sofisticación para comprender las discriminaciones que operan para influenciar la ocurrencia y la dinámica de la TSH no solamente asociada a los contextos de paz, sino también vinculada a las SCA (Correa da Silva y Reyes, 2023; Palumbo, 2023). Es innegable que el paradigma interseccional está directamente vinculado a la perspectiva de género adoptada por Lobasz (2009) y Pourmokhtari (2015), por otra parte, logra avanzar en ciertas limitaciones del enfoque múltiple.

El paradigma de la interseccionalidad hace que sea posible comprender la vulnerabilidad en términos generales (y, también, en términos de TSHRSCA) de forma mucho más compleja. Es decir, evita el riesgo de excluir a algunos colectivos o de incluir en exceso a otros en los análisis sobre vulnerabilidad y en la creación de respuestas contra los indicadores de desigualdad que funcionan de forma cruzada (McCall, 2005). Considera que los factores de desigualdad tienen una diversidad dentro de un mismo grupo y ni siempre operan con la misma forma e intensidad para generar la vulnerabilidad una vez que algunas categorías pueden ganar especial relevancia en determinados contextos de poder (Hancock, 2007a; Hancock, 2007b). Además, estos indicadores son comprendidos como producciones dinámicas influenciadas tanto por aspectos individuales, contextuales e institucionales (Yuval-Davis, 2015). Por fin, rechaza la generalización y reduccionismo de las identidades.

En los estudios que tienen en consideración las SCA y sus impactos, se ha indicado que los factores de la discriminación interseccional pueden ya ser prexistentes a la eclosión y desarrollo de la SCA (género/sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad etc.) y agudizados para estructurar determinadas posiciones de desventaja social (El-Bushra, 2018). Además, pueden ser específicamente generados en función de la dinámica conflictiva en que algunos grupos se vuelven especialmente perseguidos en función de su etnia, religión u opinión política (Kofman, 2019). En los contextos de violencia generalizada, no solamente el género, sino también otros indicadores de la desigualdad se transforman en relaciones sociales de poder para producir determinadas posiciones sociales de ventaja y desventaja con distribución desigual de los recursos materiales e inmateriales (Zarkov, 2018). De este modo, algunos grupos pueden volverse más electivos por los tratantes y actores armados para ser convertidos en víctimas de TSHRSCA.

Para conseguir mapear y analizar estos indicadores y la compleja imbricación entre ellos desde el enfoque interseccional, Mendola y Pera (2022: 116-17) han señalado que los indicadores de desigualdad pueden operar de forma intersecada dentro de lo que las autoras cuñan de sistema de "*multiprofile of disadvantage*". Para ellas, este sistema posibilita comprender el cruce de factores individuales, contextuales e institucionales que operan en la vulnerabilidad de las personas que salen de regiones afectadas por las SCA. Un posible ejemplo de aplicación de este sistema para comprender la exposición a la TSHRSCA sería la situación en la cual se estalla una SCA y determinada persona empieza un proceso de movilidad hacia fuera de las zonas afectadas. La vulnerabilidad interseccional puede verse agravada en función de la condición de persona desplazada (estatus de migrante, solicitante de asilo y refugiado) que se interseca con otros indicadores de desigualdad

para colocarles en una posición material e inmaterial de desventaja en diversos contextos y mayor exposición al riesgo de vulneración de los derechos humanos por la TSHRSCA.

Por lo tanto, la perspectiva interseccional sobre estas prácticas posibilita no solamente (i) percibir la forma compleja que los indicadores de desigualdad se interactúan para generar vulnerabilidades, sino también (ii) determinar mejor el riesgo o los daños ocasionados a determinada persona que experimenta la discriminación cruzada en función de la ocurrencia de una SCA. Luego, cuenta con grande potencial analítico y práctico en descolarse de los paradigmas unitarios y múltiples y construir abordajes y respuestas más complejos e integrales sobre la TSHRSCA.

2.4.2.3. La problemática del abuso de vulnerabilidad en los casos de TSHRSCA sin tener en cuenta la perspectiva interseccional

Al no incorporar el paradigma interseccional, el PP posibilita que algunas de sus disposiciones puedan ser manejadas con impactos negativos en los derechos humanos. Es el caso de la categoría jurídica "abuso de situación de vulnerabilidad" (ASV), que ocupa un lugar central como uno de los medios a través de los cuales se configura la TSH (art. 3 (a)). Segundo la redacción del Protocolo, no basta que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad ya preexistente o bien generada por el contexto en el cual tiene lugar y se desarrolla la TSH —como las SCA—. Para la configuración de la TSH, es necesario que se configure un *abuso* de esta situación.

La vulnerabilidad es una categoría sin definición concreta en el documento. Cuenta con una vaguedad conceptual y gran elasticidad, lo que hace que los Estados tengan una discrecionalidad en atribuirle sentido de acuerdo con sus propios marcos y programas de evaluación de la vulnerabilidad, a partir de la praxis jurídica y política de definición e identificación de quien es o no víctima de TSH (Scarpa, 2020; Shin, 2018). Sin embargo, esta discrecionalidad abre margen para que las respuestas estatales contra la TSHRSCA se desarrollen a partir de construcciones y representaciones sociales estereotipadas y reduccionista, sin objetivar el empoderamiento y el tratamiento de las personas afectadas como seres humanos autónomos.

En este sentido, hay una consistente crítica en la literatura que indica que es usual que las medidas anti-trata desconsideren la complejidad de los procesos de victimización y reduzcan a determinadas personas a posiciones de infantilización. Doezema (2005) y Andrijasevic (2014), por ejemplo, han denunciado que, en estos programas, las mujeres a menudo son figuradas como inherentemente explotadas por la dominación sexual masculina, lo que conduce a su infantilización y apagamiento de su capacidad de empoderamiento y agencia. Por su parte, Lobasz (2009: 332) destaca que la construcción de esta imagen infantilizada incluso reproduce estereotipos de género y de raza que "establecen un estándar de victimización que la mayoría de las personas víctimas de trata no pueden cumplir" y "priorizan injustamente la trata sexual de mujeres blancas sobre la trata de mujeres y hombres de todas las razas, quienes son objetos de trata con fines que incluyen, pero no se limitan, al comercio sexual". Con esta crítica, no se quiere decir que no existan personas vulnerables y expuestas

a las múltiples tendencias de TSH, sino que las formas con las cuales las personas están relacionadas práctica son mucho más diversas, amplias y complejas de lo que circula en los discursos tradicionales y oficiales (Hua, 2011). Además, no necesariamente son destituidas de estrategias de reacción, resistencia, negociación y reubicación de las estructuras de poder (Aradau, 2008; O'Brien, 2018).

Los estudios sobre los conflictos armados igualmente han contribuido para deconstruir las nociones de infantilización de las mujeres. En este campo, han emergido importantes críticas relativas a la deconstrucción de las categorías estereotipadas como los "*men as perpetatrors*" y las "*women as victims*" (Aoláian et al., 2018). El enfoque interseccional ha ocupado un lugar de destaque en impulsar esta deconstrucción. Considerándose que la perspectiva de la interseccionalidad "permite deconstruir la aparente fijeza de las etiquetas de identidad e investigar su dinámica en la vida cotidiana" (Rooney, 2018: 329), este enfoque ha abierto el camino para reconocer a las mujeres como "posicionadas simultáneamente, por ejemplo, como actores políticos, refugiadas, sujetos coloniales, combatientes y víctimas de violencia de género en varios contextos" (Rooney, 2018: 330). Por consiguiente, se visibiliza que, pese al hecho de que los conflictos intensifican los roles de género y la normativa de la masculinidad (Villellas et. al. 2016), los hombres y las mujeres pueden ocupar diversas posiciones que las actividades asociadas a la dinámica bélica —incluidas las diferentes lugares y experiencias en las dinámicas de TSHRSCA.

Sin embargo, las caracterizaciones estereotipadas son reforzadas a partir de las "*politics of labelling*" emprendidas por los Estados en las áreas de flujos migratorios (Sajjad, 2018). Básicamente, Sajjad defende que estas políticas operan entre la elección de las categorías ("migrante económico", "migrante ilegal" y "refugiado", por ejemplo) para rotular a aquellos que forman parte de estos flujos con intuito de generar respuestas estatales diferentes, otorgándoles distintos grados de reconocimiento y de tutela estatal de sus derechos. Asimismo, estas etiquetas supondrían construcciones de identidades con distintos significados y adjudicación de diferentes grados de vulnerabilidad. En estas construcciones, las identidades sugieren ser fijas, y no un producto de una circunstancia en la cual operan y gubernan las prácticas estatales.

Contrastando la referida "*politics of labelling*", se ha abogado por la necesidad de tenerse en cuenta que no todos los refugiados y solicitantes de asilo son iguales o igualmente vulnerables, al revés, el grado de vulnerabilidad de estos grupos incluye desde no vulnerable hasta totalmente vulnerable (Mendola y Pera, 2022). Otros han señalaron que la figura inmutable de vulnerables no les ayuda a los refugiados a mejorar sus condiciones y a desarrollar sus capacidades de agencia, ni superar las eventuales experiencias de abuso de sus derechos (Ludwig, 2016). De ahí la importancia de romper con caracterizaciones reduccionistas y simplificadas basadas en estereotipos e infantilización de estos colectivos a menudo vistos solamente como víctimas y sin poder de agencia (Erdal y Oeppen, 2017)

La identificación y protección de las víctimas de TSHRSCA o personas en riesgo de serlo puede operar de forma semejante al "*politics of labelling*" a través de una políti-

ca que hace y deshace la categoría de "víctima". Contrariando el enfoque de DDHH, pueden reproducir estereotipos y desconsiderar la capacidad de agencia y el reconocimiento integral de estos colectivos. Con esto, categorizar a las personas que huyen de las regiones afectadas por SCA simplemente con las etiquetas de "vulnerables" y "víctimas de abuso" sin una evaluación concreta y profunda en consonancia con el "*multiprofile of disadvantage*" (Mendola y Pera, 2022) puede sugerir que son incapaces de autodeterminación y liberación, con efectos directamente contrarios a la garantía de sus derechos.

Por otra parte, la perspectiva interseccional podría ser útil en romper con estas concepciones infantilizadas operacionalizadas a través del "*politics of labelling*". Como se indicó, el enfoque interseccional permite revelar que los análisis en torno de la discriminación cruzada también deben tener en cuenta la capacidad de agencia de los grupos considerados vulnerables a fin de evitar concepciones generalistas y enrojecidas (Henning, 2015). Además, en los estudios sobre conflictos armados, el abordaje interseccional ha logrado visibilizar los impactos complejos de las SCA en la producción contingente y situacional de las posiciones de poder en los contextos conflictivos, sin recaer en los impulsos totalizadores y reduccionistas sobre la categorización de los sujetos (El-Bushra, 2018; Rooney, 2018).

Dicho esto, la integración de la perspectiva interseccional en las iniciativas contra la TSHRSCA tendría un impacto en reconocer a cada persona como un sujeto digno. Estos sujetos deben ser evaluados dentro de un extenso y complexo espectro entre "vulnerable" o "no vulnerable", y determinarse su grado de vulnerabilidad en función de sus ventajas y desventajas no solamente individuales, sino también situacionales e institucionales. Se evitaría, por lo tanto, que la aplicación de la categoría ASV recogida en el PP derive en la infantilización de determinadas personas desplazadas y en el apagamiento de su potencial de reacción y reubicación de las relaciones de poder.

3. La securitización de las migraciones procedentes de las SCA como una de las facetas del enfoque estatocéntrico en el enfrentamiento a la TSHRSCA

En esta sesión, se expone que las disposiciones de control fronterizo del PP permiten que las medidas contra la TSHRSCA se solapen con las políticas de restricción de los flujos migratorios. Se indica, también, que la configuración normativa del PP puede dar lugar a la securitización de las migraciones, que opera con base en la lógica del riesgo y activa mecanismos estatales de gobernanza con consecuencias en la desprotección de los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

3.1. La previsión de las medidas de controles fronterizos en el PP

El PP indica que el enfrentamiento a la TSH también es una cuestión de control de los movimientos transfronterizos. El primer párrafo de su preámbulo establece que se requiere un "enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino" (ONU, 2000) para prevenir

y combatir eficazmente la TSH, indicando la orientación del documento en centrarse en los desplazamientos transnacionales de personas. La propia definición de TSH adoptada por el documento se centra en la noción de *transferencia* de una persona con la intención de explotarla según las formas previstas en el artículo 3 (a)[11]. Para que se configure la TSH en la definición establecida por el PP, no se prevé que sea necesaria la materialización de la finalidad de explotación. Esto hace que su elemento central resida en el movimiento y traslado de personas con la persecución de un *propósito* de explotación (Chuang, 2014) (destaque mío).

Además, las medidas recogidas en el PP visibilizan claramente la interconexión entre programas anti-trata e intervenciones estatales en los movimientos transfronterizos. Por ejemplo, el art. 11 versa específicamente sobre las medidas de control fronterizo12, mientras los arts. 12 y 13 disponen respectivamente sobre la seguridad y el control de los documentos de viaje o de identidad y sobre la legitimidad y validez de estos documentos. Con esto, la configuración del PP hace que las iniciativas anti-trata pueden solaparse con diversas medidas de regulación de los movimientos de cruce de las fronteras para controlar o más bien restringir la entrada de personas en los países de tránsito y de recepción.

3.2. El despliegue de medidas anti-trata desde el enfoque securitario

Una de las repercusiones del abordaje de control fronterizo recogido en el PP es que, en nombre de la detección, prevención y lucha contra la TSH, las autoridades nacionales puedan activar e integrar medidas de enfrentamiento a la inmigración irregular y/o ilegal, con el intuito de garantizar el orden y la seguridad. Es decir, se abre la posibilitad de que la praxis jurídica y política de las medidas anti-trata se asienten en la priorización del enfoque de la seguridad a partir de un conjunto de medidas disuasorias y represivas contra diversos procesos de movilidades humanas (Aradau, 2008; Crépeau, Nakache y Atak, 2007; Krieg, 2009). Este enfoque es denominado de "securitario". Se basa en los intereses de los Estados (perspectiva estatocéntrica) respeto a la integridad de las fronteras y a la contención de las movilidades humanas comprendidas como amenazas (Jaskulowski, 2019). Estos intereses son priorizados en detrimento de los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de las personas desplazadas (Huysmans, 2006).

3.3. La securtización de las migraciones procedentes de regiones afectadas por las SCA

Los procesos de securitización suelen ser reforzados en los casos de los flujos de desplazamiento masivos procedentes de

11 El artículo 3 (a) dispone conductas relacionadas al movimiento de una persona desde el principio hasta el fin del proceso de desplazamiento: "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas" (ONU, 2000).

12 La preocupación con el control fronterizo se vuelve explicita en su párr. 1: "Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados Parte *reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas*" (ONU, 2000) (destaque mío).

las regiones afectadas por las SCA. En estos contextos, las retoricas que justifican las políticas estatales orientadas a la securitización de las migraciones de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a menudo son basadas en la lógica del riesgo que estas personas aportarían al Estado receptor y a su sociedad a través de lo que Huysmans (2006) denomina de "*security rationality*". El autor explora este concepto para hacer referencia a la noción foucaultiana de racionalidades gubernamentales, entre las cuales están las técnicas, los conocimientos y las habilidades para el control de la sociedad, específicamente de las fronteras. Para Huysmans, las prácticas gubernamentales lingüísticas (así como las no lingüísticas) ocuparían una importante función en diseminar la inseguridad y legitimar las prácticas de control desde la lógica del miedo.

La securitización ocurre a través de clasificaciones de las personas en movilidad que juegan no solamente con las identidades sociales binarias (ej. "deseables" e "indeseables"), sino también con las nociones de inclusión y de exclusión (ej. "aptos" y "no aptos" a cruzar las fronteras). Para securitizar las migraciones "indeseadas" y restringir a las personas "no aptas", las prácticas gubernamentales operan al menos sobre dos ejes de justificación. A la vez que las personas procedentes de las regiones afectadas por SCA son consideradas intrusas que amenazan la estabilidad del sistema social, son vinculadas directa o indirectamente a los grupos criminales transnacionales o actores armados que pueden infiltrarse en las movilidades humanas y cometer delitos.

Este proceso está directamente asociado con lo que se ha denominado en la literatura criminológica de "criminalización de los migrantes" (Melossi, 2015). Según esta clave analítica, los desplazados son convertido en una especie de arquetipo de problemas para la sociedad y para el Estado y, especialmente los desplazados forzosos, son pintados en los discursos hegemónicos como amenazas no solamente para el estilo de vida occidental y para el bienestar económico y cohesión social de las sociedades receptoras, sino también como un riesgo para el orden público y cumplimiento de la Ley.

En este sentido, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados que huyen de los enfrentamientos bélicos suelen ser considerados amenazas parara la seguridad nacional (Crépeau; Nakashe; Atak, 2007; Yousaf, 2018; Yousaf y Purkayastha, 2015). La construcción de esta noción se da, por ejemplo, desde la asociación de estas personas al aumento de los índices de criminalidad y, por lo tanto, del impulso al desorden en la sociedad y Estado receptores. Un claro ejemplo de esta asociación fue documentado por Korac-Sanderson (2017), que analizó que la estructuración de las políticas de restricción de los flujos migratorios de los migrantes y refugiados ocurre a través de los discursos de sexualización de los delitos supuestamente incrementados numéricamente en los países receptores en función de estos flujos migratorios; de ahí la necesidad de restringirlos para garantir la seguridad de la población nacional.

Luego, para contrarrestar estas "amenazas", los Estado gubernan sus mecanismos de control fronterizo que producen "*spatialized forms of violence*"[13]. Se ha

13 Schindel (2019) utiliza la terminología "*spatialized forms of violence*" para hacer referencia a los regímenes fronterizos que implican múltiples

señalado que esto ocurre especialmente a través de iniciativas que pueden (i) incrementar los requisitos de entrada y de inicio del procedimiento de asilo en los países de tránsito y de destino (Fiske y Briskman, 2021); (ii) externalizar el control de las fronteras a través de mecanismos de fronterización en lugares que están lejos de una frontera que se pretende reforzar (Frelick, Kysel y Podkul, 2016); (iii) dificultar la permanencia legal de larga duración a los colectivos desplazados de las regiones impactadas por las SCA y (iv) establecer sistemas de cuotas como respuestas limitadas y restrictas a las oleadas migratorias y otras técnicas gubernamentales, como los controles fronterizos internos, los puntos de control y las deportaciones para moldear los movimientos de población desplazada (Ilcan, 2021).

3.4. Los impactos de la securitización de las migraciones en enfrentamiento a la TSHRSCA

La securitización de las migraciones posibilitada por el diseño normativo del PP tiene, como mínimo, dos impactos importantes para la confrontación a la TSHRSCA. El primer es relativo a la dicotomía entre las obligaciones internacionales en relación con los derechos humanos y la praxis de los Estados en la gestión de los flujos migratorios procedentes de las SCA. Esta incongruencia ayuda a deconstruir la figura del Estado como una institución protectora, una vez que su acción resulta en la victimización de los colectivos desplazados, a partir de la criminalización, castigo y detención de personas que "amenazan" las fronteras. El segundo está relacionado con el papel del Estado en modelar el estatus y la experiencia de las personas desplazadas, especialmente con las tácticas de control migratorio anteriormente descritas (Lee, 2011).

Se incrementa el riesgo de conversión en víctima de TSHRSCA y se refuerza la vulnerabilidad de aquellas que ya han sido victimizadas, mientras, paradojalmente, los discursos de los programas anti-trata claman por la protección de las personas (Avdan, 2012; Clark y Shone, 2019). Es el caso de lo documentado por el estudio de Brunovskis y Surtees (2017) y por el informe del Sahan Foundation y IGAD (2016). Estos documentos señalan que las medidas de contención de los flujos migratorios establecidos por la UE incrementaban la necesidad de que los desplazados que huían de las SCA procedentes de países de África y de Oriente Medio empezasen procesos migratorios con grande exposición a la TSHRSCA para conseguir cruzar las fronteras y llegar a lugares más seguros.

En contrapartida, los flujos migratorios no securitizados suelen contar con menos riesgos de conversión en víctima de TSHRCA. Los desplazamientos masivos procedentes de la Guerra en Ucrania, por ejemplo, han recibido un tratamiento desigual por parte de la UE en comparación con otros flujos migratorios procedes de SCA en el Oriente Medio[14] (Correa da Silva

formas de violencia engendradas por los Estados contra las personas desplazadas. El autor señala que un efecto reverso de este régimen es la inducción de estos grupos a emprender viajes peligrosos y prolongados, lo que les vuelve expuestos a vulneración de derechos humanos —incluida la a través de la conversión en víctima de TSHRSCA.

14 Diferentemente de la postura adoptada en relación con otras SCA que generaron desplaza-

y Reyes, 2023; UNODC, 2022). Este tratamiento diferencial ha sugerido una cierta adaptabilidad de la política de securitización de las migraciones a depender de la procedencia nacional de cada persona. Considerándose que "la entrada y el estatus legales son importantes factores de resiliencia frente a la trata de personas" (UNODC, 2022: 3), las respuestas desiguales de la UE también sugieren tener distintos impactos en los grados de victimización por TSHRSCA y de protección estatal.

4. El enfoque criminal como una de las facetas del enfoque estatocéntrico en el enfrentamiento a la TSHRSCA

En esta sesión, se expone que el diseño normativo del PP preferencia el abordaje criminal en lugar de la centralización en los derechos de las víctimas, con importantes implicaciones en la desprotección del principio de no devolución.

4.1. La previsión de las medidas criminales en el PP

La previsión de las principales medidas criminales está concentrada en los arts. 4 y 5, es decir, aquellas orientadas a la penalización de los tratantes, especialmente de los que participan de grupo delictivo organizado.

4.2. La priorización del PP del enfoque criminal en detrimento de la centralización en los derechos de las víctimas

La configuración normativa del PP está construida para priorizar las medidas político-criminales en detrimento de la centralización en los derechos de las víctimas. En este sentido, Gallagher (2002: 936) señala que "son los problemas de soberanía/seguridad en torno a la trata y el tráfico de migrantes los que constituyen la verdadera fuerza impulsora" detrás de los esfuerzos anti-trata. Ditmore y Wijers (2003: 85) han llegado a mencionar que la incorporación de las disposiciones de protección a las víctimas en el PP "también sería en interés de la fiscalía, ya que alentaría a las víctimas de trata a cooperar con las autoridades y, de este modo, contribuir a alcanzar los objetivos de aplicación de del Protocolo". Se ha denunciado que el enfoque predominante sobre la TSH se centra en la perspectiva del "*law and order*", lo que hace que los esfuerzos puestos en marcha por las instituciones de los sistemas de justicia criminal a menudo sean la base para abordar y erradicar esta práctica (Aradau, 2008; Hua, 2011; Segrave, 2009).

Este enfoque es denominado en la literatura como criminal. Básicamente co-

mientos en masa hacia los países europeos, la UE aprobó en 2022 la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 que reconocía una afluencia masiva de personas desplazadas provenientes de Ucrania e implementaba un conjunto de medidas de protección temporal a los ucranianos. Por otra parte, la protección temporal no se aplica a los ciudadanos no ucranianos y no pertenecientes a la UE que residían en Ucrania cuando empezó la guerra, con la excepción de los refugiados reconocidos y de algunas categorías de residentes permanentes a largo plazo.

rresponde a una faceta del enfoque estatocéntrico para abordar la TSH desde la perspectiva político-criminal en detrimento de la concepción victimo-céntrica (Chuang, 2014). Es verdad que el enfoque criminal no es necesariamente contrario al enfoque de DDHH, una vez perseguir a los responsables por la vulneración de derechos humanos también sería una de las múltiples formas de proteger a las víctimas. Como indica Pourmokhtari (2015: 163), el enfoque de DDHH "exige una estrategia doble e interconectada de apuntar y castigar a los malhechores mientras se protege a las víctimas, independientemente de su estatus". Sin embargo, se diferencian radicalmente en la medida que el enfoque criminal no prioriza la protección a las víctimas durante los programas de intervención, sino la investigación y la sanción a los perpetradores. Mientras tanto, el enfoque centrado en la víctima requiere no solo la responsabilidad penal, sino también la prevención, identificación, acogida y reparación integral de las víctimas (Berlanga, 2021; Shin, 2018).

El PP, por otro lado, no recoge la concepción victimo-céntrica como el núcleo de los programas de intervención contra la TSH. El foco del PP persiste en el control de la criminalidad y, como señalado anteriormente, en disuasión de los flujos migratorios "indeseables" (Fitzpatrick, 2003). La configuración de su contenido sugiere anteponer la persecución del delito y combate a los grupos delictivos organizados en lugar de priorizar la protección a la víctima. Como bien indica Ditmore y Wijers (2003: 85), "si bien el Protocolo contiene disposiciones firmes de aplicación de la ley, sus pocas disposiciones de protección y asistencia son todas discrecionales"[15]. En esta línea, la propria redacción del texto indica la preeminencia del enfrentamiento a la TSH como un crimen a ser perseguido en lugar de la garantía de los derechos de las víctimas o personas en riesgo de serlo (Berlanga, 2021; Scarpa, 2020).

En los casos en que la TSHRSCA, los intereses de combate a la criminalidad pueden verse todavía más intensificados. Como destacado ampliamente en la literatura, no es raro que las redes de delincuencia transnacional estén asociadas con actores armados emprender prácticas de TSHRSCA (Avdan y Omelicheva, 2021; Bowersox, 2019; Ogunniyi, 2024; Rizk, 2021). Luego, los Estados tienen interés en enfrentar no solamente el crimen organizado, sino también los grupos armados y terroristas por ser considerados amenazas nacionales e internacionales. Las resoluciones S/RES/2331 y S/RES/2388 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) son ejemplos del refuerzo del enfoque criminal en la regulación de la TSHRSCA (ONU, 2016; ONU, 2017). En ambas resoluciones, la primera medida exhortada por el CSNU es la ratificación del PP por los Estados que todavía no lo hayan hecho. Además, en la S/RES/2336, por ejemplo, el CSNU exhortó que las víctimas de TSHRSCA sean tratadas como víctimas de un delito (ONU, 2016, párr. 2) y que las víctimas de TSHSRCA prac-

15 Un ejemplo es que el art. 7 del PP señala que la permanencia de la víctima en el territorio del Estado receptor no es una medida que los Estados partes son integralmente obligados: "cada Estado Parte *considerará la posibilidad* de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, *cuando proceda*." (ONU, 2000) (destaque mío).

ticada por terroristas sean tratadas como víctimas de terrorismo (ONU, 2016, párr. 10). En contrapartida, no recogen ningún párrafo operativo mencionando explícitamente la protección a los derechos humanos de las víctimas o personas en riesgo de serlo.

4.3. Entre la utilización de las víctimas en los procedimientos penales y la (des)protección del principio de la no devolución

Una de las sólidas críticas de la literatura direccionadas al enfoque criminal reside en la utilización de las víctimas como pieza clave en la persecución de los perpetradores en los procedimientos penales. Lee (2011) y Hua (2011) señalan que la adjudicación de protección y de residencia temporal a las víctimas a menudo está condicionada a que testifiquen contra los tratantes y participen activamente del proceso penal, vinculándose la tutela y asistencia a las víctimas con la cooperación con las autoridades. Además, Krieg (2009) argumenta que el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas se da principalmente dentro del marco de los procedimientos penales, lo que limita la mejoría de su condición general y empoderamiento en otras esferas. Esta problemática puede verse todavía más agravada en los casos en que el objetivo principal de las autoridades resida en la persecución a aquellos que favorecen, faciliten o más bien se beneficien de las prácticas de TSHRSCA.

En el caso que no participen de los procedimientos penales, las víctimas corren el riesgo de sufrir repatriación involuntaria (Hua, 2011; Shin, 2018). Esto deriva del problema de que el PP no plasma una obligatoriedad de que los Estados partes adopten un sistema de repatriación voluntaria. Se restringe a disponer sobre la preferencia del modelo voluntarista respeto a la repatriación[16]. Es cierto que el PP dispone, en su art. 14, sobre la cláusula de salvaguardia sobre el principio de no devolución en conformidad con lo dispuesto por el Derecho internacional. Este articulo tiene una función de "aclarar que las disposiciones sobre repatriación de personas víctimas de trata no deben aplicarse sin tener en cuenta el derecho de las victimas al no retorno bajo el derecho de refugiados u otros estándares internacionales existentes." (Fitzpatrick, 2003: 1152). Por otro lado, el impacto de esta cláusula no sugiere ser suficiente para proteger integralmente los derechos de las víctimas.

Este principio tradicionalmente se ha definido en el Derecho internacional de los refugiados[17] y se aplica a todas las personas, no solamente a los refugiados (Crépeau, Nakache y Atak, 2007). Sin embargo, el artículo 1A(2) de la Convención de 1951 no reconoce explícitamente la víctima de TSHRSCA o en riesgo de ser convertida en víctima como una razón para ser conside-

16 Artículo 8.2 "Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice (…) *preferentemente de forma voluntaria*." (ONU, 2000) (destaque mío).

17 El principio de no devolución se encuentra explícitamente recogido en el artículo 33(1) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

rada refugiada[18]. La ACNUR ya se ha posicionado sobre la posibilidad de algunas víctimas o víctimas potenciales encontrarse dentro del ámbito de la definición de refugiado contenida en dicho artículo. Ha indicado que "la persona afectada quizás no haya sido víctima de trata, pero podría temer convertirse en una víctima de trata y, por ello, haber huido fuera de su país para buscar protección internacional" (ACNUR, 2006: 6). En todos estos casos, para ser reconocida como refugiada, la persona afectada debería igualmente tener "fundados temores de ser perseguida vinculados a uno o más de los motivos de la Convención" (ACNUR, 2006: 6). Este abordaje, por otro lado, sugiere desconsiderar la complejidad de los factores por los cuales alguien puede verse forzado a huir de las zonas afectadas por SCA y ser convertido en víctima de TSHRSCA.

Luego, la configuración jurídica del PP puede generar un vacío protector en las situaciones según las cuales una persona desplazada procedente de alguna región afectada por la SCA haya sido víctima de TSHRSCA y no quiera participar de procedimientos penales. La repatriación involuntaria significaría estar nuevamente expuesta a los actores que participan directa o indirectamente del abuso de sus derechos o se benefician de la dinámica conflictiva en sus países de origen. En consecuencia, las iniciativas de devolución pueden exponerla no solamente al riesgo de persecución por parte de los grupos armados y terroristas que a menudo están asociados a las redes delictivas transnacionales (Yousaf y Purkayastha, 2015), sino también al rechazo por parte de su núcleo familiar y social que les puede exponer al riesgo de exclusión y marginación social (Villellas et. al. 2016).

18 La referida Convención se limita a cinco categorías a través de las cuales alguien puede ser considerado refugiado, debiendo ser demostrados: "(…) fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas (…)".

6. Conclusiones

La forma como está estructurado el diseño normativo del PP puede dar origen a lecturas y regulaciones específicas por parte de los Estados parte respecto a las iniciativas anti-trata —incluidas aquellas orientadas a la confrontación de la TSHRSCA—. Las obligaciones pactadas en el referido Protocolo son trasladadas a las normas jurídicas e iniciativas políticas domesticas a partir de abordajes y definiciones relativamente elásticas dentro de la discrecionalidad permitida por las disposiciones del tratado.

Las medidas anti-trata recogidas en el PP tienen el potencial de encontrar en el enfoque de DDHH un eje para que los Estados parte construyan, desarrollen y gobiernen sus instrumentos jurídicos y político sensibles a las SCA y sus complejos impactos. Esto tendría el poder de reconocer las complejidades de la realidad y de la experiencia de las personas que experimentan o que pueden experimentar TSHRSCA. Además, abriría el camino para ampliar la protección integral y holística de los derechos de las víctimas y personas en riesgo de serlo, especialmente de aquellos que buscan huir de las zonas afectadas por las SCA.

El estudio partió del principio de que todas las iniciativas anti-trata deben se estructurar desde el enfoque de DDHH. Por otra parte, se buscó visibilizar que la

problemática reside en el hecho de que la configuración normativa del PP puede dar lugar a abordajes que no incorporan el dicho enfoque en la confrontación a la TSHRSCA. Se visibilizó que el PP no logra cubrir integralmente la TSHRSCA ni obligar a los Estados partes a emprender programas efectivos de protección a los derechos de las personas expuestas a este fenómeno. Por esto, se argumentó que regulación anti-trata a través del PP abre espacio para un régimen regulatorio a través del cual los Estados parte pueden operar determinadas prácticas para atingir ciertos objetivos estratégicos —aunque esto signifique la desprotección de los derechos humanos de aquellos más vulnerables.

Se profundizó este argumento indicando, primeramente, que las limitaciones del PP en incorporar las finalidades de la TSHRSCA impactan en la no cobertura de la integralidad de las finalidades de explotación que ocurren o se agudizan con SCA. Asimismo, la deficiencia en incorporar el paradigma interseccional sobre la vulnerabilidad tiene graves consecuencias en la desconsideración de los factores que exponen a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a la TSHRSCA.

En seguida, se criticó que el marco regulatorio del PP es marcado por lagunas sobre la SCA y sus impactos en el proceso de victimización por TSHRSCA, así como por el enfoque estatocéntrico —desdoblado en la securitización de las migraciones y el abordaje criminal—. Considerándose que dicho Protocolo recoge disposiciones relativas a los controles fronterizos, se mostró que las iniciativas anti-trata de los Estados parte a menudo se solapan con las medidas de restricción de los flujos migratorios procedentes de las SCA, especialmente de aquellos que contienen personas consideradas "indeseables" y "amenazas" para la seguridad interna y externa. Además, se destacó que la configuración normativa del PP en relación con la persecución a los perpetradores de la TSH tiende a priorizar los intereses político-criminales de los Estados parte en combatir el crimen organizado asociado a los actores armados, en detrimento de la protección de los derechos de las víctimas o en riesgo de serlo.

Luego, el PP no obliga los a Estados parte a desplegar programas anti-trata sensibles a las complejidades y particularidades de la TSHRSCA en consonancia con el enfoque de DDHH. Al contrario, sus regulaciones jurídicas internas y sus políticas anti-trata pueden operar dentro de las lagunas relativas a los impactos de la SCA y de la discrecionalidad en la implementación de una protección holística e integral a las personas expuestas a la TSHRSCA.

7. Bibliografía

ACNUR (2006). *Directrices sobre la Protección Internacional N°7: La aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata*.

Andrijasevic, R. (2014). "The figure of the trafficked victim: gender, rights and representation", en Evans et. al. (coord). *The SAGE Handbook of Feminist Theory*. London: Sage, pp. 359-373.

Aradau, C. (2008). *Rethinking trafficking in women: Politics out of security*. New York: Palgrave Macmillan.

Avdan, N. (2012). "Human trafficking and migration control policy: Vicious or virtuous cycle?", *Journal of Public Policy*, *32*(3), pp. 171-205.

Avdan, N., & Omelicheva, M. (2021). "Human Trafficking-Terrorism Nexus: When Violent Non-State Actors Engage in the Modern-Day Slavery", *Journal of Conflict Resolution*, *65*(9), pp. 1576-1606.

Berlanga, M. I. (2021). "La trata de menores en los conflictos armados desde un enfoque basado en los derechos humanos", *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, *41*, pp. 1-36.

Bowersox, Z. (2019). "Does Human Trafficking Extend Conflict Duration?", *Journal of Human Trafficking*, *5*(4), pp. 267-280.

Brunovskis, A, & Surtees, R. (2017). *Vulnerability and exploitation along the Balkans route: Identifying victims of human trafficking in Serbia*. Olso: Fafo.

Cano, A. B. V. (2019). "Reexaminando la definición de trata de seres humanos del Protocolo de Palermo: La trata como forma de explotación", *Estudios de Deusto*, *67*(2), pp. 15.29.

Chuang, J. A. (2014). "Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law", *The American Journal of International Law*, *108*(4), pp. 609-649.

Clark, J.B., & Shone S.J. (2019). "*Migration and Trafficking: The Unintended Consequences of Security and Enforcement Frameworks and the Revictimization of Vulnerable Groups",* en *J.B. Clark* & S. Poucki (coord). *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery*. Los Angeles: SAGE, pp. 232-256.

Correa da Silva, W. (2019). "La interseccionalidad en la trata de seres humanos: Un encuentro necesario para el enfoque de derechos humanos", en N.C. Ramos & P.C. Zúñiga (coord). *Trata de personas, género y migraciones en Andalucía (España), Costa Rica y Marruecos. Retos y propuestas para la defensa y garantía de los derechos humanos Retos y propuestas para la defensa y garantía de los derechos humanos*. Madrid: Dykinson, pp. 37-66.

Correa da Silva, W. (2022). *Regime internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Avanços e desafios para a proteção dos direitos humanos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Correa da Silva, W. & Reyes, G. S. (2023). "El nexo entre trata de seres humanos y desplazamientos forzados inducidos por conflictos a partir de las lentes del feminismo interseccional", *Relaciones Internacionales*, 54, pp. 95-112.

Crépeau, F., Nakache, D., & Atak, I. (2007). "International migration: Security concerns and human rights standards", *Transcultural Psychiatry*, 44(3), pp. 311-337.

Ditmore, M., & Wijers, M. (2003). "The negotiations on the UN protocol on trafficking in persons", *Nemesis*, *4*, pp. 79-88.

Doezema, J. (2005). "Now You See Her, Now You Don't: Sex Workers at the UN Trafficking Protocol Negotiation". *Social & Legal Studies*, 14(1), pp. 61-89.

El-Bushra, J. (2018). "How Should We Explain the Recurrence of Violent Conflict, and What Might Gender Have to Do with It?", en F. Ní Aoláin et. al (coord.). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*.

New York: Oxford University Press, pp. 48-61.

Erdal, M. B., & Oeppen, C. (2017). "Forced to leave? The discursive and analytical significance of describing migration as forced and voluntary", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(6), pp. 981-998.

Fiske, L., & Briskman, L. (2021). "The Impossibility of Home: Displacement and Border Practices in Times of Crisis", *Social Sciences*, 10(10), pp. 400.

Fitzpatrick, J. (2003). "Trafficking as a Human Rights Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conceptualizing and Combating Trafficking", *Michigan Journal of International Law*, 24(4), pp. 1143-1167.

Frelick, B., Kysel, I. M., & Podkul, J. (2016). "The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants", *Journal on Migration and Human Security*, 4(4), pp. 190-220.

Gallagher, A. T. (2002). "Trafficking, Smuggling and Human Rights: Tricks and Treaties", *Forced Migration Review*, 12(25), pp. 25-28.

Gallagher, A. T. (2015). *Trafficking in Persons and Armed Conflict*. (SSRN Scholarly Paper 3014272).

Goździak, E. M., & Vogel, K. M. (2020). "Palermo at 20: A Retrospective and Prospective", *Journal of Human Trafficking*, 6(2), pp. 109-118.

Hancock, A.-M. (2007a). "Intersectionality as a Normative and Empirical Paradigm", *Politics & Gender*, 3(2), pp. 248-254.

Hancock, A.-M. (2007b). "When Multiplication Doesn't Equal Quick Addition: Examining Intersectionality as a Research Paradigm", *Perspectives on Politics*, 5(1), pp. 63-79.

Henning, C. E. (2015)." Interseccionalidade e pensamento feminista: As contribuições históricas e os debates contemporâneos acerca do entrelaçamento de marcadores sociais da diferença", *Mediações - Revista de Ciências Sociais*, 20(2), pp. 97-128.

Hua, J. (2011). *Trafficking Women's Human Rights*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Huysmans, J. (2006). *The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU*. New York: Routledge.

Ilcan, S. (2021). "The Border Harms of Human Displacement: Harsh Landscapes and Human Rights Violations", *Social Sciences*, 10(4), pp. 1-16.

Jaskulowski, K. (2019). "The securitisation of migration: Its limits and consequences", *International Political Science Review*, 40(5), pp. 710-720.

Kofman, E. (2019). "Gendered mobilities and vulnerabilities: Refugee journeys to and in Europe", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(12), pp. 2185-2199.

Korac-Sanderson, M. (2017). "Racialized and Gendered Cultures of Othering: Displaced People in the Neoliberal World", *Journal of the Institute of Theatre, Film, Radio and Television*, pp. 135-150.

Krieg, S. H. (2009). "Trafficking in Human Beings: The EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human Rights", *European Law Journal*, *15*(6), pp. 775-790.

Lee, M. (2011). *Human Trafficking and global crime control*. London: SAGE.

Lobasz, J. K. (2009). "Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking", *Security Studies*, 18(2), pp. 319-344.

Lobasz, J. K. (2019). *Constructing Human Trafficking: Evangelicals, Feminists, and an Unexpected Alliance*. Cham: Palgrave Mcmillan.

Ludwig, B. (2016). ""Wiping the Refugee Dust from My Feet": Advantages and Burdens of Refugee Status and the Refugee Label", *International Migration*, 54(1), pp. 5-18.

Malinowski, R. L., et. al. (2016). "*Displacement, violence and vulnerability: Trafficking among internally displaced persons in Kenya"*. Nairobi: Awareness Against Human Trafficking (HAART).

McAdam, M. (2019). "The international legal framework on human trafficking: contemporary understandings and continuing confusions", en *J.B. Clark* & S. Poucki (coord). *The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery*. Los Angeles: SAGE, pp. 18-37.

McCall, L. (2005). "The complexity of intersectionality", *Signs: Journal of women in culture and society*, 30(3), pp. 1771-1800.

Melossi, D. (2015). *Crime, Punishment and Migration*. London: SAGE.

Mendola, D., & Pera, A. (2022). "Vulnerability of refugees: Some reflections on definitions and measurement practices", *International Migration*, 60(5), pp. 108-121.

Ní Aoláin, F., et.al. (2018). *The Oxford handbook of gender and conflict*. New York: Oxford University Press.

Njoku, E. T., Akintayo, J., & Mohammed, I. (2022). "Sex trafficking and sex-for-food/money: terrorism and conflict-related sexual violence against men in the Lake Chad region", *Conflict, Security & Development*, 22(1), pp. 79-95.

O'Brien, E. (2018). *Challenging the Human Trafficking Narrative: Victims, Villains, and Heroes*. New York: Routledge.

Obokata, T. (2006). *Trafficking of human beings from a human rights perspective: Towards a holistic approach*. Leiden: Martinus Nijhoff.

Ogunniyi, D. (2024). "Armed Conflict-induced Displacement and Human Trafficking in the Sahel: Organised crime, vulnerabilities, and the accountability of non-state armed groups", *Anti-Trafficking Review*, *22*, pp. 74-90.

ONU. Consejo de Seguridad. (2016). *Resolución 2331 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, S/RES/2331*, (20 de diciembre de 2016).

ONU. Consejo de Seguridad. (2017). *Resolución 2388 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, S/RES/2388,* (21 de noviembre de 2017).

ONU. (2000). *Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*

Piotrowicz, R. (2021). "Human Trafficking in Conflict: Context, Causes and the Military, Crime Prevention and Security Management", *International Journal of Refugee Law*, *33*(2), pp. 368-371.

Pourmokhtari, N. (2015). "Global Human Trafficking Unmasked: A Feminist Rights-

Based Approach", *Journal of Human Trafficking*, 1(2), pp. 156-166.

Rizk, J. (2021). "Exploring the Nexus between Armed Groups and the Trafficking and Smuggling of Human Beings in the Central Sahel and Libya", *Studies in Conflict & Terrorism*, 47(7), pp. 771-791.

Rooney, E. (2018). "Intersectionality: Working in conflict", en n F. Ní Aoláin et. al. (coord.), *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. New York: Oxford University Press, pp. 328-342.

Sahan Foundation & Intergovernmental Authority on Development (IGAD). (2016). *Human trafficking and Smuggling on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route.*

Sajjad, T. (2018). "What's in a name? 'Refugees', 'migrants' and the politics of labelling", *Race & Class*, 60(2), pp. 40-62.

Scarpa, S. (2020). "UN Palermo Trafficking Protocol Eighteen Years On: A Critique", en J. Winterdyk & J. Jones (coord.), *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Cham: Springer, pp. 623-640.

Scevi, P. (2023). *Trafficking in Human Beings in Conflict or Post-Conflict Situations. A Reflection on Strategies*.

Schindel, E. (2022). "Death by 'nature': The European border regime and the spatial production of slow violence", *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(2), pp. 428-446.

Segrave, M. (2009). "Human trafficking and human rights", *Australian Journal of Human Rights*, 14(2), pp. 71-94.

Shin, Y. J. (2018). *A Transnational Human Rights Approach to Human Trafficking: Empowering the Powerless*. Leiden: Brill Nijhoff.

Thill, M., & Giménez Armentia, P. (2016). "El enfoque de género: Un requisito necesario para el abordaje de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", *Revista europea de derechos fundamentales*, 27, pp. 439-459.

UNODC. (2018). *Global Report on Trafficking in Persons. Booklet 2: Trafficking in persons in the context of armed conflict*. Vienna.

UNODC. (2022). *Conflict in Ukraine: key evidence on risks of trafficking in persons and smuggling of migrants*. Vienna.

Villellas, A., et. al. (2016). *Violencia sexual en conflictos armados. Quaderns de construcció de pau n. 27.* Barcelona: Escola de cultura de pau.

Vigoya, M. V. (2023). *Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario*. Buenos Aires: CLACSO.

Yousaf, F. N. (2018). "Forced migration, human trafficking, and human security", *Current Sociology*, 66(2), pp. 209-225.

Yousaf, F. N., & Purkayastha, B. (2015). "'I am only half alive': Organ trafficking in Pakistan amid interlocking oppressions", *International Sociology*, 30(6), pp. 637-653.

Yuval-Davis, N. (2015). Situated Intersectionality and Social Inequality, *Raisons Politiques*,

58(2), pp. 91-100.

Zarkov, D. (2018). "From Women and War to Gender and Conflict? Feminist Trajectories", en F. Ní Aoláin, et. al. (coord.), *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*.

New York: Oxford University Press, pp 17-34.

Žarković, M., Tasić, M., & Ćurčić, M. (2019). "Exploitation of victims of trafficking in human beings in the context of the armed conflict". *Thematic Conference Proceedings of International Significance*. Belgrade: International Scientific Conference Archibald Reiss Days, pp. 43-59.

Una especulación ficticia sobre el concepto de ser humano en la era tecnológica: *Onda cerebral* de Poul Anderson

A Fictional Speculation on the Concept of Humanity in the Technological Era: *Brain Wave* by Poul Anderson.

Cristina Monereo Atienza
Universidad de Málaga, Málaga, España
cmonereo@uma.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Ciencia ficción y derecho; inteligencia racional; emociones y autonomía relacional; derechos de los animales.
Keywords: Science fiction and law; rational intelligence; emotions and relational autonomy; animal rights.

Resumen: La ciencia ficción es un género prolífico con potencialidad crítico-constructiva respecto a la noción y posición del ser humano en relación con el resto de seres vivos. El hecho de conformar historias especulativas sobre futuros probables en los que la tecnología ha avanzado permite introducir y profundizar sobre temas éticos, morales y jurídicos que son de plena actualidad. Más allá de las novelas que se han asociado con el movimiento transhumanista, interesan aquellas que dentro del género reconstruyen el concepto humanista de sujeto, sin separarse totalmente de él. Entre ellas, y dejando atrás las más revisadas y estudiadas, me parece relevante *Onda Cerebral* (*Brain Wave*) de Poul Anderson, una ficción excepcional para cuestionar la características definitorias y privilegiadas del ser humano frente al resto de seres vivos y conducir a la necesaria reflexión sobre los derechos. Hay dos temas significativos a destacar de esta obra: el primero es la sobrevaloración de la inteligencia racional y la ilusoria autosuficiencia moral humanas y, por consiguiente, la defensa del papel tan relevante de las emociones y la forzosa autonomía moral relacional que define al ser humano; el segundo se refiere al cuestionamiento de la posición privilegiada en el mundo de los seres humanos ya que en realidad somos seres frágiles o vulnerables, seres sintientes que sufren como resto de animales. Es precisamente esa vulnerabilidad lo que hace generar lazos de empatía y compasión con el resto de animales que sienten como nosotros, y lo que puede ayudar a replantear el sentido de la Justicia social y nuestra manera de vida en comunión con la naturaleza.

Abstract: Science fiction is a prolific genre with critical-constructive potential regarding the notion and position of humanity in relation to other living beings. The ability to create speculative stories about probable futures in which technology has advanced allows for the exploration of ethical, moral, and legal issues that are highly relevant today. Beyond the novels commonly associated with the transhumanist movement, those that reconstruct the humanist concept of the subject without completely detaching from it are particularly interesting. Among these, and setting aside the most frequently analyzed and studied works, Poul Anderson's Brain Wave emerges as a significant fiction for questioning the defining and privileged characteristics of humanity in relation to other living beings, prompting essential reflection on rights. Two significant themes can be highlighted in this work: the first is the overvaluation of rational intelligence and the illusory moral self-sufficiency of humans, and consequently, the defense of the crucial role of emotions and the necessary relational moral autonomy that defines human beings. The second theme concerns the questioning of humanity's privileged position in the world, as we are, in fact, fragile and vulnerable beings, sentient entities that suffer like other animals. It is precisely this vulnerability that fosters bonds of empathy and compassion with other sentient beings, which can help reframe the notion of social justice and our way of life in communion with nature.

"He could see how people would be scared if the animals started getting smarter. If they were really smart, would they keep on letting humans lock them up and work them and castrate them and kill and skin and eat them?"

(Anderson, 2018:30).

"He stood for an instant of creeping fear. Were the trees thinking too, now? Was the whole world going to rise in revolt?"

(Anderson, 2018: 53).

1. Introducción: el Derecho necesita imaginaciones ficticias

La ciencia ficción es un género literario y cinematográfico de difícil definición debido a su progresiva modificación en el tiempo, que ha comportado una mejora en su calidad narrativa y un replanteamiento de su concepción inicial al diversificar su temática y separarse o conformar otros géneros y subgéneros[1].

Generalmente se define como un género de historias futuras en las que la ciencia y la tecnología han modificado de uno u otro modo el mundo conocido, por eso quizás su traducción española debería

1 Por ejemplo, mientras para algunos "lo maravilloso" es una característica básica del género (Barceló, 2015), para otros las obras de ciencia ficción están separadas del relato fantástico y maravilloso porque no implican elementos sobrenaturales y son mundos simplemente distintos al nuestro, sin resultar imposibles (Moreno, 2010). Véase también a García Figueroa, 2019: 272 y ss., quien cita a Moreno.

haber sido "ficción científica"[2]. En la actualidad se alude comúnmente al género *Sci-fi*, calificación proporcionada por los medios en atención a trabajos audiovisuales en los que priman los aspectos más superficiales como los efectos especiales cinematográficos.

Con todo, pienso que estos términos no aclaran demasiado lo que es el género: "ciencia ficción" no es la noción adecuada, porque es una traducción gramaticalmente incorrecta del término anglosajón *science fiction*; "ficción científica" tampoco es la mejor definición, ya que alude solo a solo un tipo de ciencia ficción clásica (la denominada ciencia ficción *hard*); "sci-fi" se aleja igualmente de lo que es el género, porque es una denominación más centrada en trabajos superficiales y efectistas. Desde mi punto de vista, las obras de ciencia ficción deben entenderse, más allá de su temática científica, como "ficciones especulativas" (*speculative fictions*) o también "imaginaciones ficticias" (*fictional imaginations*) o "especulaciones imaginativas" (*imaginative fictions*), calificaciones éstas que hoy podrían definir mejor su esencia[3].

Entendiendo así el género, la combinación de ciencia ficción y Derecho es un campo fascinante que posibilita explorar cuestiones éticas y jurídicas en futuros imaginarios o en entornos con tecnologías avanzadas que invitan a la reflexión creativa tan necesaria en el Derecho. Esto es posible porque, como bien explica Fernando Ángel Moreno, la ciencia ficción entraña ubicar al lector/espectador en un mundo imaginario bajo ciertos presupuestos transcendentales. Cuando el lector/espectador se sumerge en ese mundo lo hace bajo un pacto (el pacto de ficción) aceptando esos presupuestos que no son reales como si fueran reales, es decir, suspendiendo su "incredulidad" (Moreno, 2010: 68 y ss.). Esto significa que el relato no se desliga completamente del mundo y la vida que conocemos porque nos resultaría completamente incomprensible, esto es, la narración tiene que tener cierta verosimilitud y coherencia interna (Moreno, 2010: 270-271) (entre otras cosas para que nosotros podamos empatizar y emocionarnos, que es el objetivo de toda buena obra artística —Kracauer, 1996: 51 y ss.; Einsenstein, 1970: 207, 333—). La ciencia ficción no es, por tanto, "predictiva" pero sí "prospectiva", porque al situarnos en el futuro posible nos permite preguntarnos críticamente qué somos y a dónde caminamos de manera racional (aunque no cientifista), y ello a pesar de las críticas que puedan hacerse desde el particularismo moral o desde el comunitarismo en razón al carácter situado de la razón práctica (García Figueroa, 2019: 278 y ss.). La justificación del valor de este tipo de obras estriba en que afectan y pueden romper con nuestras convenciones morales y jurídicas más básicas.

2 La ciencia ficción empezó a cultivarse en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, y luego se trasladó a otros países como España donde, como convenientemente apunta Miquel Barceló, se mal tradujo al español como "ciencia ficción" en vez de "ficción científica", que hubiera sido el término gramaticalmente más correcto y mas definitorio de lo que fue la primera ciencia ficción (eso que ahora se llama la ciencia ficción "hard") (Barceló, 2015: 30 y ss.)

3 La relación entre ciencia ficción y Derecho, o ciencia ficción y Filosofía del Derecho ha sido denominada por Alfonso García Figueroa como *Sci-Fi Law*. En mi texto voy a evitar tal denominación, precisamente porque la denominación *Sci-Fi* se refiere al aspecto más comercial y efectista del género. Desde luego, no es esta idea la que transmite García Figueroa en su artículo: García Figueroa, 2019.

Es evocadora la calificación efectuada por Daniel Sánchez Rubio cuando dice que la ciencia ficción es un género inconformista que entronca con la teoría crítica, puesto que no se conforma con lo empíricamente dado (Sánchez Rubio, 2010: 52). Precisamente por ser ficción permite reflexiones más arriesgadas que enlazan con el verdadero sentido emancipatorio de la Modernidad. La combinación de la especulación científica y artística permite recrear escenarios muy variados de inclusión/exclusión, dominación/horizontalidad, de egoísmo/solidaridad. Esta composición es un herramienta útil que hace aportaciones muy atractivas para la necesaria reactualización de los valores básicos de libertad, igualdad y solidaridad como concreciones de la dignidad humana.

Al final todas la áreas de intersección entre ciencia ficción y Derecho, desde los derechos y responsabilidades legales de los robots y seres sintéticos, a la modificación genética y la mejora humana que plantean cuestiones sobre la ética y la legalidad de manipular la biología humana, hasta la cuestión de la vigilancia y la privacidad en sociedades altamente tecnologizadas, entre otras muchas, se reconducen a la misma cuestión sobre nuestra identidad, sobre la dignidad y los derechos. Así pues, pienso que el concepto del ser humano y los derechos constituyen un contenido básico en la intersección de la ciencia ficción con el Derecho, y a este tema se dedicará este texto a propósito de la clásica novela *Onda cerebral* de Poul Anderson (publicada en forma de serie en 1953 y como novela en 1954), a la que se quiere rescatar frente a otras obras de ciencias ficción bien conocidas y ya previamente estudiadas.

2. El cuestionamiento crítico del concepto humanista del ser en la ciencia ficción

El concepto de ser humano parece una obviedad para muchos, sin embargo, es un noción compleja en continua construcción. Resulta curioso como el ámbito del estudio científico (de las ciencias sociales y jurídicas, aunque en cierta medida en todas las ciencias), se mueve entre conceptos que parecen dados de antemano pero que sin embargo se están elaborando al mismo tiempo. Estas nociones nunca deben ser tomadas como axiomas y tienen que someterse a una labor real de racionalización y estudio constante de sus contenidos. Entre ellos, el primero y el más esencial es precisamente el concepto de ser humano, que requiere de un acercamiento más atento para contribuir a la resolución de los problemas más acuciantes en el mundo del Derecho y los derechos, cuyas raíces están en entender, progresivamente en el tiempo y en adaptación a los continuos cambios, qué somos y qué buscamos proteger.

Desde Descartes, los seres humanos se han definido como seres racionales con alma y cuerpo (Descartes, 2011), y la manera en que se ha lidiado con esa dualidad conceptual ha sido clave para entender al ser humano. Para Descartes, el alma se distingue del cuerpo y no necesita de él. El ser humano es primeramente alma, intelecto, razón, aunque luego se incluya en el pensamiento la imaginación y la sensación que parecen requerir la presencia del cuerpo. La separación entre alma y cuerpo fue fundamental para el avance de la ciencia moderna, puesto que no había que apelar al alma para explicar el cuerpo y además, gracias a su alma, el

ser humano podía separarse de sus limitaciones corporales y elegir sus fines y su vida (Llinás Begon, 2024: 109-110).

El momento definitivo para esta concepción del ser humano en nuestra cultura es el Renacimiento, un periodo de progreso humano optimista en el que se exaltan las excelencias humanas y el ser humano siente el control sobre su destino y sobre la naturaleza, guiado por la gracia divina, y en contraposición (que no ruptura) con el pesimismo antropológico de periodos anteriores, centrado en las limitaciones corporales de la naturaleza humana (Pelé, 2012: 20; Peces-Barba, 1998: 88 y ss.). Para ello, fue necesaria la reinterpretación de los textos bíblicos y la vuelta a los textos clásicos (Platón, Aristóteles, los estoicos) para conformar una idea del individuo como centro del mundo y como ser substancialmente de alma racional y libre, capaz de progresar moral y científicamente en búsqueda de su felicidad, y ello a pesar de su fragilidad corporal.

El objetivo humanista era superar la "miseria hominis" y el determinismo propios de la Edad Media (según la cual el ser humano está limitado por las flaquezas del cuerpo y su entendimiento es también restringido y muchas veces mal utilizado para dañar a los demás) y enfatizar la "dignitas hominis" y la libertad de elección (el ser humano como un gran milagro de la obra de Dios y por tanto capaz de desarrollar una vida feliz gracias a sus cualidades divinas) (Pelé, 2012: 33 y ss.).

Desde esta perspectiva, la fragilidad del cuerpo es superada por la capacidad racional, la inteligencia y la creatividad del ser humano para su progreso, como ser análogo a Dios[4]. En esta época se genera una concepción de la persona como ser separado del mundo que le rodea, capaz de construirse así misma, capaz de elegir su lugar en el mundo y capaz de conocer la verdad a través del conocimiento de ese mundo (ser humano *centro* del mundo y *centrado* en el mundo) (Peces-Barba, 2003: 12-13). La racionalidad y la libertad pasan a ser rasgos antropológicos que lo ensalzan y diferencian del resto de seres vivos (Heller, 1994: 435). Esta es la base de la concepción de lo humano que en este trabajo quiere ser objeto de revisión y crítica.

Durante las últimas décadas, buena parte del género de ciencia ficción ha prestado especial atención al impacto de las tecnologías sobre nuestro cuerpo, habilidades físicas y capacidades cognitivas, la identidad humana y la transformación de la especie, cuestionando la base de la noción humanista de ser humano y conectándose con el movimiento transhumanista[5], que alimenta su imaginario a través de cauces que tienen un poder enorme de penetración y persuasión.

El transhumanismo o posthumanismo[6] sigue bajo la estela arrogante del humanismo al anhelar controlar la evolución,

4 Aunque algunos pensadores, como Michel de Montaigne o Erasmo, sin ser pesimistas, criticaban la arrogancia y vanidad de los seres humanos por creerse como Dios, creerse el centro del mundo y pensarse superiores al resto de criaturas (Pelé, 2012: 80 y ss.)

5 Algunos ejemplos que conectan la Ciencia ficción con este movimiento son: Holliger, 2009 o Milburn, 2016.

6 Estos términos son utilizados como sinónimos, aunque hay autores que los distinguen. Así, transhumanismo sería el movimiento que persigue la mejora humana mediante extensiones tecnológicas, mientras el posthumanismo busca sobre todo

mejorar al ser humano a través de las tecnologías y superar sus limitaciones y, en última instancia, conseguir la llamada Inteligencia Artificial fuerte o general (Diéguez, 2017)[7]. Como se sabe, la Inteligencia Artificial (IA) es una parte de las NBIC, y su eje es inventar, diseñar o descubrir algoritmos computacionales para realizar tareas inteligentes, algoritmos que además son evolutivo-genéticos con lógica de redes-neuronales y que por tanto pueden resultar en algo parecido al pensamiento (López Nieto, 2020: 47 y ss.). La IA general es la utopía que persiguen los transhumanistas puesto que significa encontrar el algoritmo perfecto que permita crear seres vivientes.

Los adeptos a esta corriente no descartan superar la especie humana y que está sea sustituida por otra más evolucionada (versión débil), y algunos defienden incluso que el ser humano es solamente un algoritmo complejo que se expresa en sustrato de conciencia y que puede habitar en diversas formas orgánicas e inorgánicas (versión fuerte) (López Nieto, 2020: 76). En su versión más radical, por tanto, esta corriente opta por acabar con la dualidad cuerpo-mente y por la plena libertad morfológica de tal manera que el ser humano sea considerado únicamente como la mente que es susceptible de ser descargada (*uploading*) y vivir por sí misma en la nube.

Aunque esta ideología se ha relacionado con una buena parte de obras de ciencia ficción, en realidad el género no es irremediablemente transhumanista y su objetivo es más bien problematizar el concepto clásico de ser humano y los constituyentes básicos que lo han definido desde la tradición humanista[8].

Lo que plantea la ciencia ficción es un debate científico y también ético-filosófico. Además de la definición biológica del individuo (de la especie de *homo sapiens* y sus características específicas), interesa adentrarse en el concepto filosófico de persona. Las propuestas son variadas, aunque quizás puedan reducirse a dos: aquellos que defienden la existencia de

la existencia inmortal en la realidad virtual (véase Krueger, 2005: 78).

7 Renombrados filósofos transhumanistas son Max More, Nick Bostrom y Vernon Vinge. Antecedentes del transhumanismo cultural son Lèvi-Strauss (*El pensamiento salvaje*, 1962), el neoestructuralismo francés (la hermeneútica de Ricoeuer, las subjetividades nómadas de Deleuze y Braidotti, la deconstrucción de Derrida, las tesis de Foucault o la comprensión antimoderna de Lyotard; en este sentido véase como ejemplo el libro de Lyotard *Lo inhumano: charlas sobre el tiempo*, 1988-). Dentro del transhumanismo biológico que busca el mejoramiento del ser humano a través de la ciencias de la biología, la ingeniería genética y la farmacología pueden nombrarse a Julian Savulescu, John Harris o George Church (es esencial citar aquí el libro editado por Bostrom y Savulescu, *Mejoramiento humano*, 2009). Defensores de la denominada singularidad son Han Moravec (*El hombre mecánico. El futuro de la robótica y la inteligencia artificial*, 1990), Marvin Minsky (*La sociedad de la mente*, 1986) y Raymond Kurzweil (*La singularidad está cerca: cuando los humanos trascendamos la biología*, 2005). Conocidos detractores del transhumanismo son Han Jonas (*El principio de responsabilidad. Ensayo de un ética para la civilización tecnológica*, 1995), Francis Fukuyama (*Nuestro futuro posthumano: consecuencias de la revolución biotecnológica*, 2002), Michael J. Sandel (*Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética*, 2007), o Jünger Habermas (*El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?*, 2001).

8 No es de extrañar que algunos transhumanistas se consideren herederos de la tradición ilustrada y su idea de progreso. Véase Llorens Serrano, 2016, 273 y ss., 298 y ss.

una esencia natural del ser humano, común e inmutable en todo tiempo y lugar; y aquellos otros que entienden que la definición tiene un alto componente cultural. Argumentar contra el transhumanismo es sencillo para los primeros, pero más complicado para los segundos. Esto no implica imposibilidad para hacerlo. El componente cultural y constructivo en la definición del ser humano no involucra sucumbir al relativismo en la fijación de unas características o mínimos comunes a todos. La meta no es aceptar una lista cerrada de características mínimas humanas que no esté abierta al diálogo intercultural, pero sí de buscar una definición común siempre flexible en el tiempo. Un punto de partida de gran valor para esta tarea es, además de algunas propuestas filosóficas muy sugestivas9, el acuerdo extenso sobre la definición de ser humano que ha sido plasmado en los diferentes documentos jurídicos nacionales, europeos e internacionales, y aunque éste sea frágil e inestable, es el inicio razonable (y justo) para formular principios y derechos que protejan lo que consideramos primordial en y para el ser humano[10]. Las raíces del consenso están precisamente en esa tradición occidental mencionada anteriormente, en el pensamiento cartesiano que concibe al hombre como un ser de mente y cuerpo dotado razón, y también en el Humanismo de la Ilustración moderna que lo define como un ser libre y autónomo. Esta es la base cultural del concepto de la que pienso que hay que partir en el análisis, si bien entendiendo que no son nociones estáticas. La idea de sujeto moderno debe seguir enriqueciéndose, matizándose o corrigiéndose a través de las críticas constructivas realizadas por parte de corrientes diversas como las post-estructuralistas, comunitaristas, post-colonialistas o feministas, animalistas, entre otras, a las que es importante prestar más atención.

De este modo, y sin necesidad de buscar un grave alejamiento de esa base humanista, es preciso un alineamiento con esas corrientes críticas que problematizan algunos de los axiomas aparentemente incuestionables sobre el concepto de ser humano para promover una noción más inclusiva y en consecuencia una flexibilización del sujeto jurídico de derechos. Hay obras suficientes del género de ciencia ficción para ello. En este texto se aborda un novela no tan conocida para el público en general, aunque sí en los círculos de la ciencia ficción, titulada *Onda cerebral*. El objetivo es analizar críticamente la clásica definición de ser humano para concluir (aunque sin cerrar desde luego el debate) que tenemos mucho que ver con el resto de animales y probablemente también con los demás seres vivos y que, independientemente de ello, son criaturas de este mundo (milagros de la naturaleza, por tomar prestada la expresión humanista) a las que extender nuestras herramientas de protección.

La historia de *Onda cerebral* se desarrolla en un futuro cercano cuando la Tierra, después de milenios, finalmente se libera de la influencia de un campo magnético que ha restringido el potencial mental de todos los seres vivos en el planeta. A

9 Véase la propuesta de la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum.

10 En este acuerdo se mencionan muchas características que son el resultado del desarrollo de diversas capacidades sensoriales y motoras, por lo que es posible optar por un modelo también corpóreo en el que el conocimiento y la inteligencia surgen de la interacción del cuerpo con el contexto.

medida que la Tierra abandona esta región del espacio que ha mantenido a las mentes humanas y animales en un nivel subóptimo, la inteligencia de todos los seres vivos comienza a aumentar de manera radical. Este cambio afecta a toda la biosfera, desde los seres humanos hasta los animales. La historia se centra en cómo la humanidad enfrenta estos cambios, la adaptación a la repentina inteligencia mejorada y cómo afecta a las relaciones sociales, políticas y tecnológicas. A lo largo de la trama, los personajes se enfrentan a dilemas éticos y político-jurídicos difíciles mientras lidian con las consecuencias de este cambio cósmico. La novela explora temas como la evolución, el potencial humano y cómo el cambio repentino puede impactar en la civilización y nuestro propia concepción de lo que somos y del mundo que nos rodea.

2.1. Primera crítica: el ser humano no se define solo por su inteligencia racional y su autosuficiencia moral

La trama de la novela *Onda cerebral* es narrada a través de diversos personajes con coeficientes intelectuales diversos: está el granjero Archie Brock, que no era especialmente perspicaz antes del cambio y que acaba tomando la riendas de la granja en la que trabaja con ayuda de varios grandes simios; se encuentra el científico Peter Corinth que es capaz de lidiar con la transformación, poner la tecnología a su favor y emprender un exitoso viaje para encontrar vida inteligente en otros planetas; está Sheila, esposa de Corinth[11], que no acepta el cambio repentino y acaba renunciado drásticamente a él; o también Felix Madelbaum que se ve obligado a reconstruir políticamente todo un estado para poder garantizar comida y servicios básicos a los que allí viven.

Esta historia ofrece una exploración profunda de la inteligencia y sus implicaciones éticas y emocionales en la vida, invitando a reflexionar sobre su naturaleza y cómo se relaciona con la felicidad, la aceptación y la conexión emocional.

El aumento de la inteligencia permite crecer las habilidades cognitivas y de razonamiento lógico de todos los seres, que se traducen en mejoras en el habla y lenguaje (casi se comunican por telepatía) y resolución de problemas (a nivel social, político, económico, científico). Este cambio es positivo para algunos de los personajes, como Brock que pasa de ser un muchacho poco inteligente acogido en la granja para que pudiera ganarse la vida de algún modo e incapaz de hacer las tareas más complejas, a estar preparado para organizar todo el trabajo y encontrar la manera de comunicarse y convivir con los animales rebelados. También resulta positivo el cambio para Colinth, que aunque ya era un reputado científico, es entonces competente para avanzar tecnológicamente con su equipo en tiempo sorprendente e inventar un nave capaz de alcanzar la velocidad de la luz.

11 Se ha de hacer notar que en la novela los dos personajes femeninos son nombrados a través de su nombre de pila, mientras sus iguales masculinos lo son por el apellido, lo cual podría ser objetivo de comentario extenso desde un tipo de acercamiento feminista al texto, que también aludiera, por ejemplo, a otros aspectos del lenguaje, tales como hablar de "hombre" para referirse a la humanidad, entre otros muchos. No obstante, por falta de espacio, solo dejo apuntado este posible tipo de análisis.

A pesar de que el aumento de inteligencia cognitiva es vivida de manera positiva por algunos, en realidad el mensaje del libro es que ese cambio resulta más complejo de lo que parece y no siempre tiene el impacto deseado. Los individuos empiezan a sentirse extraños, no son capaces de reconocerse así mismos y se sienten profundamente solos. Mr. Rossman, el anciano dueño de la granja en la que trabaja Brock profesa ese miedo a lo incomprensible: "Lo siento en mí mismo también. Y no es del todo agradable. No es solo porque estoy nervioso y tengo pesadillas- esto es algo solamente psicológico, supongo- es por los pensamientos. Siempre me había visto a mí mismo como una persona con una alta capacidad racional e inteligencia. Ahora me está ocurriendo algo que no entiendo en absoluto. A veces pienso que toda mi vida ha sido un lucha insignificante y sin sentido" (Anderson, 2018: 32-33, traducción propia). El caso más paradigmático de esta incomprensión y pérdida de identidad lo vemos en el personaje de Sheila, la mujer de Corinth, a quien la transformación y la soledad le conducen a la locura. Ya no es capaz de reconocer a su marido, que está principalmente imbuido en su trabajo, ni a los que los rodean y, por tanto, es incapaz de reconocerse a sí misma (Anderson, 2018: 62).

Igualmente, el aumento de inteligencia hacen que la sociedad y su reglas sociales y jurídicas parezcan triviales y arbitrarias, sin sentido, en relación a lo que somos y el lugar que ocupamos en el mundo y el universo. Corinth es consciente del cambio profundo en la realidad: "Este nuevo hecho —si es que sobrevivimos a él— cambia todos los fundamentos de la vida humana. Nuestra sociedad estaba construida *por* y *para* el hombre. Ahora el hombre mismo se está convirtiéndose en otra cosa (…). Un nuevo y completo cosmos se abre a nosotros y veo que mi vida ha sido miserable e insuficiente, mi trabajo ha sido algo trivial, mis creencias y convenciones han sido estrechos, limitados y sin sentido (…). Toda la sociedad ha estado necesariamente fundada en unas reglas y restricciones más o menos aleatorias, y mucha gente se ha dado cuenta de repente de que las normas eran arbitrarias, sin significado intrínseco, y ha decidido violar las que no les gustan" (Anderson, 2018: 36, 60, traducción propia).

Los personajes empiezan a ser más conscientes de la complejidad de las relaciones humanas, experimenta emociones más profundas (como la soledad) y luchan con la aceptación y la conexión emocional. Este es el mismo proceso que parecen sentir el protagonista de otro interesante libro de ciencia ficción, *Flores para Algernon* de Daniel Keynes, una especulación ficticia en la que una persona con discapacidad intelectual se somete a una operación que lo hace convertirse en un genio (Keynes, 2021).

Esta convergencia de inteligencia racional y emociones problematiza en cierta medida la concepción clásica en la que el rasgo humano principal radica esencialmente en ser capaz de hablar, aprender y desarrollar la inteligencia para crear y elegir la propia identidad y el propio mundo. La tesis moderna considera que la inteligencia racional permite el lenguaje y tomar consciencia de uno mismo y, en consecuencia, permite al individuo ser autónomo moralmente y decidir sobre la propia vida. La razón individual es lo primero ontológicamente hablando y el individuo como microcosmos puede autosuficientemente identificarse.

La novela parece sumarse a las críticas realizadas a esta idea de sujeto desde ciertas posturas comunitaristas que consideran que para reconocerse a uno mismo y ser individuos realmente autónomos lo esencial y primario es la *relación* con los otros. Como afirma Axel Honneth la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima de los individuos se adquieren gracias a un proceso intersubjetivo en el que el sujeto toma conciencia de sí mismo y de los demás como seres iguales y dignos[12]. Resuenan aquí las ideas de Hegel en el que el desarrollo de la identidad personal de un sujeto está ligada al presupuesto de actos de reconocimiento por parte de otros sujetos. Si uno no reconoce al otro en la interacción como un determinado tipo de persona, tampoco puede verse a sí mismo como ese tipo de persona (Honneth, 1997: 50 y ss.).

En primer lugar, para ser autónomo se requiere autoconfianza y autorrespeto en los sentimientos, deseos, impulsos y emociones propios. La autoconfianza es un proceso interpersonal de diálogo con uno mismo en el que parecen intervenir directamente el emoción y el apoyo de los demás (Honneth, 1997: 135). En segundo lugar, para ser autónomo se precisa igualmente autoestima. La humillación social de ciertos tipos de vida y decisiones mina la autonomía de los seres humanos. El contexto semántico y símbolo social es relevante, porque utilizando ciertas expresiones se pueden estar marginando opciones de vida de seres humanos, lo que limita también su capacidad de decidir (Honneth, 1997: 137). En esta línea Avishai Margalit ha defendido que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas, es decir, aquella que combate las condiciones que justifican que quienes forman parte de ella se consideren humillados o creen tener razones para sentirse humillados. Además, es aquella que acuerda respetar, a través de las instituciones, a las personas sujetas a su autoridad (Margalit, 1997: 15, 18, 22). De hecho, una sociedad que respete los derechos de las personas no es condición suficiente para considerarla una sociedad decente, puesto que puede humillar a sus miembros en tanto ciudadanos, aun cuando no viole unos derechos reconocidos (Margalit, 1997: 44).

Las relaciones intersubjetivas son fundamentales en el afirmación de la identidad individual. El centro de dichas relaciones es el amor, que configura el primer estadio de reconocimiento recíproco en el que los seres humanos se ven unidos a otros al verse como entes necesitados, dependientes de otros. Las relaciones afectivas son las más paradigmáticas en el proceso de reconocimiento porque existe un precario equilibrio entre autonomía y conexión (el ejemplo más claro están en la relación madre-hijo). Por eso, en la novela, Sheila, ante la soledad y falta de conexión emocional se sume en la locura.

A este respecto vienen también a colación las tesis feministas sobre la conexión humana en contraposición con las tesis liberales masculinas de la separación. Las críticas feministas estuvieron dirigi-

12 Véase por ejemplo el diálogo entre Jürgen Habermas y Axel Honneth (teoría del discurso *versus* teoría del reconocimiento). Honneth se centra en la noción de reconocimiento recíproco, porque va más allá del hecho de que uno se ponga en el lugar de un segundo interlocutor, y plantea que antes de ponerse en el lugar del otro, antes del «conocimiento» del (y comunicación con) otro, se requiere previamente un «reconocimiento» basado en el amor. Honneth, 2007.

das principalmente a la concepción del sujeto liberal, supuestamente universal, autónomo, autosuficiente y decididamente androcéntrico. Hasta los años setenta u ochenta del siglo pasado los ataques se basaron en una confrontación diferencial entre el sujeto masculino y el *otro* sujeto, el femenino. A nivel de la teoría antropológica, psicoanalítica, o social se enfrentaron dos tesis y, por tanto, dos tipos de sujetos.

La primera tesis es la tesis masculina de la separación en la que el sujeto es un individuo físicamente separado de otros seres humanos y lo que le aparta de otros es epistemológica y moralmente anterior a lo que le une a otros. Por eso el sujeto es un ser autónomo, autosuficiente, independiente, libre en su elección de vida, de manera general egoístamente motivado, pero también racional y prudente y, por eso, tendente al libre contrato. En esta línea, la dignidad humana se reconduce a la capacidad de respetar los derechos de los independientes e iguales, e inferir cognitivamente de esos derechos una reglas para una vida segura. Los valores clave de la dignidad en esta concepción son la libertad como no interferencia y la seguridad.

La segunda es la tesis femenina de la conexión según la cual las mujeres están naturalmente unidas a otros en al menos varios momentos de su vida, como el acto sexual, el embarazo y la lactancia; y existencial y culturalmente unidas a otros a través de su vida moral y sus prácticas. Por eso "mientras que los hombres temen la aniquilación por parte del otro (y en consecuencia tienen la dificultad para alcanzar la intimidad), las mujeres temen la separación del otro (y en consecuencia tienen la dificultad para alcanzar la independencia)" (West, 2000: 96). Desde esta visión, la dignidad depende de respuestas afectivas, relacionales, contextuales y soportadoras de las necesidades de los otros. Los seres humanos no son autónomos en el sentido liberal, esto es, autosuficientes sino que alcanzan su autonomía gracias a la relación con otros seres humanos.

Actualmente, el movimiento feminista ha reconsiderado esta postura al entender que la confrontación radical de un supuesto modelo femenino de sujeto y otro opuesto masculino peca de binarismo esencialista entre hombres y mujeres dejando fuera, como bien advertía Judith Butler, otras posibilidades[13]. Igualmente, tiende al reduccionismo de la vida a la confrontación del valor autonomía como autosuficiencia versus el valor del cuidado en base al amor maternal, además de simplificar las relaciones sociales basándolas únicamente en el libre contrato o, por el contrario, en unas relaciones determinadas en base a la reproducción. La tesis de la separación es falsa para los hombres porque estos experimentan igualmente la

13 Ya autoras como Monique Wittig se distanciaron de sus coetáneas reivindicando la supresión de las categorías hombre-mujer: Wittig, 2010: 29 y ss. El libro de Butler es fundamental para subvertir desde los márgenes la subjetividad: Butler, 2007. En este sentido es interesante advertir también que mucho antes Nietzsche, Heidegger, Sartre entre otros cuestionaron ya el sujeto moderno, y posteriormente Foucault, Derrida y Deleuze acaban trazando los caminos hacía la creación de una nueva subjetividad. Foucault al sostener que el sexo no es algo natural sino construido. Deleuze enfatizando que la subjetividad es múltiple y fragmentada. Derrida al apostar por la diferencia, por un sujeto que se rescribe indefinidamente. Este línea fue tomada por el tipo de feminismo que cito. Un resumen de estas aportaciones está en García López, 2016: 103 y ss.

conexión y pueden sustentar la vida, proteger, atender, amar y afirmar la vida. La tesis de la conexión no es cierta respecto a las mujeres porque no todas quedan embarazadas o son penetradas sexuales (West, 2000: 175-176).

Lo que puede enseñar esta histórica confrontación es que la experiencia humana (de todos los seres humanos) es siempre contradictoria. El ser humano valora la autonomía y teme la alienación, y al mismo tiempo valora la conexión, pero teme la aniquilación. Como afirma Ducan Kennedy, el otro es a la vez necesario para nuestra existencia y una amenaza para la misma (1979: 209).

Esta naturaleza contradictoria se reconoce en los personajes de la novela. Los seres humanos no son autosuficientes y, aunque tienen autonomía, esta es relacional y afectiva. Los individuos acaban tomando consciencia de sí mismos y conformando su identidad de manera compleja gracias a su inteligencia racional y reflexiva y también por su relación emocional con los demás. El libro muestra esa complejidad explorando cómo estas dos facetas de la naturaleza humana están intrínsecamente conectadas.

2.2. Segunda crítica: el ser humano no es superior al resto de seres vivos

En *Onda cerebral* el aumento de inteligencia comporta también un aumento de las emociones y sentimientos. La conexión tan estrecha entre inteligencia y emoción se hace patente y cuestiona que el ser humano puede definirse meramente como ser racional y que la razón esté por encima de nuestro cuerpo sentiente. Esto conduce a reflexionar sobre nuestra naturaleza y sobre aquello que nos iguala al resto de animales. Helga, una colega de Corinth, se da cuenta de que está enamorada de él y afirma: "Todos nuestros sentimientos se han intensificado. No me había dado cuenta antes que la vida emocional del hombre está ligada al cerebro, cómo el hombre siente como lo hace cualquier otro animal" (Anderson, 2018, 71, traducción propia). Grunewald, otro compañero de Corinth, se pregunta respecto a una rata: "¿Para que le sirve la inteligencia? Solo le hace darse cuenta del horror sobre su propia posición. ¿De que nos sirve a nosotros, de hecho?" (Anderson, 2018: 86, traducción propia).

Desde antiguo, aunque sobre todo desde la Modernidad, se ha insistido en señalar que las diferencias entre los seres humanos y los animales están en áreas como la cognición, la capacidad de razonamiento, el lenguaje, la cultura y la complejidad de las interacciones sociales. Los humanos parecen tener una capacidad única para el pensamiento abstracto, el razonamiento simbólico y la comunicación verbal compleja. Además, son capaces de crear y transmitir conocimiento a través de la cultura, desarrollar tecnología avanzada y tener un sentido moral y ético más complejo. No obstante, estas diferencias no significan que los animales no tengan capacidades cognitivas considerables o formas de comunicación complejas, aunque ciertamente la gama y la profundidad de estas habilidades suelen ser distintas en los seres humanos.

En el debate sobre nuestras similitudes y diferencias con el resto de los animales se han diferenciado, básicamente y sin querer extenderme demasiado en este

asunto[14], dos posturas. La primera es la llamada postura "animalista" o "antiespecista", según la cual habría que deponer la arrogancia de considerarse superiores a los demás animales puesto que éstos tienen una importante proximidad genética con nosotros, poseen ciertas capacidades de racionamiento práctico para adaptarse al medio y construir instrumentos o herramientas, pueden crear lazos sociales y vínculos emocionales que van más allá del instinto, tienen capacidad para el lenguaje y la comunicación, para crear reglas y premiar y castigar a quienes las infringen, y sobre todo poseen sensibilidad ante el sufrimiento de otros e inteligencia emocional. El resultado jurídico de esta postura es la defensa de los derechos de los animales o, al menos, de la relevancia moral de sus intereses, bajo la idea de que todos los animales somos iguales ante el sufrir. Aunque hay referencias más antiguas, dentro de esta postura están las paradigmáticas tesis de Peter Singer (versión española 1998), en cuya base está el empirismo ético como el de David Hume o Jeremy Bentham, quienes a su vez reducían el concepto de persona al de "animal capaz de sentir, de sufrir". Igualmente se encuentra Jacques Derrida (versión española 2008) para quien el sufrimiento compartido entre los seres vivos despierta nuestra compasión y el Derecho y la política deben reaccionar ante ese sentimiento. En la misma línea Carol Adams (2016), ecofeminista, es crítica con la clásica visión de los animales como seres inferiores y pone en el acento en la compasión. Otros autores como Tom Regan y Christine Korsgaard (versión 1986) buscan otorgar relevancia a los animales por ser fines en sí mismos y no solo medios. Sue Donaldson y Will Kymlicka (2011) que hacen una síntesis entre la capacidad de sufrir y el reconocimiento de sujetos de una vida de los animales, llegando a aceptar no solo un derecho de protección sino también un derecho de participación. Martha Nussbaum (2023) dota a los animales no humanos de capacidades que no son tan simples. En suma, los animalistas buscan la aceptación en calidad de persona de los animales no humanos (como mínimo la de los grandes simios, aunque con posibilidad de su extensión a otros).

La otra postura es crítica con la anterior. Ésta considera que los seres humanos se distinguen de los animales por su racionalidad entendida como inteligencia y libertad de decidir en contextos determinados (aunque en ocasiones la capacidad de ejercitar esa libertad esté mermada o anulada). Los animales pueden mostrar cierta racionalidad o inteligencia práctica, pero no son capaces de desarrollar facultades cognitivas superiores de abstracción y universalización, como tampoco pueden tener un sentido moral y ético como el de los seres humanos. Por eso, entienden que la cuestión sobre los derechos de los animales no es una cuestión moral, sino antropológica o incluso metafísica: "la cuestión no es si los animales tienen o deben tener derechos, sino si son capaces de tenerlos" (Prieto López, 2017: 83; mas recientemente De Andrés, López Martín, Olivero y Palmqvist, 2020: 19-33).

Esta perspectiva crítica con el animalismo entiende que el problema es muy complejo y que no solamente la biología o la antropología pueden dar una respuesta a ello, sino que es transcendental atender

14 Sobre los derechos de los animales véase recientemente: Azpitarte, 2023. También un resumen de las posturas a favor está en Lalatta Costerbosa, 2024: 75-83.

a la cuestión filosófica que se remonta hasta la Antigüedad. Existen multitud de textos clásicos que trabajan el concepto de persona para explicar que, gracias a su superioridad racional, los seres humanos son capaces de superar la precariedad orgánica que los define. De ello hablaba Platón en el *Mito de Prometeo* en el que afirmaba que los seres humanos carecen de la mayor parte de facultades orgánicas del resto de los animales y por eso Prometeo les entregó el saber técnico y el fuego para compensar esta falta. Lo mismo afirmaba Aristóteles en su obra *Las partes de los animales* explicando que la conjunción de inteligencia y mano pone remedio a la pobreza física de la especie humana. Igual afirmación hicieron filósofos posteriores como Cicerón, Tomas de Aquino o Inmanuel Kant. El hombre carece de un mundo circundante, del círculo estrecho de los animales en el que las operaciones están instintivamente prefijadas (Prieto López, 2017: 199). Los seres humanos pueden tener impulsos pero son abiertos a todo el mundo y no concentrados en un entorno, y además pueden ser dominables, orientables y formables, y con el control de los mismos, con disciplina, es como se puede llegar a conformar intereses duraderos a largo plazo (Prieto López, 2017: 227). En la misma línea, Heidegger afirmaba que el animal es un ser que conoce, pero conoce *menos* que el ser humano; el animal conoce su entorno circundante, el ser humano conoce el mundo (Prieto López, 2017: 238).

El debate es arduo y quizás el problema es que cuando se discute sobre los animales y sus derechos se sigue haciendo desde la perspectiva individualista que no comprende que los derechos no tienen por qué ser una herramienta solo *de* los humanos. La inteligencia, la cualidad moral o la autoconciencia de los animales seguramente tenga diferencias con las de los seres humanos, lo cual no quiere decir que no se pueda hablar de inteligencia, de moralidad y autoconciencia en diferentes niveles, como también ocurre entre los seres humanos. No obstante, la justificación para extender los derechos y proteger la dignidad del resto de animales no debe radicar en que los animales sean *como* los seres humanos, sino en que son dignos de ser y ser protegidos por lo que *son*.

Para Virtudes Azpitarte, la cuestión animalista plantea al final un debate importante sobre el tipo de sociedad que se busca. Una sociedad justa no puede tolerar que se oprima y se tomen como medios y no como fines a los otros seres (a los menos diferentes o a las más diferentes). Incluso, afirma Azpitarte, la cuestión animalista da el salto a la revisión profunda de nuestro modo de vida, que es lo que promueven las tesis ecologistas: entender que somos parte de la naturaleza y la compartimos con otros seres vivos (Azpitarte, 2023). Esta es la moraleja final de la novela *Onda cerebral*, pues se realiza una reflexión en relación a lo que los animales harían en caso de que aumentaran su inteligencia. La pregunta es si consentirían ser tratados de la forma en que los tratamos ahora, a lo cual cabría responder que seguramente no (Anderson, 2018, por ejemplo: 30, 53, 124-125). Es más, lo que intentarían algunos (quizás los más aventajados como los grandes simios) es, como mínimo, la cooperación igualitaria, como sucede en la granja de Brock. Así afirma el personaje: "Está bien. Vale (dice Brock). Seremos animales salvajes todos juntos. ¿De acuerdo? Entrad en casa y comed algo" (Anderson, 2018: 85, traducción propia).

Como opina Javier de Lucas en el prólogo al libro de Azpitarte: "Lo que nos hace humanos no es un tipo de inteligencia, ni la capacidad de memoria, ni la conciencia de sufrimiento, ni la risa o el lenguaje; es saber el valor de la vida de otros, de cualquier otro, y actuar en conformidad con ello" (De Lucas, 2023: 13-14). Los derechos de los animales no tienen por qué ser los mismos que los de los seres humanos, pero sí unos que protejan su dignidad. Quizás la cuestión de su reconocimiento radica en que el ser humano es el que se debe hacer más humano, tan humano como Roy, el replicante de la película de *Blade Runner* que, por empatía y amor a la propia vida, decide ayudar a su oponente Deckard impidiendo que caiga al vacío.

Cuando los científicos de *Onda cerebral* llegan a otros planetas y encuentran diversas formas de vida inteligente, parecidas a lo que los humanos habían sido hasta entonces, se produce una transformación fundamental en la manera de comprender las relaciones entre los diferentes seres vivos. Lewis, compañero de Corinth, declara: "Creo que hay un propósito en la nueva civilización humana. Por primera vez, el hombre camina hacia alguna parte; pienso que el nuevo propósito será, durante miles y millones de años, englobar toda forma de vida en el universo conocido. Pienso que finalmente conseguiremos una armonía como nunca nadie pudo imaginar. No habrá dioses ni profetas. Pero, algunos de nosotros, podremos conceder las mismas oportunidades de vida a todos. Veremos que los demonios no tendrán la presencia y la fuerza que tenían, y que habrá esperanza y oportunidad para todos los millones de criaturas sintientes que viven y aman y luchan y ríen y lloran y mueren, como el hombre una vez lo hizo" (Anderson, 2018: 199, traducción propia).

Al hilo de esta idea, habría que darle más valor a otros aspectos de la naturaleza humana que se derivan de relación con los otros. Lo primero es que somos también cuerpo. No se trata de volver al pesimismo del cuerpo como limitación, aunque sí de aceptar nuestra fragilidad, una características compartida con el resto de seres vivos de este planeta. Es preceptivo tener en cuenta las críticas a la tesis liberal del ser humano incorpóreo definido fundamentalmente por su razón y agencia moral, y ello porque nuestra percepción y relación con el mundo se realiza a través de nuestro cuerpo y nuestros razonamientos y experiencias tienen base en nuestra percepción corporal. Nuestra percepción del mundo es corporal y no nos podemos separar del mundo que habitamos y de las personas y seres vivos que están en ese mundo (Merleau-Ponty, 2010: 20 y ss., 119 y ss.). A través del cuerpo el ser humano comprende el sentido de su experiencia como persona individual a la vez que como parte del mundo y de un grupo. Las interrelaciones con otros son corporales (Gilson, 2013: 131; Grear, 2010: 117 y ss.). Hay una asociación muy estrecha entre razón y cuerpo, y el pensamiento liberal las había desasociado evitando realizar las necesarias reflexiones éticas, políticas y normativas sobre el cuerpo (vulnerabilidad corporal, cuidado y dependencia, mercantilización del cuerpo, etc.).

Debido a nuestra corporalidad, somos todos seres vulnerables, frágiles y en riesgo de sufrir daño y con necesidad de protección. La fragilidad que, como bien recuerda Martha Nussbaum ya mencionaban los griegos, no nos hace seres in-

dignos, ni incapaces de discernir o elegir proyectos de vida, ni víctimas o dependientes. La fragilidad es la fuente para interrogarse moralmente sobre uno mismo (Nussbaum, 1995).

Por tanto, la vulnerabilidad no solamente tiene una dimensión negativa y conlleva una dimensión positiva al acentuar la importancia y reconocimiento del yo en conexión con los otros. El concepto de vulnerabilidad lleva aparejada la idea de comunión con los demás y, por tanto, permite entender al ser humano como un ser interrelacionado con otros con los que comparte la misma condición y con los que forja lazos de afecto.

En esta línea Martha Albertson Fineman entiende que la vulnerabilidad tiene consecuencias éticas en cuanto conlleva una apertura hacia el otro. Conjuntamente, atañe a cuestiones jurídicas de Justicia social, al generar responsabilidad hacia las situaciones vulnerables. Considera la sociedad y el mundo en general como un todo vulnerable, y la vulnerabilidad es una característica compartida, aunque ciertamente asimétrica. Por ello existe una responsabilidad directa de las instituciones político-jurídicas y sociales ante esa asimetría[15]. La vulnerabilidad es debilidad pero, ante todo, es derecho de protección y seguridad, un derecho que siempre ha de convivir con la libertad (Fineman, 2011: 267). Tener en cuenta la vulnerabilidad a la hora de hacer un análisis de la Justicia social puede ayudar a prestar una atención adecuada a las desigualdades y desventajas sociales sufridas por ciertos colectivos en razón a la raza, género u orientación sexual, y también, por personas en situación de pobreza o discapacidad física o mental, e incluso puede permitir discutir y extender la condición de persona a otros seres vivos.

3. A modo de recapitulación. La constante construcción y flexibilización del sujeto jurídico de derechos: el respeto al diferente y la extensión de los derechos

La novela *Onda cerebral* nos cuenta una historia en forma de especulación ficticia sobre lo que podría suceder en caso de aumento de la inteligencia de todos los seres vivos. En el relato se van esbozando interrogantes éticos, filosóficos, políticos, económicos y jurídicos de diversa índole entre los que se han destacado dos significativos.

El primero tiene que ver con la sobrevaloración de la inteligencia racional y la ilusoria autosuficiencia moral humanas y, por consiguiente, la defensa del papel tan relevante de las emociones y la forzosa autonomía moral relacional que nos define. En la novela los personajes tienen que superar importantes controversias emocionales para reconocerse a sí mismos, así como para buscar su propósito vital. De este modo, la historia conecta con las críticas comunitarias y feministas a la noción de sujeto moderno, que reivindican la noción de sujeto situado y definido en función de su contexto y en relación a aquellos seres que le rodean. Se muestra la naturaleza humana contradictoria en la que conviven la razón y las emociones. Los individuos acaban tomando consciencia de sí mismos y conformando su

15 Extrapolo también esta idea asociada a la globalización y al desarrollo. Véase Stalsett, 2005: 45-46.

identidad de manera compleja gracias a su inteligencia racional y reflexiva y, asimismo, por su relación con los demás.

El segundo tema abordado es nuestra corporalidad y, por tanto, nuestra fragilidad o vulnerabilidad, que es el lazo de unión de todos los seres humanos y también lo que nos conecta con el resto de seres vivos. Se trata de recuperar la importancia del cuerpo en la definición de lo humano, porque al final los seres humanos somos materia como lo son el resto de seres vivos. Esto es lo que permite generar lazos de empatía y compasión con el resto de animales que sienten como nosotros, y lo que puede ayudar a replantear el sentido de la Justicia social y nuestra manera de vida en comunión con la naturaleza. La novela conecta en esta punto con las críticas del movimiento animalista, con el ecologismo y la reivindicación del Buen vivir, que en la novela de *Onda cerebral*, se extrapola y se comprende aún mejor cuando se encuentran diversas formas de vida inteligente en otros planetas.

De esta manera, se replantea el concepto de ser humano y de persona. Por una parte, solo la relación con otros nos permite tomar conciencia reflexiva sobre lo que somos. Por otra, lo que nos hace humanos es seguramente otra cosa mucho más allá de la mera inteligencia racional y que concierne con la empatía de sentirnos frágiles o vulnerables, seres sintientes, como todos los seres vivos.

Estas críticas no provocan la ruptura con el concepto moderno de sujeto, aunque sí tratan de corregirlo para recuperar el equilibrio perdido en ese afán optimista del Humanismo tan transcendental (pero quizás demasiado impetuoso) que perseguía superar nuestras limitaciones y nuestros mayores miedos (miedo a la enfermedad y a la muerte, entre otros muchos).

Al final, como afirma De Lucas, el concepto de ser humano es algo que se va construyendo (De Lucas, 2003). En ese nueva aspiración constructiva creo que es esencial mostrarse empático y compasivo hacia el resto de seres vivos con los que compartimos este mundo. El sujeto de derechos debe conformarse de manera fuerte pero no rígida, sino flexible y potencialmente abierta para incluir a los otros a los que se cree diferentes (aunque en realidad no lo sean tanto o nada en absoluto).

La discusión en torno al concepto de persona y sujeto de derechos es clave y se torna aún más compleja en la actualidad con los avances de las nuevas tecnologías y la creación de seres sintéticos, que no solamente es que puedan estar pareciéndose cada vez más al ser humano sino que en cualquier caso pueden llegar a ser parte este mundo. Por esta razón, no se puede cerrar definitivamente la cuestión y se debe tomar consciencia de la constante construcción de la noción de persona y sujeto de derechos en un sentido que siempre sea lo más inclusivo y respetuoso con el diferente. Al fin y al cabo, todos somos diferentes entre sí y seguramente la meta sea fomentar un igual derecho a la diferencia de todos.

4. Bibliografía citada

Adams, Carol J. (2016). "The war on Compassion". En *The Carol J. Ademas Reader. Writings and Conversations 1995-2015* (pp. 3-22). Bloomsbury.

Anderson, Poul (2018), *Brave Wave* (1954). Open Road.

Azpitarte, Virtudes (2023). *Animales: sujetos emergentes en derecho y política. Tirant lo Blanch.*

Barceló, Miquel (2015). La ciencia ficción. UOC.

Butler, Judith (2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.* Trad. M. A. Muñoz Molina. Paidós.

De Andrés, Victoria, López Martin, Alejandro, Olivero, Jesús, Paul Palmqvist (2020). "La ciencia y el animalismo". *Encuentros en la biología*, vol. XIII, núm. 171, pp. 19-33.

De Lucas Martín, Javier (2003). *El Derecho, guardián de las diferencias*. Tirant lo Blanch.

——. (2023). "Prólogo". En Azpitarte, Virtudes. *Animales: sujetos emergentes en derecho y política" (pp. 9-15). Tirant lo Blanch.*

Derrida, Jacques (2008). *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Trad. C. de Peretti y C. Rodríguez Marciel. Trotta.

Descartes (2011). *Meditaciones metafísicas* (1641). Trad. G. Graiño Ferrer. Alianza Editorial.

Diéguez, Antonio (2017). *Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano*. Herder.

Donaldson, Sue, Kymlicka, Will (2011). *Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights*. Oxford University Press.

Einsenstein, Sergei (1974). *El sentido del cine*. Trad. I. Carballo. Siglo XXI.

——. (1970). *Reflexiones de un cineasta*. Prol., ed., y notas de R. Gubern. Lumen.

Fineman, Martha A. (2011). "The Vulnerable Subject and The Response of The State". *Emory Law Journal, vol. 60, n. 2, pp. 251-275.*

García Figueroa, Alfonso (2019). "Las virtudes de la ciencia ficción". Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 40, pp. 265-291.

García López, Daniel (2016). Rara Avis. Una teoría queer impolítica. Melusina.

Gilson, Erinn (2013). *The Ethics of Vulnerability: A Feminist Analysis of Social Life an Practice*. Routledge.

Grear, Anna (2010). *Redirecting Human Rights: Facing the challenge of Corporate Legal Humanity*. Palgrave Macmillan.

Heller, Agnes (1994, 2ª ed.). *El hombre del Renacimiento. Trad. J. F. Yvars y A. Prometeo, Ediciones Península.*

Holliger, Verónica (2009). *Posthumanism and Cyborg Theory*. Routlege.

Honneth, Axel (1997). *La lucha por el reconocimiento.* Trad. M. Ballestero. Crítica.

——. (2007). *Reification: A New Look at an Old Idea*. Oxford University Press.

Kennedy, Ducan (1979). "The Structure of Blackstone´s Commentaries". *Buffalo Law Review*, n. 28, pp. 209-382.

Keynes, Daniel (2021). *Flores para Algernon* (1959, 1966). Trad. D. Santos. Alamut.

Korsgaard, Christine M. (2018). *Fellow Creatures. Our Obligations to the Other Animals*, Oxford University Press.

Kracauer Siegfried (1996, 2ª ed.). *Teoría del cine. La redención de la realidad física.* Trad. J. Hornero, Paidós.

Krueger, Oliver (2005). "Gnosis and Cyberspace? Body, Mind and Progress in

Posthumanism". *Journal of Evolution and Technology*, vol. 14, núm. 2, pp. 77-89.

Lalatta Costerbosa, Marina (2024). "Derechos de los animales. Un desafío para el Derecho , la moral y la política". *Derechos y Libertades*, núm. 50, pp. 75-83.

Llinás Begon, Joan Lluís (2024). "Sustancia, sujeto y ser humano: un conflicto cartesiano". *Anuario filosófico, núm. 57/1, pp. 95-113.*

Llorens Serrano, Jaume (2016). La transcendencia del homo sapiens. El icono del posthumano en la ciencia ficción. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.

López Nieto, Marcos (2020). Fundamentos para un derecho a la inteligencia artificial: ¿queremos seguir siendo humanos?. Tirant lo Blanch.

Merleau- Ponty, Maurice (2010). Lo visible y lo invisible (1964). Trad. E. Cosigli y B. Capdevielle. Ed. Nueva visión.

Milburn, Colin (2014). "Posthumanism". En Lantham, Rob, *The Oxford Handbook of Science Fiction*. Oxford University Press.

Moreno, Fernando Ángel (2010). *Teoría de la literatura de ciencia ficción. Poética y retórica de los prospectivo, Portal Ediciones.*

Nussbaum, Martha C. (1995). *La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y filosofía griega*. Trad. A. Ballesteros. La Balsa de Medusa.

——. (2023). *Justice for Animals. Our Colective Responsibility*. Simon & Schuster.

Peces Barba Martínez, Gregorio (1998). "Tránsito a la Modernidad y derechos fundamentales" (pp. 13-264). En Peces Barba Martínez, Gregorio y Fernández García, Eusebio (dirs.), *Historia de los derechos fundamentales, t. I. Tránsito a la Modernidad. Siglos XVI y XVII. Instituto de derechos humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson.*

——. (2003). La dignidad humana de la persona desde la Filosofía del Derecho, Dykinson.

Pelé, Antonio (2012). El discurso de la dignita hominis en el humanismo del Renacimiento. Cuadernos del Instituto Bartolomé de las Casas, Dykinson.

Prieto López, Leopoldo José (2017). En torno al animal racional. Ensayos de antropología biológica. Universidad Francisco de Vitoria.

Regan, Tom (1986). "A case for animal rights (1983)" (pp. 179-189). En Fox, Michael W. & Mickley, Linda D. (Eds.), *Advances in animal welfare science 1986/87*. The Humane Society of the United State.

Sánchez Rubio, Daniel (2010). "La ciencia ficción y derechos humanos. Una aproximación desde la complejidad, las tramas sociales y las condicionales contrafácticos". *Revista Praxis, núm. 65-64, pp. 51-72.*

Sheler, Max (2017). *El puesto del hombre en el cosmos* (1928). Trad. e introd. M. Oliva. Escolar y Mayo.

Singer, Peter y Cavaliere, Paola (eds.) (1998). *El proyecto de gran simio: la igualdad más allá de la humanidad*. Trad. C. Martín. Trotta.

Stalsett, Sturla J. (2005). "Vulnerabilidad, dignidad y justicia: valores éticos fundamentales en un mundo globalizado" (pp. 45-46). En Kliksberg, Bernardo (ed.), *La agenda ética pendiente de América Lati-*

na. Fondo de Cultura Económica de Argentina.

West, Robin (2000). *Género y Teoría del Derecho. Trad. e introd. I. C. Jaramillo. Siglo del hombre.*

Wittig, Moniq (2010). *El pensamiento heterosexual*. Trad. J. Saéz y P. Vidarte. Egales.

El discurso de odio online y su persecución por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Online hate speech and its prosecution by the European Court of Human Rights

Francisco Placín Vergillo
Universidad de Sevilla, Sevilla, España
franplacin@gmail.com

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: discurso de odio, incitación al odio, online, TEDH.
Keywords: hate speech, incitement to hatred, online, ECtHR.

Resumen: La incitación al odio online puede producirse y distribuirse fácilmente sin esfuerzo e incluso de forma anónima, con posibilidad de llegar a una audiencia global y diversa en tiempo real. Por no hablar de que los contenidos online permanecen en la red y pueden resurgir y ganar popularidad con el paso del tiempo. Ello ha provocado que algunos Estados responsabilicen a las empresas que gestionan el flujo de informaciones y opiniones desde Internet, lo que suscita preocupación por la limitación de la libertad de expresión frente a la protección de los derechos de terceros. Por ello, la comprensión y el análisis que esté haciendo sobre esta cuestión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante el TEDH) es fundamental para dar forma a una respuesta efectiva, armonizada y viable para todos los Estados Miembros del Consejo de Europa.

Abstract: Online hate speech can easily be produced and distributed effortlessly and even anonymously, with the potential to reach a global and diverse audience in real time. Not to mention that online content remains online and can resurface and gain popularity over time. This has led some states to hold companies responsible for managing the flow of information and opinions from the internet, raising concerns about limiting freedom of expression versus protecting the rights of others. Therefore, the ongoing understanding and analysis of this issue by the European Court of Human Rights (hereinafter the

ECtHR) is crucial in shaping an effective, harmonised and workable response for all Council of Europe Member States.

1. Introducción

Los discursos de odio y la consecuente generación de delitos de odio, no son fenómenos recientes, siendo un ejemplo de ello que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) de 1966, ya recogía en su artículo 20 la prohibición legal de cualquier tipo de apología al odio nacional, racial o religioso que constituyese incitación a la discriminación, hostilidad o violencia.

A diferencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la CADH), donde se enunciaron estas directrices previamente recogidas en el PIDPC, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante el CEDH) concedió un especial valor al derecho a la libertad de expresión. Y mientras que la CADH recogió los límites a la libertad de expresión, el texto europeo limitó de otra forma la misma (art. 10 CEDH), que protegiendo la libertad de expresión y en especial la de los medios de comunicación, dejó sin recoger en el CEDH las pautas marcadas por las convenciones expuestas (Martín Herrera, 2014: 8-9).

La situación actual europea pone de manifiesto el conflicto latente entre el auge de los discursos de odio y la libertad de expresión, por lo que el estudio de sus límites, ante una Europa en crisis (véanse los procedimientos sancionadores a Hungría y Polonia en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea), partiendo de los estándares fijados por el propio TEDH resulta cuanto menos pertinente y más en la sociedad tecnológica en la que vivimos, donde los discursos de odio desde Internet adquieren un alcance y una difusión nunca antes vistos.

En Europa parecen coexistir dos posturas al respecto: de un lado la que defiende que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, siendo un bien necesario para el debate político y la representación de la sociedad civil y que por lo tanto los Estados no deben penalizar los discursos de odio puesto que coarta la libertad de expresión y la de prensa. De otro lado, la que defiende que la libertad de expresión debe tener límites, sobre todo, cuando se atenta contra la integridad de una comunidad/minoría o la dignidad de un individuo. Más aún, en la situación actual en la que nos encontramos, limitar la libertad de expresión se convierte pasa a ser una cuestión de seguridad nacional, con el fin de garantizar la estabilidad social (García Santos, 2017: 28-29).

Es un hecho que gracias a Internet y, en particular, a las redes sociales, el discurso de odio está viviendo un crecimiento exponencial nunca antes conocido. Sin embargo, el único instrumento internacional que contempla las expresiones de odio en Internet es el Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, de 28 de enero de 2003 (en adelante PACC).

El Protocolo ha sido utilizado, solo en una ocasión hasta el presente, por el TEDH

como Derecho europeo e internacional relevante (Rollnert Liern, 2020: 9). Pese a ello, el TEDH se ha pronunciado respecto a diversos casos en los que se han producido discursos de odio a través de Internet.

Por otro lado, la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (en adelante la FRA) ha denunciado que los organismos internacionales de supervisión revelaron lagunas jurídicas en los códigos penales de varios Estados miembros en lo que respecta a la incitación del odio o la tipificación penal de la motivación racial o xenófoba como circunstancia agravante (FRA, 2021). Por ello, el TEDH y los altos tribunales nacionales han establecido límites al uso de la libertad de expresión para combatir el discurso de odio y la incitación al odio. Asimismo, destacó que los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos vienen expresando su preocupación por el crecimiento del discurso de odio en Internet.

Es una problemática tan actual que el propio Consejo de Europa ha presentado una serie de directrices dirigidas a sus cuarenta y seis Estados miembros para prevenir y combatir el discurso de odio dentro y fuera de Internet a través de su Recomendación CM/Rec(2022)16 adoptada el 20 de mayo de 2022.

2. Metodología e hipótesis

La metodología seguida ha sido un positivismo sociológico, en virtud del cual he analizado los distintos textos normativos y la jurisprudencia relevante en su contexto histórico y desde una aproximación multidisciplinar que combina, como herramientas metodológicas, tanto técnicas inductivas como deductivas, para alcanzar unas conclusiones defendibles tras un desarrollo empírico-inductivo y lógico-deductivo de la hipótesis de partida que asumimos: si el CEDH es un instrumento vivo que debe de ser aplicado a la luz de las condiciones de vida actuales, Internet necesariamente influye en el alcance del contenido y límites del art. 10 CEDH y, por ende, en el margen de control que el TEDH aplica sobre el mismo.

En primer lugar, se ha aplicado una técnica metodológica empírico-inductiva, de una serie de casos se obtienen unos principios generales; mientras que la segunda parte aplica una herramienta metodológica lógico-deductiva, según la cual se validan esos principios generales obtenidos a través de su puesta en práctica con los casos referidos al discurso de odio en Internet. Otras herramientas metodológicas empleadas ha sido el análisis de datos cuantitativos en el estudio de casos y además diacrónicos, con una dimensión cronológica descriptiva extraídos de determinadas fuentes.

En esta investigación no solo se han trabajado con fuentes primarias (textos normativos y sobre todo, jurisprudencia del TEDH), sino que además, se han analizado fuentes secundarias, en particular, las principales aportaciones doctrinales que he considerado relevantes para el objeto de estudio.

En una primera fase, de aproximación al discurso de odio, tuvieron especial relevancia documentos de diferentes instituciones como la FRA o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en adelante la ECRI) , así como las guías del TEDH sobre el art. 10 CEDH, el art. 8 CEDH y sobre *hate speech*. A lo que se sumaba toda la doctrina reciente sobre

discurso de odio y la relación entre el art. 8 y 10 CEDH.

Con ello, elaboré un marco teórico sobre la materia, finalizando así la primera etapa de esta investigación, para aplicarla luego al análisis de la jurisprudencia sobre discurso de odio y alcanzar así una serie de conclusiones.

La segunda fase, se centró en la búsqueda de jurisprudencia en la base de datos HUDOC con respecto al discurso de odio en Internet, siendo en este punto de gran ayuda las actuales guías del TEDH a las que acabo de referirme.

Esta segunda fase supuso además el análisis de todas y cada una de las sentencias que serían relevantes para la hipótesis planteada y así poder plasmarlas y exponerlas con intención de darle una respuesta a la misma.

Con ese marco teórico y jurisprudencial, alcancé una serie de conclusiones que fueron fruto de consideraciones, reflexiones y opiniones propias.

La bibliografía, por su parte, la expongo ordenada alfabéticamente en lo que concierne a las referencias doctrinales, y cronológicamente, de más reciente a menos, en lo que respecta a los textos normativos e institucionales, así como a la jurisprudencia.

3. El Sistema Europeo de Derechos Humanos y la libertad de expresión

3.1. El CEDH

La libertad de expresión está reconocida en el Sistema Europeo de Derechos Humanos en el art. 10 CEDH, presentando unos rasgos propios que la configuran por el lugar que esta ocupa en una sociedad democrática (García San José, 2000: 14).

En éste se garantizan derechos como el de difundir información, el de expresar ideas y opiniones o el de recibir información. Sin embargo, no todos estos derechos requieren una idéntica protección, siendo ésta más fuerte conforme al grado de función social que el derecho en cuestión cumpla en una sociedad democrática (García San José, 2000: 14-15).

Por ello, resulta primordial diferenciar entre libertad de expresión en la que se halla un interés público en lo que respecta a las informaciones, ideas, opiniones, etc. y en la que se da dicho interés. La primera tendrá una protección mayor que la segunda, encontrando su razón de ser a que no se pretende desmotivar a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés público por miedo a sanciones administrativas o penales (García San José, 2000: 16).

En este sentido, el TEDH ha señalado que el ejercicio de este derecho conlleva deberes y responsabilidades frente a terceros, cuyo alcance varía en función de diferentes factores como la situación personal (en razón de su cargo o posición una persona tiene unos deberes y responsabilidades específicos), de si, como he expresado anteriormente, hay un interés público en las informaciones o ideas expresadas, de la situación y de los medios técnicos que se empleen para ejercer este derecho, así como no usar este derecho para difamar (García San José, 2000: 18-20).

Por ello, este derecho ha de encontrar un equilibrio en su relación con el derecho al respeto a la vida privada y familiar, art.

8 CEDH, por lo que existen límites a la libertad de expresión para garantizar éste último derecho mencionado.

Los primeros límites los encontramos en el propio art. 10 CEDH, es decir, que la limitación esté prevista por ley, que responda a un objetivo legítimo, y que dicha limitación se considere necesaria en una sociedad democrática, conforme a las nociones de igualdad, pluralismo y tolerancia (García San José, 2022: 132).

Es con respecto a estos límites lo que ha sido objeto de la jurisprudencia del TEDH para establecer a partir de ellos una serie de principios generales para determinar si unas manifestaciones realizadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ha de ser restringidas para proteger el derecho al respeto a la vida privada y familiar, estableciendo así criterios a tener en cuenta como: la contribución a un debate de interés público, el grado de notoriedad de la persona afectada, el objeto de la noticia, la conducta previa del interesado, el contenido, la forma y las consecuencias de la publicación y, en su caso, las circunstancias en las que se tomaron las fotografías (Asunto Couder y Hachette Filipacchi Associés c. Francia, TEDH 2015, párrs. 90-93). Y además, el TEDH también examina el modo en que se obtuvo la información y su veracidad, así como la gravedad de la sanción impuesta (Asunto Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy c. Finlandia, TEDH 2017, párr. 165).

El TEDH ha llegado a establecer principios generales para analizar la proporcionalidad de las penas impuestas por los Estados frente al ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, señalando por ejemplo que una pena de prisión impuesta por un delito cometido en el marco de un debate político solo es compatible con la libertad de expresión en circunstancias excepcionales y que el elemento esencial que debe tomarse en consideración es si el discurso exhorta al uso de la violencia o constituye en sí un discurso de odio, así como la naturaleza y cuantía de las penas (Asunto Sürek y Özdemir c. Turquía, TEDH 1999, párr. 64.; y Asunto Soulas y otros c. Francia, TEDH 2008, párrs. 45-46). El TEDH llega a individualizar para cada caso concreto si la pena impuesta es proporcional, llegando incluso a detenerse en la capacidad del sujeto para hacer frente a la multa impuesta (García San José, 2022: 164-165).

Aunque cabe señalar que estos criterios no son exhaustivos pues pueden variar según el contexto, haciendo necesario que se apliquen otros (Asunto Medzlis Islamske Zajednice Brcko y otros c. Bosnia y Herzegovina, TEDH 2017, párr. 88).

Por lo tanto, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ha de mantener un justo equilibrio con los intereses de terceros en juego, como la protección de minorías a no ser objeto de proclamas racistas u el honor de éstos (García San José, 2000: 30).

Con ello, se comprueba que la relación entre el art. 8 y 10 CEDH fluctúa conforme a la ponderación pertinente en la búsqueda de un equilibrio entre ambos.

3.2. El discurso de odio

En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no existe una definición universal del discurso de odio, ya que el concepto sigue siendo muy discutido cuando tiene relación con la libertad de opinión y expresión, la no discrimina-

ción y la igualdad. Sin embargo, la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas define el discurso de odio como "cualquier tipo de comunicación, oral, escrita o de comportamiento que ataque o utilicen un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o a un grupo sobre la base de lo que son, es decir, sobre la base de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad" (United Nations, 2022).

Por su parte, el Consejo de Europa ha definido el discurso de odio como: "(…) todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluida la intolerancia que se exprese en forma de negacionismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración" (Recomendación núm. 20 del Comité de Ministros sobre el "Discurso de Odio", de 1997).

Para plantearse cuándo nos encontramos ante un discurso de odio, el TEDH comenzó a utilizar como criterio la incitación directa a la violencia por motivos raciales o religiosos, así como el contexto en el que se profiere la expresión (Esquivel Alonso, 2016). En sí, la "incitación al odio" no implica necesariamente la violencia u otros actos delictivos, sino que los atentados contra las personas cometidos al insultar, ridiculizar o calumniar a grupos específicos de la población pueden ser suficientes para que las autoridades favorezcan la lucha contra los discursos de odio frente a la libertad de expresión ejercida de manera irresponsable (Asunto Asociación Accept y otros c. Rumanía, TEDH 2021, párr. 119).

Además, la "incitación al odio" en lo que concierne al discurso de odio ha sido dividida por el TEDH en dos categorías (Asunto Lilliendahl c. Islandia, TEDH 2020, párrs. 33-34). La primera categoría es aquella que está formada por las formas más graves de "incitación al odio", que el TEDH ha considerado incluidas en el art. 17 CEDH (abuso de derecho) y que por tanto quedan excluidas por completo de la protección del art. 10 CEDH. Y la segunda categoría comprende formas "menos graves" de discurso de odio que el Tribunal no ha considerado que queden totalmente fuera de la protección del art. 10 CEDH, pero que es permisible que los Estados la restrinjan en ocasiones.

El TEDH ha ido estableciendo una serie de principios generales para detectar el discurso de odio. Así, establece como factores a tener en cuenta si las declaraciones se hicieron en un contexto político o social tenso; si las palabras pueden considerarse una llamada directa o indirecta a la violencia o suponen una justificación de la violencia, el odio o la intolerancia; y la forma en la que se hicieron las declaraciones y su capacidad para causar daño de manera directa o indirecta (Asunto Erkizia Almandoz c. España, TEDH 2021, párr. 40). De hecho, con respecto a la forma en la que se difunden no llega valorarse únicamente observando el medio usado y el alcance obtenido a través de su publicidad, sino también su lenguaje, si tiene carácter metafórico o literal (García San José, 2022: 75).

A estos criterios se ha añadido el de la intencionalidad de la conducta, el cual no es aplicado por el TEDH de manera expresa, pero sí implícitamente desde el

Asunto Savva Terentyev c. Rusia, TEDH 2018 (párrs. 71-74). Y ello, por influencia del PACC, el cual ha producido la generalización de la exigencia de intencionalidad en los instrumentos internacionales más recientes sobre discurso de odio. Lo que ocasiona que la intencionalidad sea un requisito subjetivo definitorio del discurso de odio (Rollnert Liern, 2020: 4-5).

Con ello, queda evidenciado el gran papel que desempeña el TEDH para determinar cuándo unas manifestaciones suponen un discurso de odio, con intención de darles una respuesta armonizada a nivel regional, pues este discurso, en muchas ocasiones adquiere un carácter transfronterizo. Y por ello, el propio TEDH se va nutriendo del desarrollo y evolución de instrumentos internacionales del Consejo de Europa, para ponerlo en relación con el CEDH y dar una respuesta a las problemáticas actuales, convirtiéndolo en un instrumento vivo a través de su interpretación.

4. Internet como factor primordial

4.1. Libertad de expresión en Internet

El TEDH se ha preocupado en los últimos tiempos por la relación entre el ejercicio de la libertad de expresión y las nuevas tecnologías. En sus propias palabras: "la posibilidad de que las personas se expresen en Internet constituye un instrumento sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión". Y añade que "teniendo en cuenta su accesibilidad y su capacidad para almacenar y comunicar grandes cantidades de información, Internet juega un papel fundamental a la hora de mejorar el acceso del gran público a las noticias y en facilitar la difusión de información en general" (Asunto Delfi AS c. Estonia, TEDH 2013, párrs. 110 y 133).

En este sentido, constata que Internet constituye un instrumento sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión y añade que el material claramente ilegal, incluido el material difamatorio, odioso o que incite a la violencia, puede ser difundido en todo el mundo en segundos como nunca antes y a veces puede permanecer en línea durante mucho tiempo. Y en lo que respecta al alcance del art. 10 CEDH en Internet, el TEDH ha destacado que el derecho a la libertad de expresión incluye el mantenimiento de archivos de Internet, la publicación de fotografías en un sitio online de forma gratuita o previo pago, y el acceso a determinados sitios web que permiten compartir información (Presno Linera, 2020: 68-69).

Por ello, a partir de que Internet se convirtiera en uno de los protagonistas en el ejercicio de este derecho, además de los principios generales anteriormente expuestos, el TEDH ha asentado dos consideraciones específicas a tener en cuenta cuando el discurso de odio se realiza a través de Internet.

En primer lugar, señala que hay que valorar que los sitios web son instrumentos de información y comunicación especialmente distintos de los medios de comunicación impresos, sobre todo en cuanto a su capacidad de almacenar y difundir información (Asunto Société Éditrice de Mediapart y otros c. Francia, TEDH 2021, párr. 15), y que las comunicaciones en línea y su contenido son mucho más susceptibles que los medios de comunicación impresos de vulnerar el ejercicio

y el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, en particular el derecho a la vida privada (Asunto M.L. y W.W. c. Alemania, TEDH 2018, párr. 91) . En segundo lugar, que la condena del propietario de un sitio de Internet por difundir declaraciones constitutivas de un discurso de odio responde a una necesidad social imperiosa de proteger los derechos de la comunidad afectada (Asunto Féret c. Bélgica, TEDH 2009, párr. 54).

En este sentido, el TEDH se ha pronunciado también sobre las injerencias de los Estados miembros ante el ejercicio de la libertad de expresión en la red de los ciudadanos y sus límites. Uno de estos límites hace referencia a las medidas de bloqueo de acceso a un sitio de Internet, lo cual en principio no resulta compatible con el CEDH si no se encuentra recogido en un marco legal que garantice un control estricto del alcance de la prohibición y una eventual revisión por parte de una autoridad judicial independiente (Asunto Tierbefreier E.V. c. Alemania, TEDH 2014, párr. 56).

Y además, el TEDH añade que es preferible una limitación, en lugar de bloquear por completo una página web, medida que convierte en inaccesible una gran cantidad de información afectando a los derechos de numerosos usuarios y provocando un efecto colateral importante (Asunto Ahmet Yildirim c. Turquía, TEDH 2012, párrs.64-67). De hecho, ha expresado que el bloqueo total del acceso a un sitio web es una medida comparable a la prohibición de un periódico o una emisora de televisión, pues esta medida amplía el alcance del bloqueo no solo al contenido ilegal original, sino también a cualquier tipo de información presente en la web, constituyendo entonces una interferencia arbitraria (Asunto OOO Flavus y otros c. Rusia, TEDH 2020, párrs. 37-38).

El TEDH también ha analizado el vocabulario que se utiliza en las redes sociales para determinar si éste llega a ser un factor determinante a la hora de evaluar si nos encontramos ante un discurso de odio. En este sentido, señala que el uso de un vocabulario vulgar o insultante no es decisivo para la evaluación de un discurso de odio, ya que puede tener únicamente fines estilísticos, sustentando esta argumentación sobre la base de que el estilo constituye parte de la comunicación como forma de expresión y, como tal, está protegido junto con la sustancia de las ideas y la información expresas, por lo que solo tras un examen del contexto en el que aparecen este tipo de expresiones es posible establecer una distinción significativa entre el lenguaje que, siendo escandaloso, está protegido por el art.10 CEDH, y el que pierde su derecho a la tolerancia en una sociedad democrática (Asunto Savva Terentyev c. Rusia, TEDH 2018, párrs. 68-69). De esta forma, el lenguaje en las redes sociales, en ocasiones, reduce el impacto que se le puede atribuir al registro utilizado para expresar unas manifestaciones, que en otro medio, supondrían, sin lugar a dudas, un discurso de odio (Asunto Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría, TEDH 2016, párr. 77).

De igual forma, con respecto al "efecto amplificador" de las redes sociales cuando en las mismas se produce un discurso de odio, el TEDH determina que éste no se puede presumir, pues, si bien es cierto, que en Internet la divulgación y exposición es más amplia y rápida que en cualquier otro medio de comunicación, también existen espacios relativamente

privados en Internet, donde ese impacto no se produce, teniendo la expresión injuriosa una afección menor (Asunto Wrona c. Polonia, TEDH 2010, párr. 21).

Aun con ello, el TEDH ha reconocido que el riesgo de daño que suponen los contenidos y las comunicaciones en Internet al ejercicio y goce de derechos humanos y libertades fundamentales, por regla general, es mayor que el que plantean los medios de comunicación tradicionales, pues éste cuenta motores de búsqueda en la red global (García San José, 2022: 126-127).

Internet llega a suponer así un factor primordial a tener en cuenta cuando está presente en las circunstancias de un caso. El propio TEDH llega a entender que se trata de un contexto diferente al de los medios tradicionales con unas particularidades propias. No se puede omitir esta realidad ni asemejarla en determinados aspectos a situaciones en las que la red no está presente.

4.2. El derecho al respeto a la vida privada en Internet

El TEDH se ha pronunciado sobre el derecho al respeto a la vida privada (art. 8 CEDH) en relación a la libertad de expresión (art. 10 CEDH) en Internet, con respecto a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, como *Google Inc*., en el Asunto Tamiz contra Reino Unido, de 19 de septiembre de 2017.

En este caso, el TEDH tuvo en cuenta el importante papel que desempeñan los prestadores de servicios en Internet al facilitar el acceso a la información y el debate, señalando que en este tipo de supuestos, los Estados tienen un margen de apreciación más amplio para proteger el derecho al respeto a la vida privada de terceros (Asunto Tamiz c. Reino Unido, TEDH 2017, párr. 90).

Además, el TEDH determinaría que los Estados no solo tienen la obligación de abstenerse de interferir en la vida privada de los ciudadanos, sino que además tienen la obligación positiva de garantizar la protección efecto al respeto de la reputación de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, incluso, como en este caso, cuando los comentarios que afectan a su derecho se producen por terceros en un blog (Asunto Pihl c. Suecia, TEDH 2017, párr. 28).

Y en este sentido, el TEDH señaló que el demandante que ha visto su derecho al respeto a la vida privada vulnerado en Internet, tiene tres opciones: interponer una demanda por difamación contra los autores de los comentarios realizados en el blog, lo cual en muchas ocasiones es complejo pues para la identificación de los mismos suele ser necesario presentar una solicitud de revelación de identidad a Google Inc.; presentar una demanda contra el autor/dueño del blog o web; o accionar contra Google Inc. como propietario de Blogger.com. Ahora bien, para accionar contra Google Inc. es necesario que transcurra un plazo razonable desde que se le notifique el carácter difamatorio de los comentarios presentes en la red. Los proveedores de servicios en Internet no deben ser considerados responsables de terceros, a menos que no hayan actuado con celeridad para eliminar o impedir el acceso a los mismos una vez que tengan conocimiento de su ilegalidad (Asunto Tamiz c. Reino Unido, TEDH 2017, párrs. 82-84).

Ello parecería dar a entender que cualquiera que vea vulnerado su derecho al respeto a la vida privada en Internet, podría obtener una indemnización por la entidad responsable o los prestadores de servicios. Sin embargo, el TEDH ha matizado esta cuestión y ha determinado que no toda intromisión en el derecho al respeto a la vida privada de un individuo requiere una indemnización, sino que hay que examinar la suficiencia o el grado de la vulneración del derecho a la reputación demandante en la red social en la que tuvo lugar la misma, siendo ello cuestión del margen de apreciación estatal para evaluar cómo darle una solución a la intromisión, no siendo dicha solución en todos los casos una indemnización (Asunto Egil Einarsson c. Islandia, TEDH 2018, párrs. 38-39).

De igual forma, el TEDH resalta la responsabilidad que tienen las empresas de la información con respecto a sus mecanismos de filtración de comentarios ofensivos en sus respectivas páginas web, debiendo éstas adoptar medidas que permitan eliminar sin demora y sin aviso a la presunta víctima, o a terceros, los comentarios claramente ilícitos (Asunto Delfi AS c. Estonia, TEDH 2013, párrs. 160-162).

Con ello, se puede observar como el TEDH avanza en ampliar esa protección que gozan los sujetos protegidos frente al abuso de la libertad de expresión, cuando se producen los hechos en la red. Conforme sigan llegando más asuntos de esta índole al TEDH, más particularidades podrá analizar y avanzar así en crear un marco protector para las particularidades de Internet que se complemente a todos los principios y criterios ya establecidos al tratar la libertad de expresión.

4.3. El discurso de odio online

En este punto se van a exponer las particularidades que son tenidas en cuenta por el TEDH para determinar si se encuentra ante un discurso de odio producido en línea.

Como se explicó anteriormente, la intencionalidad es uno de los principios centrales que emergen de la jurisprudencia internacional sobre incitación a la discriminación y la violencia. Esta intencionalidad en Internet tiene dos singularidades. Por un lado, la intención del sujeto no se limita a la difusión material o a la propia conducta de distribuirlo, sino que se extiende a su propia naturaleza incitadora o promocional del odio, la discriminación y la violencia (Teruel Lozano, 2016: 93). El autor debe querer difundir ese material y tener conocimiento efectivo del contenido del mismo.

En este sentido, el TEDH ha llegado a estudiar la difusión de mensajes a través de hipervínculos, considerando que la finalidad de esta forma de difusión es permitir a los demás usuarios navegar en una red caracterizada por la disponibilidad de una inmensa cantidad de información, no presentando los usuarios el contenido como tal y concluyendo así, que la persona que comparte hipervínculos puede no ejercer control alguno sobre el contenido del sitio web o, incluso, que se vea modificado el mismo una vez sea compartido, por lo que la responsabilidad del usuario es menor incluso que si se usaran medios tradicionales de difusión de información. Para saber si el emisor del mensaje conocía el contenido del hipervínculo, el TEDH ha establecido como criterio a tener en cuenta comprobar si el usuario aprobaba el contenido, si lo reprodujo sin haberlo

aprobado, si se limitó a crear un hipervínculo al contenido sin haberlo aprobado o reproducido, si sabía o se suponía razonablemente que conocía el carácter difamatorio o ilegal del mismo y si actuó de buena fe y con la debida diligencia (Asunto Magyar Jeti Zrt c. Hungría, TEDH 2018, párrs. 73-77).

Y por otro lado, la valoración de la intención debe tener en cuenta las especificades del medio en el que se produce la conducta, es decir, Internet y las redes sociales (Díez Bueso, 2018: 10). Por ello, la libertad de las redes y la sensación de anonimato son aspectos significativos para calificar la intención del sujeto.

El TEDH ha determinado que en las redes sociales hay varios grados de anonimato, no siendo éste un derecho absoluto, así como que las empresas que otorguen esta cualidad han de garantizar que ese anonimato sea realmente efecto, siendo incluso los intereses de los usuarios en la divulgación de sus datos superiores a los de la empresa en lo que respecta a la protección del anonimato (Asunto Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria, TEDH 2021, párrs. 75, 77, 78 y 93).

Si bien, también expresó que las empresas no pueden negarse a revelar la información de registro de los usuarios que han manifestado expresiones constitutivas de un discurso de odio, alegando secreto editorial, pues estos comentarios van dirigidos a un público general y no un periodista, no siendo éstos considerados una fuente periodística y por lo tanto no gozando de la protección que otorga el secreto editorial (Asunto Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria, TEDH 2021, párr. 71). Y ello no quiere decir que las empresas no deban de proteger a los usuarios y el anonimato, sino que la protección que se ofrece a éstos es diferente de la de una fuente periodística.

Así, se observa cómo los discursos de odio que se producen online abarcan diversas cuestiones y métodos, llegando desde la publicación de un artículo en la página web de algún medio tradicional hasta la propia existencia de los mismos en foros y redes sociales. Ello genera que el TEDH no analice únicamente el discurso de odio como concepto, sino que también, todos los aspectos que rodean al mismo conforme a los criterios y principios que se mencionaron anteriormente. La actualidad de los casos deja en evidencia que una problemática que cada día cuenta con mayores particularidades y abre nuevos frentes para el TEDH.

5. Conclusiones

Tras lo anteriormente expuesto y una vez conocido el tratamiento que lleva efectuando el TEDH al discurso de odio online para determinar cuándo una injerencia en la libertad de expresión ejercida en Internet está justificada, se pueden alcanzar las siguientes conclusiones:

Primera.- Es importante la diferenciación de categorías que realiza el TEDH sobre expresiones o declaraciones que llegan a considerarse ofensivas pero que sin embargo solo cuando cumplen con una serie de requisitos llegan a sobrepasar el umbral para considerarse discurso de odio que debe de ser combatido.

Segunda.- Con respecto al papel que ejerce Internet en el discurso de odio, llega a resultar complejo analizar el verdadero alcance que pueden obtener los nuevos métodos de difusión y los nueve frentes

que abre con respecto a la libertad de expresión.

Tercera.- El hecho de que el TEDH reste responsabilidad a la difusión de información a través de hipervínculos, puede provocar que no se frene en la práctica el auge de estos discursos. Es una respuesta a corto plazo teniendo en cuenta, además, que una de las batallas del TEDH es también la desinformación y las *fake news* que se difunden en Internet, que como estamos viendo juegan un papel esencial en nuestras democracias.

Las personas que suelen difundir un discurso de odio en redes sociales no suelen hacerlo directamente a través de imágenes o textos propios, sino más a través de enlaces a vídeos o páginas web. Por ello, aunque ahora mismo el trato de los hipervínculos esté siendo relativamente débil, parece que la responsabilidad por la difusión de los mismos ascenderá.

Cuarta.-Las empresas de la sociedad de la información tienen un papel fundamental para frenar los discursos de odio que se reproducen online, debiendo las mismas adoptar medidas para ponerles freno sin demora y de manera eficaz, pues de lo contrario, responden sobre ellos. El hecho de que la jurisprudencia del TEDH comience a desarrollar en este sentido la responsabilidad sobre el discurso de odio online, es más trascendental de lo que pensamos, pues ello genera un efecto pedagógico sobre estas empresas, haciendo que las mismas se involucren en restringir estas manifestaciones. Al fin y al cabo son éstas la que tienen la primera toma de contacto con ellas.

Quinta.- Con respecto a las particularidades que ha establecido el TEDH para analizar el discurso de odio online, todo apunta a que avanza en una línea correcta a pesar de las dificultades que supone el mismo, no ya porque Internet llega a ser un medio prácticamente ilimitado, debiendo hacer en ocasiones una valoración aproximada de su alcance o efectos, sino porque además está en constante desarrollo y evolución.

Sexta.- El TEDH a través de su interpretación del CEDH, convirtiéndolo en un instrumento vivo capaz de enfrentarse a las problemáticas y fenómenos actuales para gestar una respuesta armonizada a través de los principios que va incorporando en el tratamiento de los discursos de odio y sus contextos, refuerza la idea de encontrar una respuesta efectiva y necesaria ante el auge de este tipo de discursos a través de Internet y las redes sociales.

Séptima.- Por último recalcar que no cabe duda alguna de que nos encontramos ante un tema complejo y que es, y será, uno de los retos jurídico-sociales del siglo XXI.

6. Bibliografía

Legislación, textos normativos e institucionales.

United Nations (2022). *What is hate speech?.* United Nations. https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech

Comité de Ministros (2022). *Recomendación CM/REC(2022)16 del Comité de Ministros de los Estados Miembros para combatir el discurso de odio.* Portal del Consejo de Europa. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955

Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (2021). *Encouraging hate crime reporting – The role of law enforcement and other authorities*. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. https://fra.europa.eu/en/publication/2021/hate-crime-reporting

Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003. *Boletín Oficial del Estado, 26,* de 30 de enero de 2015, pp. 7214-7224.

Comité de Ministros (1997). *Recomendación 20 del Comité de Ministros sobre el "Discurso de Odio"*. Portal del Consejo de Europa. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%281997%29020&expmem_EN.asp

Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente. *Boletín Oficial del Estado, 243,* de 10 de octubre de 1979, pp. 23564-23570.

Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. *Boletín Oficial del Estado, 103,* de 30 de abril de 1977, pp. 9337-9343.

Adhesión de España al Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, con una reserva a la totalidad del artículo XXII (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia). *Boletín Oficial del Estado, 118*, de 17 de mayo de 1969, pp. 7462-7466.

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria, núm. 39378/15, TEDH 2021. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213914

Erkizia Almandoz c. España, núm. 5869/17, TEDH 2021. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210492

Asociación Accept y otros c. Rumanía, núm. 19237/16, TEDH 2021. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210362

Société Éditrice de Mediapart y otros c. Francia, núm. 281/15, TEDH 2021. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207357

OOO Flavus y otros c. Rusia, núms. 12468/15 y otros dos, TEDH 2020. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203178

Lilliendahl c. Islandia (Dec.), núm. 29297/18, TEDH 2020. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203199

Magyar Jeti Zrt c. Hungría, núm. 11257/16, TEDH 2018. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-187930

Savva Terentyev c. Rusia, núm. 10692/09, TEDH 2018. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-185802

Egil Einarsson c. Islandia, núm. 31221/15, TEDH 2018. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184672

M.L. y W.W. c. Alemania, núm. 65599/10, TEDH 2018. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183947

Tamiz c. Reino Unido (Dec.), núm. 3877/14, TEDH 2017. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178106

Medzlis Islamske Zajednice Brcko y otros c. Bosnia y Herzegovina (GS), núm. 17224/11, TEDH 2017. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175180

Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy c. Finlandia (GS), núm. 931/13, TEDH 2017. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175218

Pihl c. Suecia (Dec.), núm. 74742/14, TEDH 2017. https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5650866-7156310

Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete y Index Hu ZRT c. Hungría, núm. 22947/13, TEDH 2016. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160314

Couderc y Hachette Filipacchi Associés c. Francia (GS), núm. 40454/07, TEDH 2015. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158861

Tierbefreier E.V. c. Alemania, núm. 45192/09, TEDH 2014. https://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-140016

Delfi AS c. Estonia (GS), núm. 64569/09, TEDH 2013. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-8960

Ahmet Yildirim c. Turquía, núm. 3111/10, TEDH 2012. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115705

Wrona c. Polonia, núm. 23119/05, TEDH 2010. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96433

Féret c. Bélgica, núm. 15615/07, TEDH 2009. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93626

Soulas y otros c. Francia, núm. 15948/03, TEDH 2008. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87370

Sürek y Özdemir c. Turquía (GS), núm. 26682/95, TEDH 1999. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58278

Referencias doctrinales

Díez Bueso, L. (2018). "La libertad de expresión en las redes sociales. Implicaciones jurídicas de los usos y comentarios efectuados a través de las redes". *Revista de Internet, Derecho y Política,* 27, pp. 5-16.

Esquivel Alonso, Y. (2016). "El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". *Cuestiones constitucionales: revista mexicana de derecho constitucional,* 35. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5972275&orden=0&info=link

García San José, D.I. (2000). "La libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un análisis crítico". *Revista del Poder Judicial, 3ª época,* 57, pp. 13-30.

García San José, D.I. (2022). *Libertad de expresión 4.0 en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Tirant lo Blanch.

García Santos, M. (2017). "El límite entre la libertad de expresión y la incitación al odio: análisis de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". *Comillas Journal of International Relations,* 101027-046, pp. 27-46.

Martín Herrera, D. (2014). "Libertad de expresión: ¿derecho ilimitado según el TEDH? Del discurso de odio al crimen de odio". *Estudios de Deusto,* 62 (2), pp. 15-40.

Presno Linera, M. (2020). "La libertad de expresión en Internet y las redes sociales: análisis jurisprudencial". *Revista Catalana de Dret Públic,* 61, pp. 65-82.

Rollnert Liern, G. (2020). "Redes sociales y discurso del odio: perspectiva internacional". *Revista de Internet, Derecho y Política,* 31, pp. 1-14. https://doi.org/10.7238/idp.v0i31.3233

Teruel Lozano, G.M. (2016). *La lucha del derecho contra el negacionismo: una peligrosa frontera. Estudio constitucional de los límites penales a la libertad de expresión en un ordenamiento abierto y personalista*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Notas sobre el fin de una acción virtuosa[1]

What do we talk about when we talk about human rights? Notes on the end of a virtuous action

Maximiliano Reyes Lobos[2]
University of British Columbia, Vancouver, Canadá
max.reyeslobos@ubc.ca
Universidad Católica del Maule, Talca, Chile
mreyes@ucm.cl

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Derechos Humanos; Dignidad; Fragmentación; Virtud; Aristóteles
Keyword: Human Rights; Dignity; Virtue; Fragmentation; Aristotle

Resumen: El artículo comienza reconociendo la creciente preocupación por la fragmentación de las respuestas a la crisis de los derechos humanos y las implicaciones políticas y filosóficas de su clasificación en generaciones de derechos. A continuación, propone un enfoque global de los derechos humanos basado en tres aspectos: disposiciones, criterios y sensibilidades. Este modelo, centrado en la dignidad humana, permitiría interpretar y aplicar los derechos con mayor eficacia, teniendo en cuenta tanto su universalidad como las circunstancias contextuales. Aunque esta propuesta está sujeta a ciertas limitaciones filosóficas, su enfoque en la dignidad evitaría la sobrecategorización de los derechos, a la vez que favorecería su comprensión y aplicación a la luz de la reflexión sobre la propia existencia, los aspectos normativos que la orientan y cómo interpretamos estas cuestiones de cara a la justicia y el bien común.

1 Este artículo forma parte de la investigación postdoctoral "Análisis comparativo de la profesión política chilena y canadiense desde la sabiduría práctica aristotélica", proyecto financiado por el Programa de Postdoctorado Becas Chile convocatoria 2022, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

2 Agradezco a las y los revisores de este trabajo por el tiempo dedicado y la profundidad con que han analizado lo que aquí propongo. He velado por atender a todas las observaciones recibidas, a sabiendas de que los argumentos que expongo pueden en algunos casos no ser suficientes para dar habida cuenta de la relevancia teórica y práctica de aquellas. Con todo, la propuesta que abordo, así como el método y las conclusiones que le acompañan son de mi responsabilidad y confío en retomar estos asuntos en futuras publicaciones.

Abstract: The article begins by acknowledging the growing concern about the fragmentation of responses to the human rights crisis and the political and philosophical implications of their classification into generations of rights. It then proposes a comprehensive approach to human rights based on three aspects: dispositions, criteria, and sensitivities. This model, centered on human dignity, would make it possible to interpret and apply rights more effectively, considering both their universality and contextual circumstances. Although this proposal is subject to certain philosophical limitations, its focus on dignity would prevent the over-categorization of rights, while favoring their understanding and application considering reflection on one's own existence, the normative aspects that guide it, and how we interpret these issues in view of justice and the common good.

"Todo este desconcierto, asombro e incompatibilidad en la comprensión invita siempre a avanzar, a un conocimiento más profundo" (Gadamer, 1998: 181-182).

1. Introducción

Con motivo del 75° aniversario de las Naciones Unidas, su Secretario General, António Guterres hizo un llamado a prestar más atención a los derechos humanos, particularmente, en situaciones de crisis. Una de sus mayores preocupaciones es la posibilidad de perder el foco en la dignidad inherente a cada persona a causa de una limitada comprensión de la Declaración Universal. "Nos enfrentamos a una terrible paradoja —afirma, Guterres—. Los problemas globales son más interdependientes que nunca, pero nuestras respuestas están cada vez más fragmentadas." (Guterres, 2020) Esto, como diagnóstico de aquello a lo que se enfrenta el mundo actual pone de relieve el rol de los Derechos Humanos como garantía de solución, a la vez que los hace parte del problema cuando la lectura es en términos negativos y lo que se observa es, por tanto, la ausencia de los derechos.

Los derechos humanos tienen un trasfondo histórico y filosófico complejo, que podemos rastrear hasta la igualdad y derechos inherentes a toda persona trabajados por filósofos clásicos como Platón (República, 455a-457a), Aristóteles o Cicerón (De las Leyes, I, v 16; I, xii 33), pasando por el establecimiento de las bases del Estado de Derecho y los principios del debido proceso y la protección contra la autoridad arbitraria declarados en la Carta Magna de 1215 (Roshwald, 1959; Yunus, Setiawan y Ngainnur, 2022), el derecho subjetivo defendido por Guillermo de Occam (Villey, 1976, cap. VI; Tierney, 1997: 13-30), la Ley moral y el imperativo categórico (Kant, 2016: 46 ss.; 63; 136-137) y las revoluciones de la era moderna que reforzaron la noción de derechos inalienables, la libertad, el reconocimiento y el civismo (Cf. Hobsbawn, 2009). A partir de este punto, los derechos humanos se presentan como una medida cumbre en el resguardo del respeto al ser humano. Sin embargo, desde una lectura negativa que "hace emerger en las personas, grupos y

comunidades sus deficiencias, incapacidades, problemas, síntomas, dificultades, traumas, déficits, desórdenes, daños, vulnerabilidades, etc." (Martínez, 2006: 17), la clasificación de los derechos humanos en generaciones junto con la particularización de las respuestas dadas por gobiernos, entidades no gubernamentales y ciudadanía ha implicado consecuencias políticas y morales que influyen en cómo se entienden, priorizan e implementan los derechos dentro de los marcos legales, las agendas políticas y el discurso social. La sola jerarquización de las respuestas en virtud de cuál generación de derechos esté siendo vulnerada, daría cuenta de la fragmentación señalada por Guterres (Bonet de Viola, 2016). La lectura negativa de los derechos humanos redunda en este caso, en la evidencia de problemáticas que no nacen fuera de ellos, sino que le son consustanciales, dada la manera en que los comprendemos. Como lo dice Honneth (2011: 42):

> Estoy convencido de que resulta aconsejable, en el caso de los análisis sociológicos (o filosóficos) de fenómenos normativos, comenzar por los acontecimientos negativos; pues en general, están articulados de manera mucho más clara y, por ello, resultan más aprehensibles que las manifestaciones o las tomas de posición positivas.

Guterres hace una lectura negativa de los problemas a los que se enfrenta el mundo actual y obtiene de ella la imagen de un conjunto de respuestas que están fragmentadas y parecen no dar habida cuenta de los problemas existentes. Ya este diagnóstico tiene el suficiente poder para interpelar a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general respecto a la necesidad de aceptar, por una parte, que estamos viviendo un periodo crisis a nivel global, y por otra, que los derechos humanos son algo más que un texto con el cual otorgar garantías de respeto y dignidad. El llamamiento es también a considerarlos como el contexto en el que las sociedades fructifican, dada la interconexión e interdependencia que caracterizan a la sociedad contemporánea. Efectivamente, existe el multilateralismo, pero este "debe ser más inclusivo, estar más interconectado y articularse en torno a los derechos humanos" (Guterres, 2020: 12). Y en esto, los principios rectores y los ámbitos de acción expuestos por Guterres representan una lectura positiva de la situación global, al "hacer emerger en las personas, grupos y comunidades sus capacidades, competencias, habilidades, recursos y potencialidades" (Martínez, 2006: 17), de modo que las respuestas a los problemas propios de las crisis nacerían desde los mismos individuos aquejados, en tanto que ellos obren en el marco del respeto a la dignidad, el civismo y la gobernanza, y la ética. Sin embargo, no es mi intención profundizar en estos principios y ámbitos de acción, sino abordar un diagnóstico complementario del problema descrito por Guterres. Para lograrlo, seguiré el curso de los planteamientos de Aristóteles en torno a la virtud y el obrar virtuoso, la justicia y la sabiduría práctica, para proponer a partir de ello un modelo comprensivo de los derechos humanos basado en tres conceptos. A saber, disposiciones, criterios y sensibilidades. Presento en este punto dos casos reales ocurridos en Chile, cuya exposición tiene por objetivo interpelar el reduccionismo al que son objeto los derechos humanos y facilitar la comprensión de estos tres conceptos. Al concluir, retomo la dualidad de lecturas (negativa y positiva), vinculándolas al modelo comprensivo propuesto y la primacía de la acción virtuosa por sobre la

categorización de los derechos humanos. Además, abordo algunas limitaciones del estudio y esbozo futuras líneas de investigación.

2. El problema: interpretación y fragmentación

Ciertamente, las respuestas a los problemas actuales están fragmentadas, pero los derechos humanos también lo están, o al menos su comprensión jurídica y textualista como normas que pueden clasificarse según generaciones (derechos humanos de primera generación, segunda generación tercera …) hace que al abordarse los problemas del mundo actual los derechos humanos se traten de forma también fragmentada. Algunos de los problemas que esto conlleva son los conflictos entre los derechos y la evidencia de cuán difusos pueden ser los límites que separan a los de una categoría de los de otra (Castillo, 2005), la proliferación de derechos en ámbitos de actuación que no solían requerir de su lenguaje para responder a los problemas propios y que por lo tanto, no han desarrollado respuestas satisfactorias al mismo ritmo que los derechos se han extendido (Pretasek, 2020; Martínez de Pisón, 2022; Aguilar, 2023), y la carencia de un enfoque interdisciplinar que incorpore elementos distintos de la sola aplicación de la ley (Ogunbanjo, 2024). Luego, las implicancias remiten a que la categorización se hace en perjuicio de la dignidad en la que se afincan, esa condición que hace de cada persona un ser absolutamente único entre los seres vivos (Andorno, 2014: 46). No obstante, el solo significado de la palabra dignidad parece no estar lo suficientemente claro cuando se lo utiliza en el marco de las decisiones judiciales, requiriéndose un núcleo mínimo desde el cual afirmarla (McCrudden, 2008; Gilabert, 2018: 141 ss.). La evolución de la sociedad contemporánea y sus valores podría influir en la manera en que los derechos humanos son interpretados, con los consecuentes problemas de la fragmentación de los derechos, y rastrear esta idea podría llevarnos hasta explicaciones basadas en los orígenes de la revolución industrial y la primacía de los rasgos de la economía moderna que bien describió Adam Smith en su momento, o hasta la descripción de cómo las categorías de honor dieron paso a la dignidad como fundamento de las relaciones sociales (Taylor, 1996). Sin embargo, tampoco es un objetivo lograr la unificación de los derechos y a partir de ahí limitar la acción de los individuos (Łuków, 2018). Mi objetivo es sustentar el aspecto correctivo de los derechos humanos y su pretensión universalista, abogando por la dignidad humana como su telos y por una necesaria sensibilidad contextual que sirve como garantía de su defensa y cumplimiento. Lo primero es un asunto ontológico, ya que al ser la dignidad humana el telos de los derechos humanos, representa ese movimiento último al que estos tienden (Ética a Nicómaco [EN.] 1097a15-1097b20; Metafísica [Met.] 1027a30-1027b15; 1070b25-1071a18). Luego, la sensibilidad contextual se refiere al tipo de discernimiento práctico que permite adaptar la norma cuando esta no es capaz de responder a lo que la circunstancia amerita. Lo que espero entonces, es hablar de los derechos humanos como representación de la dignidad y no solo como la Declaración Universal que se elaboró para resguardarla. En esto, el respeto a la dignidad se concibe como una acción virtuosa, en tanto que se afinca en

un discernimiento que no depende del texto que describe la relación, sino en la relación misma y en el contexto en el que ella se da.

Aunque Aristóteles no se centró específicamente en la protección de los derechos de las personas, su abordaje ético político de la sociedad sí ofrece respuestas al problema de la fragmentación de los derechos humanos cuando se le aborda desde la más amplia noción de justicia y su manifestación como justicia social y equidad (Cf. Horn, 2009; Nussbaum, 2020). Así, la consecución del telos y los movimientos necesarios para llegar a él, se regirían por la sabia discreción y el buen juicio (EN. 1137b10-20; 1160a15-35; Política [Pol]. 1280b29-1281a3), siendo la garantía de los derechos humanos, como movimiento hacia el fin último del respecto a la dignidad "la actualización de lo que está en potencia" (Met. 1065b20), un movimiento que no es la dignidad sino el proceso de ser digno (Cf. Met. 1067b12). La practicidad la hallamos en el movimiento de los derechos humanos hacia la dignidad como el contexto en el cual los individuos pueden efectivamente llevar a cabo prácticas juiciosas que les permiten convertirse en personas justas. O, dicho de otro modo, donde los individuos pueden ser y sentirse dignos respetando la dignidad propia y de los otros.

Ahora bien, esta propuesta, dirigida en principio a todo sujeto ciudadano, es aplicable con mayor claridad en el marco de las decisiones institucionales, tanto judiciales como ejecutivas, dado el elemento deliberativo que les otorga sentido (Pol. 1298a5-10). Pensemos, por tanto, en decisiones que requieren un tipo de discernimiento sobre lo que es justo y correcto, a sabiendas de que la concepción de justicia particular al caso puede no dar habida cuenta de las necesidades de este, quedando a discreción del individuo abordar la problemática que los derechos le presenten desde una concepción amplia y universal de justicia (Horn, 2009). Y por ello, habría también una cierta atemporalidad en este planteamiento, en el sentido de la trascendencia de la forma en que se gestan las respuestas fundadas en la dignidad, sobre todo dada la imposibilidad de prever todas las posibles situaciones y tomas de decisiones de la vida real, cuestión que Aristóteles supo ver y que abordó desde la sabiduría práctica. Así, y tal como ocurrió con los albañiles de Lesbos, quienes tuvieron que modificar la regla para adecuarla al contorno de los pilares del templo, la aplicación de los derechos humanos no siempre podrá hacerse siguiendo su norma; habrá ocasiones que requieran de una cierta capacidad que les preceda y con la cual los individuos se sientan facultados para responder al contexto y a aquellas situaciones que se alejan de los procedimientos operativos estándares (Schwarz y Sharpe, 2010). Sea que hablemos de legisladores, profesionales o ciudadanos en general, la comprensión de los derechos humanos con base en la dignidad requiere que los individuos cuenten no solo con conocimientos teóricos, sino con habilidades prácticas que le permitan tomar decisiones adecuadas para servir a quienes son objeto de su atención. Y así mismo, requiere que los individuos estén motivados para hacer lo correcto por razones justas y éticas, y que se dediquen a prestar el servicio que su profesión exige. De acuerdo con Aristóteles, esta es la razón por la que la sabiduría práctica es un atributo fundamental para todos los ciudadanos, lo que en la propuesta que acá planteo se expre-

sa en el rol de sujetos dedicados a interpretar y aplicar los derechos humanos.

Como he expuesto, hablar de la fragmentación de los derechos humanos implica referirse a las limitaciones en el tratamiento jurídico del que son objeto y la dificultad para captar el tema común que los caracteriza como expresión de dignidad (Rodríguez-Blanco, 2012). En detalle, esto significa atender a la burocracia y a los problemas de gobernanza que reducen la participación de los sujetos involucrados a meros trámites técnicos o narrativas que no logran representar la complejidad de las relaciones entre individuos inherentemente dignos. Para ejemplificar este punto de vista y problematizar la concepción de derechos humanos desde una lectura negativa, expongo a continuación dos situaciones ocurridas en Chile, las cuales, como casos de estudio, tienen como común denominador el hecho de que el no respeto a la dignidad humana se tradujo en acciones que no se realizaron de acuerdo con las virtudes morales, específicamente, de acuerdo con la justicia. Recordemos que, para Aristóteles, una acción virtuosa es aquella que se realiza de acuerdo con las virtudes morales (p.ej.: justicia, prudencia, valentía, templanza, amistad), las cuales se sitúan en un término medio entre dos extremos opuestos. Así, al no realizarse de acuerdo con la justicia, el obrar de los individuos se sitúa en uno de los dos extremos opuestos, pudiendo darse una rigurosa y desproporcionada aplicación de la ley o, por el contrario, un trato indiferente en la determinación de lo justo y equitativo, siendo esto también injusto por tratarse de una deficiencia en la justicia (EN. Libro V). Así mismo, la acción virtuosa no se funda en normas externas, sino en deliberación y sabiduría práctica —en el discernimiento de lo que es correcto en cada situación concreta y actuar en consecuencia— por lo cual la comprensión de los derechos humanos de manera fragmentada radicaría en que son tratados más como normas que como expresión de dignidad. En esto, lo correcto y conveniente implicaría "mirar no a la ley, sino al legislador; no a la letra, sino a la inteligencia del legislador; no al hecho, sino a la intención; no a la parte, sino al todo; no a cómo es ahora uno, sino a cómo era siempre o la mayoría de las veces" (Ret. 1374b13-15). Hablar de derechos humanos como una acción virtuosa es, entonces, hablar de ellos como: a) expresión de la virtud de la justicia, b) representación de la naturaleza intrínseca del ser humano como ser social y racional, y c) garantía del respeto y la protección de la dignidad. Detengámonos en este asunto por un instante, atendiendo a la mayor claridad y facilidad con que suelen entenderse los eventos negativos en relación con las opiniones o acciones positivas.

2.1. Primera interpretación: ¿merece un hombre la muerte porque la ley lo permite?

Si bien, en Chile la pena de muerte fue derogada en 2001 por el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), en agosto de 1960, cuando el campesino Jorge del Carmen Valenzuela Torres asesinó a su conviviente y a cinco hijos de esta, la condena de ejecución por fusilamiento ya había sido aplicada en por lo menos 57 casos. Jorge Valenzuela, conocido por estos delitos como *El Chacal de Nahueltoro*, fue capturado en septiembre de 1960 y condenado en primera instancia a 33 años y 19 días de cárcel, para luego ser senten-

ciado a pena de muerte por la Corte de Apelaciones de Chillán. Su fusilamiento se llevó a cabo la madrugada del 30 de abril de 1963 y hasta este punto, podemos decir que se hizo justicia. La controversia del caso radica en lo que ocurrió con Valenzuela Torres durante los 32 meses que estuvo recluido en la Cárcel de Chillán, tiempo en el que aprendió a leer, a escribir, a fabricar guitarras, y durante el cual, convertido al catolicismo, desarrolló el suficiente grado de conciencia de la gravedad de su crimen como para arrepentirse y aceptar la circunstancia en la que se hallaba. Ante esta contradicción de sentidos de justicia, el sacerdote Eloy Parra, guía espiritual de Jorge Valenzuela, y María Urrutia de Rojas, su abogada defensora, solicitaron al presidente Jorge Alessandri el indulto presidencial, apelando a la comprensión de las precarias condiciones sociales y económicas que caracterizaron la historia de Jorge Valenzuela (familia disfuncional, analfabetismo, alcoholismo) y esperando que su rehabilitación fuese un argumento suficiente para la conmutación de la pena de muerte por presidio perpetuo. Como lo declaró Urrutia de Rojas en la solicitud realizada:

> La petición que formulo no se fundamenta en razones de índole sentimental, propias de una mujer, sino en los antecedentes jurídicos y morales que me permito hacer valer en el escrito anexo a esta presentación (…). No es un hombre a quien defiendo; es la niñez abandonada de ayer y hoy; es a aquella clase humilde e ignorante de cuyos destinos es responsable la sociedad. La muerte de uno de ellos no servirá, de modo alguno, como medida de represión de la delincuencia, mientras prime la ignorancia, mientras haya miseria (…). Al indultársele la pena de muerte por la de presidio perpetuo, podrá la sociedad comprobar qué cambios pueden lograrse en un individuo a quien aún es tiempo de enseñarle y que solo una vez en la vida conoció la caridad cristiana (Ministerio de Justicia, 1963: 4).

La constitución vigente cuando estos eventos sucedieron era la Constitución Política de 1925, la cual, en su artículo 44 n°14 indica que "solo en virtud de una ley se puede conceder indultos generales y amnistías". Sin embargo, la petición formulada por Parra y Urrutia de Rojas se basó en la búsqueda de un verdadero propósito de justicia, una petición fundada en el interrogante sobre si ante un hecho como el descrito y con las circunstancias que lo caracterizan, valen más los castigos que la corrección de las condiciones individuales (Jorge Valenzuela Torres), colectivas (Tribunales de Justicia, presidencia) y sociales (analfabetismo, pobreza, exclusión). La cuestión radicaba para la defensa de Valenzuela Torres en la necesidad de sabiduría, en la necesidad de ese *algo* que está *más allá* de lo escrito y en la disposición hacia una compresión más profunda de la situación práctica. El atender a los argumentos fundados en la dignidad de Valenzuela Torres hubiese requerido "un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre" (NE. 1140b4-5), donde "el yerro [en la interpretación de la ley] no radica en la ley, ni en el legislador, sino en la naturaleza de la cosa, pues tal es la índole de las cosas prácticas." (NE. 1137b20). Sin embargo, si bien Chile fue uno de los 48 países que estuvieron a favor del proyecto de los derechos humanos en la votación del 10 de diciembre de 1948, la ratificación de la Declaración Universal por parte del gobierno chileno no se llevó a cabo sino hasta el 13 de agosto de 1990, de modo que cualquier petición no habría podido hacerse explícita y jurídicamente en nombre

de los derechos humanos. Así, en el caso de Valenzuela Torres el espíritu de la justicia no se pudo encarnar en un dictamen que conmutara la pena de muerte por un presidio perpetuo, siendo la nula correspondencia entre condena y rehabilitación donde se encuentra la mayor paradoja en torno a la concepción de dignidad.

2.2. Segunda interpretación: el derecho a ser juzgado con justicia

En el contexto del Estallido Social ocurrido en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se llevaron a cabo detenciones asociadas a diversos delitos, los cuales van desde desórdenes públicos y daños a la propiedad hasta incendios y saqueos. Dentro de los detenidos hay manifestantes y activistas que efectivamente participaron en las protestas, pero también hay casos de personas que presuntamente cometieron actos de violencia durante esos eventos. Pero más allá de estas diferencias, lo que ha sido abordado desde la lente de los derechos humanos son las condiciones de prisión preventiva de los detenidos. Estas condiciones han sido motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos y defensores de los detenidos, por resultar en violaciones a los derechos fundamentales de los acusados, como el derecho a un juicio justo y el debido proceso.

De acuerdo con registros del Ministerio Público, a marzo de 2022 había 211 personas detenidas por delitos asociados al Estallido Social, de las cuales 144 se encuentran en prisión preventiva debido a su presunta participación y otras 67 tienen sentencias firmes. De especial interés son los casos de dos detenidos que estuvieron 457 y 431 días en prisión preventiva respectivamente, para luego ser condenados por delitos menores que no requirieron penas en prisión, y los casos de dos jóvenes acusados de portar piedras y explosivos y que fueron absueltos de los cargos luego de 13 y 14 meses en prisión preventiva (Centro de Derechos Humanos UDP, 2022). Solo en términos de su uso jurídico, la prisión preventiva ha sido catalogada como excesiva, tanto en el plano local por parte de la ciudadanía como en el internacional por la ONU (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2021). Y en el marco de los derechos humanos, el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, destinado a conceder indulto general por razones humanitarias a 227 personas acusadas por delitos en el marco del estallido social en Chile, describió, dentro de otros asuntos, cómo se hizo un uso desigual de la prisión preventiva en 172 casos de personas detenidas. Citando al Departamento de Estudios de la Corte Suprema, el documento describe cómo

> más del 70% de los delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo durante el proceso de detención, traslado y estancia en Comisarías a raíz de las manifestaciones, y al mes de abril de 2020, Carabineros de Chile fue la institución con mayor cantidad de denunciados o querellados, con el 93% del total de los delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos (Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía [CDHNC], 2021: 21).

En los términos de la clasificación de los derechos humanos, lo acá apuntado se enmarca en los derechos humanos de primera generación, observándose una limitación de las libertades fundamentales y

la consiguiente invisibilización de la justicia como equidad que sería transversal a los derechos humanos en esta interpretación como expresión de virtud. Y particularmente, en el marco jurídico, hay otras potenciales vulneraciones que han de ser tomadas en cuenta, como el riesgo de ser objeto de formalizaciones arbitrarias y la posibilidad de que una persona pueda ser juzgada y castigada dos veces por el mismo delito[3].

3. La propuesta: tres condiciones para la universalización

En este apartado propongo resguardar la universalidad de los derechos humanos y la garantía de dignidad atendiendo a tres aspectos que conjuntamente obrarían como un modelo comprensivo de los derechos como una acción virtuosa. A saber, disposiciones, criterios y sensibilidades. Siguiendo el curso trazado por propuestas de similar índole, mi objetivo es atender tanto a un concepto unificador —la dignidad, la cual contiene a su vez la diversidad de expresiones de ser humano— como a las múltiples perspectivas que caracterizan a los derechos humanos y justifican su existencia (Beuchot, 1999; O´Neill, 2021; Rodríguez-Blanco, 2012; Roshwald, 1959).

3.1. Disposiciones

Por disposición planteo la aptitud y las capacidades requeridas para comprender al ser humano en su más amplio sentido. Es el conjunto de condiciones que permiten reflexionar sobre la propia existencia, la de los demás individuos y posibilitar las relaciones. Y como tales, las disposiciones implican también una apropiación de lo que sucede en el momento en el que se conoce lo que sucede, donde este conocer es una acción efectiva (Maturana y Varela, 2002: 14 ss.). Es decir, una acción y un obrar que permite al individuo continuar el curso de su existencia y posibilitar con ello, la existencia de y con otros. Gracias a este conocer es que el ser humano puede ser comprendido como sujeto de dignidad, puede ser reconocido en su igual condición de ser distinto y se forja el sentido de responsabilidad requerido para continuar el curso de la existencia social. La necesidad de las disposiciones radica en que gracias a ellas se pueden leer los tipos de convivir que se gestan en las sociedades contemporáneas y responder articuladamente a las insensibilidades y cegueras que caracterizan, no totalmente pero sí en un considerable grado al convivir actual (Dávila y Maturana, 2021).

3.2. Criterios

Con el marco general dado por las disposiciones, los derechos humanos pueden ser comprendidos —conocidos— tanto en su principal representación que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en su principal expresión, que es la dignidad. Sin embargo, la sola afirmación de dignidad no siempre es suficiente y el problema del conocer se convierte en una cuestión ontológica, donde afincar la condición-de-ser-digno requiere efectivamente de afirmaciones que describan el mundo, pero más importante, requiere de declaraciones que

3 Sobre el principio de *non bis in ídem* y casos, véase Bermúdez (2022); López-Alarcón (2023: 58 ss.)

generen una nueva realidad e interpelen a los individuos hacia la adscripción de compromisos para con esta. "Todo lo que acontece en el mundo nos concierne", afirma Rafael Echeverría (Echeverría, 2014: 155), reafirmando lo que Gadamer ya estableció como una fusión de horizontes, la que en el marco del respeto a la dignidad implica que las disposiciones de los individuos vistas separadamente se funden en un proceso propiciado por el entendimiento (Gadamer, 1991: 377 ss.). Los criterios propios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos obran en este caso como recursos con los cuales cuestionar la idea de verdad que impera en un sistema de ordenamiento dado, organizando la realidad a partir de la adopción de otros conceptos de verdad y del reconocimiento a nuestro rol como partes de un sistema que puede ser cambiado por medio de la complementariedad de nuestras observaciones, por limitadas que sean en un principio (Echeverría, 2009). Los criterios son, por tanto, la norma que orienta la interpretación y aplicación de los derechos humanos; son las legislaciones (ley, tratados, acuerdos, etc.) y los modos en que los derechos humanos son leídos positivamente y operacionalizados. No obstante, los criterios han de ser a la vez contextuales y atingentes a las circunstancias en específico. Si las disposiciones responden a una lógica filosófica, donde interesan los significados y los simbolismos de, en este caso, los derechos humanos y la dignidad, en los criterios interesa una lógica matemática, en el sentido de la estructura formal y las reglas que gobiernan la interpretación y aplicación de los derechos humanos (Cf. Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 2002). Pero dado que estas estructura y reglas no siempre pueden responder a la universalidad de la dignidad, es preciso que sean atendidas con una sensibilidad contextual, la cual hallamos en la sabiduría práctica aristotélica.

3.3. Sensibilidades

Por sensibilidades comprendo el modo en el que podemos interpretar las circunstancias a la luz del discernimiento que las disposiciones y los criterios ameritan. Primaría en este punto una lógica psicológica, por cuanto importa el aspecto práctico y funcional de la interpretación de los derechos humanos y cómo su tratamiento afecta el comportamiento y las relaciones entre las personas. Y es a la vez una cuestión moral, por cuanto los individuos interpretamos y resguardamos la dignidad con vistas a hacer elecciones justas y fundadas en el bien común. Dado el diagnóstico del mundo actual sumergido en crisis, atomismos y respuestas fragmentadas (Cf. Francisco, 2020), el contextualismo pedagógico aristotélico permite comprender la situación en la que cada cual se encuentra por la propia vivencia en tal contexto. Hablo de un escenario en el que lo práctico es indefinido e imprevisible; uno en el que las cosas pueden ser de otra manera, y donde la tensión provista por la pregunta ¿de qué otra manera? es siempre necesaria. Conectar los derechos humanos y la sabiduría práctica desde esta perspectiva implica considerar cómo el discernimiento sobre lo que es correcto en una situación en particular puede mejorar la promoción, protección y realización de los derechos humanos dentro de las sociedades.

4. Sobre la practicidad de la acción virtuosa

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el problema descrito y el virtuosismo de los derechos humanos? Si comenzamos por las dos interpretaciones descritas, que buscan interpelar, aunque sea sucintamente, el reduccionismo al que son objeto los derechos humanos, vemos por ejemplo, que en el caso de Jorge Valenzuela Torres desde la perspectiva de los derechos humanos destacan varios aspectos que revelan la compleja interacción entre la pobreza, la desigualdad, la justicia penal y la representación mediática, poniéndose en relieve el impacto de la pobreza y la desigualdad en la vida de las personas y cómo estas condiciones vulneran a su vez la dignidad y los derechos de quienes se encuentran aislados socialmente (Serrano-Tárraga, 2014; Larii y David, 2019; Ríos-Patio, 2022). El caso también invita a reflexionar sobre el tratamiento de los delincuentes dentro del sistema de justicia penal, sugiriendo que las medidas punitivas por sí solas pueden no ser efectivas para abordar las causas subyacentes del crimen. En esto, la importancia de un enfoque que combine la rendición de cuentas con la rehabilitación y la reintegración social radica en el modo en el que se comprende la situación de todos los involucrados, lo cual va más allá de los asuntos meramente jurídicos (Cardoso, Loudeiro y Sachsida, 2003).

Por su parte, en el caso de las detenciones dadas en el marco del Estallido Social, un ejemplo de la conjunción disposiciones-criterios-sensibilidades se hallaría en la recomendación que el INDH hizo al Poder Ejecutivo, en relación con la necesidad de "fortalecer los programas existentes y promover nuevos programas que incentiven el conocimiento y sensibilización de los derechos humanos, respecto a la memoria en general y específicamente sobre los acontecimientos ocurridos tras el 17 de octubre del 2019." (INDH, 2019: 90) Esta recomendación dotaría de practicidad al modelo comprensivo proponiendo disposiciones legales, criterios éticos y sensibilidades humanas con las cuales se pueden fortalecer los programas de sensibilización sobre derechos humanos. Sobre todo, a la luz de las situaciones de crisis social y política que afectan no solo la articulación de respuestas legales, sino también las de tipo socioafectivo y relacional.

Al retomar el llamamiento de António Guterres, no debemos desconocer que cada generación de derechos humanos ha emergido como respuesta a los diversos desafíos sociopolíticos del mundo actual, resultando complejo mantener equilibradas y coordinadas las acciones tendientes a resguardar los derechos específicos consignados en cada una de ellas (Risse, 2018: 11 ss.). Esto parece ser una razón suficiente para que en tal resguardo obre un tipo de discernimiento que permita navegar por estas complejidades y avanzar en la realización de los derechos humanos. En este sentido, las disposiciones, los criterios y las sensibilidades se entrelazan con cada una de las generaciones, poniendo el acento en aquello a lo cual aspiran, más que en el contenido que las distingue unas de otras. Así, en el caso de los derechos de primera generación, el modelo comprensivo que he descrito favorece la interpretación jurídica al dotar a legisladores y estadistas de recursos con los cuales lograr el equilibrio entre distintos intereses, proteger las libertades individuales y asegurar el cumplimiento

del estado de derecho. Y dada la participación de la sabiduría práctica, el modelo sirve de guía para la toma de decisiones éticas, con las cuales se garantizaría que las acciones legales y políticas estén enraizadas en principios morales (Beuchot, 1999).

En cuanto a los derechos de segunda generación, las disposiciones, criterios y sensibilidades tienen su mayor expresión en la formulación de políticas, en circunstancias en las que los encargados de elaborarlas disciernen sabiamente sobre la priorización de las necesidades de la sociedad, atendiendo, por ejemplo, al derecho a la educación, la salud y la vivienda como manifestaciones de una vida digna. Luego, desde la perspectiva de este modelo comprensivo, los derechos humanos de tercera generación implican la necesidad de solidaridad global y la toma de decisiones éticas para abordar los desafíos interconectados que enfrenta la humanidad. Paradójicamente, es esta generación la que puede en mayor medida brindar las respuestas a los interrogantes planteados por Guterres en torno a la fragmentación de las respuestas. Y digo paradójicamente, ya que si bien la solidaridad, el cuidado del medioambiente y la paz mundial son cuestiones globales e interdependientes, son atendidos en estos derechos de tercera generación a causa de su invisibilización como derechos políticos, civiles y sociales. La utilización de las disposiciones, criterios y sensibilidades en este contexto requiere comprensión de las necesidades locales y globales, así como la capacidad de tomar decisiones informadas que promuevan el bienestar común y la justicia global (Cf. Hathaway, Crootof, Levitz, Nix, Perdue, Purvis y Spiegel, 2012).

5. Conclusión

Hablar de los derechos humanos implica, por una parte, atender al complejo contexto histórico y filosófico en el que se enraízan, siendo las concepciones de derechos inalienables, libertad y civismo asuntos constitutivos de toda investigación. Por otra, su clasificación en generaciones tiene importantes consecuencias políticas y morales, que influyen en cómo son comprendidos e implementados dentro de los marcos legales, las agendas políticas y la esfera pública en general. En esto, lo que hace virtuosas las respuestas a las crisis que vive la era actual es el hecho de que tanto el diagnóstico de la crisis como la consiguiente intervención en ella desde lo que los derechos humanos indican, se funda en la conjunción de lecturas negativa y positiva. Así, no es únicamente la evidencia del problema lo que orienta la solución, ni tampoco lo es la generación de respuestas provenientes *desde fuera* de la crisis. Cuán pertinente sea la gestión de soluciones, dependerá de la calidad de las lecturas que se realicen. A este respecto, las disposiciones, criterios y sensibilidades representan un esfuerzo por conjugar el aspecto abstracto de los derechos humanos como expresión de dignidad, con el perspectivismo que los ha caracterizado desde sus orígenes como declaración.

Ciertamente, una de las limitaciones de esta propuesta es su afincamiento filosófico y la asunción de que el paso desde la reflexión hacia la práctica, o desde la abstracción hacia lo contextual es sencillo y reductible a un método. Por lo pronto, la inclusión de la sabiduría práctica es un esfuerzo por minimizar las complejidades de este asunto, el cual es —a riesgo de

cuestionamientos— un lugar común en la filosofía. Sin embargo, atender a la dignidad como un asunto previo a toda declaración de derechos humanos resulta ser un ejercicio casi obligatorio si se quieren resolver los problemas normativos sin caer en una sobrecategorización o en una categorización burocratizante de los derechos. En este sentido, la abstracción es un proceso legítimo al significar pasar del texto al contexto. Un contexto en el que los derechos humanos sean respetados atendiéndose al fin último que persiguen, esto es, la dignidad. Y en esto, la originalidad del modelo propuesto puede ser una virtud más que un vicio, mientras sea fiel a su finalidad como proveedora de un marco interpretativo desde el cual responder a cuestiones que no siempre encuentran respuesta en los procedimientos operativos estándares.

Por último, para someter a examen lo que acá he planteado, una futura línea de investigación deberá profundizar tanto en la genealogía de los derechos humanos a la luz de la virtud, como abordar un análisis comparativo con el cual cotejar las disposiciones, los criterios y las sensibilidades, a la vez que permita confirmar si este modelo comprensivo es suficiente o no para dar cuenta de la universalidad de la dignidad. Tal confirmación requerirá a su vez, atender a otros asuntos que no he podido tratar acá, y que bien pueden ser considerados como preocupaciones previas al tratamiento de los derechos humanos como Carta Fundamental. Me refiero a las implicancias éticas y valóricas de las disposiciones, criterios y sensibilidades en la definición de persona humana. Con todo, la propuesta se origina en el debate en torno a la interpretación y aplicación de los derechos humanos, pero por estar basada en la sabiduría práctica aristotélica, el modelo bien podría ser replicado en otros escenarios que requieran sensibilidad contextual y énfasis en la determinación de lo justo y correcto en el marco de la justicia absoluta. He aquí la diferencia en el nivel de análisis provisto por los derechos humanos versus el que hallamos en la noción de dignidad, siendo esta más amplia que aquel, pero no por ello exenta de dificultades conceptuales e interpretativas.

6. Bibliografía

Aguilar, Carlos. (2023). "´El despertar de las máquinas´. Reflexiones acerca de los derechos y el estatus moral de la inteligencia artificial". *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 18, 213-242.

Andorno, Roberto. (2014). "Human Dignity and Human Rights." En H. ten Have y B. Gordijn (eds.), *Handbook of Global Bioethics* (pp. 45-58). New York / London: Springer

Aristóteles. (1988). *Política*. (M. García Valdés, Trad.). Madrid: Gredos.

Aristóteles. (1994). *Metafísica.* (T. Calvo Martínez, Trad.). Madrid: Gredos.

Aristóteles. (1999). *Retórica.* (Q. Racionero, Trad.). Madrid: Gredos.

Aristóteles. (2011). *Ética a Nicómaco*. (J. Pallí Bonet, Trad.). Madrid: Gredos.

Bermúdez, Rodrigo (2022). *Principio non bis in ídem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Beuchot, Mauricio. (1999). "La fundamentación de los derechos humanos como dilema moral", *Persona y derecho:*

Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, 41, 29-44.

Bonet de Viola, Ana María. (2016). "Consecuencias de la clasificación de los derechos humanos en generaciones en relación a la justiciabilidad de los derechos sociales". *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 46(124), pp. 17-32. http://dx.doi.org/10.18566/rfdcp.v46n124.a02.

Cardoso, Mario, Loureiro, Paulo y Sachsida, Adolfo. (2003). "Criminality and Social Interaction." *IPEA Discussion Paper*, 968. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.431867.

Castillo, Luis. (2005). "¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales?" *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, 12, 99-129. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2005.12

Centro de Derechos Humanos UDP (2022). *Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022.* Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.

Cicerón, (2016). *De las leyes*. (J. Pimentel Álvarez, Trad.). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (2021). *Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala*. https://www.camara.cl/

Dávila, Ximena y Maturana, Humberto, (2021). *La revolución reflexiva. Una invitación a crear un futuro de colaboración*. Santiago de Chile: Paidós.

Echeverría, Rafael. (2009). *El observador y su mundo. Volumen 1*. Buenos Aires: JC Sáez Editor.

Echeverría, Rafael. (2014). *Ontología del lenguaje*. Buenos Aires: JC Sáez Editor.

Francisco (2020). *Encíclica Fratelli Tutti*. Ciudad del Vaticano: Tipografía Vaticana.

Gadamer, Hans-Georg. (1991). *Verdad y Método I.* Salamanca: Sígueme.

Gadamer, Hans-Georg. (1998). *Verdad y Método II.* Salamanca: Sígueme.

Gilabert, Pablo. (2018). *Human Dignity and Human Rights.* Oxford: Oxford University Press.

Guterres, António (2020). *La aspiración más elevada. Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos.* New York: Naciones Unidas.

Hathaway, Oona, Crootof, Rebecca. (2012). "Which Law Governs During Armed Conflict? The Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law" *Minnesota Law Review*, 96, pp. 1883-1994.

Honneth, Axel (2011). *La sociedad del desprecio.* Madrid: Trota.

Horn, Christoph. (2009). "*Epieikeia*: the competence of the perfectly just person in Aristotle." En B. Reis (ed.), *The Virtuous Life in Greek Ethics* (pp. 142-166). Cambridge University Press.

Instituto Nacional de Derechos Humanos (2019). *Informe anual situación de los derechos humanos en Chile*. INDH. https://www.indh.cl/informe-de-ddhh-en-el-contexto-de-la-crisis-social/

Kant, Immanuel. (2016). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Barcelona: Austral.

Larii, Lurie y David, Mihail. (2019). "The influence of economic and socio-cultural factors on criminality." *Ştiinţe Socioumane*, 19(1), 101-107.

López-Alarcón, Nicolás. (2023). *Interpretación y aplicación del principio "non bis in ídem" en la jurisprudencia chilena sobre infracciones cometidas en el mercado de valores* [Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales]. Universidad de Chile, Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/196174.

Łuków, Paweł A. (2018). "Difficult Legacy: Human Dignity as the Founding Value of Human Rights." *Human Rights Review*, 19, 313-329. https://doi.org/10.1007/s12142-018-0500-z

Martínez, Víctor. (2006). *El Enfoque Comunitario. Estudio de sus modelos de base*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Martínez de Pisón, José. (2022). "Inteligencia Artificial y los derechos humanos. Viejos y nuevos retos de la filosofía del derecho." *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 17, 377-387.

Maturana, Humberto, y Varela, Francisco (2002). *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

McCrudden, Christopher. (2008). "Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights". *The European Journal of International Law*,19(4), 655-724. http://doi.org/10.1093/ejil/chn043

Ministerio de Justicia (1963). *No ha lugar a conmutación pena de muerte*. Archivo Nacional. https://www.archivonacional.gob.cl/sites/www.archivonacional.gob.cl/files/2022-02/Indulto%20Chacal%20de%20Nahueltoro.pdf

Nussbaum, Martha. (1999). "Conversing with the Tradition: John Rawls and the History of Ethics," *Ethics*, 109(2), 424-430

Nussbaum, Martha. (2020). "The Capabilities Approach and the History of Philosophy." En E. Chiappero-Martinetti, S. Osmani y M. Qizilbash (eds.), *The Cambridge Handbook of the Capability Approach* (pp. 13-39). Cambridge University Press.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2021). *Informe de seguimiento al "Informe sobre la misión a Chile del 20 de octubre al 22 de octubre de 2019"*. ONU. https://acnudh.org/a-dos-anos-de-las-masivas-protestas-chile-debe-seguir-fortaleciendo-los-derechos-humanos/

Ogunbanjo, Bimbo. (2024). "Analysis of the Challenges and Dilemmas in the Categorization of Economic, Social and Cultural Rights." *Al-Adab Journal* 150, 27-70. https://doi.org/10.31973/052x5y86

O´Neill, William. (2021). *Reimagining Human Rights. Religion and the Common Good*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Petrasek, David. (19 de febrero, 2020). "Human rights ´inflatión´— what´s the problem?", *Open Global Rights*. https://www.openglobalrights.org/human-rights-inflation-whats-the-problem/

Platón. (2022). *La República o el Estado* (P. Azcárate, Trad.). Ciudad de México: Austral.

Risse, Mathias (2018). "Human Rights as Membership Rights in the World Socie-

ty." *Carr Center Discussion Paper Series*, (2018)6, pp. 1-15.

Ríos-Patio, Gino. (2022). "Cuando la política no toma las cosas en serio". *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 52(136), 197-218. https://doi.org/10.18566/rfdcp.v52n136.a08.

Rodríguez-Blanco, Verónica (2012). "Towards a Concept of Human Rights: Inside and Outside Genealogy." *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 98(3), pp. 346-359.

Roshwald, Mordecai. (1959). "The Concept of Human Rights." *Philosophy and Phenomenological Research*, 19(3), 354-379.

Schwartz, Barry y Sharpe, Ken. (2010). *Practical Wisdom. The right way to do the right thing*. New York: Riverhead Books.

Serrano-Tárraga, María Dolores. (2014). "Exclusión social y criminalidad", *Revista de Derecho UNED*, 14, 587-618.

Taylor, Charles. (1996). "Identidad y reconocimiento". *Revista Internacional de Filosofía Política*, (7), 10-19.

Tierney, Brian. (2001). *The idea of natural rights. Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law. 1150-1625*. William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids: Michigan / Cambridge, U.K.

Villey, Michel. (1976). *Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Watzlawick, Paul, Beavin Bavelas, Janet y Jackson, Donald. (2002). *Teoría de la Comunicación Humana*. Barcelona: Herder.

Yunus, Nurrohim, Setiawan, Refly y Ngainnur, Siti. (2022). "Reposition of the universal declaration of human rights in the state legal system". *al Quistâs. Jurnal Hukum dan Politik*, 13(2), pp. 65-77. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7304



In Memoriam: Toni Negri

PRESENTACIÓN DE TONI NEGRI

PRESENTATION OF TONI NEGRI

Eduardo Molina Campano
Univesidad de Sevilla, Sevilla, España
Edula7@hotmail.com

Antonio Negri nace en Padua en 1933. El año en que Hitler subió al poder en Alemania y de la represión de Mussolini a la izquierda en Italia, entre ellos a Antonio Gramsci. En 1950, a los 17 años se convierte en militante de la juventud de acción católica, grupo en el que participaron otros destacados intelectuales italianos, como Umberto Eco. No obstante, cuatro años después se afilia al Partido Socialista de Unidad Proletaria que pronto se integraría al Partido Socialista Italiano.

Ese mismo año recibe una beca para estudiar en la Sorbona y también en Alemania donde tuvo como profesor a uno de los padres del marxismo heterodoxo Ernst Bloch, el filósofo de la utopía y la esperanza. Dos años más tarde, Negri se gradúa en Filosofía con una tesis sobre el historicismo alemán. Al poco tiempo, con 25 años obtiene ya una plaza de profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Padua.

Al año siguiente es elegido concejal municipal por el PSI y se convierte en editor de la revista de este partido. A partir de aquí, Negri combinó el mundo académico con la militancia política. Un ejemplo de ello son las charlas que ofrece, acompañado de su primera esposa Paola, a obreros sobre el Capital de Marx. Es en ese tiempo, cuando se vinculó a los Cuadernos Rojos que dirigía Raniero Panzieri desde su fundación en 1960 como corriente de izquierda del PSI. A través del método de la co-investigación los teóricos recuperan la encuesta obrera de Marx para obtener la información directamente de la clase en las fábricas a partir de la cual elaboraron sus enfoques teóricos, siendo uno de los temas fundamentales la composición de clase del nuevo sujeto, el obrero masa.

Los Cuadernos Rojos suponían una crítica por la izquierda al partido socialista y comunista a través de una relectura de Marx y Lenin en función del carácter de la nueva fábrica. De este trabajo surgiría el obrerismo italiano con todas sus escisiones y diferencias internas. En 1962 comenzaba el ciclo de luchas obreras que finalizaría en 1977. Negri, con motivo del levantamiento obrero conocido como los hechos de la Plaza Estatuto, donde destruyeron la sede del sindicato que había firmado la tercerización de los contratos en la Fiat, consideró junto a Tronti que había llegado el momento de un período de insurrección y revolución por parte de la clase obrera contra las instituciones del Estado.

Para esos propósitos, Tronti rompe con el PSI que propone pactar con la democracia cristiana pero también con los Cuadernos Rojos de Panzieri, el cual considera que es prematura la insurrección, y funda Clase Obrera. Negri tiene 30 años.

Durante los tres años que siguen, Negri sería influenciado teóricamente por Tronti. De éste adoptaría la visión heterodoxa que invierte la relación entre el capital y el trabajo para darle el protagonismo a la autonomía del segundo frente al primero. En concreto, la explicación según la cual las luchas obreras son las que explican los cambios de estrategia del capital para poder adaptarse y vencer a los trabajadores. De esta visión teórica se derivaría el autonomismo teórico y organizativo.

Las diferencias con Ranzieri residían en que éste no estaba de acuerdo con las tesis subjetivistas de Tronti y por extensión de Negri, que conllevaban una política voluntarista y ultraizquierdista, que podía ser aventurera e infantil. En 1967, Negri rompió definitivamente con Tronti por diferencias irreconciliables en torno al papel del partido como vanguardia y en concreto a la posición *entrista* de Tronti respecto al Partido comunista. Negri consolidó su autonomismo y su anti-vanguardismo partidista trasladando todo el protagonismo a la clase misma como único sujeto revolucionario. Ese año Negri fundó una nueva organización, Poder Obrero y una nueva revista, *La Clase*, que tendría una fuerte influencia en los acontecimientos del 68 y 69 en Italia como los momentos más intensos de todo el ciclo de luchas que comenzara en 1962.

En el ámbito académico se convirtió en catedrático de Teoría del Estado y director del Instituto de Ciencias Políticas de Padua. Poder Obrero se constituiría por primera vez en una organización de alcance nacional. Durará 5 años hasta que se disuelva por fuertes enfrentamientos internos y funde una nueva organización, Autonomía Obrera, en 1973 cuyo periódico se llamaría *Rojo*.

A partir de aquí Negri comenzaría su evolución post obrerista a raíz de los análisis de la revolución del 68 y en relación con el sujeto revolucionario. Tesis que trabajaría más seriamente en la cárcel a partir de 1979. Según Negri, la revolución del 68 marcó la división entre el obrero masa y su evolución hacia el obrero social, como antecedente conceptual de multitud. El obrero social ya no es el obrero industrial. Es todo aquel sujeto asalariado o no que está en una posición de opresión o marginación frente al poderío del sistema de poder político o económico.

1977 fue el año de la derrota del movimiento de la lucha obrera y estudiantil. Negri tenía 45 años. Fue el año de su primer exilio en Francia donde conocería a Luis Althusser del que recibió una gran influencia que le llevaría a abandonar la dialéctica hegeliana a través del estudio de Spinoza. Durante este primer exilio escribiría *Marx más allá de Marx*, una de sus principales obras. Fue producto de un curso dictado en la *École National Supérieure de la rue de l,Ulm* en 1978.

Son años de mayor control y represión por parte del Estado que produce a su vez una mayor orientación ultraizquierdista por parte del movimiento. Un año más tarde se funda Primera Línea como una organización de acción directa que parece estaba vinculada al entorno de Autonomía. El acontecimiento que se convirtió en el punto de quiebra para desatar la represión general de todo el movimiento sería el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas. Una organización terrorista que había nacido del movimiento estudiantil del 68. Antonio Negri fue detenido en Milán el 7 de abril de 1979 junto a 67 miembros de Autonomía Obrera. Es acusado por un juez de

ser el jefe de una organización conjunta donde Autonomía sería el brazo político y las Brigadas Rojas el brazo armado. Otro juez le acusaría directamente del secuestro y asesinato de Moro.

El 14 de abril sería trasladado a la cárcel de Rebbibia en Roma. Un Estado italiano con fuertes conexiones mafiosas —como años después se descubriría— necesitaba un chivo expiatorio que justificara toda la represión y escarmiento a los miles de activistas de izquierda. Tampoco se pueden olvidar las acciones terroristas de grupos de extrema derecha neofascista, como *Nuclei Armati Rivoluzionari*, que perpetró el más grave atentado terrorista de la historia de Italia en la estación de Bolonia.

Negri desde la cárcel redactó un documento de autodefensa donde explicó las absolutas diferencias de principios y de métodos con las Brigadas Rojas. No le sirvió de mucho. Fue en esos cuatro años de cárcel donde revisó su experiencia vivida y le dio un giro más acelerado a su heterodoxia. Escribe sobre Spinoza de donde extrajo su concepto de multitud, su idea de la democracia, del poder constituyente y la superación de la dialéctica como método marxista.

Coincidiendo con el inicio de la celebración del juicio en junio de 1983, Negri fue elegido diputado nacional por las listas del Partido Radical y salió de la cárcel, tal y como relata con detalle en su obra *El tren de Finlandia*. Esta elección responde al hecho de que amplios sectores de la sociedad italiana y relevantes ONG consideraban que se había atentado contra los derechos fundamentales de Negri. En septiembre, escapó y decidió exiliarse en Francia, justo cuando el parlamento empezara a discutir la suspensión de su inmunidad como diputado. Este exilio de más de 14 años pudo haber influido en su idea del "éxodo" como un nuevo método de lucha en la era de la globalización.

Este éxodo a Francia significó un período de influencia posmodernista que pensamos moderaría por la derecha el ya rectificado ultraizquierdismo obrerista. Aquí las ideas de Foucault, Deleuze y Guattari fundamentalmente, que también habían iniciado una cruzada anti-ideológica contra la ortodoxia estalinista francesa, le vienen como anillo al dedo para proponer nuevos conceptos que empalman con su anti-estatismo y anti-partidismo. Ideas como las de biopoder, biopolítica y el concepto de redes sin punto de origen central.

En junio de 1984 una audiencia de Roma condenó a Negri a 30 años de prisión. En Francia, protegido por el gobierno de Mitterrand, llegó a ser miembro del Colegio Internacional de Filosofía y profesor de ciencias políticas en París. Amnistía Internacional denunció las irregularidades del proceso de juicio contra Negri. Quizás este elemento nos hace comprender mejor la doble intencionalidad, una de ellas positiva, que le dio a las ONGs en su obre Imperio.

El 1 de julio de 1997 regresó a Italia tras la promesa de algunos diputados italianos de conseguir una amnistía para todos sus compañeros, a condición de que regresase y se entregase a la justicia. En 1999 consiguió un régimen de arresto domiciliario. Desde su casa en Italia afinaría los detalles para la publicación de *Imperio* que había escrito junto a Michael Hardt luego del final de la Guerra del Golfo y antes de la Guerra de Kosovo. El arresto domiciliario duraría hasta el 2004, año de publicación de *Multitud*, la contra cara de *Imperio*. A partir de ahí Negri combinaría

el oficio de escritor con giras de conferencias, entrevistas e impartición de seminarios en algunas Universidades. *Goodbye Mr. Socialism* (2006), *Commonwealth* (2009), *Instituciones del Común* (2010), *Declaración* (2012), su autobiografía *Historia de un Comunista* (3 tomos, el último aparecido en 2020 con el título *Da Genova a domani*), *Marx y Foucault: Enssays* (2017), *Biocapitalismo* (2017) son algunos de sus últimos libros.

CONVERSATORIO SOBRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE TONI NEGRI

CONVERSATION ON THE POLITICAL PHILOSOPHY OF TONI NEGRI

Entrevistador: Rafael Rodríguez Prieto
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
rrodpri@upo.es

Entrevistado: Eduardo Molina Campano
Universidad de Sevilla. Sevilla, España
Edula7@hotmail.com

Con motivo de su fallecimiento, el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO). Centro propio de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dirigido por el Prof. Ramón Soriano, programó el 20 de diciembre de 2023 en su sede un conversatorio con el fin de glosar su figura, además de honrar la memoria de uno de los más destacados intelectuales del siglo XX. El profesor Negri impartió clases en el doctorado sobre pensamiento político de la Universidad Pablo de Olavide, organizado por el Área de Filosofía del Derecho y Política de la citada universidad.

Rafael Rodríguez Prieto (**RRP**): Contamos con Eduardo Molina Campano, profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Eduardo ha desarrollado parte de su trabajo investigador y académico en la Universidad Pablo de Olavide y redactó la primera tesis doctoral en España sobre el pensamiento político de Toni —o Antonio— Negri.

Es un gusto contar contigo en este conversatorio y te agradecemos muchísimo tu disponibilidad. Sé que estás muy liado en este momento con tareas de investigación y de docencia. Nuestro objetivo hoy es realizar una breve semblanza académica de este autor sobresaliente y comentar tanto nuestros acuerdos, como reflexionar sobre los desacuerdos y críticas de la que su destacada obra sea susceptible, asumiendo el enfoque siempre crítico y nunca apologético, que Rosa Luxemburg seguía con Marx. Además, consideramos que no sería justo que no se recordara a un pensador con un trabajo tan dilatado y relevante; más en nuestro caso, que somos una universidad pública y, por tanto, con un sólido compromiso de servicio a la ciudadanía. El fin primordial es iniciar un debate, una reflexión crítica, en torno a las ideas que Toni Negri planteó, que pueda ser retomado en posteriores actos y con una mayor preparación.

Para comenzar, quisiera destacar su brillante fundamentación de lo que denominó en su libro *El poder constituyente*

como la línea maldita de la filosofía política, Maquiavelo, Spinoza y Marx. A mi juicio, se trata de una de sus principales aportaciones y un punto de inflexión en el pensamiento materialista contemporáneo.

Eduardo, ¿qué ideas te vienen a la mente en este momento que nos ayuden a conversar sobre este filósofo y activista? Al ser un acto denominado "In Memoriam Toni Negri", ¿qué cuestiones o planteamientos te parecen adecuados para iniciar este breve conversatorio?

Eduardo Molina Campano (**EMC**): Gracias, Rafa, por la presentación y por la iniciativa. Es un gusto poder debatir contigo sobre Negri. Además de ser mi director de Tesis Doctoral eres mi amigo y ni una cosa ni la otra nos imposibilita debatir y e incluso poder estar en desacuerdo. En un mundo académico como el actual me llena de orgullo.

Bien, muchas ideas me vienen a la mente. Realmente, Rafa, mi descubrimiento de Toni Negri responde a una curiosidad intelectual, debido a que organizaciones de izquierda rupturistas lo han acusado -una parte de ellas, al menos- de ser un renegado, un post-marxista, etc., pero con muy poco fundamento. Esa inquietud me condujo a realizar un trabajo de investigación para analizar hasta qué punto era cierto. Y, bueno, lo que yo descubrí era que Toni Negri realmente no era un post-marxista, sino que era un marxista de otro tipo; un marxista, si queremos, libertario, crítico no sólo con el estalinismo, sino también con un sistema de socialismos burocráticos y, por supuesto, con la socialdemocracia aliada del capital. También descubrí a un autor crítico incluso con el leninismo, en varios aspectos. Y a lo largo de mi investigación descubrí que tenía sentido, que su pensamiento tenía fundamento y que la crítica al leninismo, al trotskismo o al estalinismo estaba basada en la ontología, por tanto, en la realidad y no en la especulación o en deducciones especulativas. Hay que tener en cuenta que utilizaba un método de contraste muy ágil que también hemos visto en marxistas heterodoxos, como Thompson, quienes trataban de matizar siempre la teoría, a propósito de ciertos cambios extraídos de la realidad. Y no solo me convenció de que yo partía de una hipótesis errada, ortodoxa, basada en principios abstractos, ajena a esos cambios habidos en el mundo real, sino que me interesó, me atrapó su método interdisciplinario. Cualquier herramienta existente de las diferentes ciencias sociales es tomada como buena si sirve para analizar una realidad concreta. Y esa fluidez del método interdisciplinario fue también un gran aporte. Y así como todos los elementos nuevos que intentaban explicar los cambios en la realidad, los cambios en el modo de producción capitalista o lo que denomina la modificación de la composición técnica del mundo del trabajo conducen a una composición política -organizativa- distinta y a cambios en el papel del Estado.

RRP: Efectivamente, esa es una primera consecuencia que podemos compartir tanto con las personas que hoy están aquí con nosotros como aquellos que nos van a leer en la Revista Internacional de Pensamiento Político: su valentía, como se señaló al comienzo -ya pueda estar uno de acuerdo o en desacuerdo-, al estudiar las transformaciones del capitalismo y su impacto en la sociedad e incorporar este análisis a su propia praxis política. Buen ejemplo de lo que afirmamos es su libro sobre el tránsito del obrero masa al obrero social, la militancia en Poder Obrero

o su vinculación con otros autores como Deleuze o Guattari y, desde luego, su análisis de la obra de Spinoza, que creo que se trata de una de sus aportaciones más destacadas. Precisamente, su gran obra sobre Spinoza, *La anomalía salvaje*, la escribe en circunstancias dramáticas porque lo hace mientras se encuentra en prisión, cuando es injustamente acusado de terrorismo. Hay expertos que estiman que está malinterpretando a Spinoza dándole una dimensión que no tuvo, pero es innegable que también existe esa posibilidad interpretativa —que desarrolla tanto en esa obra como en una posterior donde compilaba una serie de artículos— de una sólida impronta materialista, que abre una vía muy interesante dentro del marxismo de finales del siglo XX y otorga a la democracia su importancia, a través de Spinoza y su definición como *omnino absolutum imperium*. No cabe duda de que tratar la democracia como el gran tema de un materialismo renovado, no para adaptarse y aceptar el capitalismo, sino precisamente para justo lo contrario, es la confirmación de que Negri es un pensador especial, un clásico. Es justo eso lo que sucede cuando brillantemente analiza el poder constituyente y entiende que Spinoza funda el materialismo moderno. Cuando llega el siglo XXI percibe que hay un cambio donde el Estado parece perder esa relevancia que sostiene las tesis leninistas del imperialismo y es cuando desarrolla con Hardt la trilogía *Imperio*, *Multitud*, *Commonwealth* y, posteriormente, el libro *Asamblea*. En consecuencia, podemos afirmar que una primera característica de su pensamiento es tratar de ir siempre con los tiempos, no fosilizarse, no petrificarse de acuerdo con los principios de una rígida ortodoxia.

EMC: Sin duda e implica un cambio de perspectiva respecto a las organizaciones de izquierda rupturista que a veces son ajenas al cambio, ajenas a la realidad, sobre todo cuando esas organizaciones se desvinculan de los movimientos sociales. Es una lógica leninista que pareciera que no tiene contexto para arraigar. Aunque usara a algunos autores post-marxistas para la caja de herramientas, no quiere decir que Negri fuera un post-marxista, simplemente por ese hecho.

RRP: Sí, eso se le critica mucho en las reseñas que han salido durante estos días; por ejemplo, en las notas de prensa sobre su vida. Algunas están mejor, otras están peor, incluso con errores en torno a su pensamiento o sobre su vida. Pero hay algunas que están más fundamentadas. Y algunas valoraciones de su obra plantean que cuando él tiene que exiliarse en Francia y allí contacta con Deleuze, Foucault y toda esta filosofía francesa, esta huida, de alguna forma, influye en que pierda gran parte de su base marxista o de su perspectiva crítica y se abandone a lo que acabas de comentar…

EMC: Sí, y no estoy de acuerdo con esas críticas porque nunca, desde el principio hasta el final de su vida, negó el concepto de lucha de clases que es un concepto fundamental. Es decir, en el momento en que un autor reniega de la lucha de clases, se ubicaría en el post-marxismo, como sucedió por ejemplo con Ernesto Laclau. Pero Negri nunca lo hizo. Siempre defendió la lucha de clases. Su pensamiento se adecuaba a los cambios que ha habido en el sistema, en la economía, en la estructura, en la sociedad, también en la psicología, en el sentido común de la sociedad, y en la cultura que también cambia. Y bueno, después del análisis

del experimento del socialismo realmente existente, sacó lecciones teóricas de esa realidad. Y eso es lo que a veces ha faltado en el mundo de la izquierda, sacar lecciones de esa experiencia. Y en mi opinión, no se ha hecho todavía en serio porque implica una necesidad de reestructuración profunda. Y parece ser que esta revisión cuesta mucho por el carácter conservador de la ideología, en general. Cuesta hacer esa crítica sincera que implique cambios en la teoría. Y yo creo que eso es lo que Toni hace. De estos autores citados anteriormente toma el concepto de poder, las relaciones de poder, pues en función precisamente de lo ocurrido en la Unión Soviética se extrae la lección de que el socialismo de Estado realmente lo que hizo fue reproducir las jerarquías de poder del propio capitalismo. Al final de cuentas, el socialismo era una transición hacia el comunismo definido por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Por ejemplo, el caso de los planes quinquenales. Desarrollar las fuerzas productivas… ¿qué indicaba eso? Pues indicaba la explotación del trabajo obrero en las fábricas, la implementación de las mismas técnicas tayloristas de las fábricas capitalistas y la reproducción de las jerarquías de poder. Entonces, vemos cómo la influencia de estos autores pone en su cabeza ideas que le permiten salir de ese bucle. Es la democracia que ha sido expropiada por una élite que supuestamente era infalible, desde el propio Lenin hasta el último líder de la URSS lo que también le interesa. Hay una crítica a esa infalibilidad de los líderes que me parece sumamente sugestiva y oportuna en función de lo que ha ocurrido en la realidad.

RRP: Sí, efectivamente.

EMC: "Nunca se podían equivocar" y dirigían, supuestamente, un proceso revolucionario hacia el éxito. Y vimos que eso no fue así. Negri fue capaz de estudiar los elementos teóricos del marxismo a la luz de las experiencias socialistas.

RRP: Sí, desde luego el gulag y toda la represión vivida por la ciudadanía de los regímenes de socialismo de Estado es un claro ejemplo de su degradación. Como dices es una crítica que no se ha hecho. Justo en el momento del derrumbe, muchos pululaban sin rumbo, hasta que se abrazaron al esencialismo identitario, al tercermundismo o a teocracias. Hoy en día, padecemos los lodos de aquellos polvos.

Por otra parte, Negri señala que una de las cosas que más le fascina del capitalismo es precisamente su capacidad de adaptación, su audacia para sobrevivir a casi cualquier circunstancia. Ahora mismo el capitalismo está en un momento, yo creo, realmente muy interesante de inflexión por la revolución tecnológica, donde se incluye internet, la inteligencia artificial como fuerzas claramente transformadoras. Algo de lo que habitualmente no se habla, o se hace de forma muy tangencial, a veces, hasta bobalicona, es de los puestos de trabajo que van a sobrar y las tensiones sociales que se pueden generar. Aunque se creen otros nuevos, no creo que puedan compensar y el capitalismo va a necesitar algo más que esta herramienta de alienación masiva que se denomina teléfono inteligente para tener a la gente tranquila. Me parece que tendrá que volver a adaptarse a una situación que puede generar enormes conflictos sociales. Negri señaló en más de una ocasión que lo que le fascinaba en sentido

intelectual del capitalismo era esa adaptabilidad.

EMC: Y, de hecho, ya hablaba de que el propio capitalismo había desarrollado en un alto grado las fuerzas productivas, y por tanto no era necesario el socialismo como transición, sino que la última revolución tecnológica permite potencialmente emancipar al género humano de la esclavitud del trabajo asalariado para producir los bienes y servicios.

RRP: Efectivamente, y eso a él lo motiva mucho en esta época, en el final del siglo XX, en la medida que ve como una posibilidad cierta de que a través de la cooperación y la tecnología se logre lo que la lectura del marxista español Juan Carlos Rodríguez del Manifiesto Comunista denomina una libertad sin explotación. No obstante, este feliz derrumbamiento de esas dictaduras no supuso lo que se esperaba, por ejemplo, en libros como *Las verdades nómadas* con Guattari. Más bien lo contrario. En vez de evolucionar hacia unos Estados más democráticos que lo liberales, gracias a una sociedad civil que tenía una buena formación y sobre todo ansias de libertad, lo hicieron hacia un neoliberalismo brutal, trufado de pillaje. Hoy, Gobiernos fuertemente autoritarios como el de Putin, de corte nacionalista y autocrático, son buenos ejemplos de este desdichado camino.

En lo que respecta al cambio tecnológico, algunas promesas parecen incumplidas, aunque bien es cierto que nos queda esperanza. Hoy internet es un campo de batalla entre tendencias cooperativas y privatizadoras. De todas formas, es evidente que grandes empresas tecnológicas —como por ejemplo las cuatro grandes Amazon, Alphabet, Meta, Apple— nos muestran un capitalismo en que las corporaciones no solo cuentan con la capacidad de influir en los Gobiernos como antes, sino que además tienen la gran ventaja de meterse en las partes más recónditas de nuestro cerebro y conocernos muy bien, mientras extraen plusvalía de nuestros datos. Creo que este hecho, junto con el reforzamiento que hace internet de la vigilancia en Estados autoritarios y en dictaduras, hace que necesariamente afrontemos de manera más fría y cautelosa el desafío que hoy es internet. En el caso de Negri, mi sensación es que, en aquel momento, es un entusiasta que entiende los cambios como oportunidades y además tiene sendas dosis de optimismo, lo que no es malo. Puede errar el pronóstico, pero abre vías de reflexión pertinentes y siempre va con los tiempos que le ha tocado vivir.

EMC: Exactamente y es de apreciar su sentido optimista de la vida, ¿no?

RRP: Sí, yo creo que eso se lo regala Spinoza, cuando habla de las pasiones alegres frente a las pasiones tristes.

EMC: Exactamente, eso tiene ese subjetivismo…

RRP: El estudio de los Grundrisse y su análisis de Spinoza son muy importantes, en este sentido…

EMC: Él era un subjetivista y optimista desde el punto de vista de la acción social, y eso lo definía también en lo personal. En sus últimos días, a pesar de que está viendo, bueno, con preocupación, toda esta deriva autoritaria de los nacionalismos populistas que le recordaban al fascismo. Desde el punto de vista cultural hay vasos comunicantes con el fascismo. No se puede repetir exactamente el fenómeno histórico, pero sí obedece este resurgimiento del nacional-populismo de

derechas a un contexto parecido, aunque con características distintas, como decía Nicos Poulantzas, en base a la crisis del sistema, crisis económica, crisis de hegemonía, crisis de representatividad de los partidos liberales a la hora de gestionar la crisis social, y bueno, Negri estaba preocupado, ya que tenía perfectamente interiorizado el nivel de crueldad y de destrucción que traen los fascismos a la humanidad. Está muy presente porque lo vivió, ¿no?

RRP: Sí, tengo entendido que por su hermano. Lo perdió cuando se alista en la milicia contra Mussolini con 16 años y muere. Y por su padre también.

EMC: Exactamente y percibió que existe una posibilidad de que el aumento de las guerras regionales, de estos últimos años, puedan conducir a una crisis mundial… a una crisis catastrófica.

RRP: Efectivamente, hemos comentado, por un lado, su rechazo al totalitarismo soviético de toda aquella época, y al mismo tiempo, recuerdo que cuando estuvo en Sevilla con nosotros planteó también la idea de que cuando el capitalismo está en crisis, en una crisis profunda, termina siempre por jugar la carta del fascismo. O sea que el capitalismo resuelve su crisis con el fascismo.

Quisiera recordar unas palabras de Alex Callinicos, quien tuvo un destacado debate con él, a propósito de la idea de imperio frente al imperialismo, un párrafo muy certero escrito en el obituario que le dedicó hace unos días.

> Toni y yo debatimos esta cuestión poco después de su liberación, ante un público numeroso y entusiasmado, en el Foro Social Europeo celebrado en París en octubre de 2003. Era un orador formidable, aunque suave y cortés en la conversación. Pero sus modales ocultaban la fuerza política que le llevó a la cárcel para contribuir a la supervivencia del marxismo en el siglo XXI.

Me parece una síntesis muy bien expresada de la relación entre la teoría y la praxis y refleja también muy bien esa fuerza argumentativa que tenía Negri y que se encuentra en su obra y también en su trayectoria personal.

EMC: Sí, tuve la ocasión de conversar con Alex Callinicos hace un par de años, en el Encuentro de debate político que organiza el Partido Socialista de los Trabajadores en Londres, y conversamos brevemente sobre este tema y me di cuenta de que todavía lo tiene muy presente, sobre todo la idea de imperio.

RRP: Cuando la universidad es un espacio abierto de intercambio, de reflexión, de pareceres diferentes o contrarios, pero, sobre todo, de debate y de contraposición de ideas, está cumpliendo con su trabajo en la sociedad. Desgraciadamente, una parte minoritaria, pero tan sectaria como ruidosa de la izquierda, lleva tiempo tratando de convertir la universidad en un espacio ligado al dogmatismo y a la negación *per se* del otro. Esta actividad la acerca no solo al totalitarismo, sino que además la empobrece intelectualmente. Estoy convencido de que aquellos que nos identificamos con esta tradición que apunta Negri debemos entender la universidad como un espacio de debate y contraposición de ideas en el que demostremos que las nuestras son las mejores para la sociedad.

EMC: Yo veo una contradicción lógica entre el mundo de la academia y el mundo de los partidos políticos. ¿En qué sentido? En que en la academia se tiene que reflexionar y se tiene que dudar para poder

llegar a aportes originales, pues a través de los trabajos de investigación se contrastan preguntas iniciales o bien con teoremas o con la realidad. Pero en los partidos políticos no se puede dudar tanto. Un partido de izquierda, por ejemplo, que desea llegar a transformar la sociedad, necesita convertirse en un partido político hegemónico y no puede estar dudando todo el tiempo ante sus bases sociales, sino que debe tener un programa bien establecido con el cual convencer a una base social, ya sea para integrarla dentro del partido o para influenciar a la ciudadanía de que vote por él, en el caso del juego democrático. La lógica de los partidos políticos se basa en que, entre menos dudas, mucho mejor de cara a convencer o "adoctrinar" a una base social que necesita seguridades, que se mueve, diría yo, con presupuestos casi religiosos, como sinónimo de ideología como falsa conciencia. Y eso siempre lo he visto y Negri, en mi opinión, tuvo la virtud de ir construyendo nuevos elementos teóricos, pero siempre con precaución, sin darle categoría de verdad, tratando de atenuar esa diferencia entre el mundo académico y el mundo de los partidos políticos, quizás porque se vinculó ya desde hace tiempo a los movimientos sociales.

RRP: Y, para ir terminando, podríamos plantear una última parte de ¿qué futuro tiene este legado?

EMC: Yo le veo un gran futuro, simplemente, porque es uno de los pocos marxistas que ha sabido combinar el pensamiento marxiano con los movimientos sociales. Y la idea de libertad que está en los movimientos sociales es tan poderosa como inclusiva. Y en esa transición, que implica superar de una vez por todas el legado del socialismo real va a ser un referente; o mejor dicho ya lo es, especialmente mediante su vinculación teórica con el movimiento libertario. Ojalá su reflexión influya en los partidos políticos de la izquierda española tan fragmentada y desacreditada por los egos de sus líderes.

RRP: Yo creo que sí. Que ha dejado un rico legado intelectual; que hay una serie de herramientas que pueden ser de ayuda, sobre todo, desde el punto de vista, en lo que implica la línea maldita, como él llama, de la filosofía política, en el establecimiento de una tradición con unas bases filosóficas sólidas, que nos permiten analizar nuestras sociedades y esbozar alternativas, sin caer en las trampas teóricas que el capitalismo tiende a sus críticos. Actualmente, no solo tenemos que enfrentar un capitalismo fuerte y decidido a extraer toda la plusvalía posible, lo que implica también el gran desafío ecológico sobre el que hay todo un marketing que oculta el vínculo entre producción y destrucción de la naturaleza, sino una falsa izquierda dominada por el populismo y el social-liberalismo. Me parece que la aceptación de las tesis de Laclau está en gran medida en el corazón de la crisis que atraviesa la izquierda. También creo que ese desnortamiento por la caída del socialismo real dura porque cuando la izquierda empieza a abrazar determinadas tesis, pues, como pasa en España, por ejemplo, nacionalistas, eso, desde mi punto de vista, es un problema de enorme gravedad, o cuando la izquierda olvida la clase social, como un referente fundamental, también, como hemos analizado, por ejemplo, en esta universidad, con un congreso dedicado al pensamiento de Rosa Luxemburg, que, por cierto, debería estar mucho más presente porque sus aportaciones, en general, son muy valiosas. Cuando también la izquierda se adhiere a no sé qué po-

siciones teocráticas, también es grave e incomprensible. El propio Foucault apoyó a Jomeini cuando la revolución iraní. O el apoyo a grupos terroristas, como el caso de Hamás o Gobiernos fuertemente autoritarios en Iberoamérica… entonces, me parece, que una posición en la que la cuestión de clase sea central, y, sobre todo, con una clara crítica rupturista con el modelo capitalista y sus diferentes mutaciones, ahí, en Negri, existen herramientas que se pueden aprovechar, otras quizás no, pero, bueno, siempre habrá otra persona que tenga alguna opinión diferente y nos pueda convencer de ella. En definitiva, estimo que bastantes de sus aportaciones son de una tremenda ayuda para nosotros en un contexto de desarrollo tecnológico que realmente desconocemos a dónde nos conduce. La izquierda no está para desaprovechar ninguna contribución que la puede fortalecer. Ya lleva demasiado tiempo debilitándose…

EMC: Yo veo que el populismo de Laclau y la teoría autonomista de Negri, desde el punto de vista de la democratización de todas las instituciones, de la creación de instituciones del común, como él lo llama, no son del todo incompatibles en tanto en cuanto el populismo no deja de ser una necesidad a la hora de poder articular a esas multitudes dispersas que ya no son una clase obrera industrial homogénea ni concentrada en grandes fábricas. Esa articulación hegemónica de los diferentes grupos que conforman la multitud como nuevo sujeto heterogéneo de clase, tiene que ser obra de los actores políticos, aunque vinculados y supeditados directamente a los movimientos sociales como fuerza constituyente.

RRP: No creo que el populismo de Laclau sea compatible con Negri, al igual que el pensamiento de Gramsci, tampoco lo es, pero eso nos llevaría a un debate que haría este conversatorio más largo. Me gustaría, porque considero que es importante, subrayar la posición de Negri contra el terrorismo, ya que he leído algunas reseñas en las que se le atribuye una posición ambigua. Toni Negri en sus escritos deja meridianamente claro su rechazo del terrorismo y no hay más que leer sus libros *El tren de Finlandia* o *Las verdades nómadas* para darse cuenta del gran ataque que en su persona se realizó, por parte del Gobierno de aquella época, al movimiento de autonomía obrera, que representaba una línea distinta y alternativa frente al pactismo socialdemócrata y al comunismo soviético.

EMC: Por supuesto. Que todavía se acuse a Negri de pertenencia a una organización terrorista como fueron las Brigadas Rojas, es de mala intención. Más bien Negri era un pacifista. Otra cosa es que, en algún momento de su vida, al principio, pudiera haber usado una táctica de conflicto contra el Estado, una práctica de acción directa.

RRP: Sí, creo que te refieres a su obra *Dominio y sabotaje*. Creo que podemos estar en desacuerdo, pero de ahí a lo dicho por el ministro de Cultura de Italia, acusándolo de mal maestro, comentario ya típico en la derecha italiana y, puede que en sectores de la izquierda que tampoco lo podían ver… y, sobre todo, la atención mediática que en España ha recibido el comentario de este señor en las necrológicas que publicaron hace unos días. Realmente, ¿hasta qué punto tiene significación este personaje? No sé… quizá hubiera sido más justificado las críticas de otros, a lo mejor de pensadores liberales. ¿Quieres comentar algo más sobre el populismo?

Te veo con ganas de profundizar en la idea y siempre nos gusta polemizar.

EMC: A nivel táctico, la táctica populista, más allá de que nos pueda gustar o no, hemos visto que es pragmática, que da réditos políticos. Que es factible construir una alianza de diferentes sectores y que desde el punto de vista democrático-liberal se puede llegar al poder en un momento populista como lo llama Laclau. El problema es ¿qué viene después? Mientras que Negri va a lo estratégico, va a crear instituciones que perduren a las existentes, una especie de nuevo doble poder para que en un momento de crisis orgánica puedan sustituir a las existentes. Es una especie de reforma democratizadora como transición hacia una sociedad nueva, distinta, a diferencia de la estrategia leninista tradicional de tomar el poder, etc. Nueva versión de la transición y la dictadura del proletariado. Pero a esta estrategia democrático-reformista de largo alcance quizás le hace falta la variante partidista cuando llegan los momentos de crisis. Mi experiencia en Iberoamérica es que la táctica populista de articulación de las multitudes en torno a una cadena de equivalencias que una las demandas de todos los grupos contra el poder de las élites es una forma democrática y poco sectaria de incorporar a todos los movimientos sociales en un nuevo bloque histórico con potencialidad emancipadora.

RRP: Pero, desde mi punto de vista, eso ya está inventado y es la hegemonía tal y como Gramsci la concibió. Lo que pasa es que Laclau también hace una interpretación un tanto, digamos que, criticable de Gramsci. Igual que de Gramsci ha habido análisis que lo convierten en un autor, en vez de revolucionario, reformista, Laclau también hace a Gramsci laclauniano, como se ha dicho. Y le resta toda esa, yo creo que, potencia revolucionaria, que tiene la cuestión de la hegemonía y la diluye en un conjunto de diferentes grupos, en ocasiones, con ideas hasta conservadoras, por decirlo de una forma suave. No creo que ni tan siquiera desde una perspectiva táctica tenga utilidad, más bien lo contrario.

EMC: Laclau abandonó el objetivo estratégico, de ahí la necesidad de articular ambos enfoques teóricos. La táctica populista partidista de Laclau con el proyecto de los movimientos sociales de creación de instituciones del común, fuera de la lógica mercantilista del sistema, como promueve Negri.

RRP: Creo que la cuestión del liderazgo también es un factor para tener en cuenta.

EMC: Sí, porque Laclau tenía como objetivo radicalizar la democracia. Ese es el objetivo, pero no trascender al capitalismo. Radicalizar la democracia como objetivo. Negri tiene otro objetivo, que es trascender al capitalismo, igual que Gramsci también lo tiene. Esa es la diferencia. Pero se pueden combinar lo táctico con lo estratégico. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede combinar? No lo veo incompatible.

RRP: Será para otro debate, también. Como ven, nosotros... bueno, cualquier diálogo con Eduardo, el profesor Eduardo Molina Campano, es muy interesante, porque no solamente tiene un conocimiento profundo de Negri y de otras cuestiones del ámbito de la historia y de la filosofía política, sino que, además, es dado al intercambio, la reflexión, a contraponer nuestros puntos de vista, a veces cercanos, otras veces enfrentados. Era la persona ideal. Tenemos toda la suerte, además, que escribiste un libro

muy importante sobre el pensamiento de Toni Negri titulado *La filosofía política de Toni Negri. Un debate abierto sobre la renovación de la teoría marxista* (Atrapasueños, 2019). Para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Y creo que esta aportación que has realizado esta mañana es de enorme interés, sobre todo por la urgencia. Porque antes hablábamos de que nos hubiese gustado releer algunos textos y tus obligaciones universitarias, lo has dicho, lo han impedido. No obstante, era necesario realizar esta actividad académica, este recuerdo a un gran maestro y un esforzado activista.

EMC: Ha sido un gusto, gracias, Rafa.

RRP: Esperamos en los próximos años realizar más actividades de algún otro tipo académico en torno a la figura de Toni Negri. Y bueno, sobre todo seguir reflexionando, leyendo y analizando su pensamiento político que empieza con una tesis doctoral que fue sobre los orígenes del formalismo jurídico y que se fue desarrollando hasta este último texto, que es creo que el último, el de su tercer tomo de *Historia de un comunista, de Génova a Mañana*, y que resulta también un testimonio de una época. Por cierto, en la página 302 de la edición italiana se habla de su viaje a Sevilla o de su impresión del 15M, que curiosamente conoció justo en esta ciudad, en un paseo por Las Setas. A nivel personal, nos produjo una muy buena impresión. Era una persona sencilla, cercana y siempre interesada en las cuestiones sociales. Recuerdo su gusto por el fútbol y el Milán. A veces, lees al alguien que te dice cosas que consideras importantes y que te influyen y luego lo conoces y… se te cae un poco la buena impresión que su trabajo intelectual te había dejado. En el caso de Toni Negri es justo lo contrario. Haberlo conocido te estimulaba a leer más su obra, por supuesto, críticamente. Nos despedimos y muchas gracias por su atención.



Estudios Varios

UN ACERCAMIENTO HISTÓRICO-CONCEPTUAL A LA SUBSUNCIÓN DE LA PLURALIDAD DE CAMPOS EXISTENCIALES POR UN MONISMO PARTICULAR: POLÍTICA Y ECONOMÍA COMO FENÓMENOS TOTALITARIOS[1]

A HISTORICAL-CONCEPTUAL APPROACH TO THE SUBSUMPTION OF THE PLURALITY OF EXISTENTIAL FIELDS BY A PARTICULAR MONISM: POLITICS AND ECONOMY AS TOTALITARIAN PHENOMENA

Israel Arcos Fuentes
Universidad del País Vasco, Bilbao, España.
israel.arcos@ehu.eus

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: totalitarismo, esferas socioculturales, Modernidad, política, neoliberalismo.
Keywords: totalitarianism, sociocultural spheres, Modernity, politics, neoliberalism.

Resumen: Más allá de la acepción politológica, el totalitarismo se daría cuando una esfera humana particular subsume la totalidad de la existencia bajo sus propios criterios, acabando con la autonomía del resto de esferas. De este modo, no sólo lo político se puede tornar totalitario, colonizando otros campos, sino que, como muestra el neoliberalismo, la economía también. Abordaremos estos dos fenómenos de totalización exponiendo cómo la autoafirmación humana se desplegó durante la Modernidad configurando diferentes esferas socioculturales autónomas, las cuales han padecido intentos de determinación heterónoma. No obstante, señalaremos la excepcionalidad de lo político, pues este campo, pese a poderse volver totalitario como cualquier otro, es el encargado de velar por la salud del resto de dominios.

1 El autor ha podido realizar el siguiente artículo gracias a las "Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023 UPV/EHU" (Margarita Salas, cód. MARSA 21/04), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y el Ministerio de Universidades.

Abstract: Beyond the politological meaning, totalitarianism occurs when a particular human sphere subsumes the entirety of existence under its own criteria, thereby eliminating the autonomy of other spheres. In this way, not only can the political sphere become totalitarian by colonizing other fields, but as neoliberalism shows, the economy can as well. We will address these two phenomena of totalization by explaining how human self-affirmation unfolded during Modernity, shaping different autonomous sociocultural spheres that have experienced attempts at heteronomous determination. However, we will highlight the exceptional nature of the political sphere, as this domain, despite its potential to become totalitarian like any other, is responsible for safeguarding the health of the other domains.

1. Introducción

Normalmente se suele asociar el totalitarismo exclusivamente con el campo político (Arendt, 1951; Linz, 2010). La conciencia occidental ha sido tan fuertemente desgarrada por las experiencias políticas del pasado siglo, concretamente por el nacionalsocialismo y el estalinismo, que sólo es capaz de concebir el totalitarismo bajo los modos con los que se expresa en la esfera de lo político. Y, sin embargo, desde las últimas décadas, hemos visto como una racionalidad económica pretende absorber la totalidad de la vida social bajo su normatividad, en lo que se ha venido denominando en las ciencias sociales neoliberalismo (Ahedo y Tellería, 2020; Foucault, 2009; Dardot y Laval, 2013; Slobodian, 2021). Ello lo que nos muestra es que el totalitarismo no sólo es de carácter político, sino que también puede ser de índole económico. Y es que a nuestro juicio, bajo una mirada sociológica, el totalitarismo supone que una esfera de acción subsuma al resto de esferas bajo sus propios criterios, secuestrando sus respectivas autonomías y criterios de normatividad. El totalitarismo se produciría cuando un campo particular de la existencia humana pretende determinar al resto, subsumirlos bajo su influencia, tornarse absoluto.

Según el relato weberiano, el despliegue de la Modernidad supuso la configuración, diferenciación y autodeterminación de diferentes esferas socioculturales con sus propios criterios de normatividad, actualizada hoy esta perspectiva por Habermas (2010). Con ellas podríamos decir que el sujeto se realizaba a través del ejercicio de su libertad en el espacio privado, entendida esta libertad al modo de los *modernos* como diría Constant (2020). Aunque problemática, esta tesitura ha sido la condición existencial del individuo moderno, por lo menos, la del burgués, la cual trató de ser superada por alguno de los distintos campos de la acción humana. El primer intento por superar esta cosmovisión existencial provino de la política al calor de la irrupción de las masas[2]

2 A partir de ahora trataré de utilizar el término masa lo menos posible por sus connotaciones despectivas y elitistas en su uso a lo largo del tiempo por diferentes autores. Para ello nos serviremos de otros términos, como el de multitud o mayoría social. No querría caer en la discursividad que se dio en las primeras décadas del siglo XX por la cual se generó un debate sobre los problemas que produjo la irrupción de la mayoría

demandantes de justicia en la primera mitad del siglo XX y de la inestabilidad social derivada, ya que el ejercicio por parte del burgués de esta libertad en la esfera privada, relacionada con el desarrollo capitalista, supuso, además de desigualdades sociales, un fuerte apoliticismo que trató de ser contestado con una vuelta al modelo político de *los antiguos*. Esto es, un retorno de lo político como sustrato esencial de la vida social, determinando así la política al resto de esferas socioculturales bajo su despliegue totalitario. Después, tras el fracaso de la política totalitaria y el posterior derrumbe del pacto fordista de posguerra con la crisis del petróleo de 1973, esta autonomía de las diferentes esferas de acción intentó ser superada mediante una economía que, simulando retornar a esa cultura burguesa escindida en diferentes campos autónomos, acabó subsumiendo al resto de esferas socioculturales bajo sus designios, volviéndose totalitaria.

De todos modos, se hace necesario hacer una aclaración sobre la excepcionalidad de lo político frente a otros campos de acción. Si bien es cierto que cualquier dominio social o cultural que acabe subsumiendo al resto nos muestra su acción totalitaria, la política tiene un cariz especial. Ella es el fundamento sobre el que descansa la sociedad, la que garantiza el orden necesario para el desarrollo armónico de los diferentes campos de la existencia humana. Sin ese orden que impregna la política no habría vida social, sino caos social. Además, como diría Carl Schmitt (1991a), concretar el campo de la política se vuelve difícil, ya que cualquier ámbito de la vida humana puede tornarse conflictivo y, por tanto, politizarse. Junto a esta indeterminación y carácter flexible de lo político se suma su singularidad. Y es que la política es la encargada de velar por la buena salud del resto de campos, pudiéndose solucionar algunas patologías sociales mediante políticas públicas. No obstante, con su potencial, en su intensidad máxima, de igual modo puede volverse nociva, hacerse totalitaria. Todo ello sería la excepcionalidad de lo político a diferencia de otros campos de acción.

En cualquier caso, primero nos centraremos en la esencia del totalitarismo, definido aquí como la subsunción de la vida a manos de una esfera sociocultural particular. Para tal fin realizaremos un acercamiento conceptual, mediante una perspectiva histórica, al fenómeno de subsunción o totalización de la existencia por un ámbito concreto[3]. Es a través de las diferentes totalizaciones que se han dado a lo largo del desarrollo histórico por alguno de los diferentes dominios, político, religioso, económico, etcétera, como se puede aprehender este fenómeno. Se intentará ver la evolución de los distintos rostros de la determinación de la existencia por un campo particular a través del despliegue en la Modernidad de la autoafirmación humana que intenta liberarse de ellos. De la mano de esta afirmación del individuo moderno, se irán simultáneamente desplegando y produciendo las diferentes esferas culturales y sociales

social, de los hasta aquel momento invisibilizados en el espacio público, y que desestabilizó las democracias burguesas. El término masa se puede ver en la retórica de publicaciones de la época, como las de Ortega y Gasset (1993), Gustave Le Bon (2000) o Freud (1969).

3 Otto Hintze (1968: 264 y ss.), por ejemplo, igualmente consideraba necesaria esa articulación entre el acercamiento conceptual mediante la abstracción teorética de los diferentes sistemas culturales y el enfoque histórico, buscando sus relaciones.

con sus propios criterios de normatividad. Evidentemente, no se podrá profundizar en este largo viaje. Sólo será descrito para poder ver la lógica de la totalización, haciendo hincapié en el totalitarismo político del siglo XX y en el económico, surgido este último en la década de los ochenta del pasado siglo y que llega hasta nuestros días bajo la denominación de neoliberalismo. Si bien cualquier esfera puede tornarse totalitaria, son la economía y la política, por su condición estructural, las que más facilidades tienen para ser partícipes del ejercicio de totalización o subsunción de la vida con su despliegue. Por eso Marx pensó la economía como el dominio determinante de toda formación social (Marx, 1976), o Schmitt reflexionó lo político como la esfera sustancial de las sociedades (Schmitt, 1991a). Es en este último dominio de lo humano, lo político, sobre el que haremos una mención especial por su singularidad al final del presente escrito.

2. Pasajes históricos sobre la diferenciación y autonomía de las esferas socioculturales

2.1. Del mundo premoderno a la consolidación moderna

El despliegue de la acción humana ha supuesto la configuración de una gran variedad de campos donde se desarrolla. Sobre todo tras la caída del sustento teológico y el inicio de la Modernidad, que hizo que el ser humano tendría que valerse por sí mismo y legitimar solo su propia existencia (Blumenberg, 2008). El sujeto tendrá que autodeterminarse, logrando su autonomía según la narrativa burguesa, pues no tendrá otro remedio ante la caída de los fundamentos trascendentes sobre lo humano. La existencia humana y sus diferentes esferas de acción tendrán que buscar su propia normatividad. Pero antes de ello nos dirigiremos a los tiempos premodernos, donde todavía no se había dado esta situación de diferenciación de esferas autodeterminadas.

En las sociedades tradicionales la autonomía del individuo no existía. Por lo menos, tal y como la conocemos desde esos inicios de la Modernidad que fueron los del Renacimiento, donde, según Jacob Burckhardt (1946: 119), irrumpe lo "subjetivo" por primera vez: "el hombre se convierte en individuo espiritual". Incluso en una de las cúspides de la historia de la humanidad como fue el mundo griego, la libertad individual y la autonomía no existían. Así lo recordaba Hegel, quien, pese a ello, siempre admiró al mundo griego y a la *polis*, como el resto de sus compañeros de estudio de Tubinga, Hölderlin y Schelling. Para Hegel se dio la más bella unidad sustancial en el mundo griego, pero para la autonomía, para la autoafirmación de la subjetividad, habría que esperar a la Reforma, a la Modernidad (Hegel, 1971: 437 y ss.). Lo que sucedía con los griegos y romanos, inventores ambos de la política (Finley, 2016: 76) y, concretamente los griegos, de su disciplina teórica (Wood, 2011: 14; Strauss, 2006: 27), es que poseían una política fundada en el bien común y las virtudes públicas, pero el ciudadano aún no miraba por sus intereses particulares, privados. O por lo menos, como en el caso griego, bien común e interés individual, como perfeccionamiento personal, estaban fusionados: la misión del Estado griego era la de perfeccionar al ser humano y la de éste la de servir a unos intereses que trascendían su mera exis-

tencia individual, los de la *polis* (Knauss, 1979), relacionados con la justicia y el bien común. La *polis*, como dominio que politiza a sus miembros, establece un *nomos* destinado al perfeccionamiento de sus ciudadanos, a la ascensión del hombre hacia la *areté* (Conde, 2011: 48-50). En tanto que, utilizando la expresión de Aristóteles (1985:32-33), *zōon politikón*, el hombre encuentra su sentido de la existencia únicamente en la *polis*. Es más, allí es donde se efectúa su realización más completa, la de ciudadano, y con ella, la única posibilidad de encontrar su misma condición humana (Marín, 2015: 76-77).

Se podría decir que la política de los *antiguos*, concretamente la de los griegos —y más intensamente la de los espartanos (Jenofonte, 1989)—, giraba en torno a los intereses de la comunidad política y no versaba sobre los intereses particulares de sus miembros[4]. Es importante esta mención a la política de los *antiguos*, concretamente de griegos y romanos, ya que, como veremos, los totalitarismos del siglo XX se pueden interpretar como una respuesta ante la fragmentación social y privatismo de la política moderna liberal-burguesa mediante el regreso y apropiación de algunos aspectos del modelo político antiguo, como en el caso de los nazis (Chapoutot, 2013). No obstante, el mundo grecorromano, como cuna de Occidente, es un modelo de inspiración para todas las ideologías políticas de la Modernidad (Canfora, 1980), llegándose a convertir modelos como el espartano en mitos que recorren la historia occidental (Fornis, 2019). En este sentido, por ejemplo, recordemos cómo a lo largo de la historia se generó el mito de la Atenas comercial frente a la autoritaria Esparta, siendo la primera el modelo de muchos liberales. Pero lo que aquí nos interesa es señalar cómo la política clásica supone la subsunción de la totalidad de la existencia en aras del bien común, independientemente de las diferentes formas de gobierno que teorizaron los filósofos grecolatinos. En todas sus formas ideales y no corrompidas, sea la democracia griega o la constitución mixta romana, el interés supremo es la república o *polis*.

En cualquier caso, más allá de griegos y romanos, y de su genialidad en diferentes campos —filosofía, derecho, ciencia…—, el mundo premoderno era un tiempo donde el ser humano estaba inmerso en el cosmos como un mero componente más. El hombre de las antiguas civilizaciones vivía en el animismo, sacralizaba su entorno, a una naturaleza viva con la que se comunicaba y, en otras ocasiones, a la que temía. De todos modos, parecía vivir en armonía con el cosmos. De hecho, según Leo Strauss (1959: 96), los griegos pudieron aspirar a un dominio de la naturaleza, domesticarla como los modernos, y, sin embargo, rechazaron esa posibilidad. Habrá que esperar al cristianismo para que se dé una desacralización de la naturaleza —lo que, mucho más adelante, Max Weber denominará "el desencan-

4 Pese a que, como hemos señalado con Hegel, en el mundo grecorromano la individualidad, en el sentido que toma con la subjetividad moderna, no existía, entre algunos estudiosos helenistas se considera que, como ocurre con el pensamiento de Aristóteles, no se puede concluir "sacrificio alguno del individuo en relación con el Estado" (Guthrie, 1993: 45). Esto es cierto si entendemos que, bajo la perspectiva antigua, el sujeto sólo adquiere su forma más acabada y virtuosa mediante su pertenencia al Estado. Por tanto, no habría contradicción entre desarrollo de la persona y Estado, pues van de la mano. En cualquier caso, en el mundo griego y romano la individualidad se ponía al servicio del bien común de la ciudad o república, esto quiero resaltarlo.

tamiento del mundo"—, generándose esa racionalidad instrumental tan característica de Occidente por la cual se produce una cosificación de la naturaleza en la relación sujeto-objeto, y en la que el propio individuo termina volviéndose un objeto (Horkheimer, 2013; Barcellona, 1996), una mercancía (Marx, 1976).

En el mundo antiguo o premoderno los diferentes dominios de lo humano no estaban altamente desarrollados ni diferenciados, ni mucho menos tenían su propia legitimidad. Lo particular estaba integrado en el cosmos de una totalidad inmanente determinativa de la existencia: religioso-mágica-política, presentada de diferentes formas en función de las distintas culturas y civilizaciones. Dicha situación empezará a modificarse con la llegada del cristianismo, aunque quizás ya antes de la mano del judaísmo (Habermas, 2023: 271 y ss.). La irrupción de un Dios trascendente sobre la mundanidad, revelado como fundamento último de la existencia, viene acompañada de la centralidad de la esfera teológica, cierto es; sin embargo, también marca el inicio del desarrollo de la diferenciación y autonomía de los diversos dominios humanos. La teología cristiana, que, a su vez, supone un salto de gigante en el desarrollo de la noción de persona y de la conciencia humana (Gauchet, 2005), no permitía la autodeterminación de los campos, pues estaban determinados por ella. Pero sí que facilitó la diferenciación y paulatina autonomía que llevará a alcanzarla más adelante. El cristianismo guardaba en su ser la semilla de su propio fin, alentando lo que se ha venido denominando el "proceso de secularización" con su potencial desmitificador como señala Gauchet (2005)[5]. Este proceso de secularización hará que durante los siglos XVI y XVII, si no antes, se den una serie de pasajes —muy amplios y complejos para poder ser definidos aquí (Dilthey 1944a; Hardt y Negri, 2005: 90 y ss.)— que pondrán los primeros peldaños para dar fin a esa totalización de la existencia por parte de la teología y del Dios trascendente y personal, entre otros: el maquiavelismo con su separación entre moral y política, el luteranismo y el cartesianismo para el despliegue de la subjetividad y el yo modernos —con antecedentes en san Agustín (Bürger y Bürger, 2001: 29-32; Taylor, 2006: 189)—, los descubrimientos astronómicos y científicos (Cassirer, 1953: 289 y ss.; Koyré, 1979), el Estado moderno hobbesiano, etcétera. El Renacimiento, situando al hombre en el centro del cosmos creado por Dios —tal y como lo expresó Pico della Mirandola (2007: 133) en su *De hominis dignitate oratio*— y dejando a la naturaleza y al resto de seres a merced de la transformación humana —puestos ahí por Dios para el disfrute humano—, supuso un avance en la confianza del ser humano en sí mismo. Sin embargo, la llegada del Barroco, con su sensación de vacío ontológico y de inestabilidad social a causa de las guerras religiosas, preparó el terreno para la retirada paulatina de la confianza en el mundo creado por Dios, teniendo que sostenerse el ser humano en su mera razón, lo que supondrá un peldaño más en la ascensión hacia su autodeterminación.

5 No nos meteremos aquí en los debates sobre la secularización y los fundamentos de la Modernidad. Pero para un resumen de las posiciones de Schmitt, Heidegger, Leo Strauss, Blumenberg o Löwith, véanse las páginas que Habermas (2023: 35-63) dedica al tema.

En este sentido pensemos cómo el Estado hobbesiano, que trata de estabilizar el mundo social, o el *cogito* cartesiano, que da seguridad al yo, intentan calmar el miedo y el sentimiento de inestabilidad del siglo XVII con la razón. En el paso del Renacimiento al Barroco observamos el auge del optimismo humanista, relacionado con el nacimiento de la burguesía y de un primer capitalismo (Braudel, 2019), y su caída con las guerras religiosas. Éstas poseían un fuerte componente de clase (Bloch, 2002; Negri, 2021:234), que llevó a un retraimiento de la burguesía en el Estado absolutista (Koselleck, 2021). El fracaso del proyecto inicial del humanismo renacentista conduce al repliegue de la burguesía en la esfera privada, sacrificando su proyecto político para garantizar sus intereses y la paz social con el Estado absolutista[6]. Y es que, como hemos comentado al principio, la política se vuelve el fundamento necesario para el desarrollo de otras esferas: sólo mediante la paz social, garantizada por el orden que impone lo político por la fuerza y la represión, la clase burguesa pudo dedicarse a sus prácticas mercantiles y ociosas, configurándose algunas esferas culturales. Con todo esto vemos el desarrollo de dos facetas que son la estructura básica de la modernización social (Habermas, 2010): el Estado, en su vertiente moderna y soberana, y el capitalismo, desarrollado primero en las ciudades del norte de Italia, para luego desplegarse por otros lugares de Europa como Ámsterdam (Arrighi: 1999). Además, el Estado soberano y el capitalismo, como vectores de la modernización social, permitieron el despliegue de la modernización cultural: las esferas de la ciencia, el derecho y el arte.

Siguiendo con el viaje que efectúa el espíritu burgués que desea autodeterminarse mediante la razón, tras la afirmación humana en el Renacimiento y el desasosiego de parte del siglo XVII, al que Paul Hazard denominará la crisis de la "conciencia europea" (Hazard, 1935), la razón será honrada por los ilustrados al entenderla en el XVIII como el suelo firme que volverá a dar confianza a la humanidad, cuestión que tendrá como secuela la fe absoluta en el progreso histórico, pero también la deificación de la razón. Recordemos cómo posteriormente en la Revolución francesa, la cual era deudora del movimiento ilustrado en alguno de sus aspectos, se sustituyó la liturgia cristiana por una dedicada a la "diosa razón" (Dawson, 2015). Y es que, aunque durante el siglo XVIII muchos campos ya se habían desconectado de la teología, la legitimidad de la mayoría de las esferas socioculturales seguía procediendo de alguna instancia universalista de corte metafísico, como la naturaleza o la razón entendida en términos abstractos. Los diferentes campos de la acción humana no tenían su propia normatividad, eran campos heterodeterminados. No habían conseguido su autodeterminación. Para la consecución de tal fin, según el relato de la ciencia social burguesa, tendremos que esperar hasta finales del siglo XIX y principios del XX, hasta una modernidad más madura, cuando la cultura burguesa esté en su apogeo, y a su vez en su crisis, y se desprenda del resto de sus vestigios no sólo teológicos sino metafísicos. La afirmación de lo humano no podrá quedarse sólo en una razón abstracta, igualmente metafísica como la noción de Dios o naturaleza, sino que deberá parcializar a la razón bajo

6 El proyecto político burgués inicial, antes de la formación del Estado absolutista, lo encontramos en las ciudades italianas del Renacimiento con su republicanismo (Skinner, 2009; 2013).

la lógica de diferentes dominios. Así, por ejemplo, lo político no se regiría por una razón histórica o por la moral, sino por una racionalidad concreta; la ética no se fundamentaría en la ley natural, sino por el positivismo de su propia razón normativa; o el mismo arte no debería fundarse en el naturalismo que trata de reproducir la realidad, por el contrario, tendría que asentarse en sus propios criterios estéticos autónomos. Es sólo de esta manera como el relato burgués presenta y concibe la autodeterminación de los diferentes dominios sociales y culturales.

2.2. Madurez y crisis de la Modernidad burguesa asentada en la diferenciación y autonomía de distintos dominios humanos

Como hemos dicho, la Ilustración desde el siglo XVIII suturó la rasgadura barroca con la fe en el progreso asentado en la razón. Incluso Kant pensará la religión dentro de los límites de la razón (Kant, 1969). La razón, como vehículo para la autodeterminación humana, se hizo tan potente que, paulatinamente, sustituyó a Dios. Era una razón que dotó de un optimismo a los ilustrados por los nuevos descubrimientos científicos que se trasladó también a la esfera moral. Se creía que el progreso científico iba acompañado de un progreso moral. En este sentido, por ejemplo, pensemos en la concepción del desarrollo histórico en tres estadios de Comte o en la teoría del propio Marx (Voegelin, 2014: 130); por lo menos, en la interpretación vulgar que se hace del marxismo como método para la explicación de la historia mediante estadios sucesivos: feudalismo, capitalismo y comunismo[7]. Pero hasta incluso la narrativa que, más adelante, teorizará Weber sobre el desarrollo de la religiosidad en tres fases —mágica, la de las grandes religiones de salvación y la secular— (Milbank, 2004: 138) puede interpretarse, pese a no pretender ser una filosofía de la historia hegeliana y quedarse en un normativismo neokantiano, como una concepción progresiva del desarrollo histórico de la civilización.

En *La era de las neutralizaciones y despolitizaciones*, Schmitt señaló cómo durante el despliegue de la Modernidad existió toda una serie de desplazamientos sucesivos sobre el centro de gravedad desde el que orbita el mundo occidental (Schmitt, 1991b). Nos expone cómo desde unos centros de gravedad teológico y metafísico, situados en los siglos XVI y XVII, pasaríamos en el XVIII a una concepción del progreso moral e histórico, asociado al cosmopolitismo, que, junto al economicismo capitalista del XIX, desembocaría en el orden social burgués claramente apolítico, tecnocrático, moralista, dominado por la privacidad y la supuesta neutralidad estatal burguesa. Bajo nuestra óptica podríamos interpretar estos centros de gravedad como sucesivas totalizaciones o determinaciones de la existencia hu-

7 Si bien para Marx el motor de la historia es la lucha de clases, los diferentes estadios de la historia —que muestran una estructura histórica determinativa de carácter teleológico— pueden interpretarse como peldaños progresivos de las formaciones sociales hasta la llegada del comunismo como culmen civilizatorio. En cualquier caso, sobre esta cuestión de la teleología en Marx, siguen siendo de gran importancia los estudios althusserianos que discuten esta cuestión teleológica para buscar un Marx científico, el cual, depurado de la metafísica hegeliana, se alejaría de todo determinismo del progreso histórico como sostiene el marxismo más ortodoxo.

mana por un dominio concreto, como la teología, la metafísica… hasta llegar a ese orden "neutral" de diferentes esferas autodeterminadas. De este modo, se posibilitaba la autorrealización del individuo en diferentes campos de la existencia humana, desde el apoliticismo, economicismo y cientificismo de finales del XIX y principios del XX. Es sólo ya en ese periodo cuando los distintos dominios socioculturales parecen autodeterminarse a través de una racionalización de la vida imparable. Sin embargo, ello tendrá como secuela la llegada del nihilismo. Nada parecía dar sentido a la existencia del sujeto, salvo el que uno se atreviera a darse a sí mismo, como pensaban Nietzsche o Weber bajo diferentes estrategias. Por ello la respuesta de subsunción de la existencia por parte de la esfera política al mundo apolítico burgués en la primera mitad del siglo XX, como pretendió Schmitt (1991a), vino mediante toda una serie de mitologías, como la del "hombre nuevo", el "mito de la sangre" o de la "raza", "la revolución proletaria mundial", etcétera. Todas estas mitologías políticas, que acompañaban a las ideologías, dotaban de sentido y esperanza a la vida de un sujeto del periodo que estaba tentado por el nihilismo con la neutralización política y el fin de toda metafísica que había generado el orden social burgués.

Los grandes científicos sociales alemanes fueron los que pensaron ese orden burgués de racionalización encarnado en distintas esferas autodeterminadas al que ellos mismos pertenecían. Como representantes de la ciencia social, sobre todo en el caso de Weber (Löwith, 2013: 159 y ss.), no buscaban una verdad que diera un sentido último a la totalidad de la existencia, sino que trataban de comprender la realidad en base a los límites de su esfera de conocimiento, sin sobrepasarlos. No sin dificultades, pues aún existía la tentación de tratar de aprehender la realidad social desde una fundamentación última, sea localizada ésta en la economía para los marxistas, sea incluso encontrada en el derecho, caso de la perspectiva de Stammler que criticó Weber (Stammler, 1919; Weber, 2014). George Simmel y, sobre todo, Max Weber, así como filósofos como Dilthey (1944b) o, después, psicólogos como Spranger —quien, en similitud con los tipos ideales de Weber, estableció un modelo ideal de personalidad para cada esfera (Spranger, 1972)— y juristas como Kelsen (1960)[8], abordaron la realidad social desde ese orden plural de dominios[9]. Captaron el nuevo cosmos burgués que se forja entre finales del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX. Los campos se diferenciaban y tornaban autónomos, se autodeterminaban con sus propios criterios de normatividad. Ya no eran heterodeterminados por el dominio teológico ni por ningún otro monismo que hiciera de fundamento; o, por lo menos,

8 Si Weber señalaba que la ciencia no debía dar respuesta a las preguntas últimas sobre el sentido, que nos olvidáramos de una vez por todas de una verdad metafísica al estilo platónico (Weber, 2012), Kelsen, basándose en la realidad del politeísmo existente que observaba Weber, señalaba cómo la "actitud democrática", frente a la "actitud autocrática" asentada en una "concepción metafísica-absolutista", se fundaba en una concepción relativista sobre el mundo social (Kelsen, 2002: 131). Como vemos, Kelsen, en la línea de Weber, mantiene una visión relativista que, abandonando toda metafísica, es acorde con el contexto social de diferenciación de esferas autodeterminadas.

9 Para un análisis pormenorizado de la obra de Weber, pero que capta también el espíritu de la época y de su ciencia social, véase la reciente obra de José Luis Villacañas (2024), *Max Weber en contexto*.

así lo percibía la burguesía, clase dominante y, a su vez, elite cultural del periodo. Cuestión diferente es que esa sería su autopercepción, ciertamente ilusa, puesto que la estructura capitalista, como anunció antes Marx (1976), y el dinero, como después vio Simmel (2013), cohesionarán lo social mistificadoramente, haciendo aparentemente funcional a una sociedad, en realidad, escindida. La racionalización del mundo, que, además de su "desencantamiento", supone el encierro del individuo en una "jaula de hierro" (Weber, 1958: 181), no es más que un cosmos gobernado por la técnica y la burocracia en aras del desarrollo capitalista.

En un mundo así, como diría Nietzsche, "Dios ha muerto". Ahora bien, esa muerte de Dios es, en realidad —además del espíritu nihilista—, el anuncio de la sentencia a muerte del mundo burgués, el cual se negó a ver las secuelas nocivas que generaba el capitalismo en lo social. La irrupción del movimiento obrero en el espacio público, debido a sus reivindicaciones contra la precariedad existencial que padecía, junto con los movimientos conservadores que buscaban dotar de un sentido a la vida, como, entre otros, fueron en Alemania el movimiento *Junged* y el círculo de Stefan George (von Krockow, 2001: 49 y ss.), condujo a la inestabilidad social de ese mundo apolítico donde gobernaba la *libertad de los modernos*. Encarnada en el individualismo y el apoliticismo, esta libertad, junto a la fragmentación social, produjo las ansias de comunidad, de necesidad grupal. La Primera Guerra Mundial despertará de su sueño a la burguesía, la cual verá como su civilización cosmopolita se venía abajo en las trincheras de la gran guerra, tal y como señaló uno de los mejores observadores de la época, Sigmund Freud (2015: 160 y ss.). Pero, sin duda alguna, los años veinte y treinta del siglo pasado serán el punto final para ese mundo con el ascenso de los movimientos políticos totalitarios, de los cuales ya advirtió Helmut Plessner, en plena República de Weimar, al señalar cómo la peligrosa retórica comunitaria, surgida como mecanismo de compensación ante las frías abstracciones mecánicas del mundo racionalizado, podía conducir al fanatismo y al autoritarismo (Plessner, 2012).

3. El totalitarismo político del siglo XX: el retorno a la política de los *antiguos*

Cierto es que antes del siglo XX existieron proyectos totalitarios de carácter político en la tradición occidental: desde la legendaria Esparta, pasando por reformadores político-religiosos como Savonarola, hasta el terror de Robespierre en la Revolución Francesa. No obstante, quizás sea en el siglo pasado cuando éste se mostró más claro con el advenimiento de las multitudes en el espacio público. Sea a la izquierda o a la derecha políticas, el plano moral aquí no será comentado[10], los proyectos totalitarios fueron los mayoritarios. La alternativa al orden burgués privatista, asentado en un Estado neutral según los juristas burgueses —en realidad, un *Es-*

10 Evidentemente no son iguales los ideales que movían al socialismo real y al nazismo, como tampoco el grado de barbarie que cometieron ambos. Esto quiero dejarlo bien claro. La singularidad del holocausto judío no tiene comparación. Al respecto véanse las valoraciones que hace Habermas sobre la singularidad nazi, como horror incomparable, frente a su cierta banalización, en lo que se llamó "la disputa de los historiadores" en Alemania (Habermas, Nolte y Mann, 2014).

tado monoclase (Giannini, 1965), esto es, un Estado al servicio de la clase burguesa—, vino de la mano de una politización absoluta de la sociedad, en donde la persecución del supuesto bien común, entendido por cada *weltanschauung* a su manera, se convertía en lo sustancial. En este sentido, las premoniciones y exigencias de Hegel se hacían reales, aunque traicionadas. Recordemos cómo ya Hegel denunciaba al mundo burgués de su tiempo por su apoliticismo y pretendía politizarlo a través de la forma Estado (Hegel, 2017), haciendo del *bourgeois* un *citoyen*, pero sin que ello supusiera la pérdida de la autonomía individual. En este sentido, los totalitarismos ciertamente politizaron a la sociedad, la transformaron en una comunidad. Aunque atacando la dignidad humana, destruyendo la autonomía individual, que para Hegel era un hecho insoslayable de la Modernidad.

Los totalitarismos del siglo XX trataron de volver a la Antigüedad, intentaron conseguir la denominada "unidad sustancial" —por utilizar un término hegeliano— del cuerpo político, pero acabando con la autonomía del individuo, sustituido ahora éste por la centralidad de las masas. Unas masas que debían ser objeto de modelaje por parte del mando político. Salvando las distancias, pensemos cómo la política en las ciudades griegas, entre otros aspectos, tenía la función de construir al ciudadano bajo los ideales que movían a la *polis*. Esa tarea de modelaje del miembro de la comunidad política, que, bajo los términos platónicos, en el mundo griego era la ascensión desde la materia más baja hasta el *nôus* (Conde, 2011: 48), la construcción de un ciudadano virtuoso mediante la *paideia* (Jaeger, 2007), se trasladó a los totalitarismos del pasado siglo bajo sus ideales particulares, nocivos y desvirtuadores del mundo griego. De todos modos, esta cuestión del modelaje de las multitudes se podría interpretar como el intento por parte del poder autoritario de dar forma a una materia informe, como son las masas según los regímenes totalitarios, en base al ideal que persiguen. En este sentido, para algunos autores, el nazismo fue el fenómeno que pretendió producir y dar forma al pueblo alemán como si de una "obra de arte" se tratase (Lacoue-Labarte y Nancy, 2011: 37). Pero lo mismo podríamos decir que sucedió con el estalinismo, el cual intentó edificar una nueva identidad en Rusia mediante todos los dispositivos de propaganda (Groys, 2008).

Como vemos, la emulación del pasado clásico, o su apropiación, no era una cuestión vacía ni de simple esteticismo, como ironizaba Marx sobre la vestimenta romana de los revolucionarios franceses (Marx, 2018), sino algo sustancial. Era el intento por poner a la política en la centralidad de la vida social, por hacer del Estado y de los ideales que persigue el bien supremo de la comunidad. Ello implicaba sacrificios. Sacrificios que exigían dar la vida por una causa política que trascendía la mera existencia privada del individuo, y que en los regímenes totalitarios se pagó muy caro. El *Leviathan*, que permitía la placida vida al burgués en la esfera privada, se convertía bajo los regímenes totalitarios en el *Moloch* de los cananeos que exigía sacrificios humanos. El caso paradigmático será el nacionalsocialismo; también el más terrible de todos. El nazismo intentó conseguir con el mito de la raza una comunidad de sangre homogénea —como estableció Alfred Rosemberg en su libro *El mito del siglo XX*—, quedando vinculada la forma Estado con el espíritu del pueblo, como incluso planteaba

Heidegger por aquellos años (Heidegger, 2018; Quesada, 2011). Un líder, un pueblo, una raza: éste sería el lema del totalitarismo nacionalsocialista. Pero algo similar ocurría en la Unión Soviética, sobre todo en época de Stalin; sólo que se sustituyó a la raza y al espíritu del pueblo por la clase trabajadora. En ambos casos, pese a la diferencia sustancial entre los principios universalistas y de emancipación social de uno y los racistas y excluyentes del otro, se intenta retornar a la política de los *antiguos* —particularmente, aquella mirada política que subordina al sujeto en el Estado—, ahogando así la autonomía individual de los modernos.

Lo político aquí se torna totalitario. Desde sus diferentes manifestaciones, sea soviética o nazi, trata de determinar todas las esferas de la existencia humana. De este modo nos encontramos ante un arte proletario (Groys, 2008), una ciencia soviética —la *Diamat* frente a la ciencia burguesa, recordemos, por ejemplo, el caso Lysenko—, un derecho proletario —para Andréi Vyshinski existía un derecho proletario, mientras que, según Kelsen (1956: 146-148), para el también jurista soviético Pashukanis todo el derecho era en verdad derecho privado, así como mera ideología burguesa—, una supuesta moral pulcra de los trabajadores, asociada al estajanovismo… Pero, en el otro lado, opera la misma estructura totalizadora sobre lo social por parte de lo político: denuncia de ciertas vanguardias como arte "degenerado" —los nazis se posicionaron en contra de ciertas vanguardias artísticas—, una "ciencia alemana" frente a una "ciencia judía", una moral aristocrática frente a una moral de esclavos, según una mala lectura nietzscheana, etc. La supuesta diferenciación y autonomía de las distintas esferas socioculturales fue difuminada, incluso anulada, por los diferentes intereses de las cosmovisiones políticas. Éstas determinaron la totalidad de las esferas de la existencia. El mundo burgués que, por ejemplo, soñó con una ciencia libre, asentada en la objetividad e imparcialidad, así como con un arte autónomo con su propia validez, caso de ciertas vanguardias como expresión de la ociosidad burguesa, fue desplazado por la determinación de todos los campos bajo el criterio de lo político en su expresión totalitaria. Cierto es que esos campos no eran antes neutrales. Más bien esto era un mito, ya que eran propiedad de la clase burguesa, que proyectaba en ellos su cosmovisión del mundo. Sin embargo, la burguesía no necesitó impregnarlos o determinarlos por una esfera de acción particular, pues ella misma diseminaba en cada uno de ellos su espíritu. Los había constituido. Al fin y a la postre, todos esos dominios eran producto de su autoafirmación como clase conductora de la Modernidad. La misma diferenciación de esferas pertenece al pensar burgués, asociado a la libertad moderna.

Como sabemos, toda esta determinación de lo político sobre otras esferas terminó en tragedia. La totalización de la vida por parte de lo político no sólo acabó en la falta de libertad del sujeto, en la merma de su esfera privada, sino en la masacre de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta política al mundo burgués, a su individualismo desbocado —surgido ya en la génesis de la Modernidad (Barcellona, 1996; Macpherson, 2005)—, fue la de retornar a una comunidad política sustancial, que pusiera fin a una libertad desmedida y apolítica que puso en peligro la misma integración social. Digamos que, por utilizar la dualidad de Tönnies (2011), los totalitarismos trataron de transformar la *sociedad*

fragmentada en *comunidad* orgánica mediante la potencia política del Estado. Lo político, revestido de sus mitologías, tuvo que primar lo colectivo mediante distintas religiones políticas —las ideologías— ante la escisión comunitaria que provocaba el dominio capitalista. Sin embargo, ese primado de lo político, desde un potencial desmedido, no sólo no corrigió las patologías burguesas ni del capitalismo en lo social, sino que sacrificó la dignidad de lo humano.

4. El totalitarismo económico

4.1. Del armisticio entre política y economía al neoliberalismo

Tras la segunda guerra mundial y la catástrofe de la modernidad política, entendida ésta como proyecto totalitario mediante una razón desbocada (Adorno y Horkheimer, 2007), pero tratando de salvar de ésta su proyecto ilustrado (Habermas, 2015), la conciencia occidental, dirigida por los socialdemócratas y democristianos, puso fin a la política en su máxima intensidad. El *Estado total*, por decirlo a la manera schmittiana, encarnado en el corporativismo italiano, el Estado nazi o el soviético, dejó paso en Occidente a un *Estado pluriclase*, según los juristas italianos (Maestro, 2001), que buscaba integrar a todas las clases sociales y ser el punto de encuentro entre ellas. Pero ello no significaba que se volviera al Estado totalitario, sino que consistía en aunar la generación de los derechos liberales con los derechos sociales, la *libertad de los antiguos* con la de *los modernos*; en definitiva, el constitucionalismo social era la apuesta por democratizar el Estado liberal, integrando las reivindicaciones sociales sin que ello supusiera caer en los excesos del totalitarismo. Se consideraba que la política, encarnada en las instituciones del Estado social, debía controlar los excesos de la economía —aunque también incentivarla mediante políticas de corte keynesiano— y regular los conflictos entre clases para garantizar la paz social. Pero sin que ello supondría ahogar la autonomía individual, la *libertad de los modernos*. En términos sociológicos, el sistema económico y el sistema político debían darse la mano para una mejor integración social. Y eso fue lo que pasó durante los denominados *treinta gloriosos años* del capitalismo europeo de posguerra.

Ahora bien, en ciertas élites culturales europeas y norteamericanas de talante liberal, la política era temida por que se tornara en un poder voraz sobre lo social y no se la reconocía como aquello que es lo que nos permite vivir juntos a los diferentes —lo que, incluso, permite la misma vida social—, pues era presentada como nociva. Según su criterio, habría que mantener controlada su intensidad a toda costa, tenerla bajo el umbral de la nulidad. Podrían haber optado por concebir una política virtuosa, basada en lo que los clásicos llamaban *prudentia*: una racionalidad sobre lo político que busca el equilibrio y el *buen juicio* en la praxis[11]. Y, sin embargo, una política racional también

11 La política de los *antiguos* es ambivalente. Por una parte, como bien hemos señalado, se caracteriza, sobre todo en las ciudades griegas, por esa política que trata de impregnar toda la existencia del sujeto. Sin embargo, también posee esas cualidades de buen juicio y prudencia, en lo que algún pensador ha denominado el "liberalismo antiguo", caso de Leo Strauss (2007). Igualmente, el concepto de prudencia fue recuperado por algunos conservadores en el siglo XX, caso de Russell Kirk (2009: 73).

producía sospechas; más si cabe, cuando se acusaba a la razón de haber sido el vehículo imprescindible con el que se pudieron llevar a buen puerto los objetivos de las políticas más tenebrosas del siglo pasado. Una fría razón habría sido la encargada de dar forma y operatividad a los fenómenos totalitarios de masas surgidos de los instintos irracionales más primarios de la condición humana, como la *pulsión de muerte* de la que habla Freud. De esta manera, obviando la posibilidad de concebir una política racional, entendida como planificación, se optó por una estrategia de despolitización social. Esto es, la política debía quedar contenida dentro de su esfera de acción, muy disminuida tras la crisis del petróleo de 1973 y el cese de las políticas keynesianas con la llegada de los gobiernos neoconservadores en los años ochenta, que supusieron el advenimiento de las políticas desreguladoras neoliberales (Harvey, 2007), así como el punto de partida para la financiarización económica (Lapavitzas, 2016). Nada de intervenciones salvíficas por medio del Estado —el mesianismo político redentor secularizado había causado mucho daño—, ningún tipo de pretensión política para corregir las patologías sociales, todo esto es lo que parecía pensarse desde nuestro espíritu de época más reciente, desde las posiciones de ciertas élites liberales. En definitiva, ninguna planificación racional del mundo social dirigida por lo político resultaba tolerable. Desde esta perspectiva, el libre mercado y la iniciativa privada debían regir el mundo.

Ya desde la década de los años cuarenta del siglo pasado, cierta intelectualidad, supuestamente encarnando las ideas liberales como en el caso de Hayek (2010) o von Mises (2023), se posicionaba, como acabamos de señalar, en contra de cualquier pretensión política de regular lo social, enfrentándose posteriormente a las posturas hegemónicas de posguerra de socialdemócratas y democristianos que abogaban por que la política intervendría en la vida económica para controlar sus excesos. No obstante, el espíritu del "68" supuso una politización de algunas esferas de la vida social y cultural —sin contar con el Estado y contra él— que hasta aquel entonces habían quedado bajo el dominio privado del orden social burgués, lo que significó la democratización de ellas. Sin embargo, las críticas del "68" hacia la política moderna decimonónica, entendida como jerarquía, burocratización, estatalidad, etc., pero también al fordismo y a los modos alienantes fabriles (Hardt y Negri, 2005: 295 y ss.), sembraron el campo para la llegada, en lo que fue la derrota de los movimientos contraculturales politizados, de la reacción neoconservadora de Reagan y Thatcher y de la posterior cultura *yuppy* del liberalismo progresista que, en los noventa y tras la desintegración de la URRS, finalizó en la posmodernidad, el posfordismo (Letamendia, 2009: 133-153), como nuevo modo de producción, y el *nuevo espíritu del capitalismo* con sus flexibles modos de gestión empresarial (Boltanski y Chiapello, 2002), los cuales fueron el terreno fértil donde ha brotado el neoliberalismo. Paradójicamente, el "68", que subvirtió el orden moral burgués y el burocratismo socialista, democratizando muchos ámbitos de la vida social, allanó el camino para la llegada del neoliberalismo. De hecho, el nuevo espíritu del capitalismo se nutrió de algunos valores surgidos de la contracultura.

4.2. La economía como totalitarismo: el neoliberalismo

Es durante estos años ochenta y noventa, tras la derrota del pacto fordista-keynesiano de posguerra, cuando se pretendió lograr una política neutral, acompañada por el supuesto "fin de la historia" y por la resaca del supuesto "fin de las ideologías" anterior (Bell, 2015; Fernández de la Mora, 1986; Fukuyama, 1992). Neutralidad que es sinónimo de neutralización de la potencia política. Esto es, merma de su campo de actuación y cuasi desaparición de la política. Ahora bien, este fin de la política, esta "retirada de lo político", escondía, en términos de Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe (2012: 41), un "totalitarismo inédito", diferente del clásico[12]. El fin de las ideologías, en base a una política supuestamente neutral —lo que en la práctica es la neutralización de la política—, no suponía en realidad el remedio a la posible irrupción del totalitarismo político. Ni mucho menos acababa significando una sociedad emancipada, como mera administración de las cosas y posibilidad de la autorrealización personal al acabarse las tensiones políticas, tal y como pensó de alguna manera Marx el comunismo. Por el contrario, la "retirada de lo político", la merma de su intensidad y de su campo de actuación, desembocó, según lo que alertaban Lacoue-Labarthe y Nancy (2012: 40-41), en la victoria del *animal laborans*, del hombre productor, entre otras cuestiones, como la inexistencia de un fin público que no sea el de la mera subsistencia. Pero, sobre todo, esta "retirada de lo político" desembocó en el asentamiento de una nueva racionalidad totalizadora de la existencia, disfrazada de imparcialidad, identificada con lo que se denomina neoliberalismo. Foucault (2009), adelantándose al pensar de su tiempo, pudo percibir, a principios de los ochenta del siglo pasado, los rasgos que definirían a este tipo de racionalidad económica, al igual que, por esas mismas fechas, Nancy y Labarthe se percataron del "totalitarismo inédito" que suponía esta "retirada de lo político".

El vacío que dejó la "retirada de lo político" no significó la vuelta a esa mistificadora era de la burguesía donde se daban una autonomía y autodeterminación de los campos de la acción humana. Al contrario, implicó la sustitución del totalitarismo político por el económico, el neoliberalismo: más sutil que la subsunción de la totalidad existencial por la política. Los estudios sobre el concepto de neoliberalismo han constituido una amplia bibliografía. Desde el pionero estudio de Foucault mencionado, se han ido publicando una gran cantidad de estudios. Por solo mencionar algunos de los más recientes de una interminable lista, recordemos los trabajos de Pierre Dardot y Christian Laval (2013), Wendy Brown (2015) o José Luis Villacañas (2020). En ellos nos encontramos acercamientos y genealogías del concepto, así como desarrollos sobre sus secuelas en la esfera social y, sobre todo, en la constitución del sujeto. El término,

12 La "retirada de lo político" que nos proponen Nancy y Lacoue-Labarthe difiere un poco de la que aquí presentamos, pues la suya va más allá: entendiendo ellos la "retirada de lo político", además de lo que señalamos, como el vaciamiento del fundamento metafísico de lo político, como el fin del elemento trascendente que posee la política moderna. Y cuya secuela principal sería la irrupción de un totalitarismo nuevo, donde el sujeto sólo se define por su condición productiva, siendo la asociación política producto de la mera subsistencia, desfudamentada la política de principios trascendentes.

además de asociarse con esta mirada que otorga una importancia destacada a los procesos que generan la subjetividad neoliberal, es objeto de otras perspectivas, como la histórica (Harvey, 2007; Slobodian, 2021) o la política, ya se centre en el estudio del neoliberalismo como una concepción ideológica particular (Ahedo y Telleria, 2020), o ponga el acento en los procesos de burocratización que produce esta racionalidad neoliberal, relacionados con la *gobernanza* (Hibou, 2020). Y es que el neoliberalismo es una *Weltanschauung* que afecta a la vida en su conjunto y, por lo tanto, resulta irremediable que sea estudiado desde diferentes ángulos. Desde éstos es como se puede trazar una cartografía de los diferentes lineamientos que componen el orden neoliberal. Por ser breves: en el aspecto social, atomización de la sociedad a través del fomento del individualismo; en su dimensión política, tecnocratismo presentado falazmente como apolítico, políticas de austeridad, privatizaciones y desmantelamiento de lo público, y desregulación de los mercados; en la esfera jurídica, asociada a la forma Estado, podríamos identificar al neoliberalismo también con las fórmulas derivadas de los planteamientos minarquistas de Robert Nozik (1988), los cuales fueron la respuesta a los planteamientos de la *Teoría de la justicia* de John Rawls (1979); en la economía, esta racionalidad se asocia a la financiarización, que supone el proceso de preeminencia de los mercados y la finanza sobre la economía industrial; por último, en el ámbito del sujeto, el neoliberalismo supone el surgimiento de nuevos rasgos en la subjetividad y la proliferación de ciertas patologías, tanto psíquicas como físicas (Duerto, 2021; da Silva, Dunker y Safatle, 2021). Como se puede apreciar, el neoliberalismo es una cosmovisión, una *razón del mundo*, como dirían, basándose en Weber, Dardot y Laval (2013: 14), la cual trata de determinar todos los dominios de la existencia bajo criterios economicistas.

Esta constelación de fragmentos de la existencia humana que conforman el orden neoliberal no es regida de una manera armónica. Si así fuera, las diferentes esferas existenciales sobre las que se despliega la acción humana no estarían tuteladas por los criterios economicistas, sino por la normatividad de cada una de ellas. De ahí el signo totalitario del neoliberalismo. Las esferas socioculturales no son autónomas. Por el contrario, están impregnadas por el economicismo que irradia el propio paradigma neoliberal que las configura. Es esta condición colonizadora del neoliberalismo sobre otras esferas la que nos muestra el rasgo fundamental de su naturaleza definitoria. Tomemos el texto canónico de los estudios sobre el neoliberalismo, el *Nacimiento de la biopolítica*. Allí Foucault señala que lo que se estaba forjando por aquel entonces era la extensión de los criterios de mercado a otras esferas de la vida que eran ajenas a la economía. En definitiva, por utilizar los términos de Habermas (2010), se produce la *colonización del mundo de la vida* por parte del *sistema* económico o, en términos más marxianos, se realiza la *subsunción de la vida en el capital* (Arcos, 2016; Hardt y Negri, 2003: 23-24). Efectivamente, el neoliberalismo supone la colonización de las diferentes esferas sociales y culturales por parte de los criterios mercantiles. Así lo ven de igual modo otros autores cuando destacan cómo el neoliberalismo supone la expansión del modelo de mercado y sus relaciones a diferentes actividades y campos sociales (Brown, 2015: 31; Dardot y Laval, 2013:

14-15), haciendo que los individuos se rijan por el principio de la competencia y se comporten como si fueran una empresa (Arango Tobón, Bedoya Hernández y Muñoz-Duque, 2021). La lógica neoliberal, al igual que en su momento el nazismo y el estalinismo, construye sujetos a su medida. Es por esta naturaleza colonizadora de la esfera económica, por esta pretensión totalizadora sobre todos los dominios de la existencia humana que estamos comentando, que se puede definir a la racionalidad neoliberal como un totalitarismo. Con ello no pretendemos homologar los crímenes que han realizado unos totalitarismos y otros, tampoco su grado de crueldad, sino exponer la estructura conceptual de cuando un dominio particular subsume la totalidad de la existencia.

5. La política, un campo singular frente al resto de dominios

Podría parecer según lo desarrollado que todas las esferas son iguales. Que cuando un campo de acción se extralimita de su función para la integración social, cuando supera su radio de acción, resulta nocivo para la vida social. Sin embargo, como comentamos, la política es singular. Bien es cierto que, como se ha expuesto, en sus excesos puede resultar igual de totalitaria que la economía; de hecho, probablemente sea más. Aun así, es necesario resaltar esta excepcionalidad del campo político sobre los otros dominios. Esta singularidad de la política radicaría en su indeterminación y objeto. En cuanto a la indeterminación, la política puede irrumpir en cualquier esfera sociocultural. No puede determinarse totalmente de antemano. Allá donde exista un conflicto, éste es susceptible de tornarse político. Por lo tanto, la política sería un campo que, más allá de la arena política en la que juegan los partidos políticos, los movimientos sociales o los Estados, puede aparecer como fenómeno en cualquier espacio de la existencia. En cierta medida esto es así por poseer también la política un nivel *microfísico*, que, según Foucault, hace que el poder se extienda por toda la existencia, esté disperso por todo el campo social. O, si preferimos la terminología de Deleuze y Guattari (2012: 214 y ss.), podemos decir que existe una dimensión "molecular" de la política que va más allá de su nivel "molar", el cual se identifica con las clases, las identidades colectivas o las grandes instituciones y formas políticas, como el Estado o los partidos. Esta dimensión micropolítica sería sutil, contingente y atravesaría esas identidades sólidas y grandes estructuras del nivel político molar, pudiéndolas transformar. Pero, además, se extendería subterráneamente por todos los dominios de la vida. Lo político, desde un nivel microfísico o molecular, estaría latente en todas las esferas existenciales, pudiendo brotar en cualquier momento ante circunstancias polémicas. En este sentido la política no sería un dominio concreto al uso, como el resto de las esferas socioculturales. Más bien, como señalaría Schmitt (1991a), pero también en cierta medida Raymond Aron (Molina, 2013: 21), lo político sería una cuestión de intensidad. Algunos elementos de la existencia, si se acentúa su intensidad polémica, podrán siempre politizarse. La política, entonces, encuentra su posibilidad de irrupción en todas las esferas socioculturales. Por ello, en cierto modo, la indeterminación de lo político y de su campo.

Junto a esta indeterminación de lo político en sus fronteras, debemos añadir otro rasgo de su singularidad: su naturaleza farmacológica. Uno de los objetos de lo político sería el de tratar de paliar muchas de las patologías sociales que se dan en diferentes campos. De este modo, la política puede y debe intervenir en otros sistemas o dominios sociales, determinarlos para erradicar ciertas anomalías que padezcan. Esto le diferencia de otros campos, los cuales si invadieran a otros se volverían indiscutiblemente totalitarios. A diferencia de la política, carecen de la legitimidad para poder penetrar en ellos. Un mundo regido exclusivamente por la ciencia sería una tecnocracia asfixiante. Lo mismo se puede señalar sobre la economía, la cual ha sido expuesta en su fórmula totalizadora de la existencia con el neoliberalismo. Y, sin embargo, la política, pese a su posibilidad totalitaria, puede arbitrar las tensiones en otros campos o tratar de paliar sus males. Con respecto a esta cuestión pensemos, ¿acaso no fue el espíritu del 68, y los movimientos sociales que lo materializaron, una intervención de la política en otros campos para democratizarlos? O más recientemente, pensemos en el tan en boga feminismo. El movimiento político feminista, interviniendo de manera concreta en algunas esferas que están más allá de la política formal, muestra ese cariz paliativo de lo político sobre algunas patologías sociales[13]. De este modo, se podría decir que la política es medicinal. Aspecto que no es nada nuevo, pues lo encontramos en Platón, cuando en el libro sexto de *La República* hace analogía entre el médico y el gobernante, en el concepto romano de dictadura, como orden excepcional para sanar al cuerpo político, o en los pensadores del Barroco español, como bien muestra sobre estos últimos Fernández-Santamaría (1986: 130 y ss.). Como observamos, la perspectiva medicinal de la política se da bajo diferentes ópticas políticas y en distintos tiempos históricos. Pero ante todo la política se identificaría con la dupla fármaco/veneno. Por una parte, puede resultar el instrumento sanador de los males sociales, caso del feminismo, de las reivindicaciones sindicales o de la democratización de diversas áreas de la vida gracias al espíritu del mayo francés. Pero, por otro lado, en sus excesos, como un fármaco en dosis elevadas, el antídoto político puede mutar en veneno y matar al cuerpo social, caso de los totalitarismos políticos del pasado siglo XX que hemos repasado. En este sentido, lo político mostraría su singularidad en que, como se ha dicho, puede brotar como conflicto en cualquier dominio de lo social y en que, además, por su condición farmacológica tiende a invadir otras esferas para corregir algunos de sus desequilibrios. Ello no implica que no pueda caer en el totalitarismo. Cuando la política bajo una perspectiva particular determina totalmente la vida, se vuelve totalitaria. La cuestión política se jugaría

13 El famoso lema del feminismo "lo personal es político", el cual entre otras autoras fue reflexionado por Kate Millett (1970), nos muestra cómo la política puede adentrarse en otros campos, rebasar su esfera para hacer visibles ciertos agravios. Esta consigna nos muestra como la politización de otros campos se vuelve necesaria para combatir ciertas estructuras y lógicas de dominación. En consonancia con la microfísica del poder foucaultiana, o con la dimensión molecular de Deleuze, esta perspectiva observa la lógica del poder no sólo en el dominio político decimonónico, sino en los diversos ámbitos que componen la existencia humana; no sólo en las grandes estructuras molares, típicas de la política formal y sus instituciones, sino en el nivel micro, molecular, de la vida cotidiana.

entonces en este equilibrio difícil de su intensidad, en la búsqueda de sus dosis adecuadas, en el punto de equilibrio por el cual se sana al cuerpo social pero no se le da muerte asfixiando la autonomía de los diversos dominios.

6. Reflexiones finales

Mediante la exposición del proceso de autoafirmación humana y del despliegue de los distintos campos de acción hemos observado cómo se producían diferentes intentos de totalización, concretamente los de la política y la economía han sido los analizados. Los diferentes monismos existenciales cercenaban las potencialidades de un espíritu humano que trataba de autodeterminarse. Así, bajo esta perspectiva, la historia moderna se nos presentaba como la lucha por la autonomía de lo humano y de sus diferentes esferas. No obstante, esta descriptiva, claramente burguesa, puede ponerse en duda. De hecho, toda la caja de herramientas posestructuralista, además de la marxiana, va en esa dirección. El marxismo ha denunciado desde Marx no sólo las relaciones asimétricas que se dan en el modo de producción capitalista, sino la ficción que supone la percepción burguesa de la autonomía del sujeto, tal y como nosotros también hemos señalado en cierta medida. Foucault, uno de los representantes por antonomasia del pensar posestructuralista, de igual modo señaló cómo la afirmación del sujeto burgués es una ficción, concretamente nos expuso como "el hombre" es una "invención" (Foucault, 1978: 35). Para el pensador francés el individuo es producido en las diferentes posiciones discursivas que ocupa en la estructura social, disciplinado por los dispositivos de poder de esas esferas socioculturales aquí mencionadas. Ahora bien, situados en la atmósfera posmoderna, donde las teorías sociales se presentan como discursos que operan más en términos de operatividad explicativa que en términos de una verdad sustantiva, esta narrativa del despliegue y autodeterminación de las diversas esferas resulta fecunda para comprender conceptualmente el fenómeno totalitario. Además, no es que aquí se haya realizado un elogio del espíritu burgués al glosar la afirmación del individuo y el supuesto desarrollo de los campos socioculturales. Más bien, al exponer la concepción burguesa, se ha denunciado asimismo su mistificación, su proyecto de clase, las resistencias que se le opusieron, etcétera. De hecho, hemos acusado a la cosmovisión burguesa de ser, con su libertad desbocada, la causante principal de la respuesta política totalitaria.

Como decimos, esta narrativa explicativa no tiene como objeto legitimar el proyecto burgués, también denunciado en sus males. Pero sí que persigue dotarnos de un marco comprehensivo para fenómenos tan diferentes como el nazismo y el neoliberalismo. Nos brinda una estructura conceptual que permite establecer paralelismos entre lo que, tal vez, podríamos denominar totalitarismos modernos —nazismo y estalinismo— y posmodernos —neoliberalismo—. Y es que bajo está luz, asentada en el fundamento normativo de que cualquier esfera que trate de subsumir la vida en su conjunto se torna totalitaria, se logra darle una forma conceptual a lo que, en la realidad empírica, podrían no ser sino fenómenos en principio diferentes, además de enseñarnos también lo que debería ser un orden social óptimo. En una dimensión ideal las diferentes esferas autónomas deberían te-

ner sus propios criterios de normatividad, manteniendo entre ellas unas relaciones armónicas, siendo la política ese dominio que, en su singularidad, se encarga de dicha armonía y, a su vez, de velar por las condiciones óptimas de cada dominio. La diferenciación de campos con su autonomía y su normatividad, respaldada por el ejercicio centinela de lo político, se vuelve un horizonte ideal del orden social al que nuestras sociedades deberían aspirar. De este modo, podemos decir que la narrativa aquí presentada cumple dos funciones: la de efectuar una aprehensión conceptual del fenómeno totalitario mediante la tensión entre autonomía de esferas y su determinación por alguna de ellas; y como derivada de esto, la comprensión también de la lógica de la diferenciación y autonomía de los dominios socioculturales como horizonte regulativo ideal para la vida social.

7. Bibliografía

Adorno, T. W. y Horkheimer, M. (2007). *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid: Akal.

Ahedo, I. y Telleria, I. (2020). «Neoliberalismo», en J. Antón y X. Torrens (Eds.). *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos*. Madrid: Tecnos.

Arango Tobón, M. A., Bedoya Hernández, M. H. y Muñoz-Duque, L. A. (2021). "La vida como trabajo. La emergencia de la subjetividad trabajadora en el neoliberalismo", *Athenea Digital. Revista De Pensamiento E investigación Social*, vol. 21, núm. 3. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2653

Arcos, I. (2016) "En torno a la subsunción de la vida en el capital: dominación, producción y perspectivas críticas sobre el capitalismo presente", *Oximora. Revista Internacional de Ética y Política*, núm. 9, pp. 126-145.

Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Nueva York: Harcourt Brace & Co.

Aristóteles (1985) *Política* (I). Barcelona: Ediciones Orbis.

Arrighi, G. (1999). *El largo siglo XX*. Madrid: Akal.

Barcellona, P. (1996). *El individualismo propietario*. Madrid: Trotta.

Bell, D. (2015). *El fin de la ideología*. Madrid: Alianza.

Bloch, E. (2002). *Thomas Müntzer, teólogo de la revolución*. Madrid: Machado Libros.

Blumenberg, H. (2008). *La legitimación de la Edad Moderna*. Valencia: Pretextos.

Boltansky, L. y Chiapello, E. (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid: Akal.

Braudel, F. (2019). *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, México: FCE.

Brown, W. (2015). *Undoing the Demos. Neoliberalism´s Stealth Revolution*. Nueva York: Zone.

Burckhardt, J. (1946). *La cultura del Renacimiento*. Barcelona: Iberia-Joaquín Gil Editores.

Bürger, C. y Bürger, P. (2001). *La desaparición del sujeto. Una historia de la subjetividad de Montaigne a Blanchot*. Madrid: Akal.

Canfora, L. (1980). *Ideologie del classicismo*. Turín: Einaudi.

Cassirer, E. (1953). *El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas I*. México: Fondo de Cultura Económica.

Chapoutot, J. (2013). *El Nacionalsocialismo y la Antigüedad.* Madrid: Abada.

Conde, F. J. (2011). *El hombre, animal político*. Madrid: Editorial Encuentro.

Constant, B. (2020). *La libertad de los antiguos frente a la de los modernos*. Madrid: Página Indómita.

da Silva, N., Dunker, C. y Safatle, V. (2021). *Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico*. Janerio: Autêntica.

Dardot, P. y Laval, C. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.

Dawson, C. (2015). *Los dioses de la revolución*. Madrid: Editorial Encuentro.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2012). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.

Dilthey, W. (1944a). *Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII*. México: FCE.

Dilthey, W. (1944b). *Introducción a las ciencias del espíritu*. México: FCE.

Duerto, P. (2021). "Cuerpos acelerados: un análisis de los efectos de la temporalidad neoliberal en la subjetividad", *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas*, vol. 24, núm. 3, pp. 505-517. https://doi.org/10.5209/rpub.79248

Fernández de la Mora, G. (1986). *El crepúsculo de las ideologías*. Madrid: Espasa-Calpe.

Fernández-Santamaría, J. A. (1986). *Razón de Estado y política en el pensamiento político español del Barroco.* Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Finley, M. (2016). *El nacimiento de la política*. Barcelona: Editorial Crítica.

Fornis, C. (2019). *El mito de Esparta*. Madrid: Alianza.

Foucault, M. (1978). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid: Siglo XXI.

Foucault, M. (2009). *El nacimiento de la biopolítica*. Madrid: Akal.

Freud, S. (1969). *Psicología de las masas/ Más allá del principio del placer/El porvenir de una ilusión*. Madrid: Alianza.

Freud, S. (2015). *El malestar de la cultura*. Madrid Alianza.

Fukuyama, F. (1992), *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

Gauchet, M. (2005) *El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión*. Madrid: Trotta.

Giannini, M. S. (1965). *Corso di diritto amministrativo, Dispense, Anno accademico 1964-65*. Milano: Giuffrè.

Groys, B. (2008). *Obra de arte total Stalin*. Valencia: Pre-Textos.

Guthrie, W. K. C. (1993). *Historia de la filosofía griega*. Tomo IV. Madrid: Gredos.

Habermas, J. (2010). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Trotta.

Habermas, J. (2015) "La modernidad un proyecto incompleto", en H. Foster, (ed.). *La posmodernidad* (8a ed.). Barcelona: Kairós, pp. 19-36.

Habermas, J. (2023). *Una historia de la filosofía. La constelación occidental de fe y saber*. Madrid: Trotta.

Habermas, J. Nolte, E. y Mann, T. (2014). *Hermano Hitler: El debate de los historiadores*. Madrid: Herder.

Hardt, M. y Negri, A. (2003). *El trabajo de Dionisos*, Madrid: Akal.

Hardt, M. y Negri, A. (2005). *Imperio*. Barcelona: Paidós.

Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.

Hayek, F. A. (2010). *Camino de servidumbre*. Madrid: Alianza.

Hazard, P. (1935). *La crise de la conscience europeenne (1680-1715)*. Paris: Editions Contemporaines Boivin.

Hegel, G. W. F. (1971). *Filosofía de la Historia* (2.ª ed.). Barcelona: Ediciones Zeus.

Hegel, G. W. F. (2017). *Fundamentos de la Filosofía del Derecho o Compendio de Derecho Natural y Ciencia Política*. Madrid: Tecnos.

Heidegger, M. (2018). *Naturaleza, Historia, Estado*. Madrid: Trotta.

Hibou, B. (2020). *La burocratización del mundo en la era neoliberal*. Madrid: Ediciones dado.

Hintze, O. (1968). *Historia de las formas políticas*. Madrid: Revista de Occidente.

Horkheimer, M. (2013). *Crítica de la razón instrumental*. Madrid: Trotta.

Jaeger, W. (2007). *Paideia: los ideales de la cultura griega*. México: Fondo de Cultura Económica.

Jenofonte (1989). *La república de los Lacedemonios/la república de los atenienses*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Kant, E. (1969). *La religión dentro de los límites de la mera razón*. Madrid: Alianza.

Kelsen, H. (1956). *La teoria comunista del diritto*, Milán: Comunità.

Kelsen, H. (1960). *Teoría pura del derecho*. Buenos Aires: Eudeba.

Kelsen, H. (2002). *Esencia y valor de la democracia*. Granada: Editorial Comares.

Kirk, R. (2009). *Qué significa ser conservador*. Madrid: Ciudadela.

Knauss, B. (1979). *La polis. Individuo y estado en la Grecia antigua*. Madrid: Aguilar.

Koselleck, R. (2021). *Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués*. Madrid: Trotta.

Koyré, A. (1979). *Del mudo cerrado al universo infinito*. Madrid: Siglo XXI.

Lacoue-Labarthe, P. y Nancy, J. L. (2011). *El mito nazi*. Barcelona: Anthropos.

Lacoue-Labarthe, P. y Nancy, J. L. (2012). "La retirada de lo político", *Nombres. Revista de Filosofía*, núm. 15, pp. 33-46.

Lapavitsas, C. (2016). *Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas*, Madrid: Traficantes de Sueños.

Le bon, G. (2000). *Psicología de las masas*. Madrid: Morata.

Letamendia, F. (2009). *Estructura del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo*. Madrid: Tecnos.

Linz, J. (2020). *Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Löwith. K. (2013). *Karl löwith. Max Weber y Karl Marx*. Barcelona: Gedisa.

MacPherson, C. B. (2005). *La teoría del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke*. Madrid: Trotta.

Maestro, G. (2001). "Globalización y constitución", *UNED. Teoría y Realidad Constitucional,* núm.7, 1ª semestre, pp. 137-172.

Marín, H. (2015). *La invención de lo humano. La génesis sociohistórica del individuo*. Madrid: Encuentro.

Marx, K. (1976). *El capital* (Libro I-Tomo II). Madrid: Akal.

Marx, K. (2018). *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Madrid: Alianza.

Milbank, J. (2004). *Teología y teoría social. Más allá de la razón secular*. Barcelona: Herder.

Millett, K. (1970). *Sexual Politics*. New York: Garden City.

Molina, J. (2013). *Raymond Aron, realista político. Del maquiavelismo a la crítica de las religiones seculares*. Madrid: Sequitur.

Negri, A. (2021). "Problemas de historia en el Estado moderno en Francia (160-1650)", en A. Negri, *Spinoza ayer y hoy. Ensayos*. Buenos Aires: Editorial Cactus, 221-270.

Nozik, R. (1988). *Anarquía, Estado y utopía*. México: Fondo de Cultura Económica.

Ortega y Gasset, J. (1993). *La rebelión de las masas*. Madrid: Austral.

Pico della Mirandola, G. (2007). "Discurso sobre la dignidad del hombre", P. R. Santidrián (ed.). *Humanismo y Renacimiento*. Madrid: Alianza, pp. 131-167.

Plessner, H. (2012). *Límites de la comunidad. Crítica al radicalismo social*. Madrid: Siruela.

Quesada, J. (2011) "De la teoría política como destrucción a la selección racial como metafísicamente necesaria", M. Cereceda y G. Velasco (eds.). *El pensamiento político de la comunidad, a partir de Roberto Esposito*. Madrid: Arena Libros, pp. 217-254.

Rawls, J. (1979). *Teoría de la justicia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Schmitt, C (1991b). "La era de las neutralizaciones y de las despolitizaciones", en *El concepto de lo político*. Madrid: Alianza, pp. 115-122.

Schmitt, C. (1991a). *El concepto de lo político*. Madrid: Alianza.

Simmel, G. (2013). *Filosofía del dinero*. Madrid: Capitán Swing.

Skinner, Q. (2009). *El artista y la filosofía política. El buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti*. Madrid: Trotta.

Skinner, Q. (2013). *Los fundamentos del pensamiento político moderno. El Renacimiento*. Madrid: Trotta.

Slobodian, Q. (2021). *Globalistas. El fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo*. Madrid: Capitán Swing.

Spranger, E. (1972). *Formas de vida*. Madrid: Revista de Occidente.

Stammler, R. (1929). *Economía y derecho según la concepción materialista de la historia*. Madrid: Reus.

Strauss, L. (1959). *What is Political Philosophy? And Other Studies*. Glencoe: The Free Press.

Strauss, L. (2006). *La ciudad y el hombre*. Buenos Aires: Katz.

Strauss, L. (2007*). Liberalismo antiguo y moderno*. Buenos Aires: Katz.

Taylor, Ch. (2006). *Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna*. Barcelona: Paidós.

Tönnies, F. (2011). *Comunidad y asociación*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Villacañas, J. L. (2020). *Neoliberalismo como teología política. Habermas, Foucault, Dardot, Laval y la historia del capitalismo contemporáneo*. España: NED Ediciones.

Villacañas, J. L. (2024). *Max Weber en contexto. Filosofía y ciencia social tras las sendas de Kant*. Barcelona: Herder.

Voegelin, E. (2014). *Las religiones políticas*. Madrid: Trotta.

von Krockow, C. G. (2001). *La decisión. Un estudio sobre Ernst Jünger, Carl Schmitt y Martin Heidegger.* Madrid: Tecnos.

von Mises, L. (2023). *La acción humana. Tratado de economía*. Madrid: Unión Editorial.

Weber, M. (1958). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Nueva York: Scribner.

Weber, M. (2012). *El político y el científico*. Madrid: Alianza.

Weber, M. (2014*). La "superación" de la concepción materialista de la historia. Crítica a Stammler*. Barcelona: Gedisa.

Wood, E. M. (2011). *De ciudadanos a señores feudales. Historia social del pensamiento político desde la Antigüedad a la Edad Media*. Madrid: Paidós.

POLÍTICAS DE LO IMPOSIBLE. LA ONTOLOGÍA DE LA COMUNIDAD Y DEL PRÓJIMO EN SLAVOJ ŽIŽEK

POLICIES OF THE IMPOSSIBLE. THE ONTOLOGY OF COMMUNITY AND NEIGHBOR IN SLAVOJ ŽIŽEK

Luis Fernando Butierrez
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
luisbutierrez@yahoo.com.ar

Recibido: febrero de 2024
Aceptado: marzo de 2024

Palabras clave: Žižek, Real, política, emancipación, prójimo, comunidad.
Keywords: Žižek, Real, politics, emancipation, neighbor, community.

Resumen: En el siguiente trabajo analizaremos las consideraciones político-sociales en elaboraciones de Slavoj Žižek, desde su apropiación específica de la perspectiva psicoanalítica de Lacan. En especial, buscaremos dar cuenta de la ontología política con la que desarrolla sus críticas de las políticas identitarias, los discursos multiculturalistas y movimientos socio-políticos recientes. En ese marco, distinguiremos sus comprensiones del sujeto y el prójimo, en las respectivas consideraciones sobre las formas de relación con el otro. Por esta vía nos proponemos desarrollar un análisis crítico de las bases con las que articula sus propuestas políticas de emancipación.

Abstract: In the following work we will analyze the political-social considerations in Slavoj Žižek›s elaborations, from his specific appropriation of Lacan's psychoanalytic perspective. In particular, we will seek to account for the political ontology with which he develops his critiques of identity politics, multiculturalist discourses and recent socio-political movements. In this framework, we will distinguish their understandings of the subject and the neighbor, in the respective considerations about the forms of relationship with the other. In this way we propose to develop a critical analysis of the bases with which he articulates his political proposals for emancipation.

(...) si Lol es silenciosa en la vida es porque ha creído, durante la brevedad de un relámpago, que esa palabra podía existir. Carente de su existencia, calla. Sería una palabra-ausencia, una palabra-agujero, con un agujero cavado en su centro, ese agujero donde se enterrarían todas las demás palabras. No se habría podido pronunciarla, pero se habría podido hacerla resonar.

(Duras, *El arrebato de Lol V. Stein*)

1. Introducción

En general, el pensamiento filosófico político comprende de diferentes modos el concepto tradicional de sujeto y la consideración del fundamento. Mientras que algunas perspectivas buscan abandonar la comprensión moderna (desde el cogito hasta el sujeto trascendental), otros enfoques proponen una reelaboración de este concepto, distinguiendo instancias que escinden el campo subjetivo, dando cuenta así de una dimensión que ya no se entiende como central, revestida de cierta jerárquica o reducida a fenómenos meramente presentes (biológicos, etc.).En ambos casos se abren vías para superar los escollos propios de la metafísica de la subjetividad, tal y como se han puesto en evidencia en la obra de Heidegger y Derrida.

En el caso específico de Slavoj Žižek, la singularidad de sus análisis reside en una combinación de la filosofía hegeliana y marxista con elementos fundamentales de la enseñanza de Lacan, un anudamiento del discurso filosófico con el psicoanalítico que inscribe sus trabajos, de un modo fronterizo, dentro de aquellas perspectivas. En los últimos años se han incrementado los estudios sobre los modos en que el pensador esloveno se apropia del discurso del psicoanálisis, poniendo especialmente el foco en dicho carácter fronterizo de sus apropiaciones (Butler, 2005; Dean, 2006; Johnston, 2007a; Butierrez,2010; Gallo Acosta, 2020; Barria Asenjo, 2022; Gallo Acosta; Barria-Asenjo; Letelier,2023).

En efecto, los análisis recientes de su obra abordan desde las consideraciones políticas y teoría del sujeto o del acontecimiento, hasta las reelaboraciones del concepto de ideología. Sea mediante el análisis de su ontología materialista o la crítica a la ausencia de cierto rigor conceptual (Camargo, 2011; Reartes, 2019 y Robledo,2014), el interés parece mayormente orientado a las interpretaciones y cuestionamientos que realiza respecto de los estudios culturales, el multiculturalismo, las configuraciones identitarias, los feminismos y diversidades, entre otros (Devenney,2007; Ré,2011; Cabezas,2016; León Casero,2021).

En todo caso, su insistencia en las cuestiones sociales y políticas le ha otorgado una centralidad en debates contemporáneos, la cual puede reconocerse más allá de su popularidad o la posición devaluada con la que se lo considera en ámbitos académicos. Por ello, en este trabajo dejaremos de lado la pregunta por la "seriedad" de sus propuestas (Roca Jusmet,2010) o la "validez" teórica de sus trabajos (Espinoza Lolas,2020), que bien pueden representar inquietudes propias de aquellos claustros universitarios. Del mismo modo, el carácter laudatorio de lecturas que subrayan su lugar eminente como exponente del psicoanálisis (Eagleton,1997), como también su compromiso político respecto de los acontecimientos de nuestra época (Cañaveral; Osorio; Rengifo,2023: 206), parecen priorizar su figura o estrategia

discursiva, en detrimento de un análisis teórico consistente. Por el contrario, en nuestra región podemos identificar recepciones de su obra que buscan esquivar ambos atolladeros imaginarios (Roggerone,2014; Roggerone,2015; Castro-Gómez,2015; Sicerone,2019; Russo,2021). En este sentido, los análisis críticos recientes ponen el foco en las dificultades prescriptivas o las limitaciones para dar cuenta de una transformación social efectiva, al momento de aplicar las conceptualizaciones del psicoanálisis (Bowman; Stamp,2007; Critchley,2007; Johnston, 2007a; Johnston,2007b). En todo caso, la dilucidación de sus bases comprensivas fundamentales aún se encuentra en desarrollo.

El siguiente trabajo se inscribe en esta tradición de lecturas, mediante la propuesta de un análisis específico de su ontología política de la comunidad y del prójimo. A nuestro entender, allí se sientan las bases comprensivas para un programa desde las cuales es posible confrontar con otras lecturas filosófico-políticas de nuestra época, como el caso de Byung Chun Han o Franco Berardi, entre otros (Cfr. Butierrez, 2022a; Butierrez, 2024). Ahora bien, este análisis lo realizaremos en vistas de la siguiente hipótesis: en el marco de la ontología žižekiana, la apropiación dinámica de la categoría lacaniana de lo Real parece representar la piedra basal de un enfoque político postfundacional con el cual busca sortear las limitaciones de la metafísica de la subjetividad (Cfr. Marchart, 2010:16ss.).

A continuación abordaremos los puntos principales de las consideraciones sobre lo social en elaboraciones de Slavoj Žižek de los últimos años[1]. Para dar cuenta de ello distinguiremos, en primer lugar, los antecedentes principales en la enseñanza de Lacan, en lo que respecta a sus especificaciones de la dimensión simbólica y la categoría de Real, lo cual nos ofrecerá el marco para cotejar la apropiación respectiva de Žižek. En efecto, en segundo lugar, buscaremos dar cuenta de la ontología con la que este pensador esloveno desarrolla sus consideraciones de las relaciones entre universalidad y particularidad, con especial atención a sus críticas de las políticas identitarias, los discursos multiculturalistas y determinados movimientos socio-políticos recientes. Finalmente buscaremos poner en evidencia el modo en que enmarca sus comprensiones del sujeto y el prójimo, en sus consideraciones en torno a la sexualización y la (im)posibilidad de relación con el otro, en tanto ser parlante y sexuado. En los tres casos nos propondremos situar sus respectivos debates con Laclau, Butler y Lévinas. De esta manera intentaremos circunscribir el modo singular en que sus análisis socio-políticos se articulan en una ontología de lo social y del prójimo, que a nuestro entender condiciona la orientación y alcance de sus propuestas políticas de emancipación.

1 Especialmente, en el presente trabajo analizaremos sus elaboraciones y discusiones respectivas en: *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo* (1998); *Contingencia, hegemonía, universalidad* (2000); *El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política* (2001); *El sublime objeto de la ideología* (2005); *Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly* (2006a); *Visión de la paralaje* (2006b); *El prójimo. Tres indagaciones en teología política* (2010); *Menos que Nada: Hegel y la Sombra del Materialismo Dialéctico* (2015); *El coraje de la desesperanza* (2018a)*; Contra la tentación populista* (2018b); *El sexo y el fracaso del absoluto* (2020); *Como un ladrón a pleno día* (2021a); ¡Goza tu síntoma! (2021b), entre otros.

2. Antecedentes en la enseñanza de Lacan

La enseñanza de Lacan en torno a la clínica psicoanalítica tiene, como es sabido, una interlocución explícita e implícita con perspectivas filosóficas fundamentales del siglo XX, así como también con la lingüística y los diversos exponentes relacionados a la corriente de pensamiento estructuralista. En este marco dialógico cobra relevancia su apropiación del concepto cartesiano de sujeto y la distinción de las dimensiones imaginaria, simbólica y Real, que a nuestro entender representan una modalidad de ontología (Cfr. Lacan [1972-73] (1981): 19; 143s.). Estas consideraciones tienen un tratamiento diferencial entre su primera y última enseñanza: aquella, más atenta a subrayar la relevancia de la dimensión simbólica y, la última, caracterizada por el despliegue de una clínica orientada por/a lo Real.

En efecto, su concepción del lenguaje, base primaria para el intercambio que sustenta la práctica clínica de psicoanálisis, se diferencia de aquella tradición que supone una dimensión prelingüística del sentido. A la inversa, Lacan se propone poner en evidencia un resto irreductible a toda articulación que es interno a la lengua, un *plus* que no logra ser dispuesto en la cadena simbólica, esto es, el Otro (*Autre*): una categoría con la cual designa el conjunto articulado (y no articulado) del lenguaje en una cultura determinada (Miller, 1990: 18). Así, en toda dinámica de apropiación del lenguaje por parte de los sujetos, el Otro se sostiene desde una función de garante del lenguaje (nos orientamos por el supuesto: "hay un significante determinado para todo"), aunque luego se evidencia una brecha insalvable entre lo dicho y la experiencia (es decir, no todo tiene un significante determinado). Ello pone de manifiesto una división estructural que acompaña la vida del sujeto en su inscripción en el lenguaje (Cfr. Butierrez,2017).

Ahora bien, la constitución de la subjetividad tiene su momento primario en este encuentro antagónico con la lengua: el sujeto surge *entre* la articulación de significantes, es decir, a partir del conjunto de aquellos significantes que anteceden su nacimiento y que sobrevuelan en el entorno de sus primeros años de vida (expectativas, deseos, nombres, etc.). Tal como define Lacan, el significante representa al sujeto para otro significante, lo cual permite interpretar al sujeto como efecto de esta articulación, o bien, como suplemento de una articulación (siempre) fallida (Lacan [1968-69] (2011): 20; Lacan [1975-1976] (2006): 145).

En esta reelaboración de la teoría de Saussure, dado que no es necesaria la conexión entre significantes, el término sujeto designa aquí la dimensión emergente de este hiato en la cadena de significación. Como tal, aquél no alcanzará una plenificación de sentido: experimentará una y otra vez la falta en ser que lo constituye desde la alienación en su articulación entre significantes, dado que ninguno puede representarlo de forma acabada. Es por ello que Lacan rechaza una y otra vez inscribir esta perspectiva en la ontología tradicional, la cual entiende íntimamente ligada al ser, al sentido y a la presencia plena de la conciencia (Lacan [1975-76] (2006): 549).

Asimismo, la relación con el Otro simbólico también se encuentra escindida e imposibilitada de cierre y totalización. En efecto, el campo del Otro, desde las se-

dimentaciones respectivas en el lenguaje, es supuesto como garante último y piedra de toque para el uso específico de términos o conceptos, la conexión gramatical y las tematizaciones pertinentes, entre otras. Por ello, el advenimiento al lenguaje y la cultura como sujetos parlantes (y sexuados) se estructura desde una ilusión retroactiva e imaginaria de esta dimensión simbólica: ella es (pre) concebida como plena y consistente, desde la cual parece posible dar cuenta de toda conexión de significación. En la enseñanza de Lacan, esta dinámica entre lo imaginario (consistencia, totalización), lo simbólico (articulaciones significantes) y lo Real (brecha, falla, imposibilidad) (RSI) es reconocida en su modo específico de incidencia en el campo del lenguaje, el deseo, en las relaciones con la propia imagen, con el otro, etc. (Lacan [1954-1955] (2012) :53 ss.). Precisamente la proyección de esta dinámica al campo de lo social y los procesos de identificación es aquella de la que se vale Žižek para su apropiación en sus desarrollos socio-políticos.

Como analizaremos en los apartados siguientes, el filósofo esloveno retoma la categoría de Real desde su anudamiento irreductible con los otros dos registros: remite tanto a un núcleo no simbolizado que irrumpe en el orden simbólico, como también a una función de límite interno a lo simbólico[2].Así, en lugar de ser subsidiario a una sustancia o fundamento primario, este excedente interno es la causa ausente del orden simbólico, pero de la que solo es posible dar cuenta por sus efectos de corte, falla e inconsistencia. Desde esta base comprensiva este pensador desarrolla una teoría política postfundacional que se aparta de todo esencialismo y binarismo, para sustentarse en una dinámica de temporalidad retroactiva.

A continuación, analizaremos estas tematizaciones en el marco de algunos debates en diferentes momentos de la obra de Žižek. Por esta vía se posiciona sobre la base de una ontología articulada con el discurso del psicoanálisis, tal y como destaca en este fragmento:

> (...) yo sí propongo una ontología: mi trabajo no se limita a una reflexión deconstructiva de las inconsistencias de otras filosofías, y en cambio sí delinea cierta "estructura de la realidad" (....) el horizonte último de mi obra no es la narración múltiple de los fracasos cognitivos al estrellarse contra lo Real inaccesible (...). Aunque el psicoanálisis no es filosofía, toda su dimensión subversiva pasa por el hecho de que no es simplemente una ciencia o una práctica particular, y en cambio sí es algo que produce consecuencias radicales, por ejemplo, en la filosofía. El psicoanálisis es un "no" a la filosofía interno a esta; la teoría psicoanalítica hace referencia a un hiato/antagonismo que la filosofía vuelve borroso pero que a la vez es lo que ancla a la filosofía (Heidegger llamó a ese hiato "diferencia ontológica") (Žižek, 2018b: 9-12)

Esta noción heideggeriana nos ofrece un indicio para la comprensión de su perspectiva ontológica, pues se trata de "la diferencia entre el estúpido estar-ahí de los entes, su realidad sin sentido y su horizonte de significación" (Žižek, 2006b:35). Precisamente esta brecha es la piedra angular de la ontología negativa de lo social que analizaremos a continuación en tres debates específicos: con Laclau, respecto

2 Así lo especifica: "lo Real designa un núcleo sustancial que precede y se resiste a la simbolización y, a la vez, designa el sobrante, postulado o «producido» por la simbolización en sí" (Žižek, 2016:47)

de la ideología, la lucha de clases y la universalidad; con Butler, en relación a los procesos de identificación y la diferencia sexual; con Lévinas, respecto de la comprensión del prójimo y la alteridad.

3. La universalidad y la lucha de clases

Los análisis y críticas de Žižek al concepto tradicional de ideología, lucha de clases y el problema de la universalidad (en las cuestiones relativas a la hegemonía) se despliegan en línea con diversas perspectivas postfundacionales de la diferencia, por ejemplo: la crítica al historicismo moderno en Foucault (Castro-Gómez, 2015: 99ss.) y, por supuesto, la lógica del significante en Lacan[3].

En efecto, la perspectiva de Žižek presenta una apropiación de la enseñanza lacaniana desde su tesis doctoral dirigida por J. A. Miller en 1985. En una singular relación con la filosofía hegeliana, nuestro autor distingue, sobre el "fondo ontológico" de lo que es, el antagonismo (traumático) de lo Real, aquél registro que, sin prescindir de los otros dos, cancela toda pretensión de totalización para aquello que se tematice en torno al lenguaje, el sujeto y sus relaciones humanas.

Sobre esta base, el filósofo esloveno se posiciona críticamente contra los discursos que abonan las ilusiones imaginarias de completitud renegando de la insuficiencia o antagonismo constitutivo. El resultado de esta renegación es una proyección en el campo social de ese resto inasimilable que obtura el cierre definitivo, esto es, lo Real que retorna (al ser rechazado), pero simbolizado/encarnado en diversas figuras, por ejemplo: el judío, para el antisemitismo; las mujeres y lo femenino, las lesbianas y homosexuales, para el patriarcado machista; el inmigrante, para la clase media, entre otros. Ahora bien ¿cuál es la lógica subyacente en esta dinámica proyectiva en el campo social?

Como hemos visto, desde la perspectiva lacaniana no es posible un cierre definitivo de lo simbólico en su cobertura de lo imaginario: el punto de falla[4] de esa visión o encuentro remite a lo Real imposible de simbolizar. Sin embargo, los intentos de totalización y consistencia persisten, tanto a nivel del sujeto como de las dinámicas sociales. En tal sentido, la construcción del enemigo, como figura de un Otro-responsable de la imposibilidad de cierre, tanto del campo simbólico, como del grupo social o de la configuración subjetiva, mantiene en pie "la imagen fantasmática de la sociedad como un todo consistente y armonioso" (Žižek, 2021 b:148). Es decir, en el lugar de la brecha imposible de cierre se proyecta un elemento externo en el ámbito social cuya posibilidad de control, eliminación o superación permite sostener la ilusión de totalización de dicho campo.

3 Dicha lógica permite desplazar la consideración primaria e idealista del sentido de las teorías tradicionales del lenguaje. Desde este enfoque lacaniano el horizonte de sentido "siempre está vinculado, como por una especie de cordón umbilical, con un punto dentro del campo por él revelado" (Žižek, 2021 b:52)

4 En esta lógica, el término falla se articula de modo retroactivo, es decir, a partir de la posición del sujeto que postula la falta de un elemento en la dimensión simbólica. Más bien se trata de un agujero o vacío que produce efectos cuando el sujeto intenta taponarlo. Al respecto, véase Gallo Acosta, 2020:9.

Como veremos más adelante, Žižek insiste en la posibilidad de una modificación en las coordenadas simbólicas del *statu quo*, que en lugar de taponar o renegar se apoyan en dicha inconsistencia o falta absoluta[5]. Es precisamente en este marco en donde nuestro autor inscribe sus posiciones respecto de la universalidad y su reelaboración del concepto de ideología.

En efecto, con estas discusiones circunscribe una ontología donde transfiere ciertas elaboraciones lacanianas concernientes a la realidad psíquica a la esfera de lo social[6]. En especial insiste en la sobredeterminación de lo Real sobre la relación imaginaria-simbólica: la comunidad o sociedad se articula sobre un antagonismo imposible de simbolizar. Ello cancela la posibilidad de una descripción objetiva de lo social, pues toda lectura de la misma se encuentra atravesada por un sesgo imaginario (fantasía) que impiden el encuentro con lo Real del antagonismo (lucha de clases) (Žižek, 2006ª: 76s.). De esta manera sienta las bases para el desarrollo de su teoría crítica de la ideología desde finales del siglo XX.

Como vimos, la ideología aquí encarna la lógica subyacente a las dinámicas sociocomunitarias donde emergen elementos u objetos que buscan taponar el lugar vacío o la brecha inherente a la dimensión simbólica, cuya función es simbolizar/articular lo Real, una tentativa condenada al fracaso[7]. Por ello algunos intérpretes identifican esta concepción como una derivación de la noción de fantasma/fantasía en Lacan (Acuña Echagüe,2023:165). El filósofo esloveno especifica la relación con la fantasía en dos vertientes: por un lado, la ideología oculta el antagonismo de lo Real por medio de la fantasía, aquella que postula imaginariamente una comunidad coherente y unificada; por el otro, la evidencia de un síntoma social que insiste en manifestarse da cuenta del constante retorno de aquello excluido de lo Real, al punto que su reintroducción desestabiliza la fantasía e imposibilita el cierre definitivo del campo social(Stavrakakis, 2007). En este sentido, el fantasma de la ideología permite preservarnos del enfrentamiento traumático con el vacío constitutivo de lo social y de nuestra posición de sujeto[8].

Por ello la propuesta žižekiana remite a un distanciamiento crítico de la ideología y no a una superación que suponga alguna dimensión neutral respecto a ella, pues entiende que la misma realidad se articula ideológicamente. Con esta concepción, toma distancia de la equiparación tradicional entre ideología y falsa conciencia de la realidad (Hernandez, 2006:159s.).

No obstante, el sesgo ideológico irreductible de nuestra experiencia social no le impide desarrollar una perspectiva política emancipatoria respecto del capitalismo neoliberal. En ella, Žižek insiste en el carácter primario tanto de la lucha de clases, como de la dimensión económica

5 Algunos intérpretes sitúan el impulso de la filosofía žižekiana a partir de su noción de falta absoluta (León, 2020:12)

6 Podemos encontrar una polémica (y reduccionista) crítica de la ontología de Žižek y su apropiación materialista de las tradiciones hegeliana y lacaniana, en Robledo 2014:65 ss.

7 Véase la entrada Ideología en Butler, 2014.

8 Como veremos, la fantasía que estructura la realidad social se proyecta hacia la recuperación de un supuesto estado perdido de armonía y unidad de la satisfacción que Lacan denominó como goce. La imposibilidad de dicha satisfacción plena activa la fantasía de que algún Otro es responsable de esta falta y de las dificultades para el cierre pleno de la sociedad. Al respecto, véase Castro-Gómez, 2015:84 s.

de las relaciones sociales. En este marco, nuestro autor piensa en la potencialidad de una universalidad concreta que pueda encarnar el fracaso inherente al cierre de lo social. Precisamente desde aquí articula sus principales debates con Laclau.

En general el diálogo Žižek-Laclau pone de manifiesto convergencias y divergencias: la perspectiva de Laclau bien puede situarse como una modalidad de posmarxismo, dado su interés de abandonar ciertas categorías tradicionales[9]; con Žižek, en cambio, la relectura hegeliano-lacaniana de estas categorías busca más bien desarrollar sus bases comprensivas desde una perspectiva postfundacional. En ambos casos, el desarrollo de una política emancipatoria los conduce a la pregunta por el sujeto de esta emancipación y las formas en que es posible pensar hoy la articulación hegemónica de una universidad que unifique distintas luchas sociales.

Las respectivas posiciones confluyen en los diálogos publicados en *Contingencia, hegemonía y universalidad* (2000)[10]. Aquí ambos coinciden en pensar el proyecto emancipatorio desde una democracia radical y opuesta al capitalismo globalizador, en vistas de pensar un sujeto político que posibilite alcanzar una unidad desde la diferencia, "para construir una agenda política de demandas radicales" (Bedin, 2017:298).Asimismo acuerdan en la relevancia de lo Real como "núcleo traumático resistente a la simbolización que solo tiene acceso al nivel de la representación a través de contenidos ónticos que incorpora sin adscribirse necesariamente a ninguno de ellos" (Butler; Laclau; Žižek, 2000:187). Desde esta base despliegan sus posiciones respecto de aquellas demandas sociales particulares que no se articulan en un discurso emancipatorio general, lo cual fácilmente puede ser asimilado al *statu quo* y colaborar con la derechización del espacio político.

En efecto, Laclau insiste en destacar la unificación simbólica que proporciona un significante vacío, respecto de las demandas particulares. La consideración central de este significante sin contenido, que retoma de las elaboraciones de Lacan y las apropiaciones de Lévi-Strauss, le permite pensar la configuración de un sujeto colectivo capaz de establecer una frontera antagónica (universal) con el poder (Laclau 2016: 97 ss.;112 ss.). Con esta categoría de la lingüística estructuralista se propone despejar la diferencia entre las demandas aisladas y aquellas capaces de articularse en forma hegemónica y de equivalencia entre las diversas luchas[11].

9 Entre sus diversas reelaboraciones, Laclau se contrapone al dualismo marxista entre materialismo relacional y determinismo esencialista, para desarrollar una perspectiva de la contingencia y relacionismo. Desde allí, junto a Mouffe desarrolla una propuesta de democracia radical a la que adhiere Žižek en los últimos años del siglo XX. Al respecto, véase Russo, 2021:301.

10 Podemos situar el inicio de estos intercambios en las conferencias de Liubliana en torno a las elaboraciones de la obra de Laclau, *Hegemonía y estrategia socialista* (1987). Allí, Žižek reconoce los contornos de "un proyecto político basado en una ética de lo Real" (Žižek, 1993:257 ss.). En sus diversos debates posteriores ambos pensadores desarrollan una discusión que tiene en sus bases la categoría de Real y la concepción lacaniana del sujeto. Véase Žižek, 2001.

11 Laclau nos ofrece un ejemplo ilustrativo en su participación como estudiante en una Universidad argentina. Allí se opuso al mero movimiento entre demanda y satisfacción del centro de estudiantes del que participaba, lo cual implica el cese de tales movimientos. Por el contrario entiende las demandas como episodios de una "guerra prolongada de posición tendiente a lograr

Por su parte, Žižek parte de la distinción entre el universal abstracto, aquél en el que se opone a la primacía del contenido concreto, y el universal concreto, aquél en una particularidad se concibe como un modo de participación de un orden universal (Balibar, 2006)[12]. Desde allí subraya que la simbolización y la hegemonía se dan en un proceso por el cual un nombre surge en el límite del campo social: de la mano de una posición interna/límite al sistema de relaciones, que entiende como la más adecuada para dar cuenta de la contradicción inherente a la universalidad concreta (Žižek, 1998, p.186).

A nuestro entender, el trasfondo de este debate reside en el lugar que ocupa la categoría de Real para pensar estas dinámicas y procesos: mientras Laclau desarrolla una perspectiva que parte de relaciones (estructurales) simbólicas, por ejemplo, de la interpelación ideológica, por su parte, Žižek las piensa desde el impasse de/con lo Real, cuando se propone localizar el sujeto como núcleo excedente a la simbolización (Žižek, 1993:258s.).

Podemos identificar algunos ejemplos de este enfoque en sus análisis publicados en *Como un ladrón a pleno día* (2021 a). Allí interpreta la modalidad en que se desarrollan las democracias y los Estados actuales en occidente: un candidato de derecha o ultraderecha surge mediáticamente o desde las relaciones mediadas virtualmente, sin antecedentes histórico-político, y luego de aprovechar cierta erosión económica o momentos de confusión, gana las elecciones. Tal es el caso, en 2017, de Macron vs. Le Pen en Francia; Berlusconi en Italia; Trump *vs.* Sanders en EEUU, entre otros. Para nuestro autor la función de estos candidatos de tinte fascista no es otra que ocultar los antagonismos sociales reales, por medio de la demonización y la unificación de diversos grupos políticos reunidos en contra de esta amenaza (Žižek, 2021 a: 105).

Finalmente, este enfoque le permite contraponerse a discursos descoloniales que rechazan la imposición universal de la cultura de los colonizadores en nombre de una cultura originaria o primigenia, lo cual supone el rechazo del papel constitutivo de la universalidad. Frente a la defensa de una cultura tradicional de tales discursos, Žižek propone la invención de una modernidad más radical que aquella impuesta por los colonos, una que permita evidenciar los antagonismos constitutivos de cada comunidad: cada modo de vida concreto es una formación político-ideológica cuyo cometido es ocultar el antagonismo subyacente, una manera concreta de lidiar con esa brecha que recorre todo espacio social (Butler; Laclau; Žižek, 2000:181 ss.). Así, en lugar de partir por la pregunta de quién ocupó primero el territorio en cuestión, es posible abrir de un modo singular la pregunta por las relaciones de dominación, explotación y sus consecuencias internas a las propias comunidades.

---

objetivos más globales (...) para que una cierta demanda, posición del sujeto, identidad, etc. se transforme en política debe significar algo más que lo que es en sí misma debe vivir su propia particularidad como un momento o eslabón de una cadena de equivalencias que la trasciende y de este modo, la universaliza: el fundamento de la equivalencia no se puede encontrar en la especificidad de ninguna de ellas" (Butler; Laclau; Žižek, 2000:211).Cfr. Castro-Gomez, 2015: 395.

12 Para una distinción de las modalidades históricas con las que nuestro autor distingue las relaciones entre el universal y su contenido, véase Hernández Vergara, 2018:90s.

En suma, para nuestro autor la lucha de clases es, en términos althusserianos, sobredeterminante del antagonismo inmanente. En este sentido sobredetermina la totalidad de las luchas, sobre la base de lo Real que no solo imposibilita el cierre del espacio socio-comunitario (lo cual proyecta un suplemento ideológico sintomático que materializa el antagonismo irreductible), sino también permite plantear un programa político emancipatorio. Precisamente sobre la base de un Real imposible nuestro autor desarrolla su perspectiva en torno a las configuraciones identitarias.

4. Una política de las identificaciones

4.1. Discusiones con Butler

Analicemos a continuación una segunda serie de discusiones, esta vez con Judith Butler. El debate puede identificarse en dos momentos, el primero respecto de su obra de 2001, donde desarrolla su apropiación de la concepción lacaniana del sujeto y discute con la tesis de los *vínculos apasionados* de Butler desde 1997[13] ; y el segundo, en aquella obra conjunta *Contingencia hegemonía, universalidad* (2000).Estos intercambios se inscriben en la problematización de los discursos multiculturalistas, que el filósofo esloveno ve en línea con la mundialización del capitalismo y su anulación de toda postura que lo ponga radicalmente en cuestión: el discurso de las luchas culturales se revela como una forma de invisibilizar las luchas económicas.

En este contexto, Žižek delimita lo que entiende como la versión sexualizada del sujeto proteico pos-tradicional: la forma actual de subjetividad ya no es el sujeto autónomo y edípico, sino el sujeto fluido que se reinventa y se construye continuamente, experimentando con identidades distintas (Žižek, 2018ª:254). Desde aquí discute con ciertas elaboraciones de Butler.

En efecto, desde finales del siglo pasado, la filósofa americana estudia los mecanismos del poder que impactan en los procesos de subjetivación. En este contexto subraya el fracaso de toda identificación mediante el análisis del carácter lingüístico y categorial de este proceso. Por esta vía insiste en dar cuenta de los modos en que se (pre)configuran las modalidades de resistencia, las demandas y las contra-identificaciones, con el objeto de advertir cómo son articuladas desde y por el propio dispositivo de poder al que se oponen[14]. No obstante, difiere con Žižek respecto de la concepción del sujeto en lo que respecta a la configuración identitaria.

En detalle, desde sus elaboraciones en *El espinoso sujeto* (2001), el pensador esloveno desarrolla su posición en torno a la configuración de la identidad. En esta obra defiende una "reafirmación del cogito cartesiano", pero para ir más allá de él

13 En este sentido, sus obras principales son *Cuerpos que importan* (1993) y *Mecanismos psíquicos del poder* (1997). La consideración de los "vínculos apasionados" puede encontrarse en Butler 1997:17-21.

14 Tanto Žižek como Butler advierten sobre discursos que articulan un punto de oposición a cierta forma de dominación, que luego se revela en sí mismo como otro instrumento a través del cual opera dicha dominación: "sin querer hemos fortalecido los poderes de dominación a través de nuestra participación en la tarea de oponernos" (Butler, Laclau, Žižek 2000:34).

(Žižek, 2001: 10), a partir de la consideración lacaniana del sujeto como brecha o vacío anterior a los procesos de subjetivación e identificación (Žižek, 2001: 173s.)[15]. Aquí el sujeto no es reductible a sus atributos históricos, sino que designa un vacío imposible de llenar con contenidos contingentes, un corte o brecha en el orden del ser (Žižek, 2015: 695). Esta distinción entre sujeto y subjetivación le permite dar cuenta de cierta contingencia respecto de los procesos socio-políticos e históricos de configuración de la subjetividad, así como también de aquellos casos donde se da una identificación o "apego" al modo de subjetivación (Žižek, 2021b: 277s.). Aún con sus compromisos con la modernidad podemos reconocer esta concepción dentro de una comprensión postfundacional del existente humano, la cual se presenta inscripta en una ontología incompleta.

En definitiva, se trata de un proceso histórico (subjetividad) y una brecha a-histórica primaria (sujeto) que impide todo cierre y plenitud en las configuraciones respectivas, en línea con las elaboraciones lacanianas pues: "el sujeto en Lacan es una respuesta a lo Real que emerge en los límites de lo simbólico" (León, 2021: 266). En su reelaboración respectiva, Žižek sitúa en el punto de subjetivación de la cadena significante dos elementos que sostienen y favorecen la articulación: el fantasma y el goce (Žižek, 2005: 142). Como hemos visto en torno a la categoría lacaniana del Otro, la dinámica de interpelación ideológica abre un mecanismo donde el yo se configura de modo heterónomo y fallido pues el sujeto no logra reconocerse por completo en la imagen o posición subjetiva.

Desde esta concepción se opone a las actuales políticas identitarias en su valoración de la excepcionalidad, en el punto donde la afirmación de la identidad particular se sostiene sobre un rechazo de todo universalismo. Para nuestro autor, en cambio, dicha afirmación puede implicar el acceso a una plena universalidad, no en el sentido de un género humano o valor universal, sino de un modo estructural en relación a lo Real del sujeto: la universalidad funciona "en las fracturas de la propia identidad concreta, como la "labor de lo negativo" que socava cualquier identidad" (Žižek, 2021a: 89).

Esta metáfora de la fractura nos remite nuevamente a la imposibilidad de sostener una plenificación identitaria, pues sugiere que no solo la red simbólica intersubjetiva sostiene la identidad[16]. En tal sentido, nuestro autor insiste en que una emancipación auténtica consiste en la búsqueda expresa de algún tipo de universalidad que no esté bajo la lógica imaginaria de la consistencia. En este caso, la universalidad remite al antagonismo que atraviesa internamente toda identidad y que es su condición de posibilidad, al tiempo que "la ausencia de un marco universal indiferente a las contingencias" es precisamente lo que abre el espacio y determina las luchas emancipatorias (Žižek, 2006b: 131). Desde aquí se diferencia de la tesis de Butler en torno a su programa

15 Para un análisis de esta apropiación del sujeto cartesiano, véase Roggerone, 2015:9ss.

16 Un ejemplo de ello es el análisis del "sueño de Chuang Tzu" del Seminario 11 de Lacan, aquél donde se pregunta si soñó que era mariposa o su vida no es más que un sueño de ser Chuang Tzu. Con esta distinción se ejemplifica un sujeto que no se cree idéntico a sus coordenadas simbólicas, en Žižek 2005:76s. Cfr. Lacan [1964] (2015): 83 ss.

político que articula, tanto en su teoría de los actos performativos, como en la ética de sí de tradición foucaultiana.

En primer lugar, Butler rechaza esta noción de sujeto barrado pues lo entiende como dimensión fuera de lo simbólico, lo cual le quita márgenes históricos y de contingencia, propios de un programa político emancipatorio. Frente a ello profundiza la concepción foucaultiana del individuo que no puede sustraerse a la dominación: el poder forma al sujeto, determina sus condiciones y la trayectoria de sus deseos, incluso en las propias modalidades en que se opone a las prácticas sociales de dominación (Butler, 2001: 12-19). La estrategia de Butler consiste en un movimiento de negación parcial a partir de la distinción de los "vínculos apasionados" (Ibid: 40s.), esto es, aquellos apegos del sujeto con los poderes que lo subordinan, pero que permiten también desarrollar tentativas de emancipación. Para dar cuenta de ello la pensadora americana se inscribe en la ontología de la *différance* y los alcances de la iteración derrideana: su propuesta está basada en prácticas de repetición de estereotipos de género y sexo, lo cual permite reconfigurar performativamente sus marcos.

Asimismo, destacamos sus diferencias respecto del estatus y alcance de la intervención subjetiva respecto a sí mismo: Butler se apoya en las limitaciones de la descripción narrativa de sí, la temporalidad de la propia tradición lingüística y el radical descentramiento del sujeto, para dar cuenta de un mínimo de libertad para manejarse con las normas, sea mediante una subversión o una posible reinscripción. A diferencia de ello, Žižek subraya que el sujeto ocupa el lugar de la falta en el Otro socio-simbólico (no hay significante que lo represente por completo, por tanto, la dimensión simbólica no es plena ni consistente), por ello puede lograr una separación con las determinaciones simbólicas primarias (Žižek, 2010: 184 ss.). En este sentido, no es posible dar plena cuenta de sí mismo en un relato simbólico, pues siempre se utiliza el material limitado del contexto intersubjetivo (Otro).

Pero esta dependencia también permite un gesto ético: si el abismo de la impenetrabilidad es tanto del sujeto como del Otro, entonces el margen de libertad se articula primariamente en forma negativa: el sujeto puede rechazar y negar cualquier elemento positivo del Otro. En la perspectiva de Žižek ello posibilita alcanzar una autonomía inicial de las condiciones preexistentes.

Así, para el filósofo esloveno el antagonismo es inherente a la vida comunitaria, a la constitución subjetiva y los procesos de identificación. Las fracturas de este antagonismo son incluso co-extensivas respecto de una imposibilidad estructurante de las relaciones con los otros. En este sentido, las interpretaciones de Butler, en torno al carácter a-histórico de lo Real, se extienden también en otro debate, esta vez en torno de los vínculos sociales: las relaciones y diferencias sexuales.

4.2. La imposibilidad de la relación (sexual)

La ontología subyacente a su concepción de la comunidad mantiene correspondencia con la tematización psicoanalítica de la relación sexual, una concepción de la última enseñanza de Lacan que remite tanto a lo Real del sexo, como a la imposibilidad de encontrar un significante que

armonice la relación sexual con el otro. Al igual que en la dimensión social y en la identidad, un núcleo traumático no situable en la dimensión simbólica (en este caso, un nudo de goce en el cuerpo que es ineliminable e inarticulable) imposibilita una armonía relacional con el prójimo en tanto sexuado y hablante: cada uno goza a su manera en la circularidad de una pulsión que no hace lazo con el otro. La apropiación respectiva del filósofo esloveno reinstala el debate con Butler, en especial, en torno a la dimensión en la que se piensa la diferencia sexual y la posición femenina.

Efectivamente, desde una epistemología feminista postestructuralista (Nájera, 2016: 131), Butler discute la noción binaria de género, contra toda tentativa que pretenda situarse por fuera del orden simbólico-cultural. En clave deconstructiva, la filósofa americana busca distinguir binarismos solapados (o no) en los discursos sobre el género y el sexo, para devolverlos a la arena histórica y visibilizar su contingencia. Ya desde sus elaboraciones en *El género en disputa* (2007) distingue el género como una técnica de dominación y de normalización de la diferencia sexual: lo masculino y lo femenino, como efecto de estos dispositivos, permiten dar cuenta del modo en que el género produce al sexo, a través del carácter performativo del lenguaje (Butler, 2007: 54ss.). Como vimos, la iteración del performativo abre la posibilidad de su fracaso y de desviaciones por fuera de la norma heteronormativa: por medio de prácticas paródicas y catacresis (es decir, repeticiones que fallan en el mantenimiento de la identidad) es posible desplazamientos de las inscripciones de la dominación en los cuerpos. En tal sentido la repetición constituye al propio sujeto.

Ahora bien, la filósofa insiste en que esta crítica a los binarismos puede verse obturada si se desplaza la discusión hacia una dimensión estructural a-histórica. Precisamente aquí sitúa el discurso respectivo del psicoanálisis y la apropiación de Žižek, al colocar la diferencia sexual al margen de los mecanismos del poder y, por tanto, por fuera de la disputa hegemónica o la posibilidad de una deconstrucción (Butler, 2016: 306ss).

Frente a ello, Žižek destaca que la diferencia sexual no remite simplemente a dos posiciones del sujeto que se adquieren mediante repetición performativa de actos, sino a un callejón sin salida que impide todo intento de traducirlo a posiciones fijas del sujeto. En este sentido, lo imposible aquí es encontrar un significante que dé con la relación sexual, que la armonice, que indique un *cómo* adecuado y definitivo. Para Žižek, no existe ese código, aunque la falta de una forma universal de una relación sexual satisfactoria no carece de forma: "la única universalidad es negativa, la del fracaso, y, para compensar ese fracaso, cada pareja debe inventar una fórmula propia" (Žižek,2021 a :188). Así postula la no-relación(la frase de Lacan "La relación sexual no existe" es aquí el sintagma central[17]) como forma universal de toda relación. En este sen-

17 Las referencias de este sintagma confluyen en torno a la imposibilidad de relación: no hay medida alguna para las relaciones entre los sexos; no hay oposición simbólica que pueda determinar adecuadamente la diferencia; no existen garantías ni coordenadas; los encuentros siempre esconden o solapan desencuentros constitutivos; los goces siempre son en singular, siendo la escena conjunta un montaje fantasmático de "común acuerdo". Véase Lacan [1962-63] (2014); Lacan [1972-73] (1981) pp. 16;19;32; 95s.; Lacan [1975-76] (2006)

tido, solo se trata de saber arreglárselas con este fracaso, lo que remite al arreglo singular de cada uno: convertir el fracaso en otra cosa, en un recurso para la risa, para sortear, para sublimar o burlar, o hacer que se anulen entre sí (Žižek, 2021a: 203).

Nuevamente aquí podemos identificar una comprensión diferente de lo Real en la base de ambas posiciones. Por un lado, Butler entiende que su interlocutor le otorga un estatuto casi trascendental a esta diferencia y, por tanto, deja fuera de un tratamiento político a las oposiciones históricas de una cultura determinada (Butler, Laclau; Žižek 2000: 148). Por su parte, el pensador esloveno elude cualquier perspectiva trascendental o binaria: la diferencia sexual, en tanto Real no sustancial, es interna a lo simbólico. Žižek interpreta esta dimensión como una condición: lo Real (a-histórico) debe entenderse como el límite interno al proceso de simbolización que sostiene la historización[18]. En esta línea, aquél sintagma lacaniano debe leerse en relación a una dislocación radical que permite el juego histórico de las contingencias: es el nombre "de un callejón sin salida, un trauma, una incógnita, algo que resiste a cualquier intento de simbolización. Toda traducción de esta diferencia a un conjunto de oposiciones simbólicas está condenada al fracaso" (Butler; Laclau; Žižek: 120)[19]. Esto impacta de lleno en sus consideraciones en torno a la posición femenina, en continuidad con los desarrollos de las filósofas eslovenas Copjec y Zupančič.

Más en detalle, estas filósofas del feminismo de la diferencia también han desarrollado una perspectiva en torno a la constitución social de la subjetividad en diálogo con el psicoanálisis. Ambas filósofas discuten sobre el aspecto óntico y ontológico de lo femenino, poniendo el foco en las ya célebres fórmulas de la sexuación en la enseñanza de Lacan.

En primer lugar, Copjec aclara que la diferencia sexual es Real, tan solo lo masculino y femenino son diferencias de tipo simbólico, de tal modo que el sexo puede comprenderse como ámbito de irrupción de lo Real como falla de significación (Copjec, 2006: 28-33). Ello le permite una articulación con algunos elementos de las fórmulas de la sexuación lacanianas: si el goce femenino se describe lógicamente como *no-todo*, ello es en relación al goce masculino en el que no hay excepción a la función fálica. Es decir, mediante estas fórmulas el discurso psicoanalítico identifica una tendencia a la totalización y cierre fálico (el goce del lado hombre de estas fórmulas) y una interrupción de este cierre, enunciado lógicamente en la modalidad del no-todo (que remite al goce del lado mujer) (Lacan [1972-73] (1981): 90-97). Con estas breves especificaciones volvemos a encontrar las dinámicas y movimientos lógicos que hemos visto

18 Así lo define: "La definición más sucinta del historicismo es, por tanto: la historicidad menos el núcleo a-histórico de lo Real" (Žižek, 2021 b: 134)

19 Žižek insiste en la interpretación inadecuada de Butler respecto de lo Real de la diferencia sexual, cuando lo describe como conjunto firme y consistente de oposiciones históricas congeladas. Por ejemplo, la diferencia que separa a la mujer del hombre es antagónica tanto entre ambos como para sí mismos: simultáneamente barra a la mujer desde dentro impidiéndole alcanzar su identidad personal plena (es algo más que una mera posición diferencial pura de tipo saussureano, donde la oposición al hombre es la que define la identidad de la mujer). Al respecto, véase Butler, Laclau, Žižek, 2000: 119; 217.

más arriba: a) una tendencia al cierre, la consistencia, la totalización y b) la imposibilidad misma de dicho cierre, el punto de falla, el agujero que pone en jaque toda pretensión de consistencia y cierre definitivo. La figura que en este caso encarna el segundo momento de esta dinámica es la posición femenina. Para esta filósofa la posición masculina (todo) y la posición femenina (no todo) son Reales y pueden encarnarse por cualquier género. Desde este enfoque no ve necesarias las tentativas de deconstruir la diferencia sexual (Copjec, 2006: 31).

En segundo lugar, Zupančič destaca el carácter *precario* de la mujer al encarnar la posición femenina en tales fórmulas, un carácter que le permite cuestionar el orden simbólico (Zupančič, 2019: 447ss)**:** mientras la posición masculina persevera en el sostén inestable de la significación fálica y en el mantenimiento del orden simbólico, la posición femenina se acerca al hueco de Real en el centro de lo simbólico (Zupančič,2017).

Estas lecturas y puntualizaciones son retomadas por Žižek, especialmente en su obra *El sexo y el fracaso del absoluto* (2020). Como lo indica el título, allí insiste en que cada género se ve socavado por la diferencia, impidiendo su cierre, al tiempo que dicha diferencia se externaliza en lo simbólico, mediante la determinación de tal o cual género. Al igual que en su concepción de la ideología, la relación sexual se ve ineludiblemente mediada por la proyección de un fantasma que permita sostenerla, siempre y cuando mantenga bajo un "velo lo Real traumático irreductible a cualquier oposición simbólica inequívoca" (Žižek, 2020: 156).Así, frente a las críticas de Butler, la diferencia sexual no es reductible aquí a un binarismo simbólico, sino al antagonismo entre el sexo masculino y su exceso en la posición femenina, que Žižek caracteriza como "menos que nada": una posición que descompleta la totalización masculina(Ibid:169)[20].

De esta manera, las clasificaciones normativas fracasan no por la riqueza inagotable de las identificaciones posibles (dimensión simbólica), sino por la persistencia irreductible de la diferencia como imposible (dimensión Real). Cualquier elección o identificación conlleva una pérdida, pero esta X en pérdida no lo tiene el otro sexo, no hay totalización posible, sino que es una pérdida derivada de la misma división de los sexos (Ibíd.: 281ss).

De este modo, Žižek apoya las políticas deconstructivas de los movimientos LGTBIQ+ respecto de la oposición sexual normativa. Pero insiste en el carácter irreductible de la tensión antagónica y constitutiva de lo sexual como tal: no hay diversificación ni multiplicación clasificatoria que logre librarnos de ella. En tal sentido, las luchas sociales de los colectivos trans visibilizan las modalidades de exclusión e indiferencia que también se articulan hoy en ciertas prácticas o discursividades de luchas sexistas y de género (Žižek, 2018a: 274-278).

En suma, desde la perspectiva psicoanalista y feminista de la diferencia sexual, Žižek delinea un movimiento que no se reduce a la lucha simbólica por el reconocimiento, sino de una ontología negativa que impide el cierre simbólico, des-fun-

20 Frente a las críticas de Butler, esta secuencia no es histórica sino lógica, por lo cual dicho exceso puede ser encarnado en diferentes corporalidades y géneros (subjetividades trans; integrantes de la comunidad LGTBQ+; etc.), pues su función es señalar la inconsistencia de la posición masculina. Véase Llevadot, 2020: 351 ss.

damenta el pretendido acabamiento de cualquier posición de género. Ello supone desmontar la aparente naturalidad y consistencia de las configuraciones simbólicas, lo cual implica, en primera instancia, ceder (un poco) la certeza en la consistencia de los significantes. Estas consideraciones suponen, en definitiva, una comprensión del otro en tanto prójimo.

5. Del Otro ¿a cuál otro?

Desde finales del siglo pasado se ha desarrollado una comprensión del otro y la alteridad que se aparta de las limitaciones de la fenomenología de Husserl, para avanzar por los senderos de la hermenéutica heideggeriana. El punto central de este desplazamiento consiste en ir más allá de la alteridad binaria, relativa al yo o al sujeto, puesto que ello imposibilita concebir la dimensión ontológica propia de lo otro en tanto tal. En este sentido, las respectivas elaboraciones de Lévinas y Derrida desarrollan una concepción radical. Pero Žižek encuentra en ello otra versión de aquél nacionalismo eurocéntrico que discierne al prójimo desde la órbita comunitaria del propio Estado-Nación. En este sentido, su discusión se articula especialmente con la perspectiva de Lévinas, para quien la existencia del sujeto se funda en una apertura a una otredad irreductible (Lévinas,2001: 21 ss).

En líneas generales, Lévinas desarrolla una comprensión que destaca el carácter primario del encuentro intersubjetivo a través del rostro. Dicho encuentro pone al descubierto una fragilidad que impide reducir la alteridad a lo mismo del yo o sujeto, al tiempo que instala una responsabilidad para con el otro. La presencia *vis a vis* presupone la responsabilidad sin condiciones por el otro, sin simetría ni equivalencias (Lévinas, 2003: 48-51; 97-104).

Frente a ello, Žižek distingue varias dimensiones del otro: el imaginario, simbólico y Real[21]. En el primer caso se trata de la experiencia con nuestros semejantes, en donde priman las relaciones corporales, la imagen, la competencia, el reconocimiento, etc.; en el caso del Otro simbólico, como hemos visto, la referencia es a la existencia social, las reglas interpersonales, la coexistencia en sus lazos lingüísticos, significantes y comprensivos. Finalmente,distingue el otro en tanto Real, aquello que Lacan (en su lectura de Freud) distingue como la "Cosa imposible"[22],es decir, la dimensión no cubierta por lo imaginario y simbólico y que constituye nuestra experiencia del otro como sujetos del inconsciente. Ahora bien, ¿cómo se sitúa esta dimensión del otro?

A diferencia de las demás dimensiones cercanas a la encarnación del rostro, con el otro Real no es posible mediación, simetría o diálogo, pues subyace al semblante imaginario en su manifestación cotidiana: el rostro no es otra cosa que la proyección de nuestra propia imagen especular. Debajo de ella se encuentra latente una otre-

21 Podemos encontrar discusiones en torno a la compatibilidad o no de las concepciones del otro en Žižek y Lévinas. Al respecto véase, Škof (2012) y Dasgupta -Mukherjee (2018).

22 La referencia a la Cosa (*das Ding*) remite a la teoría pulsional de Freud en el cual el individuo se topa una y otra vez con la imposibilidad de satisfacción plena. En la dinámica de necesidad, demanda y satisfacción el objeto primario se revela como perdido. Por ello, aquí la Cosa designa lo Real que intenta ser cubierto por la ilusión de consistencia.

dad radical, una *Cosa monstruosa* que no se puede morigerar (Žižek, 2010: 192).

De esta manera, no es posible una captura del otro-Real que lo ordene de forma comprensible; tampoco se puede recubrir con los elementos con los que contamos del orden socio-simbólico: debajo de los semblantes simbólicos-especulares subyace una X insoluble y sin forma, por tanto, monstruosa (si tomamos como medida la forma que obtenemos de la ecuación imaginaria de la imagen de sí y de los otros). Esta dimensión se pone en evidencia cuando alguna experiencia inesperada deja suspendido al prójimo amistoso, cuando cae el socio-humano que recubre nuestras relaciones comunitarias. En las antípodas se encuentra el rostro humano (simbólico) en la perspectiva de Lévinas, que para Žižek no es más que un discurso que busca ordenar, moderar y contener este carácter monstruoso y aterrador del otro.

Frente a ello retoma la figura de Primo Levi del *Nebenmensch* (Žižek, 2018b:79 ss.), o más aún, el *Muselmann* como el muerto vivo, el exceso no asimilable de los campos de concentración, que representa al prójimo del nivel cero donde no es posible la reciprocidad y la simetría. Sin empatía posible, esta dimensión del otro da cuenta del exceso que subyace a todo rostro armonioso: una otredad irreductible a la simetría del reconocimiento mutuo, que implica a su vez la posibilidad de lograr una auténtica aproximación. Por ello, el acontecimiento del encuentro con el otro es la desfiguración de las dos dimensiones que recubren lo Real, "desde un simple tic o mueca que deforma el rostro (...) hasta la monstruosidad de la falta total de cara" (Ibid: 197).

A partir de esta distinción podemos esquematizar algunos alcances de su comprensión del otro. Por un lado, la necesariedad: para que nuestra co-existencia se vuelva mínimamente tolerable, debe intervenir el orden simbólico en tanto mediador pacificador. En tal sentido, la conversión del Otro-Cosa en "prójimo" no puede darse por nuestra interacción directa: no hay relación simétrica entre seres humanos, sin el Orden simbólico impersonal. Por otro lado, la contingencia: cuando el funcionamiento del Otro simbólico queda suspendido, el prójimo amigable pasa a coincidir con la *Cosa monstruosa*.

6. Hacia una emancipación comunitaria

Con esta perspectiva no es posible desarrollar una política emancipatoria vinculada a la comprensión moderna de la comunidad y de los lazos sociales. Más aún si consideramos una crítica de las nuevas formas de poder a partir de otra categoría lacaniana: el goce (*jouissance*). En líneas generales, esta categorización se articula como una recepción y relectura de las dilucidaciones de Freud en torno a las pulsiones más allá del principio de placer y a los modos de satisfacción de los síntomas. En este sentido, el goce no sólo remite a los modos de sufrimiento como formas de satisfacción (placer en el dolor) o a las fuerzas pulsionales destructivas, sino también a sus efectos y relatos por parte del sujeto. En todo caso se trata de una tendencia pulsional que no remite a un lazo con el Otro (como es el caso del deseo), sino que se limita a un movimiento circular con la propia satisfacción (Lacan [1968-69] (2011): 20; 231; Lacan, [1971-72] (2014): 150; Lacan [1972-73]

(1981): 11; 32ss.; Lacan [1974] (1988): 526). Así, "la interminable circulación alrededor del objeto, genera una satisfacción por sí misma" (Žižek, 2006b: 107).

Entre otras cuestiones, Žižek reconoce allí un modo de configuración comunitaria: cada comunidad se mantiene unida en torno al goce estructurado mediante fantasías (Žižek, 2016:321). De esta manera se alcanza una unidad simbólica cimentada por una relación libidinal de goce de la *Cosa-Nación*, esto es, un objeto sublime (Nación) que se supone totalizado en el horizonte de todo intercambio comunitario nacional. Esta comunidad de goce desencadena la lógica del menoscabo: "el otro (inmigrante, extranjero, etc.) roba mi goce", es decir, se identifica el otro con aquél exceso que pone en peligro el supuesto equilibrio armónico del goce de aquellos que integran una comunidad(Ibid: 324).

Más aún, en sus análisis actuales, nuestro autor subraya que el mandato imperante en nuestras sociedades contemporáneas es al goce y no a su eliminación, prohibición o regulación, tal y como sucedía en épocas anteriores: un imperativo al goce en la sexualidad, en el desempeño en todas las áreas, en el entretenimiento, en el consumo, en las relaciones interpersonales, lo cual intensifica aquella lógica del menoscabo: cuanto más debo gozar de todo,más se intensifica el fantasma de la amenaza del otro(Žižek, 2006: 241). Asimismo, entiende que los discursos y programas políticos que se orientan a la armonía y la tolerancia al otro, en tanto mandato ético, no son más que políticas comunitarias propias de una sociedad del goce (Žižek, 2010: 204). Ahora bien, ¿cómo es posible, desde estos límites, desarrollar una política emancipatoria?

En diversos tramos de su obra, el pensador esloveno insiste en el trastocamiento radical que es posible alcanzar en esta época, por medio de aquello que denomina acto auténtico o ético. Ello se inscribe en una teoría del acto que toma elementos del psicoanálisis para articularlos con la noción de *Acontecimiento* en Badiou, entre otros: el acto implica la posibilidad de una transformación radical del estado de cosas actual (dada su inconsistencia ontológica), y una reconfiguración de la posición del sujeto.

El punto de partida de esta teoría podemos situarlo en la distinción lacaniana entre *Acting-out*; *pasaje al acto* y *acto simbólico*. El primero emerge ante la angustia, pero sosteniendo una relación intersubjetiva, es decir, manteniendo al sujeto en la dimensión simbólica. En el segundo caso, en cambio, el acto motorizado por la angustia no supone un mensaje dirigido al Otro, sino su respectiva suspensión y salto hacia lo Real. En ambos casos, el movimiento se cierne en torno a la búsqueda desesperada de una inscripción simbólica, cuyos intentos se revelan fallidos. Frente a estas dos modalidades, el acto simbólico es asumido por el sujeto,ya no en una huida sino en una decisión que supone : primero, "ver/comprender" la función del fantasma (un mero tapón de la brecha de la realidad, la experiencia, el lenguaje); segundo, "atravesar" la "ventana" del fantasma y, finalmente, "concluir" con el trastocamiento de las coordenadas simbólicas de la situación, lo cual implica la destitución de la propia posición subjetiva[23].

23 Respecto al uso lógico de los términos "ver, comprender y concluir", véase Lacan [1945] (2008): 193-208.

Desde este marco nuestro filósofo destaca la política como el arte de lo imposible (Žižek,2011: 185), en el punto exacto donde se anudan el acontecimiento, la situación y la subjetividad (Butler, Laclau, Žižek 2000: 137). Considerado desde las coordenadas simbólicas de las cuales emerge, dicho Acto es imposible y su agente asume la responsabilidad de dar cuenta del carácter ideológico que sostiene las elecciones posibles. Precisamente por ello el filósofo esloveno caracteriza este acto como ético[24].

En definitiva, nuestro autor piensa en una política basada en el materialismo de un acto ético, aquél que puede desplegarse en torno al agujero de lo Real. Sea en forma individual o colectiva, se trata de un movimiento de contorneado y no de taponamiento o renegación. He aquí la base para una política emancipatoria que liga la dimensión de lo Real al carácter dinámico de lo imposible, tal como lo especifica en este fragmento:

> (...) para Lacan, lo Real no es imposible en el sentido de que nunca puede ocurrir un núcleo traumático que siempre se nos escapa. No, el problema con lo Real es que ocurre y esto es el trauma. Es decir, no es que lo Real sea imposible, sino que lo imposible es Real (…). Lo Real es imposible pero no simplemente en el sentido de un encuentro fallido. Es también imposible en el sentido de que es un encuentro traumático que tiene lugar, pero que somos incapaces de confrontar (Žižek, 2006a: 70 ss.)

7. A modo de conclusión

A continuación, retomaremos los puntos principales de nuestro recorrido con el objeto de circunscribir la ontología de la comunidad y del prójimo en esas elaboraciones. Allí buscaremos clarificar el modo y lugar que ocupa allí la categoría de Real, para finalmente dar cuenta de ciertos alcances y límites de la perspectiva política emancipatoria que propone.

En efecto, de modo introductorio especificamos los elementos principales de la enseñanza de Lacan que representan los antecedentes de las respectivas apropiaciones del pensador esloveno. En ese marco, la cobertura incompleta entre las dimensiones simbólica e imaginaria pone en evidencia el resto inasimilable de lo Real, que se revela por sus efectos en la propia experiencia subjetiva, por medio de la falla y la imposibilidad de cierre.

Desde aquí pusimos en evidencia que Žižek se apropia de la categoría de Real para articularlo en sus análisis de la esfera política y socio-comunitaria contemporánea. En su interpretación subraya el carácter de nudo de los registros RSI: lo Real no remite a una dimensión trascendente sino al vacío inmanente al propio campo simbólico, y su causa retroactiva,

24 Así lo describe: "(...)tan pronto como renunciamos a todos los lazos simbólicos. Y el acto en sentido lacaniano no es sino esta retirada por medio de la cual renunciamos al renunciamiento mismo, al tomar conciencia de que no tenemos nada que perder en una pérdida" (Žižek, 2021b: 88). En tal sentido el acto transforma al portador del mismo: destituye su identidad simbólica y transforma las coordenadas simbólicas o las pone en suspenso (para quedar frente a la negatividad radical en la que están fundadas). Por ello se diferencia de una mera acción o intervención activa. Ello también supone responsabilidad respecto del carácter, esto es, la elección de las coordenadas de lo Real de la pulsión (*debo*) y la dialéctica simbólica del deseo (*podría*): "(...) en un acto redefino con precisión las verdaderas coordenadas de lo que no puedo y debo hacer" (Žižek, 2006b: 325).

tal y como lo especifica en un conjunto de discusiones.

En primer lugar, hemos abordado sus debates con Laclau respecto de los conceptos de ideología, universalidad y hegemonía. Nuestro autor extiende el dominio de la ideología a la experiencia de la realidad, solo sustentable por medio de un suplemento fantasmático. No obstante, la brecha inmanente del campo social se cristaliza en el antagonismo de la lucha de clases, principalmente en su dimensión económica. La universalidad concreta que destaca es aquella que se articula desde los particulares en el límite de lo simbólico: los excluidos, los restos del capitalismo global, la posición abyecta que puede encarnar el fracaso del cierre social desde sus luchas radicales. En este sentido, mientras Laclau se limita a la dimensión simbólica (interpelación, lógica de la equivalencia, etc.), nuestro autor se apoya en los impasses de lo Real para plantear una transformación política radical.

En segundo lugar, puntualizamos diferentes momentos de sus contrapuntos con J. Butler respecto de las políticas de las identificaciones y la cuestión de la diferencia sexual. Las divergencias se articulan desde sus comprensiones de las relaciones del sujeto y los lazos sociales: en rechazo a todo aquello que no se inscriba en las dinámicas históricas y contingentes de la deconstrucción, Butler desarrolla una teoría de actos performativos y de configuración de la subjetividad que se despliega por entero en las oposiciones simbólicas, para subrayar el potencial transformador de la reinscripción y la repetición que dan lugar a la diferencia subyacente. Pero Žižek insiste en que esta comprensión binaria de lo Real no acierta al momento de analizar la imposibilidad de cierre identitario y del género: allí donde Butler interpreta una trascendencia, el pensador esloveno reconoce las condiciones de posibilidad de la contingencia y la historia.

Sobre la misma base, analizamos su concepción del prójimo en contraste con la perspectiva ética de Lévinas, allí donde nuestro autor distingue la dimensión Real del otro, su presencia informe fuera de toda adecuación a la propia imagen. Al igual que con su concepción de la diferencia y la relación sexual, Žižek analiza la experiencia del desencuentro con el otro, el fracaso y lo imposible en toda relación que entiende como condición para la invención y la auténtica novedad.

Finalmente hemos analizado los rudimentos de su perspectiva política emancipatoria. En este caso, la radicalidad del acto auténtico es coextensiva a una comprensión de los límites de nuestra vida sociosimbólica, los cuales suponen también la posibilidad de trastocar las coordenadas de la situación y de la posición subjetiva.

Desde estos análisis podemos entender que la ontología política de la comunidad y del prójimo en la obra de Žižek se articulan en forma primaria en torno a lo Real, una dimensión con la cual desplaza el lugar tradicional del fundamento. Así, su perspectiva postfundacional puede reconocerse principalmente en su rechazo de los análisis limitados a los elementos simbólicos de la experiencia comunitaria (al respecto, insiste en su tendencia implícita al cierre, su relación primaria con la conciencia, etc.), para extenderlos hacia el límite de lo simbólico con lo Real y el inconsciente.

Esta perspectiva y ontología negativa permite desarrollar un abordaje político singular del estudio de casos actuales, allí

donde los grupos sociales intensifican y recrudecen su confrontación: en los discursos y prácticas xenófobas o segregativas de cualquier tipo; en perspectivas de género y las configuraciones identitarias respectivas; en torno a las modalidades contemporáneas en que discursos de ultraderecha impactan en la configuración subjetiva de diversas franjas etarias (allí donde la promesa de consistencia y totalización se articulan en consonancia con la intensificación del empuje al goce y el desprecio creciente por el otro); así como también en los análisis del impacto cognitivo y subjetivo de las tecnologías y medios de comunicación en las nuevas generaciones, entre otras. En todo caso, la distinción entre subjetividad y sujeto, junto a la comprensión de lo Real como límite interno a toda dimensión simbólica permiten desarrollar una perspectiva en torno a la contingencia que facilita una apertura dinámica del pensamiento y discurso político contemporáneo (Butierrez,2022b). A diferencia de Laclau, Butler, e incluso Lévinas, esta ontología negativa permite pensar una política de transformación radical, tanto de la propia posición, como de las coordenadas socio-económicas. En cierto sentido, Žižek puede sostener así *una revolución sin* revolución.

Las críticas o limitaciones de estas aproximaciones de Žižek residen precisamente en dicho tratamiento de la dimensión simbólica de discursos y prácticas. Las tradiciones filosóficas ligadas a las perspectivas de Derrida, Foucault, Deleuze y Guattari, por ejemplo, han manifestado directa o indirectamente un rechazo a los enfoques articulados en la perspectiva lacaniana,no solo por incluir en el análisis una dimensión no reductible a lo simbólico (que fácilmente puede desplazarse hacia un trascendentalismo a-histórico), sino también por la ausencia de un tratamiento que se proponga superar las limitaciones de la lógica significante en los estudios de/desde el lenguaje.

Asimismo, en lo que respecta a su perspectiva política emancipatoria, la posibilidad efectiva de inscripción colectiva de un acto ético se torna difusa y de difícil precisión, dado que su concepción del acto toma principalmente elementos del discurso de la práctica psicoanalítica, aquella que se limita a una relación intersubjetiva meramente dual.

En este sentido, el "tiempo de ver y comprender" las dinámicas sociales desde este enfoque, puede encontrar ciertas dificultades al "momento de concluir" en un programa efectivo de intervención para el sujeto colectivo de una política emancipatoria. Aquí se abre la pregunta por la efectivización histórica de un acto socio-político que sepa arreglárselas con lo Real, aquella dimensión que testimonia el carácter infructuoso de todo intento de cobertura simbólica total y definitiva, y que pueda ir más allá de la mera espuma del acto individual.

8. Bibliografía

Acuña Echagüe, W. (2023). "Slavoj Žižek o las dos caras en la ideología: el fantasma y el síntoma", en *Aporía · Revista Internacional De Investigaciones Filosóficas*, (4 - especial), 163-182. https://doi.org/10.7764/aporia.4.64471

Balibar, É. (2006). "Los universales", en É. Balibar, *Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global*, Barcelona: Gedisa, pp. 155-186.

Barria Asenjo, N. (2022), "Slavoj Žižek y su aporte teórico-conceptual a los debates del Psicoanálisis y la Política", en *International Journal of* Žižek *Studies* V.16 (1), pp.1-9.

Bedin, P. (2017) "La crisis del universalismo: redefiniciones, propuestas y debates", en *Andamios*, V. 14, N. 13, pp.273-301.

Bowman, P.; Stamp, R. (2007) "Editor's Introduction: Is This Not Precisely… The Truth of Žižek?". En *The Truth of* Žižek, editado por Paul Bowman and Richard Stamp. London and New York: Continuum, 1-8.

Butierrez, L. (2010) "Reseña Žižek*, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*", *Revista de Filosofía y teoría política*, n. 41, pp.255-258

Butierrez, L. (2017) "Al murados: límites y horizontes desde el lenguaje en elaboraciones de Heidegger, Derrida y Lacan", *Lapso*, n.2, pp.31-39.

Butierrez, L. (2022a) "La perspectiva política de Byung-Chul Han y su comprensión de la alteridad", *Política y sociedad*, n.59(1), pp.1-13, https://doi.org/10.5209/poso.75866

Butierrez, L. (2022b) "Los procesos de subjetivación de los discursos actuales de ultraderecha desde una perspectiva lacaniana", *Actas XI Jornadas de Sociología UNLP*, Buenos Aires. Disponible en : http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/xi-jornadas/actas/ponencia-220713144948839646.

Butierrez, L. (2024) "La doble herencia del concepto de sujeto en la obra de Byung Chul Han", *Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política*, n.13(1),pp.1-12, https://dx.doi.org/10.5209/ltdl.83631

Butler, J. (2001) *Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción*, Madrid, Cátedra

Butler, J, (2007) *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Barcelona, Paidós.

Butler, J. (2006) *Deshacer el género*, Barcelona, Paidós.

Butler, R. (2005) *Slavoj* Žižek*, Live Theory*. London: Continuum.

Butler, R. (2014). *The* Žižek *Dictionary*, Durham: Acumen.

Cabezas, B. (2016), "Žižek: ¿Una Política de la Negatividad?", en *Liminales*, V.1, N.10, pp.191-210.

Camargo, R. (2011), "Slavoj Žižek y la teoría materialista del acto político", en *Revista de Ciencia política*, V.31, N.1, pp.3-27.

Cañaveral; Osorio; Rengifo (2023) "Acontecimiento y crisis contemporánea: un acercamiento a partir de la filosofía de Slavoj Žižek", en *Enrahonar*, n.70, pp.205-2017.

Copjec, J (2006) *El sexo y la eutenasia de la razón. Ensayos sobre el amor y la diferencia*, Barcelona, Paidós.

Critchley, S (2007) "Foreword: Why Žižek Must Be Defended?", en The *Truth of* Žižek, ed Bowman and Stamp. London and New York: Continuum, pp. xi-xvi.

Dasgupta, A.; Mukherjee, R. (2018) «Violently yours: Nation and its other in Mohsin Hamid's the reluctant fundamentalist», en Rupkatha *Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 10 (1), 2018, p. 153. DOI: 10.21659/rupkatha. v10, n1,17.

Dean, J. (2006) Žižek's *Politics*, New York: Routledge.

Devenney, M. (2007) "Žižek's Passion for the Real: The Real of Terror; The Terror of the Real". En *The Truth of* Žižek, editado por Paul Bowman and Richard Stamp. London and New York: Continuum, pp.45-60.

Eagleton, T. (2020) « Enjoy! », en London *Review of Books* 19, pp. 7 9.

Espinoza Lolas, R. (2020). "¿Es posible el pensamiento de Žižek hoy?", en *Res Pública. Revista de Historia de las Ideas Políticas*, 23(3), pp.333-342.

Gallo Acosta, J. (2020), "La potencia de la negatividad en Žižek como condición de la práctica psicoanalítica lacaniana", en *International Journal Žižek Studies*. Vol. 14, No 3. http://Žižekstudies.org/index.php/IJZS/article/view/1189

Gallo Acosta; Barria-Asenjo; Letelier (2023) "Repensar el psicoanálisis en el siglo xxi: hacia una clínica materialista alrededor del vacío", en *Enrahonar*, N.70, pp.155-169. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar.1408

Hernández, R. (2006). "Ese sublime objeto: la ideología en Žižek", en *Argumentos*, 19(52), pp.149-176. Recuperado en 15 de enero de 2024, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952006000300008&lng=es&tlng=es.

Hernández Vergara, E. (2018), "Žižek, la rehabilitación de la política de la verdad, y la ideología", en *Logos: Revista de Filosofía*, ISSN 1665-8620, Vol. 46, Nº. 131, págs. 77-108

Johnston, A.(2007a) "From the Spectacular Act to the Vanishing Act: Badiou, Žižek, and the Politics of Lacanian Theory", en Did *Somebody say Ideology*, ed. Fabio Vighi y Heiko Feldner. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp.39-77.

Johnston, A. (2007b) Žižek's *Ontology: A Transcendental Materialist Theory of Subjectivity*, Evanston: Northwestern University Press.

Lacan [1945] (2008), "El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma", En *Escritos 1*, Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. [1954-5] (2012) *El seminario de Jacques Lacan, Libro 2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica*, Bs. As., Paidós.

Lacan, J. [1964] (2015) *El seminario de Jacques Lacan, Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis*, Bs. As., Paidós.

Lacan, J. [1968-69] (2011) *El seminario. Libro 16: De un Otro al otro*, Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. [1971-1972] (2014) *El Seminario, libro 19. O peor*, Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. [1972-1973] (1981), *El Seminario, libro 20. Aun*, Buenos Aires: Paidós.

Lacan, J. [1974] (1988), "La tercera", En *Intervenciones y textos 2*. Buenos Aires: Manantial, pp.73-113.

Lacan, J. [1975-1976] (2006), *El Seminario, libro 23. El sinthome*, Buenos Aires: Paidós.

Laclau, E. (2016). *La razón populista*, México, Fondo de Cultura Económica.

Laclau, E.; Mouffe, Ch. (1987), *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una ra-*

dicalización de la democracia, Madrid, S XXI.

León, E. A. (2020). "Deleuze Y Žižek, Una visión De Paralaje". *Thémata. Revista De Filosofía* (Sevilla), n.º 61, pp. 12-22, doi:10.12795/themata.2020.i61.01.

León, E. (2021), "Una relectura antihumanista del concepto de sujeto en Badiou y Žižek", en *Azafea: Revista de Filosofía* n. 23, pp.255-275.

León Casero, J. (2021) "La monstruosidad del otro. Slavoj Žižek y la crítica a las concepciones occidentales de la otredad", en *Comprendre*, V.23(1), pp.27-48.

Lévinas, E. (2001), *Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro*, Valencia, Pretextos.

Lévinas, E. (2003) *De otro modo que ser o Mas allá de la esencia*, Salamanca, Ed. Sígueme.

Llevadot, L. (2020) "No somos histéricas, somos históricas: Žižek, Butler y el problema de la diferencia sexual", en Res Pública. *Revista de Historia de las Ideas Políticas*, 23(3), 343-354.

Marchart, O. (2007) "Acting and the Act: On Slavoj Žižek's Political Ontology". En *The Truth of* Žižek, ed. Paul Bowman y Richard Stamp. London and New York: Continuum, pp.99-116.

Marchart, O. (2010), *El Pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badieu y Laclau*, Bs. As., FCE.

Miller, J.A. (1990), *Recorrido de Lacan*, Buenos Aires, Manantial.

Nájera, E. (2016) "Una aproximación al problema del sujeto femenino a través del debate Butler-Žižek", en *Eikasía: revista de filosofía*, Nº. Extra 70, pp.119-138

Parker, I. (2004) *Slavoj* Žižek*, A Critical Introduction*, London, Sterling, Virginia: Pluto Press.

Ré, C. (2011), "El lugar del sujeto. Abordaje crítico sobre la problemática de la identificación en la constitución del sujeto", en Caletti, S. (coord), *Sujeto, política, psicoanálisis Discusiones con Althusser, Lacan, Foucault, Laclau, Butler y* Žižek, Buenos Aires, Prometeo.

Reartes, M. (2019), "Objetividad y discurso en las ontologías de Laclau y Žižek: controversias entre la abundancia y la falta", en *Cuadernos de H Ideas*; vol. 13, no. 13, pp.1-27.

Robledo, J. (2014)," La ontología de Slavoj Žižek y su implantación política desde la perspectiva crítica del sistema del materialismo filosófico", en El *Basilisco: Revista de materialismo filosófico*, n. 43, pp. 51-72

Roca Jusmet, L. (2010) "¿Merece la pena tomar en serio a Žižek?", en *Astrolabio. Revista internacional de filosofía*, N. 11, pp. 392-401

Roggerone, S. (2014)" ¿Acto o revolución? ¡Sí, por favor! Slavoj Žižek y la persistencia del marxismo", en *Razón y revolución*, n. 26, pp.31-44.

Roggerone, S. (2015), "Nombres de Lacan, o Slavoj Žižek y la actualidad del psicoanálisis", en *Revista Diferencia(s)*, V.1, N.1, pp.1-15

Russo, F. (2021), "Laclau y Žižek en sus laberintos: entre la herencia marxista y el posmarxismo"*, en Res Gesta*, n. 57, pp.281-301.

Sicerone, D. (2019) "Žižek y la diferencia sexual", en *Vorágine*, N.1, pp.141-159.

Škof, L. (2012) «Two recurrences of an idea: On political and ethical vicissitudes of democracy: Towards a politics of non-violence», en Synthesis *Philosophica*, 27 (2), p. 225.

Stavrakakis, Y. (2007). *Lacan y lo político*, Buenos Aires: Prometeo.

Žižek, Slavoj, (1993) [1990] "Más allá del análisis del discurso" en Laclau, Ernesto, *Nuevas Reflexiones sobre la Revolución de Nuestro Tiempo*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Žižek, S. (1998). "Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, (pp. 137-188). Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Žižek, S. (2000) *Contingencia, Hegemonía, Universalidad*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Žižek, S. (2001) *El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política*, Buenos Aires: Paidós.

Žižek, S. (2005) *El sublime objeto de la ideología*. México: Siglo XXI.

Žižek, S. (2006a), *Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly*, Madrid, Trotta

Žižek, S. (2006b) *Visión de Paralaje*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Žižek, S. (2010) "Prójimos y otros monstruos. Un alegato en favor de la violencia ética" en; Žižek, S.; Santner, E.; Reinhard, K. (2010) *El prójimo. Tres indagaciones en teología política*. Buenos Aires: Amorrortu.

Žižek, Slavoj, (2011) *El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo*, Buenos Aires: Paidós.

Žižek, S. (2015). *Menos que Nada: Hegel y la Sombra del Materialismo Dialéctico*, Buenos Aires, Akal.

Žižek S. (2016), *La permanencia en lo negativo*, Buenos Aires: Ediciones Godot.

Žižek, S. (2018a) *El coraje de la desesperanza*, Barcelona, Anagrama.

Žižek, S. (2018b) *Contra la tentación populista*, Buenos Aires, EGodot.

Žižek, S. (2020) *El sexo y el fracaso del absoluto*, Paidós, Barcelona.

Žižek, S. (2021a) *Como un ladrón a pleno día*, Barcelona, Anagrama.

Žižek, S. (2021b) *¡Goza tu síntoma!*, Buenos Aires, EGodot.

Zupančič, A. (2017) *Ontología y diferencia sexual*, EPOL, 29 de noviembre de 2017, http://epolmty.blogspot.com/2017/11/alenka-Zupančičontologia-y-diferencia.html.

Zupančič, A. (2019) "Interview with Alenka Zupančič: Philosophy or Psychoanalysis? ¡Yes, Please!", *Crisis & Critique*, Vol. 6, nº 1, pp. 434-453.

EMIGRACIÓN Y RETORNO DE POBLACIÓN VENEZOLANA: DOS CARAS DE UN MISMO FENÓMENO. MOVILIDAD HUMANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y POS-PANDEMIA

EMIGRATION AND RETURN OF THE VENEZUELAN POPULATION: TWO SIDES OF THE SAME PHENOMENON. HUMAN MOBILITY IN TIMES OF PANDEMIC

Jhonny Castro Trujillo
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. Ecuador
jhonnycastro@gmail.com

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Movilidad Humana, Migración Venezolana, Retorno, Pandemia, Suramérica.
Key words: Human Mobility, Venezuelan Migration, Return, Pandemic, South America.

Resumen: El presente trabajo tiene como propósito mostrar el cambio en los flujos migratorios ocurrido en algunos países de la región suramericana con respecto a la migración venezolana. Para ello se realizaron dos tipos de análisis; en primer lugar, uno documental sobre las medidas adoptadas en materia migratoria; y, en segundo lugar, entrevistas semiestructuradas a cincuenta y cinco venezolanos retornados desde siete países diferentes. Entre los principales resultados se evidencia que desde varios países de Suramérica existe una tendencia de retorno de migrantes venezolanos hacia su país. Este retorno se ha dado en dos modalidades el retorno voluntario asistido a través del Plan Vuelta a la Patria, y el retorno voluntario no asistido, siendo este segundo el de mayores proporciones.

Abstract: The purpose of this work is to show the change in migratory flows that occurred in some countries in the South American region with respect to Venezuelan migration. For this, two types of analysis were carried out; firstly, a documentary on the measures adopted in immigration matters; and, secondly, semi-structured interviews with fifty-five Venezuelans returning from seven different countries. Among the main results, it is evident that from several South

American countries there is a tendency for Venezuelan migrants to return to their country. This return has occurred in two modalities: the assisted voluntary return through the Vuelta a la Patria Plan, and the unassisted voluntary return, the latter being the largest.

1. Introducción

Desde el año 2018 y más notoriamente a partir del año 2019 se produce un lento pero progresivo retorno de migrantes venezolanos a su país, este hecho que no contó en su momento con cobertura mediática o difusión, tiene un punto de quiebre importante con la llegada de la pandemia por COVID19 a partir de marzo del año 2020. Siendo a partir de esa fecha donde el fenómeno del retorno comienza a cobrar cierta relevancia tanto para instituciones académicas, organismos internacionales como para los *mass media*.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno es el movimiento de personas que regresan a su país de origen después de haberse mudado de su lugar de residencia habitual y haber cruzado una frontera internacional. En el caso de Venezuela, es un derecho reconocido en instrumentos internacionales del sistema de protección de derechos del cual Venezuela es adherente[1].

Para algunos investigadores la causa de este contraflujo migratorio se debe a los efectos que produjo la pandemia en las esferas económicas y laborales de los migrantes, en especial aquellos en condiciones de alta vulnerabilidad. Por otro lado, las medidas tomadas por cada país para la contención de la propagación del virus y luego el manejo socio económico de la crisis sanitaria, incidieron en generar las condiciones necesarias para el retorno de los migrantes. Las temporalidades de estudio usadas en el presente trabajo a saber *antes, durante y después* de la pandemia mundial por COVID19, permite mostrar evidencias que apuntan a que el fenómeno del retorno voluntario y la ralentización de la migración venezolana está presente al menos desde el segundo semestre de 2019 y que no es exclusivo a los efectos de la pandemia por COVID19 que empezó meses después. Otros de los motivantes para el retorno pueden estar asociados a lamentables episodios de xenofobia y criminalización de la migración, además de las dificultades para obtener un estatus jurídico "regular" y por ende la estabilidad en un proceso de inserción definitiva.

El presente trabajo tiene como propósito mostrar el cambio en los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos ocurrido en algunos países de la región suramericana, para lo cual se realizaron dos tipos de análisis, uno de carácter documental con estadísticas oficiales y reportes de situación de los tres momentos, y, en segundo lugar, otro a partir de fuentes directas a través de entrevistas semi estructuradas realizadas a cincuenta y cinco migrantes venezolanos retornados desde siete países diferentes.

1 Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 22.5 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo está organizado en cinco partes: la primera, el contexto migratorio previo a la llegada de la pandemia por COVID19. En la segunda, se muestran evidencias del cambio en el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos antes de la llegada de la pandemia. En la tercera parte, se identifican y sistematizan las principales medidas de restricción a partir de la llegada del COVID19 a la región y las evidencias de contraflujo o retorno de migrantes venezolanos durante la pandemia. En la cuarta sección, se presentan declaraciones oficiales y estudios que dan cuenta del retorno de migrantes postpandemia. Y finalmente, se muestran los resultados de las entrevistas realizadas a cincuenta y cinco emigrantes retornados desde siete países diferentes.

2. Contexto migratorio regional previo a la llegada del COVID19

2.1. Situación Migratoria Venezolana 2015-2020

En la segunda década del siglo XXI, con mayor notoriedad a partir del año 2014 y 2015, se produce en la República Bolivariana de Venezuela una emigración en varias oleadas e intensidades que no ha cesado hasta el día de hoy. Este novísimo y rápido proceso de emigración tomó por sorpresa a la sociedad toda, incluida la academia, debido que al ser un fenómeno inédito que contrasta drásticamente con la tradición republicana, que desde sus orígenes ha sido siempre un país de acogida de múltiples y diversas migraciones internacionales[2] (América Latina y el Caribe, Europa, Asia, Medio Oriente), se carece de legislación, institucionalidad y de cultura política y ciudadana para abordarlo y procesarlo.

Es preciso recordar, que el actual fenómeno migratorio venezolano puede ser visto como una suma de factores económicos, políticos y sociales. Entre algunos a destacar esta la caída abrupta de los precios del crudo a nivel internacional a partir de julio año 2014 en más de un 76% de su valor[3], principal fuente de recursos para el gasto público de la república, que trajo consigo el deterioro de la calidad de vida y de los principales indicadores socioeconómicos. En el ámbito político, la aplicación de una agenda violenta e insurreccional de parte de un sector de la oposición política venezolana con las consecuencias de repolarización de la sociedad que trajo consigo. En el ámbito económico internacional las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Venezuela que han afectado de forma importante el desempeño de su economía, en especial de la actividad petrolera.

2 Venezuela, incluso antes de alcanzar su independencia política del Reino Español hasta finales del siglo XX sostuvo planes, programas y proyectos de estímulo a la inmigración en un primer momento dirigido hacia población europea y posteriormente latinoamericana. Estas políticas se mantuvieron en distintas intensidades por aproximadamente 150 años, para más detalle ver: Castro, Jhonny (2020). *Política Migratoria venezolana, una tradición de recepción. El caso de la inmigración española del siglo XX*.

3 Entre junio de 2014 y enero de 2016, los precios cayeron de 105,37 dólares a 33,62 dólares. Las ganancias netas pasaron de 15.835 millones de dólares a 9074 millones. Para más detalle ver (Rousseau, 2017).

El debate sobre las cifras reales que permitan aproximarnos a este fenómeno migratorio no escapa a la polémica, tanto por quién realice la cuantificación como por la metodología aplicada. Sin embargo, Según cifras de la Plataforma de Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela[4] con corte al 05 de agosto de 2022, se contabilizaban 6.805.209 venezolanos migrantes y refugiados en el exterior. De los cuales, según esta plataforma, 5.745.664 venezolanos se encuentran en América Latina y el Caribe. Cabe destacar, que esta cifra es totalizada a partir de los datos proporcionados por los gobiernos de cada país receptor[5] existiendo importantes cuestionamientos con respecto a la metodología de cálculo y el uso de estas cifras, situación a la que nos referiremos más adelante.

Si consideramos que según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), la población total estimada para el mes de junio de 2022 calculada como proyección del último Censo realizado en el año 2011, es de 33.360.238 millones de personas, y en dependencia del dato que se tome por válido, a la fecha ha migrado aproximadamente entre el 15 o 20 por ciento de su población[6], un dato que no es menor y que refleja la magnitud del flujo migratorio.

3. La migración de retorno como parte de la movilidad humana

Según la Organización Internacional de las Migraciones, el retorno es el movimiento de personas que regresan a su país de origen después de haberse mudado de su lugar de residencia habitual y cruzar una frontera internacional (IOM, 2019: 186). A su vez, el retorno es un derecho reconocido en instrumentos internacionales del sistema de protección de derechos del cual Venezuela es adherente. Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 22.5 Convención Americana

4 Esta plataforma es un mecanismo de coordinación regional coliderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para responder al desplazamiento de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Está conformada por más de 192 organizaciones socias en 17 países de América Latina y El Caribe, apoyadas por instituciones internacionales de financiamiento y más de 30 donantes del sector privado e institucional. A través de la plataforma digital de coordinación para migrantes y refugiados venezolanos https://r4v.info/es/situations/platform realiza constantes actualizaciones del número de migrantes y refugiados a partir de la data suministrada por cada uno de los países.

5 Autoridades del gobierno venezolano han cuestionado estos datos y la manera de calcularla, en vista que la misma pudiera contener cifras de personas con estatus como el de turista, no contabilizar a los retornados, o el caso de que un mismo migrante en tránsito hacia su país de destino final pudo haber sido contabilizado por cada uno de los países por donde ingreso. Para más información ver entrevista realizada por el diario El Comercio de Ecuador: https://lc.cx/ROprdH

6 Existen otros estudios como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), la cual en su versión presentada en septiembre del año 2022 arrojó que la población en Venezuela es de 28,3 millones de venezolanos. Con lo cual, si se toma esta cifra por cierta y tomando como válida la de la Plataforma R4v, el porcentaje de emigración estaría por encima al 23% del total de la población.

sobre Derechos Humanos. La migración de retorno, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Algunos analistas e investigadores establecen como causa de esta tendencia a los efectos de la Pandemia de COVID19 en los distintos países de la región y su impacto en los migrantes. No solo la pandemia en sí misma, sino las medidas tomadas en cada país y las consecuencias en las economías de la región generaron condiciones para el retorno necesario de los migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad. Así, por ejemplo, Gómez y Molina precisan:

> … La población migrante ve incrementarse sus problemas debido a la pérdida del empleo. Se le imposibilita salir a cumplir sus jornadas laborales diarias, además de que debe afrontar la carencia de programas de atención en el proceso social del trabajo, la separación familiar y la soledad por la pandemia en las diferentes ciudades de América. En este sentido, las jurisdicciones de los países de tránsito y destino no detienen su política, seguimiento y detención (2020: 119).

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello refiere que el fenómeno del retorno

> … es consecuencia de las políticas de prevención y contención de la pandemia, que ha tenido el confinamiento como principal estrategia. Ocupándose principalmente, del sector informal, muchos migrantes y refugiados se encontraron de un día para otro sin ingresos, ni vivienda, ni alimentos, ni redes de apoyo familiares o institucionales, por lo que el regreso a Venezuela pareció para algunos la única opción (CDH-UCAB, 2020).

Sin embargo, esta tendencia de retorno de la migración venezolana puede ser ubicada incluso antes de la llegada de la pandemia.

> La ralentización de las emigraciones y la migración de retorno ya vienen ocurriendo desde el segundo semestre de 2019, y no puede atribuirse exclusivamente al fenómeno generado por la pandemia de la COVID-19. De hecho, el gobierno de Colombia señala que entre los meses de enero y febrero retornaron a Venezuela unas setenta mil personas, pero que, durante los meses de marzo y abril, cuando realmente entra en escena la pandemia, esta cifra se duplicó (*Diario La Jornada* citado por Martes y Navas (2020: 27).

Al respecto vale considerar lo señalado en su informe del año 2020 por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas: "El retorno a Venezuela es un proceso continuo, según informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OSHA-2020)." (Gómez y Molina, 2020: 132)

Contar con cifras que otorguen certezas en estos procesos es muy difícil, pues ante la llegada de la pandemia y los posteriores cierres de fronteras y controles sanitarios, fueron muchos los migrantes que ingresaron y también salieron de Venezuela por "trochas" o "caminos verdes" pasos irregulares desde distintos puntos, por lo que no se cuenta con una estadística real del antes y después de la pandemia, dado que habría un subregistro en las cifras de que las personas que no ingresaron por puntos de control regular. En ese sentido, las declaraciones de autoridades y entes gubernamentales son las aproximaciones más cercanas que se tiene hacia esta tendencia o contra flujo migratorio.

Cabe también mencionar, que en el marco de la disputa política que imbuye al fenómeno migratorio, se presentan intere-

ses que minimizan o maximizan una tendencia de acuerdo a sus beneficios. Así "aceptar el retorno supone la negación del discurso que ha venido promoviendo durante los últimos años, según el cual lo que ha ocurrido en Venezuela es una crisis de refugiados" Martes y Navas (2020: 29).

Siguiendo con Martes y Navas, se muestra la declaración de la directora del Consejo Noruego para los Refugiados destacada en Colombia, Dominika Arseniuk, quien declaró, el día 7 de abril, "que los venezolanos que buscaron refugio en ese país estaban perdiendo sus medios de vida como consecuencia de la pandemia y están regresando a Venezuela, por lo que instó a hacer más por incluir a los venezolanos en su plan de respuesta o "nos arriesgaremos a que muchos más vuelvan a una vida de incertidumbre"(2020: 30).

Muchas veces el retorno es visto como el fracaso del proceso migratorio, cuando realmente es un derecho que se puede efectivizar en cualquier etapa del proceso, que es el retorno voluntario de un nacional de un país a ese país, independientemente de las circunstancias personales, laborales, económicas o de salud bajo las cuales se realiza ese retorno.

Existen perspectivas diferentes entre investigadores norteamericanos y europeos con respecto al retorno. En el caso de los norteamericanos, la migración es concebida como una experiencia definitiva por lo cual el retorno es considerado un residuo de iniciativas fracasadas. En el caso de los europeos, las migraciones se conciben como un elemento transitorio en las biografías, en la cual el retorno, puede entenderse como un éxito migratorio (Blanco, 2000).

Para los Investigadores Osorio y Phelan entre las posibles causas del retorno estarían el impacto o choque adverso para sostener el hogar lo que podría considerarse un fracaso ante las dificultades para obtener un estatus jurídico regular, un trabajo, la falta de opciones para una vida digna, insuficiencia de recursos para sostenerse por más tiempo. Por lo que concluyen que "la mayoría de los retornados son personas vulnerables y pobres que estaban en un proceso de inserción el cual se frustró por causas externas a ellos" (2020:133).

Para la consultora Datanalisis, el pico migratorio de éxodo se alcanzó en el año 2018, "registrando una tasa de emigración neta-los que salen menos los que regresan-de alrededor de 1.850.000 personas (…) en el año 2021 el saldo migratorio fue de –180.000 personas: aún negativo, pero apenas 10% de lo que fue en 2018"[7]. Este dato guarda consistencia con reseñas de prensa que dan cuenta de un importante retorno desde países como Argentina, "Desde noviembre de 2021, en Argentina también se ve un cambio en el flujo migratorio, registró la BBC según datos del Diario el Clarín. Unos mil venezolanos abandonan cada mes el país de regreso al suyo"[8].

4. Evidencias del cambio del patrón migratorio venezolano previo a la pandemia por COVID19

Algunas de las primeras señales de retorno estuvieron asociadas a lamentables

7 Disponible en: https://n9.cl/oho0i

8 *Ibidem*.

episodios de xenofobia y criminalización de migrantes venezolanos, algunos de los cuales tuvieron una cobertura mediática y se les dio un tratamiento de espectacularización que resonó en toda la región. En paralelo de estos episodios de xenofobia o criminalización, como se mencionó en párrafos anteriores desde los gobiernos de la región se tomaron medidas regresivas en derechos de movilidad, limitando o poniendo barreras de ingreso a través de visados especiales y con requisitos concretos para la población venezolana.

Estas medidas restrictivas y regresivas en derechos de movilidad, realizadas por las autoridades de los Estados, fueron percibidas como una suerte de *xenofobia institucionalizada*, discursos diferenciadores o carta blanca hacia los entes policiales y de control, que no contribuyeron para nada en el proceso de acogida o integración de migrantes muchos de ellos en condición de vulnerabilidad. El conseguir un estatus jurídico regular también fue un obstáculo a sortear por los migrantes venezolanos, cuyos más recientes flujos carecían de los documentos de identificación y requisitos solicitados por los Estados para su regularización migratoria, situación que además condicionaba su acceso a empleos adecuados.

Para el año 2019 previo a la pandemia mundial por COVID19, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimaba en 2.519.780 la cantidad de venezolanos que habrían salido de su país. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[9], estimaba que la cantidad de migrantes venezolanos era de 4.769.498 y que mayoritariamente se ubicaban en Colombia, Ecuador y Perú. No obstante, existen evidencias que reflejan que al menos desde el segundo semestre de 2018 y con mayor notoriedad desde 2019 empezó este retorno de migrantes, a continuación, se muestran algunas de estas evidencias en países de la región.

En el caso de Ecuador, se tiene referencia de una salida importante de ciudadanos venezolanos en el año 2019, salieron más venezolanos de los que ingresaron a Ecuador, situación que cambió el sentido del flujo migratorio que se habían mantenido de forma sostenida desde el año 2015. Susana Morán en un especial publicado en el año 2020, destaca "entre septiembre y diciembre del 2019 ingresaron en promedio 600 venezolanos por mes, cuando en los meses previos habían llegado hasta 74.000 venezolanos en un solo mes"[10]. Este contra flujo se incrementó aún más en los últimos tres meses del año 2019 "salieron 4.000 extranjeros mensuales. En diciembre, el retorno fue más evidente: 5.854 venezolanos dejaron Ecuador en un solo mes"[11].

El cambio en el flujo migratorio evidenciado en el caso de Ecuador se mantuvo durante el inicio del año 2020 en momentos previos a la pandemia. Durante los meses de enero, febrero e incluso los primeros días de marzo "aumentó el ingreso, pero asimismo la salida. Por Rumichaca entraron en esos meses 3.151 personas y salieron 6.076. Por San Miguel (Lago Agrio) entraron 69 venezolanos y salieron 107. Mientras que por Huaquillas (El Oro) entraron 88 y salieron 293 migrantes. Después, las cifras oficiales se convierten en un punto ciego. Solo hay un registro de los primeros días de marzo sobre la entrada de 785 venezolanos y la salida de 1.371

9 Disponible en: https://n9.cl/q1kgc3

10 Disponible en: https://lc.cx/DMCwuU

11 *Ibidem*.

por todos los pasos fronterizos (Moran, 2020).

A la salida de ciudadanos venezolanos en circunstancias normales, hay que añadir la que se dio por vía de excepción, a través del Plan Vuelta a la Patria, un plan gestionado por el gobierno de Venezuela para el retorno voluntario de ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad, muchos de ellos objeto de ataques de xenofobia o criminalización de la migración que le impidieron instalarse de manera definitiva en el país o avanzar en su proyecto migratorio.

El 06 de septiembre de 2018 fecha en que se realiza el primer vuelo del Plan Vuelta a la Patria a Ecuador, hasta el 07 de diciembre de 2019, se habían realizado 36 vuelos para un total de 3.273 migrantes retornados a través de esta iniciativa, a los que se le suma un operativo especial y extraordinario de retorno de 167 ciudadanos repatriados vía terrestre en el mes de febrero de 2019, lo que totaliza 3.440 ciudadanos venezolanos retornados siendo para ese momento (meses antes de la llegada de la pandemia) Ecuador[12], el país con la mayor cantidad de vuelos y de migrantes retornados a través del Plan Vuelta a la Patria.

En junio de 2020 el Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) público el boletín técnico *Registro Estadístico de entradas y salidas internacionales del año 2019*, donde se señala que en el año 2019 hubo un decrecimiento del 8% en las entradas y salidas de extranjeros por puntos terrestres con respecto al año 2018, esto a partir del levantamiento de información que se realiza de veintinueve puntos de control migratorio operativos a nivel nacional. Según los datos del boletín técnico del año 2019 la nacionalidad con mayor porcentaje de ingresos al Ecuador fue la venezolana con el 24,9% del total de ingresos. Este dato para el año 2018 representaba el 39,4% de los ingresos internacionales.

Si bien es importante destacar que en el caso de Ecuador, en el mes de julio de 2019 se tomaron un conjunto de medidas restrictivitas en cuanto a la movilidad humana dirigidas en específicos a los ciudadanos de nacionalidad venezolana[13], que necesariamente inciden en las cifras de ingresos hacia el segundo semestre de ese año, dichas medidas no afectaban, al menos directamente a los que ya hacían vida a lo interno de Ecuador, por lo tanto, no tendría por qué incidir en el contraflujo, salidas de venezolanos en Ecuador.

Con respecto de Colombia, hay dos elementos que dificultan el análisis sobre un retorno de migrantes, el primero, la extensa frontera que comparten Venezuela y Colombia de más de 2.200 kilómetros cuadrados, con lo cual pueden ser innumerables los pasos irregulares de migrantes lo que genera un subregistro importante. En segundo lugar, las llamadas migraciones pendulares, de familias colombianas o binacionales, asentadas en

12 Balance del Plan Vuelta a la Patria. MPPRE. Marzo 2022.

13 En julio del año 2019 el Pte. Lenin Moreno emitió el Decreto n° 826 por el cual se establecieron un conjunto de medidas migratorias exclusivamente para los ciudadanos venezolanos: Requisito de visa para el ingreso a Ecuador a partir del 26 de agosto de 2019; Censo de ciudadanos venezolanos en Ecuador para conocer qué actividades realizan, en que provincias se encuentran y en qué condiciones viven y vigencia para Ecuador de los pasaportes de los ciudadanos venezolanos vencidos hasta por cinco años.

Venezuela, que pueden estar una etapa de su vida a cada lado de la frontera.

No obstante, la Organización No Gubernamental SURES en su informe del año 2021 señala sobre el retorno de migrantes venezolanos desde Colombia lo siguiente:

Durante los meses finales de 2019, como consecuencia de las condiciones precarias de vida y trabajo de las personas migrantes en países como Colombia y Perú, muchas personas comenzaron a retornar. En el mes de diciembre de 2019 se produjo una oleada de retorno de grandes magnitudes, que lamentablemente no fue adecuadamente monitoreada. El gobierno de Colombia informó que, durante el mes de enero de 2020, antes de la declaración de la pandemia, cruzaron hacia Venezuela unas 70 mil personas, y estimaban que en el mes de febrero pasaría más de lo mismo. En los meses de noviembre y diciembre de 2019, la dinámica fue algo similar a la descripta anteriormente (SURES, 2021:4 y 5).

En febrero del año 2020, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), aportaron algunos datos de la vulnerabilidad de la población venezolana residente en Colombia, la encuesta reflejo que el 85% de los hogares venezolanos en Colombia tiene dificultades para acceder a la alimentación; el 68% tiene dificultades de vivienda; el 44% tiene dificultades para acceder al mercado laboral o generar fuentes de ingreso y el 65% consume dos comidas al día o menos, mientras que uno de cada tres ha tenido que pedir dinero en la calle para comprar comida, datos que pudieran explicar ese retorno de migrantes venezolanos.[14]

En el caso de Brasil que al igual que Colombia comparte una amplia frontera terrestre con Venezuela, se empezaron a reseñar retornos de migrantes al menos desde el año 2018. Así en el mes de septiembre luego de un fuerte incidente de xenofobia en la población de Roraima, al norte de Brasil a partir del asesinato de un ciudadano brasileño un grupo de ciudadanos venezolanos retorno a su país, en la prensa de le época se reseñó el evento de la siguiente forma "Tanto los repatriados el sábado como los de este domingo vivían en viviendas improvisadas con maderas y plásticos en una barriada pobre de Boa Vista, capital del estado de Roraima y que se ha convertido en principal destino de los migrantes venezolanos que ingresan a Brasil (…) muchos de los que regresaron admitieron que enfrentan dificultades en Brasil debido a que, como no han sido admitidos en los refugios ofrecidos por el Gobierno, tienen que vivir en la calle a la espera de que surjan cupos en los albergues y carecen de alimentación y empleos"[15].

4.1. El retorno asistido. Creación del Plan Vuelta a la Patria

En septiembre del año 2018, a partir del conocimiento de lamentables episodios de persecución, victimización y xenofobia de migrantes venezolanos en algunos de los países de la región, el propio Presidente Nicolas Maduro en una alocución anuncia la implementación del Plan Vuelta a la Patria por parte del Gobierno Nacional de Venezuela para aquellas perso-

14 Documento Disponible en: https://n9.cl/fmeu3

15 "Grupo de ciudadanos venezolanos dejan Brasil tras linchamiento de inmigrante". Disponible en: https://lc.cx/2PSdIL

nas que sean censadas y deseen regresar a Venezuela…

> … establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de todos aquellos migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso, e incorpora a todos los repatriados y repatriadas a los programas sociales de Venezuela, lo más amplios del continente[16].

Entre las justificaciones dadas en ese momento para el lanzamiento de esta iniciativa se destacan: denuncias de ataques de xenofobia e irrespeto a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos, manipulación mediática, irrespeto a la soberanía de Venezuela. Cabe destacar, que durante el año 2018 se generaron denuncias sobre maltrato a los migrantes venezolanos desde Brasil, Perú y Ecuador. Es de esta forma, posiblemente al calor de emergencias por hechos violentos en contra de connacionales, que surge la primera iniciativa gubernamental de retorno de emigrados en toda la historia de Venezuela[17].

Este mecanismo que inicialmente, pareció más una operación de extracción de ciudadanos venezolanos víctimas de ataque de xenofobia, acoso y violación de sus derechos humanos en el contexto de personas migrantes, a través de los aviones de la línea aérea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), se fue estructurando en el tiempo, con una participación de los consulados y embajadas de Venezuela en el exterior, en donde se realizaría un registro o censo, de aquellos venezolanos que de manera voluntaria quisieran realizar el retorno a Venezuela.

Dentro de los requisitos expuestos en varios portales consulares para acceder al Plan Vuelta a la Patria se encuentran los siguientes: manifestar el deseo voluntario de regresar a Venezuela, y, registrarse en el Sistema de Registro del Plan ofreciendo información actualizada y veraz acerca de la situación en el extranjero y consignar copia o constancias de los documentos exigidos en el registro. En caso de no poseer documentación deben entregarse los datos de identidad exigidos en el registro. Se conoce también que luego del registro, se realizaba a una entrevista por parte del personal consular a los inscritos para el retorno, como una manera de verificar el grado de vulnerabilidad de derechos o de afectación de salud que podían tener para así establecer prioridades en el retorno.

Según el entonces Canciller, Félix Placencia, desde septiembre de 2018 al mes de abril de 2022 a través de este Plan se han producido un total de 28.521 retornos desde 21 naciones, a través de 165 vuelos y un traslado marítimo[18]. Si bien la implementación de dicho plan representa una manifestación de voluntad política, de manera preliminar la medida luce insuficiente ante la magnitud del fenómeno migratorio venezolano. No obstante, se destaca la gratuidad del plan, pues el traslado aéreo no tiene costo para los retornados, tampoco en aquellos casos en que se ha hecho traslado terrestre o marítimo.

16 Disponible en: https://mppre.gob.ve/plan-vuelta-a-la-patria/

17 Existieron iniciativas de incentivos para atraer al personal científico de alto nivel formado a través de programas gubernamentales en el exterior. Pero eran de muy corto alcance y focalizados en ese segmento. Pero nunca como una política generalizada de inmigración.

18 Ver cuenta oficial de Twitter de la Cancillería venezolana de fecha 10 de abril de 2022. Disponible en: https://lc.cx/LAL_ZM

No se cuenta con información precisa si este Plan realiza algún tipo de seguimiento o inserción económica-laboral a los migrantes retornados. Aunque algunas autoridades mencionaron en declaraciones a medios de comunicación que el objetivo era incorporarlos al sistema de Misiones Sociales de Venezuela, no se encontró evidencia concreta el respecto. Por lo que se pudiera decir que en esencia representaría el primer eslabón de una política pública de migración de retorno que debe ser profundizada.

Según la página del Plan Vuelta a la Patria, hasta febrero del año 2020, es decir, justo antes de la pandemia se reportaban las siguientes cifras:

País	Núm. de retornados
Colombia	764
Brasil	7285
Ecuador	3242
Perú	4259
Chile	1126
Total	**16686**

Tabla 1. Cifras del Plan Vuelta a la Patria antes de la Pandemia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Vuelta a la Patria. MPPRE.

5. Evidencias del cambio de flujo migratorio venezolano durante la pandemia

El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó Pandemia mundial debido a la aparición y rápido contagio de un nuevo virus de la familia del coronavirus, el cual paso a ser identificado como COVID19. Este virus fue identificado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China y rápidamente se propago a nivel mundial.

En vista de lo rápido del contagio y ante el desconocimiento sobre este tipo de virus y una posible vacuna o cura, los gobiernos del mundo empezaron a tomar medidas en pro de evitar los contagios de manera generalizada, en especial en aquellos países donde o aún no había llegado el virus, o existían muy pocos casos detectados. El primer caso en América Latina fue detectado en Brasil, el 26 de febrero y el último país en reportar la llegada del virus fue Haití el 19 de marzo, en pocos días todo el continente tenía la presencia del COVID19.

Una vez declarada la pandemia, y con la carga psicológica que representaba un hecho inédito en la humanidad por lo menos en los últimos cien años, los gobiernos de la región comenzaron a tomar una serie de medidas en pro de evitar la propagación del virus enfocados en límites de la movilidad, distanciamiento social y aislamiento o cuarentena, entre las que destacan: declaraciones de estado de emergencia o catástrofe, cierre de fronteras, suspensión de los viajes aéreos nacionales e internacionales, suspensión de actividades escolares en todos los niveles, confinamientos domésticos obligatorios y cuarentenas de distinto tipo y duración.

Los gobiernos de la región atendieron la pandemia mundial por COVID19 de forma muy disímil, con herramientas particulares e iniciativas fundamentalmente nacionales, priorizando a la población local en detrimento de la población migrantes y afectando los derechos de movilidad humana, situación que agravó el ya complejo panorama migratorio en vista de las

medidas adoptadas por varios gobiernos para afrontar, contener o limitar el fenómeno migratorio venezolano.

A pesar de las medidas para la contención de la movilidad, desde las primeras semanas rápidamente se empezó a evidenciar un contra flujo migratorio, un retorno de migrantes venezolanos desde distintos países de la región fundamentado principalmente en que las medidas de control y contención del COVID19 afectaban de manera importante a las personas migrantes y en situación de movilidad humana, muchas de ellas con trabajos informales, o en el sector de servicios y atención al cliente, que quedaron suspendidas al decretarse la pandemia. Este contra flujo sumaba migrantes provenientes del sur del continente Perú, Ecuador, Chile y hasta Argentina que se juntaban en Colombia para seguir su camino de retorno a Venezuela.

La vulnerabilidad laboral y económica, la falta de cobertura o ayuda sanitaria para los migrantes y el desalojo de viviendas o cortes de servicios básicos, producto del impago por no tener ingresos complejizaron aún más la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que decidieron emprender el camino de retorno a su país. En vista de las medidas de restricción de movilidad muchos migrantes realizaron su recorrido de retorno por pasos no regulares y su punto de ingreso a Venezuela no necesariamente fue por un puesto fronterizo oficial, por lo cual saber con exactitud la magnitud de ese contra flujo es difícil.

Lo ocurrido desde el propio mes de marzo de 2020 en adelante, donde migrantes en condición de regularidad o no, en los países destinos, decidieron desafiar las normas de confinamiento, contención o limitación de la movilidad para volver a sus países de origen, en muchos casos a través de pasos fronterizos no regulares encuadra perfectamente en la noción de derecho a fuga (Mezzadra, 2005), entiendo esta noción como una ampliación de ciudadanía, una suerte de liberación o rebeldía para el ejercicio de los derechos por parte de los migrantes.

En el caso de Colombia, se evidencio movimiento desde distintas zonas de ese país, mucho de los cuales tuvieron que ser canalizados por las Alcaldías por medio de autobuses que pudieran llevar a estos migrantes hasta la frontera con Venezuela. Sin embargo, se resaltan algunas notas de prensa de ese momento. Radio Cadena Nacional (RCR), el 21 de abril de 2020 reseñó la siguiente cifra, "Más de 35.000 venezolanos han cruzado territorio colombiano para regresar a su país hasta la semana pasada, según Felipe Muñoz, gerente oficial de la frontera entre ambos países. La cifra incluye a migrantes que estaban en Colombia y los que venían de otras naciones"[19].

En el diario El tiempo, en su edición digital del 15 de mayo de 2020 se daba cuenta de este movimiento de la siguiente forma. "La primera oleada, de 29.800 personas, se dio solo en tres días: entre el 15 y el 17 de marzo, antes de que entrara en vigor el cierre de la frontera con Venezuela ordenado por el gobierno de Iván Duque el 13 de marzo (…) de acuerdo con cifras de Migración Colombia, la ciudad desde la que más han salido buses con migrantes es Bogotá, con 7.429 personas entre el 4 de abril y el 11 de mayo. Es seguida por Bucaramanga, de la que han salido 3.390 y la tercera con mayor flujo es Cali, con una cantidad de 1.497 (…) Hasta

19 Disponible en: https://n9.cl/kbh5b

ahora, el porcentaje de venezolanos que ha cruzado hacia su país equivale solo al 1,4 por ciento del total de 1.825.000 que se contabilizan oficialmente en Colombia (…) De acuerdo con Migración Colombia, el 65 por ciento de las salidas se han dado por Norte de Santander y de los que han cruzado, 81 por ciento son adultos y el 19 por ciento son menores de edad"[20].

Por su parte la agencia FRANCE24 en una nota de julio 2020 reportó "El número de venezolanos que ha dejado de forma voluntaria el país rumbo a Venezuela en medio de la pandemia ha superado ya los 90.000, según informó este 21 de julio Migración Colombia, entidad del Gobierno colombiano encargada de los asuntos migratorios. Según las cifras de la entidad, un 76% de los migrantes atravesó hacia el país vecino por el puente internacional Simón Bolívar, situado en el departamento de Santander, al noreste de Colombia y fronterizo con Venezuela, mientras muchos otros lo han hecho de forma irregular por otros puntos de la frontera"[21].

En el mes de septiembre de ese año la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza el siguiente pronunciamiento: "A la fecha, se han registrado aproximadamente 105.000 retornos desde Colombia y 6.000 desde Brasil, según cifras oficiales", señaló el informe "Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país en el contexto del COVID-19", difundido en Washington"[22].

En el caso de Perú, las reseñas de los medios locales en referencia al retorno de migrantes fueron recogido de la siguiente forma: En reportaje realizado por la BBC "En Perú, muchos de los 860.000 venezolanos que había en marzo están abandonando el país pese a que las fronteras se cerraron el pasado 16 de marzo, según le confirmó a BBC Mundo la Superintendencia Nacional de Migraciones"[23].

En un especial sobre la migración de retorno realizada desde Perú, se suministraron los siguientes datos: "Entre los meses de marzo y mayo de 2020, 31.000 migrantes venezolanos en Perú regresaron a Venezuela, ya que la crisis sanitaria ocasionó el 89 % de los despedidos en la comunidad venezolana y provocó que el 39 % corriera el riesgo de ser desalojado de las casas que alquilaban, así lo reveló un informe de la Defensoría del Pueblo. En la actualidad no se tienen cifras oficiales de cuántos connacionales que migraron a Perú se regresaron, pero cada mes hay algún familiar o conocido que ya lo hizo"[24].

En el caso de Ecuador, en el mes abril de 2020 el portal Primicias reseño lo siguiente: "Guayaquil, que registra más de 5.300 casos. Grupos de venezolanos, algunos con niños, se juntan para emprender el viaje, cargando sus maletas y pertenencias en busca de transporte bajo las duras restricciones de movilidad impuestas en el país andino"[25].

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que muchos inmigrantes venezolanos cruzan desde Perú hacia Ecuador o a Colombia a través de pasos ilegales. "Hay la inquietud e intención de quienes quieren venir del Perú a Ecuador,

20 Disponible en: https://n9.cl/end7af

21 Disponible en: https://n9.cl/uxw3b

22 Disponible en: https://n9.cl/95dumk

23 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52648228

24 Disponible en: https://eldiario.com/2022/01/31/venezolanos-decidieron-regresar-de-peru/

25 Disponible en: https://n9.cl/ynoia

y de Ecuador a Colombia para regresar a Venezuela", manifestó la ministra de Gobierno, María Paula Romo[26]. "Están partiendo por grupos, uno de 150 personas ya habría cruzado el puente internacional de Rumichaca en frontera con Colombia"[27].

En el caso de Brasil, en el mes de abril de 2020, a pocas semanas del cierre de fronteras, "autoridades migratorias de Brasil informaron que al menos 2.000 venezolanos retornaron a su país desde Brasil. En la frontera de Brasil con Venezuela a los retornados se les practicó la prueba rápida para descartar el COVID19"[28]. Igualmente en abril, sale una publicación titulada *ACNUR al lado de venezolanos forzados por la pandemia a retornar* a su país, expresó "Se estima que más de 50.000 personas han regresado a Venezuela desde el comienzo de la pandemia"[29].

En el Informe de Situación del año 2020 realizado por la OEA con respecto a "… aumentaron los ingresos por vías irregulares y, entre marzo y septiembre, más de 140 mil venezolanos retornaron a su país por Colombia (134.000) y Brasil (8.000) al perder los medios de vida en los países de acogida y querer estar cerca de sus familiares por la pandemia". Cabe destacar, que dentro de la cifra personas que ingresan desde Colombia están la de los migrantes que desde países de más al sur se trasladaron a Venezuela como el caso de Ecuador, Perú y Chile.

En octubre del año 2020, es decir siete meses después de decretada la pandemia, el Canciller venezolano de entonces Jorge Arreaza informó que Venezuela ha recibido a más de 200.000 connacionales en los últimos meses, miles de ellos bajo el Plan Vuelta a la Patria, que posibilita el retorno de los venezolanos que carecen de los medios propios para su regreso, informaron el lunes fuentes oficiales[30].

La intención de esta sección no es cuantificar ni determinar el número o volumen exacto de retornados durante el periodo más fuerte de confinamiento, pero si, dar cuenta de un contraflujo que se produjo durante la pandemia.

6. Evidencias del cambio de flujo migratorios postpandemia

Para la consultora Datanalisis, el pico migratorio de éxodo se alcanzó en el año 2018, "registrando una tasa de emigración neta-los que salen menos los que regresan-de alrededor de 1.850.000 personas (…) en el año 2021 el saldo migratorio fue de –180.000 personas: aún negativo, pero apenas 10% de lo que fue en 2018"[31]. Este dato guarda consistencia con reseñas de prensa que dan cuenta de un importante retorno desde países como Argentina, "Desde noviembre de 2021, en Argentina también se ve un cambio en el flujo migratorio, registró la BBC según datos del Diario el Clarín. Unos mil venezolanos abandonan cada mes el país de regreso al suyo"[32].

26 Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/ecuador-inmigrantes-venezolanos-regresar-pais/

27 Disponible en: https://n9.cl/yv55g

28 Disponible en: https://n9.cl/7y8mu

29 Disponible en: https://n9.cl/pm1in

30 Disponible en: https://n9.cl/if01s

31 Disponible en: https://n9.cl/oho0i

32 Disponible en: https://lc.cx/wHSght

En el mes de abril de 2022, el Vicecanciller para América Latina, Rander Peña en una entrevista afirmó "Nosotros hemos a la fecha registrado más de 340.761 venezolanos que han retornado por vía aérea, terrestre…"[33]. Representando esta la cifra más actualizada, en cuanto al retorno, declarada por una autoridad gubernamental. De su declaración se infiere que esta cifra contiene a los más de 28mil retornados, para ese entonces, a través del Plan Vuelta a la Patria más todos los retornos ocurridos desde el inicio de la pandemia.

En el mes de marzo de 2022 se publicó en plataformas digitales un reportaje periodístico denominado "Regreso a Venezuela: hablan los retornados", en donde se mencionaba el retorno de migrantes venezolanos desde países como Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y quizás lo novedoso era que también desde España, es decir el retorno también se produce desde Europa. En el caso de España, en dicho reportaje se menciona "Estamos viendo actualmente un fenómeno que no había ocurrido que es la devolución de las personas que emigraron durante los años 2017 a 2021, al existir actualmente un pequeño o notable repunte de la economía venezolana son personas que prefieren volver y trabajar allá ya que pueden ver materializado unos ingresos en una moneda fuerte que les permita vivir en la actual Venezuela"[34].

En el mes de noviembre del año 2022, se da a conocer la cifra del total de retornos realizados a través del Plan Vuelta a la Patria, "Hasta la fecha va un total de 31.065 coterráneos beneficiados con este plan social de nuestro Gobierno humanista"[35], declaro Ramón Velázquez Ministro de Transporte y Presidente de la línea aérea CONVIASA

Independientemente de la metodología, las cifras del retorno migratorio dan cuenta de que el fenómeno existe, y que se ha mantenido en distinta magnitud por lo menos desde el año 2019. A la par de esto, especialistas afirman que hoy en día el fenómeno de emigración en Venezuela es 60% menor que en 2018[36], lo cual refleja la desaceleración del fenómeno migratorio venezolano. Según estudios de opinión realizados en el año 2019 por dos encuestadoras nacionales, Datanalisis y Consultores 21, revelaba que en ese año cuatro de cada diez venezolanos tenían la intención de irse del país, 44% según Consultores 21 y 46,2% según Datanalisis[37].

Esta desaceleración puede ser multicausal, siendo conformada por elementos internos y externos. Dentro de los elementos internos que han incidido en ese retorno podemos identificar, una leve recuperación o estabilización de la situación económica en Venezuela. En primer lugar, parece haber sido superado un ciclo de hiperinflación que abarcó los años 2017 a 2021, en segundo lugar, después de al menos siete años de crecimiento negativo de la economía, desde finales de 2021 y durante el 2022 se muestran indicadores positivos, al punto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

33 Disponible en: https://lc.cx/HJLXGq

34 Entrevista realizada al abogado de Migración Alejandro Scudiero de tugestion España, dentro del reportaje especial denominado "Regreso a Venezuela: hablan los retornados", realizado por David Placer. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=g9epc3J6HMM

35 Disponible en: https://lc.cx/-t_qH2

36 Disponible en: https://lc.cx/rT0QHG

37 Disponible en: https://lc.cx/cLrEQu

(CEPAL), proyectaba a Venezuela como el país de mayor crecimiento de su PIB[38], con una tasa de 10%. Por otro lado, está el fenómeno de la dolarización de facto de la economía, que ha sido percibido como un factor de protección de sueldos y salarios de los efectos inflacionarios.

Como elementos externos, está el hecho de la expectativa de una flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales implementadas por Estados Unidos especialmente en el área energética, y el impacto en un incremento en la producción petrolera. No menos importante, es el hecho de la conflictividad político y social de algunos países de la región, especialmente en Suramérica, además de un agravamiento de la situación económica de estos países, que dejan de ser atractivos para los migrantes venezolanos. Los episodios de xenofobia y discriminación para con la migración venezolana ocurridos en varios países terminan siendo un gran estímulo para pensar en el retorno o incluso en desestimar la opción de emigrar de quienes aún no lo han hecho.

En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2022, dada a conocer en el mes de noviembre ese año, mostró dos datos interesantes a efectos de tema de estudio. En primer lugar, se mostró la proporción de emigrantes retornados suministrado por los hogares, la cual no supera el 6%, y, en segundo lugar, se redujo en un 10% en comparación con la ENCOVI 2021, quienes envían ayuda a su hogar de origen, es decir, bajó el número de migrantes que envían remesas. Estos datos, aunque aparecen estar desconectados entre sí, pueden dar pistas acerca del número de emigrantes retornados. Cabe destacar, además que es la primera vez que en un estudio realizado en Venezuela acerca del tema migratorio aparece e indicador de retorno.

En diciembre de 2022, se publicó un estudio especial sobre el retorno de migrantes venezolanos a su país realizado por el Mixed Migration Centre, titulado *Retornando a Venezuela: motivaciones, expectativas e intenciones*[39], este estudio basado en 269 encuestas mostró datos interesantes sobre por qué los venezolanos dejaban el país de acogida. Así el 71% mencionó al menos, por uno de los siguientes factores: Acceso insuficiente a servicios (27%), imposibilidad para ganarse la vida (26%), dificultad para establecerse, discriminación en el país de acogida (23%) y/o por la falta de oportunidad para regularizar su estatus migratorio (22%). En este mismo estudio al ser consultados los migrantes venezolanos sobre las motivaciones del por qué retornan a Venezuela, el 81% para poder reunirse con familiares y amigos; el 63% por la nostalgia del hogar; el 45% por la mejora de las oportunidades económicas en el país, el 19% para iniciar un nuevo negocio o invertir y 11% por oportunidades laborales.

Finalmente, a inicio del año 2024 se dieron a conocer dos publicaciones que abonan en el tema. La versión de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2023, en ella la proporción de emigrantes retornados suministrado por los de hogares se mantuvo igual que el del 2022 en un 6%, sin embargo, aporto un nuevo y revelador dato, 18% de quienes viven en el exterior tienen planes concretos de regresar. Igualmente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dio a conocer el informe Tendencias Migratorias de

38 Disponible en: https://lc.cx/hT2Hsm

39 Disponible en: https://lc.cx/aIbVk-

las Américas correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2023, en donde se menciona que en el año 2023 hubo más retornos que en el año 2022. Así mismo, durante el 2023 por cada 2,02 personas que salían 1,0 retorna, lo que representa una proporción del retorno de 0,59.

6.1. Experiencia de 55 emigrantes retornados. Un estudio de campo

Como una forma de robustecer aún más la investigación ante la falta de data específica sobre migrantes retornados a Venezuela y su caracterización, se realizaron entrevistas semi estructuradas entre octubre del año 2022 y enero de 2024 a 55 emigrantes retornados desde Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá y Perú.

La entrevista contaba de tres grandes bloques de preguntas, a saber, un *bloque sobre la emigración* (fechas, motivaciones, destino, condiciones en que lo realizó); un segundo *bloque de retorno* (fechas, forma en que realizo el retorno, motivaciones para retornar, como ha sido la reinserción, y la permanencia de este retorno); y finalmente un *bloque de nuevas migraciones* (si volvería a emigrar, si tiene familiares que piensen emigrar o por el contrario retornar). La muestra en torno a siete países responde a las personas retornadas que se lograron identificar para la entrevista, pero al mismo tiempo se buscaba diversidad entre países de la región, con el fin de no sesgar el estudio a partir de la coyuntura económica, política o social de algunos de los países destino seleccionados por los migrantes.

El primer dato que salta a la vista en el estudio es en relación con la edad de los migrantes. El promedio de edad de los migrantes venezolanos oscila desde los 25 hasta 50 años, el rango comprendido entre 25 a 30 años tiene un 32,56% de la muestra, es decir la que predomina, la que le sigue en segundo lugar es la 31 a 35 años con un 27,91% de la muestra. Por lo que se puede apreciar que los jóvenes entre 25 a 35 años representan más del 60% de la muestra.

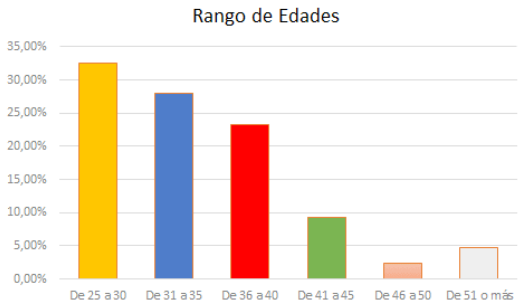


Gráfico 1. Rango de edad de los retornados. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

De los entrevistados, los hombres representan el 36,36% de la muestra, mientras que las mujeres representan el 63,64% de los entrevistados. De los cuales, el 43,63% son casados o se encuentran en unión libre. Este dato, por ejemplo, se contrapone a la literatura, en el sentido de que, si bien los hombres jóvenes son los que emigran con mayor frecuencia, pareciera que son las mujeres las primeras y en mayor número en retornar. Esto pudiera dar cuenta que, en el proceso de retorno voluntario, la estructuración del hogar es importante, y como proyecto de familia, se envía de retorno primero a las

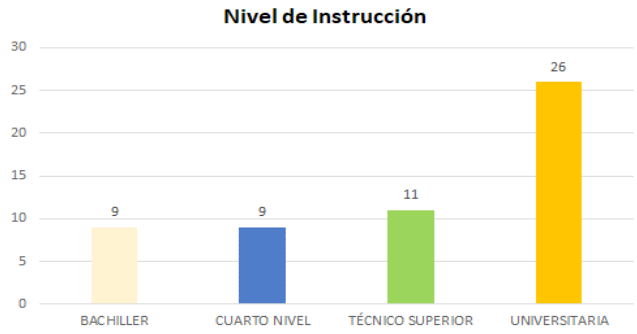


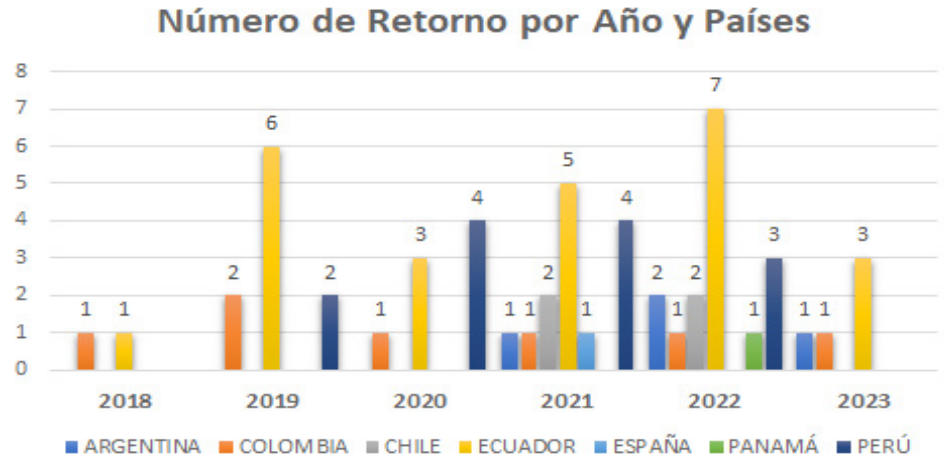
Gráfico 2. Nivel de instrucción de los retornados. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

madres e hijos y en un segundo momento a los hombres, caso exactamente contrario a lo que suele sucede en el proceso de emigración.

Al ser consultados sobre su nivel de instrucción se obtuvo que un 47,27% de la muestra reportó poseer formación universitaria y un 16,36% formación de cuarto nivel, eso nos da como resultado 63,63% de los retornados que forman parte de la muestra poseen un muy buen nivel de formación. Este dato reviste gran importancia pues denota que es una migración cualificada, y que aún y cuando esa cualificación pudo ser potenciador de opciones u oportunidades en el país destino o incluso en un tercer país, decidieron retornar.

En relación con el año en que decidieron realizar el retorno, la muestra arroja fechas desde el año 2018, como son los casos de emigrantes retornados desde Ecuador y Colombia, y de 2019 desde Perú, es decir retornos que se produjeron mucho antes del inicio de la pandemia por COVID19, manteniéndose durante la pandemia y posteriores a ella en todos los países desde donde emprendieron retor-

Gráfico 3. Año de retorno desde país destino de emigración. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.



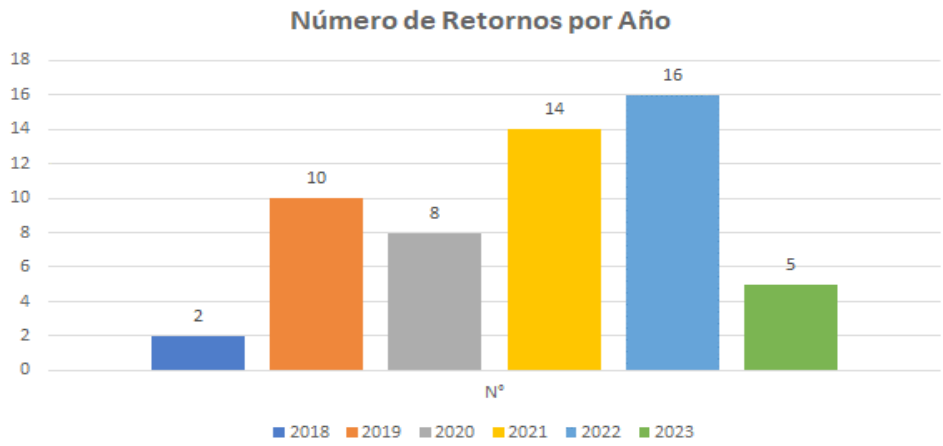


Gráfico 4. Número de retornos por años de los entrevistados. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

no los entrevistados. Así mismo el año en el que se han producido mayor número de retornos fue en el año 2022, año en el que se produce una recuperación moderada de la economía venezolana después de un ciclo de cifras negativas de al menos siete años continuos[40].

Una pregunta que puede dar cuenta del cambio de patrón en el flujo migratorio es en relación al año en que realizaron su proceso de emigración y a que país lo hicieron. En el grafico a continuación se puede apreciar que en la muestra de 55 entrevistados realizada, ninguno emigró después del año 2019, lo que también puede ser visto como un síntoma de desaceleración del flujo de salida. De hecho 36,36% de la muestra emigro en el año 2017 y el 23,63% en el año 2018, es decir, más del 59% de la muestra emigro entre los años 2017 y 2018. Las preferencias de destino en ese momento fueron en primer lugar Ecuador con el 41,45%, en segundo lugar, Perú con el 23,64%; Colombia con el 12, 73%; Chile con el 7,27%, Argentina con el 7,27%.

Al ser preguntados con relación al tiempo de permanencia en el país seleccionado por los entrevistados para residir, se evidencia que el tiempo de permanencia no es significativamente alto, si bien los rangos se encuentran entre un año y siete años de permanencia, el 43,40% de los entrevistados permaneció entre 3 a 5 años en el país destino, siendo que el promedio de permanencia del total de la muestra es de 3 años y siete meses. Este dato puede ser interpretado de dos formas, una desde la perspectiva que nunca se pensó en una emigración definitiva, sino más bien

40 El año 2022 fue el primero de crecimiento económico positivo de Venezuela después de un ciclo de al menos 7 años de desempeño negativo. Según el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del año 2022 realizado por la CEPAL, la República Bolivariana de Venezuela creció un 12% de su PIB en ese año, para mayor información ver: https://lc.cx/pYAwQq . Según estadísticas del Banco Central de Venezuela en el período enero-septiembre el PIB creció en 17,73%, para mayor información ver: https://lc.cx/qTwJ3j

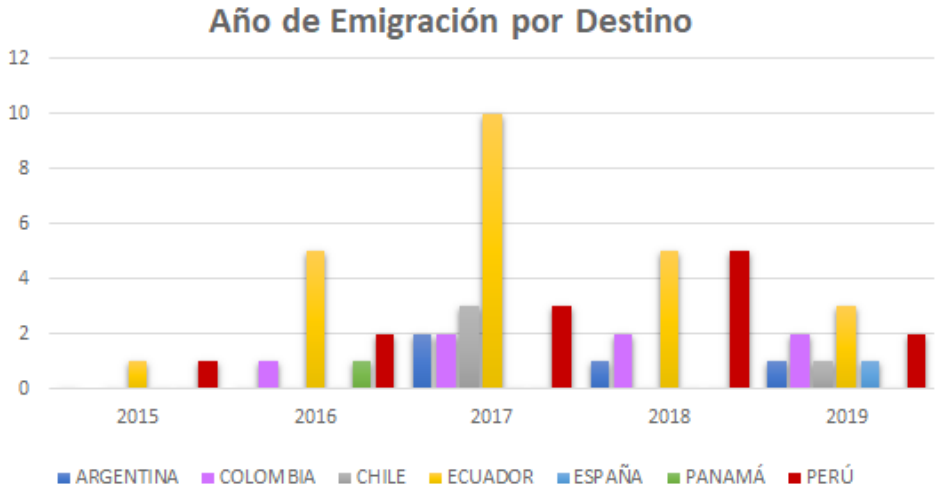


Gráfico 5. Año de emigración y país destino de la muestra. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

en una emigración temporal hasta tanto las condiciones que llevaron a tomar la decisión de emigrar cambiaran o se mitigaran. O a su vez, también puede ser parte de las hipótesis, que un número importante de estos migrantes venezolanos no se terminó de adaptar o instalar en el país de recepción y prefirió no prologar más su estadía y decidirse por el retorno.

A nivel comunicacional, en foros especializados y vocerías gubernamentales se esgrimió que el retorno de los migrantes venezolanos se produjo sólo y sólo du-

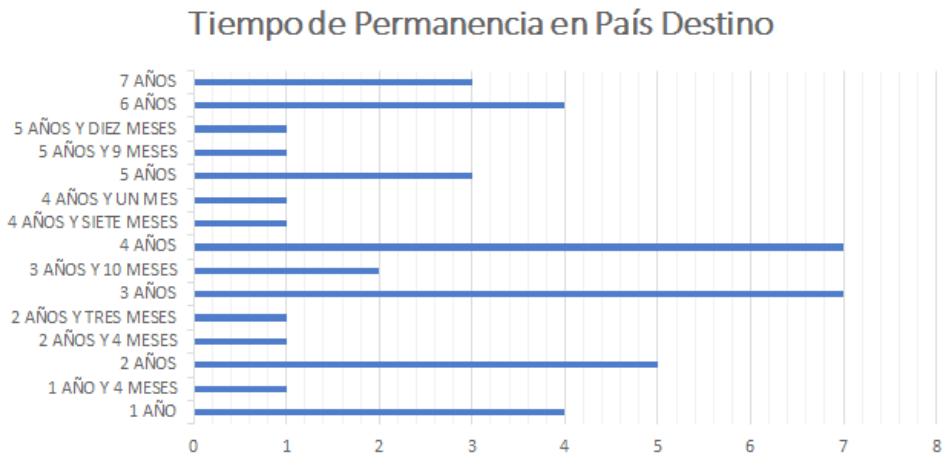


Gráfico 6. Tiempo de Permanencia de migrantes en país destino. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

Gráfico 7a. Retorno voluntario vs. forzoso

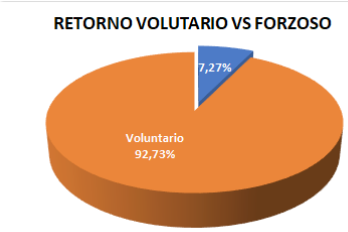
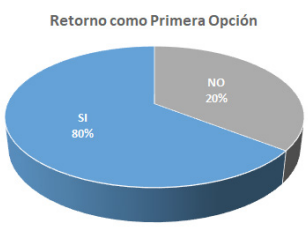


Gráfico 7b. Retorno como primera opción



Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

rante las etapas de confinamiento de la pandemia de COVID19, es decir que los migrantes venezolanos se vieron en la necesidad de retornar a su país de manera forzosa en vista de las consecuencias de las medidas de restricción de movilidad, distanciamiento social, pérdida de empleos (formales o informales), y desalojo de sus viviendas por falta de pago. Sin embargo, los hallazgos del presente estudio contradicen dichos argumentos.

Ante la pregunta si su retorno fue de carácter voluntario, es decir, si fue previamente preparado, en calma y sin que mediara ninguna situación sobrevenida, el 92,73% de la muestra afirmó que fue de carácter voluntario. Como contraposición a este dato, se les consulto a los entrevistados si el retorno a Venezuela fue considerado su primera opción o si por el contrario pensó como primera opción emigrar hacia un tercer país, obteniéndose como resultado que el 80% de la muestra siempre tuvo como primera opción el retorno, como se muestra a continuación.

A pesar de lo robusto del dato obtenido en las preguntas mencionadas anteriormente, se repreguntó a los entrevistados, si su retorno a Venezuela consideraba que era de carácter temporal o definitivo, esto con el objetivo de identificar aquellos casos que pudieran estar yendo a Venezuela por algún tiempo, gestionar documentos, visitar familiares y preparar con calma un nuevo proceso emigratorio. Obteniéndose como respuesta que el 55,56% de los entrevistados afirmaron que su retorno era de carácter definitivo. Si bien el número comparado con las preguntas anteriores no es tan abrumadoramente alto, si repre-

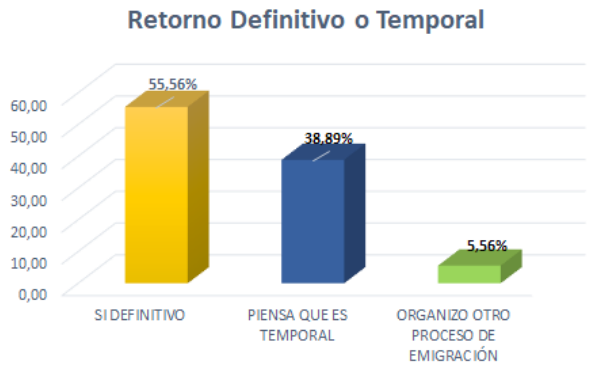


Gráfico 9. Retorno temporal o definitivo. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

senta más de la mitad de la muestra. Con lo cual se puede apreciar que, hay un retorno de carácter voluntario, planificado, que en la mayoría de los casos representó siempre la primera opción, y una proporción en torno al sesenta por cierto afirma que es definitivo.

Otro dato revelador que muestra el real interés de retorno a Venezuela es el hallazgo encontrado entre el grupo de entrevistados, dentro de los cuales existían cinco casos que poseían doble nacionalidad, es decir la nacionalidad venezolana y la nacionalidad del país de acogida, tres con nacionalidad ecuatoriana, uno con nacionalidad colombiana y otro con nacionalidad española. El tener la nacionalidad del país destino claramente otorga un blindaje jurídico y que facilita los procesos de inserción y adaptación al menos desde el punto de vista formal además de ampliar opciones laborales. Sin embargo, aun bajo esta condición decidieron retornar a Venezuela.



Gráfico 9. Retornados con otra nacionalidad. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

Se realizaron preguntas adicionales para ver si conocían otros migrantes venezolanos que estén valorando el retorno a Venezuela a cuya respuesta se obtuvo Si al 72% de los entrevistados. Lo cual da cuenta que es un tema conocido, no aislado, presente además en las conversaciones entre migrantes.

De igual forma se hizo la pregunta opuesta, si conocía de emigrantes retornados que estén evaluando emigrar y se obtuvo el Si con un 43%. Este dato coincide con los resultados a la pregunta sobre si el retorno es temporal o definitivo, en donde la temporalidad este alrededor del 40%. Es decir 4 de cada 10 venezolanos retornados piensa en emigra nuevamente.

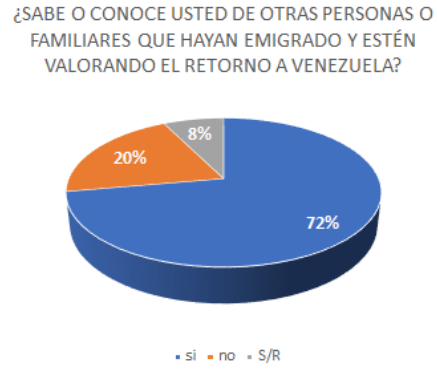


Gráfico 10. Conocimiento personas que estén valorando el retorno. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

Una de las preguntas cualitativas de la entrevista estaba referida con las motivaciones que tuvieron los migrantes para retornar a Venezuela, en donde se encontraron una multiplicidad de factores, los cuales fueron tabulados por nivel de repitencia, sin menoscabo de ninguna de las motivaciones expresadas que forman parte del análisis cualitativo, las tres de mayor aparición o repitencia fueron: “Le-



Gráfico 11. Motivos para el retorno. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

janía con la familia (reagrupación)", "Estancamiento económico y profesional"; "Desigual relación trabajo vs ingresos".

Lo expresado por los entrevistados muestran claramente su insatisfacción con el proceso migratorio, quizás en ese deseo aspiracional de estar en mejores condiciones, puede ser visto también como un no cumplimiento de expectativas generadas, o su no adaptación al país de acogida, procesos muchas veces de adaptación cultural que es no es sencilla, esto también se evidencia que algunas de sus respuestas fuesen "Nunca se sintió en el hogar" o "No sentía que tenía calidad de vida". Así mismo, que la "Xenofobia" sea un motivo de retorno no es un detalle menor, si bien los procesos migratorios son fuertes, el encontrar obstáculos cotidianos de hostilidad como episodios de xenofobia, que generan esa sensación permanente de *otredad* en el migrante dificultan aún más su proceso de adaptación llevándolos a considerar el retorno.

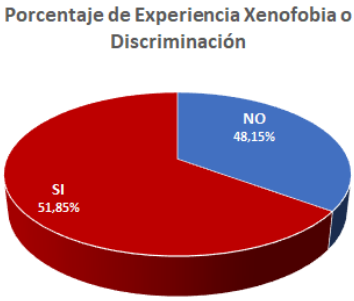
Con relación al aprovechamiento político o instrumental de la migración venezolana por gobiernos u organizaciones no gubernamentales con relación a la disputa por recursos económicos destinados a la atención de migrantes, se le consultó a la muestra, si habían sido beneficiados con algún tipo de política, plan o programa en el país de acogida, obteniéndose una respuesta negativa del 87,04% de los consultados. Como contra cara, de esta pregunta se incluyó igualmente la consulta sobre si habían sido víctimas de algún episodio que se pudiera catalogar como xenofobia o de discriminación de algún tipo, ante lo cual 51,85% dijo que sí.

Al ser consultados sobre cómo ha sido su proceso de reinserción a su país después de algunos años de emigración, con el objetivo de medir también permanencia o sostenibilidad del retorno en el tiempo. Se obtuvieron muchas y diversas respuestas, que para efecto del análisis fueron agrupadas en relación a las tres grandes

Gráfico 12. Ayudas recibidas



Gráfico 13. Experiencia de Xenofobia



Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

motivaciones expresadas por ellos mismos para retornar, a saber: "Lejanía de la familia (reagrupación)"; "Estancamiento económico y profesional" y "Xenofobia o discriminación", es decir situaciones o elementos con los que no contaban en el país de acogida. La idea entonces es mostrar si lo encontraron o no en su proceso de reinserción. Llama la atención conseguir afirmaciones como "el afecto familiar no tiene precio"; "a la semana de estar e el país estaba trabajando"; "siento el trato caluroso de venezolano.

Cabe destacar que en el desarrollo de las entrevistas se evidenció que pocas personas, con la excepción de los profesionales de la salud, pudieron retomar su actividad profesión u actividad tradicional a la que se desempeñaban, por lo cual con ahorros generados en el proceso emigratorio decidieron realizar emprendimientos en su país. Algunos cambiaron su ciudad de origen por ciudades ubicadas en el centro del país, como la capital y sus alrededores, para tener mayores oportunidades y mejor calidad de servicios públicos. Dentro de las respuestas igualmente, se econ-

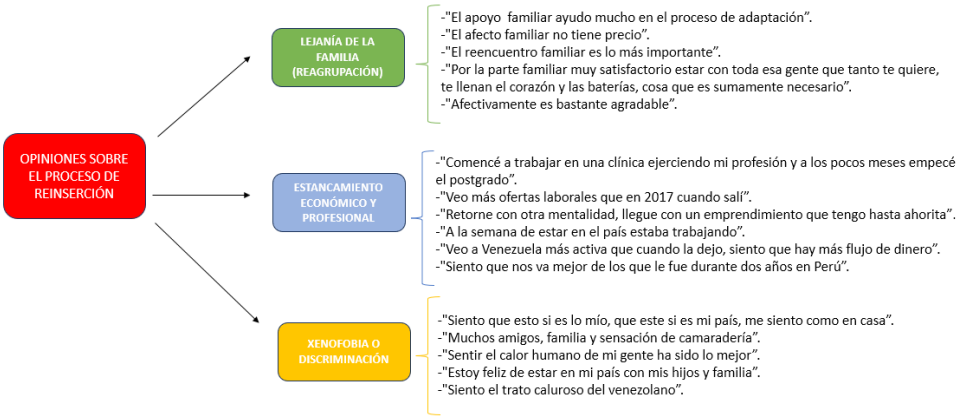


Gráfico 14. Oponiones sobre el proceso de reinserción. Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas a retornados.

tro dificultad a la adptación al cono monetario y a los distintos tipos de cambio, a la par que se reseño que sentían una mayor sensación se seguridad ciudadana que al momento de su salida del país.

7. Conclusiones

La investigación tanto bibliográfica como de campo, muestra que desde varios países de Suramérica existe una tendencia de retorno de migrantes venezolanos hacia su país, que puede ser ubicada desde el año 2018 o 2019 y que por distintas razones esa tendencia se ha mantenido constante por lo menos hasta inicios del año 2023, siendo el 2023 el año oficial de mayor numero de retornos de venezolanos. Aunque el presente estudio se centra en países de Suramérica, existen evidencias documentales y de la muestra realizada, que dan cuenta de un retorno más reciente desde países de Europa, como España.

Este retorno se ha dado en dos modalidades, el retorno voluntario asistido a través del Plan Vuelta a la Patria, y el retorno voluntario por cuenta propia, siendo este segundo el de mayores proporciones. Es decir, el retorno de migrantes venezolanos es real, no es un mito, y junto con la emigración constituyen dos caras de la movilidad humana.

La tendencia del flujo migratorio de retorno ha estado presente, con fluctuaciones obvias del caso, de manera previa a la pandemia, durante y posterior a la misma, obteniéndose mayores evidencias de retorno posterior al fin de la pandemia. Este hallazgo, deja sin efecto algunas hipótesis que circunscriben el retorno a una coyuntura concreta producto de los efectos de la pandemia en la economía de los países destino, y a su vez abre pistas a nuevos caminos investigativos para evaluar las motivaciones reales sobre el retorno de los migrantes venezolanos.

Para establecer la magnitud real del retorno o dimensionarla con relación a los procesos de emigración masiva de ciudadanos venezolanos identificado desde el año 2014 o 2015 en adelante, es necesario estudiarlo a mayor profundidad y visibilizarlo dentro de los procesos investigativos de políticas públicas migratorias. La comparación en el flujo de salida de varios años, así como las encuestas sobre intención de emigrar muestran una desaceleración en la emigración de venezolanos a la que se le suma el proceso de retorno. No obstante, la aproximación realizada desde este estudio conlleva a concluir que ese proceso de retorno aún es incipiente o marginal frente al proceso de salida de ciudadanos venezolanos y que requiere ser abordado con mayor profundidad.

En el estudio de campo realizado, el retorno ha sido voluntario en más del 92,73 % de los casos; ninguno de estos fue retorno asistido, es decir, se realizaron por cuenta propia, y tampoco se reportan haber recibido algún tipo de apoyo logístico, legal o financiero de los países desde donde emprendieron el proceso de retorno.

Con respecto a si los migrantes entrevistados consideraron el retorno a su país como primera opción, el estudio muestra que el 80% de los entrevistados expresaron que si representó su primera opción. Este dato, junto con el obtenido ante la interrogante de si su retorno era de carácter temporal o definitivo, en donde el 55,56% de la muestra señalo que definitivo, son de gran utilidad para futuras

investigaciones, en vista que existe la percepción que los migrantes venezolanos solo retornan a Venezuela de forma transitoria a tramitar documentos o realizar gestiones preparatorias para emigrar hacia terceros países.

Las motivaciones que tienen los migrantes venezolanos para retornar son de diverso tipo, sin embargo, el nivel de repitencia de "se sentía estancado/a"; "motivos de salud; "xenofobia", obtenidos en las entrevistas realizadas, junto con el tiempo promedio de estadía en el país de acogida de los entrevistados, de tres años y siete meses, dan pistas de un fracaso del proceso migratorio, una no adaptación al país destino o incluso la superación de las causas concretas que lo llevaron a emigrar. Si bien, el retorno ha estado presente en distintas etapas del proceso migratorio (antes, durante y después de la pandemia), se aprecia un aumento del mismo al producirse una recuperación parcial de los indicadores económicos de Venezuela.

Finalmente, el retorno es un derecho estipulado en la legislación internacional y reconocido por el Estado venezolano, una forma de estimular los procesos de retorno de migrantes pasa por la estructuración de políticas públicas, institucionalidad y recursos para este tema. Así como durante el siglo XX, Venezuela fue pionera en políticas públicas de fomento y atracción de la inmigración, acumulando cerca de ciento cincuenta años de estas políticas de forma sostenida, en la actualidad se hace necesario incorporar al debate público la migración de retorno y su reinserción en la sociedad.

8. Bibliografía

ACNUR (18 de junio de 2020). ACNUR al lado de los venezolanos forzados por la pandemia a retornar a su país. Disponible en: https://lc.cx/mkeoQL

Ávila, Keymer. (2018). *¿Un éxodo venezolano?* Revista Nueva Sociedad. 1-8.

BBC (18 de mayo de 2020). Coronavirus: el trágico viaje de un grupo de venezolanos que intentó regresar a pie a su país desde Perú en medio de la pandemia. Disponible en: https://lc.cx/EOK6Bf

Blanco, C. (2000). Las migraciones Contemporáneas. Alianza Editorial. Madrid.

Cancillería de Venezuela. [@CancilleriaVe]. (10 de abril de 2022). Cifra de venezolanos beneficiados con el Plan Vuelta a la Patria asciende a 28.521 pasajeros, procedentes de 21 países, a través de 165 vuelos y un traslado marítimo. Twitter. https://lc.cx/FY4dfu

Carrasco, Carlos. [@CarrascoMuroC]. (10 de junio de 2020). Se deja sin efecto la prohibición de entrada a Chile por 9 años a las personas que accedan al programa de retorno humanitario del @GobiernodeChile. Twitter. https://lc.cx/YILmjw

Castro, J. (2019). *Política migratoria venezolana, una tradición de recepción. El caso de la inmigración española del siglo XX*. Revista Internacional de Pensamiento Político, 14, pp. 377-399.

Castro, J. (2020). *El derecho a la movilidad humana en las políticas migratorias de América Latina en el siglo XXI: Entre la Regionalización y la (Re) Nacionalización de un problema público."* En Nullius, revista de pensamiento crítico en el ámbito de derecho. Año 2020, Vol 1, nº 2, pp. 48-69.

Deutsche Welle (22 de junio de 2019). Chile exige visa de turismo a venezolanos como haitianos. *DW*. Disponible en: https://bit.ly/2Qq038V

Deutsche Welle (23 de agosto de 2022). Cepal mejora proyección de crecimiento para América Latina. *DW*. Disponible en: https://lc.cx/c85uPb

Decreto N°826. (2019). Registro Oficial Nº 5, Segundo Suplemento. Ecuador de fecha 26/07/2019.

De Genova, N. Mezzadra, S & Perkins, J. (2014). New Keywords: Migration and Borders. *In Cultural Studies*. 55-87 https://bit.ly/2QoiWt1

De Génova, N. (2017). Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control fronterizo y la producción de su ilegalidad. Un dialogo con Nicholas De Génova. *Revista Íconos Nª 58*, 153-164. https://bit.ly/3hreoOi

EFE (06 de junio de 2019). Perú exigirá visado a los venezolanos a partir del 15 de junio. El Nuevo Herald. https://hrld.us/2Yz7zme

El Comercio (09 de septiembre de 2018). Grupo de ciudadanos venezolanos dejan Brasil tras linchamiento de inmigrante. Disponible en: https://lc.cx/JhgNwQ

El Comercio (29 de abril de 2020). Comisión legislativa aprueba informe para reforma migratoria. Disponible en: https://lc.cx/jZEcGc

El Diario (31 de enero de 2022). Los venezolanos que decidieron regresar al país después de haber migrado a Perú. Disponible en: https://lc.cx/g709sM

El País (24 de agosto de 2017). Panamá impone una visa a los venezolanos que quieran ingresar en el país. El País. https://lc.cx/S0GIDM

El Observador (07 de julio de 2022). Muchos venezolanos regresan a su país por que ven mejoras en la situación económica. Disponible en: https://lc.cx/jAvdkq

El Universal (07 de febrero de 2020). Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a CONVIASA", disponible en: https://lc.cx/I7kYxA

ENCOVI. (2021). Condiciones de Vida de los venezolanos: entre la emergencia humanitaria y la pandemia. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello.

(2022). Condiciones de Vida de los venezolanos. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello.

(2023). Condiciones de Vida de los venezolanos. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello.

El TIEMPO (15 de mayo de 2020). La pandemia cambia el sentido de la migración de regreso a Venezuela. Disponible en: https://lc.cx/7seb2L

EL TIEMPO (10 de septiembre de 2020). 111.000 venezolanos regresaron a su país desde Colombia y Brasil: OEA. Disponible en: https://lc.cx/uWPmC6

EUROPAPRESS (17 de diciembre de 2018). Venezuela inaugurará 13 nuevas rutas aéreas internacionales en 2019. Disponible en: https://lc.cx/LNBr7b

FOCO INFORMATIVO (02 de noviembre de 2022). En cuatro años, programa Vuelta a la Patria retorna a más de 31

mil venezolanos. Disponible en: https://lc.cx/wpzutP

FRANCE24 (21 de abril de 2020). La pandemia precipita el retorno de miles de migrantes venezolanos. Disponible en: https://lc.cx/q5rIBJ

FRANCE24 (22 de julio de 2020). Más de 90.000 venezolanos han retornado a Venezuela desde Colombia durante la pandemia. Disponible en: https://lc.cx/-Mri68

Gómez, S & Molina, J. (2020). Vuelta a la patria en tiempos desesperados: imaginarios sociales en torno a los retornados a Petare-Venezuela en época de pandemia. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 32, N°2. Universidad Nacional de Costa Rica.

Globalizate (27 de abril de 2020). Migrantes Venezolanos regresan de Brasil a su país por COVID19. Disponible en: https://lc.cx/iCUtwZ

Infobae (26 de septiembre de 2019). La OEA creó una oficina permanente para atender crisis de migrantes y refugiados venezolanos. *Infobae*. https://bit.ly/32wKCBI

IMA. Comunicado público de las personas en movilidad humana afectadas por la reforma de la LOMH. Alianza Internacional de Migrantes, capítulo Ecuador. Disponible en: https://lc.cx/UL5kXS

IOM. (2019). Glossary on Migration, International Migration Organisation Geneva 19, Switzerland.

Martes, D. & Navas, L. (2020). Visión panorámica sobre el COVID-19 y la migración venezolana Análisis de la situación entre mayo y julio de 2020. Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

Mezzadra, S. (2005). Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización. Madrid.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Trabajo. (2019). *Acuerdo Interministerial N°003*. Registro Oficial N°17. Ecuador.

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. (2022). Balance del Plan Vuelta a la Patria a marzo. Dirección de Movilidad Humana.

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Plan Vuelta a la Patria en cifras. Disponible en: https://lc.cx/1QOdNk

Mixed Migration Centre. (2022). Retorno a Venezuela: Motivaciones, expectativas e intenciones. Disponible en: https://lc.cx/xV2tcC

Moran, S. (2020, 17 de noviembre). *La huida masiva de los venezolanos de Ecuador y su doble regreso*. Plan V: https://bit.ly/3SMtdgC

Navas Mora, Luis (2020). *"Políticas Públicas en materia de movilidad humana en Venezuela durante los siglos XX y XXI".* Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

Noticias Caracol (20 de mayo de 2022). Señales de reactivación económica en Venezuela motivan el retorno de migrantes. Disponible en: https://lc.cx/o1UP_P

Observatorio Venezolano de Migración. (2019). Cifra de refugiados y emigrantes venezolanos en el mundo alcanza los 4,6 millones. Disponible en: https://lc.cx/faYbOK

OEA (2020). Informe de situación diciembre. Oficina de la Secretaría General para la crisis de migrantes y refugia-

dos venezolanos. Disponible en: https://lc.cx/T08fMG

OIM (Ed.) (2016). *Migración, Derechos Humanos y Política Migratoria*. Organización Internacional para la Migraciones y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. https://bit.ly/3jtBIf9

OIM. (2023). *Tendencias Migratorias en las Américas: Personas migrantes en tránsito. Octubre-diciembre.* https://n9.cl/15gn0

ONU (Ed.) (2018). *Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.* Conferencia Intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Marruecos. ONU https://bit.ly/2EwFTYd

ONU (2020). Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) para Población Migrante de Venezuela y Hogares de Acogida en Departamentos Fronterizos. Disponible en: https://lc.cx/y-2moz

Osorio, A & Phelan, M (2020). Migración venezolana. Retorno en tiempos de pandemia (Covid19). Revista Espacio Abierto vol. 29, núm. 4, pp. 118-138.

Plan V (17 de noviembre de 2020). La huida masiva de los venezolanos desde Ecuador y su doble regreso. Disponible en: https://lc.cx/Eg1vZg

Placer, David. [David Placer]. (21 de marzo de 2022). Regreso a Venezuela: hablan los retornados. Disponible en: https://lc.cx/IzM7FR

Primicias (21 de abril de 2020). Venezolanos deciden abandonar Ecuador tras el coronavirus. Disponible en: https://lc.cx/i8IRVq

Primicias (15 de abril de 2020). Ecuador reconoce que inmigrantes venezolanos buscan regresar a su país. Disponible en: https://lc.cx/_KT1I_

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. (2022). Balance del Plan Vuelta a la Patria. Dirección de Movilidad Humana.

Noticia al Día (15 de enero de 2023). Más de 300 mil venezolanos han retornado al país por "motu proprio" sin contar los incluidos en "Vuelta a la Patria". Disponible en: https://lc.cx/b_Df_W

R4v (2019). Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela". Enero-Diciembre 2019. https://bit.ly/3KSoHZG

Rousseau, Isabele. (2017). Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales 1900-2014. Ciudad de México. El Colegio de México. https://n9.cl/wmy5v

SPUTNIK (17 de diciembre de 2020). La doble crisis de los migrantes venezolanos en Ecuador. Disponible en: https://lc.cx/b_Df_W

SURES (2020 a). Ida y Vuelta. Boletín sobre el proceso migratorio venezolano, N°1 junio-julio. Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

(2021 a). *Uso político y mercantilización de la migración venezolana I.* Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

(2021 b). *Uso político y mercantilización de la migración venezolana II.* Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

(2021 c). *Uso político y mercantilización de la migración venezolana III.* Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

(2021 d). *Uso político y mercantilización de la migración venezolana IV.* Organización SURES. Estudios y Defensa en Derechos Humanos. Venezuela.

(2021 e). *Ida y Vuelta*. Boletín sobre el proceso de migración venezolano. Nº3.

TAL CUAL (31 de agosto de 2019). Cuatro de cada 10 venezolanos preferirían irse del país, revelan encuestas. Disponible en: https://lc.cx/SpBQCq

TELESUR (21 de septiembre de 2018). Venezuela pedirá apoyo a la ONU para Plan Vuelta a la Patria. Disponible en: https://lc.cx/JIMcgk

UCAB. (2020). El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización. Centro de Derechos Humanos. Caracas.

Voz de América (23 de abril de 2020). Cientos de venezolanos dejan Ecuador y regresan a su país por la pandemia. Disponible en: https://lc.cx/YIK7h-

WRADIO. (13 de julio de 2020). Veinte mil venezolanos varados por falta de comunicación entre Colombia y Venezuela. Disponible en: https://lc.cx/uPA2az

Yánez, A. (23 de enero de 2020). Cifra de migración venezolana está sobredimensionada. Obtenido de Diario El Comercio: https://bit.ly/3gvqiWe

LA COSMÓPOLIS EN GUERRA. LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL IDEAL COSMOPOLITA EN TIEMPOS DE BARBARIEI

COSMOPOLIS AT WAR. BROKEN PROMISES OF THE COSMOPOLITAN IDEAL IN TIMES OF BARBARISM

Jesús Ignacio Delgado Rojas
Universidad de Sevilla, Sevilla, España
jdrojas@us.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Democracia, ciudadanía, cosmopolitismo, universalismo, derechos humanos.
Keywords: Democracy, citizenship, cosmopolitism, universalism, human rights.

Resumen: El presente artículo tiene por objeto insistir en la inevitable conexión entre la democracia como sistema de gobierno y la idea de ciudadanía como vínculo de pertenencia a un Estado. Se quiere poner de relieve como el modelo de ciudadanía actual demanda nuevos elementos para garantizar la plenitud e igualdad de derechos de los ciudadanos, para evitar exclusiones injustas y avanzar hacia fórmulas de integración en el actual contexto de la globalización. Se plantea la noción de la ciudadanía cosmopolita como corolario necesario de la universalidad de los derechos humanos y se examinan algunas propuestas contemporáneas para discutir los desafíos a los que se enfrenta el ideal cosmopolita ante los presentes escenarios internacionales de conflicto bélico y riesgo global.

Abstract: This paper aims to insist on the inevitable connection between democracy as a system of government and the idea of citizenship as a bond of belonging to a state. It aims to highlight how the modern model of citizenship demands new elements to guarantee fullness and equality of citizens' rights, to avoid unjust exclusions and to advance towards formulas of integration

1 Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación "Constitucionalismo multinivel y gobernanza mundial. Fundamentos y proyecciones del cosmopolitismo en la sociedad del riesgo global" (PID2020-119806GB-100), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

in current context of globalization. The notion of cosmopolitan citizenship is contemplated as a necessary corollary of the universality of human rights, and some contemporary proposals are examined to discuss challenges facing the cosmopolitan ideal in present international scenarios of war conflict and global risk.

1. Introducción

La relación entre los conflictos bélicos armados y los postulados de una ciudadanía entendida en clave cosmopolita evidencia una profunda tensión quizás irresoluble. La idea de un individuo sometido a las imposiciones humillantes que produce la guerra, la exclusión, la pobreza y las discriminaciones de diversa índole, es incompatible con la vocación de unos derechos humanos universales e iguales para todos y todas. Derechos que considerábamos inamovibles y consolidados han pasado a convertirse en privilegios de unos pocos y en preocupación para muchos. *El problema de la guerra y las vías de la paz* —tema que en la historia del pensamiento filosófico-político es «recurrente», por decirlo con Bobbio (1979) y usando un título de una obra del maestro turinés— ocupa hoy, ante la persistencia de la ya longeva duración del conflicto bélico ucranio o del palestino-israelí, la centralidad de la agenda política internacional. Deseo aquí retomar algunas breves notas sobre estas cuestiones —no deberían pasar más que por eso: sencillos comentarios que no aspiran a ser algún estudio exhaustivo— con la sola pretensión de poner de manifiesto algunos riesgos y retrocesos que estas graves situaciones de conflicto armado suponen para los Estados de Derecho en términos de ciudadanía y democracia.

Precisamente ambas nociones —«ciudadanía» y «democracia»— aparecen en la actualidad entre las ideas más pujantes y aclamadas tanto en el ámbito académico universitario como en la práctica de la política profesional a nivel nacional e internacional. En cambio, pareciera que no soplan vientos favorables para ninguno de esos conceptos.

Por lo que se refiere al ideal de «ciudadanía» me temo que su realización efectiva dista mucho de ser hoy un canon universal. Son, por el contrario, las situaciones de pobreza, exclusión y discriminaciones de todo tipo las que parecen marcar el ritmo de los tiempos. La sociedad del riesgo, como la llamara Ulrich Beck, «a la vista de los potenciales escenarios catastróficos y de las incertidumbres que se están desplegando en la actualidad» (2016: 62-63), nos desafía diariamente y nos somete a los oscuros designios de la inseguridad, del miedo y la vulnerabilidad. Creo que el actual *homo deus* —en la acertada expresión de Harari (2016)— poco tiene que ver con aquel valeroso individuo que salía triunfante de las revoluciones liberales dieciochescas ni con el ciudadano comprometido con las proclamas sociales, económicas y laborales decimonónicas. Andando el siglo XXI, tampoco creo que la barbarie totalitaria del XX nos haya alejado demasiado de aquel hobbesiano estado de naturaleza —en el que la vida es «solitaria, pobre, asquerosa, bruta, y cor-

ta» (Leviatán, capítulos XIII-XIV)— al que parecemos irremediablemente abocados.

De la «democracia», como segundo término del binomio señalado, sobreviven elementos fundamentales de esta forma de gobierno que posibilitan y potencian la realización de una vida libre y autónoma. Piénsese en el valor de la tolerancia, en el pluralismo, en el reconocimiento y garantías al ejercicio de ciertos derechos humanos o en las instituciones del Estado de Derecho. Cuestiones todas ellas que emparentan a la democracia con el liberalismo, siendo el modelo de la democracia liberal una de las formas más acabadas, y de las mayores conquistas políticas (y éticas), para el gobierno de las cosas humanas. Aunque no siempre haya sido así y puedan existir, y existen, y no solo sobre el papel, liberales no demócratas y democracias de fachada que no respetan los principios liberales.

Sin embargo, esas mismas características constitutivas, esenciales, para reconocer a un régimen como democrático conviven hoy por doquier con elementos que la atacan y perturban. Son acciones y comportamientos que, en la terminología de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, suelen dar positivo en una prueba de tornasol para detectar el autoritarismo y vaticinar la muerte de una democracia (2018: 32). También puede causar cierta perplejidad la comprobación de que, en nuestra historia europea más reciente, parecen pesar más las derrotas democráticas que sus avances y realizaciones efectivas. Han quedado promesas incumplidas por el camino y el anhelo por un horizonte más libre e igualitario se encuentra hoy más alejado que nunca. El caso de las guerras de Rusia contra Ucrania o de Israel contra Palestina así lo atestiguan de forma implacable con toda su dureza y crueldad.

Pero si nos alejamos de fatalismos quizá quede aún lugar para reflexionar críticamente sobre las posibilidades de un mejor futuro tanto para la democracia como para una idea generosa de ciudadanía leída en clave cosmopolita. Probablemente sigamos estando de acuerdo con Bobbio cuando señalaba, en su Introducción a la primera edición de 1984 de *El futuro de la democracia*, que «en el mundo la democracia no goza de óptima salud, y por lo demás tampoco en el pasado pudo disfrutar de ella, sin embargo, no está al borde de la muerte» (1986: 7).

Aunque las injusticias, catástrofes y guerras se imponen despiadadamente como formas de barbarie y hacen peligrar la buena salud de cualquier democracia, el conformismo no es buen compañero de viaje y el mejor o peor futuro que le espere a la democracia depende, en gran medida, del papel que los demócratas cumplamos en ella. Esos demócratas —ciudadanos comprometidos con la democracia— tienen que desatender la falta de confianza que en ellos tenía Rousseau, cuando lamentaba que «si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Mas un gobierno tan perfecto no es propio para los hombres» (1969: 63). Los seres humanos quizás no se ajusten al ideal de perfección de los dioses en los que el ginebrino estaba pensando, pero tampoco —y la historia nos asiste— son tan incompetentes como para no saber regirse democráticamente.

Más bien la alerta rousseauniana creo que debe entenderse como una alusión atenta a los riesgos de la democracia y a las dificultades que ese sistema entraña. Desde luego que no es un régimen político exen-

to de problemas y conflictos. No cabe la menor duda de que la democracia es un sistema fácil de instaurar, pero difícil de mantener. La democracia no se crea de una vez y para siempre. Sus cimientos se agitan ante continuas deslegitimaciones y corrupciones. Frente a los logros definitivos, la democracia en cambio se basa en el incesante debate y en la revisión siempre crítica y responsable. No hay verdad indiscutible por lo ya alcanzado, sino que su defensa requiere diariamente de nuevos consensos.

2. Una ciudadanía que avanza de la *polis* a la *cosmópolis*

Ciudadanía y democracia son dos términos que van irremediablemente unidos. La democracia es el único sistema político donde los ciudadanos juegan un papel determinante en la creación y mantenimiento de sus instituciones y formas de gobierno. No hay verdadera democracia sin suficiente participación de los ciudadanos, ni los individuos son considerados auténticamente ciudadanos si no es en un régimen democrático. La historia de las organizaciones políticas, pero sobre todo la historia de la formación del Estado moderno (del Estado absoluto al Estado democrático constitucional) es la historia de los grupos humanos, de los hombres y mujeres, para desembarazarse del papel de súbditos y asumir el de ciudadanos. La ciudadanía es la vinculación más fuerte que existe entre los habitantes pertenecientes a un Estado y el propio Estado. La ciudadanía expresa, mejor que cualquier otra noción, la pertenencia real y completa de los seres humanos a una comunidad política determinada (generalmente a un Estado-nación; pero también a comunidades regionales o supranacionales más amplias). Ser ciudadano significa poder ejercer, con garantía jurídica y política, una serie de derechos humanos básicos y fundamentales y asumir también, correlativamente, ciertos deberes políticos y jurídicos.

Buscar el origen de la ciudadanía moderna —y prescindir, al menos en alguna medida, de los relatos fundacionales que nos ofrecen Atenas y Roma— puede resultar un ejercicio arqueológico arriesgado. Pero, sin embargo, hay un suceso histórico que nos permite situar, en líneas generales, el contorno de una idea de ciudadanía, y de las importantes consecuencias que de ella se derivan, de la que hoy nuestros Ordenamientos jurídicos siguen siendo deudores. Me refiero al fin de los privilegios y de la sociedad estamental sobre los que se sustentaba el *Ancien Régime* que acontece tras la *Declaración de los derechos* —ilustrativamente distinguiendo— *del hombre y del ciudadano* del 26 de agosto de 1789. Al hombre le van a corresponder los derechos de libertad mientras que los derechos del ciudadano serán los derechos políticos. La Declaración instaura un sistema que, a partir de entonces, discriminará entre los derechos que se reconocen a todos los individuos en cuanto personas y los derechos que quedan reservados a las personas en cuanto ciudadanos. Será prerrogativa de los Estados determinar quiénes son sus miembros, es decir, quiénes pertenecen a su Ordenamiento jurídico en calidad de ciudadanos. Y desde ese momento «no existe una noción más fundamental en política que la noción de ciudadanía» (Shklar, 2021: 358).

El concepto nuclear de la ciudadanía aparece así asociado, desde ese contexto de

formación de los Estados-nación, con la noción de nacionalidad. La posesión del estatus jurídico de la ciudadanía, que reconoce el uso y disfrute de los derechos políticos, así como la pertenencia a la comunidad jurídico-política que los reconoce, viene emparejada con la idea de nacionalidad. Ésta conlleva la condición de miembro de la nación, pero ello no evita que puedan producirse situaciones de privación del pleno ejercicio de la ciudadanía en determinados supuestos (Velasco, 2016: 42). De esta forma, puede haber nacionales que no gocen de los derechos políticos reservados a los ciudadanos (por razón de edad, por sentencia judicial, etc.). Este paralelismo entre nacionalidad y ciudadanía implica, a su vez, que para ser miembro pleno de un Estado y poder gozar del máximo de derechos posibles en él no solo basta con ser ciudadano, es necesario también ser nacional. Este solapamiento y dependencia entre nacionalidad y ciudadanía testimonia serios problemas a los individuos que, habitando en el territorio de un país, no son sin embargo nacionales suyos:

> Si para ser ciudadanos de pleno derecho, es decir, si para poder participar y pertenecer a la comunidad política es necesaria la nacionalidad, entonces aquellos individuos que carecen de ella solo pueden ser expulsados a sus márgenes (Ortiz Gala, 2024: 92).

En este orden de ideas, es por ello que el modelo de ciudadanía actual demanda más elementos para su plenitud que los datos con que se caracterizaba en tiempos pasados. Estamos muy lejos de haber conseguido que todos los países sean democracias, que las que lo son de nombre lo sean realmente y mucho más lejos de haber logrado que los seres humanos puedan moverse a lo largo y ancho del mundo como ciudadanos sin trabas. Pues el concepto de ciudadanía sigue siendo particular y no universal. La idea de ciudadano universal, o el ser humano como ciudadano del mundo, es un objetivo moral y políticamente deseable e irreprochable, pero también sumamente complicado y lleno de dificultades. Sin embargo, está llamado a ser un ideal moral y social que sirva, al menos, para poder criticar y transformar, por limitados e insuficientes, los modelos de ciudadanía existentes. Sobre los que no son ciudadanos de pleno derecho en un país, sobre los apátridas o los refugiados, sobre los emigrantes e inmigrantes, los parias (Arendt, 2009) o sobre los condenados de la tierra —por decirlo con Fanon (1961)— recaen las desgracias de los que son excluidos de todos o parte de los derechos que consideramos esenciales para el desarrollo de una vida digna.

La idea de ciudadano universal o cosmopolita ya fue esgrimida por algunos egregios representantes de la escuela estoica y alcanzará su máximo apogeo en la Ilustración (ha narrado este recorrido histórico recientemente De Julios-Campuzano, 2024: 541-570). Pero hoy el análisis y discusión del concepto de ciudadanía ha cobrado gran importancia no sólo por estas menciones a la idea y objetivo de una ciudadanía cosmopolita sino también por la polémica entre partidarios de la filosofía política de tradición liberal y la filosofía política republicana o del republicanismo cívico. De una forma bastante esquemática se podría decir que la primera se distingue por acentuar más el papel del individuo y sus derechos mientras la segunda recalca la necesidad del compromiso cívico y político de los ciudadanos con la comunidad (por todos, Pettit, 1997 y 2009: 47-68). Se trata de dos modelos ideales en los que caben, y ya se han ensayado,

posibilidades que integran pautas de la una y la otra[2]. También se podría añadir que el planteamiento liberal tenderá a ser más cosmopolita y el republicano más limitado. Esta discusión actual, además, ha servido para realzar, de parte republicana pero también asumida por numerosos liberales, la necesidad de una ciudadanía activa y de una sociedad civil participativa «de quienes sin formar parte de partidos e instituciones se preocupan por los asuntos públicos de su entorno» (Soriano, 2012: 148). A su vez, esa ciudadanía activa pareciera que no debe guiarse exclusivamente a partir de planteamientos valorativos de tipo multiculturalista en su versión extrema, sino que solo puede realizarse en el marco plural de una cultura política y moral compartida que, además, precisará de una educación ética y cívica que responda a esos mismos principios inspiradores (vg. los derechos humanos fundamentales).

En todo caso, y sin dejar de tomarse en serio todas estas disquisiciones, de lo que no cabe duda es que el núcleo básico de todo el sistema liberal democrático sigue girando alrededor del individuo como sujeto moral y jurídico, convertido, en el plano político estatal, en ciudadano. Como ha recalcado Salvador Giner:

> La condición de ciudadano es el mayor logro de la civilización moderna. Todos los demás empalidecen ante él. Muchos otros, desde el acceso universal a la educación hasta la asistencia médica y sanitaria a toda la población, tienen su fundamento moral y jurídico en la entronización de la ciudadanía como principio. La condición ciudadana es la que permite a los humanos, sin distinción, hacer valer su humanidad. La ciudadanía es el espinazo del orden social democrático de la modernidad (2005: 15).

Sin embargo, la raíz de muchos problemas actuales, incluidas numerosas injusticias, es que todos los modelos existentes de ciudadanía, desde la democracia ateniense hasta las democracias actuales más desarrolladas, en mayor o menor grado, mantienen algún tipo de exclusión. Ello contradice la característica de la universalidad como rasgo más distintivo hoy de los derechos humanos. La vocación de universalidad, es decir, de hacer de cada exigencia ética un derecho que puede ser universalizable y no algo sometido a cualquier elemento o dato parcial, fruto de la identidad de una cultura particular o de una adscripción individual concreta, es una conquista heredada del programa de la modernidad ilustrada a la que no podemos renunciar (De Julios-Campuzano, 2024: 561). La exigencia ética derivada, hoy por hoy, del respeto al valor o dignidad de cada persona humana (individualismo moral o primacía moral de cada individuo singularmente considerado, *infra*) nos traslada irremediablemente a un nuevo marco donde la universalidad de los derechos significa una ciudadanía integral que no puede ser excluyente ni exclusiva de un grupo social, sino solamente universal, una igualdad básica en la conformación del hecho de ser miembro de pleno derecho en una comunidad que también precisa ser concebida a escala universal. El *derecho a tener derechos* (Arendt, 1998: 247)[3], que es el primer requisito

2 El modelo de *comunidad liberal* de Dworkin (1989) puede ser interesante por tratarse de una propuesta que conjuga de forma equilibrada ambas sensibilidades políticas. Me he ocupado de ello en Delgado Rojas (2021: 522-527).

3 El famoso *dictum* tiene una versión más temprana –y menos conocida– en la obra de Fichte. Agradezco a Germán J. Arenas Arias esta observación. Precisamente Johann Gottlieb Fichte

para proteger el valor del ser humano o su dignidad, precisa de un sujeto universal y de una igualdad en cuanto a los derechos que han de ser reconocidos. Tiene razón Javier de Lucas cuando ha insistido en que:

> La igualdad es igualdad plena, o no es igualdad. Por eso, la idea de igualdad o integración debe significar también la integración política porque la plenitud de derechos incluye los derechos políticos, el status de ciudadanía o su equiparación a él (2005: 56).

Cualquier ventaja en el ejercicio de los derechos para un grupo social del tipo que sea, significa un paso atrás en la universalidad. El cosmopolitismo no puede sustentarse más que en una concepción universalista de los valores. De ahí que si una exigencia moral no pudiera cumplir la máxima de la universalización, nunca podrá pertenecer a la categoría de los derechos humanos. Valga aquí la apreciación de A.E. Pérez Luño cuando ha señalado que:

> Desde la génesis de los derechos humanos en la Modernidad o su actual significación que se desprende de la Declaración de la ONU, la universalidad es un rasgo decisivo para definir a estos derechos. Sin el estatuto de la universalidad nos podemos encontrar con derechos de los grupos, de las etnias, los estamentos, de entes colectivos más o menos numerosos, pero no con derechos humanos (…). Los derechos humanos o son universales o no son derechos humanos, o podrían ser derechos de grupos, de entidades o de determinadas personas, pero no derechos que se atribuyan a la humanidad en su conjunto. La exigencia de universalidad, en definitiva, es una condición necesaria e indispensable para el reconocimiento de unos derechos inherentes a todos los seres humanos, más allá de cualquier exclusión y más allá de cualquier discriminación (2000: 39 y 40).

Es éste reconocimiento de la universalidad de los derechos el que se dirige a la construcción de una sociedad cosmopolita, una comunidad política formada por ciudadanos del mundo que, levantando el vuelo hacia lo universal no renuncian, en cambio, a sus raíces (Muguerza, 2007: 542). Éste es uno de los retos morales y políticos más importantes que tienen planteadas las democracias actuales: el de cumplir la promesa de la universalidad de los derechos, esto es, el compromiso de la plena integración del hasta ahora excluido por algún tipo de diferencia. Estamos —nada menos— ante el «gran desafío de la primera década del siglo XXI», como lo ha descrito A.C. Wolkmer, que es:

> Organizar una vida en común, enfrentando la explosión de las desigualdades en un escenario neoliberal con las singularidades de

inscribe su idea en el contexto del "Derecho Cosmopolita", específicamente, en el escenario de un ciudadano extranjero que visita un territorio distinto al de su Estado: "Todos los derechos positivos, los derechos a algo, se fundan en un contrato. Ahora bien, el extranjero recién llegado no tiene a su favor absolutamente ningún contrato con el Estado que visita, esto es, ni un contrato que hubiera suscrito personalmente, ni un contrato al que pudiera remitirse y que su Estado hubiera suscrito por él; pues, según el presupuesto, o bien él no es de ningún Estado, o bien el Estado que visita no conoce su Estado, y no tiene con él ningún contrato. ¿Carece, por consiguiente, de derechos o los tiene a pesar de todo? Y en ese caso, ¿cuáles y por qué motivos? Tiene el derecho originario del hombre, que precede a todos los contratos jurídicos y únicamente él los hace posibles: *el derecho a presuponer que todos los hombres pueden establecer con él, mediante contratos, una relación jurídica*. Sólo éste constituye el único verdadero derecho del hombre, que corresponde al hombre como hombre: la posibilidad de adquirir derechos" (Fichte, 1994: 424; cursivas en el original).

los países periféricos. Se trata de pensar en un proyecto social y político contrahegemónico, capaz de reordenar las relaciones tradicionales entre Estado y sociedad, entre el universalismo ético y el relativismo cultural (2023: 167).

La puesta en práctica de esa integración —se podría objetar desde las filas del comunitarismo más relativista y las filosofías de la posmodernidad— no puede ser sinónimo de una uniformidad que ahogue el irreducible e inconmensurable pluralismo cultural bajo la bandera de un soberbio imperialismo eurocéntrico, pero tampoco puede dar la razón a «todo relativismo que, amparándose en la preservación de tradiciones culturales propias, pretenda negar la universalidad de los derechos humanos» (Mesa León, 2024: 206). Tampoco puede recorrerse el camino de la integración cosmopolita desconociendo que siguen quedando problemas sociales, culturales y económicos pendientes de resolver y que demandan una urgente y pronta solución con la mayor justicia posible, pero también con grandes dosis de prudencia. Precisamente «la mirada cosmopolita —como señala Nuria Belloso— permite visualizar en toda su dimensión la vulneración sistemática de derechos humanos para buena parte de los ciudadanos del planeta» (2024: 553 y 559). Sin embargo, sí conviene tener presente que se puede ir avanzando ya en muchos aspectos de necesaria mejora y que el objetivo final no debe hacernos olvidar que sin igualdad plena de derechos el programa político de la democracia siempre estará incompleto.

3. Individualismo moral, derechos humanos y ciudadanía democrática

El concepto de ciudadano que hoy manejamos en los Estados democráticos se asienta sobre el dato inequívoco de la construcción histórica de la tesis del individualismo moral, es decir, la defensa clara de la superioridad axiológica de las personas individualmente consideradas. La democracia quedaría justificada, en última instancia, por ser el sistema de gobierno que mejor articulación hace de esta idea del individualismo moral:

> No encuentro otro fundamento de la democracia que este solo que ahora expongo. Solo, pero grande: el respeto de uno mismo. La democracia es la única forma de régimen político que respeta mi dignidad en la esfera pública, me reconoce la capacidad de discutir y decidir sobre mi existencia en relación con los demás. Ningún otro tipo de régimen me da este reconocimiento, ya que me considera indigno de autonomía fuera de mi estrecho círculo de relaciones puramente privadas (Zagrebelsky, 2010: 113).

Así ligaba también Bobbio el fundamento ético de la democracia con la tesis del individualismo moral en la conferencia *Democrazia ed Europa* que el turinés impartió en Bogotá en 1987:

> El fundamento ético de la democracia es el reconocimiento de la autonomía del individuo, de todos los individuos, sin distinción de razas, de sexo, de religión, etcétera. En este presupuesto reside la fuerza moral de la democracia, lo que hace idealmente —insisto sobre el idealmente— de la democracia la forma más alta, humanamente más alta, de convivencia (2003: 455-456).

El individuo es, en definitiva, el fundamento ético de la democracia. Esta concepción radica en la consideración de un individuo que no detenta su dignidad por pertenecer a un grupo social, clase o raza, país o religión particular, sino que su valor moral implica un atributo que le es propio con independencia de reconocimientos o causas externas. Esta es la conquista ilustrada, encabezada por la filosofía práctica kantiana, que concibe la dignidad humana como un imperativo según el cual cada ser humano es un fin en sí mismo que, por ende, no puede ser instrumentalizado para ningún otro fin ni sustituido por ninguna otra cosa, que tiene valor y no precio (Delgado Rojas, 2018).

Este individualismo debe concebirse —para evitar malentendidos y vacías abstracciones— tan solo como un ideal normativo: no se trata de describir cómo son las personas en sí mismas, sino cómo deberían ser tratadas dada su condición de sujetos morales únicos e insustituibles (Vázquez, 2001: 121). No cabe duda de que las personas «de carne y hueso» tienen una raza, hablan una lengua, practican unas costumbres y están insertas en una u otra cultura, pero esas circunstancias no tendrían que determinar cómo deben ser tratadas. Ese es el valor de la propuesta individualista: no definir descriptivamente a la persona, sino, normativamente, apuntar cómo debe ser tratada con independencia de dichas adscripciones.

Está bastante claro que los derechos humanos responden a esta concepción individualista, cuya idea nace al inicio de la Edad Moderna y encuentra su fundamentación en las doctrinas iusfilosóficas del contractualismo. Esta visión individualista significa que «primero está el individuo, se entiende, el individuo singular, que tiene valor por sí mismo, y después está el Estado, y no viceversa. Que el Estado está hecho para el individuo y no el individuo para el Estado» (Bobbio, 1991: 107)[4]. Quienes poseen dignidad son única y exclusivamente los individuos. Como decía Javier Muguerza, «no hay otros sujetos morales que los individuos» (2002: 19). Cada sujeto, titular de derechos fundamentales, es el punto de partida y la finalidad de toda forma de organización social. Ningún tipo de pertenencia, ninguna entidad colectiva, tiene prioridad axiológica sobre cada uno de los individuos que la integran:

> Hay que poner atención a cuándo se reifican las producciones humanas por encima de los propios seres humanos o cuándo son realmente los seres humanos el referente de cualquier tipo de emancipación y liberación. Desde el derecho se puede y se debe luchar contra cualquier expresión de subintegración o subvaloración de las personas (p.e., en materia de subciudadanía o de migración en situaciones precarias) (Sánchez Rubio, 2011: 32).

Optar por la tesis del individualismo moral es el salvaguarda que impide que puedan imponerse sobre el individuo privaciones de bienes de manera no justificada, o que una persona pueda ser utilizada como instrumento para la satisfacción de los deseos de otra, o que la autonomía individual quede supeditada a algún tipo de interés general de una colectividad (me he referido a estas cuestiones en Delgado Rojas, 2023). En este sentido, dicho principio cierra la puerta a las versiones del utilitarismo que estarían dispuestas,

4 Sobre la noción de derechos humanos como concepto histórico de la modernidad, ver también Peces-Barba (1995: 115-144).

por una mayor cantidad de felicidad para muchos, a sacrificar la felicidad de unos pocos. Cierra el paso también a cualquier expresión paternalista o perfeccionista que suplantara la autonomía del individuo por decisiones ajenas a él e impuestas para mejorar su vida sin su consentimiento. E, igualmente, reconocer este principio significa renunciar a las políticas públicas u objetivos sociales fuertemente colectivistas —aunque se adoptaran por mayoría— que restringen los intereses de los sujetos individuales[5]. Cuando se prefieren estos intereses colectivos o, lo que es lo mismo, cuando no goza de prioridad axiológica el individuo, nos encontramos ante visiones del mundo en las que el déspota, el tirano o algún líder mesiánico serían sus mejores representantes.

Se trata de poner de relieve que es la concepción individualista la que sirvió de fundamento para *inventar* —en el sentido de Hunt (2009)— los derechos humanos. La justificación de la democracia o, mejor dicho, la razón principal que nos permite defenderla como la mejor forma de gobierno o la menos mala es precisamente su respeto a esa tesis del individualismo moral. Cualquier otra forma de gobierno que no parta de esa centralidad del individuo, del reconocimiento de su dignidad y la protección de sus derechos, podrá ser considerada, en consecuencia, despótica.

5 En este sentido los derechos individuales funcionan como un límite al poder de la mayoría, algo así como un *coto vedado* al que ni siquiera democráticamente se podría rebajar su protección, una *esfera de lo indecidible* en el que "ninguna mayoría política puede disponer de las libertades y de los demás derechos fundamentales" (Ferrajoli, 2005: 36; Garzón Valdés, 1989: 143-164).

4. La ciudadanía universal necesita de derechos igualmente universales

Cada momento histórico ha significado un nuevo capítulo de la historia de los derechos humanos, que ha extendido su alcance a los aspectos más determinantes de la vida humana. Unas nuevas fases han complementado las ya existentes, en un proceso sin duda acumulativo y progresivo aunque en ningún caso lineal. Estos momentos sucesivos, según ha enunciado Peces-Barba (1995: 183 y ss.), corresponden a las cuatro fases de positivación de los derechos, generalización de los derechos (en relación tanto a los titulares como al contenido de los derechos), proceso de internacionalización y proceso de especificación.

A partir de los primeros derechos, en los albores del mundo moderno, que surgen como un perímetro de seguridad y autonomía *frente* al poder político estatal (piénsese en la libertad religiosa o en el habeas corpus), ha tenido lugar una ampliación y acumulación en el contenido de los derechos. Ante la continua evolución en las necesidades sociales, fruto a su vez de transformaciones históricas en el ámbito religioso, cultural, político o económico, el Derecho estatal ha ido sumando nuevos derechos positivos cuya fuente de legitimidad se encontraba en nuevos contenidos éticos. Hoy el campo de los derechos humanos refleja esa institucionalización de todos los procesos de lucha en el orden social que han tratado de hacer realidad la existencia humana en condiciones de dignidad (Herrera Flores, 2005: 246). Los derechos humanos, incorporados actualmente en las Constituciones nacionales y en diversos textos

internacionales, representan esa ética de mínimos, o mínimo moral, que por universalista es común a toda sociedad, que intenta respetar las básicas exigencias éticas de una vida digna, las libertades cívicas y políticas, la seguridad, la autonomía y la pretensión de crear garantías eficaces que actúen como respuestas reparadoras ante los atropellos de las desigualdades sociales y económicas.

Está bastante claro que, como indicó hace unos años Norberto Bobbio, los derechos humanos se han convertido actualmente en «uno de los indicadores principales del progreso histórico» (1991: 14) y que son «el banco de pruebas para una teoría de la justicia», en palabras de Liborio Hierro (2016: 21 y ss.) o que «la conciencia creciente de la autonomía de la persona como valor irrenunciable y la extensión de la dignidad a todos», elementos intrínsecos de la idea de derechos humanos, son evidencias de la existencia de un progreso moral que afecta a la historia de la ética (Camps, 2013: 14). Sin embargo, todas esas apreciaciones y auténticos logros no son suficientes para asegurar y mantener la práctica cotidiana en la realización y protección de los derechos humanos. La realidad social, en sus contextos políticos y económicos, nacionales y a escala mundial, en tiempos de barbarie como los que nos azotan, se aleja cada vez más de los buenos propósitos incorporados a declaraciones y convenios de derechos humanos.

Conviene advertir que esta historia expansiva y acumulativa de los derechos humanos va construyendo diferentes modelos, también expansivos y acumulativos, de ciudadanía que caminan convergiendo hacia ese ideal cosmopolita anhelado. T.H. Marshall, en su conocido texto *Ciudadanía y clase social*, señaló que «la ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica» (1998: 37). Queda claramente reflejado en esta definición el nexo entre ciudadanía y derechos. El ciudadano es el que tiene derechos y, además, el máximo número de derechos que se puede tener. Por ello cualquier exclusión en la ciudadanía significa disminución de los derechos reconocidos a los que quedan, en consecuencia, relegados a ser otredad.

T.H. Marshall propuso tres tipos de ciudadanía o una división de la ciudadanía en tres partes, que viene dada no por «la lógica sino por la historia». Es decir, la ciudadanía es una convención, un constructo o artificio creado por el hombre:

> Llamaré —escribe Marshall— a cada una de estas partes o elementos, civil, política y social. El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religiosa, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia. Este último es de índole distinta a los restantes, porque se trata del derecho a defenderse y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás, mediante los debidos procedimientos legales. Esto nos enseña que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia. Por elemento político entiendo el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembros de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Las instituciones correspondientes son el parlamento y las juntas de gobierno local. El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienes-

tar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones directamente relacionadas son, en estos casos, el sistema educativo y los servicios sociales (1998: 23).

Es necesario tener en cuenta que este texto aparece en la obra de T.H. Marshall bajo el título «El desarrollo de la ciudadanía hasta finales del siglo XIX». Con ello se pretende hacer notar que los tres elementos de la ciudadanía —civil, política y social— siendo los básicos e imprescindibles, deben ser complementados con nuevos elementos, es decir, también nuevos derechos, aparecidos en el siglo siguiente y que no encajan parcial o totalmente en el ámbito de los derechos cívicos, políticos y sociales. Si nos ciñéramos únicamente a esa división tripartita de la ciudadanía nos encontraríamos hoy con resultados de exclusión para no pocos individuos, que no verían reconocida su ciudadanía plena ateniéndose al mero reconocimiento de derechos civiles, políticos y sociales. Y ello porque el «dispositivo inmunitario» de la ciudadanía funciona según la lógica binaria ciudadano-extranjero que «implica siempre –ha señalado Esposito– un elemento excluyente»: entre quienes disfrutan de derechos políticos y quienes no los disfrutan o los disfrutan solo en parte (2024: 15 y 16)[6]. De hecho, uno de los desafíos más imperiosos que tiene ante sí la teoría contemporánea de los derechos humanos es la de hacer frente a las injusticias que generan las situaciones de exclusión y negación del status de ciudadano para muchos de los miembros de una comunidad política. Con razón ha afirmado Danilo Zolo que la respuesta, en forma de expulsiones y persecuciones, o a través de la negación de la calidad de sujetos a los inmigrantes, por parte de las «ciudadanías amenazadas» por la presión migratoria, «está escribiendo y parece destinada a escribir en los próximos decenios las páginas más luctuosas de la historia civil y política de los países occidentales» (1999: 42).

Cabría preguntarse entonces si, frente a la exclusión en el ejercicio de determinados derechos ligados a la idea de ciudadanía, resulta en cambio más promisoria la universalización de la pertenencia a una comunidad política con vocación cosmopolita. Conviene caer en la cuenta de que derechos proclamados universales precisan, también, instituciones políticas y jurídicas que los reconozcan y garanticen y que actúen en un marco de vigencia y efectividad universal. El sujeto de los derechos humanos, convertido en ciudadano del mundo, precisa instituciones igualmente cosmopolitas. No trato

6 El Derecho expresa su vertiente inmunitaria al definir los requisitos que deben satisfacer los destinatarios a los que se dirigirán su protección y sus normas. Una vez que han sido identificados aquellos miembros que forman parte de la comunidad, se hacen visibles, por exclusión, aquellos que no forman parte y que son, por tanto, extraños –extranjeros– a la comunidad política. El Derecho conserva y excluye: "Conserva la vida en el interior de un orden que excluye su libre desarrollo porque la retiene en el umbral negativo definido por su opuesto (…). La figura dialéctica que de este modo se bosqueja es la de una inclusión excluyente o de una exclusión mediante inclusión" (Esposito, 2005: 18 y 20). Como al respecto aclara García López, "el carácter inmunitario del derecho hace que se excluya a la vez que se privilegia a quien lo tiene. (…). Se incluye por medio de la exclusión. Quienes llegaban a estar incluidos en la categoría persona lo estaban porque precisamente otros estaban excluidos, o, incluso, sustraídos. Solo a partir del contraste era posible. El proceso de personificación coincide con el de despersonificación" (2023: 251 y 275).

ahora de recorrer la vía y la propuesta de una ciudadanía cosmopolita *stricto sensu*, sino más bien cuestionar si la realización de aquella universalización del postulado de la ciudadanía ha de pasar por la construcción de un Estado mundial, si quedan disipados los riesgos de que algún tipo de gobierno de semejante tamaño no pudiera actuar despóticamente o si, por el contrario, hay otras alternativas que no pongan el acento universalizador en el Estado sino en el ciudadano. La pregunta sería algo así: ¿una unión de Estados o de individuos?

5. La sociedad global es una unión de individuos cosmopolitas

Los derechos humanos universales precisan un régimen político y jurídico igualmente universal para su protección. Tenemos la suerte de contar con un magnífico autor que explicitó tempranamente estas cuestiones. Las enseñanzas que Kant nos ofreció en *Hacia la paz perpetua* siguen siendo pistas muy válidas para pensar hoy estos problemas. Kant proclamó, en dicha obra, un Segundo artículo definitivo para la paz perpetua que preceptúa que «el derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres». Para el filósofo de Königsberg, del que este año 2024 estamos celebrando el tercer centenario de su nacimiento, la paz pasa irremediablemente por un pacto entre los pueblos:

> Los Estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, según la razón, para salir de la situación sin leyes, que conducen a la guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas de la misma manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes) y formar un Estado de pueblos (*civitas gentium*) que (siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los pueblos de la tierra (1985: 24-26).

No olvidemos que para Kant la constitución a la que alude en el Primer artículo definitivo que debe poseer todo Estado debe ser republicana. Esa forma republicana sería algo semejante a lo que hoy se entiende por Estado de Derecho. Por tanto, la federación a instaurar es una unión de Estados republicanos o Estados de Derecho. En todo caso, la federación, como mantiene independencias y separaciones entre los Estados que la conforman, es mejor que la unión o fusión de todos ellos en un único gobierno o potencia mundial «que se convirtiera en una monarquía universal, porque las leyes pierden su eficacia al aumentar los territorios o gobiernos y porque un despotismo sin alma cae al final en anarquía, después de haber aniquilado los gérmenes del bien» (Kant, 1985: 40).

De forma contemporánea, dos eminentes filósofos de la política como Michael Walzer y John Rawls han alertado, en clave kantiana, de los riesgos de un gobierno mundial desde razones de distinta índole. El primero ha objetado la inviabilidad o imposibilidad de semejante sistema, mientras que Rawls ha remarcado su carácter indeseable e innecesario. Para Walzer, los Estados en su sentido westfaliano siguen siendo el último reducto para la protección de los derechos. Pero no es menos relevante que también sean los principales vulneradores de esa misma protección, y «eso es igualmente cierto con respecto a todos los demás agentes imaginables, incluido un hipotético gobierno mundial» (2010: 362). Rawls, en su rechazo del Estado mundial, se basa

en dos argumentos: primero, retomando la tesis kantiana de que tal Estado sería o bien un imperio despótico, o bien un poder inestable incapaz de contener las demandas de independencia de los pueblos; y, segundo, en la afirmación de que la pluralidad de Estados puede ser suficiente para la paz bajo la asunción de que las democracias no han entrado en guerras abiertas entre sí (2001: 49 y ss.)[7].

El contexto adecuado para pensar la universalidad de los derechos del ciudadano cosmopolita es una sociedad de Estados de Derecho igualmente cosmopolita. Así también lo ha visto, desde una lectura kantiana, el filósofo alemán Jürgen Habermas:

> El modelo normativo para una comunidad que no tiene la posibilidad de exclusión es el universo de personas morales, el "reino de los fines" de Kant. No es casual por lo tanto que en una sociedad cosmopolita sean sólo los "Derechos Humanos" los que conformen el marco normativo de la misma, es decir, las normas jurídicas con un exclusivo contenido moral.
>
> (…) Mientras que la solidaridad de los ciudadanos de un Estado está arraigada en una particular identidad colectiva, la solidaridad colectiva, la solidaridad cosmopolita debe apoyarse exclusivamente en el universalismo moral expresado en los Derechos Humanos (2000: 140).

Es decir, es la idea de universalidad de los derechos humanos la que gobierna la conformación de la sociedad cosmopolita. Ello implica que la garantía universal de los mismos derechos para todos por igual debe ser efectiva en esa comunidad cosmopolita de Estados. Ahora bien, en un mundo cada vez más globalizado en lo económico y más desigual en lo humano, difícil se hace pensar en esa universalidad de trato que requiere la constitución de una ciudadanía cosmopolita. Demasiadas evidencias desmienten hoy que la aspiración universalista de la condición de ciudadano llegue a ser una realidad cercana. Por ello, en el actual contexto de globalización-localización y ante la percepción de los ciudadanos sobre sus compromisos en torno a diferentes estratos de lealtades dentro y más allá de los Estados, se produce un creciente reconocimiento de la necesidad de reconceptualizar la ciudadanía en las diferentes esferas, espacios y lugares en los cuales el ciudadano interactúa, en los que la identidad nacional es tan sólo una más de entre las distintas formas de pertenencia posibles. Este nuevo concepto de «ciudadanía global» va surgiendo de la influencia que las instituciones multinacionales e intergubernamentales ejercen sobre la vida de los ciudadanos, que «urgen el reconocimiento de la necesidad de fortalecer los derechos, las obligaciones y la responsabilidad más allá de las fronteras nacionales» (Lucena Cid, 2006: 253). En los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Estados del mundo seguimos hallando normas que discriminan, de forma más o menos tajante, entre ciudadanos y extranjeros. Estas regulaciones claramente apuntan a una dirección contraria del camino que esperaríamos que recorriera un programa político en clave cosmopolita. Como bien ha denunciado el profesor Ermanno Vitale:

> Estas leyes son contradictorias no sólo desde la perspectiva del universalismo cosmopolita, que aspira a la abolición de la diferencia entre derechos fundamentales de la

7 Sobre los riesgos de que un gobierno mundial se convierta en tiránico han alertado, entre otros, Habermas (2002: 147-155), Muguerza (1996: 347 y ss.) y Lefort (2007: 325 y ss.).

> persona y del ciudadano, sino que también privan a los migrantes, de forma absolutamente incoherente, del ejercicio de los derechos del individuo previstos por las mismas constituciones de los Estados. De este modo, se tiende de nuevo a transformar los derechos universales del individuo en privilegios de la ciudadanía (2006: 54).

Si las ideas están, falta en cambio la voluntad política de llevarlas a cabo. Aun así, se han producido propuestas desde las teorías de la democracia que ponen de manifiesto que la federación de Estados organizados por reglas cosmopolitas no es un ideal lejano tan utópico.

6. Los fundamentos de una democracia cosmopolita

Algunos autores han sugerido algunos primeros pasos para repensar la democracia de base cosmopolita. David Held, entre otros, ha estudiado ampliamente en qué consistiría ese modelo cosmopolita de democracia, y sostiene que sería aquél que «promovería la creación de un poder legislativo y un poder ejecutivo transnacionales, efectivos en el plano regional y en el global, cuyas actividades estarían limitadas y contenidas por el derecho democrático básico» (1997: 321).

No es preciso entrar aquí a debatir cuestiones particularmente operativas acerca de la viabilidad y gestión de un sistema internacional de democracia cosmopolita. Pero creo que, al menos como ideal ilustrado y regulativo, una noción de ciudadanía universal que garantice los derechos básicos de todas las mujeres y hombres a vivir en paz y seguridad, a las libertades civiles y políticas y a una igualdad basada en una justa distribución de recursos, necesita, igualmente, un modelo de gobierno democrático cosmopolita. Este tipo de gobierno, para ser estable y no opresivo, descartada su versión despótica mundial, no estaría alejado de una suprafederación que dejara importantes márgenes de competencias a los distintos centros de decisión política, ya se sitúen estos en el nivel estatal, infraestatal o supraestatal[8].

Nada de todo ello exige la extinción, a la vista está, de los Estados nacionales como entidades políticas básicas[9]. Lo que

8 No haciendo justicia al amplio y rico tratamiento que ofrecen los siguientes autores, debo sin embargo simplificar sus argumentos en exceso para dejar anotadas posturas similares a la aquí mantenida: Habermas apuesta por un cosmopolitismo más débil que el de Held, y más cercano al planteamiento kantiano que, a través de la sociedad civil y la opinión pública y de estructuras aceptadas por los Estados en un largo proceso de democratización internacional, desembocaría en una organización internacional aunque sin forma estatal (2009: 132-134). Höffe aboga por una república mundial con parlamento bicameral, poder ejecutivo y poder judicial, compatible con los Estados, pero que "no es tan mínima como parece en un primer momento" (2011: 14 y 25-28). Jesús González Amuchastegui también defendió la creación de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales con competencias universales pero compatibles con los Estados nacionales (2004: 295). Ferrajoli, por su parte, en una postura intermedia entre las dos anteriores, propone desarrollar sobre todo las instituciones globales de garantía, especialmente las judiciales, y no tanto las instituciones puramente gubernamentales (2011: 118-133). Isabel Turégano, tras afirmar categóricamente que "todo Estado mundial sería, ipso facto, tiránico", propone un pluralismo constitucional sin prioridad del legislativo, a lo que llama democracia postrepresentativa para el orden mundial (2010: 99).

9 Me parece que se produce, a diferencia de tesis más laxas mantenidas en trabajos suyos anteriores, una fuerte reafirmación de Martha Nussbaum, en su último libro, en defensa del

sí exige el planteamiento cosmopolita es prescindir, en algún grado, de la noción de soberanía como característica depositada exclusiva y excluyentemente en el Estado. No se trata solo de que los Estados dejen de detentar su poder soberano en la forma clásica en que lo han venido ejerciendo, sino en avanzar hacia fórmulas que rompan con la forma tradicional de entender el Estado soberano moderno: no se trataría tanto de reubicar hacia arriba la soberanía estatal, ahora, en instancias supranacionales, sino de dispersarla en horizontal entre distintos ámbitos superpuestos de decisión y, por tanto, entre diferentes autoridades interconectadas en distintas escalas. Y ello asumiendo que los individuos mantenemos vínculos, unos más fuertes y otros más débiles, simultáneamente con las diferentes comunidades políticas a las que pertenecemos a distintos niveles (local, nacional, supranacional…). Esos diferentes estratos de lealtades encontrarán mejor acomodo en una pluralidad interconectada de centros decisorios, más que pretender cobijarlos todos ellos bajo un único centro de poder[10]. La idea ya ha sido avanzada por Juan Carlos Bayón con la noción de gobierno democrático postsoberano:

> Una organización política post-soberana sería un sistema policéntrico basado en una distribución horizontal de competencias entre distintas unidades políticas de diversa magnitud geográfica, sin ninguna autoridad suprema en ningún nivel (2008: 43)[11].

Existen, desde luego, otras alternativas que apuntan, más drásticamente, hacia la desaparición del concepto mismo de ciudadanía. Hace algunos años Luigi Ferrajoli ya escribió:

> La exigencia más importante que proviene hoy de cualquier teoría de la democracia que sea congruente con la teoría de los derechos fundamentales es alcanzar —sobre la base de un constitucionalismo mundial ya formalmente instalado a través de convenciones internacionales mencionadas, pero de momento carente de garantías— un ordenamiento que rechace finalmente la ciudadanía: suprimiéndola como *status* privilegiado que conlleva derechos no reconocidos a los no ciudadanos, o, al contrario, instituyendo una ciudadanía universal; y por tanto, en ambos casos, superando la dicotomía 'derechos del hombre/derechos del ciudadano' y reconociendo a todos los hombres y mujeres del mundo, exclusivamente en cuanto personas, idénticos derechos fundamentales (2010: 119)[12].

"papel moral fundamental de la nación", pues la nación "constituye la mayor unidad que sirve de vehículo efectivo a la autonomía humana y que es responsable ante las voces de las personas" (2020: 25).

10 El planteamiento sigue la cadencia de Thomas Pogge: "Los individuos deben ser ciudadanos de una pluralidad de unidades políticas de varios tamaños y gobernarse a sí mismos a través de ellas, sin que ninguna unidad política sea dominante y desempeñe de ese modo el papel tradicional del Estado" (1992: 58).

11 Y ello sin optimismos desmedidos pues, al fin y al cabo, "la democracia parece exigir que alguna unidad política tenga autoridad última y sea por tanto soberana" y todavía hoy "tal vez la mejor forma de mantener los valores democráticos razonablemente a salvo en una época de crecientes interacciones transnacionales sea reforzar y mejorar el proceso democrático dentro de los estados-nación" (Bayón, 2008: 45 y 46).

12 En sentido similar, Michelangelo Bovero afirma: "los derechos de 'ciudadanía política', los derechos de participación en el proceso de decisión política, deben ser considerados derechos de la persona, es decir, corresponden (deberían corresponder) a todo individuo en tanto que es persona, en la medida en la cual la persona está sometida a esas decisiones políticas: y no hay

Se debe reconocer el atractivo de la propuesta ferrajoliana acerca de la necesidad de superar un concepto anquilosado de ciudadanía, pero quizás la idea de la extinción de dicha categoría no sea por el momento lo más propicio. En ausencia de un Estado mundial (que tampoco es deseable su llegada, ya vimos, por despótico), la ciudadanía me temo que seguirá atada al marco de los Estados-nación: ahora bien, son Estados, repito, que se confederan y avanzan en un proyecto cosmopolita de Estados de Derecho. Es decir, la propuesta más razonable me parece que pasa, no por el constitucionalismo mundial, sino por la confederación de Estados constitucionales. Una vez admitida esa premisa, el mantenimiento del Estado-nación se hace necesario. Cuando ese Estado-nación se confedera en la sociedad cosmopolita, la figura del ciudadano también debe superar su ligazón del estricto ámbito nacional y ampliarse hacia la inclusión e integración cosmopolita.

En cuanto al contenido que debe recoger esa ciudadanía inclusiva, tras la temprana defensa que hizo Francisco de Vitoria en 1539, en el contexto de la colonización española, del derecho natural de tránsito (*ius communicationis*) frente a la voluntad del soberano para negar al huésped el derecho de hospitalidad, nuevamente podemos hallar en *Hacia la paz perpetua* algunas pistas acerca de los alcances y límites de esa integración. Kant, en su Tercer artículo definitivo para alcanzar la paz, consagra que «el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal»:

> Se trata en este artículo, como en los anteriores, de derecho y no de filantropía, y hospitalidad significa aquí el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro (…). No hay ningún derecho de huésped en el que pueda basarse esta exigencia (para esto sería preciso un contrato especialmente generoso, por el que se le hiciera huésped por cierto tiempo) sino un derecho de visita, derecho a presentarse a la sociedad, que tienen todos los hombres en virtud del derecho de propiedad en común de la superficie de la tierra (1985: 63 y 64)[13].

Las limitaciones de este derecho de visita se revelan evidentes. Por un lado, este derecho se circunscribe a la visita, a recorrer las regiones de otros Estados como visitante, pero no a «establecerse en el suelo de otro pueblo (*ius incolatus*), para el que se requiere un contrato especial» (Kant, 2005: 193). Por otro lado, este derecho traslada el acento que recaía sobre el individuo, que se vinculaba con el Estado sin ser ciudadano, a las relaciones entre Estados. El espíritu altruista, humanitario, de la hospitalidad, que parecía incidir sobre el individuo que la solicitaba, se sustituye por la prerrogativa del soberano de conceder el derecho de visita. Es el anfitrión, y no el huésped, el que tiene potestad para decidir quién y en qué condiciones se puede visitar su territorio.

Mary Kaldor ha realizado una interesante ampliación de este «derecho de hospitalidad» al que había quedado reducido el cosmopolitismo kantiano. La internacionalista británica apuesta por una «nueva forma de movilización política cosmopolita», un enfoque distinto para intentar

ninguna razón válida para excluir a alguno de aquellos que están sometidos (de manera estable) a un ordenamiento normativo del derecho a participar en la formación de ese mismo ordenamiento" (2002: 24).

13 Ver, al respecto, el cap. 1, "Sobre la hospitalidad: una relectura del derecho cosmopolita de Kant", de Benhabib (2005: 29 y ss.).

solucionar los actuales conflictos bélicos. Lo que se necesita, apunta Kaldor, es «una respuesta mucho más política a las nuevas guerras». Frente a la táctica de sembrar miedo y odio debe oponerse la estrategia de pacificación; a la política de la exclusión debe oponérsele la política de la inclusión; a la criminalidad violenta de los caudillos debe oponerse el respeto a los principios internacionales y las normas legales. El cosmopolitismo de Kaldor es el de la pacificación mediante la extensión del imperio de la ley. Es el sometimiento al Derecho —al Derecho internacional de los derechos humanos— la vía para alcanzar la sociedad cosmopolita de Estados confederados. A la ley del más fuerte hay que oponer la ley del Estado de Derecho:

> El 'cosmopolitismo', usado en sentido kantiano, implica la existencia de una comunidad humana con ciertos derechos y deberes compartidos. En 'La paz perpetua', Kant preveía una federación mundial de Estados democráticos en la que el derecho cosmopolita se redujese al derecho de 'hospitalidad': los extranjeros y forasteros debían ser acogidos y tratados con respeto. Yo empleo el término de forma más amplia, para designar una visión política positiva, que comprenda la tolerancia, el multiculturalismo, el civismo y la democracia, y un respeto más legalista a ciertos principios universales y prioritarios que deberán servir de guía a las comunidades políticas en varias dimensiones, incluida la dimensión mundial. Estos principios están ya contenidos en varios tratados y convenios que componen el conjunto del derecho internacional (Kaldor, 2001: 147 y 149).

Desearía ir concluyendo con dos puntos con los que, me parece, debería ser completada la idea de democracia cosmopolita que aquí he tratado de esbozar.

En primer lugar, el cosmopolitismo no debería aspirar a un consenso de máximos en torno a valores y principios que no pudieran compartirse por la mayoría de los Estados confederados. Es un acuerdo de mínimos el que debe animar la constitución del orden cosmopolita. Y ese acuerdo, que por mínimo no es por ello menos exigente, encontraría su base y contenido en los derechos humanos fundamentales. O dicho al contrario: la cultura política cosmopolita no puede ir más allá de aquellos valores que puedan hacerse valer con vocación objetiva y universalizable. Los derechos humanos fundamentales, junto con los deberes inherentes exigibles a todo individuo, serían el mejor contenido —y único posible— para integrar ese consenso mínimo pero riguroso. Fuera de dicho consenso tendrían que quedar aquellas opciones que, en aras también de salvaguardar el irreducible pluralismo, no dejarían de pasar por identidades culturales y reivindicaciones colectivas que, si bien pueden ser muy importantes y requerirán atención por la democracia cosmopolita, no se integran en ese mínimo compartido universal. Bien lo ha expresado Michael Ignatieff:

> Un régimen universal para la protección de los Derechos Humanos debe ser compatible con el pluralismo moral. Es decir, debe ser posible mantener regímenes de protección de los Derechos Humanos en civilizaciones, culturas y religiones muy diversas, cada una de las cuales discrepa de las otras acerca de lo que debe ser la buena vida. Otra forma de expresarlo es la siguiente: las personas de diferentes culturas pueden seguir estando en desacuerdo sobre lo bueno, pero en cualquier caso están de acuerdo en lo que es insoportable e injustificablemente malo (2003: 79).

La segunda puntualización que no hay que descuidar es el riesgo que corren las instituciones supranacionales (ya no digamos las universales) de convertirse en instancias alejadas de los compromisos que despiertan la confianza del ciudadano. Un concepto ampliado de ciudadanía rápidamente se topa con esta limitación que acertadamente constató Habermas cuando afirmaba que «en la vida política de un ciudadano se superponen muchas lealtades que se pueden valorar individualmente de forma muy diferente: entre otras, los lazos políticamente relevantes con la región de origen, con la ciudad o la provincia del correspondiente lugar de residencia, con el país o la nación, etc.» (2012: 73). Appiah se ha referido también a un *cosmopolitismo arraigado* que comienza entablando un diálogo con el entorno más cercano y se va abriendo y ampliando hasta *conversar imaginativamente* con la entera humanidad acerca de aquello que, siendo diverso, es sin embargo compartido (2007: 366-367)[14]. En nuestro ámbito hispanohablante, Eusebio Fernández ha mostrado su preocupación por el acople de esta dualidad de lealtades entre lo cercano y lo lejano, entre lo que nos acerca y une universalmente y a la vez demanda el respeto a las diferencias que nos separan, apuntando como solución posible la proclamación de una doble nacionalidad (cosmopolita y nacional) y la defensa de un *patriotismo cosmopolita* como postura más moderada ante la propuesta de una ciudadanía mundial sin reservas, que «de solidaridades y lealtades particulares se dirige hacia solidaridades y lealtades cosmopolitas y que se apoyan entre sí para evitar tanto el patriotismo excluyente e inmoderadamente nacionalista, como un cosmopolitismo insulso y sin contenidos» (2004: 328).

Apuntaba el profesor Fernández García que el sentimiento de pertenencia a una sociedad cosmopolita nunca va a poder sustituir satisfactoriamente el sentimiento de pertenencia a comunidades nacionales concretas. Son necesarias ambas lealtades y ambos conceptos de ciudadanía. La identidad personal va unida irremediablemente a un sentimiento de pertenencia a comunidades concretas, particulares y necesariamente cercanas por ser el lugar propio de los afectos y vínculos de la familia, la amistad y el vecindario. En una sociedad cosmopolita se debe cuidar por no desatar esos lazos. La ciudadanía cosmopolita, a secas, corre el riesgo —alertaba Fernández García— de convertirse en una estructura artificial y fría:

> Me produce gran zozobra que se desee crear un futuro de ciudadanos desarraigados. Los valores cosmopolitas nunca van a sustituir al ideal de pertenencia a comunidades más pequeñas, comunidades con las que nos identificamos y que conforman el contexto de nuestra existencia cotidiana. Unos y otros deben complementarse entre sí, pero no reemplazarse (…). La idea de pertenencia a una comunidad política, abarcable y diferenciada, con la que nos sentimos identificados y comprometidos, aunque sea de forma parcial y relativa, es un elemento muy importante (…). El patrio-

14 Este planteamiento está en sintonía con la propuesta de De Julios-Campuzano de un *cosmopolitismo gradual* que, "fiel al legado de la modernidad y al discurso universalista de los derechos aspira a la realización, cada vez más acabada, del ideal cosmopolita (…). Que trata de crear las condiciones para la superación del viejo paradigma estatalista de la política y del derecho, una nueva forma de pensar la organización social desde el reconocimiento de la globalidad creciente y desde el pluralismo característico de nuestras sociedades, cada vez más interdependientes" (2016: 356).

tismo, el amor a la patria, es un sentimiento individual y una virtud social y política que no puede ser impuesta y que, por tanto, difícilmente puede considerarse el contenido de obligaciones morales y jurídicas. Quizá el equilibrio adecuado entre un patriotismo que excluya al nacionalismo exacerbado y una actitud cosmopolita sea lo más correcto (2001: 13, 14 y 115).

Ante el riesgo de crear instituciones internacionales demasiado superficiales parecería preferible situarse en una posición más moderada y prudente que tuviera a bien combinar, pero nunca sustituir, ambos ideales de ciudadanía. Este correcto acomodo entre la dimensión democrática de la ciudadanía, atada normalmente a lealtades territoriales, y el ideal del cosmopolitismo, con su vocación universalista deslocalizada, es uno de los principales retos, a mi entender, que enfrenta hoy la teoría contemporánea de los derechos humanos.

7. Conclusiones

De todo lo hasta aquí expuesto cabe concluir que el concepto de ciudadanía es clave a la hora de analizar y valorar la calidad de las democracias abiertas y plurales. La consideración de ciudadano reivindica una situación de dignidad, autonomía, libertad e igualdad, base y fundamento de los derechos humanos básicos. El universalismo de los derechos humanos sería coincidente, en su ideal regulativo, con la aspiración de una condición de ciudadanía igualmente universal. Y eso solamente es posible si nos situamos en el marco de una democracia, como hemos definido, cosmopolita y no excluyente.

La idea de democracia cosmopolita, que representa el modelo de ciudadanía que mejor responde a las exigencias —convertidas en derechos— del respeto a la dignidad humana, está llamada a fundamentar el ideal que debe servir para marcar el camino a seguir. Sin embargo, es posible que por largo tiempo tenga que convivir con las formas de ciudadanía derivadas de relaciones de poder específicas y concretas, arraigadas al marco del Estado-nación, que no son producto de la arbitrariedad ni del azar sino resultado de procesos históricos ya irreversibles, muchas veces bélicamente injustos, pero no inmutables. Tomando en préstamo la frecuente expresión de Sánchez Rubio cuando aboga por «construir un mundo donde quepan muchos mundos» (2024: 19), de lo que se trata, en definitiva, es de construir una *cosmópolis* donde quepan muchas *polis*, y no solo unas pocas.

8. Bibliografía

Appiah, K.A. (2007). *La ética de la identidad*. Trad. Lilia Mosconi. Madrid: Katz.

Arendt, H. (1998). *Los orígenes del totalitarismo*. Trad. Guillermo Solana. Madrid: Taurus.

Arendt, H. (2009). *Tiempos presentes*. Trad. Rosa Sala. Barcelona: Gedisa.

Bayón, J.C. (2008). "¿Democracia más allá del Estado?", *Isonomía*, 28, pp. 27-50.

Beck, U. (2016). *The Metamorphosis of the World*. Cambridge: Polity Press.

Belloso, N. (2023). "De nuevo sobre el cosmopolitismo: algunas objeciones en busca de respuestas". En A. De Julios-Campuzano (ed.), *La cultura jurídica cosmopolita. Fundamentos, límites y posibi-*

lidades en tiempos de crisis. Pamplona: Aranzadi.

Benhabib, S. (2005). *Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos*. Trad. Gabriel Zadunaisky. Barcelona: Gedisa.

Bobbio, N. (2003). *Teoría general de la política*. Trads. Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Madrid: Trotta.

Bobbio, N. (1991). *El tiempo de los derechos*. Trad. Rafael de Asís. Madrid: Sistema.

Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. Trad. José F. Fernández Santillán. México: Fondo de Cultura Económica.

Bobbio, N. (1979). *Il problema della guerra e le vie della pace*. Bologna: Il Mulino.

Bovero, M. (2002). "Ciudadanía y derechos fundamentales", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 103, pp. 9-25.

Camps, V. (2013). *Breve historia de la ética*. Barcelona: RBA.

De Julios-Campuzano, A. (2024). "La tradición cosmopolita y su vigencia en tiempos de globalización", *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 55, pp. 541-570.

De Julios-Campuzano, A. (2016). "Por un cosmopolitismo gradual. Derecho y Constitución en el orden supranacional". En Id. (ed.), *Itinerarios constitucionales para un mundo convulso*. Madrid: Dykinson.

De Lucas, J. (2005). "La integración política como condición del modelo de integración", *Documentación Social*, 139, pp. 53-72.

Delgado Rojas, J.I. (2023). "La trappola del riconoscimento. Una difesa della tolleranza liberale di fronte all'illusione identitaria", *Ragion Pratica*, 61, pp. 549-574.

Delgado Rojas, J.I. (2021). *Ciudadanía liberal y moralismo legal*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Delgado Rojas, J.I. (2018). "Dignidad humana", *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 15, pp. 176-197.

Dworkin, R. (1989). "Liberal Community", *California Law Review*, 77, pp. 479-504.

Esposito, R. (2024). "Prólogo". En I. Ortiz Gala, *El mito de la ciudadanía*. Barcelona: Herder.

Esposito, R (2005). *Immunitas. Protección y negación de la vida*. Trad. Luciano Padilla. Buenos Aires: Amorrortu.

Fanon, F. (1961). *Les damnés de la terre*. París: Francois Maspero.

Fernández García, E. (2004). "El patriotismo constitucional". En G. Peces-Barba y M.A. Ramiro Avilés (coords.), *La Constitución a examen. Un estudio académico 25 años después*. Madrid: Marcial Pons.

Fernández García, E. (2001). *Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita*. Madrid: Dykinson.

Ferrajoli, L. (2011). "Costituzione e globalizzazione". En M. Bovero (ed.), *Il futuro di Norberto Bobbio*. Roma-Bari: Laterza.

Ferrajoli, L. (2010). *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Trads. Andrea Greppi y Perfecto Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta.

Ferrajoli, L. (2005). *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.

Fichte, J.G. (1994 [1796]). *Fundamento del derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia*. Trads. J.L. Villacañas, S. Ramos Valera y F. Oncina Co-

ves. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

García López, D.J. (2023). *Ínsulas extrañas. Una ontología jurídica de la vida a través de la Italian Theory (Agamben, Esposito, Rodotà, Resta)*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Garzón Valdés, E. (1989). "Representación y democracia", *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 6, 1989, pp. 143-164.

Giner, S. (2005). "Ciudadanía pública y sociedad civil republicana", *Documentación Social*, 139, pp. 13-34.

González Amuchastegui, J. (2004). *Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Habermas, J. (2012). *La constitución de Europa*. Trad. Javier Aguirre Román. Madrid: Trotta.

Habermas, J. (2009). *El Occidente escindido*. Trad. J.L. López de Lizaga. Madrid: Trotta.

Habermas, J. (2002). "La idea kantiana de la paz perpetua desde la distancia histórica de 200 años". En Id., *La inclusión del otro. Estudios de Teoría Política*. Trad. Juan Carlos Velasco, Barcelona.

Habermas, J. (2000). *La constelación posnacional. Ensayos políticos*. Trad. Luís Pérez Díaz. Barcelona: Paidós.

Harari, Y.N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Trad. R. Joandomènec. Madrid: Debate.

Held, D. (1997). *La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita*. Trad. Sebastián Mazzuca. Barcelona: Paidós.

Herrera Flores, J. (2005). *Los derechos humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstracto*. Madrid: Catarata.

Hierro, L. (2016). *Los derechos humanos. Una concepción de la justicia*. Madrid: Marcial Pons.

Höffe, O. (2011). "Pros y contras de una república mundial", *Isonomía*, 34, pp. 7-30.

Hunt, L. (2009). *La invención de los derechos humanos*. Trad. Jordi Beltrán. Barcelona: Tusquets.

Ignatieff, M. (2003). *Los Derechos Humanos como política e idolatría*. Trad. Francisco Beltrán Adell. Barcelona: Paidós.

Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Trad. Mª Luisa Rodríguez Tapia. Barcelona: Tusquets.

Kant, I. (2005 [1797]). *La Metafísica de las Costumbres*. Trads. Adela Cortina y Jesús Conill. Madrid: Tecnos.

Kant, I. (1985 [1795]). *La paz perpetua*. Trad. Joaquín Abellán. Madrid: Tecnos.

Lefort, C. (2007). "La idea de humanidad y el proyecto de paz universal". En Id., *El arte de escribir y lo político*. Trad. Esteban Molina. Barcelona: Herder.

Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). *Cómo mueren las democracias*. Trad. Gemma Deza Guil. Barcelona: Ariel.

Lucena Cid, I.V. (2006). "Los nuevos espacios de la ciudadanía", *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 2, pp. 247-260.

Marshall, T.H. (1998). *Ciudadanía y clase social*. Trad. Pepa Linares. Madrid: Alianza Editorial.

Mesa León, A. (2024). "La idea de una constitución global en el pensamiento de Alexandre Kojève". En D. Sánchez Rubio, Á. Sánchez Bravo y J.I. Delgado Rojas (eds.), *Poderes, Constitución y Derecho*. Madrid: Dykinson.

Muguerza, J. (1996). "Los peldaños del cosmopolitismo". En R.R. Aramayo, J. Muguerza y C. Roldán (eds.), *La paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua de Kant*. Madrid: Tecnos.

Muguerza, J. (2002). "Ciudadanía: individuo y comunidad. Una aproximación desde la ética pública". En J. Rubio Carracedo, J.M. Rosales y M. Toscano (dirs.), *Retos pendientes en ética y política*. Madrid: Trotta.

Muguerza, J. (2007). *La aventura de la moralidad (paradigmas, fronteras y problemas de la ética)*. Madrid: Alianza Editorial.

Nussbaum, M. (2020). *La tradición cosmopolita. Un noble e imperfecto ideal*. Trad. Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós.

Ortiz Gala, I. (2024). *El mito de la ciudadanía*. Barcelona: Herder.

Peces-Barba, G. (1995). *Curso de derechos fundamentales. Teoría general*. Madrid: Universidad Carlos III y BOE.

Pérez Luño, A.E. (2000). "La universalidad de los derechos humanos". En R. Soriano, C. Alarcón y J. Mora (dirs.), *Diccionario crítico de los derechos humanos*. Huelva: Universidad Internacional de Andalucía.

Pettit, P. (2009). "De la República a la Democracia", *Revista Internacional de Pensamiento Político*, 4, pp. 47-68.

Pettit, P. (1997). *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: Clarendon Press.

Pogge, T. (1992). "Cosmopolitanism and Sovereignty", *Ethics*, 103, pp. 48-75.

Ralws, J. (2001). *El derecho de gentes y "una revisión de la idea de razón pública"*. Trad. Hernando Valencia Villa. Barcelona: Paidós.

Rousseau, J.J. (1969 [1762]). *Contrato Social*. Trad. Fernando de los Ríos. Madrid: Espasa Calpe.

Sánchez Rubio, D. y Cruz Zúñiga, P. (2024). "Sobre paradigmas de conocimiento, poderes y teorías críticas del Derecho". En D. Sánchez Rubio, Á. Sánchez Bravo y J.I. Delgado Rojas (eds.), *Poderes, Constitución y Derecho*. Madrid: Dykinson.

Sánchez Rubio, D. (2011). *Encantos y desencantos de los derechos humanos. De emancipaciones, liberaciones y dominaciones*. Barcelona: Icaria.

Shklar, J. (2021). "Ciudadanía americana: la búsqueda de la inclusión", trad. Paloma de la Nuez, *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 21, pp. 357-391.

Soriano Díaz, R.L. (2012). "La democracia armónica: la conjunción equilibrada de los modelos democráticos", *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 46, pp. 135-154.

Turégano, I. (2010). *Justicia global: los límites del constitucionalismo*. Lima: Palestra.

Vázquez, R. (2001). *Liberalismo, Estado de derecho y minorías*. México: Paidós.

Velasco, J.C. (2016). *El azar de las fronteras*. México: Fondo de Cultura Económica.

Vitale, E. (2006). *Ius migrandi. Figuras de errantes a este lado de la Cosmópolis*. Trads. Piero Dal Bon e Isabel Fernández Giua. Tenerife: Melusina.

Walzer, M. (2010). *Pensar políticamente*. Trad. Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós.

Wolkmer, A.C. (2023). *Ensayos de Teoría del Derecho y Filosofía Política. Dimensión material e ideológica*. Madrid: Dykinson.

Zagrebelsky, G. (2010). *Contra la ética de la verdad*. Trad. Álvaro Núñez. Madrid: Trotta.

Zolo, D. (1999). "La strategia della cittadinanza". En Id. (ed.), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*. Roma-Bari: Laterza.

LAS VICISITUDES DEL DERECHO HUMANO A LA PAZ. INFORME DE UN PROCESO DE CODIFICACIÓN INACABADO

THE VICISSITUDES OF THE HUMAN RIGHT TO PEACE. REPORT OF AN UNFINISHED CODIFICATION PROCESS

Francisco Javier Gil Martín
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
javiergil@uniovi.es

David Sánchez Piñeiro
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
sanchezpdavid@uniovi.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Derechos humanos, justicia, paz, solidaridad, violencia
Keywords: Human rights, peace, justice, solidarity, violence

Resumen: En este artículo revisamos la conversión de la paz en una categoría de derechos humanos durante las últimas décadas desde tres perspectivas: 1) el proceso dual de codificación en el que destacaron la participación de organizaciones de la sociedad civil y las iniciativas de actores no estatales, 2) el estatuto del derecho a la paz dentro de los derechos humanos de tercera generación y en relación con la concepción de la paz positiva y 3) las implicaciones políticas derivadas de exigir la responsabilidad de los Estados y la promoción de la justicia social a nivel global. Concluimos que el resultado de esa juridificación hasta la fecha, la Declaración sobre el Derecho a la Paz, es probablemente un logro provisional en un proceso de aprendizaje colectivo de mayor alcance.

Abstract: In this article we review the conversion of peace into a human rights category over the last decades considering three perspectives: 1) the two-track codification process in which the participation of civil society organisations and non-state actors' initiatives were prominent, 2) the status of the right to peace within third-generation human rights and in relation to the conception of positive peace, and 3) some political implications derived from demanding the accountability of states and the promotion of social justice at the global level.

We conclude that the ultimate outcome of this juridification process to date, the Declaration on the Right to Peace, is probably an interim achievement in a larger collective learning process.

1. Introducción[1]

En la Carta de las Naciones Unidas y en la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos, la protección y la implementación de los derechos humanos en todo el mundo se vincularon directamente al objetivo general de asegurar la paz. Sin embargo, la traslación del valor de la paz hasta la categoría legal de un derecho humano sólo ha recibido contornos definidos durante las últimas décadas. La culminación de esa revalorización jurídica fue un proceso de codificación que asumió oficialmente en 2010 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual puso en perspectiva la expectativa de la aprobación en el año 2015 de la Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, si bien tal Declaración se llevó finalmente a efecto un año después con un drástico recorte de lo que habían sido hasta entonces los articulados de los borradores previos.

Tras un primer apartado destinado a recordar los principales precedentes del proceso mencionado, en este artículo consideramos tres aspectos del mismo que reflejan algunas de las fortalezas y de las ambivalencias que comporta la apuesta contemporánea por la juridificación de la paz. El primero de esos aspectos tiene un carácter más histórico y atañe al proceso de codificación, el segundo de ellos tiene un carácter más conceptual y se centra en el estatuto normativo del derecho humano a la paz (en adelante: DHP) y el tercero se aproxima a algunas implicaciones políticas consustanciales a dicho proceso de juridificación. En primer lugar, recordaremos que los principales promotores del reconocimiento del DHP procedieron en su mayor parte de organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas de actores no estatales, las cuales fueron de todo punto cruciales para que se pusiera en marcha y encarrilara el proceso de codificación oficial, que fue liderado por las Naciones Unidas. En segundo lugar, destacaremos que las series -privadas y oficiales- de los borradores de las declaraciones del DHP mantuvieron que este derecho pertenece a la tercera generación de derechos humanos y que descansa en una concepción comprehensiva de la paz positiva que se interrelaciona con el conjunto de los derechos humanos y que establece, en particular, una estrecha codependencia o implicación mutua con el derecho a la seguridad humana y al desarrollo humano. En tercer lugar, el reconocimiento del DHP presupone un complejo proceso legislativo internacional en torno a los derechos humanos y, de haberse

1 Javier Gil desea hacer constar el apoyo del proyecto "Reproducción Biológica, Reproducción Social y Esfera Pública" (PID2020-115079RB-I00) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y el Grupo de investigación de Bioética y Éticas Aplicadas de la Universidad de Oviedo. David Sánchez Piñeiro hace lo propio con el Programa de fomento de la investigación y la docencia del Principado de Asturias "Severo Ochoa" (PA-20-PF-BP20-025).

llevado a efecto en las versiones más ambiciosas de los borradores que se llegaron a proponer por el Comité Asesor dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hubiera puesto en perspectiva una concepción transformadora de la política en el nivel internacional, toda vez que los Estados firmantes se habrían comprometido a ser los principales responsables de hacer valer dicho derecho, tanto a título individual como en tanto que colectivo de actores, y se hubiera requerido de ellos medidas efectivas de desarme y la promoción de la justicia social también en el nivel global. Concluimos el artículo declarando nuestra sospecha de que el proceso de codificación que se ha saldado con la Declaración oficial parece haberse cerrado en falso y que, en todo caso, no es irrazonable esperar que se promuevan en el futuro iniciativas que reincidirán en la búsqueda de desarrollos del contenido del DHP que vayan más allá de su estado actual.

2. Precedentes

El valor de la paz internacional fue un elemento central de los principios básicos de las Naciones Unidas, y lo fue también en las reformas constitucionales que apuntalaron las transiciones a la democracia de dos sociedades que protagonizaron y estuvieron inmersas en la guerra más devastadora conocida hasta la fecha. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 estableció en el tercer y cuarto párrafos del artículo 2 la prohibición de la amenaza y el uso de la guerra en las relaciones internacionales y la obligación de solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos. Siguiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos abría su Preámbulo con la afirmación de que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Dos décadas más tarde, ese mismo enunciado, que establece la conexión entre la noción de dignidad humana y la concepción jurídica de los derechos humanos, pero también la interrelación de los tres objetivos fundamentales (de la paz, la justicia y la libertad), fue reiterado en los preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos tratados aprobados en 1966 que entraron en vigor en 1976. Por otro lado, tras la Segunda Guerra Mundial y pocos años después de la conmoción provocada por los Procesos de Núremberg, el artículo primero de la *Grundgesetz*, aprobada en 1949, estableció que "el pueblo alemán reconoce los inviolables e inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo". Y la Constitución japonesa promulgada en 1947, a la que se dio en llamar la Constitución de la Paz, consagró en su célebre artículo noveno la proscripción de la guerra y la renuncia al armamento militar.

Los defensores del DHP lo han presentado como un derecho profundamente enraizado en los instrumentos del derecho internacional universalmente aceptados a los que antes nos hemos referido (Alston, 1980: 319-329; Hayden, 2002: 147-162; Roche, 2003), a saber: la Carta de las Naciones Unidas y el denominado Pacto Internacional de Derechos Humanos. No obstante ese anclaje normativo, fue durante décadas un derecho olvidado,

toda vez que se mantuvo en estado de hibernación durante la Guerra fría y no fue reconocido por el derecho internacional ni por la cultura jurídica y política de la inmensa mayoría de los países firmantes de los citados tratados. Con todo, durante la segunda mitad del siglo XX diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos fueron contribuyendo a la progresiva delimitación jurídica del contenido y alcance del DHP. Conviene referirse brevemente al menos a tres destacadas declaraciones sobre la paz adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el último tercio del siglo: la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz, de 1978; la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, de 1984, y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, de 1999.

Mientras que el primero de esos documentos reconocía que la "paz entre las naciones es el valor supremo de la humanidad" y reafirmaba "el derecho de las personas, los Estados y toda la humanidad a vivir en paz", la sucinta declaración de 1984, adoptada por Resolución 38/11 de la Asamblea General de la ONU, proclamaba "el derecho sagrado a la paz" tan solo como un derecho colectivo, esto es, como el derecho de "los pueblos de nuestro planeta" a la paz. Con todo, en ambos documentos se les pide a los Estados que se atengan a las provisiones de la Carta de las Naciones Unidas en torno a la resolución pacífica de las disputas entre Estados, entendidas como el núcleo del sistema internacional de seguridad colectiva, y en la de 1984 se considera que es una obligación de cada Estado cumplir e implementar el derecho a la paz. Hacia el final de la década de los años noventa, el Director General de la UNESCO promovió dos propuestas de codificar el estatuto de la paz como un derecho humano, a la que él caracterizó como "premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos" (Mayor Zaragoza, 1997). Aunque los borradores de ambas declaraciones fueron rechazados en sendas conferencias intergubernamentales de la UNESCO que tuvieron lugar en 1997 y 1998, hubo al menos un acuerdo mínimo entre los Estados acerca de que la paz debía ser considerada una aspiración humana y un valor moral universal, e incluso un bien común de la humanidad. Como resultado de tales esfuerzos, la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identificó una concepción compleja de la paz, delimitada mediante ocho áreas de acción interconectadas: (i) la cultura de la paz mediante la educación, (ii) el desarrollo social y económico sostenible, (iii) el respeto de los derechos humanos, (iv) la igualdad entre hombres y mujeres, (v) la participación democrática, (vi) el entendimiento, la tolerancia y la solidaridad, (vii) la comunicación participativa y el libre flujo de información y de conocimiento y, finalmente, (viii) la paz y la seguridad internacional. Tal como lo formuló quien era entonces el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, mediante la interrelación de esas áreas de acción se creaba de manera innovadora un "vínculo establecido a través de la cultura de paz y no violencia para forjar un único concepto coherente" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000: 2). Visto retrospectivamente, ese planteamiento sobre los contenidos identificados por dichas áreas de acción y por su composición dentro de una concepción compleja y coherente de la paz preparó el camino para los posteriores in-

tentos de traducir el valor humano de la paz en un derecho humano universal.

Cabe mencionar que también existen documentos relevantes en el plano regional. El derecho de los pueblos a la paz fue reconocido en el artículo 23.1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en 1981. Esta innovación en el ámbito del derecho internacional de la también llamada Carta de Banjul se combina con la promulgación, con carácter vinculante y con la pretensión de que sean efectivamente aplicables, de otros derechos emergentes, como el derecho a un medio ambiente limpio o el derecho a la democracia. Por otro lado, el artículo 38 de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), de 2012, sostiene por su parte que las personas y los pueblos tienen derecho a disfrutar de la paz dentro de un marco de seguridad, estabilidad, neutralidad y libertad promovido por la ASEAN.

También en el plano nacional existen declaraciones explícitas sobre el derecho a la paz. Hemos mencionado el caso de la Constitución japonesa, que en su preámbulo reconocía que "todos los pueblos del mundo tienen el derecho a vivir en paz, libres del miedo y de la miseria". También la Constitución de Costa Rica de 1948 codifica en su artículo 12 la abolición del ejército y la Asamblea legislativa decretó en 2014 la proclamación de la paz como derecho humano. Como en el caso de Japón, se trata de un derecho dirigido a la violencia interestatal, que impone la obligación al propio país de abstenerse de promover la guerra y la violencia. Con todo, quizás el caso más llamativo sea la Constitución colombiana de 1991, surgida como una suerte de tratado de paz para poner fin a un conflicto de décadas, cuyo artículo 22 establece que "la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". En 1993, el Tribunal Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la paz "como un derecho que pertenece a todas las personas" y que les otorga el poder de exigir el cumplimiento tanto del Estado como de otras personas. Posteriormente, su relevancia pasó a primer plano con el denominado "proceso de paz", las negociaciones y el debate público que condujeron al acuerdo de paz en Colombia (Laplante, 2019).

3. Un proceso de codificación de dos niveles

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, académicos, activistas, líderes políticos y otras partes interesadas dentro y fuera de la comunidad de los derechos humanos sostuvieron que el derecho a la paz debía ser reconocido como un derecho autónomo y recibir una codificación legal consensuada. Sin embargo, la conversión de la paz en la categoría legal de un derecho humano específico sólo logró adquirir unos perfiles más definidos recientemente, entrados ya en el siglo XXI. Después del aparente callejón sin salida al que abocaron los esfuerzos del Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, la Asamblea General de la ONU decidió en 2005 reconsiderar si era pertinente retomar la promoción del derecho de los pueblos a la paz. Al proceso de juridificación que entonces se puso en marcha a instancias de las Naciones Unidas también contribuyeron otras organizaciones dedicadas al establecimiento de la paz, tales como organizaciones intergubernamentales, regionales y no gu-

bernamentales, asociaciones de adscripción religiosa, etc. Como señalara Douglas Roche, los defensores punteros del reconocimiento del DHP y los que mostraron mayor visión de futuro respecto al mismo se reclutaron desde las organizaciones de la sociedad civil y a través de las iniciativas de actores no estatales (Roche, 2003). Y fueron organizaciones de la sociedad civil las que se convirtieron en agentes cuya intervención resultó indispensable tanto para la puesta en marcha del proceso oficial como para los esfuerzos concertados de llevarlo adelante. A este respecto cabe mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que fue adoptada en el Foro Universal de las Culturas que tuvo lugar en Monterrey en 2007 y en la que la paz era descrita como un valor universal y al mismo tiempo proclamada como un derecho a un tiempo individual y colectivo (Saura Estapà, 2011: 59-60).

Entre las contribuciones que resultaron decisivas en las tareas de expandir la conciencia global de la existencia y relevancia del DHP y de fomentar la formulación legal del mismo se cuentan las iniciativas promovidas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fundada en 2004, en un momento en que la sociedad española se movilizaba en contra de la invasión armada de Irak, esta organización promovió primero lo que llegaría a ser el documento de referencia para el proceso subsiguiente, la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, adoptada en 2006 por un comité de expertos independientes. Después de eso, llevó a cabo una campaña mundial a favor del reconocimiento internacional del DHP entre los años 2007 y 2010. Como consecuencia de esta campaña, el contenido y la estructura de la Declaración de Luarca se sometieron a revisiones y fueron objeto de sucesivas mejoras a través de una serie de encuentros y declaraciones que se fijaron un doble fin: primero, ofrecer una codificación privada de la declaración universal del DHP, entendiendo por privada una propuesta que ciertamente fue pública a todos los efectos, pero que no fue la codificación avalada por la ONU, sino una promovida y apoyada por organizaciones de la sociedad civil en la arena internacional; y, segundo, introducir dicha codificación privada dentro de la agenda oficial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que había sido creado por la Asamblea General en 2006 en sustitución de la anterior Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa campaña culmina en diciembre del año 2010, cuando las organizaciones de la sociedad civil mundial que se dieron cita en Santiago de Compostela en el Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz adoptaron la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, que fue la que logró tener a la postre una mayor influencia sobre la posterior promoción del derecho a la paz (Villán 2014 y 2020)[2].

El proceso de codificación oficial fue emprendido desde entonces por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por su Comité Asesor. En tanto que un cuerpo dependiente de las Naciones Unidas con la competencia de reco-

2 La secuencia de declaraciones, así como otros documentos y publicaciones de este movimiento global, están disponibles en el archivo documental alojado en el sitio web de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: http://aedidh.org/es/archivo-documental/ (Última consulta, 17 de marzo de 2024).

mendar a la Asamblea General el desarrollo del derecho internacional en el ámbito de los derechos humanos, el Consejo solicitó a su Comité Asesor que preparara el borrador de una declaración del DHP, como consta en la resolución A/HRC/RES/14/3, que fue adoptada por 31 votos a favor, 14 votos en contra y 1 abstención (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2010). En 2011, el Comité Asesor discutió en su séptima sesión un primer borrador y, al año siguiente, se presentó y discutió un borrador revisado en su octava reunión[3]. Es a partir de ese momento cuando el Consejo de Derechos Humanos decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental con la encomienda de "negociar progresivamente un borrador de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, sobre la base del borrador presentado por el Comité Asesor y sin prejuzgar posibles opiniones y propuestas pertinentes presentes, pasadas o futuras". Así se pronunció en la resolución A/HRC/RES/20/15, de 17 de julio de 2012, que fue adoptada por 34 votos a favor, con la abstención de la India y de once Estados europeos y con un único voto en contra, el de los Estados Unidos (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012b). Posteriormente, el grupo de trabajo intergubernamental dependiente del Comité Asesor expuso sus conclusiones en tres sesiones sucesivas que tuvieron lugar en 2013, 2014 y 2015. En dichas reuniones, el borrador de la declaración de 2012 fue objeto de intensas discusiones una vez que se hubieron llevado a cabo las pertinentes consultas previas con los actores directamente implicados en el proceso: los representantes de los Estados, los de los Estados observadores, las organizaciones intergubernamentales, las no gubernamentales y otras partes interesadas[4].

Los trabajos de la codificación oficial deberían haber concluido en 2015 y haber dado paso en ese mismo año a la aprobación de la Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el resultado de las consultas que abocaron a la tercera sesión, la que tuvo lugar en julio de 2015, agudizaron más si cabe las profundas controversias y divisiones entre las partes implicadas[5]. Algunos Estados reiteraron su desacuerdo respecto al proceso de codificación internacional del derecho emergente. Varias delegaciones declararon que el derecho a la paz no es un derecho en sí mismo y que no hay una base legal para su reconocimiento. En particular, durante las discusiones del proyecto de declaración, los delegados de los Estados Unidos y de la Unión Europea prefirieron rediri-

3 Véase los documentos A/HRC/17/39 y A/HRC/20/31 (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011 y 2012a). El citado borrador de la declaración presentado en 2012 (A/HRC/20/31), al que nos referiremos a menudo en el resto de este artículo, incorporó casi la totalidad de las normas propuestas por la Declaración de Santiago (Villán y Faleh, 2013).

4 Véase el informe de las primeras de esas sesiones del grupo de trabajo intergubernamental (A/HRC/WG.13/1/2) y la consiguiente resolución (A/HRC/RES/23/16), que fue adoptada por 30 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones, así como la resolución (A/HRC/RES/27/17), adoptada por 33 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2013a, 2013b y 2014).

5 Para cuanto se comenta en adelante, véase la documentación alojada en https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/thirdsession.aspx [Última consulta, 17 de marzo de 2024].

gir el debate hacia los vínculos entre los tres pilares de las Naciones Unidas —la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos— siguiendo el enfoque propuesto por el nuevo Presidente-relator (Guillermet Fernández, 2017: 383-406). En contraste con ello, un número considerable de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo demandaron que el Grupo de Trabajo tomara en consideración los trabajos realizados durante años conjuntamente por el Comité Asesor y la sociedad civil, y los resultados de la citada Declaración de Santiago de 2010 y la Declaración adoptada por el Comité Asesor en 2012; e instaron a centrar los debates en el derecho emergente como un derecho independiente, con un contenido sólidamente basado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin negar por ello que las conexiones entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos debían ser tenidas en cuenta en la futura declaración.

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos adoptó en octubre de 2015 la resolución Promoción del Derecho a la Paz (A/HRC/RES/30/12), en la que instaba al grupo de trabajo a concluir en breve la Declaración sobre el derecho a la paz (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2015); aprobó en 2016 dicha Declaración por mayoría de los Estados miembros (el resultado fue de 34 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones) en la resolución A/HRC/RES/32/28 (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2016); y, para concluir el proceso, la propuso después a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la ratificó el 19 de diciembre de 2016, publicándose el documento oficial (A/RES/71/189) el 2 de febrero de 2017 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Mientras que la corta Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, de 1984, cosechó un amplio acuerdo de la comunidad internacional, los intentos posteriores -tanto los emprendidos a finales de los años noventa como el último, concluido por el grupo de trabajo intergubernamental- distaron de lograr un resultado similar. Además, la reciente tentativa institucional de codificación ha resultado un proceso en parte fallido también en otro sentido. Después de un extenso preámbulo, la Declaración de 2016 consta de solo cinco escuetos artículos, en llamativo contraste con los catorce que detallaba el borrador de 2012, y, como vamos a tratar de trasladar en los siguientes apartados, transmite un contenido altamente devaluado con respecto a las ambiciosas exigencias que incorporaba aquel precedente.

4. Paz positiva y derechos de solidaridad

Las series de borradores de las declaraciones, tanto por la vía privada como por la vía oficial, ratificaron que el DHP debe entenderse al mismo tiempo como un derecho fundamental de todo ser humano y como una precondición para el ejercicio del resto de los derechos humanos. Confirmaron igualmente que el DHP pertenece a los derechos humanos de la tercera generación, entre los cuales se cuentan el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable o el derecho a la asistencia humanitaria. Ahora bien, esos resultados provisionales estuvieron sujetos a profundas controversias y no se alcanzaron sin abultados desacuerdos, tal como reflejan las votaciones de las distintas resoluciones. La falta de consenso en los distintos hitos del proce-

so codificador refleja que éste fue el escenario de un choque entre interpretaciones encontradas de los derechos humanos y de la misma concepción de la paz a proteger. En este apartado revisaremos primero la cuestión de la delimitación conceptual del DHP y, a continuación, el compromiso que se asume en el mismo con una concepción de la paz positiva. En ambos casos pasa a primer plano la involucración de un conjunto sustancial de derechos sociales, culturales y económicos. Para ello, nos atendremos sobre todo a la Declaración de Santiago y al borrador de la declaración presentada por el Comité Asesor y aprobada en 2012, pero finalmente arrumbada. En un último subapartado nos referimos brevemente al cambio significativo con que se salda la Declaración de 2016, la única que en sentido estricto goza de relevancia jurídica.

4.1. El derecho a la paz en el contexto de los derechos de solidaridad

Los citados borradores se apoyaban y desplegaban una interpretación expansiva y progresista de los derechos humanos. Trataban así de superar una ambigüedad en relación con los derechos humanos económicos, sociales y culturales que no había hecho sino intensificarse con los derechos grupales relativos a colectivos (mujeres, niños, pueblos indígenas, minorías, discapacitados) y con los conocidos como derechos humanos de solidaridad o de tercera generación (Alston, 1980: 319-329; Vasak, 1984: 837-850). La conocida bifurcación tradicional dentro del derecho internacional y en los ámbitos de las relaciones internacionales, consolidada a más tardar en los dos Pactos Internacionales de 1966, ha sancionado a menudo la concepción de que esos otros derechos humanos deben contemplarse más bien como aspiraciones u objetivos valiosos susceptibles de una implantación progresiva que como derechos en sentido estricto, incontrovertibles, exigibles y de inmediato cumplimiento; y de que conviene situarlos en una jerarquía escalonada que estaría encabezada por los clásicos derechos civiles y políticos. En contraste con esta visión dicotómica y jerarquizadora, se ha argumentado que aquellos derechos son en realidad indispensables para la efectiva validez y la adecuada realización de estos últimos, que el reconocimiento de aquellos redunda decisivamente en la fertilidad de éstos y que, en cambio, la ausencia o la laminación de aquéllos resultan corrosivas sobre las condiciones en las que pueden ejercerse estos derechos civiles y políticos.

Los trabajos en pro de la declaración del DHP parecían asumir tales argumentos y reconocer que tanto la segunda como la tercera generación de los derechos humanos no están clasificadas en un orden lexicográfico que les concede de manera sistemática una menor prioridad en vista sobre todo a su aplicación, sino que están más bien a la par de los derechos civiles y políticos a todos los efectos (Woods, 2013: 178-236). Los implicados en la declaración de los DHP se oponían, por tanto, a la interpretación de que, en las sucesivas hornadas y sobre todo con los nuevos derechos emergentes, asistimos a un proceso de inflación que se salda con una devaluación del conjunto de los derechos humanos. Por otra parte, para los partidarios de la declaración del DHP no se trataba tampoco

de contribuir con ella a la idea de que existe una especie de remplazo sucesivo entre los catálogos de derechos humanos o de establecer una especie de progreso lineal que va desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos de solidaridad, pasando por los derechos económicos, sociales y culturales. Antes bien, lo que tenemos en las citadas resoluciones sería, según ellos, una serie de conjuntos interconectados de reclamaciones jurídicas que se complementan y refuerzan mutuamente y que han aparecido o están siendo redefinidas en respuesta a nuevas necesidades, desafíos, contextos y circunstancias (Freedman y Lottholz, 2017: 37-57).

La última generación se acompaña de una variedad de rasgos distintivos. El DHP comparte con otros derechos de solidaridad una dimensión internacionalizadora que los vincula con el derecho a un orden social e internacional que quedó proclamado en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos". Ciertamente, todos esos derechos de solidaridad responden a problemas y desafíos que hay que situar en una escala global y que precisan en consecuencia de la cooperación entre los Estados y otros muchos actores tanto en el plano nacional como en el internacional. Además, tienen un carácter dual, en el sentido de que son derechos a un tiempo individuales y colectivos. En consecuencia, los portadores del DHP son tanto los colectivos como los individuos. Al igual que el derecho al desarrollo, con el que está internamente emparentado, el DHP es un derecho instrumental y a la vez un derecho de síntesis. Es un derecho humano con un carácter capacitador y un requisito para el disfrute de otros derechos humanos. Y, al mismo tiempo, está tan interconectado con el resto de los derechos humanos que la garantía para su efectiva realización depende por su parte de esos otros derechos. En otras palabras, el DHP está entrelazado con el conjunto de los derechos humanos y compone con ellos un todo integrado y coherente caracterizado por interrelaciones de implicación y refuerzo mutuos. Según esta interdependencia en el sistema de derechos humanos, el DHP proporciona fundamentos para el resto de los derechos en un sentido análogo al que Wittgenstein se refería al señalar que "casi podría decirse que estos muros de cimentación (*foundation walls*) son sostenidos por la casa entera" (Wittgenstein, 1972: §248).

Consecuentemente, el contenido legal del DHP no se extiende únicamente a los derechos civiles y políticos reconocidos internacionalmente, incluidos derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica o a no ser sometido a actos de tortura, así como aquellos que remiten a la libertad de pensamiento, de creencias, de opinión y de expresión, y a la participación en la política y en la sociedad civil. La sustancia del DHP incorpora igualmente derechos humanos económicos, sociales y culturales, incluidos los relativos "a una alimentación adecuada, al agua potable, al saneamiento, a la vivienda, a la atención a la salud, a la vestimenta, a la educación, a la seguridad social y a la cultura" (como establecía el artículo 9 de la declaración presentada en el año 2012, a la que antes se hizo alusión). Además, el contenido del DHP comprehende derechos humanos de solidaridad, ante todo, el derecho

al desarrollo, pero también el derecho a la seguridad humana y a un entorno sano y seguro y el derecho al medio ambiente sostenible. De acuerdo con esta concepción comprehensiva, estaríamos ante una suerte de derecho paraguas bajo el que se arracima un conjunto muy amplio de derechos humanos, ante un derecho a los otros derechos que empaqueta e interrelaciona en términos holísticos derechos que, aunque de suyo discretos y autónomos, se interpretan como interdependientes.

4.2. La concepción positiva de la paz y su engarce con el desarrollo humano

A diferencia de la Declaración de 1984, que delimitaba la aspiración de los pueblos por la vía del compromiso común de evitar la violencia y por tanto concebía la paz en clave de un cese de las hostilidades en el ámbito las relaciones internacionales, el marco normativo del DHP desarrollado durante el proceso de codificación hasta el año 2015 descansa en una concepción comprehensiva de la paz que va mucho más allá de la ausencia de conflictos armados y que demanda tanto la eliminación de todos los tipos de violencia (sea directa, estructural o cultural) cuanto la promoción de las adecuadas condiciones económicas, sociales y culturales que han de disfrutar los ciudadanos para vivir en paz. Se supera, pues, la concepción tradicional de la paz como correlato inverso de la guerra. Una de las fuentes de esta concepción de la paz a la que tendrían derecho todas las personas ha sido el modelo tripartito con que Johan Galtung propuso analizar las situaciones de paz y conflicto, modelo que triangula entre los tres tipos de violencia. Esa concepción holista de la paz positiva, a la que se vincula la de una cultura de y para la paz, ha sido el elemento central a las series de proyectos de declaraciones que marcaron el proceso de codificación del DHP. Es importante señalar que el hecho de desprenderse de la estrecha asimilación de la paz con la *absentia belli* no significa subestimar las formas de violencia directa y armada que suelen ser el origen de continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y uno de los factores que más frecuentemente cercenan o bloquean el desarrollo en todas sus dimensiones, como tampoco supone ignorar que la erradicación de esas formas de violencia es un requisito sin el cual no es posible implementar el desarrollo social y económico ni realizar de manera adecuada los derechos humanos. Sin embargo, la superación del tradicional enfoque minimalista de la paz negativa se torna necesaria por varias razones.

En primer lugar, el que haya una situación de ausencia de guerra y de otras formas de violencia armada no excluye que surjan o pervivan diferentes tipos de violencia social, económica y cultural que son contrarios a los derechos humanos e incompatibles con los modos pacíficos de vida y de coexistencia. Es el caso de las modalidades de la violencia estructural que consiste, de acuerdo con la formulación de Johan Galtung, en el "impedimento evitable de las necesidades humanas fundamentales" (Galtung,1993: 106). En este sentido conviene traer a colación el artículo 2 de la declaración presentada en el año 2012, que sostiene que "deberán establecerse y reforzarse mecanismos para eliminar la desigualdad, la exclusión y la pobreza, ya que generan violencia estructural, que es incompatible con la paz".

Además, las formas persistentes y agudas de violencia estructural, incluidas aquellas que provienen del hambre y la extrema pobreza, así como formas predominantes de violencia cultural e incluso las condiciones de degradación medioambiental son mucho más que meros elementos contextuales que ayudan a explicar por qué pueden darse los conflictos armados o por qué han tenido lugar de hecho. Antes bien, esas otras formas de violencia pueden precipitar diferentes modalidades de violencia directa y organizada, así como estimularlas, provocarlas, alimentarlas o incluso legitimarlas. En suma, los patrones de violencia cultural y estructural no sólo han de ser consideradas entre las consecuencias previsibles de los conflictos armados, sino que han de contarse entre las causas posibles que precipitan o que subyacen potencialmente a esos conflictos. Consecuentemente, el borrador de la declaración presentada en 2012 se centraba no sólo en normas básicas que tienen que ver con la seguridad internacional, sino también en las normas aplicables a las áreas de la educación y formación para la paz, del desarrollo sostenible, de la protección medioambiental, de las víctimas y grupos vulnerables, y de los refugiados y emigrantes. Además, las normas relativas a la seguridad humana, al desarme, al control de las compañías militares y de seguridad privadas, o al mantenimiento de la paz estaban planteadas de tal forma en la citada declaración que se orientaban hacia el mismo objetivo de eliminar todas las formas de violencia directa e indirecta.

Es evidente que, una vez aceptado que la abolición de los conflictos armados no debería desacoplarse de la eliminación de las raíces culturales y estructurales de la violencia, pasa a primer plano el vínculo interno entre la paz positiva y el paradigma del desarrollo humano y la seguridad humana. El artículo que el borrador de la declaración de 2012 dedica a "Seguridad humana" respalda la doctrina que ha mantenido las Naciones Unidas al respecto desde su Informe de 1994 sobre el desarrollo humano:

> Toda persona tiene derecho a la seguridad humana, el cual comprende la liberación del temor y de la miseria (*freedom from fear and from want*), que es una condición imprescindible para la existencia de una paz positiva […]. La libertad de vivir sin miseria implica el disfrute del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales.

El artículo que el borrador de la declaración de 2012 dedica al "Derecho al desarrollo humano" subraya una vez más el nexo de la paz positiva con la mencionada codependencia de la ausencia del miedo y de la necesidad:

> Los Estados deberán buscar la paz, la seguridad y el desarrollo, en tanto que elementos que están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente, de modo que sirvan de base unos a otros.

Dicha implicación mutua supone igualmente el reconocimiento de que el subdesarrollo conducirá en numerosos lugares al conflicto y al fracaso de la seguridad, y viceversa. La aspiración de llegar a liberarse de las necesidades y las amenazas a la supervivencia humana comporta por su parte atender a las cuestiones de justicia social y económica. En último término no es posible disminuir la incidencia de los conflictos armados sin erradicar los patrones de violencia estructural y las desigualdades sociales y económicas.

4.3. Un final de partida

El grupo de trabajo encargado de terminar de redactar el texto de la Declaración de 2016 y en particular su Presidente-relator, el costarricense Christian Guillermet-Fernández, sacrificaron numerosos aspectos contenciosos de los borradores previos sin visos de acuerdo dados los tenaces posicionamientos de las partes. El objetivo era lograr el mayor apoyo posible entre los Estados miembros para un documento de mínimos. El resultado fue una Declaración que evita en su propio título hablar de un derecho *humano* a la paz y que consta de cinco artículos esquemáticos tras un largo preámbulo que contempla un conjunto de amplias obligaciones y que combina elementos negativos y positivos de la concepción de la paz (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). Los cinco artículos están formulados en términos muy generales que toleran interpretaciones diversas e incluso discrepantes (Bailliet, 2021). Por ejemplo, el primero ("Toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo") admite tanto una lectura a favor de un derecho negativo e individual de no interferencia cuanto la lectura de que los Estados contraen la obligación positiva de garantizar que las personas se beneficien de la condición de vivir en paz. Esta segunda interpretación concuerda con el enunciado del segundo artículo: "Los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el estado de derecho, y garantizar la liberación del temor y de la miseria, como medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas". Por su parte, el artículo tercero se refiere al marco transnacional desde el que se han de adoptar las medidas para hacer efectiva la aplicación institucional de la Declaración y "alienta a las organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales y a la sociedad civil a que presten apoyo y asistencia para la aplicación de la presente Declaración". El artículo cuarto reclama la promoción de "instituciones nacionales e internacionales de educación para la paz con objeto de fortalecer el espíritu de tolerancia, diálogo, cooperación y solidaridad entre todos los seres humanos" y, tras esa anotación universalista y bienintencionada, aterriza en la mención de las actividades bien concretas de docencia, investigación y difusión de la Universidad para la Paz, afincada en Costa Rica y orientada de manera expresa a la formación de líderes. El último artículo reitera la idea adelantada en el preámbulo de que las disposiciones de la Declaración deben leerse "en consonancia con la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales pertinentes ratificados por los Estados" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

Al vincular el disfrute de la paz por parte de "toda persona" con la protección de "todos los derechos humanos", el artículo 1 parece remitir a la centralidad normativa que el preámbulo asigna a la dignidad humana. El artículo 2 afirma que la articulación de la paz mediante un marco social, económico, jurídico y político complejo es un objetivo colectivo que los Estados tienen la obligación de perseguir. Importa destacar que esos dos primeros artículos se vinculan a la declaración expresa que el preámbulo comparte con los borradores previos de que "la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de

las Naciones Unidas y la base de la seguridad y el bienestar colectivos", además de estar interrelacionados y reforzarse mutuamente (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017).

5. Desafíos políticos globales

Las declaraciones —formales e informales— del DHP pueden verse como un trayecto político por un complicado itinerario en el que se suceden los encuentros multilaterales en búsqueda de consensos a la postre fallidos. El proceso juridificador es político en su conjunto porque lo que se pretendía era alcanzar un amplio acuerdo en la escala internacional en torno a una declaración que reflejase una concepción compartida sobre la paz. Es político, por tanto, porque se ha regulado como un procedimiento para la generación de la norma con participación de todas las partes implicadas, que han hecho oír su voz públicamente y tomado parte –en algunos casos, coaligándose- en las deliberaciones, las prácticas de negociación y las votaciones dentro de los organismos internacionales habilitados de los derechos humanos. De hecho, órganos de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos se han constituido en foros en los que las agrupaciones regionales de Estados generan un espacio de negociación de nuevas normas. La juridificación de la paz es un proceso político también porque se constanta, de manera transversal, un choque entre ideologías de los derechos humanos, siendo los borradores, más ambiciosos, apoyados principalmente por Estados del Sur Global partidarios de una hibridación en los derechos de tercera generación, hibridez que implica, como dijimos, la inclusión de una amplia gama de derechos, en tensión con la austera interpretación liberal de los derechos humanos identificables y exigibles, defendida mayoritariamente por los Estados del Norte Global (Freedman y Lottholz, 2017). Y es político, en fin, porque con la aprobación de la Declaración se dirimía si, además de ratificar la aceptación del valor moral de la paz y de consolidar la existencia y la validez de un derecho de derechos, se respaldaba de suyo una concepción de la paz como un exigente ideal político.

En las versiones desestimadas de los borradores, las implicaciones políticas que comportaría la aceptación internacional del derecho a la paz ponían en perspectiva una transformación de largo alcance en el orden de la gobernanza global. A este respecto, nos limitaremos a dos cuestiones dignas de ser tenidas en cuenta, aunque sea brevemente. Los comentarios a los distintos borradores oficiales de la declaración del DHP por parte de las organizaciones de la sociedad civil implicadas subrayaron una y otra vez que, en dicha declaración, los Estados son designados como los principales responsables de hacer valer dicho derecho, tanto a título individual como en tanto que colectivo de actores, y que en ella se expresa igualmente el requerimiento de que ellos asuman la promoción de la justicia social también en el nivel global.

5.1. Los Estados valedores

No deja de tener interés que el borrador de la declaración aprobada en 2012 y luego abandonada sólo reconociera a los individuos y a los pueblos como los titulares del DHP. Este reconocimiento le distanciaba de la Declaración de Santiago, la cual contemplaba además a los grupos y

al conjunto de la humanidad como portadores del derecho. Con todo, las series de borradores con vistas a la declaración oficial sí que se atenían, al menos en parte, a lo estipulado por la Declaración de Santiago cuando diferenciaban entre dichos titulares de los derechos y los principales responsables de hacer valer el DHP y cuando seguían identificando en estos últimos a los Estados, ya sea por separado, conjuntamente o como parte de organizaciones multilaterales. En consonancia con lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas y con la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos, así como con la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984, los Estados tienen la obligación de usar medios pacíficos para dirimir las disputas y de renunciar al uso de la fuerza y a la amenaza del mismo en las relaciones internacionales. Esta sujeción de los Estados a los derechos humanos podría implicar el abandono del paradigma tradicional centrado en la soberanía y la seguridad de los Estados a título individual y en sus relaciones interestatales y geopolíticas (Hayden, 2004: 35-55). Del criterio prevalente del monopolio de la violencia por parte de esos Estados se pasa a la exigencia de que los Estados se abstengan de emplear la violencia y se comprometan en acciones a favor de la eliminación de los conflictos. Además, se requiere de los Estados que protejan activamente a los individuos y a los pueblos de (las amenazas de) la violencia y que promuevan el bienestar de quienes son legítimos titulares del derecho internacional a la paz. El discurso del desarrollo y la seguridad humana incorporado en los borradores privados y oficiales de la Declaración de 2012 delimita la exigencia de paz como una exigencia a favor de la acción positiva y de las garantías de justicia social. Como parte de sus deberes positivos, los Estados están obligados a proporcionar educación, en particular educación y formación para la paz, a colocar los derechos de los emigrantes y de los grupos vulnerables en el centro de las políticas nacionales y planes de acción relevantes, a cooperar entre ellos para proteger y promover el derecho al desarrollo y los otros derechos humanos y para realizar el DHP, procurando en particular los recursos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo.

En contraste con lo anterior, los artículos de la Declaración de 2016 no hacen siquiera referencia a la violencia ni formulan los deberes que conlleva el abstenerse del uso o la amenaza de la violencia ni los deberes de proteger activamente a los individuos y las poblaciones contra ella (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2017). El artículo 1 afirma que el individuo es portador de "un derecho a disfrutar de la paz", entendiéndose que la paz es esencial para que pueda vivir con dignidad y en pos de sus aspiraciones. El artículo 2 destaca, en contrapartida, que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones marco que posibilitan el disfrute de la paz dentro y entre las sociedades. Al igual que en el artículo 1 se reconoce el derecho al desarrollo, en el segundo se reconoce componentes clave de las políticas de paz positiva, como de hecho, los derechos de igualdad y ausencia de temor y de miseria. En contraste con una interpretación liberal hegemónica, una interpretación alternativa destacaría que no estamos tanto ante un derecho reclamable por los individuos cuanto ante una obligación de los Estados para con las sociedades, y que la separación de poderes y en particular del judicial, necesaria para proteger a los

miembros marginados y más desfavorecidos de la sociedad, se sujeta a su vez a la autoridad del Estado y a su capacidad de acción como medio para garantizar la paz. No se aclara el grado de compromiso que deben realizar los Estados para cumplir con tales obligaciones. Tampoco si se espera que protejan a los individuos o a la comunidad internacional de las violaciones de derechos humanos cometidas por otros Estados, actores u organizaciones internacionales. Es claro, en todo caso, que la norma actual sigue estando centrada ante todo en los Estados, pese al reconocimiento que expresa el artículo 3 del papel de los agentes no estatales, a los que se les asignan funciones subsidiarias. Dado que habrá Estados incapaces o no dispuestos a cumplir sus funciones y deberes que precisarán de complementación y de supervisión, las organizaciones en distintos niveles, desde el local al internacional, y la sociedad civil tendrán la obligación de colaborar en la búsqueda y el mantenimiento de la paz.

5.2. La utopía realista

Los borradores de las declaraciones reclamaban un nuevo orden internacional que habría de eliminar las causas profundas de la violencia estructural, a la que se consideraba incompatible con la paz tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional. Es más, esas pretensiones normativas proporcionaban razones para poner en cuestión el orden internacional tal como lo conocemos. Lo que estaba en cuestión en la protección jurídica del valor comunitario de la paz era, ante todo, una compleja estructura de agentes y organizaciones internacionales cuyos poderes de toma de decisiones y de intercambios mercantiles tienen la capacidad de influir de manera irresistible sobre las condiciones socioeconómicas que conducen a la violencia o que la sostienen. En la medida en que estos actores globales crean, mantienen o ignoran deliberadamente las circunstancias que favorecen las violaciones de los derechos humanos, la articulación legal del DHP podría servir de catalizador para las demandas en pro de una mayor responsabilidad y rendición de cuentas, demandas que provendrían en buena medida de las partes interesadas más débiles y vulnerables, tales como grupos infrarrepresentados, poblaciones desprotegidas u organizaciones no gubernamentales.

Por supuesto, el hecho de que el grupo de trabajo intergubernamental encargado de negociar el proyecto de declaración de las Naciones Unidas reafirmara en gran medida muchas de las tesis y posiciones mantenidas por los defensores del DHP no oculta las duraderas y complejas controversias que tuvieron lugar durante todo el proceso, tanto en los ámbitos académicos como en la arena de las relaciones internacionales o en el corazón del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En un sentido muy relevante, esas controversias, dijimos, expresan una pugna entre interpretaciones generales de los derechos humanos. Son claras y numerosas las voces que aducen que el DHP, aun cuando tenga una faceta y un alcance moral, no es de suyo exigible legalmente ni puede ser garantizado e impuesto jurídicamente; que los argumentos sobre la validez, exigibilidad y aplicabilidad legales del DHP no son persuasivos; que, al ser un derecho de derechos, contiene obligaciones que son demasiado amplias para ser significativas o que duplican las de otros derechos.

Para algunos, además, la propia declaración no puede tener un impacto relevante en la protección del interés en la paz, ni llegará a ser un instrumento efectivo para dicha protección.

En cambio, para quienes albergaban y albergan la expectativa del progresivo despliegue de la utopía realista inherente al desarrollo mismo del sistema de derechos humanos, un instrumento legal universal que vincula a los Estados en tanto que responsables, a título individual y a modo de un colectivo internacional, a la promoción (de los derechos) del DHP no podría sino contribuir a debilitar importantes privilegios tradicionales en la gestión de los procesos de paz y a redistribuir las cargas y las responsabilidades. Dado que se trataba de un campo de tensiones sujeto a una juridificación susceptible de alcanzar con el tiempo un notable impacto político, la promulgación del DHP podría haber desempeñado, a su modo, un papel incisivo en una más amplia política global que debería llevarse a efecto en torno a los actuales y a los futuros actores e instituciones globales.

En franco contraste con tales aspiraciones, la remisión que hace el artículo 5 de la Declaración de 2016 a las disposiciones de la Carta de la ONU (incluidas, se supone, las dos excepciones a la prohibición del uso de la fuerza) parecen dar a entender que dicha Declaración se entiende a sí misma a modo de un instrumento de paz realista. A este respecto, se deja abierta la posibilidad de emplear los mecanismos de rendición de cuentas habilitados por la ONU. Ahora bien, cabe suponer que el reconocimiento del desarrollo humano y de la seguridad humana no desecha y, antes bien, comporta la perspectiva de que la asunción y la activación de los derechos sociales, económicos y culturales siguen resultando claves para garantizar a las personas unas condiciones de vida adecuadas, que a su vez reforzarán los entramados sociales y comunitarios de la vida en paz. Finalmente, la Declaración parece concordar aún con la idea de que es responsabilidad de múltiples actores transnacionales el promover la paz como requisito para el disfrute del resto de los derechos humanos. Y es probable que las ONG y otros agentes de la sociedad civil global aún interpreten el alcance del derecho a la paz de forma menos restrictiva y más plena.

6. Visos de futuro

El dilatado proceso que ha conducido a la aprobación final de una Declaración del DHP altamente devaluada en relación con los borradores previos refleja la complejidad de las implicaciones legales de su adopción y la complejidad de los procedimientos para la deliberación internacional. Refleja más aún la renuencia de un poderoso bloque de Estados a atarse a las obligaciones que sancionaría una interpretación ambiciosa de los derechos de tercera generación. La negativa de ciertos países a reconocer (en todo su alcance) que la paz es un derecho humano cuenta, sin duda, con un arsenal de razones éticas, jurídicas y políticas, pero presumiblemente pesa en ella la voluntad de perpetuar prácticas que les son beneficiosas en términos geopolíticos, aun cuando muchas de ellas no sean respetuosas con los derechos humanos (y no en último lugar la venta de armas a países en conflicto bélico).

Con todo, la primera declaración sobre la paz adoptada en este milenio por la Asam-

blea General de la ONU no es meramente un fin de partida o un cierre en falso que finiquita un itinerario de insalvables controversias. Antes bien, no deja de ser también una conquista provisional que no desactiva el potencial desarrollo de una versión más satisfactoria del derecho en liza. Por eso, aunque a muchos la juridificación de la paz les parezca una tarea tan contraproducente como desesperada, ese pesimismo debe matizarse o incluso reconsiderarse mediante una visión histórica suficientemente amplia, atenta a los procesos de internacionalización durante los últimos setenta y cinco años, y confrontarse a la luz de la tendencia compensatoria de una cultura de la paz globalizada, la cual presiona en la dirección del (resurgimiento del) reconocimiento jurídico-político de la paz. En no pocas crisis, también en la que hemos relatado en estas páginas, cabe experimentar procesos de aprendizaje y concebir oportunidades que ensanchan el ámbito de lo posible.

7. Bibliografía

Alston, P. (1980). "Peace as a Human Right", *Security Dialogue*, vol. 11, pp. 319-329.

Asamblea General de las Naciones Unidas (2000). *Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo. Informe del Secretario General*. UN Doc. A/55/377; https://digitallibrary.un.org/record/425314?ln=en&v=pdf (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Asamblea General de las Naciones Unidas (2017). *Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2016 71/189. Declaración sobre el Derecho a la Paz*. UN Doc. A/RES/71/189; https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/2017/en/115405 (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Bailliet, C.M. (2021). "The International Law of Peace", en O.P. Richmond y G. Visoka (eds.). *The Oxford Nandbook of Peacebuilding, Statebuilding, and Peace Formation*. New York: Oxford University Press, pp. 59-76.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2010). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 14/3: Promoción del derecho de los pueblos a la paz*. UN Doc. A/HRC/RES/14/3; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session14/Pages/ResDecStat.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011). *Informe sobre la marcha de los trabajos del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de los pueblos a la paz*. UN Doc. A/HRC/17/39; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012a). *Informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de los pueblos a la paz*. UN Doc. A/HRC/20/31; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012b). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 20/15: Promoción del derecho a la paz*. UN Doc. A/HRC/RES/20/15; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session14/Pages/ResDecStat.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013a). *Informe del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta encargado del proyecto de declaración d e las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz*. UN Doc. A/HRC/WG.13/1/2; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationonntheRighttoPeace.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013b). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 23/16: Promoción del derecho a la paz*. UN Doc. A/HRC/RES/23/16; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationontheRighttoPeace.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2014). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 27/17: Promoción del derecho a la paz*. UN Doc. A/HRC/RES/27/17; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationontheRighttoPeace.aspx (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2015). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 1 de octubre de 2015 30/12: Promoción del derecho a la paz*. UN Doc. A/HRC/RES/30/12; https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/30/12 (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2016). *Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 1 de julio de 2016 32/28: Declaración sobre el Derecho a la Paz*. UN Doc. A/HRC/RES/32/28; https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/28 (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Freedman, R.; Lottholz, P. (2017). "Peace as a Hybrid Human Right", en N. Lemay-Herbert y R. Freedman (eds.). *Hybridity. Law, culture, and development*. Oxford: Routledge, pp. 37-57.

Galtung, J. (1993). "Kulturelle Gewalt", *Der Burger im Staat*, núm. 43, pp. 106–112.

Guillermet Fernández, C.; Fernández Puyana, D. (2017). "In Pursuit of Broad Agreements. In the Future Development of the Declaration on the Right to Peace within the United Nations", *Przegląd Strategiczny*, vol. 10, pp. 383-406.

Hayden, P. (2002). "A Defense of Peace as a Human Right", *South African Journal of Philosophy*, vol. 21, núm. 3, pp. 147-162.

Hayden, P. (2004). "Constraining War: Human Security and the Human Right to Peace", *Human Rights Review*, vol. 6, núm. 1, pp. 35-55.

Laplante, L.J. (2019). "A Balancing Act: The Right to Peace and Justice", *Harvard International Law Journal*, vol. 59; https://journals.law.harvard.edu/ilj/2019/09/a-balancing-act-the-right-to-peace-and-justice/ (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Mayor Zaragoza, Federico (1997). *The Human Right to Peace. Declaration by the Director General of UNESCO*, https://www.wagingpeace.org/1997/01/ (última consulta, 17 de marzo de 2024).

Roche, D. (2003). *The Human Right to Peace*. Ottawa: Novalis.

Saura Estapà, J. (2011). "El derecho humano a la paz en perspectiva internacional", en M.I. Garrido (Coord.). *El derecho a la paz como derecho emergente*. Barcelona: Atelier, pp. 47-66.

Vasak, K. *(1984*). "Pour une troisième generation des droits de l'homme", en C. Swinarski (ed.) *Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet*. Genève: Martinus Nijhoff, pp. 837-850.

Villán, C. (2014). *The emerging right to peace. Its legal foundations*, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.

Villán, C. (2020). "La paz como derecho humano", *Revista d'Humanitats*, vol. 4, pp. 114-137.

Villán, C.; Faleh, C. (Eds.) (2013). *The International Observatory of the Human Right to Peace*. Luarca: AEDIDH.

Wittgenstein, L. (1972). *On Certainty*. New York: Harper.

Woods, J.M. (2013). "Theorizing Peace as a Human Right", *Human Rights & International Legal Discourse*, vol. 2, núm. 7, pp. 178-236.

«ESTRANGULAR AL TIGRE». RADICALIZACIÓN Y AUGE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ULTRADERECHA EUROPEA: LOS CASOS DE GRECIA Y DE REINO UNIDO

«STRANGLE THE TIGER». RADICALIZATION AND GROWTH OF POLITICAL VIOLENCE IN EUROPEAN FAR-RIGHT: THE CASES OF GREECE AND UNITED KINGDOM

Lorién Gómez Solano
Universitat de Barcelona, Barcelona, España
loriensolano@gmail.com

Ismael Seijo Boado
Universitat de Barcelona, Barcelona, España
ismaelseijo.1b@gmail.com

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: ultraderecha, radicalización, violencia política, protesta violenta
Key words: far-right, radicalization, political violence, violent protest

Resumen: Este artículo analiza los procesos de radicalización violenta en los que está inmersa la ultraderecha desde una perspectiva interdisciplinar, combinando la crítica de la economía política marxiana, especialmente por las ventanas de oportunidad que genera la actual crisis capitalista, con elementos provenientes de la ciencia política y de la sociología del comportamiento. Primero, el artículo estudia la transformación de las normas sociales que legitiman el uso de la violencia política en la ultraderecha como un medio (y un fin) legítimo desde una perspectiva macro, meso y micro, así como los distintos grados de radicalización violenta. A continuación, se repasa la violencia política en la ultraderecha contemporánea, poniendo el foco en la protesta violenta. El tercer apartado analiza comparativamente dos casos que, aun presentando diferencias entre sí, se caracterizan por las mayores tasas de violencia política ultraderechista en Europa: Grecia y el Reino Unido. Todo ello da cuenta de la transformación de las bases sociales de la derecha radical hegemónica hacia

posiciones más extremas y cercanas al fascismo clásico en cuanto a ideario, métodos y objetivos.

Abstract: This article analyzes from an interdisciplinary perspective the processes of violent radicalization in which the far-right is immersed, combining the critique of political economy, especially due to the windows of opportunity generated by the current capitalist crisis, with elements from political science and of behavioral sociology. First, the article studies the transformation of social norms that legitimize the use of political violence in the far-right as a legitimate means (and as an end) from a macro, meso and micro perspective, as well as the different degrees of violent radicalization. Next, political violence in the contemporary far-right is reviewed, focusing on violent protest. The third section comparatively analyzes two cases that, although presenting differences between them, are characterized by the highest rates of far-right political violence in Europe: Greece and the United Kingdom. All of this accounts for the transformation of the social bases of the hegemonic radical right towards more extreme positions closer to classical fascism in terms of ideology, methods and objectives.

1. Introducción

El 6 de enero de 2021 seguidores de Donald Trump asaltaban el Capitolio después de su derrota en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020 ante Joe Biden, con un saldo final de 4 muertos y 52 detenidos entre los asaltantes y 1 muerto y 14 heridos entre la Policía (Kalmoe & Mason, 2022: 2). El 8 de enero de 2023, seguidores de Jair Bolsonaro, imitando a sus acólitos estadounidenses, asaltaron la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia como respuesta a la victoria de Lula da Silva en las elecciones generales de 2022, esta vez con un saldo de 1.500 detenidos. En julio y agosto de 2024, tras el asesinato de tres niñas en Southport, una ola de protestas organizadas por la ultraderecha contra la inmigración y el islam recorrieron Reino Unido durante una semana, con múltiples escenas de violencia, atacando mezquitas, centros de atención a migrantes o bufetes de abogados que sirven a refugiados (Millán, 7 de agosto de 2024). Asimismo, el auge del terrorismo de extrema derecha ha sido catalogado como una de las principales amenazas a la seguridad en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia o los países nórdicos; en ocasiones por encima del terrorismo yihadista (Carretero & Lezcano, 20 de enero de 2024).

Aunque los métodos y la ideología de las organizaciones y personas involucradas en estos eventos difieren, todos pueden ser englobados dentro de la categoría de ultraderecha y como parte de la oleada reaccionaria mundial que sacude a las sociedades contemporáneas especialmente a partir de la confluencia de cuatro crisis: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis económica de 2008, la crisis de refugiados de 2015 y la pandemia mundial de la Covid-19. Como ha señalado Mudde (2021), la ultraderecha constituye el conjunto de formaciones situadas a la derecha de la derecha tra-

dicional, siendo la característica que las unifica su cuestionamiento de las democracias liberales. La ultraderecha, de esta forma, agrupa las formaciones de derecha radical (familia mayoritaria en la actualidad, con partidos como Rassemblement National, Fratelli d'Italia o Vox) y las formaciones de extrema derecha (de inspiración neofascista, como el British National Party, Amanecer Dorado o el Partido Nacionaldemócrata Alemán). En general, la ultraderecha se caracterizaría por ser ultranacionalista y autoritaria, diferenciándose la derecha radical de la extrema derecha en que acepta los mecanismos legales de las democracias liberales y no recurre a la violencia de forma sistemática como recurso para alcanzar sus objetivos políticos. No obstante, las diferencias entre ambas subfamilias son porosas y las similitudes y colaboración entre ellas no son fenómenos extraños (Forti, 2021: 178). Esto no es nuevo históricamente, pues a lo largo de diferentes coyunturas históricas, la ultraderecha ha adoptado diferentes formas en función del espacio y el tiempo, siendo resultado del desarrollo desigual y combinado del modo de producción capitalista e incrementando su influencia en los contextos de crisis social (Saull, 2023a). Con todo, la ultraderecha no es un fenómeno estático, sino que se ha ido adaptando a las condiciones objetivas de la sociedad en cada momento, revisando los elementos ideológicos y estratégicos de los movimientos fascistas y contrarrevolucionarios, resultando la derecha radical contemporánea en una actualización del proyecto reaccionario histórico (Antón-Mellón & Seijo Boado, 2024).

Este artículo tiene como objetivo analizar los procesos de radicalización violenta en los que está inmersa la ultraderecha, ejemplificado por los casos griego y británico, desde una perspectiva interdisciplinar, combinando la crítica de la economía política marxiana, especialmente por las ventanas de oportunidad que genera la actual crisis capitalista —que es, a la vez, económica, climática y geopolítica— para la radicalización violenta de la ultraderecha (Solano & Elvira, 2024), con elementos provenientes de la ciencia política y de la sociología del comportamiento. En este sentido, debemos realizar algunas aclaraciones preliminares. De entrada, debemos señalar que entendemos la violencia política como aquella que abarca un «conjunto de dinámicas que dan acceso al poder y que regulan quién lo tiene y para qué lo pueden usar» (Daniels & Vlaskamp, 2021: 28-29). A este respecto, siguiendo a Galtung (1990), deben distinguirse los tipos de violencia, centrándonos en las dos primeras: violencia directa (producida por agresiones físicas, psicológicas o verbales que causan daños visibles), violencia cultural (producida por aquellos elementos culturales como la religión o la ideologías que justifican prácticas violentas) y violencia estructural (producida por las condiciones de dominación en que las estructuras sociales, políticas y económicas impiden la realización de las potencialidades de las personas).

Es importante señalar, pues, que la violencia política hace referencia en ese sentido a una realidad multidimensional. De ahí que esta, ya desde su dimensión «directa», abarque desde la protesta violenta (disturbios, asaltos, sabotajes), hasta tentativas terroristas. Más que de violencia, por tanto, cabría hablar de violencias. En relación con esto, es imprescindible tener en cuenta que conceptos como radicalización política o violencia política no tienen necesariamente una

carga peyorativa, más aún cuando son tomados de forma abstracta. Por añadidura, la violencia política es un fenómeno difícil de predecir, que puede desatarse por un evento particular que haga visible los conflictos soterrados de una sociedad, pasando de una «paz de alta tensión a la violencia de masas» (Kalmoe & Mason, 2022: 25).

Del mismo modo, la violencia política no debe ser concebida como un fenómeno «patológico» que solamente afecta a sujetos con «trastornos mentales» o a grupos en situación de marginalidad o de riesgo (Corradi, 2020: 124). Antes bien, la violencia puede devenir un vector de socialización política de masas, tal y como ocurrió en la crisis de entreguerras en el caso del fascismo clásico (1919-1945)[1].

Así pues, el artículo presenta la siguiente estructura. En primer lugar, analizaremos cuáles son los mecanismos que empujan a la transformación de las normas sociales —entendidas como las reglas informales que señalan qué comportamientos son aceptables socialmente y cuáles no— que legitiman la violencia política en la ultraderecha desde un punto de vista macro (los condicionantes estructurales de la presente crisis capitalista y de los sistemas político-institucionales a analizar), meso (socialización grupal) y micro (racionalidad y emocionalidad individual), así como los distintos grados de radicalización violenta. En segundo lugar, realizaremos un repaso de la violencia política en la ultraderecha contemporánea, poniendo el foco en la protesta violenta. Esto nos servirá de soporte para el análisis comparado de dos casos que, aun presentando diferencias entre sí, se caracterizan por las mayores tasas de violencia política ultraderechista en Europa: Grecia y el Reino Unido. Estos casos se analizarán a partir de la base de datos del Far-Right Protest Observatory (FARPO) sobre protestas ultraderechistas entre 2008 y 2018. Se seleccionan los casos de Reino Unido y Grecia porque, además de reflejar dinámicas de radicalización ultraderechista propias de su contexto, son, entre los países analizados por el FARPO, los casos con mayor proporción de protestas violentas ultraderechistas y con un mayor número absoluto de protestas violentas ultraderechistas en el período, respectivamente (Castelli-Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

La extensión de prácticas violentas más allá de los grupúsculos neofascistas a los que se encontraba circunscrita en las últimas décadas muestra la transformación de las bases sociales de la derecha radical hegemónica hacia posiciones más extremas y, con ello, cercanas al fascismo clásico en cuanto a ideario, métodos y objetivos. No en vano, todo ello da cuenta de una idea difundida por el neonazi sueco Daniel Friberg (25 de julio de 2015): habría que dar el salto de «cabalgar el tigre de la modernidad», esto es, la idea evoliana de centrar la estrategia de la ultraderecha en la «batalla cultural», a su «estrangulamiento», es decir, a la violencia política abierta contra los «enemigos de Occidente».

1 Para explicar las altas tasas de violencia política y del paramilitarismo en el periodo de entreguerras, el historiador George L. Mosse recurrió a su tesis de la «brutalización», según la cual la experiencia bélica de la Primera Guerra Mundial de los soldados habría sido la principal causa de esta. Aunque sugerente, se trata de una noción abstracta y con una capacidad analítica limitada (Alcalde, 2016).

2. Radicalización violenta ultraderechista

2.1. Factores de radicalización macro, meso y micro

Podemos entender la radicalización como aquel proceso mediante el cual un individuo o un colectivo «tiende a asumir puntos de vista políticos intransigentes y doctrinarios» llegando, en ocasiones, a asumir prácticas violentas (Antón Mellón & Parra, 2015: 29). La radicalización, empero, no comporta la asunción de prácticas fundadas en la violencia política. De ahí que nos centremos en una de sus variantes: la radicalización violenta. Por ello, siguiendo la clasificación de García-Magariño (2022: 34), distinguimos tres niveles en los procesos de radicalización violenta: macro (factores estructurales), meso (contexto cercano) y micro (motivaciones individuales y psicológicas), lo cual no quiere decir considerar estos niveles —puramente analíticos— como compartimentos estancos.

En primer lugar, analizar la radicalización violenta desde una perspectiva macroestructural implica contextualizarla dentro de la crisis de sobreacumulación que arrastra el modo de producción capitalista desde la década de 1970 —la cual se manifiesta a través de la caída de las tasas de productividad y del acortamiento temporal entre cada crisis (Piqueras, 2022: 11)— y de fenómenos que se derivan de esta como el crecimiento de las desigualdades socioeconómicas, el empobrecimiento masivo de amplias capas de la población, la degradación de los Estados de Bienestar a la hora de garantizar consensos sociales amplios en base a políticas de redistribución del plusvalor o del giro penal de los Estados capitalistas y de las nuevas formas represivas de acumulación de capital (Solano & Elvira, 2024). No en vano, frente al riesgo de ser expulsados del mercado, el Capital tiene que redoblar su competitividad, ya sea intensificando el trabajo, aumentando la disciplina de los trabajadores, recortando salarios o empujando a los capitalistas a la búsqueda de nuevos mercados y al incremento de la explotación de los recursos naturales. La crisis, además, también empuja a la intensificación de la competencia de trabajadores y al aumento de la llamada «humanidad sobrante», es decir, un segmento de la población expulsado total o parcialmente de los procesos productivos y que, en Occidente, está compuesta en buena medida por la población inmigrante (Mau, 2023: 394-395)

A este respecto, la descomposición de la sociedad de clases medias contribuye a dar lugar a las bases sociales de la ultraderecha, conformada por la alianza entre la burguesía nacional, capas medias y ciertos sectores de la clase obrera cualificada, la cual ha visto degradada su estatus con el paso a las sociedades posfordistas y la mayor competitividad entre la fuerza de trabajo «autóctona» y la «migrante», de forma que la ultraderecha pugnaría por transformar su inseguridad económica en inseguridad cultural, a través de un discurso que liga el empeoramiento de las condiciones de vida de la población con un sentimiento de agravio y de decadencia provocada por sus enemigos internos y externos de la nación (Ayers, 2023). Además, cuando el Estado capitalista es incapaz, en situaciones de crisis y debilidad, de garantizar por sus propios medios la salvaguarda de las relaciones sociales capitalistas, es frecuente que fuerzas au-

xiliares de extrema derecha suplan sus funciones represivas recurriendo a la violencia política de forma extralegal, tal y como ocurrió en el caso del fascismo clásico (Paxton, 2019: 27-28). Las condiciones genéricas que ofrecen la oportunidad para el éxito político del autoritarismo ultraderechista, como resume Saull (2023a: 39), serían la quiebra del funcionamiento del orden del mercado y su imposibilidad de reproducirse de formas normales (evidenciado en el aumento del desempleo, la caída de la producción y la caída de las tasas de ganancia), la incapacidad del sistema político parlamentario de contener las presiones de la clase trabajadora y la incapacidad de las clases dominantes de mantener la hegemonía política del capital, reflejado en la ruptura de la relación entre gobernantes y gobernados. En definitiva, «la cuestión fundamental de fondo reside en cómo la crisis, en tanto que fenómeno estructural, genera ventanas de oportunidad que son aprovechadas por la agencia de la ultraderecha para ganar a mayores sectores de la población» (Solano & Elvira, 2024). Con todo, estas consideraciones generales solo deben orientar el análisis concreto de cada contexto espacial donde vayamos a estudiar la radicalización violenta ultraderechista[2].

En este sentido, también es preciso atender a las características del sistema político-institucional a analizar. Por una parte, factores como el sistema electoral influyen en la polarización y, por ende, en la radicalización; de modo que los sistemas mayoritarios tenderían más a ello que los multipartidistas debido a que la oferta política se reduce a dos identidades políticas enfrentadas (Miller, 2023). Por otra parte, debe atenderse a las relaciones políticas entre la derecha tradicional conservadora, la derecha radical y la extrema derecha (extraparlamentaria o no), distinguiendo así tanto lógicas de competición como de colaboración entre ambas. No en vano, la emergencia de partidos de derecha radical y la normalización de su discurso de odio favorece la aparición de potenciales competidores neofascistas; lo que a su vez puede conducir a que las fuerzas conservadoras radicalicen su discurso con el fin de disputarse electoralmente las mismas bases sociales. Así, como muestra Goldstein (2021) para los casos húngaro y polaco, la derecha radical parlamentaria puede optar por emprender tácticas de competición con la extrema derecha, asumiendo buena parte de sus postulados; o bien puede optar por colaborar con estas fuerzas, sirviendo de ellas como fuerzas auxiliares (con el consiguiente peligro, como veremos, de que estas la sobrepasen).

Por otro lado, teniendo en cuenta que la radicalización siempre se produce a través de agentes de radicalización, como los líderes carismáticos (García-Magariño, 2022: 45), la representación parlamentaria de partidos de derecha radical contribuye a una transformación de las normas sociales que restringen la aceptabilidad del discursos de odio ultraderechista y, por consiguiente, normaliza e incrementa sus bases sociales de apoyo a espectros más amplios de la población (Valentim, 2021). En este sentido, el alcance mediático que ha desempeñado la difusión de discursos xenófobos y supremacistas desde las instituciones públicas ha jugado un rol muy relevante en la radicalización violenta de la extrema derecha (Blanco Navarro, 2020: 93). Al apoyo a este tipo

2 Para profundizar más en el análisis de este complejo fenómeno, véase Solano & Elvira (2024).

de discursos por parte de la población ha contribuido la desideologización y despolitización de la sociedad operada por la gobernanza neoliberal, apareciendo la repolitización operada por la ultraderecha como la única alternativa[3] al modelo dominante (Antón-Mellón & Seijo Boado, 2024: 123). Si a eso se le añaden situaciones en las que los propios líderes políticos incitan a la toma violenta de las instituciones representativas, tal y como ocurrió en Estados Unidos en 2021 y en Brasil en 2023, las posibilidades de normalización de prácticas violentas entre seguidores ya radicalizados son mayores (Kalmoe & Mason, 2022: 48). No en vano, la radicalización violenta, entendida en su contexto social y político concreto, se debe interpretar como muestra de una pérdida de confianza en el sistema vigente (Antón-Mellón & Parra, 2015: 29).

En segundo lugar, el nivel meso pone el énfasis en cómo influye el proceso de socialización sobre la radicalización violenta. Así, existen factores que influyen sobre la radicalización violenta de índole socioeconómica en el contexto cercano como la densidad poblacional en un mismo territorio, las desigualdades y la degradación medioambiental o la coexistencia de diferentes culturas en un espacio reducido (García-Magariño, 2022: 91). A partir de ahí, hay tres preguntas fundamentales que responder: cuándo, cómo y dónde se produce. Además, aunque Internet constituye una herramienta de radicalización violenta relevante, el reclutamiento está mediado, generalmente por individuos con los que se tenía algún vínculo personal (Malthaner, 2017).

En este punto, es necesario comentar los elementos identitarios que rodean a la necesidad humana de pertenecer a un grupo como uno de los vectores fundamentales a la hora de entender los procesos de radicalización. Racionalidad, emociones y acciones están conectadas a través de lo que García-Magariño (2022: 73) denomina una «estructura moral» orientada hacia una «comunidad de propósito». En definitiva, la violencia está «reglada» socialmente (Hobsbawm, 1999: 195) y la lógica de su «producción» está orientada, generalmente, hacia la generación de terror y temor en el enemigo (Kalyvas, 2010: 49). Así, una estructura moral proclive a la violencia se ve facilitada por determinados momentos como las crisis de identidad, o individuos en situaciones de vulnerabilidad y/o aislamiento, especialmente entre hombres jóvenes (García-Magariño, 2022: 40-45). Un sujeto es siempre un sujeto social; por lo que la violencia política pende siempre de un yo extendido, es decir, de un vínculo con la comunidad (Corradi, 2020: 99). Son las organizaciones sociales complejas, dotadas de narrativas que justifiquen sus acciones y de redes de microsolidaridad que impliquen compromisos emocionales de sus miembros, las principales promotoras de la violencia política en la historia, lo que evidencia la dimensión colectiva y organizada de la violencia (Malešević, 2020). En ese contexto, el marco ideológico es el que otorga un «sentido completo» a la socialización grupal (Antón-Mellón & Parra, 2015: 30). Pero, a la vez, es la interacción social la que genera, difunde y, en última instancia, lleva a la práctica, las ideas que justifican la violencia (Tilly, 2007: 8). A eso cabe añadir que las identidades sociales, estén fundadas en la clase social, la religión, la nacionalidad o en

3 A pesar de que, en realidad, no plantea un verdadero reto al capitalismo neoliberal, adoptando sus postulados.

la etnia, se generan en base a la oposición y discriminación de otros grupos sociales (Huddy, 2001).

Este es el trasfondo psicológico-social de la polarización: las identidades excluyentes satisfacen la necesidad de pertenecer a un grupo a la vez que excluimos a otros. Sin embargo, la polarización no es extremismo: se trata simplemente de la alineación con diferentes grupos y/o identidades (Miller, 2023), de forma que la radicalización violenta es algo que puede venir después. Así, la distinción entre el *endogrupo* y el *exogrupo* produce desde sesgos de información hasta atribuciones de cualidades morales sesgadas, de forma que los miembros del *endogrupo* tienden a atribuir rasgos negativos o inmorales a los que no pertenecen al mismo y viceversa como refuerzo de la socialización interna del grupo (Betancor et al, 2003). De esta manera, hasta las más aparentemente insignificantes distinciones grupales podían conducir, en última instancia, a situaciones de prejuicio, discriminación y violencia (Kalmoe & Mason, 2022: 32). Las identidades grupales, reales o imaginarias, se construyen en base a la oposición entre un «ellos» y un «nosotros» y a un relato sobre esta división (Tilly, 2007: 31), lo que cobra forma en el caso de la ultraderecha a través de la distinción entre los miembros de la comunidad nacional pura y los extranjeros y de los nacionales que se desvían de esa esencia pura.

En tercer lugar, el nivel micro comporta tener en cuenta el tipo de racionalidad específica que empuja a los individuos a asumir la violencia política como un medio estratégico (y en ocasiones como un fin) legítimo —lo que implica dejar de lado aquellas visiones que conceptualizan la violencia política como una suerte de fuerza irracional—, lo cual está estrictamente relacionado con la normatividad (el sentido del deber, la visión del mundo, la ideología, los valores, etc.) del individuo. Esto es algo que cobra todo el sentido en el caso de la extrema derecha contemporánea como un movimiento político que despliega un uso estratégico de la violencia política y, a la vez, exhibe un culto sacralizado sobre la misma como una fuerza «aristocrática» e «higiénica». No en vano, como apuntaba Paxton (2019: 42), «la legitimación de la violencia contra un enemigo interno demonizado nos aproxima al corazón del fascismo». Otro elemento de importancia son las emociones que empujan a la violencia política, siendo estas sobre todo de carácter negativo y vinculadas a la percepción de una amenaza, real o imaginaria (frustración, privación, desarraigo, deseos de venganza, humillación, etc) (Collins, 2013). Emociones que entroncan con el diagnóstico decadentista y victimista en torno a la nación característico de la ultraderecha (Leser & Spissinger, 2020).

2.2. Grados de radicalización violenta

Tradicionalmente ha habido dos grandes grupos de teorías que han tratado de explicar la radicalización violenta: las escalonadas y las piramidales. Mientras que las primeras se centran en explicar la trayectoria individual que empuja a la radicalización, las segundas se centran en su dimensión colectiva. También existen las teorías secuenciales, según las cuales la radicalización avanza por diferentes etapas críticas. Pero, en cualquier caso, todas ellas parten de una premisa básica: que «la persona avanza hacia niveles

progresivos de radicalización, desde un comportamiento normal hasta un comportamiento violento» (García Magariño, 2022: 63). Esto es algo que las diferencia, por ejemplo, de teorías como la de la doble pirámide, que distingue entre radicalización cognitiva o ideológica y radicalización conductual, de manera que estos dos tipos de radicalización no siempre van de la mano, es decir, una persona puede interiorizar ideas que legitimen la violencia política y no dar nunca un paso a la acción (Malthaner, 2017).

Sin embargo, teorías como la de la doble pirámide no terminan de resolver cómo se relacionan pensamiento y acción. No se trata de que estos se encuentren separados, sino que actúan de una manera sofisticada y dinámica. Es decir, los mecanismos de control social y la cultura política juegan un papel relevante a la hora de impulsar a los individuos /grupos a la realización de acciones violentas: se deben internalizar convicciones, patrones de pensamiento y comportamiento, motivaciones orientadas a un propósito político… En definitiva, para que se opte por la vía violenta y se rompan las normas sociales que restringen su uso, los mecanismos de control social se han debido de resquebrajar en el tiempo (García-Magariño, 2022: 45). A ese respecto, aun admitiendo que los individuos o los grupos pueden saltar de una fase de radicalización a otra y que no tienen por qué seguir un proceso estrictamente consecutivo, es útil distinguir una serie de fases graduales que puede atravesar un individuo o grupo en su proceso de radicalización violenta. De esta manera, el individuo o grupo en cuestión debe dejar de lado «esquemas cognitivos moderados y adoptar iniciales posiciones intransigentes», aceptando así aquellos métodos de la organización proselitizadora que vayan más allá de la legalidad vigente y, en última instancia, hagan uso de la violencia política (Antón-Mellón & Parra, 2015: 25). Siguiendo este planteamiento, Joan Antón-Mellón e Ignacio Parra (2015: 30) han elaborado la categoría «extremismo violento» para hacer referencia a aquellas acciones que van más allá del «extremismo activista» (ejecución de acciones ilegales con fines políticos) e incurren en el recurso a medios violentos. Es aquí donde debemos situar acciones violentas enmarcadas dentro de la protesta política, como los sabotajes, las reyertas o los ataques dispersos (Tilly, 2007: 14-15). La radicalización de formas de activismo extremistas a otras formas violentas depende en buena medida de la solidaridad que emerge fruto de la experiencia militante, especialmente si esta comporta represión por parte del Estado (Della Porta, 1995: 161-162). Finalmente, encontraríamos el terrorismo como un fenómeno de fanatismo cualitativamente distinto —aunque derivado— de la radicalización y que:

> (…) admite la legitimidad de planificar, apoyar o ejecutar actos ilegales violentos de forma sistemáticas, racionalizada y planificada, incluyendo asesinatos individuales o masivos para subvertir la seguridad ciudadana con el objetivo de obtención de finalidades políticas (Antón-Mellón & Parra, 2015: 34).

3. Movilización y violencia política en la ultraderecha contemporánea

La historia reciente de la ultraderecha ha estado acompañada de una relación compleja con la violencia política. En

primer lugar, la vertiente de extrema derecha se caracterizaría por incluirla en su práctica política como un recurso lícito —de ahí su estructuración en forma de partido-milicia—, mientras que la vertiente de derecha radical rechazaría su uso, aunque más en un sentido táctico que como principio (Antón-Mellón & Seijo Boado, 2024: 18). No en vano, es frecuente que partidos de derecha radical protagonicen marchas contra la inmigración, contra la «islamización» o contra las izquierdas que acaban en formas de protesta violenta (Weinberg & Assoudeh, 2018: 590). Así, la violencia ultraderechista incluye distintas gradaciones: desde la violencia espontánea y el vandalismo al terrorismo y la protesta violenta de masas —fenómenos en auge en el siglo XXI—, dentro de una amplia gama de crímenes de odio (Bjørgo & Aasland Ravndal, 2019)[4].

Y si bien no entraremos a analizar en profundidad el terrorismo de extrema derecha, las masacres perpetradas por Anders Breivik en 2011 en Noruega (77 víctimas) o por Brentont Tarrant en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019 (51 víctimas) mientras la retransmitía por directo a través de Facebook, son muestra de un cambio cualitativo en el terrorismo de extrema derecha (Bjørgo & Aasland Ravndal, 2019)[5]. Esta nueva oleada se halla hegemonizada por corrientes «aceleracionistas», las cuales buscan desatar una guerra racial «frente al Islam» —aunque también frente a la población judía y a la inmigración hispana en algunos casos— que conduzca a un Etnoestado blanco. Ello normalmente aparece acompañado de una fuerte misoginia (ya que culpan al feminismo de su fracaso sexoafectivo) y de teorías conspirativas como la del Gran Reemplazo (la cual es interpretada no como un lamento sino como una llamada a las armas)[6]. De hecho, la matanza de Christchurch planteaba precisamente acelerar de forma acumulativa los atentados en pos de un «gran salto» al terror global, de lo que fue muestra los atentados producidos en los siguientes meses de 2019 en Poway, California (abril), El Paso, Texas (agosto), Baerum, Noruega (agosto), y Halle, Alemania (octubre) (Macklin, 2022: 216).

3.1. Protesta política violenta

Por su parte, el crecimiento electoral de la ultraderecha en las últimas décadas ha estado acompañado de nuevas formas de movilización y de protesta política, violentas o no, y dirigidas principalmente contra la inmigración y contra minorías nacionales, étnicas y/o religiosas; aunque también influyen otros aspectos como la situación económica y político-institucional del país en cuestión. La forma mediante la cual la

4 Debe señalarse, en contrapartida, la decaída de otras formas de violencia ultraderechista como los *skinheads*. El fenómeno de los cabezas-rapadas, cercano a grupos ultras de fútbol, grupos musicales, publicaciones y bandas juveniles, pese a integrar la violencia en su quehacer práctico, adoptaba el neonazismo a menudo más como una posición estética que ideológica (Casals, 2003: 186).

5 Es de señalar, no obstante, que la violencia ultraderechista ha sido y es notablemente mayor en Rusia y en Europa del Este que en Europa Occidental o Estados Unidos (Bjørgo & Aasland Ravndal, 2019).

6 El perfil del perpetrador es, además, en un 85% de los casos el de hombres jóvenes blancos con problemas para socializar, los cuales se radicalizan principalmente a través de Internet (Carretero & Lezcano, 20 de enero de 2024).

ultraderecha sale a la calle permite, además, atender más cercanamente la interrelación entre sus vertientes parlamentaria y extraparlamentaria (sea esta última partidos políticos de extrema derecha sin representación o movimientos sociales más amplios). Así pues, como apuntan Castelli Gattinara, Froio y Pirro (2022), para comprender las formas de movilización de la ultraderecha es necesario tener en consideración la combinación de tres factores: sus motivos de descontento, el contexto político y su fortaleza organizativa.

A nivel europeo la movilización ultraderechista ha aumentado notablemente desde 2011 en países como Italia, Francia, Grecia o Hungría, mostrando el impacto de la Gran Recesión, mientras que en otros como Alemania, Polonia, Eslovaquia o Suecia aumenta a partir de 2014, ligado a la Crisis de Refugiados (Castelli Gattinara, Froio, & Pirro, 2022). A ello cabría añadirles las movilizaciones protagonizadas por la ultraderecha contra el confinamiento y las medidas sanitarias —especialmente la vacunación obligatoria— implementadas durante la Pandemia de la Covid-19 (Vieten, 2020). A la hora de explicar el eventual éxito de sus movilizaciones, es preciso considerar como factor contextual de relevancia el grado de división que exista en el gobierno de turno. Además, factores como la visibilidad pública de la ultraderecha en los medios de comunicación, su capacidad de reclutamiento de redes organizativas o el nivel de contramovilización están correlacionados positivamente con una mayor participación en las protestas ultraderechistas (Castelli Gattinara, Froio, & Pirro, 2022).

Asimismo, los países con una mayor presencia de la protesta violenta dentro de sus movilizaciones ultraderechistas son el Reino Unido (con un 43% del total de sus manifestaciones ultraderechistas), Suecia (con un 36%), Grecia (con un 18%) y Alemania (con un 10%) (Castelli Gatti-

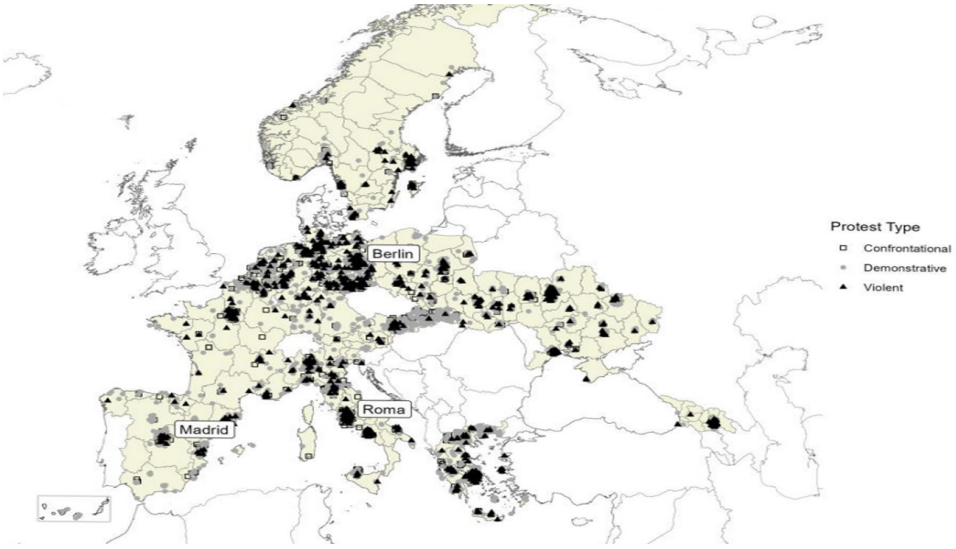


Figura 1. Distribución geográfica de protestas protagonizadas por la ultraderecha en Europa (2008-2021). Fuente: Castelli Gattinara & Beau (2024).

nara, Froio, & Pirro, 2022). En la Figura 1 se pueden observar los datos actualizados a fecha de 2024. Ahora bien, ¿de qué manera se pueden transformar manifestaciones pacíficas en protestas violentas? ¿En qué momento estas pueden transformarse en intentos insurreccionales que se planteen, con mayor o menor éxito, la toma del poder? Como sostiene Elizalde (2021) a través del análisis del asalto al Capitolio por los seguidores de Trump, para que esto ocurra tienen que darse tres condiciones clave: 1) La violencia tiene que ser pensada en voz alta; 2) La violencia tiene que ser viable; y 3) Las restricciones fallan.

En primer lugar, figuras con un alto poder político y mediático deben alimentar una narrativa proclive a la violencia; siendo las redes sociales un canal comunicativo que favorezca estas dinámicas. En segundo lugar, «deben darse las condiciones para que sea factible, es decir, para que los que hablan de ejecutar la violencia también la planifiquen y se coordinen entre sí, recluten a otros y adquieran armas y entrenamiento» (Elizalde, 2021). Esto, en el caso estadounidense, se vio favorecido por la formación de milicias armadas coordinadas por el Patriot Front y los Proud Boys, a una loable capacidad de financiación y a su legitimación religiosa a través de sectores de la iglesia protestante y de la evangélica, además de la teoría conspirativa de QAnon que alertaba sobre un complot del Estado profundo contra la «legítima victoria» de Trump en las presidenciales de 2020 (Leoni, 2022: 87)[7]. Y, en tercer lugar, tiene que fallar la capacidad del gobierno para disuadir la violencia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; quienes tienden a mostrar una actitud más permisiva hacia las movilizaciones de ultraderecha que a las izquierdistas (Elizalde, 2021).

En cualquier caso, las nuevas formas de protesta de la ultraderecha constituyen una suerte de laboratorio de sus capacidades organizativas y de sus posibilidades de recurrir a la violencia. Y si bien, como se ha dicho, en su gran mayoría han sido movilizaciones organizadas por partidos de derecha radical en confluencia con fuerzas de extrema derecha extraparlamentarias (Weinberg & Assoudeh, 2018: 590), los casos de Trump y Bolsonaro, donde buena parte de sus seguidores legitiman las intentonas violentas de toma del poder rechazando la alternancia electoral y la legitimidad de las elecciones ganadas por el adversario, son muestra de la ruptura con algunos moldes de la derecha radical y el acercamiento a posiciones de extrema derecha. De ahí que merezca la pena analizar más detenidamente dos casos paradigmáticos en Europa: Grecia y el Reino Unido.

4. Dos casos prácticos de movilización violenta ultraderechista

4.1. Grecia: Amanecer Dorado y «la raza, la sangre y los ancestros»

Comencemos por el país heleno. Su caso es especialmente relevante por Amanecer Dorado, el que fuera el partido neofascista prototípico durante muchos años

7 No obstante, de las 377 personas arrestadas después del asalto al Capitolio, la mayor parte eran hombres blancos, de unos 35 años de edad, de clase media, y no pertenecían a grupos terroristas (Kalmoe & Mason, 2022: 105)

para la extrema derecha europea hasta su ilegalización por organización criminal en 2020 después de su involucración en el asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssas. Fundado en 1985, Amanecer Dorado se caracterizaba por una ideología basada en la apología abierta del nazismo, la exaltación de la raza blanca y la identificación de la etnia helena con el Estado griego. En síntesis, una ideología basada en «la raza, la sangre y los ancestros» (Georgiadou, 2013: 88). Asimismo, encarnaba el modelo de partido-milicia fascista; de forma que sus militantes se autoconsideraban soldados guiados por una absoluta disciplina y culto al líder —Nikolaos Michaloliakos— y por una práctica sistemática de la violencia contra sus enemigos políticos (Olascoaga, 2018), hasta el punto de contar con un historial de diez asesinatos identificados —aunque probablemente sean más— y más de 900 ataques registrados —aproximadamente 600 de ellos contra paquistaníes— en el momento de su ilegalización (Smith, 8 de octubre de 2020), incluyendo episodios de destrucción coordinada como el pogromo organizado contra la población afgana de Atenas en 2011 (Renton, 2019: 24). El ascenso de Amanecer Dorado se produciría en las elecciones parlamentarias de mayo de 2012, en el periodo más duro de la Crisis de 2008 en Grecia, logrando un 7% de los votos, manteniéndose en esa cifra hasta 2019 —y con un pico del 9,4% en las elecciones europeas de 2014—, cuando finalmente perderían la representación parlamentaria.

Pero como apunta Georgiadou (2013), el crecimiento de Amanecer Dorado no puede entenderse sin analizar el papel durante las décadas anteriores con Nueva Democracia, el partido conservador hegemónico en Grecia y con la progresiva normalización de la ultraderecha en ese país. No en vano, en los años ochenta, en un contexto de derrota ante el PASOK, Nueva Democracia trataría de atraer al electorado ultraconservador, nostálgico de la Dictadura de los Coroneles (1967-1974), iniciando desde 1981 una estrategia de «instrumentalización» de la extrema derecha, es decir, de acercamiento a su agenda política y de legitimación de sus organizaciones, especialmente con la fusión con el partido Reagrupamiento Nacional (1977-1981) y la aparición del Partido Progresivo y del neofascista Unión Política Nacional (1984-1996) —del cual Michaloliakos sería líder de las juventudes—. En otras palabras, Nueva Democracia seguiría una estrategia de colaboración. Así, ya en la década de los 2000 emergería con fuerza Concentración Popular Ortodoxa (LAOS), un partido de extrema derecha fundado por Giorgios Karatzaferis, diputado expulsado por Nueva Democracia, y con un discurso ultraortodoxo, militarista, irredentista, antisemita y anti-LGTB, logrando en 2007 y 2009 un 3,8% y un 5,6% de voto respectivamente y obteniendo representación parlamentaria.

Igualmente, un factor clave que explica el aumento al apoyo de opciones políticas de ultraderecha como la representada por Amanecer Dorada es el contexto de crisis orgánica que experimenta Grecia como consecuencia de la Gran Recesión y que se extiende hasta la mitad de la década de 2010. Entre algunas de las consecuencias de la crisis destaca el aumento del desempleo (cerca del 30% para 2014) y la aplicación de políticas de austeridad siguiendo los dictados de la Troika (Comisión Europea, Banco Central

Europeo y Fondo Monetario Internacional) con el consiguiente deterioro de los servicios públicos. Como consecuencia, se dio un aumento de la pobreza de la población griega que provocó importantes movilizaciones contra la austeridad y aupó al gobierno al partido de izquierdas Syriza, que se negaba a aceptar los términos del rescate (muy perjudiciales para el bienestar de la población griega). Pese a ello, la incapacidad estratégica de Syriza y la limitada autonomía política del Estado griego en relación a los dictados de la Unión Europea llevaron a que el gobierno liderado por Alexis Tsipras aceptase las condiciones de la Troika, actuando contra el dictado popular del referéndum[8] convocado por él mismo en 2015 (Saull, 2023b: 331-332).

En ese contexto de normalización de un discurso de odio hacia la población migrante y de inicio de la Gran Recesión, Amanecer Dorado, después de décadas de marginalización y de reducción de su actividad política a la violencia callejera, aprovechó la llegada de inmigrantes a Grecia entre 2008 y 2010 —especialmente concentrados en el área metropolitana de Atenas— para explotar el tema —ligado a una oposición frontal de la *troika*— a partir de las elecciones municipales de 2010 y, así, entrar finalmente en la escena política griega con un aumento exponencial de los votos de 10.222 en las generales de 2010 a 441.018 en mayo de 2012. Entre sus apoyos, la mayor parte del electorado estaba constituido por trabajadores de cuello blanco, pequeños propietarios, empresarios, funcionarios y desempleados; además de tratarse de un voto claramente masculinizado (un 75% de los votos eran de hombres). Merece la pena señalar para dar cuenta del potencial expansivo de la extrema derecha que buena parte del electorado de Amanecer Dorado (aproximadamente un 50%) provenía de partidos centristas como Nueva Democracia o el PASOK (Georgiadou, 2013); el cual se expandería tras el impacto de la crisis de refugiados en el país heleno (Dinas, 2019). En la actualidad, después de las últimas elecciones legislativas de 2023, Grecia cuenta con tres partidos de ultraderecha con representación parlamentaria: los fundamentalistas cristianos ortodoxos de Niki, Solución Griega (heredera de LAOS) y Espartanos, quien ha terminado por capitalizar el grueso de la antigua militancia de Amanecer Dorado (Peregil & Arbize, 23 de junio de 2023).

Respecto a la evolución de las protestas ultraderechistas en Grecia, cabe decir que entre 2008 y 2018, es el país con mayor número absoluto de protestas de carácter violento registrado por el FARPO, con 121 casos. Además, en proporción, es el tercer país con más presencia de protestas violentas de la ultraderecha sobre el total de manifestaciones ultraderechistas (Castelli-Gattinara, Froio & Pirro, 2022)[9]. La dimensión de la violencia ultraderechista en Grecia es también apuntada por Jupskås y Fielitz (2022: 100-101), que destacan que entre 2016 y 2020, se

8 El referéndum preguntaba a la ciudadanía si debería aprobarse el plan de rescate propuesto por la Troika. El rechazo a las condiciones de la Troika fue mayoritario, de más del 60%.

9 Los autores distinguen entre protestas demostrativas (asambleas públicas, manifestaciones legales y pacíficas, acciones de solidaridad, acciones online, etc.), confrontativas (manifestaciones no autorizadas, huelgas, ocupación de edificios, acciones de boicot, etc.) y violentas (amenazas, manifestaciones violentas, destrucción de la propiedad, violencia física, etc.).

produjeron 4,5 incidentes de violencia severa de ultraderecha por cada millón de habitantes, siendo el país con más incidentes de los países europeos estudiados, seguido de Alemania, con 1,6 incidentes por cada millón de habitantes. Además, a diferencia de la violencia ultraizquierdista, principalmente dirigida contra objetivos materiales, la violencia de Amanecer Dorado apuntaba principalmente a objetivos humanos (Rori, Georgiadou & Roumanias, 2022: 23).

Atendiendo a las características de la protesta ultraderechista en Grecia entre 2008 y 2018, lo primero que destaca es que todos los casos registrados son organizados principalmente por Amanecer Dorado y más del 95% de forma exclusiva por el partido neonazi. Ello contrasta con la violencia ultraderechista en otros países, donde la proporción de ‹‹lobos solitarios›› o violencia no vinculada a ningún grupo es mayor (Jupskås & Fielitz, 2022: 102-103). En cuanto al conflicto que motiva la protesta, destacan sobre todo cuatro temas: la realización de aniversarios y memorias por fechas o personas destacadas para el mundo ultraderechista (el 19,5% de los casos), la reivindicación de la identidad y cultura nacionales (16,6%), la protesta contra la inmigración y el multiculturalismo (13,8%) y la protesta contra oponentes políticos (9,8%) (Gráfico 1). Esto, comparado con el tipo de manifestación que se produce (demostrativa, confrontativa o violenta), revela que en los casos en los que la protesta se realiza por una cuestión de afirmación interna de la identidad, esta es mayoritariamente demostrativa (92,7%), mientras que cuando se realiza contra elementos percibidos como una amenaza interna o externa, esta tiende a reproducir dinámicas violentas (el 52,3% de las manifestaciones en las protestas contra amenazas externas y el 59, 1% en protestas contra amenazas internas). Cabe destacar que cuando la protesta es contra la amenaza a un deterioro de las condiciones materiales de existencia, la protesta reproduce de nuevo un carácter principalmente demostrativo (90,9%) (Tabla 1)[10].

10 Se ha recodificado la variable del tipo de conflicto que motiva la protesta ultraderechista para agrupar aquellos temas similares. Se han agrupado las variables en unas nuevas, denominadas: (1) ‹‹Afirmación interna›› (que incluye ‹‹Identidad nacional y cultura››; ‹‹Problemas familiares, religión y relaciones iglesia-Estado››; ‹‹Aniversarios y memoria››), señalando las apelaciones a la identidad nacional relativa a la población residente en el país; (2) ‹‹Afirmación externa›› (que incluye ‹‹Minorías nacionales en el extranjero e irredentismo››), en referencia a las apelaciones a la identidad nacional relativa a la población residente fuera del país o a la reclamación de territorios de otros Estados; (3) ‹‹Amenaza externa›› (incluyendo ‹‹Inmigración y multiculturalismo››; ‹‹Judíos, antisemitismo y antisionismo››; ‹‹Islam››; ‹‹Europa, integración europea y la UE (incluyendo el euro)››), relativo a aquellos elementos considerados ajenos a la nación y que la amenazarían desde fuera; (4) ‹‹Amenaza interna›› (que incluye ‹‹Población gitana y criminalidad gitana››; ‹‹Anticomunismo y antibolchevismo››; ‹‹Antielitismo y corrupción››; ‹‹Oponentes políticos››; ‹‹Derechos civiles››), relativo a aquellos elementos internos a la nación que la amenazarían desde dentro; (5) ‹‹Amenaza a las condiciones materiales de vida›› (que incluye ‹‹Industria, energía, agricultura y medioambiente››; ‹‹Políticas monetarias y economía (incluyendo impuestos)››; ‹‹Bancos››; ‹‹Bienestar, jubilación y sistema de pensiones››; ‹‹Sistema de salud››), en relación a aquellos elementos que consideran que amenaza a las condiciones materiales de existencia de la población nacional; y (6) ‹‹Otro›› (que incluye el resto de variables). Esta última categoría recoge aquellas variables minoritarias y/o que representan casos demasiado heterogéneos entre sí como para considerarlos parte de una lógica común. Debe

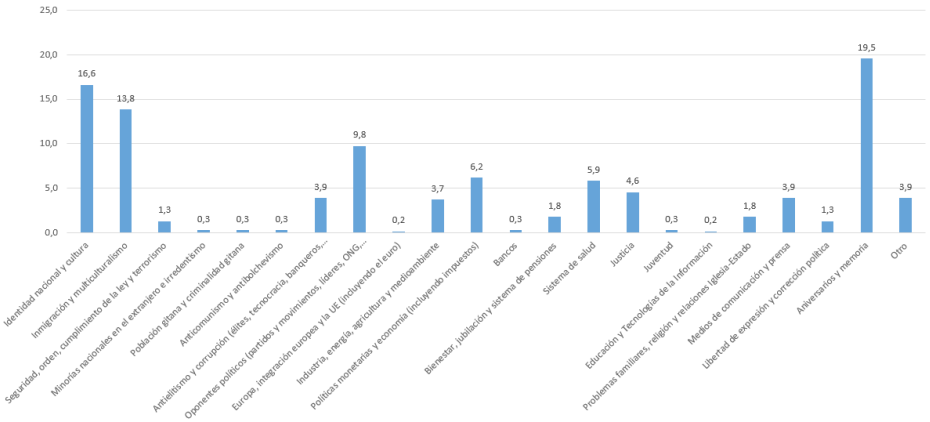


Gráfico 1. Tipo de conflicto que motiva la protesta ultraderechista en Grecia (2008-2018). Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

Atendiendo a otros aspectos, la protesta ultraderechista en Grecia tiende a ser más violenta en aquellos casos en los que se produce a nivel local (21,3%), frente a aquellos producidos a nivel estatal (15%) y, sobre todo, aquellos producidos a nivel supraestatal (ningún caso), que, por otra parte, es el tipo de protesta menos explorada por la ultraderecha griega. De todas formas, esta asociación es débil, como indica la V de Cramer (Tabla 2). También es relevante señalar que la proporción de protestas violentas en Grecia aumenta cuando estas se encuentran con algún tipo de contramanifestación, especialmente si es de carácter conflictivo, incluyendo acciones de boicot o neutralización (60%), pero también es destacable la proporción cuando la contramanifestación es de carácter verbal, con declaraciones públicas contra el evento o grupo que la organiza (38,5%). Estas proporciones de protesta violenta son mucho más elevadas que cuando no se produce ninguna contramanifestación (que son violentas en el 14,5% de los casos), lo que, por otra parte, es la situación mayoritaria en las protestas de ultraderecha en Grecia (casi el 90% de los casos registrados) (Tabla 3).

Estos datos evidencian, en primer lugar, la extensión de la protesta ultraderechista violenta en Grecia, marcada por el dominio organizativo de Amanecer Dorado y su elevada predisposición a la violencia, comprendida como un elemento ‹‹higiénico›› para el renacer racial de Grecia mediante la eliminación de aquellos elementos que perpetúan su decadencia (Vasilopoulou & Halikiopoulou, 2015: 55). En segundo lugar, esta violencia está orientada especialmente contra aquellos grupos humanos percibidos como amenazas a la nación, sean internas (oponentes políticos) o externas (inmigrantes). La extensión y apoyo a estas soluciones violentas (reflejado en el continuado éxito electoral de Amane-

decirse, también, que solo se toma la principal causa de la protesta, pues en la mayoría son motivadas por múltiples temas, pero no permitiría distinguir las lógicas que subyacen a la protesta violenta.

Tipo de manifestación		Afirmación interna	Afirmación externa	Amenaza externa	Amenaza interna	Amenaza a las condiciones materiales de vida	Otro	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	216	2	34	34	100	84	470	***	0,416
	%	92,7%	100,0%	39,5%	38,6%	90,9%	88,4%	76,5%		
Confrontativa	Recuento	7	0	7	2	5	2	23		
	%	3,0%	0,0%	8,1%	2,3%	4,5%	2,1%	3,7%		
Violenta	Recuento	10	0	45	52	5	9	121		
	%	4,3%	0,0%	52,3%	59,1%	4,5%	9,5%	19,7%		
Total	Recuento	233	2	86	88	110	95	614		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 1. Tipo de manifestación según el tipo de conflicto que motiva la protesta en Grecia (2008-2018). Sig. = * $\rho < 0.050$, ** $\rho < 0.010$, *** $\rho < 0{,}001$. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

Tipo de manifestación		Local	Nacional/estatal	Supranacional	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	349	105	11	465	0,089	0,082
	%	75,7%	78,9%	100,0%	76,9%		
Confrontativa	Recuento	14	8	0	22		
	%	3,0%	6,0%	0,0%	3,6%		
Violenta	Recuento	98	20	0	118		
	%	21,3%	15,0%	0,0%	19,5%		
Total	Recuento	461	133	11	605		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 2. Tipo de manifestación según el nivel en que se produce el evento en Grecia (2008-2018). Sig. = * $p < 0.050$, ** $p < 0.010$, *** $p < 0,001$. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

Tipo de manifestación		Ninguna	Verbal (declaración pública contra el evento o grupo)	Conflictiva (acciones de neutralización, boicot, confrontación/violencia)	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	438	7	24	469	***	0,249
	%	81,4%	53,8%	40,0%	76,8%		
Confrontativa	Recuento	22	1	0	23		
	%	4,1%	7,7%	0,0%	3,8%		
Violenta	Recuento	78	5	36	119		
	%	14,5%	38,5%	60,0%	19,5%		
Total	Recuento	538	13	60	611		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 3. Tipo de manifestación según el tipo de contramanifestación que se produce en Grecia (2008-2018). Sig. = * $\rho < 0.050$, ** $\rho < 0.010$, *** $\rho < 0{,}001$. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

cer Dorado hasta 2019) solo se pueden entender por la profundidad de la crisis financiera en Grecia devenida en crisis orgánica, favoreciendo la aceptabilidad social de soluciones extremistas. A ello, además, ha contribuido especialmente la mencionada legitimación de los discursos ultraderechistas por parte de Nueva Democracia, permitiendo que el discurso de Amanecer Dorado tuviese una cierta normalización y, a la vez, permaneciese como un actor antisistema ajeno a los partidos principales, vistos como los causantes de la crisis (Saull, 2023b: 333-334). La combinación de lógicas de colaboración (la inclusión de LAOS en el gobierno de 2011) y competición (la adopción de retórica ultraderechista por parte de Nueva Democracia para intentar absorber a su masa de votante) en el amplio espectro de la derecha griega han contribuido a una normalización de los discursos y actores de ultraderecha.

La protesta violenta de la ultraderecha en Grecia, además, se caracteriza por una mayor presencia a nivel local, donde las amenazas son percibidas de manera más intensa debido a su cercanía. Otro factor que contribuye a la violencia en las protestas ultraderechistas es la presencia de una contramanifestación, especialmente si realiza acciones de boicot o neutralización. Un contexto como este visibiliza la polarización entre sectores de la población, de modo que se produce una retroalimentación de la necesidad de afirmarse ante el exogrupo en la que la posibilidad de la violencia aumenta. De hecho, la polarización afectiva en Grecia es una de las más altas de Europa, lo que es posible que funcione (junto a otros factores) como un elemento que moviliza a la violencia ultraderechista (Jupskås & Fielitz, 2022: 107-108).

4.2. Reino Unido: Brexit, English Defence League y violencia anti-islámica

Pasemos al caso del Reino Unido. La literatura señala a la English Defence League (EDL) como el grupo que más protestas ha encabezado, representando en la base de datos del FARPO más del 80% de los casos , siendo además el grupo que más protestas numerosas (de más de 100 participantes) ha logrado organizar, con más de 100 y superando ampliamente al resto de organizaciones de ultraderecha, de acuerdo a Allchorn y Dafnos (2020: 13-14). Esta organización se funda en 2009 tras reunir a diversos grupos de hooligans de fútbol, convirtiéndose en su líder de manera oficiosa Tommy Robinson. Para el año 2015, esta organización se encontraba en una situación de declive tras ser una de las más activas en Reino Unido los años anteriores, en buena medida debido a la renuncia de Robinson y Kevin Carroll, las principales figuras del grupo. No obstante, la organización sigue activa en la actualidad y la red de militantes que ha construido sigue teniendo una importante capacidad de movilización, como se ha evidenciado en las protestas organizadas por la ultraderecha en julio de 2024, instigadas en buena medida por Robinson (Pearson, 7 de agosto de 2024).

Esta formación se enmarca en el contexto más general de la evolución interna de la ultraderecha británica, que, tras un período en el que busca replicar el modelo organizativo del fascismo clásico, se adapta y progresivamente adopta los métodos propios de la derecha radical contemporánea, superando la fase de marginación en que existieron grupos como el National Front o, hasta el siglo XXI, el British Na-

tional Party (BNP). Es, de hecho, la aproximación a la clase media alta y al establishment a partir de una reacción contra el declive brtitánico como potencia mundial, abandonando el paramilitarismo, lo que permite un auge de la ultraderecha en Reino Unido desde los primeros años del nuevo siglo (Worth, 2019: 139). A ello contribuyó en buena medida el intento del Partido Conservador de incorporar elementos del discurso ultraderechista a su repertorio, especialmente durante la presidencia de Margaret Thatcher (Hall, 1979; Mondon & Winter, 2023: 79-80). La renovación de la ultraderecha británica cristaliza con la aparición del United Kingdom Independence Party (UKIP), centrado especialmente alrededor de la vieja demanda del nacionalismo inglés de abandonar la Unión Europea, interpretada como una organización incapaz de asegurar la victoria del capital sobre el trabajo como sí había logrado Thatcher (Renton, 2019: 71-72), culminando en el Brexit.

El Brexit, aunque es una demanda con recorrido en la derecha británica, se materializa en el contexto de la crisis que sufre Reino Unido a partir de la Gran Recesión y las políticas de austeridad aplicada por sus gobiernos. La profunda contracción de la economía (una caída del 6% en el PIB entre 2008 y 2009), la severa reducción de los salarios reales (cercana al 10% entre 2008 y 2014), los recortes a los gobiernos locales (con las dificultades para proveer a la población los servicios públicos) y la mayor restricción del crédito produjeron un deterioro de la calidad de vida de la población británica (Saull, 2023b: 252-254). Esta crisis y su gestión aumentaron la sensación de abandono (originada décadas atrás) de importantes sectores de la población británica, resultando el referéndum en un medio para expresar el descontento y evidenciar la crisis hegemónica que experimentaba Reino Unido (Worth, 2019: 156). El Brexit, a su vez, ha sido un catalizador en la normalización del discurso ultraderechista, ya que rápidamente se entendió el debate relacionado de manera directa con el control de la inmigración, reflejado en el lema de Nigel Farage que rezaba ‹‹We want our country back›› y en una campaña centrada en el alarmismo y el miedo ante la inmigración musulmana y la pérdida de la cultura británica (Saull, 2023b: 265)[11]. Los efectos del referéndum se manifestaron, además, en un aumento del racismo y la intolerancia que habían permanecido latentes en la sociedad británica, aumentando los delitos de odio y la discriminación por motivos religiosos y xenófobos (Worth, 2019: 153). El Brexit situó a la inmigación (principalmente a la población musulmana) como el ‹‹grupo diana›› de los discursos de odio, funcionando como chivo expiatorio al que culpar de los problemas de la sociedad británica, siendo ‹‹los más eficaces partidarios de Salir›› de la Unión Europea aquellos ‹‹que afirmaban que al excluir a los inmigrantes, los ingresos de los votantes blancos aumentarían›› (Renton, 2019: 85). La agitación del miedo con un chivo expiatorio en un contexto de declive económico ha contri-

11 De hecho, el liderazgo en el Partido Conservador y la presidencia de Boris Johnson entre 2019 y 2022 resulta paradigmática en este proceso de normalización, al intentar cooptar a las fuerzas de ultraderecha adoptando su discurso para obtener el apoyo popular necesario con el que navegar la crisis orgánica de la sociedad británica (Worth, 2022). De hecho, esta operación provocó que Tommy Robinson apoyase la candidatura presidencial de Johnson en 2019. Se puede considerar este proceso como una ‹‹radicalización de lo hegemónico››, siguiendo la terminología de Mondon y Winter (2023: 223-224).

buido en buena medida a una radicalización violenta ultraderechista.

Este es el contexto general en el que se puede interpretar la protesta violenta de la ultraderecha en Reino Unido, siendo esta principalmente dirigida por un movimiento social ajeno a los conservadores, al neofascista BNP o al UKIP como la EDL. Esta organización se caracteriza especialmente por su ultranacionalismo inglés, que canaliza mediante el rechazo de la inmigración de carácter musulmán, entendida como una amenaza a la identidad inglesa nativa (Copsey, 2010), siendo este el principal tema de su movilización política. Así, la EDL desarrolla un discurso decadentista sobre la nación británica que sería consecuencia de la inmigración musulmana promovida por las élites, de modo que, además de nativista, su ideología es conspirativista (Richardson, 2013: 116). Es característico de la organización el liderazgo carismático ejercido por Tommy Robinson, entendido por sus seguidores como la voz que les guiaba en su misión, lo que le permitió organizar a un auténtico movimiento de masas (a ello contribuyó su presencia recurrente en las calles y su contacto cercano con los militantes de la ultraderecha británica). No obstante, una vez deja la EDL, este culto al líder se transforma en un rechazo a su figura por traidor (Cleland, 2020), aunque sigue siendo un portavoz clave de la ultraderecha británica.

De acuerdo al FARPO, este país es el que un mayor porcentaje de protestas violentas de ultraderecha ha tenido entre los años 2008 y 2018, con más del 40% del total, lo que en números absolutos supone 81 manifestaciones de 201 registradas en su base de datos (Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022). Igualmente, entre 2009 y 2019, una base de datos diferente recoge un total de 2.185 movilizaciones de la ultraderecha, constituyendo 1.216 protestas callejeras (Allchorn & Dafnos, 2020). Siendo la EDL el grupo de ultraderecha con mayor actividad en las calles y a la hora de realizar protestas, ello explica que el 74% de las protestas de la ultraderecha en Reino Unido entre 2008 y 2018 tuviesen como tema principal el Islam. De hecho, la mayoría de temas que movilizan a la protesta de la ultraderecha en Reino Unido consisten en amenazas percibidas como externas a la Nación, esto es, producidas por la inmigración y por el islam (suponiendo ambas el 80% de las protestas en el período). Tras estos casos, el 8,5% de las protestas se debían a cuestiones de seguridad, orden, cumplimiento de la ley y terrorismo. En cambio, las amenazas internas a la Nación, producidas por rechazo a los oponentes políticos de la ultraderecha (partidos, movimientos, ONG, etc.) motivaron solo el 5% de las protestas en el período. En todo caso, son aquellas situaciones que se perciben como una amenaza a la Nación las que movilizan de manera sistemática a la protesta en Reino Unido, contrastando con la escasez de eventos de conmemoración o de afirmación de la identidad propia (Gráfico 2)[12]. Igualmente, las protestas violentas se han producido en mayor proporción cuando la organización que dirigía el evento era un movimiento social (el 45,5% de las veces) en relación al porcentaje de protesta violenta cuando la organización que dirigía

12 Dado que la inmensa mayoría de protestas se relacionan con la inmigración y el islam, analizar la distribución de protestas demostrativas, confrontativas y violentas por el tipo de conflicto arroja poca información, pues sigue una proporción similar a la del total de la muestra. Por ello no se ha incluido un gráfico con esta información.

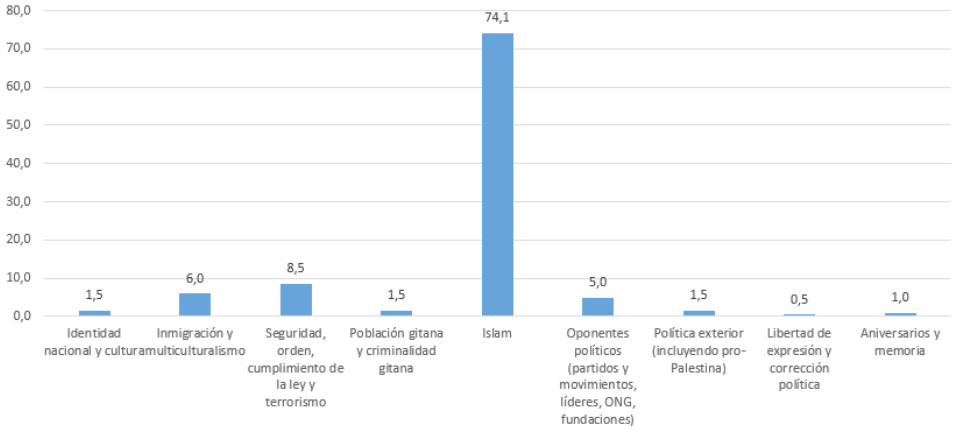


Gráfico 2. Principal conflicto que motiva la protesta ultraderechista en Reino Unido (2008-2018). Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

Tipo de manifestación		Partido político	Movimiento social organizado	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	28	80	108	**	0,240
	%	80,0%	48,5%	54,0%		
Confrontativa	Recuento	1	10	11		
	%	2,9%	6,1%	5,5%		
Violenta	Recuento	6	75	81		
	%	17,1%	45,5%	40,5%		
Total	Recuento	35	165	200		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 4. Tipo de manifestación según el tipo de organización que lidera la protesta en Reino Unido (2008-2018). Sig. = * $\rho < 0.050$, ** $\rho < 0.010$, *** $\rho < 0,001$. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

el evento era un partido político (el 17,1% de las veces)[13] (Tabla 4).

Otro elemento que contribuye a entender las causas de la protesta violenta en Reino Unido es la presencia de una contramanifestación, de forma que cuando se produce, aumenta el porcentaje de manifestaciones violentas: cuando no hay contramanifestación, son violentas un 19% de las manifestaciones de la ultraderecha en Reino Unido; cuando hay una contramanifestación con contestación verbal, el porcentaje de manifestaciones violentas

13 El partido que más protestas ha dirigido en este período es Britain First, escisión del BNP.

Tipo de manifestación		Ninguna	Verbal (declaración pública contra el evento o grupo)	Conflictiva (acciones de neutralización, boicot, confrontación/ violencia)	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	16	10	71	97	**	0,190
	%	76,2%	43,5%	49,3%	51,6%		
Confrontativa	Recuento	1	4	5	10		
	%	4,8%	17,4%	3,5%	5,3%		
Violenta	Recuento	4	9	68	81		
	%	19,0%	39,1%	47,2%	43,1%		
Total	Recuento	21	23	144	188		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 5. Tipo de manifestación según el tipo de contramanifestación que se produce en Reino Unido (2008-2018). Sig. = * ρ < 0.050, ** ρ < 0.010, *** ρ < 0,001. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

Tipo de manifestación		Local	Nacional/ estatal	Total	Sig.	V de Cramer
Demostrativa	Recuento	10	98	108	***	0,293
	%	29,4%	59,0%	54,0%		
Confrontativa	Recuento	6	5	11		
	%	17,6%	3,0%	5,5%		
Violenta	Recuento	18	63	81		
	%	52,9%	38,0%	40,5%		
Total	Recuento	34	166	200		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		

Tabla 6. Tipo de manifestación según el nivel en que se produce el evento en Reino Unido (2008-2018). Sig. = * ρ < 0.050, ** ρ < 0.010, *** ρ < 0,001. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Castelli Gattinara, Froio & Pirro, 2022).

es del 39,1%; y cuando hay una contramanifestación de carácter conflictivo, el porcentaje de manifestaciones violentas constituye el 47,2% del total (Tabla 5). El nivel al que se produce el evento también ofrece información sobre las características de la protesta violenta en Reino Unido, siendo el 52,9% de las manifestaciones a nivel local de carácter violento, mientras que de las producidas a nivel estatal, el porcentaje de manifestaciones violentas supone el 38% (Tabla 6).

Estos datos ofrecen información para entender la dinámica de las protestas violentas de la ultraderecha en Reino Unido. Como se ve, la razón principal que moviliza a las organizaciones de ultraderecha (principalmente a la EDL) entre 2008 y 2018 es la amenaza percibida por la población musulmana, lo que se relaciona con los pánicos identitarios desatados por la campaña del Brexit. Igualmente, la alta capacidad de movilización de la EDL se relaciona con una elevada proporción de protestas violentas dirigidas por esta organización, en comparación con un porcentaje menor en aquellas dirigidas por partidos políticos, lo que se debe a su menor fortaleza organizativa, así como a que, en tanto concurren a elecciones, su disposición a la violencia es menor, ya sea por evitar una demonización similar a la experimentada por el BNP, ya sea por evitar consecuencias legales que les expulsen del proceso.

Al igual que en Grecia, los elevados niveles de violencia se conectan con la presencia de una organización con una importante extensión y que no rehúye el uso de la misma. Igualmente, el crecimiento de estas organizaciones se conecta con un contexto de crisis, más (en Grecia) o menos (en Reino Unido) pronunciada. Lo que diferencia ambos países es que, aunque ambos reaccionan de forma violenta ante lo que perciben como amenazas externas (o sea, la inmigración), en Grecia también hay una importante reacción contra las amenazas internas. Ello se relaciona con la ideología de las organizaciones que dirigen las protestas, pues Amanecer Dorado tiene una estructurada alrededor del fascismo en la que la violencia se dirige contra la izquierda y contra los extranjeros (Saull, 2023b: 332), mientras que en la EDL ‹‹el factor unificador es el racismo anti-islámico más que un programa fascista›› (Renton, 2019: 220).

La protesta violenta de la ultraderecha en el Reino Unido, además, se caracteriza por una mayor presencia a nivel local, siguiendo un patrón similar a Grecia. Además, esto viene favorecido por la estructura de la EDL, dividida por áreas regionales, con la que busca promover el enfrentamiento contra la población musulmana a partir de conflictos localizados en el espacio (Copsey, 2010). También en una tendencia similar a Grecia, la violencia en las protestas ultraderechistas aumenta con la presencia de una contramanifestación, que, debe notarse, suele ser más habitual en Reino Unido que en el país heleno.

5. Conclusiones

A lo largo del artículo hemos analizado la radicalización violenta ultraderechista a través de los casos de la protesta de ultraderecha en Grecia y Reino Unido. Tal como mostramos, en ambos países estos procesos se producen con el telón de fondo de la crisis capitalista, que constituye la ventana de oportunidad para la ultraderecha para canalizar el descontento de

la población de demandas contra la inseguridad económica a demandas contra la inseguridad cultural e identitaria, algo especialmente notable en la campaña del Brexit. Igualmente, en ambos países juegan un papel decisivo las estrategias de colaboración y competición de Nueva Democracia y el Partido Conservador a la hora de facilitar la expansión de los temas propios de la ultraderecha, contribuyendo a legitimar la movilización contra la inmigración.

En ambos casos, la presencia de una organización con fortaleza como para movilizar a amplias capas de la población en torno a sus reivindicaciones es un factor decisivo. No obstante, Amanecer Dorado se estructuraba como un partido-milicia, mientras que la EDL se mantenía como un movimiento social ajeno al ámbito parlamentario. Ello se relaciona con las diferentes motivaciones que explican la protesta de ambas organizaciones, siendo una movilización centrada casi exclusivamente en una cuestión en el caso de la EDL, y una movilización más integral en el caso de Amanecer Dorado. No obstante, ambas organizaciones coinciden en recurrir en mayor proporción a la violencia cuando se movilizan por cuestiones que perciben como amenazas a la nación. En el caso de la EDL, la inmigración y el islam, percibidos como amenazas externas a la nación inglesa, mientras que Amanecer Dorado reacciona de forma violenta en una proporción similar contra estas amenazas externas y contra las percibidas como amenazas internas (principalmente sus opositores políticos).

Otros factores que ayudan a comprender la protesta violenta en estos países son la presencia de contramanifestantes y el nivel del evento, siendo las contramovilizaciones verbales o conflictivas en las que una mayor proporción de protestas violentas se producen, así como aquellas que ocurren al nivel local. En estos casos, el grado de polarización es considerablemente mayor que en otros contextos (manifestaciones a nivel nacional o sin presencia de contramanifestantes) debido a la experiencia más intensa de los conflictos por quienes se manifiestan, tanto por responder a problemáticas que se tienden a percibir que afectan más por su cercanía (cuando es a nivel local), así como por la tendencia a reafirmarse en el endogrupo al enfrentar el rechazo del exogrupo (cuando se da una contramanifestación).

Estos ejemplos sirven para mostrar que la radicalización violenta de la ultraderecha, en primer lugar, no se reduce a los casos más extremos como el terrorismo de «lobos solitarios» como Breivik, sino que tiene una dimensión mayor y explícitamente colectiva. No en vano, la radicalización violenta de la ultraderecha se desenvuelve en un contexto marcado por la confluencia entre la crisis capitalista, con el aumento de la población sobrante y la competición entre trabajadores nativos y extranjeros, y la crisis político-institucional —como muestran el caso de la ruptura del sistema de partidos griego o el Brexit—, legitimándose a través de la extensión de los discursos ultraderechistas —con la asistencia de la derecha radical parlamentaria y la derecha conservadora—. Igualmente, la radicalización violenta tiene que ser pensada y tiene que ser «viable», donde la polarización y la exacerbación de sentimientos de miedo, frustración o venganza, sea en el contexto inmediato de la protesta, sea en el contexto amplio de la socialización del individuo, facilitan el recurso a la violencia como un

instrumento aceptable para un fin percibido como deseable. La naturaleza de la radicalización violenta, ejemplificada a través de los casos griego y británico, muestra la necesidad de comprender las causas macro, meso y micro que la motivan. Futuras investigaciones habrán de profundizar en análisis de otros casos particulares.

Aunque todavía lejos de ser un recurso sistemático de la ultraderecha contemporánea como en el caso del fascismo clásico, la violencia es un elemento en crecimiento. El actual contexto de crisis y de guerra genera constantes ventanas de oportunidad para el crecimiento de la ultraderecha, de modo que la prevalencia de su ala neofascista dependerá en buena medida de la capacidad de los Estados capitalistas de cumplir con las demandas de seguridad inducidas por la derecha radical, además, por supuesto, de la agencia de las propias fuerzas neofascistas. En este sentido, las formas de violencia política de las que se sirva un movimiento de masas de extrema derecha que se plantee seriamente la toma del poder difícilmente pueden depender de la propaganda por el hecho del terrorismo aceleracionista. En definitiva, el auge, por un lado, de una violencia política de masas organizada capaz de socializar políticamente a cada vez más sectores de la población y, por otro, el continuo crecimiento de la derecha radical institucional en este contexto de crisis, aumentan la probabilidad de un retorno de formas políticas explícitamente fascistas, en tanto que «el fascismo tiene un objetivo claro» y la ultraderecha «necesitará cada vez más uno» (Renton, 2019: 225). El «estrangulamiento del tigre» ya ha comenzado.

6.Bibliografía

Alcalde, Á. (2016). "La tesis de la brutalización (George L. Mosse) y sus críticos: un debate historiográfico", *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea,* vol. 15, 17-42.

Allchorn, W. & Dafnos, A. (2020). "Far-Right Mobilisations in Great Britain: 2009-2019", *CARR FRGB Dataset Research Report 2020*.

Antón-Mellón, J., & Parra, I. (2015). "Concepto de radicalización", en J. Antón-Mellón (Ed.), *Islamismo yihadista. Radicalización y contrarradicalización*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 17-37.

Antón-Mellón, J. & Seijo Boado, I. (2024). *La nostalgia fascista del futuro. La derecha radical europea*. Barcelona: Icaria.

Ayers, A. J. (2023). "'The Fire This Time': The Long Crisis of Neoliberal Capitalist Accumulation and Spectre of Neofascism". *Critical Sociology*, vol. 50(3), 413-435.

Betancor, V., Leyens, J. P., Rodríguez, A., & Quiles, M. N. (2003). "Atribución diferencial al endogrupo y al exogrupo de las dimensiones de moralidad y eficacia: un indicador de favoritismo endogrupal". *Psicothema*, vol. 15(3), 407-413.

Bjørgo, T., & Aasland Ravndal, J. (2019). "Extreme-right violence and terrorism: Concepts, patterns, and responses". *ICCT Policy Brief* .

Blanco Navarro, J. M. (2020). "Delito de odio. El 'hermano pequeño' del terrorismo de extrema derecha", en A. M. González, J. A. López-Ruiz, & M. P. García, *Seguridad ciudadana, desviación social y sistema judicial*. Madrid: Dykinson, 93-102.

Carretero, N., & Lezcano, A. (20 de enero de 2024). "Terror invisible: así es la nueva ola de ultraderecha que defiende pasar a la acción". *El País*. Disponible en: https://elpais.com/eps/2024-01-20/terror-invisible-asi-es-la-nueva-ola-de-ultraderecha-que-defiende-pasar-a-la-accion-terrorista.html

Casals, X. (2003). *Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la guerra fría a la era de la globalización.* Barcelona: Crítica.

Castelli Gattinara, P., & Beau, I. (2024). "The Comparative Far-Right Protest Project". *Peril/C-Rex Webinar Series. Researching the Far-Right: Methods and Ethics*. Disponible en: https://www.sv.uio.no/c-rex/english/news-and-events/events/webinar/webinar-methods-ethics/2024-02-22-measuring-far-right-protest-mobilisation.html

Castelli Gattinara, P., Froio, C., & Pirro, A. L. (2022). "Far-right protest mobilisation in Europe: Grievances, opportunities and resources". *European Journal of Political Research,* vol. 61(4), 1019-1041.

Cleland, J. (2020). "Charismatic leadership in a far-right movement: an analysis of an English Defence League message board following the resignation of Tommy Robinson". *Social Identities,* vol. 26(1), 48-60.

Collins, R. (2013). "Entering and leaving the tunnel of violence: Micro-sociological dynamics of emotional entrainment in violent interactions". *Current Sociology,* vol. 61(2), 132-151.

Copsey, N. (2010). *The English Defence League: Challenging our country and Values of Social Inclusion, Fairness and Equality*. London: Faith Matters.

Corradi, C. (2020). *Sociología de la violencia. Identidad, modernidad, poder.* Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Daniels, L.-A., & Vlaskamp, M. (2021). *Violencia política: hacia una comprensión compleja del fenómeno.* Madrid: Tecnos.

Della Porta, D. (1995). *Social movements, political violence and the State: a comparative analysis of Italy and Germany.* Cambridge: Cambridge University Press.

Dinas, E. M. (2019). "Waking up the golden dawn: does exposure to the refugee crisis increase support for extreme-right parties?". *Political analysis,* vol. 27(2), 244-254.

Elizalde, R. M. (2021). "El asalto al Capitolio de Washington, crónica de la violencia anunciada". *Revista Política Internacional,* vol. 3(2), 43-54.

Forti, S. (2021). *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Friberg, D. (25 de julio de 2015). "Låt äventyret börja". *Motpol. Metapolitik för 20-Talet*. Disponible en: https://motpol.nu/danielfriberg/2015/07/25/lat-aventyret-borja/

García-Magariño, S. (2022). *Violencia, política y religión. Una teoría general de la radicalización violenta.* Madrid: Catarata.

Georgiadou, V. (2013). "Right-Wing Populism and Extremism: The Rapid Rise of 'Golden Dawn' in Crisis-Ridden Greece", en R. Melzer, & S. Serafin, *Right-Wing Extremism in Europe*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 75-103.

Goldstein, A. (2021). "Right-wing opposition to the mainstream radical right: the cases of Hungary and Poland". *Journal of*

Contemporary Central and Eastern Europe, vol. 29, 23-40.

Hall, S. (1979). "The Great Moving Right Show". *Marxism Today,* 14-20.

Hobsbawm, E. (1999). "Las reglas de la violencia", en E. Hobsbawm, *Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz*. Barcelona: Crítica, 193-198.

Huddy, L. (2001). "From social to political identity: A critical examination of social identity theory". *Political psychology,* vol. 22(1), 127-156.

Jupskås, A. R., & Fielitz, M. (2022). "Far-Right Violence in Greece in Comparative Perspective". *Journal of Modern Greek Studies,* vol. 40, 95-115.

Kalmoe, N. P., & Mason, L. (2022). *Radical American Partisanship. Mapping Violent Hostility, Its Causes and the Consecuences for Democracy.* Chicago & London: The University of Chicago Press.

Kalyvas, S. (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Madrid: Akal.

Leoni, F. (2022). *Fascistas made in USA*. Barcelona: El Viejo Topo.

Leser, J., & Spissinger, F. (2020). "The functionality of affects: conceptualising far-right populist politics beyond negative emotions". *Global Discourse*, vol. 10(2), 325-342.

Macklin, G. (2022). "'Praise the saints': The cumulative momentum of transnational extreme-right terrorism", en J. Dafinger, & M. Florin, *A Transnational History of Right-Wing Terrorism. Political Violence and the Far-Righ in Eastern and Western Europe since 1900*. London: Routledge, 215-241.

Malešević, S. (2020). *El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

Malthaner, S. (2017). "Radicalization: The evolution of an analytical paradigm". *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie,* vol. 58(3), 369-401.

Mau, S. (2023). *Compulsión muda. Una teoría del poder económico del capital.* Madrid: Ediciones Extáticas.

Millán, E. (7 de agosto de 2024). "La convocatoria hoy de 30 manifestaciones antiinmigración eleva la tensión en el Reino Unido". *El País*. https://elpais.com/internacional/2024-08-07/la-convocatoria-hoy-de-30-manifestaciones-antiinmigracion-eleva-la-tension-en-el-reino-unido.html

Miller, L. (2023). *Polarizados. La política que nos divide.* Madrid: Deusto.

Mondon, A., y Winter, A. (2023). *La democracia reaccionaria. La hegemonización del racismo y la ultraderecha populista*. Madrid: Ediciones Morata.

Mudde, C. (2021). *La ultraderecha hoy*. Barcelona: Paidós.

Olascoaga, O. G. (2018). "Presencia del neofascismo en las democracias europeas contemporáneas". *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas,* vol. 162, 3-20.

Ortiz, R. D. (2022). "El terrorismo de extrema derecha: concepto, tipología y perspectivas". *Cuadernos de estrategia,* vol. 214, 185-200.

Paxton, R.O. (2019). *Anatomía del fascismo*. Madrid: Capitán Swing.

Pearson, E. (7 de agosto de 2024). "Britain disoder: Why we need to take Far Right violence more seriously". *Internatio-*

nal Center for Counter-Terrorism. https://www.icct.nl/publication/british-disorder-why-we-need-take-far-right-violence-more-seriously

Peregil, F. & Arbide, H. (27 de junio de 2023). "Inmigrantes que 'diluyen la identidad helena' y neutralidad en Ucrania: así es el ideario del grupo ultra que irrumpe en el Parlamento griego". Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-06-27/inmigrantes-que-diluyen-la-identidad-helena-y-neutralidad-en-ucrania-asi-es-el-ideario-del-grupo-ultra-que-irrumpe-en-el-parlamento-griego.html

Piqueras, A. (2022). *De la decadencia de la política en el capitalismo terminal*. Barcelona: El Viejo Topo.

Renton, D. (2019). *The New Authoritarians. Convergence on the Right*. London: Haymarket Books.

Richardson, J. E. (2013). "Ploughing the Same Furrow? Continuity and Change on Britain's Extreme-Right Fringe", en R. Wodak, M. KhosraviNik & B. Moral (Ed.), *Right-Wing Populism in Europe. Politics and Discourse*. London: Bloomsbury, 105-119.

Rori, L., Georgiadou, V., & Roumanias, C. (2022). "Political Violence in Crisis-Ridden Greece: Evidence from the Far Right and the Far Left". *Journal of Modern Greek Studies,* vol. 40(1), 1-37.

Saull, R. (2023a). *Capital, Race and Space Volume 1. The Far-Right from Bonapartism to Fascism*. Leiden: Brill.

Saull, R. (2023b). *Capital, Race and Space Volume 2. The Far-Right from "Post-Fascism" to Trumpism*. Leiden: Brill.

Solano, L. G., & Elvira, D. A. (2024). "Crisis capitalista, giro penal del Estado y ultraderecha. Apuntes desde la crítica de la economía política". *Hastapenak: Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente-Gaurko Historiaren Aldizkari Kritikoa*, vol. 7, 48-83.

Smith, H. (8 de octubre de 2020). "'Nadie sabe cuántos asesinatos cometieron': hablan las víctimas del grupo neonazi Amanecer Dorado". *Eldiario.es*. Disponible en: https://www.eldiario.es/internacional/nadie-asesinatos-cometieron-hablan-victimas-grupo-neonazi-amanecer-dorado_1_6279546.html

Tilly, C. (2007). *Violencia colectiva.* Madrid: Hacer.

Valentim, V. (2021). "Parliamentary representation and the normalization of radical right support". *Comparative political studies,* vol. 54(14), 2475-2511.

Vasilopoulou, S., & Halikiopoulou, D. (2015). *The Golden Dawn's 'Nationalist Solution'. Explaining the Rise of the Far Right in Greece*. New York: Palgrave.

Worth, O. (2019). *Morbid Symptoms. The Global Rise of the Far-Right*. London: Zed Books.

Worth, O. (2022). "The great moving Boris show: Brexit and the mainstreaming of the far-right in Britain". *Globalizations,* vol. 20(5), 814-828.

DEONTIC POWERS AND REASONS TO ACT INDEPENDENTLY OF DESIRE

PODERES DEÓNTICOS Y RAZONES PARA ACTUAR INDEPENDIENTEMENTE DEL DESEO

Isabel Victoria Lucena Cid
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
miluccid@upo.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Política, poderes deónticos, hechos institucionales, sistema político, función de estatus
Keywords: Policy, deontic power, institutional facts, political system, status function

Resumen: Este artículo analiza la tesis searliana según la cual todo poder político representa un poder deóntico relacionado con los derechos, los deberes, las obligaciones, las autorizaciones, los permisos, la autoridad, etc. Esta concepción nos conduce a entender el poder y las funciones de estatus como un fenómeno irremediablemente vinculado a la aceptación colectiva y las reglas constitutivas. Nociones como la constitución lingüística de los poderes deónticos, las razones para actuar independientemente del deseo, la racionalidad normativa y la aceptación colectiva de los sistemas políticos, constituyen algunas de las piedras angulares que se desarrollan en este trabajo dentro de un marco conceptual cuya visión realista de lo social, institucional y político tiene importantes implicaciones en el ámbito de la filosofía jurídica, política y moral.

Abstract: This article analyses Searle's thesis which states that all political power represents a deontic power related to rights, duties, obligations, authorizations, permissions, authority, etc. This concept leads us to understand that power and constituent status functions are irremediably tied to collective acceptance and constitutive rules. Notions like the linguistic constitution of deontic powers, reasons to act independently of desire, normative rationality, and the collective acceptance of political systems, constitute some of the cornerstones of a conceptual frame whose realistic vision of the social, institutional, and political has important implications in the fields of legal, political, and moral philosophy.

1. Introduction

In 2003 John Searle published a book titled *Social Ontology and Political Power* (Schmitt, 2003) and in the same year, it appeared under the title *Ontologia Sociale e Potere Politico* in the collective volume gathered by Paolo di Lucía, *Ontologia Sociale. Potere deontico e regole constitutive* (Searle, 2003), [Social Ontology. Deontic Power and Constitutive Rules]. Searle's objective is to explain "the ontology of political power" and, "the role of language in the constitution of said power". The main thesis of his book *The Construction of Social Reality* deals implicitly with a political ontology, or at least, a relationship between a possible political philosophy and the philosophy of language. The question he asked on that occasion aimed to respond to the following: how we can reconcile a determined conception that we have of ourselves, as conscious, intelligent, free, social, and political agents, with the conception of the world, based on the fact that it is formed by physical particles which lack intelligence and meaning and are subject to fields of force. In this new work, a further step forward is taken, and the same question is asked again, introducing a new element: how can a political reality exist in a world formed of physical particles?

To answer this new question, Searle re-examines the ontological postulates described in his work, *The Construction of Social Reality,* and re-establishes the ontological and epistemological distinctions that served as a base to explain institutional facts and institutional reality. Back then, he expressed his argument in the following way: certain elements of reality are independent of the observer: force, mass, gravitational attraction, photosynthesis, and chemical bonds. Other elements, by contrast, are relative to the observer and their existence depends on the attitudes, thoughts, and intentions of the observers, users, creators, designers, measurers, vendors or, more generally speaking, the intentional, conscious agents. Examples of elements that depend on the observer are money, property, marriage, language, etc. (Searle, 2003).

Searle adds another distinction to this one, basing it, on the one hand, on epistemic objectivity and subjectivity and ontological objectivity and subjectivity on the other. Epistemic objectivity and subjectivity are properties of assertions. In this sense, an assertion can be determined independently of the sentiments, attitudes, preferences, etc. For example, saying that "Sánchez is the current President of Spain" is epistemically objective whereas saying "Sánchez is a better president than Rajoy, his predecessor" is epistemically subjective. With regards to ontological objectivity and subjectivity, these are properties of reality. Therefore, pain and hunger are ontologically subjective because their existence depends on the fact that the one experiencing them is a human or animal subject. However, mountains, beaches, and molecules are ontologically objective seeing as their existence does not depend on subjective experiences.

The justification of these distinctions within the framework of this discussion leads Searle to the conclusion that

> virtually all of our political reality is relative to the observer. Elections, parliament, government leaders, or revolution, for example, are what they are only if people adopt certain attitudes toward them. Therefore, all social or political phenomena contain an ontologically subjective aspect. However, ontological subjectivity as such does not imply epistemic

> subjectivity. There can exist a field, such as politics or economics, within which the entities may be ontologically subjective even though, through them, epistemically objective assertions can always be made. Thus, the presidency of the USA is a phenomenon that is relative to an observer, it is ontologically objective. In contrast: the fact that Barack Obama is currently the US President is an epistemically objective fact (Searle 2004: 94).

Based on the previous considerations, in this work, we aim to examine the Searlean vision of political reality. To achieve this, we re-examine a series of suppositions that Searle writes about in his primary thesis on political ontology: all political power is a matter of status functions and therefore all political power is deontic power. Given that all political power is a matter of status functions, all political power, even if it is exerted from above, comes from below. The systems of status functions work, at least in part, because the recognition of deontic powers provides us with reasons to act independently of desire. These principles offer us, as we can sometimes see, an explication or justification of the conceptual apparatus through which we deduce the passing of brute facts to social or institutional facts and from there to the specificness of political facts.

2. The Searlean Concept of Political Power.

Searle's final goal in his work "*Social Ontology and Political Power*" is not to contribute to the discussion of Western political philosophy but to explore some of the existing relationships between the ontology of social reality and the specific form of social reality that supposes political power. His objective is to show how political reality is a special case of social and institutional reality. Some of the fundamental notions he uses to describe and analyse the nature of social and institutional reality could give us ideas on the nature of political reality. Therefore, we highlight four categories that could help us in this endeavour. The first of them is the notion of status function along with that of institutional facts and deontic powers. Associated with these notions is that of collective acceptance, which constitutes and maintains the status functions. The third idea is related to the role of language in the constitution of social and political phenomena. Lastly, the fourth category is related to the peculiar human habit of creating reasons to act independently of desire. Searle attributes human beings with the capacity for recognising and being motivated by reasons, for an action, which does not correspond to their first inclinations, desires, or interests. This capacity constitutes one of the fundamental reasons for the existence of human civilisation and, *a fortiori*, the one that makes political organisation possible (Searle, 2003: 107). Although each one of these ideas is self-explanatory, we need all of them to comprehend the ontological proposal about Searlean political power.

Based on the various arguments presented, we shall examine these postulates to respond to the question that Searle puts in the following terms: what do we have to add to social facts so that they become political facts?

2.1. Political Power as Deontic Power

The thesis according to which "all political power is a matter of status functions, and this is the reason why all political power is

deontic power", represents a central axis around which the main principles, which make up the essential content of Searle's "*Social Ontology and Political Power*", are developed. Deontic powers are linked to rights, duties, obligations, authorisations, permissions, authority, etc. The power of the leaders of a local party and the town council, as well as the power of key figures (presidents, heads of government, and members of Congress or the Supreme Court) all derive equally from the fact that these entities possess recognised status functions (Searle, 2003: 108).

In *The Construction of Social Reality* Searle uses the terminology of conventional power to distinguish it from brute power/force although, as he admits, the granting of conventional power often involves the authorisation of the use of brute force, i.e. cases of State security bodies in exceptional cases. However, he argues that the use of violence by the police and military powers goes against political power. Similarly, conflicts between ethnic and religious groups, violence generated by ideologies, international terrorism, and undeclared war between states cannot be considered political. Therefore, Searle contrasts the logical structure of deontic power with the logical structure of power based on force.

About this theory, Oppenheim disagrees with the fact that the physical brute force of the strong over the weak must be different from political power (Oppenhem, 2003: 107). Furthermore, he considers that Searle's characterisation of political power as essentially deontic, non-violent, and unselfish is an idealised representation of Western democracies. Certainly, only in constitutional democratic systems is the individual the source of each political power, but only in theory. In Oppenheim's opinion, almost all (if not all) acts of the use of political power (and the response to them) are acts based on personal interests, and conflicts of a political nature are either generally resolved or not completely resolved or else resolved by the use of brute force (Oppenheim, 2003: 105-107).

The contrast between deontic power and brute force is based on the distinction between brute facts and institutional facts. According to this, the basic logical structure of institutional facts is "X counts as Y in C". This formula puts the constitutive rules into relief, and this allows us to create institutional facts (Alarcón, 2001: 33)[1]. Alongside this characterisation, we find another formula that explains the creation of basic powers within society, and it is centred on the general form of the content of the status function of Y. If

> the content of Y is imposed by the element X by collective acceptance, these collective acceptances (recognitions, beliefs, etc.) must have some content; and what I suggest is that for a wide class of cases, the content has to do with some form of conventional power which the subject relates to some type of action or a course of actions (...). Given that power is always the power to do something or stop someone else from

1 In Alarcón's opinion, in his fight against "the fallacy of naturalistic fallacy" Searle distinguishes between two types of duties: 'categorical duties' and 'hypothetical duties'. Searle has based his 'anti-divisionism' on the partition of reality into two areas: that of institutional facts and that of brute facts. In contrast to brute facts, institutional facts pre-suppose the existence of certain institutions, composed of a set of 'constitutive' rules, a set of rules which create or define new forms of conduct. These constitute an activity whose existence is dependent, from a logical point of view, on the rules".

> doing something, the propositional content of the status functions of power is always based on (S makes A). (Searle, 1997: 116).

Where S represents a subject/person and A an action or activity. The prime structure of the collective intentionality X *counts as Y in C* now becomes the basic structure of conventional power: *We accept (S has power (S does A)).*

What relationship is there between the two formulae: *X counts as Y in C* and *We accept (S has power (S does A))*? The reply offered by Searle is that we do not just accept that someone has power, but we accept that they have power due to their institutional status. An example of *X counts as Y in C* would be: that satisfying certain conditions makes it possible for someone to be the State President. But once we have accepted that someone is the President, we also accept that they have the power to be able to do certain things. They have the positive power of controlling the armed forces, but they also have negative power, in other words, the obligation of governing the nation. They have the *right* to control the armed forces and they have the *duty* of leading the government. The emphasis on collective acceptance is reflected in Searle's analysis of conventional power: we accept that S has power (S does A) because S=X, and we accept that *X counts as Y* and that status function entails the recognition of deontic powers (Searle, 2006:18).

Searle distinguishes between various types of conventional power: symbolic, deontic, honorific, and procedural. In this case, we are focusing on the normative type of conventional power (deontic), i.e. those powers which are the fruit of the assignation of a specific status function with consequences in terms of rights, responsibilities, obligations, duties, privileges, consent, punishment, authorisation, permission, and other deontic phenomena (Searle, 1997: 112; Searle, 2007)[2]. Given that status Y confers (or denies) power, Searle classifies these deontic phenomena into two other categories which correspond to those of positive and negative powers:

> the first occurs when the agent is provided with some new power, certification, authorisation, ability, right, permission or qualification which enables him to do something which otherwise he would not have been able to do; the second occurs when the agent is required, obliged, forced by duty, punished, prescribed or in some way forced into doing something which would otherwise be unfeasible. (Searle, 1997: 116)[3].

If we bear in mind that

> it is not the social objects, such as money, universities or states, but the agents that operate on and within these objects, the distinction is established between that which

2 In our opinion, it is part of the new work being produced by Searle and is only a preview of this chapter. The first section is about rights as status functions. Rights are always relative to the observer and given that they are status functions, they are attributed thanks to collective intentionality. Human rights are not found in nature in the same way as phenomena such as photosynthesis can be found.

3 Alarcón clarifies this distinction between positive and negative powers by saying that "the former refer to *anankastic* duties, to 'powers, certifications, authorisations, consent, rights, permission or qualifications', which are possessed by the agent and enable him to do something, to do something that counts institutionally, thus acting on him by indirectly influencing his behaviour. The latter refers to deontic powers, to 'demands, obligations, binds, punishments, prescriptions or coercions' which act on the agent by directly influencing their behaviour.

> the agent *can* do and what the agent *should* (and *should not*) do, between that which the agent is *capable* of doing and that which they are *required* to do as a result of the assignation of a status determined by the term Y. (Searle, 1997: 113).

To this distinction between positive and negative powers, Searle adds another two distinctions involving the *creation* and *destruction* of conventional powers and the *procedural* and *terminal* conventional powers. An example of the latter would be the distinction between receiving a certain number of votes and winning the elections: obtaining votes is a procedural phase on the path to winning and winning is the terminal part of the electoral process. As we can observe, the procedural functions of status are conditional, deontic functions, i.e. when the conditional precedent is satisfied the result is a step in the iterated hierarchy of institutional reality.

With regards to the acts of creation and destruction of powers, these acts can be carried out on account of another conventional power as in the case of marriage/divorce. In other words, in the case that action implies the creation or destruction of power, that act is an exercise of conventional power. In the destruction of conventional power, "the negation operates on the collective acceptance, not on the content of the acceptance" (Searle, 1997: 118).

As a result of his research into the classification of institutional powers into symbolic, deontic, honorific, and procedural, Searle concludes that from the point of view of the logical structure of social reality, the only thing we have is the creation and destruction of conventional powers which may be symbolic or honorific, negative or positive and conditional. Some of these powers are collective and others are individual, and the latter represents variations of iterations of the basic structure (Searle, 1997: 122-123).

Based on these considerations, we understand that the basic structure of power allows us to grasp all the logical traits of the intentional content of status function Y, in the formula "X counts as Y", demonstrating that "the enormous complexity of the body of institutional reality has a very simple skeleton" (Searle, 1997: 123). However, despite the logical coherence of this explanation, problematic questions arise concerning the distinction between positive and negative powers, the analogy between the deontic dimension and the dimension of power, and between authority and power (Artosi, 2004). On the other hand, the role played by the notion of constitutive rules is not clear within the logical structure of conventional power. For Searle, constitutive rules confer power through the attribution of status and function. The problem is that Searle does not explain how this happens. Although he does offer theoretical elements that justify the mechanisms of assignation of function based on the '*count as*' formula, he does not specify how the constitutive rules function as rules that confer power. For example, he does not sufficiently develop how a constitutive rule such as "A counts as the officiator of a wedding ceremony" confers power to A (collectively accepted) to join two people in marriage.

According to that stated above, we can deduce that Searle adheres to the traditional line of thought about power, understood in terms of capacity and deontic status functions. These status functions translate into two wide categories of power, the so-called positive and negative powers. The

first of these comes about when the agent is provided with some power that *enables* him to do something that otherwise he could not do. The second comes about when the agent is or may be required, i.e. prohibited, or obliged, bound *by duty*, to do something which would otherwise be unfeasible.

3. Reasons to act independently of desire

As we stated previously, we construct social and political reality by collectively assigning and accepting status functions (Searle, 1997: 140:141). As we have appreciated, the functions are not intrinsic traits of the world, they are traits that are dependent on the observer. The two types of described functions are the agentive functions and non-agentive functions.

The first types of functions are those which are concerned with the functions we assign to different objects and phenomena of reality. The agentive functions are those called 'status functions' whose mission is to 'represent', 'symbolize', 'count as', and generally 'signify'. Linked to this notion, we find the concept of *reasons for acting independently of desire* (Searle, 2000). In his thesis on the ontology of political power, Searle proposes the bringing together of the two notions and maintains that the *status functions*, described in *The Construction of Social Reality*, are precisely *reasons for acting independently of desire*. Thus, it follows that the recognition of status functions on which political power is based in the recognition of reasons to act independently of desire. What is truly remarkable here is that the whole social and political system is based on the ability of human agents to recognise reasons that are independent of desire and act on them (Searle, 2003: 32); Searle, 2004: 107).

Taking the brute facts as a base, the institutional and political facts represent the framework in which our activity takes place, whether it be individual or collective. Using this supposition, Searle seeks to explain a *rationality* that explains our activity based on the deed of recognising certain things as reasons to act. But what are the reasons for acting independently to desire based on? What is it about X that it is recognised as a reason for Y? (Liz, 2002: 88; Searle, 2000: Rodríguez, 2003), Searle opposes the classic model of rationality in human actions, a model which states that rational actions can only be motivated by a desire or interest of the agent (Bejarano, 2001). With regards to this vision, Searle maintains that there is a causal gap between belief and desires on one side and the action on the other: "the gap involved in rational decision-making is, in fact threefold. The first gap occurs between the reasons for getting an idea of what one is going to do and the effective decision one takes. The second is produced after one has formed an idea of what to do and in this case, one still has to decide when to do it to be effective. And lastly, in the case of activities which continue over time, there is another gap between the beginning of the action and its continuation via a continuous voluntary force until it is completed" (Searle, 2000: 27-28).

The classic model is based on theories of rational decision-making or the instrumental concepts of rationality and only applies to the first type of reasons, i.e. those that are dependent on desires,

and which include, for example, interests, goals, preferences, usefulness, accepted values, etc. This model relies on six basic principles: a) rational actions are caused by beliefs and desires; b) rationality consists of following certain rules; c) rationality is a cognitive faculty, separable from the others; d) cases of weakness of will, or *akrasia*, are literally impossible; e) practical rationality should always suppose desires, or goals, objectives or interests, etc.; f) rationality is only possible if these sets of primary desires are consistent (Liz, 2002: 88; Searle, 2000: 20-25).

In his work *Rationality in Action*, Searle discusses every one of these suppositions and offers various arguments to define a concept of non-instrumental rationality, based on commitment. About the first of these, he maintains that rational actions cannot have sufficient causal antecedents, i.e. they would not be caused by beliefs and desires. In his opinion, only those who are under the effects of toxic substances, or in extreme, uncontrollable conditions let themselves be led by beliefs and desires. On the contrary, a rational decision is based on the consideration of reasons for doing something and finally, when the decision is made, it is made on account of some of the contemplated reasons and not for others. This would entail the existence of a 'gap' in between the reasons for the action and the decision to act, i.e. in order for the rational making of decisions to be possible and intelligible, we must presume free will. Without freedom, we would not have a reason to undertake any decision-making process (Liz, 2002: 25).

Concerning the second supposition, Searle maintains that rationality does not consist of following rules. In this proposal, he says that anyone "can behave rationally without knowing the rules which determine rationality and even without being conscious that they are following the rules" (Searle, 2000: 35). He affirms that rationality is not constituted or defined by any set of rules. The function of rules is to systematise that which in itself is valid and what guarantees this validity is the semantic content (Liz, 2002: 89).

He responds to the third supposition of the classic model of rationality by arguing that rationality is incorporated into the general structure of intentionality. In other words, "there cannot be a separate faculty of rationality distinct from such capacities as those for language, thought, perception and the various forms of intentionality, because rational constraints are already built into, they are internal to, the structure of intentionality in general and language in particular" (Searle: 2000: 35). Subsequently, a statement cannot be made without worrying about questions along the lines of: 'is it true or false?' or 'is it consistent or inconsistent with things I have said?'. Thus, "constraints of rationality are not an extra faculty in addition to intentionality and language. Once you have intentionality and language, you already have the phenomena which internally and constitutively possess the constraints of rationality" (Searle, 2000: 36).

About the fourth point, Searle argues that weakness of will is always possible. This weakness of will arises from the fact that at any point of the gap (freedom) phenomenon, we are presented with an undefined number of open options that are capable of attracting us even when we were thinking, at a certain moment, that we going to reject them. The 'gap' phenomenon, the

freedom of being able to choose, explains why weakness of will is so common.

The fifth postulation is rejected by Searle based on his criticism of the classic theory that a rational act can only be motivated by a desire, where 'desire' includes moral values and evaluations. Desires do always not have to be centred on oneself but there can be reasons for acting independently of desire, external reasons which overcome the framework of a merely instrumental rationality and place it in a teleological framework. Reasons which are independent of desire serve to judge and subject the desires themselves to criticism (Liz, 2002: 42). On this point, Searle applies the theory that there are no reasons for acting independently of desire to Hume's naturalistic fallacy: the impossibility of deriving an 'is' from an 'ought'. Concerning this, he affirms that "statements with 'ought' express reasons for action. Saying that someone ought to do something implies that there is a reason for them doing it"[4].

Lastly, about the sixth supposition, Searle considers that it is normal and inevitable that reasons for acting enter into conflict and that rationality rightly consists of deliberating and making decisions, in certain circumstances, from within a situation of inconsistency and conflict (Searle, 2000: 45; Liz, 2002: 90).

These objections to the constitutive principles of the classic rationality model, along with the explanation he offers concerning the basic structure of intentionality, understood as action and meaning[5], situate our author in conditions of confronting the logical structure of reasons and replying to the questions: 'how do we create reasons for acting independently of desire?' and 'what scope does this thesis have in its concept of political power?' In the first place, for Searle, the reasons are propositionally structured entities. Giving a reason for something is offering an explanation, a response to certain questions. There may be facts in the world such as the fact that it is raining, or propositional intentional states such as a desire not to get wet, although there may also be propositionally structured entities that are neither facts nor intentional states, i.e. entities such as obligations, commitments, requirements, or necessities, etc. Searle calls this type of facts "factitive". From this he deduces that reasons are factitive entities and their propositional structure "capacitates them to have a relational character in at least four ways: 1) reasons are always reasons for something and to explain why something happens; 2) they are reasons for a subject; 3) they are epistemically accessible to take part in a deliberation and 4) they are always related to other reasons" (Liz, 2002: 92; Searle, 2000: 121-126).

4 "Therefore Hume's affirmation amounts to the claim that statements asserting the existence of reasons for action cannot be derived from statements on how things are. But how things are is a matter of how things are in the world as it exists independent of the agent's motivational set. So on this interpretation, the claim about how things are in the world cannot imply the existence of any reasons in an agent's motivational set (one cannot derive 'ought' from 'is') is closely related to the claim that there are not facts in the world, independent of the agent, that by themselves constitute reasons for action (there are no external reasons)"

5 On this aspect, also see Searle's book, *Intentionality*. In this work, he re-examines the object of analysis of the second chapter of *Rationality in Action. A theory on free will* in which he focuses on the three aspects that make up his theory of intentionality: prior deliberation, prior intention, and intention-in-action.

The work *Rationality in Action* provides us with new concepts and outlines various distinctions and can help in our understanding of the Searlean theory on reasons for acting independently of desire. One of these distinctions is that which is established between the external reasons and internal reasons for acting. The first of these includes factitive entities which may function as reasons for an agent if they are adequately recognised and accepted as reasons. When this occurs, the reason becomes an internal reason. The other distinction is related to total reasons and partial reasons (Liz, 2002: 91). Total reasons must contain at least one motivator, i.e. the motivators of actions would be sets of factitive elements with a world-to-mind direction of fit[6]. The motivators may be internal and external, the former being desires, hope, fear, shame, pride, disgust, thirst, hunger, pleasure, etc. External motivators, on the other hand, include obligations, necessities, duties, commitments, etc. Motivators are ontologically subjective seeing as they are relative to a subject, but at the same time, they can be epistemically objective (Liz, 2002: 93; Searle, 2000: 140).

In short, we create reasons for acting independently of desire by creating external motivators that involve us, whatever our desires may be. In the case of social and political institutions, we recognise, as reasons to act, the status functions to which we are committed in social reality, sometimes including those beyond our desires (Searle, 2000: 221; Liz, 2002: 94). From this perspective, the recognised status functions become a reason for action independent of desire. To quote Liz Gutiérrez: "their recognition as motivators would already be their recognition as reasons for action. Based on this recognition, the agent will deliberate from the gap, weigh up the different reasons he has recognised and formulate the intention to act" (Liz, 2002: 93; Searle, 2000: 142-143).

A paradigmatic case of creation of reasons for acting independently from desire is that of the institution of the promise: 'what reason do I have for keeping a promise?' to which he replies by saying that "promises are by definition creation of obligations and obligations are by definition reasons for action". The subject who promises something creates an external motivator, a reason for acting that may go against their desires and obliges them. Searle expands on this idea and says that

> when I make a promise, the institution of promising is only the vehicle, the tool I use to create a reason. The obligation to keep a promise derives from the fact that in promising I freely and voluntarily create a reason for myself. The free exercise of the will can bind the will, and this is a logical point that has nothing to do with 'institutions', moral attitudes, or 'evaluative utterances'. This is why a slave has no reason to obey the slave owner, except for prudential reasons. He has not bound his will by an exercise of his freedom. (Searle, 2000: 226).

The social world in general and the political world in particular are full of factitive entities that act as external motivators which

6 The parallelism between the Intentionality Theory and the speech acts which were previously highlighted is obvious. The illocutionary forces are the same as the "psychological modes" and both possess the same direction of fit. In short, Searle concludes by saying that "beliefs, perceptions and memories have a mind-to-world direction of fit because their objective is to represent the reality of things; desires and intentions have a world-to-mind direction of fit because their objective is not to represent the reality of things but how we wish them to be or how we plan them to be".

invite us to recognise them as motivators of this sort (political duty or obligation may represent reasons to act independently of desire). Social and political institutions constitute a complex framework of entities that count as obligations, duties, demands, commitments, necessities, etc. The reasons for acting, or external motivators or status functions, created intentionally and collectively, must be recognised, accepted, and maintained.

However, human beings do not always act in the light of desire-independent reasons. We can find an example of this in the framework of logical relations between political power and economic power. Both economic and political systems are systems of status functions. As we have seen, the political system corresponds to governmental machinery. In contrast, the economic system corresponds to the economic apparatus which creates and distributes assets. However much the respective logical structures resemble each other, the rational motivational systems that appear in each case differ significantly. Economic power is essentially related to the fact of being capable of delivering economic advantages and sanctions. Political power also often acts in this way, above all in states that develop strong policies of social welfare or economic compensation for more disadvantaged groups, but not always. Searle believes that this fact has caused a whole series of confused theories to appear. They intend to examine political relations as if they had the same logical structure as economic relations. Therefore, the reasons for action that are based on desires or interests like economic ones, even when they are part of a deontic system, are not deontological. The important point which must be stressed is that the essence of political power is deontic power. This notion is the source of an intuition that inspired the theorists of social contract. These people thought that there was no way of having a system of political obligations nor, in fact, a way of having a political society without something like a promise, an original promise, or commitment, which would create the necessary deontic system to maintain the political reality.

In short, the recognition of validity or the acceptance of a status function, or the simple recognition of its existence, gives the agent a reason for acting independently of desire. The importance of this fact cannot be stressed enough, given that it explains the difference between human beings and other social animals. This is an important point in the matter of motivation: once you recognise that you have a valid reason for doing something, even if you don't want to do it, at least you have a reason to want to do it. Among the cases that may constitute reasons for acting independently of desire, there would be, for example, the obligation of being in the workplace at the time specified in the contract or attending university lectures, even when our desires do not coincide with these obligations. Thus, in the case of human society, and in contrast animal societies, reasons can motivate desire, and not all reasons stem from desires. However, it is important to see that in matters concerning political reality, we do not need to explicitly construct or create reasons for acting independently of desire, as happens when we make promises or take on commitments of a personal nature, whatever they may be. The simple fact of recognising a set of institutional facts as valid or obligatory creates reasons for acting that are independent of our desires.

Though, indeed, deontic powers (obligations, duties, demands, impositions, etc.) could be reasons for action independent of desire, Oppenheim maintains that the relations of institutional power involve, in turn, personal interests. This is true especially if we focus on the political power exercised by political authority (government) over the citizens. The latter may comply with legal regulations, simply because they recognise them as having authority, or to avoid sanctions or because rights coincide with personal interests (Oppenheim, 2003: 106).

4. Final Considerations. Towards a model of normative rationality

Let us return to the Searlean argument which states that anyone can behave rationally without knowing the rules which determine rationality and even without being conscious that they are following the rules: rationality is not constituted by or even defined by any set of rules (Searle, 2000: 35). Based on this supposition, there are various ways of understanding the interaction between social rules and rationality.

Institutional and political reality, as we know, rests on a set of constitutive rules. These rules, unlike regulative rules, can create certain practices which would not exist without such rules. The formal structure of the constitutive rules would be *X counts as Y in context C*: any fact, either physical or institutional, carries out a certain status function in a certain context. Searle has made it clear on various occasions that individuals do not think "this is the rule, therefore it must be applied to give rise to an institutional fact", but that these rules underlie and reflect the logical structure of institutional facts.

This concept directly clashes with those social theories which propose a view of the individuals as "obeyers and followers of rules", i.e. that the individuals know and consciously apply these constitutive rules. But how can we explain the regularities in human conduct? Searle responds in different ways to this question, depending on the evolution of his thought shown in the various works he has published, and attempts to overcome this problem by referring to his concept of background. The background consists of a set of capacities and pre-intentional suppositions that are required for the intentional states to make sense. Searle maintains that when our behaviour is adjusted to the constitutive rules, we are not 'following rules' in the Wittgensteinian sense, because as said author argues, the notion of observing the rules in a profoundly unconscious way is incoherent. For Searle, unconsciously following a rule would bring us closer to what he calls a *zombie view*, i.e. the conception that we can do something ´virtuously´ or 'skilfully' whilst being completely unaware that we are doing it (Searle, 2001; Noguera, 2002). The influence of the background in our conduct is not normative and therefore we do not 'apply the rules'. Conduct based on unconscious regulations cannot consist of 'following rules' but, as Wittgenstein warns, it concerns a causally determined conduct in the same sense as a reflex action. The fact that our conduct adjusts itself to constitutive rules is due to the background capacities and suppositions being caused by these rules, i.e. it is logically structured by constitutive rules. Therefore, it is under-

stood why we act 'according to the rules' without actually 'following the rules'.

This Searlean argument is outside of the scope of any theory about the rationality of the subjects. In what way can we introduce rational or normative orientation to this analysis? Again, we must refer to one of Searle's earliest contributions: speech act theory. According to this theory, the *illocutionary force* of language is capable of establishing normative links between individuals (Searle, 2001: 137-160; Alarcón, 2001: 87). This set of illocutionary links responds in turn to the logical form of the constitutive rules upon assigning status functions and creating deontic powers (rights, obligations, duties, etc.) that are expressed in the logically equivalent rule 'we accept that S has the power to do Y in context C'. On the other hand, these links, in contrast to conduct that is causally determined by the background, give rise to reasons for action independent of desire, i.e. a rationality that is not instrumental but normative. Rules are not followed irrationally or unconsciously, rather they give rise to reasons for action. Based on all of this, we can deduce that there is an explanation for action that is not a causal interpretation of itself: it is the explanation based on desire-independent reasons.

These reasons do not causally determine our conduct but the fact that we recognise their validity also explains that we act according to them: they are reasons which are not based on what we '*are inclined*' to do, but on what we believe '*we should do*' or what '*we have to do*'. Not because they leave us no other option, but because we consider them to be loaded with validity. In short, there are valid reasons for rational action which do not reside in desires or personal interests, but in the illocutionary and social relations and links which we have created. Therefore, social rules are not always somewhat pre-existent but are something we can create with our speech acts, and once they have been created, they function as an external motivator of our actions.

5. Bibliography

Alarcón, C. (2001). *Causalidad y normatividad*, Sevilla: MAD.

Artosi, A. (2002). "On the Notion of an Empowered Agent" on *www.cirfid.unibo.it/~agsw/lea02/pp/Artosi.pdf* Fecha de consulta: marzo 2924

Artosi, A. Rotolo, A., and Vida, S., (2004). "On the Logical Nature of Count-as Conditionals", in C. Cervenini, (ed.). *Proceedings of LEA*. Bologna: Gedit.

Bejarano, T. (2001). "Acerca de las razones para actuar de Searle", *Thémata. Revista de Filosofía*, no. 26, pp. 259-273.

Di Lucía, P. (2003). *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata: Quodlibert.

Liz Gutiérrez, M. (2002). "Forma y contenido en las razones para actuar independientemente del deseo", *Revista Laguna*, vol. 10.

Miller, S. (2005). "Artefacts and Collective Intentionality", *Techné*, Vol. 9 (2) Winter, 2005, pg.52-67.

Noguera Ferrer, J. A. (2002). "Racionalidad y normas sociales en la teoría post-analítica de la acción" on *www.selene.uab.es/_cs_gr_saps/catala/autors/*

xxnoguera.htm Fecha de consulta: enero 2024.

Oppenheim, F. E. (2003). "Potere Bruto e potere deontico Una risposta a Searle" in P. Di Lucia, (ed.). *Ontología Sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata: Quodlibert.

Ransdell, J. (1971). "Constitutive Rules and Speech-Act Analysis". *The Journal of Philosophy* 68 (13): pp. 385-400

Rodríguez González, M. (2003). "Esa fuerza tan especial del compromiso", *LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica*, no. 36, pp. 283-288.

Schmitt, F. F. (ed.), (2003). *Socializing Metaphysics: The nature of social reality.* Lanham, MD: Rowlan and Littlefield.

Searle, J. R. (2003). "Ontologia sociale e potere político" in DI LUCIA, Paolo, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*. Macerata: Quodlibert, pp. 27-44.

Searle, J. R. (2004). *Freedom and Neurobiology. Reflections on Free Will, Language, and Political Power*, New York Columbia University Press.

Searle, J. R. (1995). *The Construction of Social Reality*, New York: The Free Press.

Searle, J. R. (1995). *Language, Social Ontology and Political Power*. New York: The Free Press

Searle, J. R. (2005). "What is an Institution? in *Journal of Institutional Economics*, Volume 1, Issue 01, January pp. 1-22

Searle, J. R. "Human Rights" on www.socrates.berkeley.edu/~jsearle/130/HumanRights.doc. Fecha de consulta: enero 2004

Searle, J. R. (2001). *Rationality in Action*, Cambridge, MA: The MIT Press.

Searle, J. R. (2001). "Neither phenomenological description nor rational reconstruction: Reply to Dreyfus" in *Revue Internationale de Philosophie*, no. 217,

Searle, J. R. (1983). *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*, Cambridge: Cambridge University Press

Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, London: Cambridge University Press, pp. 131-156.

Shapiro, S. J. (2013). *Legality*, Harvard University Press.

DESAFECCIÓN POLÍTICA: UNA PROPUESTA DE RECONCEPTUALIZACIÓN

POLITICAL DISAFFECTION: A RECONCEPTUALIZATION PROPOSAL

Adrián Megías
Universidad de Almería, Almería, España
amegias@ual.es

Cristina Moreno
Universidad de Murcia, Murcia, España
cmoreno@um.es

F. Ramón Villaplana
Universidades de Murcia y de Valencia, España
rvillaplana@um.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: desafección política; actitudes políticas; cambio actitudinal; cultura política; teoría política
Keywords: political disaffection; political attitudes; attitudinal change; political culture; political theory

Resumen: La desafección política ha emergido como un fenómeno central en el panorama político contemporáneo, requiriendo una reevaluación exhaustiva y sistemática. En este contexto, este estudio propone una reconceptualización del término, abordando aspectos teóricos y metodológicos cruciales identificados a través de un análisis exhaustivo de la literatura reciente. Reflexionamos sobre la configuración multidimensional de la desafección política y cómo las emociones podrían desempeñar un papel fundamental en la configuración de esta actitud, arrojando luz sobre otros fenómenos, como la creciente polarización política. Nuestro estudio destaca la necesidad de integrar diversos elementos en la medición y análisis de la desafección política, aportando así una visión más completa y matizada de este fenómeno crucial en la ciencia política contemporánea.

Abstract: Political disaffection has emerged as a central phenomenon in the contemporary political landscape, requiring a comprehensive and systematic reassessment. In this context, this study proposes a reconceptualization of the term, addressing crucial theoretical and methodological aspects

identified through an exhaustive analysis of recent literature. We reflect on the multidimensional configuration of political disaffection and how emotions could play a fundamental role in shaping this attitude, shedding light on other phenomena, such as growing political polarization. Our study highlights the need to integrate various elements in the measurement and analysis of political disaffection, thus providing a more complete and nuanced vision of this crucial phenomenon in contemporary political science.

1. Introducción

La desafección política se ha convertido en uno de los nudos gordianos de la política actual y de su estudio, por lo que, en tanto que actitud de rechazo y alejamiento hacia la misma, merece tanto una revisión, como un replanteamiento sistemático.

En este sentido, la desafección se ha concebido como una de las actitudes negativas hacia la política más extendidas. Entendida como el sentimiento negativo hacia los políticos, la política y sus procesos, y hacia un sistema incapaz de hacer frente a las demandas y necesidades de los ciudadanos, la desafección sería una actitud cuyo resurgir respondería al actual clima en el que el funcionamiento de las democracias se encuentra en entredicho. Al periodo de euforia democrática capitalista le siguió una percepción generalizada de que las instituciones democráticas no estarían cumpliendo con los resultados esperados, ni atendiendo a las necesidades, intereses y demandas de la ciudadanía, a lo que cabría sumar uno de los aspectos más controvertidos de las actuales democracias: el alejamiento entre ciudadanía y clase política (Megías, 2018, 2020a; Megías y Moreno, 2022)

Sin embargo, estos sentimientos de desconfianza y alejamiento hacia la política y sus representantes no son algo nuevo, ni como objeto de investigación, ni como rasgos característicos en la cultura política de las sociedades occidentales. Si bien los primeros estudios datan de los años cincuenta del siglo pasado (Gamson, 1968), lo que realmente resulta novedoso es la utilización habitual de la desafección política como un tópico conversacional. Nos referimos a la utilización del término en el ámbito cotidiano como si fuera unívoco y no precisara de análisis.

El análisis de los medios de comunicación, ya sea a través de la lectura de periódicos, la consulta de sus secciones de opinión, la visualización de informativos y programas de debate, o la participación en redes sociales y conversaciones cotidianas, revela una creciente distancia de la ciudadanía respecto a la clase política. Este distanciamiento se manifiesta en actitudes que combinan un creciente malestar y hostilidad, junto con una percepción generalizada de que el sistema político es incapaz de atender de manera eficaz las demandas y necesidades de la población.

Las movilizaciones del 15M[1] en España, Occupy Wall Street en EE.UU, los "indig-

1 Las movilizaciones del 15M no solo fueron únicas de los indignados, sino que "*data recorded among general population in Spain, between*

nados" en Grecia, pero también en Roma, Londres, Berlín o, más recientemente, los "chalecos amarillos" en Francia, no son sino ejemplos de este distanciamiento traducido en incomprensión, incluso en un sentimiento de lo que se percibe como utilización electoral de la ciudadanía en periodos de elecciones.

En este contexto, la presente investigación busca no solo clarificar qué se entiende por desafección política, sino también ofrecer un marco renovado y exhaustivo para su comprensión. Partiendo de un riguroso recorrido teórico (donde se hará hincapié en las distintas explicaciones que se ha dado al fenómeno y a sus dimensiones), se desarrollará una propuesta de reconceptualización que aspira a redefinir su estudio. Se hará especial énfasis en los aspectos teóricos y metodológicos que, a la luz de los avances más recientes en la investigación, resultan fundamentales para una medición y análisis más precisas del fenómeno.

2. Cambio actitudinal

Cualquier acercamiento que se haga sobre actitudes y, consecuentemente, sobre las percepciones subjetivas sobre la política (Galais, 2008), hace necesario un retorno sobre los estudios de cultura política y el cambio actitudinal, en cuanto antecedente teórico básico de la desafección.

Desarrollado en origen por Almond y Verba (1989, 1970), el concepto de cultura política hace referencia al conjunto de actitudes, creencias, pautas y valores compartidos ampliamente en una sociedad, estableciendo, a su vez, modelos y límites a la conducta de los ciudadanos.

Al margen de su utilidad para entender las actitudes ciudadanas hacia el sistema político, la construcción teórica de la cultura política pronto afrontó problemas a la hora de explicar el cambio actitudinal. Fruto de los procesos de socialización primaria, las actitudes/cultura se aprenden y quedan enraizadas en la conciencia de los individuos de forma temprana, primando sobre experiencias posteriores, lo que las haría resistentes al cambio. Debido a su concepción intrínsecamente estática, estas teorías derivadas del funcionalismo se mostraron incapaces de explicar los cambios en las actitudes en el corto y medio plazo (Eckstein, 1988; Galais, 2008). Se trata, en consecuencia, de un modelo que se ha denominado culturalista, dado que la cultura política se convierte en una variable independiente a la hora de explicar tanto los cambios de actitudes, como la estabilidad de las democracias[2]. Frente a esta posición del enfoque culturalista[3],

2011 and 2013, confirm a wide support for the 15-M: three out of every four citizens sympathize with its arguments and one in every two agree with its protest strategies (...)In a restricted view, the 15-M functions as a vehicle to confront specific problems derived from the economic crisis or political corruption" (Sampedro y Lobera, 2014: 15).

2 A este respecto destaca Putnam (2011), para quien las causas de la cultura política residen en la tradición histórica de las sociedades. De hecho, en su teoría del capital social explica que las diferencias de este capital son el resultado de trayectorias históricas divergentes entre las regiones del Norte y Sur de Italia.

3 Debido a las dificultades que este enfoque presentaba para explicar los cambios, Eckstein (1988) desarrolló en *Una teoría culturalista del cambio político*, una explicación congruente con los postulados culturalistas. Eckstein consideraba dos tipos de cambios culturales: los que surgen de un modo natural por cambios en las situaciones estructurales, y los resultantes de intentos

se contraponen las teorías de la elección racional, según las cuales los individuos, maximizando su utilidad, reducirían sus decisiones a un cálculo coste-beneficio de modo que la cultura quedaría relegada a una posición secundaria al tratar de explicar cualquier comportamiento político (Downs y Merino, 1973). En otras palabras, se ha transitado de una perspectiva teórica en la que la cultura se concebía como un elemento primordial de origen histórico, caracterizado por su estabilidad y resistencia al cambio, hacia una explicación teórica que otorga un peso desmesurado a la influencia del interés individual y su cálculo racional, determinado por las circunstancias en las que se desenvuelve la ciudadanía.

Ambos enfoques —culturalista y racional— han sido objeto de críticas. El primero, por sus debilidades al dar cuenta de los cambios que se producen en las actitudes y la cultura política de un país; el segundo, por su relativismo a la hora de construir explicaciones *ad hoc* para los cambios en los comportamientos. Quedaba por tanto pendiente explicar cómo y por qué se producían el cambio de actitudes y de cultura.

Esta labor fue abordada por las teorías intermedias del racionalismo cultural (Wildavsky, 1987), las cuales proporcionaron un enfoque pluralista sobre el cambio actitudinal. Dado que las actitudes están influenciadas por las evaluaciones del entorno político y las experiencias participativas, o dicho de otro modo, en tanto que los cambios actitudinales se producen en un contexto político, social y económico marcado por la inestabilidad y la crisis, se generarían simultáneamente procesos de resocialización en la vida adulta y nuevos cálculos de utilidad. Estos factores conducirían a transformaciones en las actitudes y, en el caso que nos ocupa, en la desafección política —manifestándose, por ejemplo, en la reevaluación de los costes de interesarse y participar en la política, así como en un aumento de la implicación política.

3. Marco teórico clásico

La recurrente utilización del concepto de desafección por parte de múltiples actores e investigadores, así como el hecho de que la desafección política más que ser una definición de una actitud, constituye un conjunto de medidas, ha creado un espacio difuso, de indefinición, que obliga a trabajar en una conceptualización clara del mismo. Utilizando un símil médico, podría decirse que el concepto de desafección política es semejante al de *salud.* Al igual que para el campo de la medicina resulta difícil establecer una definición sobre lo que es la salud, y por ello se han establecido una serie de indicadores y pruebas que facilitan su medición, en el ámbito de la ciencia política se han utilizado parámetros para identificar un fenómeno de apatía, falta de confianza y alejamiento político.

Concretamente, en el caso de la desafección política, el concepto remite tanto a la cultura política *almondiana*, a la que se ha hecho referencia, como a los estudios de actitudes ciudadanas hacia diversos objetos políticos[4]. Mención especial en

deliberados por cambiar los comportamientos políticos. Su tesis del cambio se basó en la posibilidad de los cambios mediante la socialización acumulativa.

4 La cultura política es un fenómeno multidimensional. Pese a ello, los vínculos existentes

este punto requiere Easton. La publicación de *A systems analysism of social life* (Easton, 1965) dio inicio al estudio de un fenómeno conocido a partir de entonces como apoyo político —"*la forma en la que un individuo se orienta evaluativamente hacia un objeto a través de sus actitudes o su comportamiento"(*Easton, 1975: 436)—. Easton distinguió este concepto en dos dimensiones: apoyo específico y apoyo difuso. El apoyo específico se basa en la satisfacción de los ciudadanos respecto al cumplimiento de sus expectativas por parte de las autoridades, mientras que el apoyo difuso es una tendencia que se consolida a lo largo del tiempo y está profundamente arraigada en la estructura valorativa de una sociedad. Este último refleja, en términos de Easton (1975: 444), una "reserva de actitudes favorables" hacia el sistema, independientemente de la evaluación positiva o negativa de las autoridades. A grandes rasgos, detrás del apoyo difuso estaría el concepto de legitimidad del sistema, mientras que detrás del apoyo específico estaría el concepto de "performance" o resultados del sistema político[5].

Como todo estudio de ciencia política —y la desafección no constituye una excepción— estamos ante fenómenos multicausales y multidimensionales. La multidimensionalidad del "*political support*" obliga a situarlo en relación a objetos concretos, especificando cuál es el objeto de la actitud que buscamos medir en un momento concreto (Abad Cisneros y Trak, 2013). Dicho de otro modo, el apoyo político, en tanto que actitud hacia la política, se subdivide en varias dimensiones (más o menos según cada autor) y, cada dimensión, en sub-dimensiones. Para Montero et al. (1998), por ejemplo, el apoyo a la democracia se divide en tres dimensiones: legitimidad, descontento y desafección. A raíz de este estudio se comienza a considerar la desafección como un componente diferenciado y separado de otras dimensiones actitudinales, tales como la legitimidad, el apoyo y la confianza hacia la democracia. La principal hipótesis que mantenían estos autores era que la legitimidad democrática, el descontento y la desafección políticas eran dimensiones conceptual y empíricamente distintas. A través de un análisis factorial en el que se incluyeron indicadores para cada una de estas dimensiones, comprobaron cómo, efectivamente, las tres dimensiones eran diferentes.

También Norris (1999) prestaría atención al estudio de actitudes políticas, centrándose en el apoyo político. Si bien parece que las dimensiones actitudinales de Norris (1999) por una parte, y las de Mon-

entre sus distintas dimensiones no han recibido la atención que merecen. La mayoría de los estudios sobre este tema ha señalado, siguiendo a Almond y Verba (1963) implícita o explícitamente, que los diferentes conjuntos de actitudes deben seguir pautas coherentes y consistentes. Esta premisa ha tenido importantes consecuencias para nuestra comprensión de la cultura política en general, y más particularmente de las actitudes hacia el sistema político (Montero et al., 1998).

5 Cada vez es más común en las democracias occidentales encontrar ciudadanos que, pese a presentar altos niveles de apoyo al sistema político, se muestran críticos con los resultados de dicho sistema o con las autoridades que ocupan los puestos de gobierno. Estos ciudadanos son, en términos de Klingemann (1998: 5) los "dissatisfied democrats" o, en términos de Norris (2011) los "critical citizens". La forma de combinar y entender las actitudes de la ciudadanía, hacia su sistema político, así como sus implicaciones, consecuencias y determinantes, se sitúan en el punto central del apoyo político como objeto de estudio.

tero et al. (1998) por otra, son dispares, una atención más detallada a sus investigaciones revela una propuesta de estudio semejante. Estas investigaciones dieron inicio a una sucesión de estudios sobre la desafección política que apuntan a la importancia de este fenómeno para la democracia. La desafección se relacionaría así con una serie de actitudes negativas focalizadas hacia el sistema político; o como diría Di Palma (1970), se manifiesta en un cierto alejamiento o desapego de la ciudadanía con respecto a su sistema político, suponiendo un "sensible alejamiento de los ciudadanos respecto a sus representantes, el desasosiego y la desesperanza en torno al futuro y, seguramente, la puesta en cuestión de algunas convicciones y valores sociales(…)" (Ortiz y Embid, 2010: 7, en Megías, 2018: 43).

Por lo tanto, estas actitudes afectivas o evaluativas, de apego o desapego, pueden dirigir nuestros estudios hacia aquellos aspectos que determinan en qué medida la ciudadanía muestra interés en la política, ya sea en sus valoraciones sobre las instituciones, la labor del gobierno, los actores políticos, o el grado en que los individuos perciben ser tomados en cuenta. A su vez, estas actitudes revelan cuánto se sienten los ciudadanos parte del proceso y si tienen una predisposición a participar en él. De esta forma, cuando en una sociedad prevalecen actitudes negativas hacia la política, se suele emplear el término "desafección política". Concretamente, por desafección política entendemos el sentimiento subjetivo de ineficacia, cinismo y falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas, pero sin que ello implique cuestionar la legitimidad del régimen político (Torcal, 2000). O lo que es lo mismo, una valoración negativa de los políticos y las instituciones, pero bajo el convencimiento de que la democracia —y sus procesos— son insuficientes, bastante mejorables, confirmando aquello de que la democracia es un mal sistema de gobierno, pero el mejor inventado hasta la fecha. La misma idea se desprende de otras definiciones que hablan de "la existencia de un apoyo mayoritario de los ciudadanos a sus regímenes democráticos (…) junto con una falta de confianza en las instituciones, un alejamiento de la política, un sentimiento de incapacidad de poder influir en el sistema y de que el sistema, a su vez, responda a las demandas de los ciudadanos" (Torcal, 2000: 1).

Si nos fijamos con detalle en la definición anterior, se observan, en términos de Almond y Verba, dos dimensiones: una afectiva con un fuerte contenido psicológico, y otra evaluativa. Por ello este constructo teórico ha sido operacionalizado tradicionalmente a través de dos dimensiones: desafección institucional y desapego político (Torcal y Montero, 2006). La primera hace referencia a los sentimientos de desconfianza hacia los representantes políticos y las instituciones, así como a su capacidad de respuesta. La segunda se refiere al distanciamiento, cansancio, hastío y falta de interés de la ciudadanía en la política, sin olvidar la propia autoevaluación de los individuos como actores políticos. Cada una de ellas se divide a su vez en dos subdimensiones. La Tabla 1 recoge la configuración de las mismas.

Vista su composición, quedarían pendientes sus principales variables explicativas. El abanico de explicaciones sobre la desafección política puede agruparse en torno a tres grandes grupos teóricos: teorías económicas, políticas y socioculturales (Nye, Zelikow, y King, 1997; Torcal,

Desapego Político	Interés por la Política	Nivel de curiosidad que la política suscita en los ciudadanos.
	Eficacia Política Interna	Constituye el grado en que el ciudadano siente que entiende la política y, en última instancia, puede influir o participar en ella.
Desafección Institucional	Confianza en las Instituciones	Grado en que los individuos confían en una serie de instituciones políticas.
	Eficacia Política Externa	Hace referencia a la percepción de receptividad, capacidad de respuesta o sensibilidad de los políticos y de las instituciones respecto de las demandas ciudadanas.

Tabla 1. Dimensiones y subdimensiones de la desafección política. Fuente: Elaboración Propia, a partir de Torcal y Montero (2006).

	Autores principales
Teorías sociales y culturales	Torcal (2006); Inglehart (1977); Lerner (1958); Lipset (1960)
Teorías políticas, de desempeño gubernamental	Norris (1999); Morlino y Tarchi (1996); Pharr y Putnam (2000); Del-Castillo-Feito, Cachón-Rodríguez, y Paz-Gil, 2022
Teorías económicas	Clarke, Dutt, y Kornberg (1993); Catterberg y Moreno (2006); Polavieja (2013)

Cuadro 1. Principales teoríasd y autores acerca del origen de la desafección política. Fuente: Elaboración Propia.

2006). Las teorías económicas establecen una relación entre los logros económicos del gobierno y el desarrollo económico del país con los distintos niveles de desafección política. Por otro lado, las teorías políticas vinculan el desempeño gubernamental con los factores institucionales. Finalmente, las teorías socioculturales buscan explicar la desafección política en función del grado de desarrollo social alcanzado. El cuadro 1 presenta un resumen de las teorías, junto con sus principales autores de referencia.

3.1. Desafección y desempeño político

Las teorías políticas sobre el origen de la desafección hacen hincapié en los llamados factores institucionales. Según estos estudios, el aumento de la desafección se puede atribuir a la naturaleza del sistema de partidos, a la inestabilidad de los gobiernos, al tipo de sistema institucional, el grado de desarrollo de los derechos civiles y libertades, o la falta de rotación de los

partidos en el gobierno (Torcal, 2006). En definitiva, se atribuyen a aquellos elementos que componen los distintos modelos de democracia (Lijphart, 2000) y que ayudarían a explicar los distintos niveles de desafección observada entre países. La desafección política presente en cada nación diferirá en función de sus características particulares, desde los modelos mayoritarios o consensuales, hasta el sistema electoral, pasando por la división de poderes en función del contraste federal-unitario, o del modelo centralizado-descentralizado. Con todo, estas explicaciones políticas se mostrarían incapaces de explicar la desafección política en el tiempo, salvo que se produjesen cambios continuos en los sistemas políticos de los diferentes países.

Junto a las teorías políticas, las teorías de desempeño del gobierno hacen referencia a la disparidad o brecha entre las expectativas políticas de los ciudadanos y los objetivos y logros alcanzados por el gobierno[6]. Cuanto más se expande el rol del Estado en el fomento y prestación de bienestar, mayores son las demandas ciudadanas hacia los estados, y mayores dificultades tienen éstos para conocer las mismas, produciéndose una privación relativa y una brecha entre las expectativas de unos y la satisfacción que ofrecen los otros.

Aun teniendo en cuenta lo anterior, otro factor que podría explicar el incremento de la desafección no es tanto el incremento de las demandas ciudadanas hacia el Estado, sino la consecuencia de ideologías neoliberales que emplean como *excusatio* la crisis económica para el desmantelamiento del estado de bienestar.

En relación con esto último, no podemos olvidar las teorías que relacionan la desafección con el incremento de los casos de corrupción. El rendimiento político se ve afectado por la corrupción y, en especial, por la consiguiente quiebra de fidelidad entre representantes y representados, pues estos últimos evalúan a los primeros de acuerdo con su desempeño, siendo la corrupción y la emergencia de escándalos políticos el reflejo de una baja eficiencia, eficacia y una pésima administración de los recursos públicos; lo que explicaría en gran medida la desafección y la falta de confianza (Villoria, 2006; Jiménez, 2016).

Pero la desafección no solo se explicaría políticamente por el desempeño de los gobiernos o su conducta en el cargo, sino por las teorías relacionadas con la polarización y el etiquetaje. Un ejemplo lo ilustra la teoría de King (1997), para quien la Guerra Fría fue "una especie de pegamento que mantuvo a la opinión pública junta", de modo que al final de la misma y al no tener un enemigo contra el que identificarse, la ciudadanía dejó de prestar su apoyo a los gobiernos, decayendo su confianza en los mismos —algo que se identifica con la teoría amigo-enemigo de Carl Schmitt y del etiquetaje de Tajtfel[7]—. Este mismo autor también sostiene que

6 Susan J Pharr (2000) distinguía dos dimensiones del liderazgo: el desempeño político y la conducta en el cargo.

7 Carl Schmitt explicitó la idea amigo-enemigo en 1932, en su obra *El concepto de lo político.* Para Tajfel el sentimiento de pertenencia de un individuo al grupo afecta a la posterior interpretación de situaciones intergrupales. Este sentimiento provoca que el individuo actúe motivado por la promoción del propio grupo y, además, la ideología del grupo justifica comportamientos agresivos de sus miembros orientados a beneficiar a su grupo (Tajfel, 1984; Tajfel y Turner, 1986).

la desafección se encontraría en estrecha relación con la polarización política, en tanto en cuanto la política de la polarización es una política de desconfianza. Ciertamente, porque los partidos al polarizarse se alejan de la mayoría de los votantes —que se sitúa en gran medida en el centro de la escala ideológica—, olvidándose de sus preocupaciones.

3.2. Economía y desafección

La literatura sobre las posibles causas de la desafección política está plagada de teorías que ponen el foco sobre la economía, pero también está llena de afirmaciones que las contradicen, especialmente porque estas teorías serían incapaces de explicar por qué en periodos de crecimiento económico la confianza política, el interés o la eficacia no mejoran en paralelo a la mejora de la economía.

El origen de la desafección se encontraría, desde esta perspectiva, en factores relacionados con la economía, de forma que la popularidad de los gobiernos dependería de variables macroeconómicas básicas como el crecimiento de los ingresos, el desempleo y la inflación (Alesina y Wacziarg, 2000). En cierto sentido, se relacionan con las anteriores teorías del rendimiento gubernamental, pero con la salvedad de que ahora hacen referencia al desempeño y consecución de logros económicos por parte del gobierno. Ya en 1999 Miller y Listhaug compararon la relación entre confianza institucional y desempeño económico del gobierno —con base en varios indicadores como inflación, desempleo y déficit— y concluyeron que el único indicador de desempeño que vinculaba la relación era el déficit gubernamental medido como porcentaje del PIB, considerando al gobierno como el responsable del estado de la economía (Alesina; Wacziarg, 2000). Esto es lo que algunos autores llaman culpa (*blame*). Así, se suele buscar en otros —fundamentalmente el gobierno, los ricos, los pobres o los inmigrantes— a los culpables de la situación. En este caso, se ve al gobierno como responsable del bajo crecimiento y del incremento de la desigualdad y, como resultado, se le considera parte del problema, en lugar de hacerlo de la solución. Por consiguiente, es probable que la economía tenga algo que decir sobre la desafección política. Sin embargo, "este grupo de explicaciones económicas no es ampliamente aceptado. La correlación existente entre factores socioeconómicos y la evolución de la confianza institucional no sólo es cuestionable, o al menos empíricamente discutible (McAllister, 1999: 201; Clarke, Dutt y Kornberg, 1993: 1015), sino que además parece claro que los decrecientes niveles de confianza en los países industrializados no se corresponde en el tiempo con el periodo de deterioro económico de los años setenta y ochenta (Lawrence, 1997: 113)" (en Torcal, 2006: 8). Pareciera por tanto que la desafección política, en general, es estable en el tiempo, y la confianza en particular, un fenómeno generalizado (Lawrence, 1997). Sin embargo, como veremos más adelante, difícilmente puede hablarse de un fenómeno estable y generalizado.

3.3. El enfoque social y cultural de la desafección

Dentro de este grupo de teorías se conjugan dos tipos de hipótesis, una propia del mundo sociológico, y otra de la teoría

política: la teoría de la modernización, y la teoría de la nueva política (conocida como nueva cultura política) cuyos marcos interpretativos se desarrollan en el contexto de la modernidad y del cambio de valores. De manera esencial estas teorías encuentran su base en la dicotomía tradicional-moderno de las sociedades, donde las segundas se definen por contraposición a las primeras[8].

La postmodernización ha supuesto un declive de la confianza en el gobierno y una quiebra de la autoridad tradicional, un paso de la racionalidad instrumental propia de un sistema de escasez y de la modernidad, a un énfasis más profundo en lo inmaterial, los valores y actitudes democráticos, participativos, de redistribución, una defensa de mayores derechos y, finalmente, un énfasis en la calidad de vida (Catterberg y Moreno, 2006; Inglehart y Welzel, 2006). Todo ello tiene su forma característica de conjugarse con la desafección política. El cambio de valores que se produce con el paso de la modernidad a la posmodernidad lleva aparejado un cambio en las actitudes hacia la política —relacionado con el paso de valores de supervivencia a valores centrados en la calidad de vida—. Aquí entran en escena tanto el incremento de las demandas hacia el sistema, como la quiebra de la autoridad tradicional, que se encuentran intrínsecamente relacionadas.

Por un lado, el cambio cultural produce un paso de lo material —fruto de la preocupación material por la supervivencia— a lo inmaterial —toda vez que la supervivencia está garantizada. Los valores postmaterialistas enfatizan objetivos-valores como libertad individual, calidad de vida, libertad de elección, mayor auto-expresión y mayores demandas de participación, todo lo cual tiene implicaciones para el sistema político[9]. El postmaterialismo representa claramente una crítica al orden político establecido. Los postmaterialistas y sus defensores han señalado las tendencias corporativistas de las estructuras políticas contemporáneas, así como la falta de representación de minorías y grupos alternativos. Como resultado, existe un consenso general en que los postmaterialistas tienden a mostrar menor confianza en los políticos y en el gobierno (Dalton, 2000). De esta forma, los jóvenes más educados y poseedores de valores postmodernos demandan a sus gobiernos políticas diferentes a las tradicionales: derechos de las minorías, mayor participación, protección del medio ambiente o elección de estilos de vida (Inglehart y Welzel, 2006). Así, los cambios de valores expanden los límites de la política provocando en los Estados una sobrecarga como consecuencia de la tarea de provisión de nuevos derechos y medios materiales para su ejecución; lo cual conecta con la brecha entre representantes y representados en lo referente a la evaluación del desempeño de los gobiernos, existiendo en muchos casos una disparidad entre lo que se espera y lo que se obtiene, siendo la consecuencia última un descenso de la confianza o de la eficacia política externa. No obstante, también hay quien como Dalton (2000: 266)[10] rechaza estas afirmaciones soste-

8 Véase, en general, los trabajos de Weber y Parsons, sin olvidar Habermas (1994).

9 Pero también se están produciendo cambios en otros aspectos de la vida que van desde la orientación sexual, pasando por la religión, e incluso el divorcio, como consecuencia del surgimiento de nuevos valores y estilos de vida (Inglehart, 1991, 1998, 1971, 2005).

10 Dalton (2000: 265) afirma específicamente que lo que debe debatirse no es el incremento

niendo que el cambio de valores es eso, un cambio de preferencias y/o expectativas, y que en ningún caso supone una presión para que los Estados expandan su actividad.

Por otro lado, si bien las explicaciones dadas recaen con bastante fuerza sobre la cuestión del rendimiento, estas son solo una parte de la historia (Inglehart y Welzel, 2006a). Algunos como Orren (1997) e Inglehart y Welzel (2006) ya afirmaban que, si bien el desempeño político influye en las evaluaciones de la ciudadanía, no debe perderse de vista que el desempeño siempre se evalúa de acuerdo a unos estándares interiorizados.

De acuerdo con las tesis de Inglehart, en la medida en que el desarrollo económico conduce a altos niveles de seguridad existencial, se reduce la tendencia a defender la autoridad, mientras que, al contrario, las condiciones de inseguridad dan lugar a una tendencia a la búsqueda de líderes autoritarios fuertes. Igualmente, se ha demostrado que algunos segmentos de la población están dispuestos a aprobar el comportamiento autoritario si ello les reporta beneficios políticos (Saikkonen y Christensen, 2023). Consecuentemente, cada vez son más frecuentes —desde la crisis de 2008— la aparición de fenómenos de reflejo autoritario[11] cuya respuesta podría haber culminado en la aparición de movimientos populistas en una gran variedad de países occidentales[12]: Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Suiza, Alemania, Dinamarca e Italia.

Finalmente, también hay quienes sostienen que la desafección política también podría ser fruto de otras explicaciones socioculturales, en concreto, podía venir causada por la historia democrática pasada (Torcal, 2006). La herencia cultural de una sociedad influye en los valores contemporáneos de la misma (Inglehart, 2005) y no sólo sería producto del desarrollo económico y del cambio de valores consecutivo. La socialización política y las experiencias del pasado bajo periodos de crisis y eventos políticos específicos influye en la formación de actitudes políticas y también lo hará en la evaluación ciudadana sobre el desempeño político y sobre su confianza en las instituciones. Si bien Torcal (2006) lo vinculaba a la existencia de diferentes niveles de desafección entre democracias consolidadas y recientes, nada impide pensar, por ejemplo, que la experiencia desencadenada por la crisis económica, social y política en los más jóvenes tendrá en un futuro algo que decir acerca de la desafección.

de la actividad del estado, que es todo un hecho, sino la responsabilidad del público para el incremento de las demandas hechas sobre el gobierno, y específicamente la idea de que los valores postmaterialistas son una fuerza conductora de estos desarrollos.

11 Inglehart (2000: 49-50) llama reflejo autoritario al fenómeno de gran inseguridad que se produce en las sociedades que experimentan una crisis histórica. En concreto, en sociedades postmodernas y seculares la inseguridad llevaría a la adulación de grandes líderes que puedan dirigir al pueblo a un terreno seguro después del colapso político y económico.

12 La hipótesis aquí planteada sigue un razonamiento similar al del posmaterialismo. Uno adquiere valores postmateriales toda vez que tiene garantizada una seguridad material, por tanto, la ruptura de dicha seguridad podría desencadenar un retroceso hacia prioridades materialistas. En este caso, el colapso de la economía podría conducir a un incremento de movimientos populistas como consecuencia de la búsqueda de seguridad, del mismo modo que la recesión económica o la guerra hacen que la gente otorgue mayor importancia a los valores de supervivencia.

4. Cambio en el panorama de investigación

En el escenario actual, la desafección se presenta como la reacción social ante las dificultades que enfrenta la política contemporánea, manifestándose como un indicio de una profunda crisis en el sistema político. Sin embargo, surge una paradoja: quienes se muestran críticos e insatisfechos con la política son, a la vez, los que más respuestas y acciones demandan de ella —véanse las vinculaciones existentes entre formas de participación online en redes sociales y desafección—. El activismo político utiliza Internet con visión política, al tiempo que se produce un alejamiento de la política (Cazorla-Martín, Montabes-Pereira, y Hernández-Tristán, 2023). De ahí que la desafección, entendida como el sentimiento negativo hacia los políticos, la política y sus procesos, y hacia un sistema incapaz de hacer frente a las demandas y necesidades de los ciudadanos, muestre una disrupción entre lo que podemos llamar sus indicadores personales/internos y los públicos/externos. Así se ha comprobado tanto para el caso español como europeo, recientemente (Megías, 2020; Megías y Moreno, 2022). Se detecta un incremento considerable del interés por la política junto con una mayor implicación política subjetiva, al tiempo que se está produciendo un descenso de la confianza en las instituciones políticas y en la actuación de los políticos en el cargo.

Esta circunstancia parece desafíar las tesis culturalistas defendidas por distintos autores (Montero et al., 1998; Montero y Torcal, 1990; Pharr y Putnam, 2000; Torcal y Montero, 2006; Torcal, 2006; Torcal y Magalhães, 2010) —desarrolladas más arriba—. Algunos de ellos han venido afirmando durante décadas que la desafección política, en tanto que actitud hacia la política, venía siendo extremadamente estable a lo largo del tiempo fruto de los procesos de socialización. Sin embargo, las tendencias seguidas por las dimensiones y los indicadores de desafección —como señalan las investigaciones recientes— llevan a replantear las explicaciones de orientación cultural, dirigiéndonos hacia un marco racional culturalista de mayor amplitud. Igualmente, cada vez son más las voces que dejan de lado las explicaciones exclusivamente culturalistas para dar paso a explicaciones que también contemplen y combinen, junto al enfoque clásico, orientaciones racionales y políticas (Fernández y Morán, 2014; Galais, 2008; Megías, 2020a; Megías y Moreno, 2022b; Megias Collado, 2018; Mishler y Rose, 2001; Morán, 2011; Soler-i-Marti y Balleste-Isern, 2024).

La eclosión de la crisis económica y financiera a partir del año 2008 y la manera en la que afectó a diversos países de la UE, acabarían cuestionando definitivamente estos supuestos sobre la naturaleza cultural, la impronta del pasado político y sus legados históricos (Inglehart, 1991, 1998; Inglehart y Welzel, 2006; Putnam, 2011) sobre las actitudes relacionadas con la desafección. Un elemento fundamental residió en los incrementos experimentados por la desafección en diferentes países, con independencia de sus niveles de partida. El rol reciente que parecen haber jugado la crisis económica y política sobre algunos componentes de esta desafección (Van Erkel y Van Der Meer 2016; Meer 2017; Torcal 2014, 2016b), como por ejemplo, la tendencia contrapuesta detectada en España entre desapego po-

lítico y desafección institucional[13], reforzó el papel explicativo que los contextos específicos jugaban en la consideración y explicación de la desafección política.

La contrastación empírica del comportamiento diferencial y disruptivo de las dimensiones del desapego político y la desafección institucional, como componentes de la desafección política, permitió avanzar a los estudios sobre desafección, afirmando la existencia de una desafección política diferencial entre países que pone en duda que la desafección proceda únicamente de un largo proceso de acumulación cultural, siendo una actitud estable (Montero et al., 1998: 41; Putnam 2003, 2011; Torcal 2006, 2016a). Corroborando así que la desafección es una actitud cambiante que se ve influida de forma fundamental por las coyunturas políticas, económicas y sociales en los países europeos (Megías y Moreno, 2022a).

5. Reconceptualizando la desafección

A la luz de los resultados de las investigaciones citadas, observamos la necesidad de integrar dichos hallazgos en la conceptualización de la desafección política, dado que la previa, de la desafección como una actitud, no integra dichos resultados. Por ello, parece pertinente reformular el concepto de desafección política como un fenómeno de naturaleza multidimensional. El comportamiento diferencial de cada una de las dimensiones que conformaban el concepto original —desapego y desafección institucional— y los resultados de las investigaciones precedentes, por un lado, además de la importancia del contexto político, social y económico contemporáneo en su determinación, por otro, no hacen sino poner de manifiesto que si quieren abordarse análisis que capturen en su totalidad el fenómeno de la desafección, su abordaje, estudio, medición y análisis debe proceder de un modo separado, diferencial para cada una de dichas dimensiones, pero integral al conceptualizarse como un único fenómeno.

Este punto es especialmente relevante, puesto que, como se ha visto, los resultados de investigaciones recientes corroboran que, lejos de tratarse de una actitud estable, debe analizarse como un fenómeno sobre cuyas dimensiones puede ser importante la influencia del contexto.

Dados estos antecedentes, de cuyo resultado deriva un cambio en la esencia misma del concepto, esta aproximación al estudio de la desafección política pretende aportar un paso adicional en el estudio del fenómeno, proponiendo una nueva conceptualización, y por tanto de operacionalización y medición. Así, el fenómeno de la desafección política incluye distintas dimensiones que deben estudiarse separadamente. Por un lado, el desapego político (1) y, por otro, la desafección institucional (2).

La primera de estas dimensiones (1), se analizaría a partir de distintos indicadores, como son el interés por la política y la eficacia política interna. Sin embargo, llegados a este punto, es útil reflexionar sobre los instrumentos de medición del interés por la política.

13 Hasta fechas recientes ambos componentes presentaban un comportamiento paralelo, aumentaban o disminuían a un mismo tiempo. Ahora, en cambio, muestran una disrupción; lo que lleva a plantear nuevas preguntas de investigación en el marco de este nuevo contexto.

Tradicionalmente se ha medido a través de preguntas que, con variaciones, responden a una formulación semejante a: "¿En qué medida diría que le interesa la política? Siendo sus categorías de respuesta: mucho, bastante, poco o nada", u otro enunciado que responda al grado de seguimiento de noticias o información sobre política. No obstante, estudios relacionados con los sesgos de género (Ferrín et al., 2020; Fraile y Sánchez-Vítores, 2020) nos indican efectos mediadores del género sobre el interés por los asuntos políticos. Así, mientras estas formulaciones estarían captando la disposición hacia lo político de los varones, no registrarían adecuadamente la de las mujeres; ello debido a que, por el contrario, las mujeres mostrarían una inclinación a interesarse en mayor medida por asuntos políticos concretos, y no por la política en términos convencionales o por los aspectos relacionados con la competición electoral (Moreno y Seisdedos, 2024).

Asimismo, otros estudios sobre el otro componente —la eficacia política interna— también fortalecen nuestra posición de establecer nuevas formulaciones y formas de medición para la eficacia interna dada la importante brecha de género existente en las democracias contemporáneas. Esta brecha tendría su origen en los patrones de socialización de género, según los cuales los hombres son más propensos que las mujeres a ser socializados de manera que se enfaticen rasgos psicológicos como la asertividad, la predisposición al riesgo, la competencia o la autopromoción (Fraile y de Miguel Moyer, 2022: 9). Quienes asumen riesgos o se auto perciben como más dispuestos a asumirlos, sintiéndose más competentes, serían capaces de ejercer un rol más activo en política.

En ambos casos, nuestras propuestas subrayan la necesidad de considerar en la investigación social empírica el carácter masculino de lo político o, en otras palabras, el sesgo de género implícito en la configuración de los indicadores convencionalmente utilizados para la medición de estas cuestiones (Moreno y Ruíz Seisdedos, 2024).

En cuanto a la desafección institucional (2), la importancia de los factores políticos en la determinación de la desafección institucional, debe llevar a considerar en la medición que de la confianza en las instituciones se haga, única y exclusivamente instituciones vinculadas a los políticos y la política, tales como parlamentos, partidos y actores políticos, prescindiendo en su análisis de instituciones como las fuerzas armadas, la monarquía —instituciones no responsables—, o el gobierno, ya que el color de este último llevaría a consideraciones partidistas y evaluaciones que tendrían implicaciones diferentes de las del concepto de institución propiamente dicha. Resultaría muy difícil relativizar, realizar abstracciones y evaluaciones al margen del propio posicionamiento político e ideología (lo que puede corroborarse mediante un análisis de correlación simple).

Finalmente, el indicador de eficacia política externa, que completa la medición de la dimensión de desafección institucional (2) es el que menos cambios experimentaría respecto a su modo de medición actual. Los datos reflejados en estudios como los de Megías (2020a, 2020b) y Megías y Moreno (2022b), a través de análisis factorial confirmatorio, apoyan la propuesta de mantener su medida a través de las dos preguntas habituales acerca del grado de acuerdo con las fra-

ses “Los políticos no se preocupan por la gente como yo” “Lo que yo piense no importa” o “¿en qué medida diría Ud. que el sistema político en España permite a personas como Ud. tener influencia en la política?”

La propuesta anterior pone el acento en que, a la luz de los resultados de las últimas investigaciones, la desafección política no se consideraría como una actitud (ni necesariamente estable), sino como un fenómeno multidimensional, lo que no sólo comporta una conceptualización diferente (que integra los hitos fundamentales de las perspectivas anteriores de investigación, incluyendo las nuevas aportaciones de los últimos estudios), sino que además requiere, para su medición y análisis de planteamientos más sofisticados, en cuanto que resultan más abarcadores, integrando las distintas dimensiones del fenómeno.

6. Discusión

Si este estudio propone una nueva conceptualización de la desafección política, no podemos dejar de referirnos a una cuestión a cuya relación con la desafección no se ha prestado atención en las investigaciones sobre el tema.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la revisión teórica, la desafección política se ha estudiado tradicionalmente como una actitud hacia la política. En este sentido, al igual que con otras actitudes, convencionalmente se ha analizado la desafección al margen del impacto que las emociones tienen sobre ella. De hecho, a pesar de la importancia de los hallazgos previos, sabemos relativamente poco de la intersección entre emociones y actitudes políticas. Algunos estudios sí se han centrado en cómo la comunicación política puede facilitar la moralización de actitudes, aumentando la polarización política (Clifford, 2019), o en cómo las emociones interfieren en el comportamiento electoral y el apoyo a partidos populistas (Magni, 2017), pero no en cómo la presencia de determinadas emociones influye directa e indirectamente sobre distintas actitudes.

En este sentido, y conectando con la literatura sobre psicología política, deberían abordarse cuestiones sobre el papel que las emociones desempeñan sobre la desafección política.

La presencia de sentimientos como la angustia, la ansiedad, la ira o el enfado, especialmente estos últimos, conduce a la movilización política (Magni, 2017; Valentino, et al., 2011; Valentino et al., 2009; Weber, 2013) Este cambio de consideración en la importancia de las emociones vino de la mano del enfoque conductual, que argumenta que estas tienen efectos significativos tanto en los comportamientos de la ciudadanía, como en las decisiones políticas (Olumsuz, Kişilerin, Karar, y Nasil, 2021) y que ha hecho ganar importancia a los estudios empíricos, sobre todo experimentales (Druckman, Green, Kuklinski, y Lupia, 2006). También en este impulso investigador está jugando un papel significativo la extensión de la polarización política, donde los *issues* polarizantes como el aborto, el nacionalismo o la inmigración, entre otros, apoyados por una retórica política que promueve los *cleavages*, conectan con emociones que toman un rol predominante en el comportamiento, la toma de decisiones y el juicio de los ciudadanos (Erisen, 2017).

Aun así, el papel de las emociones en la configuración de las actitudes políticas,

continúa siendo un campo inexplorado, y es que, como subraya Jenkins (2018), hay una gran variedad de emociones implicadas en la desafección política que necesitan una explicación cuidadosa. Si conectamos las emociones con la literatura sobre desafección arriba expuesta, observaremos que si bien tradicionalmente se ha venido explicando que las actitudes cambian lentamente —resultado de procesos de acumulación cultural— los estudios recientes acentúan el peso de las coyunturas en el cambio de actitudes (Megías, 2020b, 2020a; Megías y Moreno, 2022). Aunque estos resultados de investigación no determinan qué elementos del presente influyen, sí queda claro que más allá del énfasis en la importancia de los factores demográficos y estructurales, debe haber algo que explique el cambio individual en las actitudes políticas a lo largo del tiempo.

Para entender estos cambios necesitamos entender el corto plazo, y ahí es donde las emociones pueden jugar un papel clave (Magni, 2017; Valentino et al., 2011), que las investigaciones sobre actitudes políticas no han solventado hasta la fecha.

7. Conclusiones

Este artículo parte de la necesidad de un marco conceptual distinto para la desafección política. Las últimas investigaciones arrojan resultados que parecen desafiar algunos de los saberes convencionales sobre la desafección. No obstante, el reto consistía en integrar estos nuevos hallazgos con los que constituían el marco teórico anterior. Es decir, que la aportación fundamental de este estudio consiste en una propuesta de conceptualización de la desafección política como un fenómeno multidimensional, que integra en las diferentes dimensiones de la desafección, tanto las implicaciones de los resultados de las investigaciones recientes, como el saber acumulado en los enfoques y reformulaciones anteriores. En este sentido, la propuesta pretende actualizar el término, permitiendo que explique el fenómeno de forma más completa, más ambiciosa, al dar cuenta de nuevos aspectos. En definitiva, la nueva conceptualización de la desafección como fenómeno multidimensional responde a dejar de analizarla como una actitud, además de estudiarla como un fenómeno que ya no se presupone necesariamente estable o estructural. Ambos aspectos implican un cambio en la esencia misma del concepto, que precisa de una conceptualización más abarcadora, con el fin de integrar estas nuevas cuestiones, y que por supuesto implica cambios en su operacionalización y estrategia de análisis.

Por último, en la discusión se abre el debate sobre la inclusión de los efectos mediados de las emociones sobre la desafección, con la consecuente potencialidad explicativa respecto del actual contexto de polarización.

8. Bibliografía

Abad Cisneros, A., y Trak, J. M. (2013). Desafección política en Bolivia, Ecuador y Venezuela en 2010: un análisis comparado. *Cuadernos Del Cendes*, *30*(82), 35-66.

Ahmed, S. (2014). *Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh University Press.

Alesina, A., y Wacziarg, R. (2000). The economics of civic trust. In S.J. Pharr y R. D. Putnam (Eds.), *Disaffected Democra-*

cies. What's Troubling the Trilateral Countries? (pp. 147-170). Princeton University Press.

Almond, G. A., y Verba, S. (1989). *The Civic culture revisited*. Sage Publications.

Almond, G. A., y Verba, S. (1970). *La cultura cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*. Euramérica.

Bloch, E., Plaice, N., Plaice, S., y Knight, P. (1995). *The Principle of Hope, Volume 1*. MIT Press.

Campbell, S. (1994). Being Dismissed: The Politics of Emotional Expression. *Hypatia*, *9*(3), 46-65. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1994.tb00449.x

Catterberg, G., y Moreno, A. (2006). The individual bases of political trust: Trends in new and established democracies. *International Journal of Public Opinion Research*, *18*(1), 31-48.

Cazorla-Martín, Á., Montabes-Pereira, J., y Hernández-Tristán, M. J. (2023). Political Disaffection and Digital Political Participation in Latin America: A Comparative Analysis of the Period 2008-2020. *Societies*, *13*(3). https://doi.org/10.3390/soc13030059

Clarke, H. D., Dutt, N., y Kornberg, A. (1993). The Political Economy of Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies. *The Journal of Politics*, *55*(4), 998-1021. https://doi.org/10.2307/2131945

Clifford, S. (2019). How Emotional Frames Moralize and Polarize Political Attitudes. *Political Psychology*, *40*(1), 75-91. https://doi.org/10.1111/pops.12507

Dalton, R. J. (2000). Value change and democracy. In R. D. P. Susan J. Pharr (Ed.), *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton University Press.

Del-Castillo-Feito, C., Cachón-Rodríguez, G., y Paz-Gil, I. (2022). Political Disaffection, Sociodemographic, and Psychographic Variables as State Legitimacy Determinants in the European Union. *American Behavioral Scientist*, *66*(1), 86-105. https://doi.org/10.1177/0002764220981116

Downs, A., y Merino, L. A. M. (1973). *Teoría económica de la democracia*. Aguilar.

Druckman, J., Green, D., Kuklinski, J., y Lupia, A. (2006). The Growth and Development of Experimental Research in Political Science. *American Political Science Review*, *100*(4), 627-635. https://doi.org/10.1017/S0003055406062514

Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley. https://books.google.es/books?id=AvsMAQAAMAAJ

Easton, D. (1975). A Re-Assessment of the Concept of Political Support. *British Journal of Political Science*, *5*(4), 435-457. https://doi.org/10.1017/S0007123400008309

Eckstein, H. (1988). A Culturalist Theory of Political Change. *The American Political Science Review*, *82*(3), 789-804. http://www.jstor.org/stable/1962491%5Cnhttp://www.jstor.org/stable/1962491?seq=1ycid=pdf-reference#references_tab_contents%5Cnhttp://about.jstor.org/terms

Erisen, C. (2017). *Political Behavior and the Emotional Citizen: Participation and*

Reaction in Turkey. Palgrave Macmillan UK.

Fernández, L., y Morán, M. (2014). Encontrar la cultura: estrategias de indagación para el análisis sociopolítico. *Revista de Estudios Sociales*, *50*, 43-56.

Ferrín, M., Fraile, M., García-Albacete, G. M., y Gómez, R. (2020). The gender gap in political interest revisited. *International Political Science Review*, *41*(4), 473-489. https://doi.org/10.1177/0192512119860260

Fraile, M., y de Miguel, C. (2022). Risk and the gender gap in internal political efficacy in Europe. *West European Politics*, *45*(7), 1462-1480. https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1969146

Fraile, M., y Sánchez-Vítores, I. (2020). Tracing the Gender Gap in Political Interest Over the Life Span: A Panel Analysis. *Political Psychology*, *41*(1), 89-106. https://doi.org/10.1111/pops.12600

Galais, C. (2008). *Socialización o contexto? La implicación política subjetiva de los españoles (1985-2006)*.

Gamson, W. A. (1968). *Power and discontent*. Dorsey Press.

Inglehart, R. (1991). *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Inglehart, R. (1998). *Modernización y posmodernización: el cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Inglehart, R, y Welzel, C. (2006a). *Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Inglehart, R. (1971). The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies. *American Political Science Review*, *65*(4), 991-1017. https://doi.org/10.2307/1953494

Inglehart, R. (1977). *The Silent Revolution: Changing values and political styles among Western publics*. Princeton University Press.

Inglehart, R. (2005). Modernización y cambio cultural: la persistencia de los valores tradicionales. *Quaderns de La Mediterrània = Cuadernos Del Mediterráneo*, *5*, 21-32.

Jenkins, L. (2018). Why do all our feelings about politics matter? *British Journal of Politics and International Relations*, *20*(1), 191-205. https://doi.org/10.1177/1369148117746917

Jiménez, F. (2016). Los efectos de la corrupción sobre la desafección y el cambio político en España. In *La corrupción en España* (pp. 49-67). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

King, D. C. (1997). The Polarization of American Parties and Mistrust of Government. In D. C. King, J. S. Nye, y P. D. Zelikow (Eds.), *Why People Don't Trust Government* (pp. 155-178). Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv322v3xg.10

Klingemann, H.-D. (1998). Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis. In Pippa Norris (Ed.), *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance.* (pp. 31-56). Oxford University Press.

Lawrence, R. Z. (1997). Is It Really the Economy, Stupid? In Joseph S Nye, P. D. Zelikow, y D. C. King (Eds.), *Why People Don't Trust Government* (pp. 111-132). Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv322v3xg.8

Lijphart, A. (2000). *Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en treinta y seis países*. Ariel.

Magni, G. (2017). It's the emotions, Stupid! Anger about the economic crisis, low political efficacy, and support for populist parties. *Electoral Studies*, *50*, 91-102. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.09.014

Meer, T. W. G. Van Der. (2017). Democratic input, macroeconomic output and political trust. In *Handbook on Political Trust* (pp. 270-284).

Megías, A. (2018). *Desafección política ¿estructura o coyuntura? : un estudio profundo en el contexto actual de crisis* [Universidad de Murcia]. http://hdl.handle.net/10201/65840

Megías, A. (2020a). Changes in the nature of a decade-long crisis of disaffection. *Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas*, *169*, 103-122. https://doi.org/10.5477/cis/reis.169.103

Megías, A. (2020b). No es la economía, estúpido. La evolución del perfil del desafecto español pre y postcrisis. *Revista Española de Ciencia Política*, *52*, 85-120. https://doi.org/10.21308/recp.52.04

Megías, A., y Moreno, C. (2022). Political disaffection in Spain's European neighbours: a stable attitude? *Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas*, *179*(September), 103-124. https://doi.org/10.5477/cis/reis.179.103

Megias, A. (2018). *Desafección Política ¿Estructura o Coyuntura? Un Estudio Profundo en el Contexto Actual de Crisis.* Universidad de Murcia.

Miller, A. H., y Listhaug, O. (1990). Political Parties and Confidence in Government: A Comparison of Norway, Sweden and the United States. *British Journal of Political Science*, *20*(03), 357. https://doi.org/10.1017/S0007123400005883

Mishler, W., y Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. *Comparative Political Studies*, *34*(1), 30-62. https://doi.org/10.1177/0010414001034001002

Montero, J. R., Gunther, R., y Torcal, M. (1998). Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, *83*, 9-49. https://doi.org/10.2307/40184120

Montero, J. R., Gunther, R., y Torcal, M. (1998). Actitudes hacia la Democracia en España: Legitimidad, Descontento y Desafeccion. *Revista Española de Investigaciones Sociales*, *83*, 9-49. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=757677

Montero, J. R., y Torcal, M. (1990). La cultura política de los españoles: pautas de continuidad y cambio. *Sistema: Revista de Ciencias Sociales*, *99*, 33-74.

Morán, M. L. (2011). La Cultura Política en España: interrogantes, debates y aportaciones. In UNAM (Ed.), *Cincuenta años de la cultura cívica: pensamientos y reflexiones en honor al profesor Sidney Verba* (pp. 101-122). Instituto de Investigaciones Jurídicas. https://eprints.ucm.es/42861/

Moreno, C., y Seisdedos, S. R. (2024). El género en el voto. In P. Oñate, J. M. Rivera, y C. Ortega (Eds.), *Las elecciones generales de noviembre de 2019* (pp. 173-187). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Morlino, L., y Tarchi, M. (1996). The dissatisfied society: The roots of political

change in Italy. *European Journal of Political Research*, *30*(1), 41-63. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1996.tb00667.x

Norris, P. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford University Press.

Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.

Nussbaum, M. (2008). *Paisajes del pensamiento: La inteligencia de las emociones*. Paidós. https://books.google.es/books?id=TLApnxW1VR4C

Nussbaum, M. (2014). *Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la justicia?* Ediciones Paidós.

Nye, J S, Zelikow, P., y King, D. C. (1997). *Why People Don't Trust Government*. Harvard University Press.

Olumsuz, T., Kiźilerin, D., Karar, S., y Nasil, S. (2021). How Do The Main Negative Emotions Affect People ' s Political Decision Process ? : "Fear, Anxiety And Anger". *Journal of Academic Inquiries*, *16*(1), 16.

Orren, G. (1997). Fall from Grace: In Joseph S Nye, P. D. Zelikow, y D. C. King (Eds.), *Why People Don't Trust Government* (pp. 77-108). Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv322v3xg.7

Palma, G. Di. (1970). *Apathy and Participation: Mass Politics in Western Societies*. The Free Press. Macmillan Company.

Pharr, S J, y Putnam, R. D. (2000). *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton University Press.

Pharr, S J. (2000). Officials' Misconduct and Public Distrust: Japan and the Trilateral Democracies. In Susan J Pharr y R. D. Putnam (Eds.), *Disaffected Democracies* (pp. 173-201). Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv39x5n8.13

Prokhovnik, R. (2012). *Rational Woman: A Feminist Critique of Dichotomy*. Taylor & Francis. https://books.google.es/books?id=QQbrYqfr0vIC

Putnam, R. D. (2011). *Para que la democracia funcione: Las tradiciones cívicas en la Italia moderna*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Saikkonen, I. A. L., y Christensen, H. S. (2023). Guardians of Democracy or Passive Bystanders? A Conjoint Experiment on Elite Transgressions of Democratic Norms. *Political Research Quarterly*, *76*(1), 127-142. https://doi.org/10.1177/10659129211073592

Sampedro, V., y Lobera, J. (2014). The Spanish 15-M Movement: a consensual dissent? *Journal of Spanish Cultural Studies*, *15*(1-2), 61-80. https://doi.org/10.1080/14636204.2014.938466

Soler-i-Marti, R., y Balleste-Isern, E. (2024). Political disaffection or institutional adultcentrism? Youth perceptions of adult hegemony in institutional politics and policies. *Journal of Youth Studies*. https://doi.org/10.1080/13676261.2024.2399611

Tajfel, H. (1984). *Grupos humanos y categorías sociales: estudios de psicología social*. Herder.

Tajfel, H., y Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel y W. G. Austin (Eds.),

Psychology of Intergroup Relation (pp. 7-24). Hall Publishers.

Torcal, M. (2006). Desafección institucional e historia democrática en las nuevas democracias. *Revista SAAP*, *2*(3), 591-634.

Torcal, M, y Montero, J. R. (2006). *Political Disaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions and Politics*. Taylor & Francis.

Torcal, M. (2000). Partidos y desafección política. *Magazine, DHIAL*. https://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desafección_política

Torcal, M. (2014). The Decline of Political Trust in Spain and Portugal: Economic Performance or Political Responsiveness? *American Behavioral Scientist*, *58*(12, SI), 1542-1567. https://doi.org/10.1177/0002764214534662

Torcal, M. (2016a). Desafección Política en España en una perspectiva comparada. In F. J. Llera Ramo (Ed.), *Desafección política y regeneración democrática en la España actual: diagnósticos y propuestas* (pp. 79-115). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Torcal, M. (2016b). Political trust in Western and Southern Europe. In *Handbook on Political Trust* (pp. 418-439). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8531-3_25

Torcal, M, y Magalhães, P. C. (2010). Cultura política en el sur de Europa: un estudio comparado en busca de su excepcionalismo. En Mariano Torcal (Ed.), *La ciudadanía europea en el siglo XXI: estudio comparado de sus actitudes, opinión pública y comportamiento políticos*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Valentino, N. A., Brader, T., Groenendyk, E. W., Gregorowicz, K., y Hutchings, V. L. (2011). Election night's alright for fighting: The role of emotions in political participation. *Journal of Politics*, *73*(1), 156-170. https://doi.org/10.1017/S0022381610000939

Valentino, N. A., Gregorowicz, K., y Groenendyk, E. W. (2009). Efficacy, emotions and the habit of participation. *Political Behavior*, *31*(3), 307-330. https://doi.org/10.1007/s11109-008-9076-7

Van Erkel, P. F. A., y Van Der Meer, T. W. G. (2016). Macroeconomic performance, political trust and the Great Recession: A multilevel analysis of the effects of within-country fluctuations in macroeconomic performance on political trust in 15 EU countries, 1999-2011. *European Journal of Political Research*, *55*(1), 177-197. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12115

Villoria, M. (2006). ¿Por qué desconfiamos de los políticos? Una teoría sobre la corrupción de la política. *Revista Del CLAD Reforma y Democracia*, *34*, 1-21. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533666002

Weber, C. (2013). Emotions, Campaigns, and Political Participation. *Political Research Quarterly*, *66*(2), 414-428. https://doi.org/10.1177/1065912912449697

Wildavsky, A. (1987). Choosing Preferences by Constructing Institutions: A Cultural Theory of Preference Formation. *American Political Science Review*, *81*(1), 3-21. https://doi.org/10.2307/1960776

SHAM MARRIAGES, CITIZENSHIP MARKETS, AND IMMIGRATION RESISTANCE

MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA, MERCADOS DE CIUDADANÍA Y RESISTENCIA MIGRATORIA

Borja Niño Arnaiz
Universidad de Reading, Reading, Reino Unido
ganguren42d@gmail.com

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Keywords: sham marriage, selling citizenship, citizenship markets, immigration resistance, ethics of immigration.
Palabras clave: matrimonio de conveniencia, compraventa de ciudadanía, mercados de ciudadanía, resistencia migratoria, ética de las migraciones.

Abstract: The morality of sham marriage has been largely overlooked in the ethics of immigration. The aim of this article is to fill this gap by defending sham marriages both as a sort of private citizenship market and a form of immigration resistance. Sham marriages are pro tanto morally permissible because they are a free and mutually beneficial exchange and do not undermine the institution and value of marriage. Moreover, this pro tanto permissibility is not defeated by the infringement of other rights or outweighed by competing interests and considerations. The first part assumes that states have a right to exclude unwanted immigrants, but holds that such a right is limited by the right of citizens to marry foreign partners. Sham marriages constitute an informal citizenship market, and as such they are immune to the standard objections raised against their formal counterparts. The second part rejects that states have a right to exclude, arguing that foreigners may enter into sham marriages with citizens to bypass unjust immigration restrictions. In this case, the monetary exchange that takes place in sham marriages is not problematic, for citizens have no antecedent duty to marry unauthorized migrants.

Resumen: La moralidad de los matrimonios de conveniencia ha sido ampliamente ignorada por la ética de las migraciones. El objetivo de este artículo es subsanar esta omisión defendiendo los matrimonios de conveniencia como un tipo de mercado de ciudadanía y una forma de resistencia migratoria. Los matrimonios de conveniencia son moralmente permisibles en la medida en

que se trata de un intercambio libre y mutuamente beneficioso que no socava la institución y el valor del matrimonio. Además, su permisibilidad pro tanto no se ve cuestionada por la violación de otros derechos o socavada por intereses o consideraciones opuestas. La primera parte del trabajo presupone que los Estados tienen derecho a excluir a los inmigrantes no deseados, pero sostiene que dicho derecho está limitado por el derecho de los ciudadanos a contraer matrimonio con personas extranjeras. Los matrimonios de conveniencia constituyen un mercado de ciudadanía informal, y como tales son inmunes a las objeciones que se suelen esgrimir contra los mercados de ciudadanía formales. La segunda parte rechaza que los Estados tengan derecho a excluir a los inmigrantes, y defiende que los extranjeros pueden contraer matrimonio con ciudadanos para eludir así las restricciones a la inmigración injustas. En este caso, el intercambio monetario que tiene lugar en los matrimonios de conveniencia no es problemático, puesto que los ciudadanos no tienen ninguna obligación previa de casarse con los migrantes no autorizados.

1. Introduction

Political philosophy has only recently begun to discuss the ethics of immigration in non-ideal circumstances (Reed-Sandoval, 2016, 2020). One of its branches is the "ethics of immigration enforcement", which discusses the permissibility of and the limits to the strategies states routinely use to control admission into their territory (Mendoza, 2017: chap. 5; Hosein, 2019: chap. 3; Lister, 2020). These include, but are not limited to, carrier-sanctions, refugee camps, immigrant detention, extraterritorial border controls, and racial profiling. Another branch is what we might call the "ethics of immigration resistance", which discusses the actions that individuals (both citizen and foreign) are allowed and sometimes even required to undertake to challenge states' right to exclude (Hidalgo, 2019a; Aitchison, 2023). The most common themes here are human smuggling, clandestine migration, border rescue, and sanctuary.

In this article I will focus on what might be considered both a sort of citizenship market and a form of immigration resistance, namely sham marriage. Broadly speaking, a sham marriage is a legal union between two people (usually a citizen and a foreigner) entered into solely for the purposes of obtaining an immigration-related benefit, be it a residence permit or citizenship rights. It allows foreigners to gain admission into a country and (eventually) access to citizenship by marrying a citizen in exchange for a sum of money or whatever else is agreed between them. These type of marriages are usually juxtaposed to so-called genuine or bona fide marriages.

It may be considered a sort of citizenship market because it involves the selling of citizenship by private individuals. Although the right to include is exercised mainly by states, it can also be exercised by private corporations when they sponsor foreign workers and by citizens when they bring in family members living abroad. On the other hand, it is a form of immigration

resistance because it consists in the deception of immigration authorities to gain admission into the country and (eventually) access to citizenship. The sham spouses defy the state's right to exclude by making a fraudulent use of a legal migration channel, in this case citizens' right to marry foreign partners.

The article is structured as follows. The second section defends the permissibility of sham marriages. The third section argues that sham marriages constitute a sort of informal citizenship market, which are immune to the standard objections raised against their formal counterparts. The fourth section vindicates sham marriages as a form of immigration resistance. The fifth section concludes.

2. In defense of sham marriages

My defense of sham marriages is based on the following three premises:

1. Citizens have a right to marry foreigners.
2. When citizens marry foreigners, the latter become eligible for permanent residency and/or citizenship.
3. Sham marriages (a) are a free and mutually beneficial exchange and (b) do not undermine the institution and value of (bona fide) marriage.

I take the first two premises to be relatively uncontroversial. The third premise is more difficult to establish, but I think it can be done safely. Together, these premises make up a *pro tanto* case for the permissibility of sham marriage, but they do not conclusively show that sham marriages are *all-things-considered* permissible. This may be either because sham marriages violate other rights or because they are outweighed by competing interests and considerations. I will come back to that later. First, let us consider each premise in turn.

As far as the first premise is concerned, even the staunchest advocates of the right to exclude grant that citizens have a right to marry foreigners grounded in their right to freedom of association (Wellman and Cole, 2011: 92 fn. 3). This right "is based on the fundamental right to form intimate relationships of one's choosing" and "is an essential one for personal autonomy and in the development and exercise of what Rawls calls the 'moral powers'" (Lister, 2010: 721). So, even if a state has a sweeping right to exclude, it must allow its citizens to bring in their foreign-born partners and family members. "[T]he right in question here is the right of a current citizen to bring in an outsider, and not the right of an outsider to enter" (2010: 729).

The second premise is a corollary of the first. As Lister (2010: 729, emphasis added) argues:

> It is part of the nature of family life that it can almost always be only lived in a satisfactory way if its members […] are able to live in close proximity. This, however, is possible only if states allow their citizens to bring in their non-citizen partners and family members and make available *permanent residence* (and hence eventually *full citizenship*).

This possibility is afforded by the immigration laws of many countries. For example, the United States allows the partners of U.S. citizens or lawful permanent residents to become lawful permanent residents in the United States. The so-called "marriage-based green card" confers on

foreign partners several benefits, including the right to apply for U.S. citizenship after a certain period of residence. Similarly, Australian citizens and permanent residents can bring their prospective spouses to Australia before getting married. The "prospective marriage visa" allows offshore applicants to enter the country for 9 months with a view to marrying their Australian partner, after which they can apply for a "partner visa" to become permanent residents and (eventually) Australian citizens.

The third premise has two parts: the first claims that sham marriages are free and mutually beneficial, and the second states that they do not undermine the institution and value of (bona fide or genuine) marriage. I will focus on the second part, since I take the first to be self-evident: if foreigners (and, for that matter, citizens) did not expect to benefit from the exchange, why would they agree to it?[1] The second part refers to an important interest that might defeat the pro tanto permissibility of sham marriage, namely the interest in preserving the integrity and social meaning of marriage. If, say, allowing siblings to get married would pervert the integrity and social meaning of marriage, then we should not allow siblings to get married. Similarly, it might be argued that sham marriages, despite being mutually beneficial and voluntary, undermine the institution of marriage. If committing marriage fraud undermines the institution of marriage, that is a good reason to prohibit sham marriage and even to prosecute those who enter into one.

However, there are two reasons why sham marriages do not necessarily undermine the institution and value of marriage. First, the legal validity of marriage depends entirely on the recognition by the state, not on the recognition by other individuals. As such, the fact that many people do not approve of same-sex marriage does not make it any less legally valid vis-à-vis the state. Similarly, the fact that many people disapprove of sham marriage does not make it any less legally valid vis-à-vis the state—provided, of course, that the state is unaware of the underlying motives of the spouses. Second, the value of marriage is inward-looking (i.e., it concerns only the parties involved) and independent of the value of other marriages, such that the disvalue of a particular marriage does not detract from the value of another. In this sense, the fact that there are arranged marriages does not diminish the value of marriages that have been freely entered into. Similarly, the fact that there are sham marriages need not taint bona fide or genuine marriages.

One might object that rights must be genuinely exercised in the pursuit of the good they are meant to protect, otherwise the good in question risks being corrupted, and the very right that we are exercising undermined. Some goods are intrinsically valuable, such that viewing them instrumentally—as means rather than ends—comes at a loss of their value. For example, if you want to become a parent, you should do so out of concern for the future child's wellbeing, and not just because you feel lonely or need a new lease on your life, even if the latter would suffice to motivate yourself to take adequate care of her. This is because childrearing is valuable in and of itself on account of the relationship established by the parent and the

1 A different question is whether the exchange is exploitative for either of the parties involved, a question that will be dealt with in the next section.

child. Similarly, it might be thought that the right to marry must be exercised in the pursuit of a meaningful and valuable loving relationship, given that the point of marriage is precisely the legal recognition and protection of meaningful and valuable loving relationships. The worry is that if the right to marry is not exercised in a proper way, as is the case when people enter into a sham marriage, the institution of marriage will lose much of its value, and will increasingly be viewed as a convenient transaction rather than as an engagement based on commitment and mutual care.

This is a strong argument, but it rests on an implausible understanding of rights. Rights do not impose duties on the right-holder, but only on the duty-bearer[2]. Thus, if I have a claim right to X, you have a correlative duty to X; and if I have a liberty right to Y, you have a correlative duty to allow me to or not to prevent me from Y. In the case of childrearing, you must take adequate care of the child not because your right to have children entails such duty—indeed, there is no such a right—, but rather because the child has a right that her parent take adequate care of her. In the case of marriage, you have duties to your partner correlative to the claims she has against you, but I do not think the latter include the right to have a meaningful and valuable loving relationship with you. If she has no right to marry you and you may divorce her at any time, then a fortiori she has no right to a meaningful and valuable loving relationship with you. Thus, even if sham marriage may distort the good of marriage by valuing it in the wrong way, to the extent that people have no right to a meaningful and valuable loving relationship, they have no right to the undistorted good of marriage.

Maybe your compatriots have a claim against your entering into a sham marriage. This might be because the permissibility of sham marriages is outweighed by competing interests and considerations. I have already considered an important interest that might be said to outweigh their permissibility—namely, the interest in preserving the institution and value of marriage—, but I have rejected this possibility. However, it is still possible that sham marriages are all-thing-considered impermissible because they violate other people's rights. Whose rights could sham marriages violate? Surely not the rights of those who freely enter into them. If they are to violate anyone's rights, then, it must be the rights of other citizens[3]. But is there really a right that people marry for "genuine", as opposed to instrumental or spurious, reasons?

To see why there is no such a right, consider the following two cases of marriage

2 If there are limits to rights, it is not because rights come with duties, but because other people's rights impose duties on us, just as our rights impose duties on them. It may be the case that people need to meet certain conditions in order to qualify for a right (for example, they must be, say, over 16 years old to get married), but I cannot see how having the "right" motives is necessary to qualify for a right. It is enough that one does not have the "wrong" motives, where wrongness is cashed out in terms of rights violation. Thus, if you want to buy a gun—suppose that there is a conditional right to own guns—, you do not need to prove that you want it for the right motives (whatever these are); it suffices that you do not have the wrong ones in mind, in the sense that you do not intend to use the gun to harm others.

3 Discussing the rights of foreigners (i.e., those who do not migrate) in relation to "brain drain" would take me too far afield. Fortunately, others have convincingly done so before. See, for instance, Tesón (2008) and Oberman (2013).

fraud—the only difference being that this time both parties are citizens. The first case involves a pair of friends who get married so that one of them can adopt a child. Let us stipulate that single parents are not allowed to adopt. In this case, it seems morally permissible (and even praiseworthy) for the friend to marry the would-be parent. The second example concerns a man who is drafted into the army. Given that his country does not allow citizens to object on conscientious grounds, the only way he can skip military service is by getting married, so he asks an acquaintance to marry him in order to avoid conscription. In both cases, we would think that the parties acted permissibly.[4] Why is marriage between a citizen and a foreigner any different?

The only relevant difference that I can see could explain why sham marriages are impermissible is that the state has a right to exclude. But remember that the right to exclude is not absolute. Citizens have a pro tanto right to get married with their foreign partners.[5] In order to assess whether the right to exclude rules out sham marriage, we need to know what good or interests are protected by exclusion. The right to exclude is said to be grounded in one or more of the following values: freedom of association (Wellman, 2008; Steinhoff, 2022), the right to avoid unwanted obligations (Blake, 2013, 2020), collective ownership (Pevnick, 2011), democratic self-government (Song, 2017, 2019), domestic social justice (Cafaro, 2015; Macedo, 2018), and national identity (Miller, 1995; Meilander, 2001). Let me sketch out each argument in turn:

- *Freedom of association*: citizens have a right not to associate with foreigners grounded on their right to freedom of association.
- *The right to avoid unwanted obligations*: citizens have a right to avoid unwanted obligations imposed by foreigners when they have no reason to become so obligated.
- *Collective ownership*: the state is a collective enterprise that citizens contribute to and over which they acquire ownership rights that entitle them to exclude foreigners.
- *Democratic self-government*: citizens have a right to collective self-determination which includes the right to determine membership in the demos.
- *Domestic social justice*: citizens have a right to exclude foreigners when doing so is necessary to protect the domestic poor and/or preserve (the necessary preconditions for) the welfare state.
- *National identity*: citizens have a right to exclude foreigners when doing so is necessary to preserve national identity, or at least to retain some degree of control over how it evolves.

The question is not whether sham marriages violate or are outweighed by these values, but whether they do/are so in a

4 I do not think that introducing money into the equation would alter our moral intuitions. However, I will not consider this argument here.

5 It goes without saying that this right does not include marriage for criminal purposes. For example, if the foreign partner is a suspected terrorist who is planning to attack the country, the citizen has no right to bring him in. Similarly, if he has a highly contagious disease that would pose a serious health risk, it may be permissible to deny him entry. But these exceptions also apply to bona fide or genuine marriages.

way that bona fide marriages do/are not. If sham marriages are impermissible because, say, they undermine domestic social justice, to the extent that bona fide marriages between a citizen and a foreigner also undermine domestic social justice, they would be impermissible too. So, in order to establish the impermissibility of sham marriages, we need to point to a difference with bona fide marriages in their effect on the above values.

I lack the space to defend this claim at length, but it seems to me that bona fide marriages violate citizens' right to avoid unwanted obligations, collective ownership, domestic social justice, and national identity in just the same way as sham marriages do. First, immigration through sham marriage imposes new unwanted obligations on citizens, but so does immigration through bona fide marriage[6]. Second, when the foreign sham spouse becomes a citizen, she acquires ownership rights over state institutions in just the same way as when a foreign bona fide partner becomes a citizen. Third, poor compatriots and/or the welfare state can be adversely affected by foreigners no matter whether the latter gained admission through a bona fide or sham marriage. Fourth, national identity is transformed irrespective of the genuine or spurious nature of the marriage. By contrast, freedom of association and democratic self-government do seem to entail the impermissibility of sham marriages.

Let me begin with freedom of association. It has been argued that, in matters of immigration, freedom of association only protects the rights of citizens who are in an intimate relationship with foreigners. As Lister (2010: 728) writes, "[v]arious types of associations are protected by these rights, but in general, the more intimate a relationship, the less discretion a state has in limiting it". Even Luara Ferracioli (2016, 2022: chap. 5), who favors an expansive interpretation of the right to family reunification, argues that only relationships that are irreplaceable, socially valuable, and meaningful to people's lives qualify for reunification[7]. Given that sham

6 Blake (2013: 219 fn. 43) might respond that citizens do have an obligation to acquire new obligations when it comes to the admission of citizens' foreign partners. The problem is that we do not know what new obligations citizens have an obligation to acquire. It is an open question whether the obligations bona fide marriages impose on citizens are actually wanted. Surely, the fact that bona fide marriages are legally sanctioned is a sign of their prima facie authorization by the state, but it does not conclusively show that the new obligations that come with them are indeed wanted by the citizenry. More importantly, it makes no sense to say that citizens have an obligation to acquire the new obligations imposed by the foreign partners of current citizens when their relationships are genuine because these new obligations are *wanted*. For one thing, how can there be an obligation to acquire new wanted obligations? This is akin to saying that I am obligated to pay the taxes I want to pay.

7 This is because immigration imposes costs on the rest of society, so simply caring about a relationship is not enough. The relationship must be valuable both to the citizen herself and to the society at large so that the former is entitled to impose some of the costs arising from this relationship on the latter (Ferracioli, 2016: 564, 2022: 103-104). This is a convincing response, but where exactly should we draw the line between relationships that may legitimately impose costs on citizens and those that cannot? Merely saying that citizen-citizen relationships may impose costs on other citizens but citizen-foreigner relationships cannot impose such costs will not do. It would beg the question to say that relationships where both parties are citizens can impose costs on other citizens whereas relationships where one of the parties is a foreigner cannot, for what

marriages are not conducive to the establishment of meaningful and valuable relationships, they should not be protected by freedom of association in the immigration context, at least not to the same extent as intimate associations. So, whereas bona fide marriages are protected by freedom of association, sham marriages are not.

In response, note that when two people do no harm to others in exercising their freedom of association, there is a presumption that they be free to associate, so it is not enough to say that such an association does not protect sufficiently weighty interests. What needs to be shown is that such interests are outweighed by competing ones. For example, it is not enough to say that a chess club protects only trivial interests. Given that they do not harm anyone, there must be a weightier interest at stake in order to prevent them from associating. In the absence of a competing interest, they must be allowed to associate even for the sake of trivial interests.

Is citizens' collective freedom of association a sufficiently weighty interest to trump citizens' individual freedom of association? I do not think it is. However, if we are to defend the state's right to exclude on that basis, we must think so. Otherwise, citizens would be free to invite any foreigner for whatever associative purpose, be it doing business, having sex, praying together, rallying for a political candidate, and so on. These are some of the interests that advocates of open borders mention as grounds for the right to immigrate (Carens, 2013: 239). But recall that in this section I am assuming that there is no such a right, but only a limited right to invite foreign partners and family members. So, saying that "it is impermissible to invoke a certain doctrine of valuable relationships in order to limit the freedom of consenting adults to associate with each other" (López-Guerra, 2020: 320) will not do.

My response rests on an empirical and a normative claim. The first affirms that the state has no ability to determine with certainty which marital relationships are genuine, or what counts as a genuine marriage in the first place. Compare this to the case of refugees: even if there is an internationally agreed upon definition of refugees[8], asking asylum seekers too much evidence in support of their case is dangerous, for it risks leaving many genuine refugees out. If this is true of such a legally determinate concept as refugee, then it must also be true of such an indeterminate legal category as marriage[9]. The second reason is that we better abstain from making normative judgments about the validity of a given marriage. We are already quite skeptical of the state telling us what counts as a valuable relationship and ascribing rights accordingly. This skepticism is compounded in the case of intimate relationships, where determining their authenticity would entail a severe infringement of personal privacy. A similar worry arises in deportations proceedings: how can immigration officials determine

needs to be determined is precisely whether the fact that one of the parties to the relationship is a foreigner matters to whether such relationships can impose costs on other citizens in a way that relationships where both parties are citizens can.

8 This is not to say that philosophers agree on the definition of refugee.

9 To say that marriage is a legally indeterminate category may sound preposterous. However, one need only look at the myriad forms that marriage takes in different countries to realize that there is no internationally agreed upon definition of marriage.

whether a person has sunk deep roots in her country of residence other than by inquiring about her private life? Asserting confidently the authenticity of one's claims in such intricate personal matters is not only difficult, but also dangerous and unduly invasive.

As for democratic self-government, sham marriages undermine this value in a way that bona fide marriages do not. In particular, "[w]hen would-be immigrants enter or remain in a country without authorization [as it happens when they gain admission through sham marriage], they sidestep the political process by which members of the political community can define who the collective is. This contravenes the right of collective self-determination itself" (Song, 2019: 66). This is not the case of bona fide marriages, which are usually democratically authorized by the citizenry[10]. The democratic self-government argument may work against sham marriages, but it lacks the resources to criticize a ban on family migration. For example, if a country democratically decides that it will no longer grant (as many) family migration visas because it wants to focus on attracting high-skilled workers, citizens with foreign partners cannot but reluctantly accept this decision. By the same token, if a country democratically decides to create a citizenship market, there can be no complain from a democratic point of view. In short, by insisting that the collective has the right to democratically determine its own composition, the present argument rules out sham marriages but opens the door to other controversial immigration policies.

In conclusion, sham marriages are pro tanto morally permissible because they are a free and mutually beneficial exchange and do not undermine the institution and value of marriage. Moreover, this pro tanto permissibility is not outweighed by some of the most pressing conflicting interests and competing considerations. First, even if sham marriages may distort the good of marriage by valuing it in the wrong way, people have no right to a meaningful and valuable loving relationship with others, so they have no right to the undistorted good of marriage. Second, citizens have no claim against sham marriages, just as they have no claim against other cases of fraudulent marriage. And third, sham marriages do not impinge on the values that ground the state's right to exclude any more than bona fide marriages between a citizen and a foreigner do.

3. Sham marriages as a citizenship market

Even if they have not been implemented yet, private citizenship markets have been criticized on a number of grounds[11]. In surveying the standard objections to for-

10 Even if citizens do not cast a vote on every single marriage, they do have a say in the legal channels through which foreigners can gain admission, including marriage.

11 In contrast, *public* citizenship markets have a long record that dates as far back as the 1980s (Shachar, 2017: 794). The difference between public and private citizenship markets is that whereas in a public citizenship market it is the state which sells citizenship, in a private citizenship market it is citizens themselves who sell it, for example, by swapping their citizenship with foreigners in exchange for money. Sham marriages are a sort of private citizenship market because they involve the selling of citizenship by individual citizens.

mal citizenship markets, I do not mean to endorse or reject them. Rather, my purpose is to show that, even if successful, these objections do not tell against sham marriages. To understand why, we must distinguish between formal and informal citizenship markets. The former are backed up and regulated by the state, whereas the latter escape its purview and usually go against the law. Because sham marriages constitute an *informal* citizenship market, they are immune to the standard objections raised against their *formal* counterparts. This is because the message the state conveys when it engages in selling citizenship is clearly different from the one conveyed by private individuals when they engage in this practice. The state, as the upholder of the public interest and equality among citizens, must abstain from those practices that would contravene its legally mandated functions. This explains why the state must remain neutral between different conceptions of the good. By contrast, individuals are allowed to pursue their own conceptions of the good and engage in those activities conducive to them.

The first objection to formal citizenship markets is the so-called commodification objection, which has been advanced by Shachar and Hirschl (2014) and Tanasoca (2016, 2018: chap. 4), among others. This objection holds that some things should not be for sale because their intrinsic value is incompatible with the market. For example, it is widely accepted that children should not be for sale because a market in parenting clashes with the very logic of childrearing, which is associated with selfless care for the child. By the same token, it might be argued, citizenship should not be for sale because a market in citizenship clashes with the very logic of citizenship, which is associated with civic duties, democratic participation, reciprocity, equal rights, joint responsibility, and actual membership in the state. In contrast, citizenship markets express the idea that citizenship is a function solely of the size of one's wallet, irrespective of the ties one has to the country. A market approach to citizenship means that citizenship will only be valued instrumentally, for what it can accrue to the buyer, rather than for the participation in a joint venture whose fate is inextricably linked to her own wellbeing. In conclusion, the worry is that citizenship markets would corrupt the value and very meaning of citizenship.

This is a very powerful argument against formal citizenship markets (cf. Erez, 2023a), but I think it does not apply to sham marriages qua informal citizenship market. To see why, let us begin with Hidalgo's (2016a) defense of public citizenship markets. According to him, "[i]f it is permissible for a state to deny foreigners access to citizenship, then it is *prima facie* permissible for this state to sell citizenship to these foreigners if this transaction is voluntary and does not violate anyone's entitlements" (Hidalgo, 2016a: 224). When considering the commodification objection, he puts the example of a golf club. Suppose that I own a golf club. As its legitimate owner, I am morally entitled to exclude everyone else from my golf club. In other words, I have no obligation to admit would-be members. This is important, for states usually claim the right to exclude prospective immigrants. So, just as I can refuse to admit new golf players, so can states refuse to admit foreigners. Hidalgo further argues that membership in a golf club is analogous to membership in a state in the sense that both confer its members equal status and a series of

rights. Accordingly, "[i]f the club can permissibly sell instrumentally valuable entitlements and symbolic markers of membership and equal status […], then at first glance it is hard to see why it would be intrinsically wrong for states to sell these goods to foreigners" (2016a: 231).

In this example, Hidalgo overlooks (or rather, downplays) a crucial difference between a golf club and a state: membership in the latter is a precondition for the enjoyment of basic rights and freedoms as well as a domain of equality among its members, whereas membership in the former is not—for example, some members may be granted more rights than others by virtue of their seniority or receive additional benefits for paying a higher fee. He says that "the benefits of citizenship are *greater* than the benefits of membership in a golf club" (Hidalgo, 2016a: 231), as if the difference between a state and a golf club were a matter of the degree of the importance of their respective benefits[12]. Contra Hidalgo, I believe that the difference between the importance of membership in a state and a golf club is not one of *degree*, but rather one of *kind*. Membership in a state is an entitlement; membership in a gold club is not[13]. Moreover, golf clubs are protected by freedom of association, whereas states are not[14]. Individuals are free to associate to form their own club, but they are not free to associate to form their own state. For these reasons, I submit, membership in a gold club may be sold, but membership in a state cannot.

What does all this have to do with sham marriage? Marriage is akin to membership in a golf club: neither marriage nor golf clubs are necessary for the protection of basic rights (at least those of adults[15]), and both are protected by freedom of association. But then, if marriage is like a

12 He suggests that "the goods that accompany membership in states do not seem fundamentally different *in kind* from the goods that accompany membership in the golf club" (Hidalgo, 2016a: 231).

13 Hidalgo responds that his is a conditional argument: *if* citizenship in a state is not an entitlement, then it is permissible for the state to sell it. The upshot seems to be that *only* if citizenship is an entitlement are citizenship markets problematic, because they exclude foreigners (especially poor ones) from an entitlement. Given that he believes that there is a right to immigrate (Hidalgo, 2019b), he can criticize citizenship markets. By contrast, if one believes that there is no right to immigrate, it may seem that one cannot complain about citizenship markets. However, one need not assume that there is a right to immigrate in order to criticize citizenship markets on commodification grounds. For the problem with citizenship markets is not so much that they deny citizenship to foreigners in general as that they deny it to some foreigners in particular —namely, those with effective and genuine ties to the country of residence (Shachar, 2011)—*while* they grant it to others who have no ties to the country other than the money they have invested.

14 The argument from freedom of association works in the case of voluntary, intimate, and purpose-specific associations, whose consensual nature, privacy, and mission depend on their very ability to exclude unwanted others; but I do not think it does in the case of compulsory, impersonal, and generic associations such as states, where the above values are not at stake. A golf-club, a group of friends, or a university have a right to exclude unwanted others because the unilateral incorporation of new members would disregard current members' consent, invade their privacy, and compromise the association's constitutive mission, respectively. By contrast, citizens do not consent to membership in the state, and immigration does not typically affect their privacy or else undermine the normal functioning of state institutions and its core constitutional principles.

15 The fact that fulfilling children's rights usually lies with their family may in part explain why children cannot be put up for sale.

golf club in these important respects, why can citizens not get married with foreigners in exchange for money just as they can buy membership in a golf club? The problem, one might respond, is that the good being sold in the case of sham marriage is not membership in the marriage itself, but membership in the state. Therefore, if citizenship cannot be put up for sale, foreigners should not be allowed to get married with citizens in exchange for money as a way of gaining admission to and/or citizenship in another country. The paradox arises from the contradictory facts that marriage is a secondary association (and as such it is open to commodification) *and* provides admission into a primary association, in this case the state (which is not open to commodification)[16]. Unless we are ready to accept that the protection of basic rights may depends on the size one's wallet, citizenship—the right to have rights—cannot be put up for sale (Tanasoca, 2016: 187). Otherwise, we run the risk of creating a two-tiered society where the rich and the talented (regardless of their formal status) are granted more rights than citizens (Mavelli, 2018: 487-488), in the process stripping citizenship of its substantive content. There are three main problems with this argument, though.

The first is that membership in a state can be sold without making the protection of basic rights conditional on the ability to pay. Standard citizenship allocation rules such as *jus sanguinis*, *jus soli*, and naturalization already grant membership irrespective of one's riches. Cash-for-passport schemes only provide an *additional* route to citizenship. As far as I can tell, there is no inherent incompatibility between the two; they can peacefully coexist as long as citizenship by investment functions as a complement to, rather than as a substitute for, citizenship by birthright or naturalization. Moreover, people who buy their way into citizenship through investment programmes do not seek the protection of basic rights, but the enjoyment of additional rights (privileges, if you wish) and the expanded opportunities that this citizenship affords them. This is unlikely to be the case of foreigners who enter into a sham marriage, who are presumably in a precarious situation—why else would they resort to sham marriage? The fact that they are willing to pay for citizenship reveals the shortcomings of standard citizenship allocation rules and the failure of citizenship to deliver on its promise; it does not speak against sham marriages per se. In fact, sham marriages are the third-best for people whose country of origin does not provide them with adequate options and whose country of destination does not allow them to gain access and/or citizenship through standard channels.

The second problem with the above argument is that membership in a state already depends to a considerable extent on morally arbitrary facts beyond one's control such as birthplace, descent, and (to some extent) skills. So, unless one can point to a morally relevant distinction between these and money, I cannot see why citizenship should not depend on the latter any more than it currently does on the former. Making the protection of rights contingent on the possession of "valuable" human capital is no less problematic than making it contingent on the possession of sizeable financial capital (Erez, 2021), not least if

16 The paradox may be dissolved by denying that marriage is a secondary association. If marriage is necessary for the protection of basic rights, it counts as a primary association, in which case membership in it cannot be sold.

we consider that one is strongly correlated with the other. Shachar and Hirsch (2014: 251) have argued in response that we must distinguish skill- from investment-based admission criteria in that "the latter depend on the alienability and transferability of purely fungible funds, [whereas] the former focus on the distinctive skills, talents, or abilities «encapsulated» in the recruited migrant herself who moves to the new country". Human capital, unlike financial capital, "is non-transferable and non-alienable; it is part of the self" (2014: 251). But why does it follow from this that skill is a legitimate reason for inclusion? As Douglas MacKay (2016: 137) rightly points out, so are sex, race, religion, and sexual orientation an important "part of the self", and we do not thereby conclude that they constitute legitimate reasons for inclusion or exclusion.

The third problem with the commodification objection to citizenship markets is that equality among *actual* citizens is not predicated on the equality among *potential* citizens. As such, it is perfectly compatible to hold that the state may select among prospective migrants with the claim that all those who are admitted into the country "must be set on the road to citizenship" (Walzer, 1983: 60; Miller, 2008). In fact, the number of rights granted to migrants is said to depend on the number of migrants admitted (Ruhs and Martin, 2008). If the worry is instead that the mode of *distribution* will inevitably alter the *character* of citizenship, in the sense that people who buy citizenship are more likely to treat it as an instrumental good (Tanasoca, 2016: 179, 2018: 70-71), the state can (and indeed often does) establish a minimum residency requirement for new members in order to qualify for citizenship. This may not guarantee that immigrants (and, for that matter, citizens) make appropriate use of citizenship and value it non instrumentally, but it will at least dissuade those foreigners who only want it for the sake of tax benefits and for investment-related purposes. At any rate, this is presumably not the case of those who engage in sham marriage. Most of them already reside in the country (and if they do not, they have to wait some time before they can apply for citizenship), and the reason why they are willing to pay for citizenship is to be able to remain in or gain admission into the country.

A second objection to formal citizenship markets claims that they have a corrosive effect on democracy. First, selling citizenship violates democratic equality by concentrating the power in the hands of the rich and placing the duties on the shoulders of the poor (Tanasoca, 2016: 191, 2018: 78). Second, a market approach to citizenship overlooks the importance of citizenship for democracy. The latter, it might be argued, requires citizens to share certain values, trust each other, care about the common good, play an active role in society, and so on. By contrast, the investor's relationship with the political community is eminently contractual and purely instrumental, vulnerable to the ups and downs of the market, and thus unlikely to "prevent the citizen-investor from defecting (with all his capital) when times are hard" (Tanasoca, 2016: 182, 2018: 65). In Shachar's (2017: 805) words:

> Citizenship as we know it […] is comprised of *political* relations; as such, it is expected to both reflect and generate notions of participation, co-governance, risk-sharing, and some measure of solidarity among those constituting the body politic. It is difficult to imagine how these democratic and reciprocal commitments can be preserved under

circumstances in which insiders and outsiders are distinguished merely by their ability to pay a certain price.

Do sham marriages similarly display an instrumental approach to citizenship, with the subsequent erosion of democracy? Unlike cash-for-passport schemes, sham marriages do not undermine civic virtues and democracy for the simple reason that most foreigners who engage in this practice are not motivated by profit maximization, but rather by their ties to the country of residence and/or an interest in residing there. Additionally, by entering into a sham marriage, they are not renouncing their citizenship duties in their home countries (at least no more than any other migrant); if anything, they are acquiring new duties to another country. Indeed, many of them will have relatives abroad and feel strongly attached to their home countries, so it is reasonable to think that they will keep sending money even after they gain citizenship. In sum, citizens through sham marriage are very much unlike citizens through investment. They are just like any other formerly unauthorized migrant, except for the fact that they had no other option to regularize their status.

The third objection to sham marriages points to their unfairness. As Shachar (2017: 804) argues in relation to formal citizenship markets, given the high levels of wealth inequality across the world, allowing rich individuals to buy citizenship is unfair to the millions of would-be migrants who are systematically denied admission merely because they happen to be poor. The unfairness of sham marriage can be framed in terms of exploitation or in terms of arbitrariness. In the former case, the complaint is that citizens take advantage of migrants' precarious situation by charging them prices that they would not otherwise be willing to pay. In the latter, the complaint is that citizens of rich countries benefit, through no merit of their own, from the value of their citizenship when they enter into a sham marriage with foreigners who, through no fault of their own either, must bear the brunt of having been born in a poor country. The underlying worry is that citizens of "affluent states are actively seeking to benefit from the prevailing unjust distribution of social and economic opportunities to further their own economic interests" (Ip, 2020: 137).

In response, note that sham marriages are no more (luck) inegalitarian than other immigrant selection and exclusion criteria usually thought to be permissible[17]. For example, skilled migration programmes and financial requirements, to mention but two, discriminate on the basis of academic and economic criteria, which are strongly correlated with one's inherited socioeconomic status (Ball-Blakely, 2022: 596). Secondly, even if sham marriages are a byproduct of global inequality, they do not exacerbate that inequality, as Shachar (2018: 7-8) claims formal citizenship markets do. To the contrary, unlike "golden visa" holders, those who enter into sham marriage as a way of gaining admission into a rich country are mostly poor migrants who are thereby expected to substantially increase their earnings

17 For example, Carens (2003: 108) considers an immigrant's potential economic contribution a "criterion that seems morally permissible", and MacKay (2016: 137) likewise contends that "HIC [high-income countries] may—in principle—favor skilled prospective immigrants". For a contrary view, see Lim (2017, 2023), Egan (2020), and Ball-Blakely (2022). For a more nuanced, albeit still favorable, view to skill-based and economic selection criteria, see Ip (2020).

and improve their living standards. As for the claim of exploitation, the problem is that by outlawing sham marriages, the state is actually "removing the very option that the exploited party values most highly (as indicated by their desire to choose that option over all of the other alternatives)." So, "[u]nless the state bundles its interference with the contract with the provision of additional and better options, the interference actually makes the exploited party worse off" (Freiman, 2019: 130). At the end of the day, the only reason why unauthorized migrants enter into sham marriages is that they lack a legal option to gain admission to and/or citizenship in the country in the first place. In any case, the exploitation objection does not undermine my argument, because states cannot exclude people who qualify as refugees, understood in a broad sense as those whose rights or needs are not adequately protected at home (Blake, 2013: 125-126)[18].

The fourth objection to formal citizenship markets posits that they undermine the state's right to exclude. According to Lior Erez (2023b: 1096), "[b]y privatizing immigration decision-making, they [would-be immigrants] are now subjected to the private will of each seller, and not to the legitimate democratic will of the body politic. This undermines the legitimacy of the state's right to exclude, which is a constitutive [aspect] of the right to sell." The right to sell citizenship presupposes the right to exclude foreigners from citizenship, which is grounded in citizens' right to collective self-determination. The worry is that if each citizen can unilaterally decide on the admission of new members by marrying or refusing to marry foreigners at will, the right to collective self-determination, and thereby the very state's right to exclude, will be rendered void. In conclusion, to the extent that private citizenship markets are incompatible with the state's right to exclude, they are self-defeating.

This objection does not apply to sham marriages qua informal citizenship markets, because the sale of citizenship that takes place in a sham marriage does not amount to a privatization of the state's right to exclude any more than the administration of justice by private individuals who take matters into their own hands amounts to a privatization of the state's right to administer justice. When citizens break the law, the state cannot be said to abdicate its legitimate functions, at least insofar as it takes reasonable steps to prevent citizens from breaking the law. At a more fundamental level, the objection rests on the implausible assumption that sovereign powers such as the right to exclude cannot be exercised by private parties without undermining the legal bases of those powers[19]. For example, private dispute settlement mechanisms, at least those authorized by the state, do not undermine the latter's judicial powers. Similarly, private banks routinely create money without thereby undercutting the central bank's control over the currency. Even if private citizenship markets were at odds with the right to exclude, this right is not absolute, as evidenced by the right of citizens to marry foreign partners and sponsor family members living abroad. If so,

18 One need not adopt such an expansive definition of refugee to hold that states cannot exclude destitute or necessitous migrants (see, for example, Walzer, 1983; Miller, 2016; Song, 2019).

19 To be accurate, private citizenship markets do not privatize the right to exclude, but only the right to *include*. This casts even more doubt on the objection that private citizenship markets undermine the state's right to exclude.

the objection to private citizenship markets cannot simply be that they constrain the right to exclude.

Finally, I would like to consider a specific objection to sham marriages as an informal citizenship market. One might argue that even though markets can and do exist beyond the state, functional and fair markets cannot exist without the institutional background provided by the state. Therefore, if my defense of sham marriages succeeds, we might need to institutionalize them, in which case the aforementioned objections against formal citizenship markets might also apply to sham marriages. In response, note that this section has taken for granted that states have a right to exclude, and consequently that sham marriages are forbidden by law. In this sense, sham marriages are akin to human smuggling: it is only because some people have no access to legal channels of migration that they resort to illegal ones. As such, their very existence depends on their prohibition. It is therefore an oxymoron to speak about institutionalized or legal sham marriages, just as it is an oxymoron to speak about institutionalized or legal human smugglers—we call the latter commercial airlines or transportation companies. But what if there were no *moral* right to exclude? To the extent that states continue to exercise their *legal* right to exclude, sham marriages would still make sense, but this time as a form of immigration resistance.

4. Sham marriages as immigration resistance

In the previous section I have granted that there is a right to exclude, but I have argued that this right is not absolute. For example, citizens are entitled to bring in their foreign partners and close family members. This premise, together with the one that sham marriages do not necessarily undermine the institution and value of bona fide marriage, led me to conclude that sham marriages are pro tanto permissible. I then argued that sham marriages constitute an informal citizenship market, and as such they are immune to the objections raised against their formal counterparts. But sham marriages can also be a form of immigration resistance, depending on our background assumptions regarding the morality of border controls. It is commonplace to assume that states have a right to exclude. However, this view is not shared by everyone. Some people claim that most (if not all) immigration restrictions are unjust.

There are two main ways of arguing for the claim that immigration restrictions are unjust. One involves asserting that immigration is a human right (Oberman, 2016) and that borders should generally be open (Carens, 2013; Sager, 2020). If states have no right to exclude, it follows that most immigration restrictions (i.e., those not necessary to prevent rights violations or avert serious consequences) are unjust both in principle and in practice (Hidalgo, 2016b: 183-184). Call this the *direct* argument for the injustice of border controls. The other consists in showing that even if states have a right to exclude in principle, the actual operation of border controls and other immigration enforcement mechanisms renders states' right to exclude impermissible in practice (Mendoza, 2015; Schmidt, 2022). As Sager (2017: 48) argues, "even if there are reasons at the *level of principle* that states' claims to regulate migration outweigh

the competing claims of many people to migrate, *practical difficulties* in avoiding dominating migrants in the process of enforcing migration controls make them unjust"[20]. Call this the *indirect* argument for the injustice of border controls[21].

The upshot of the direct and indirect arguments for the injustice of border controls is that people are entitled to resist actual immigration restrictions (Hidalgo, 2015, 2019b). Open borders might not be a feasible policy option in the here and now, but there are certainly important moral implications for how individuals ought to act in the actual non-ideal world. What are those implications? Javier Hidalgo suggests that "it is sometimes permissible for foreigners to evade, deceive, and use defensive force against borders agents" (2015: 458) and even that "citizens are often morally required to disobey immigration laws" (2016b: 184). The second implication is arguably more controversial than the first, since it requires us to assume (1) that citizens contribute to (as opposed to merely allow) an injustice to foreigners by complying with immigration policies, and (2) that there is an obligation not to contribute to injustice even despite the threat of steep sanctions imposed by the state.

Fortunately, I do not need to rely on either of these assumptions to defend the permissibility of sham marriages as a form of immigration resistance, for no one claims that citizens are morally required to marry unauthorized migrants in order to help them obtain legal status. Freedom of association in the marital realm is considered too important a right to be sacrificed even for the sake of such a morally demanding duty as resisting immigration injustice. And if there is no moral requirement to marry unauthorized migrants, then a fortiori there can be no moral requirement to enter into a sham marriage with them. However, to the extent that an agent can withdraw a benefit from another, it may be permissible for her to offer it in exchange for money. This argument has been put forward in the context of human smuggling. According to Hidalgo (2016c: 315, 2019b: 145; see also Müller, 2021: 144-145):

> If it is permissible for potential smugglers to refrain from transporting refugees to other states without compensation, then it is *prima facie* permissible for smugglers to transport refugees in return for compensation if (i) these refugees consent to this interaction, (ii) refugees benefit from interacting with smugglers, and (iii) this interaction avoids violating the rights or entitlements of other agents.

By the same token, we can say that if it is permissible for citizens to refrain from marrying unauthorized migrants without compensation, then it is *prima facie* permissible for citizens to marry unauthorized migrants in exchange for money if (1) the migrants consent to this exchange, (2) they benefit from the exchange, and (3)

20 I have challenged this view in Niño Arnaiz (2024). However, one need only endorse one of the arguments for the injustice of border controls to accept the permissibility of sham marriages as a form of immigration resistance.

21 Another way to argue for the illegitimacy of actual immigration restrictions is to posit that states have no unilateral right control their own borders, because every instance of state coercion must be democratically justified to those over whom it is exerted. Given that border controls coerce outsiders as well as insiders, they must be democratically justified to both (Abizadeh, 2008).

the exchange avoids violating the rights or entitlements of others. This is known as the "non-worseness claim": "[i]nteraction between *A* and *B* cannot be worse than non-interaction when *A* has a right not to interact with *B* at all, and when the interaction is mutually advantageous, consensual, and free from negative externalities" (Zwolinski et al., 2022). The basic idea is that if by engaging in a (commercial) transaction with you I do not harm your interests as compared to a scenario where the transaction does not take place, and I have no antecedent duty to engage in that transaction with you, then the transaction is morally permissible provided that it is voluntary, beneficial for the two of us, and does not violate anyone else's rights.

It is clear that unauthorized migrants consent to sham marriage and benefit from the exchange. The condition that the exchange avoids violating the rights or entitlements of others is admittedly more controversial, but if what I have said so far is correct, sham marriages do not violate the right to exclude any more than bona fide marriages, nor are they outweighed by competing interests and considerations. The case of human smuggling is more problematic because smugglers expose migrants to various risks and they are in a better position to help them, so it might be thought that they have a moral obligation to do so. But in the case of sham marriage no such risk is involved, and all citizens are equally situated with respect to would-be immigrants, in the sense that they are in no better position than other citizens to engage in sham marriage. Moreover, the smuggled are usually in a much more desperate situation than ordinary unauthorized migrants. Accordingly, if commercial human smuggling is morally permissible, then so are for-profit sham marriages.

One might reply that even though citizens have no antecedent duty to marry unauthorized migrants, they should not make money out of it. By assuming that there is a human right to immigrate (or at least no moral right to exclude), I might have raised the bar of morality too high. Citizens who refuse to marry unauthorized migrants might be accused of complicity with the state's unjust immigration restrictions, but those who marry unauthorized migrants in exchange for money are actively benefiting from this injustice. I argued before that freedom of association in the marital realm is of utmost importance, and therefore should not be sacrificed for other ends, no matter how pressing. But if immigration policies are unjustly harming migrants, as advocates of open borders suggest, then they should put their money where their mouth is. Suppose that in the slavery era, the only "legal" way slaves could become free was by marrying citizens. In that case, we might think that citizens had a (second-best) moral obligation to marry slaves. By the same token, should not modern-day abolitionists bear the modest risk of entering into a sham marriage with unauthorized migrants in order to help them regularize their status? If doing nothing in the face of blatant injustice is bad enough, taking advantage of an injustice is definitely perverse. The upshot is that (1) by upholding an unjust immigration regime, all citizens in general are complicit in an injustice; and (2) by engaging in sham marriage, some citizens in particular are benefitting from an injustice. I take up each objection in turn.

In response to the complaint about complicity, note that there is a big difference between committing an injustice and doing nothing in the face of an injustice. Citizens who refuse to marry unauthorized

migrants may be complicit in an injustice in the sense that they are doing nothing to combat it, but only in a very weak sense are they committing an injustice. In fact, it is false that citizens who refuse to marry unauthorized migrants are thereby complicit in an injustice. For one thing, even if for many unauthorized migrants entering into a sham marriage is the only way to obtain legal status, citizens have multiple (both legal and illegal) ways to fight unjust immigration restrictions, and it is by no means clear that marrying unauthorized migrants is the most (cost-)effective one. Immigrant advocacy groups and non-governmental organizations do a very important job in supporting migrants, including unauthorized ones. Collaborating with these initiatives is thus a good way in which citizens can discharge their duties to resist immigration injustice, but there are many others.

The second charge is more serious than the first, for it would entail that sham marriages are morally impermissible. Citizens who work under labor market regulations that prevent unauthorized migrants from taking up jobs may indirectly benefit from the lack of foreign competition (van der Vossen and Brennan, 2018: 34), but citizens who marry unauthorized migrants for a profit are *actively* benefiting from an injustice. It is important to distinguish actively benefiting from an injustice from directly contributing to an injustice, though. It is surely wrong to actively benefit from an injustice, but it is much worse to actively benefit from an injustice that one is directly contributing to. If citizens were directly contributing to unjust immigration restrictions and then making a profit out of it through sham marriage, they should not only avoid engaging in sham marriage, but they should also refrain from directly contributing to the injustice in the first place. However, to the extent that ordinary citizens are not themselves directly responsible for the unjust immigration restrictions, there is no blanket moral prohibition against their engaging in sham marriage, but only a pro tanto reason not to do so. In this case, the moral wrongness of benefiting from immigration injustice through sham marriage must be balanced against the benefits that might accrue for unauthorized migrants from this practice.

As Aloyo and Cusumano (2021: 143) have convincingly argued in the context of exploitative human smuggling, the wrongness on the part of the smuggler "must be weighed against the autonomy and respect for the potential migrant who should be able to make her own life choices, even under such bad-choice situations." In the same vein, the wrongness of citizens' benefiting from unjust immigration restrictions through sham marriage must be weighed against the benefits in terms of expanded opportunities for unauthorized migrants who engage in this practice. At the end of the day, no one knows their interests better than themselves. For this reason, "[e]ven if this decision were made under far from perfect conditions, it seems fairer to allow someone to choose what she thinks is their best way [among those currently available to her] to advance her life aims than it is to restrict them [without any alternative]" (2021: 142).

In short, given that states will not open their borders anytime soon, sham marriages are a permissible form of resistance in the face of unjust immigration restrictions. The fact that citizens enter into sham marriage in exchange for money does not call into question their pro tanto moral permissibility as long as

(1) migrants consent to the exchange, (2) benefit from the exchange, and (3) the exchange does not violate the rights and entitlements of others. Moreover, this pro tanto permissibility is not defeated by the fact that citizens are failing to discharge their positive duties to resist unjust immigration restrictions nor outweighed by the fact that citizens actively benefit from an injustice by engaging in sham marriage.

5. Conclusion

In this article I have defended the permissibility of sham marriages both as a sort of private citizenship market and a form of immigration resistance. Sham marriages are pro tanto morally permissible because they are a free and mutually beneficial exchange and do not undermine the institution and value of bona fide marriage. Moreover, this pro tanto permissibility is not defeated by the infringement of other rights or outweighed by competing interests and considerations. The first part assumed that states have a right to exclude unwanted immigrants, but argued that such right is limited by the right of citizens to marry foreign partners. Sham marriages constitute an informal citizenship market, and as such they are immune to the standard objections raised against their formal counterparts. The second part rejected that states have a right to exclude, arguing that foreigners may enter into sham marriages with citizens to bypass unjust immigration restrictions. In this case, the monetary exchange that takes place in a sham marriage is not problematic, for citizens have no antecedent duty to marry unauthorized migrants.

6. References

Abizadeh, A. (2008). "Democratic Theory and Border Coercion: No Right to Unilaterally Control Your Own Borders", *Political Theory*, vol. 36, n. 1, pp. 37-65. https://doi.org/10.1177/0090591707310090

Aitchison, G. (2023). "Border-Crossing: Immigration Law, Racism and Justified Resistance", *Political Studies*, vol. 71, n. 3, pp. 597-615. https://doi.org/10.1177/00323217211030184

Aloyo, E., Cusumano, E. (2021). "Morally evaluating human smuggling: the case of migration to Europe", *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 24, n. 2, pp. 133-156. https://doi.org/10.1080/13698230.2018.1525118

Ball-Blakely, M. (2022). "Skill-selection and socioeconomic status: An analysis of migration and domestic justice", *Journal of Social Philosophy*, vol. 53, n. 4, pp. 595-613. https://doi.org/10.1111/josp.12485

Blake, M. (2013). "Immigration, jurisdiction, and exclusion", *Philosophy & Public Affairs,* vol. 41, n. 2, pp. 103-130. https://doi.org/10.1111/papa.12012

Blake, M. (2020). *Justice, Migration, and Mercy*. New York: Oxford University Press.

Cafaro, P. (2015). *How Many is Too Many?* Chicago: University of Chicago Press.

Carens, J. H. (2003). "Who Should Get in? The Ethics of Immigration Admissions", *Ethics & International Affairs*, vol. 17, n. 1, pp. 95-110. https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2003.tb00421.x

Carens, J. H. (2013). *The Ethics of Immigration*. New York: Oxford University Press.

Egan, M. S. (2020). "Statements on race and class: the fairness of skills-based immigration criteria", *Ethics & Global Politics*, vol. 13, n. 2, pp. 108-122. https://doi.org/10.1080/16544951.2020.1761192

Erez, L. (2021). "In for a Penny, or: If You Disapprove of Investment Migration, Why Do You Approve of High-Skilled Migration?", *Moral Philosophy and Politics*, vol. 8, n. 1, pp. 155-178. https://doi.org/10.1515/mopp-2018-0083

Erez, L. (2023a). "A Blocked Exchange? Investment Citizenship and the Limits of the Commodification Objection", in D. Kochenov and K. Surak (eds.), *Citizenship and Residence Sales*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 335-360.

Erez, L. (2023b). "Not Yours to Sell: The Case Against Private Citizenship Markets", *Political Research Quarterly*, vol. 76, n. 3, pp. 1089-1101. https://doi.org/10.1177/10659129221119763

Ferracioli, L. (2016). "Family Migration Schemes and Liberal Neutrality: A Dilemma", *Journal of Moral Philosophy*, vol. 13, n. 5, pp. 553-575. https://doi.org/10.1163/17455243-4681056

Ferracioli, L. (2022). *Liberal Self-Determination in a World of Migration*. New York: Oxford University Press.

Freiman, C. (2019). "The Case for Markets in Citizenship", *Journal of Applied Philosophy*, vol. 36, n. 1, pp. 124-136. https://doi.org/10.1111/japp.12292

Hidalgo, J. (2015). "Resistance to Unjust Immigration Restrictions", *Journal of Political Philosophy*, vol. 23, n. 4, pp. 450-470. https://doi.org/10.1111/jopp.12051

Hidalgo, J. (2016a). "Selling Citizenship: A Defence", *Journal of Applied Philosophy*, vol. 33, n. 3, pp. 223-239. https://doi.org/10.1111/japp.12117

Hidalgo, J. (2016b). "The Duty to Disobey Immigration Law", *Moral Philosophy and Politics,* vol. 3, n. 2, pp. 165-186. https://doi.org/10.1515/mopp-2015-0031

Hidalgo, J. (2016c). "The ethics of people smuggling", *Journal of Global Ethics*, vol. 12, n. 3, pp. 311-326. https://doi.org/10.1080/17449626.2016.1245676

Hidalgo, J. (2019a). "The ethics of resisting immigration law", *Philosophy Compass*, vol. 14, n. 12, e12639. https://doi.org/10.1111/phc3.12639

Hidalgo, J. (2019b). *Unjust Borders*. New York: Routledge.

Hosein, A. O. (2019). *The Ethics of Migration.* New York: Routledge.

Ip, K. K. (2020). "Selecting Immigrants in an Unjust World", *Political Studies*, vol. 68, n. 1, pp. 128-145. https://doi.org/10.1177/0032321719833885

Lim, D. (2017). "Selecting Immigrants by Skill: A Case of Wrongful Discrimination?", *Social Theory and Practice*, vol. 43, n. 2, pp. 369-396. https://doi.org/10.5840/soctheorpract20172157

Lim, D. (2023). *Immigration and Social Equality*. New York: Oxford University Press.

Lister, M. (2010). "Immigration, Association, and the Family", *Law and Philosophy*, vol. 29, n. 6, pp. 717-745. https://doi.org/10.1007/s10982-010-9083-9

Lister, M. (2020). "Enforcing immigration law", *Philosophy Compass*, vol. 15, n. 3, e12653. https://doi.org/10.1111/phc3.12653

López-Guerra, C. (2020). "Immigration, Membership, and Justice: On the Right to Bring Others into the Polity", in A. Danielle and S. Rohini (eds.), *Difference without Domination*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 311-338.

Macedo, S. (2018). "The Moral Dilemma of U.S. Immigration Policy Revisited: Open Borders vs Social Justice?", in C. M. Swain (ed.), *Debating Immigration* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 286-310.

MacKay, D. (2016). "Are Skill-Selective Immigration Policies Just?", *Social Theory and Practice*, vol. 42, n. 1, pp. 123-154. https://doi.org/10.5840/soctheorpract20164216

Mavelli, L. (2018). "Citizenship for Sale and the Neoliberal Political Economy of Belonging", *International Studies Quarterly*, vol. 62, n. 3, pp. 482-493. https://doi.org/10.1093/isq/sqy004

Meilander, P. C. (2001). *Toward A Theory of Immigration*. New York: Palgrave Macmillan.

Mendoza, J. J. (2015). "Enforcement Matters: Reframing the Philosophical Debate Over Immigration", *Journal of Speculative Philosophy*, vol. 29, n. 1, pp. 73-90. https://doi.org/10.5325/jspecphil.29.1.0073

Mendoza, J. J. (2017). *The Moral and Political Philosophy of Immigration*. London: Lexington Books.

Miller, D. (1995). *On Nationality*. Oxford: Oxford University Press.

Miller, D. (2008). "Immigrants, Nations, and Citizenship", *Journal of Political Philosophy*, vol. 16, n. 4, pp. 371-390. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2007.00295.x

Miller, D. (2016). *Strangers in Our Midst*. Cambridge: Harvard University Press.

Müller, J. F. (2021). "The ethics of commercial human smuggling", *European Journal of Political Theory*, vol. 20, n. 1, pp. 138-156. https://doi.org/10.1177/1474885118754468

Niño Arnaiz, B. (2024). "The ethics of immigration enforcement: How far may states go?", *Journal of International Political Theory*, vol. 20, n. 1, pp. 66-87. https://doi.org/10.1177/17550882231193456

Oberman, K. (2013). "Can Brain Drain Justify Immigration Restrictions?", *Ethics*, vol. 123, n. 3, pp. 427-455. https://doi.org/10.1086/669567

Oberman, K. (2016). "Immigration as a human right", in S. Fine and L. Ypi (eds.), *Migration in Political Theory*. Oxford: Oxford University Press, pp. 32-56.

Pevnick, R. (2011). *Immigration and the Constraints of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Reed-Sandoval, A. (2016). "The New Open Borders Debate", in A. Sager (ed.), *The Ethics and Politics of Immigration*. London: Rowman & Littlefield, pp. 13-28.

Reed-Sandoval, A. (2020). *Socially Undocumented.* New York: Oxford University Press.

Ruhs, M, Martin, P. (2008). "Numbers vs. Rights: Trade-Offs and Guest Worker Programs", *International Migration Review*, vol. 42, n. 1, pp. 249-

265. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2007.00120.x

Sager, A. (2017). "Immigration enforcement and domination: An indirect argument for much more open borders", *Political Research Quarterly*, vol. 70, n. 1, pp. 42-54. https://doi.org/10.1177/1065912916680036

Sager, A. (2020). *Against Borders*. London: Rowman & Littlefield.

Schmid, L. (2022). "Saving Migrants' Basic Human Rights from Sovereign Rule", *American Political Science Review*, vol. 116, n. 3, pp. 954-967. https://doi.org/10.1017/S0003055422000028

Shachar, A. (2011). "Earned Citizenship: Property Lessons for Immigration Reform", *Yale Journal of Law & the Humanities*, vol. 23, n. 1, pp. 110-158.

Shachar, A. (2017). "Citizenship for Sale?", in A. Shachar et al. (eds.), *The Oxford Handbook of Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, pp. 789-816.

Shachar, A. (2018). "The Marketization of Citizenship in an Age of Restrictionism", *Ethics & International Affairs*, vol. 32, n. 1, pp. 3-13. https://doi.org/10.1017/S0892679418000059

Shachar, A., Hirschl, R. (2014). "On Citizenship, States, and Markets", *Journal of Political Philosophy*, vol. 22, n. 2, pp. 231-256. https://doi.org/10.1111/jopp.12034

Song, S. (2017). "Why Does the State Have the Right to Control Immigration?", in J. Knight (ed.), *NOMOS LVII: Migration, Emigration, and Immigration*. New York: New York University Press, pp. 3-50.

Song, S. (2019). *Immigration and Democracy*. New York: Oxford University Press.

Steinhoff, U. (2022). *Freedom, Culture, and the Right to Exclude.* Abingdon: Routledge.

Tanasoca, A. (2016). "Citizenship for Sale: Neomedieval, not Just Neoliberal?", *European Journal of Sociology,* vol. 57, n. 1, pp. 169-195. https://doi.org/10.1017/S0003975616000059

Tanasoca, A. (2018). *The Ethics of Multiple Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tesón, F. R. (2008). "Brain Drain", *San Diego Law Review*, vol. 45, n. 4, pp. 899-932.

van der Vossen, B., Brennan. J. (2018). *In Defense of Openness*. New York: Oxford University Press.

Walzer, M. (1983). *The Spheres of Justice*. New York: Basic Books.

Wellman, C. H. (2008). "Immigration and Freedom of Association", *Ethics*, vol. 119, n. 1, pp. 109-141. https://doi.org/10.1086/592311

Wellman, C. H., Cole, P. (2011). *Debating the Ethics of Immigration*. New York: Oxford University Press.

Zwolinski, M., et al. (2022). "Exploitation", in E. N. Zalta and U. Nodelman (eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy.* Available at: https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/exploitation/ (Accessed 21 March 2024).

GASLIGHTING ORGANIZACIONAL: UNA PUERTA ABIERTA AL SUICIDIO LABORAL. PERSPECTIVAS ÉTICO-POLÍTICAS

ORGANIZATIONAL GASLIGHTING: AN OPEN DOOR TO WORKPLACE SUICIDE. ETHICAL-POLITICAL PERSPECTIVES

Beatriz Cristina Rodríguez Pérez
Universidad de Deusto, Bilbao, España
beatrizcristina.r@opendeusto.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Gaslighting, gaslighting organizacional, suicidio laboral, biopoder, racionalidad instrumental
Keywords: Gaslighting, organizational gaslighting, workplace suicide, biopower, instrumental rationality

Resumen: La presente investigación que abordamos en este artículo trata de descubrir qué es el gaslighting organizacional, dando un paso más allá a la hora de establecer si existe alguna vinculación del gaslighting organizacional con el suicidio laboral. Nos encontramos ante un fenómeno cuyo análisis hunde sus raíces filosóficas en el marco de la ética aplicada y en la biopolítica, desplegando diferentes interrogantes que remiten a la manipulación, la socavación de la autonomía moral del individuo, así como al desarrollo de dinámicas de control y dominio en el seno de las organizaciones.

Abstract: Therefore, this article presents the research carried out to try to discover what organizational gaslighting is. Furhemore, we go one step further: we analyze the possible link between organizational gaslighting and workplace suicide. This phenomenon, whose analysis has its philosophical roots in the framework of practical ethics and biopolitics, unfolding different questions that refer to manipulation, the undermining of the moral autonomy of the individual, as well as the development of dynamics of control and dominance within organizations.

1. Introducción

Diversas han sido las disciplinas que se han interesado por el constructo del gaslighting y aunque todas ellas son coincidentes en apuntar al lugar de trabajo como uno de los entornos propicios para que exista gaslighting, sobre todo por sus conocidas relaciones de poder, prácticamente no existen estudios al respecto de la temática mencionada.

Para ello, y bajo la hipótesis de que el gaslighting organizacional no son meros hechos aislados, sino un método arraigado en algunas organizaciones, que puede incluso provocar la muerte de las personas trabajadoras, se analizan dos de los suicidios acontecidos en la empresa francesa Renault y, por metodología comparativa, se relacionan con el caso de la empresa española Aldi y el suicidio del Sr. Bedia. Este último será el único caso reconocido por la justicia española como **accidente laboral** de los 4.003 suicidios acontecidos en España en el año 2021.

Dicha muestra no pretende acometer la prevalencia del método de *gaslighting* organizacional en todos los casos de suicidio laboral, dado que es una investigación exploratoria sobre un aspecto poco investigado del mismo, pero sí confirma en los casos de estudio, la utilización del método *Gaslighting*, reflejando un muestreo suficiente para concluir el concepto de *Gaslighting* Organizacional y alertar a la reflexión, a la revisión y a la investigación a nuestros gobernantes y a la comunidad científica en general de los graves perjuicios que ocasiona el ejercicio del *gaslighting* sobre las personas trabajadoras, que en ocasiones las lleva al trágico momento de quitarse la vida.

2. El *gaslighting*, su origen y estudio

El más primitivo origen del término gaslighting nace de la mano del dramaturgo británico Patrick Hamilton cuando, en 1938, publica la obra de teatro *Gas Light* (luz de gas). Hamilton viene a poner de manifiesto hechos peculiares de la época que acontecen dentro del contexto de una relación íntima de pareja. Así, la citada obra sostiene que el esposo busca intencionalmente hacer parecer loca a su esposa, para obtener un beneficio económico de ella. Debemos trasladarnos en el tiempo para entender los términos, loca o pérdida de la cordura, términos estos actualmente desterrados por las disciplinas de la psiquiatría y la psicología y que remiten a ciertas enfermedades mentales. La obra de Hamilton, con mismo título, fue llevada al cine en una primera versión inglesa en el año 1940, para posteriormente, en el año 1944, realizar una adaptación al cine americano de mayor calado internacional.

El concepto de gaslighting nace de esta realidad tan bien plasmada en la obra de Hamilton, en el momento en el que la investigación de los psiquiatras Barton & Whitehead, en 1969, la incluye, implícitamente, en el título de la misma "*El fenómeno de luz de Gas*". Cierto es que algunas autoras de libros de autoayuda habrían querido apropiarse del concepto, pero los citados psiquiatras concluyen en su estudio, tras varios casos exploratorios que el *gaslighting* es una forma de abuso que lleva a la hospitalización psiquiátrica involuntaria de personas sanas mentalmente (ingresadas por psicopatologías graves) por parte de sus familiares directos, señalando que siempre parece existir

un propósito de interés personal en dicha actuación (Barton & Whitehead, 1969, p.1258). Así pues, se confirma académicamente la autoría del concepto de gaslighting a Barton & Whitehead**.**

Más tarde, y también desde el campo de la psiquiatría, concretamente en 1981, los estudios de Calef & Weinshel ya nos hablan de las consecuencias clínicas que sufren las personas que son sometidas al fenómeno de gaslighting, demostrando que "estas personas son más propensas a la esquizofrenia" (Calef & Weinshel,1981, p. 61) síndrome psiquiátrico caracterizado por síntomas psicóticos de alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, según definición del DMS5[1], la llamada Biblia de los profesionales de la psiquiatría y la psicología. Los citados psiquiatras también se refieren a la codicia observada por parte de los que ejercen el gaslighting, al igual que los psiquiatras anteriormente citados (Calef & Weinshel,1981, pp. 63-64).

Pero ha sido el área de conocimiento de la psicología quien ha dedicado más estudios a este fenómeno del gaslighting y que según Galán J & Figueroa, 2017; Sarki, 2017; Petric, 2018; Cabero, 2023, concuerdan en definir como un abuso psicológico en la que una persona o entidad, para ganar más poder, hace que una víctima cuestione su realidad destruyéndola y atacando su salud mental. Para la esfera académica de la psicología, los medios que utiliza la persona o entidad que ejerce gaslighting (gaslighter) hacia su víctima, se concretan en una comunicación confusa (amor/reproche), actos hostiles, silencios, quejas, bromas hirientes, intimidaciones, amenazas, coacciones y humillaciones que terminan por provocar en la víctima problemas psicosomáticos y psicológicos de gran calado, llegando en ocasiones hasta desear quitarse la vida.

Hernández[2] et al., 2014, en su trabajo doctrinal "El maltrato psicológico. Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio", desde una visión que conjuga la psicología y el derecho, también se suman a esta última afirmación en cuanto a las afecciones que provoca el ejercicio del *gaslighting*. Para ellos, el *gaslighting* es una forma de violencia psicológica consistente en injertar en la víctima un estado de desorientación crónica mediante comportamientos de emboscada (Hernández et al., 2014, p. 33). Los citados autores centran el gaslighting como un comportamiento de género y dentro de las relaciones personales, "una violencia tangible, pero paradójicamente invisible" (Hernández et al., 2014, p. 33).

Aunque los estudios existentes en este campo de la psicología profundizan en las relaciones de índole privada e íntima, como las relaciones de pareja, se señala a otros entornos, como la escuela o el mundo laboral, como entornos también propensos al florecimiento del gaslighting, dado que, como venimos señalando, el gaslighting se produce en las relaciones de dependencia emocional y de poder. Y si hablamos de poder, no podemos dejar de mencionar al universo político, el cual también dio luz a este fenómeno a través

1 DSM5 Manual de diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales de la Asociación de psiquiatría estadounidense.

2 Carmelo Hernández Ramos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Doctor en Derecho. Ostenta la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y es uno de los principales impulsores del I+D en la modernización y eficacia de la justicia española.

de la obra *Gaslighting América* de la asesora política Carpenter[3] (2018). Carpenter, desde su sufrimiento personal como víctima de gaslighting, marca la fórmula infalible de Trump calificándolo de *gaslighter* total y analiza cómo este fenómeno se fue desarrollando con el presidente Nixon, ganó fuerza con Bill Clinton y explotó bajo el mandato de Trump.

Más allá de este ejemplo de vida extraído del ámbito político, la filosofía tampoco se ha quedado indiferente ante este fenómeno (incluso parece tendencia en las últimas décadas). Autores como, Abramson, 2014; Adkins, 2019; Podosky, 2020; Ruíz, 2020**;** Spear, 2020, ahondan, entre otros, en el papel de la manipulación del *gaslighting*, en los factores que lo provocan, en sus efectos epistémicos y hasta en el orden lingüístico de la comunicación empleada por los *gaslighter*. Pero aunque el interés de estas investigaciones mencionadas está centrado también en las relaciones personales de naturaleza íntima o familiar, subyace en estos trabajos un trasfondo que invita a tener muy en cuenta, el despliegue de estrategias de poder desarrollados por Foucault (biopolítica) o Agamben (nuda vida). Asimismo, las reflexiones críticas sobre racionalidad instrumental, desarrolladas por Horkheimer y Adorno, proporcionan el pilar ético reflexivo de este artículo, desvelando diferentes cuestionamientos que señalan directamente a la violación de la autonomía individual, al abuso de poder, la manipulación, y el soslayo del bienestar emocional de la víctima, y que abordaremos en el marco filosófico y *ético* político de este estudio con mayor detalle.

Y si, hasta aquí, todas las investigaciones objeto de estudio van apuntando de forma directa o indirecta a los entornos laborales, como entornos propicios para ejercer el gaslighting, y no encontrando prácticamente ningún estudio relevante en el campo de la sociología, con la única excepción del publicado por la Doctora Sweet, parece lógica la afirmación que ella misma realiza en su publicación, *The sociology of gaslighting*, donde expone que, a pesar de la popularidad del término gaslighting, "los sociólogos lo han ignorado y han dejado que los psicólogos teoricen sobre él" (Sweet P. L, 2019, p.1). El gaslighting, para Sweet, es principalmente un fenómeno sociológico más que psicológico, y a pesar de que su estudio está muy centrado en las relaciones de pareja, concluye que "el gaslighting tiene consecuencias cuando se dan situaciones de desigualdades estructurales e institucionales capaces de manipular las realidades de las víctimas" (Sweet P. L, 2019, p.1) señalando, por lo tanto, de manera clara a la escala de poderes que se suceden en las estructuras organizacionales de una empresa.

En resumen y atendiendo a lo que se desprende del estado de la cuestión expuesto, podemos afirmar que el *gaslighting* es un proceso de manipulación psicológica, invisible pero tangible, que se produce de forma gradual y reiterativa, y que es ejecutado siempre por una persona o entidad que ejerce el control del poder sobre otra persona para obtener un beneficio,

3 Amanda Carpenter sufrió una campaña de desprestigio, en las primarias republicanas de 2016. Una experiencia traumática, que ella misma señaló como *gaslighting*: mentiras y manipulaciones que la acusaban de tener una relación extramatrimonial con el rival de Trump. Carpenter, sostiene en su libro que Trump miente de una manera metódica diseñada para mantener la lealtad de la base republicana, desequilibrar a los demócratas y manipular a los medios.

provocando, sobre la víctima que lo padece importantes trastornos a nivel mental que en ocasiones derivan en ideas autolíticas letales.

3. Marco filosófico: ético-político

Como señalábamos al comienzo de este artículo, el estudio del gaslighting presenta una fenomenología cuyo análisis remite al marco filosófico de la ética aplicada, sin olvidar el trasfondo reflexivo de la teoría crítica (a través de la crítica de la racionalidad instrumental) así como otras tematizaciones que abordan las relaciones de poder o la biopolítica. Cuestiones como la manipulación, el abuso de poder y la violación de las determinaciones morales constitutivas del ser humano, como su autonomía individual, o el respeto entre individuos, base de la igualdad en la esfera intersubjetiva, configuran el trasfondo ético-político y, en general, filosófico que preside este estudio.

Desde una perspectiva genética e histórica podemos sostener que las éticas aplicadas nacieron por imperativo de la realidad social que necesitaba respuestas interdisciplinares en sociedades pluralistas. Hoy, entrados ya en el Tercer Milenio, constituyen una realidad y una forma de actuar indeclinable porque no han nacido por requerimiento de una sola instancia sino por la demanda de esta realidad social. Ciudadanos, éticos, expertos y gobiernos se han incorporado a este debate de forma institucional, por ende, el terreno de las organizaciones empresariales, como no podía ser de otra manera, ha visto un camino fructífero a este enfoque práctico de la ética.

Así, la confianza se ha convertido, de manera explícita, en un gran valor intangible empresarial hoy en día al alza, donde la reputación organizacional marca el camino de las empresas más admiradas por los consumidores que en paralelo son las que obtienen mayor rentabilidad, demostrando así que ética y empresa pueden nacer de la mano. Escandalosos casos como los de Enron o Worldcom[4] no han hecho sino recordar la necesidad de ganar esa confianza a través de la reputación organizacional de cara a todos los *stakeholders* y a la sociedad en general. Por lo tanto, para lograr beneficios empresariales no es necesario abandonar la ética sino que, por el contrario, es necesario que la alta dirección de las organizaciones, a través de su cultura organizacional, marque normas, valores y conductas éticas ejemplarizantes, consolidando con ello otra manera de SER. El fenómeno del *gaslighting*, en particular el análisis de su realidad, no puede perder de vista nunca esta perspectiva ética y obliga a éticos, gobiernos, instituciones, ciudadanos, organizaciones y expertos a dar respuesta y poner en marcha soluciones a una problemática de salud, en ocasiones letales, para las personas trabajadoras en edad laboral, como es el caso que nos ocupa.

4 Dos de los mayores escándalos financieros, sin parangón en la historia reciente. Engaños contables, empresas maquilladas, nacidas solo con el único propósito de reportar grandes beneficios personales a sus directivos. Enron o Worldcom, acabaron en la quiebra causando un grave perjuicio económico para su accionariado y ocasionando la baja de un gran número de puestos de trabajo. Tras este escándalo financiero y sus sentencias correspondientes, en Estados Unidos y otros países se estableció, jurídicamente, que el auditor de las empresas debe ser independiente de su cliente, también se endurecieron los requisitos y las penas para este tipo de praxis.

Horkheimer y Adorno (2019) observan, a partir de Lukács, el proceso de cosificación progresiva que acontece en la historia humana, dando cuenta del fracaso de la razón ilustrada y del consiguiente triunfo de la razón subjetiva que, al absolutizarse, desencadena la irracionalidad. Observan que la cosificación del ser humano sucede tanto en las sociedades capitalistas como en las socialistas y esto les lleva a plantearse la hipótesis de que la causa de esta cosificación no reside tanto en la economía del capital como en la razón instrumental[5] desarrollada desde la Ilustración. La razón del individuo se convierte en utensilio capaz de ser usado por todos los demás. Estamos ante una racionalidad instrumental, esto es, la razón considerada como un medio orientado a fines y las capacidades del individuo reducidas a meros valores de cambio.

De acuerdo con las reflexiones anteriores, entendemos el *gaslighting* como un ejemplo claro de racionalidad instrumental, ya que prioriza la eficiencia y el control por encima de otras consideraciones éticas. La distorsión de las relaciones entre los individuos, su cosificación, y el soslayo de la complejidad emocional y moral de las relaciones humanas son consecuencias directas de este fenómeno. En el *gaslighting*, como veremos en los casos reales que presentamos en este estudio, la persona que lo ejerce utiliza a la víctima como un medio para sus propios fines. En este proceso, el perpetrador manipula la percepción de la víctima, subordinando su autonomía y su esfera subjetiva, a sus propios intereses olvidando el daño emocional y psicológico causado. El gaslighting erosiona la confianza y la autonomía de la víctima, a través de una manipulación calculada, lejos del respeto y de los valores éticos que sustentan y promueven el entendimiento mutuo y el diálogo establecido desde el respeto, bases fundamentales para una adecuada interacción ética. Supone, así, la antítesis de la racionalidad comunicativa que, expresada en términos habermasianos[6], promueve el entendimiento mutuo y el diálogo.

Otro foco de análisis y reflexión destacado es el constituido por el estudio de las relaciones de poder y, en un sentido más extenso, la biopolítica. Los trabajos de Foucault, su concepción de biopoder, estudian las estrategias y técnicas que utilizan instituciones y gobiernos para regular la vida de los individuos. El despliegue de las formas de poder modernas no se ejerce solamente desde una posición de fuerza, sino a través de mecanismos de regulación y de gestión de las vidas de las personas en su esfera subjetiva. Desde esta perspectiva, podemos entender el gaslighting como una técnica de poder en la que se manipula las percepciones de la realidad, minando la autonomía psicológica y moral del individuo, en línea con las dinámicas de control sobre los cuerpos y las mentes que constituyen el núcleo técnico.

5 "El concepto de razón no excluía jamás a la razón subjetiva, sino que la consideraba una expresión limitada y parcial de una racionalidad abarcadora, vasta (…). El énfasis recaía más en los fines que en los medios". M. Horkheimer, *Crítica de la razón instrumental*. Buenos Aires, Sur, 1969 (p. 29).

6 "Pues la verdad consiste en la peculiar coacción que nos fuerza a un reconocimiento universal y sin coacciones; y este reconocimiento va ligado a una situación ideal del habla, lo que quiere decir: a una forma de vida en que sea posible un entendimiento universal y sin coacciones". J. Habermas, *Perfiles filosófico-políticos*. Madrid, Taurus, 2019 (p. 92).

En *Vigilar y castigar*, Michel Foucault estudia, a partir del modelo del panóptico[7] modelo que atiende a una sociedad disciplinaria, así como los modelos de control en el que las personas se autorregulan porque se sienten vigiladas. También Foucault en *La Microfísica del poder* tematiza la idea de circulación del poder, esto es, su capilaridad a través de las diferentes relaciones sociales, en sus diferentes niveles y a través de prácticas cotidianas que impactan directamente en la percepción y las emociones de la víctima, como así hemos analizado que ocurre en los casos de estudio que presenta esta investigación.

Si en Foucault, el estudio del ejercicio del poder y sus dispositivos de control disciplinario constituyen el núcleo de muchos de sus trabajos más destacados, la manipulación de la realidad y de las condiciones de vida (incluyendo las laborales) de las personas es tematizada por el filósofo italiano Giorgio Agamben en obras como *Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida*. La reflexión sobre las condiciones de la vida humana despojada de sus derechos políticos, de su protección jurídica, reducida a la mera existencia biológica, es desarrollada en esta obra. El poder soberano, expone Agamben, tiene la capacidad de exclusión de ciertos individuos de la esfera pública (política) reducidos a una condición en la que su vida puede ser controlada sin consecuencias jurídicas al no estar protegidos por las leyes, esto es, al quedar despojado de su estatuto político. La nuda vida, según desarrolla Agamben, es esa figura que da cuenta de la posibilidad de muerte que tiene quien ha quedado fuera de la ley y al mismo tiempo es insacrificable:

> La vida nuda, es decir, la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero que es a la vez insacrificable del homo sacer, cuya función esencial en la política moderna hemos pretendido reivindicar. Una oscura figura del derecho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión (es decir la posibilidad absoluta de que cualquiera le mate. (Agamben, 2010, p. 18).

Poder y exclusión entran en juego en esta conceptualización de la nuda vida, a través de diversas estrategias, a saber: actuación del poder sobre la percepción de la realidad, despojo de la autonomía individual, entre otras técnicas en las que la idea de manipulación del poder sobre la vida humana constituye su nudo central. Como veremos en los ejemplos que describimos en nuestro estudio, una de las consecuencias del *gaslighting*, tras haber ejercido "una violencia tangible, pero paradójicamente invisible" (Hernández et al., 2014, p. 33) es el suicidio de la persona trabajadora, una vez despojada ya de su estatuto profesional y excluida de la dinámica ordinaria de la organización.

4. Estado de la cuestión desde la esfera del comportamiento y estructura organizacional

Como hemos comentado en la introducción, son conocidas las prácticas de poder en la esfera organizacional, principalmente en las organizaciones con estructuras muy jerarquizadas, donde el poder está concentrado principalmente en la cúpula

7 Tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, a finales del siglo XVIII, cuyo objetivo era permitir a su guardián, desde una torre central, observar a todos los prisioneros en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos sepan si son observados.

o en su alta dirección. Es desde esta mirada de mando, donde se toman decisiones que pueden afectar de manera muy significativa a las personas trabajadoras.

Si curioso es, como nos dice Sweet, que este fenómeno del gaslighting no haya sido estudiado por la sociología, más sorprendente resulta todavía la escasa visibilidad del fenómeno para el campo del comportamiento y estructura organizacional. Desde la Escuela Brasileira de Administración Pública y de Empresas (FGV EBAPE), en Río de Janeiro (Reis et al., 2023), publican el estudio realizado, *Gaslighting: El arte de enloquecer a grupos minoritarios en el trabajo*, la muestra de la investigación se realiza a treinta y siete empresas de Rio de Janeiro y São Paulo y relacionan el fenómeno del gaslighting con el acoso laboral, principalmente con el acoso laboral de género y discriminatorio. El análisis empírico de este estudio concluye que es "una responsabilidad inequívoca de las organizaciones incluir aspectos de justicia social y calidad de vida de las personas trabajadoras" (Reis et al., 2023, p. 16).

Desde esta misma visión epistemológica, el Institute of Management Indore, los predoctorales Kukreja & Pandey (2023), nos ofrecen, a través del artículo científico "Iluminación de gas en el lugar de trabajo, conceptualización, desarrollo y validación de una escala", una primera definición del gaslighting organizacional, concretándola como "un comportamiento negativo en el lugar de trabajo en el que una persona, en una posición de poder, se entrega a la trivialización y la aflicción cuando trata con sus subordinados" (Kukreja & Pandey, 2023, p.7). Esta investigación se realizada bajo dos hipótesis que se concretan en:

- Hipótesis 1: "El conflicto de roles en el lugar de trabajo, se relaciona positivamente con el gaslighting". (Kukreja & Pandey 2023, p.5).
- Hipótesis 2: "El gaslighting en el trabajo se relaciona negativamente con la satisfacción laboral del empleado" (Kukreja & Pandey, 2023, p.5).

La primera hipótesis, atendiendo al conocimiento sobre estructura organizacional y las relaciones de poder (recordemos las conclusiones de Sweet sobre las desigualdades estructurales e institucionales) no parece que debería de estar acotada a un conflicto exclusivo de roles, es decir, no a un comportamiento único de una persona hacia otra sino que todo indica que estamos ante un proceso que lleva a cabo quien ejerce el poder, o que se realiza con el beneplácito del poder real que ostenta la alta dirección de una organización.

Esta última suposición, por lo tanto, será la hipótesis principal de nuestro estudio, que avanza hacia una segunda hipótesis no menos importante (apoyada en el conocimiento previo en el campo comentado de la psiquiatría y la psicología) que estima que el estado mental de las personas que sufren gaslighting en el trabajo puede llevarlos a cometer acciones encaminadas a enfermedades mentales graves, incluso al suicidio.

Así pues, desde este posicionamiento epistemológico del comportamiento y estructura organizacional, combinado con la mirada filosófica ético-política mencionada, nos preguntamos: **¿Qué es el *gaslighting* organizacional y qué relación tiene con el suicidio laboral?** Para dar respuesta a este cuestionamiento de investigación, se marcan como objetivos prioritarios analizar los antecedentes laborales

de dos de las personas trabajadoras que se suicidaron en las empresas Renault (primer y segundo suicidio. M1 y M2) entre los años 2006 y 2007, y cruzar datos, por método comparativo, con el caso de suicidio (M3) acontecido en la empresa Aldi en 2021. En todos los casos a analizar, tanto la justicia francesa como la justicia española, han declarado los suicidios como nexo causal **el trabajo**.

Pero antes de entrar en las concordancias de nuestro análisis y para centrarnos en la problemática a abordar, conviene realizar una pequeña reflexión sobre el suicidio como accidente laboral en España y los suicidios más impactantes acontecidos en la esfera organizacional en los últimos años.

5. El suicidio como accidente laboral en España

Según el MSD[8], el suicidio es la muerte causada por un acto de autolesión diseñado para ser letal, siendo la ideación suicida la referida al proceso de pensar, considerar o planificar el suicidio. En 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya concreta en su publicación: *Estrés en el trabajo, un reto colectivo*, que:

> Las intenciones suicidas vinculadas al trabajo pueden surgir por diferentes causas, entre ellas destacan, **los riesgos psicosociales** (estrés, depresión, ansiedad) asociados a las jornadas de trabajo extralimitadas, a la discriminación, al aislamiento, a las relaciones conflictivas, al abuso físico o psicológico. (OIT. 2016, p. 6)

La OIT determina así, como hecho contrastado, la vinculación entre el suicidio y los riesgos psicosociales. Las cifras en cuanto a estrés en el trabajo que reflejan los estudios e investigaciones a nivel mundial son muy preocupantes para la OIT. A modo de pincelada, y refiriéndonos a la última encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (EWCS, 2021)[9] se confirma que el 50% de las personas trabajadoras de la Unión Europea trabaja a gran velocidad o a plazos muy cortos, y el 12% trabaja con una extrema y alta tensión.

También en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013- 2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión y la conducta autolesiva, el suicidio, figuran entre las afecciones prioritarias a abordar (más de 700.000 personas en el mundo mueren al año como consecuencia del suicidio, principalmente en edad laboral)[10].

A pesar de lo alarmante de estas cifras, "la tercera parte de las organizaciones no cuentan con procedimientos para tratar estos riesgos psicosociales" (OIT. 2016, p. 8) a sabiendas de que existe regulación legislativa en materia de prevención de riesgos laborales en los países de la Unión Europea.

En el caso de España, las obligaciones empresariales en este ámbito se concretan a través de diversas normas[11], si bien

8 MSD Manual de recursos médicos integrales. Merck & Co, Inc., Rahway, NJ, Estados Unidos

9 https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/encuesta-europea-sobre-las-condiciones-de-trabajo-ewcs

10 Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP)

11 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre. Directiva Marco 89/391/CEE sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se

debemos de puntualizar que en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en su artículo 14 (Derecho a la protección frente a los riesgos laborales) **no se abordan los riesgos psicosociales de manera específica, pero sí establece de forma taxativa** (en párrafo 2), **la obligación de la persona empresaria de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras** a su servicio, en todo los aspectos relacionados con el trabajo, lo que incluiría, de forma implícita, los factores psicosociales.

En cuanto a **la obligación sobre la evaluación y seguimiento de los riesgos psicosociales**, de igual manera que la expresada anteriormente, la ley de PRL mencionada, en su artículo 16, refiere al plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva que deben de llevar a cabo las empresas en protección de la salud de las personas trabajadoras, **lo que atañería también a los riesgos psicosociales**, aunque estos no sean citados de forma detallada.

Para mayor refuerzo de las normas mencionadas y ya con una clara mención a los riesgos psicosociales, España se ha adherido y ratificado, el 16 de junio de 2023, al Convenio 190[12] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y según consta en el citado Convenio, en su apartado V de Protección y Prevención, artículo 9.b:

> Todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, **así como los riesgos psicosociales asociados**, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (OIT. 2019).

Por lo expuesto y retomando la afirmación de la OIT "la tercera parte de las organizaciones no cuentan con procedimientos para tratar estos riesgos psicosociales" (OIT. 2016, p. 8) parece muy evidente que algo está fallando y que es necesaria una revisión urgente por parte de los legisladores en materia de prevención de los riesgos psicosociales, esto sería, el tratar de manera específica y clara los riesgos psicosociales en la Ley de PRL española como consecuencia de la entrada en vigor del convenio 190 de la OIT.

Centrándonos ya en las estadísticas para el territorio español, los datos sobre presión laboral superan las preocupantes cifras europeas mencionadas. Según el último informe realizado por ADP® Research Institute en 2022, el 66% de los trabajadores españoles experimenta estrés en el trabajo, al menos una vez por semana[13].

Enfocando ya la problemática que nos ocupa de los suicidios en España y según observamos en figura1, atendiendo a los **últimos** datos facilitados por el INE[14], estos alcanzan la cifra de 4.227 muertes al cierre del año 2022. Dicha mortalidad

aprueba el Reglamento de Salud y Prevención. Acuerdo Marco Estrés Laboral de 2004. Acuerdo sobre acoso y violencia en el trabajo de 2007. Acuerdo Europeo sobre estrés laboral, 8 de octubre de 2014.

12 https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

13 https://es.adp.com/recursos/insights/people-at-work-2022-una-vision-sobre-el-equipo-humano-global.aspx

14 Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=48293&L=0

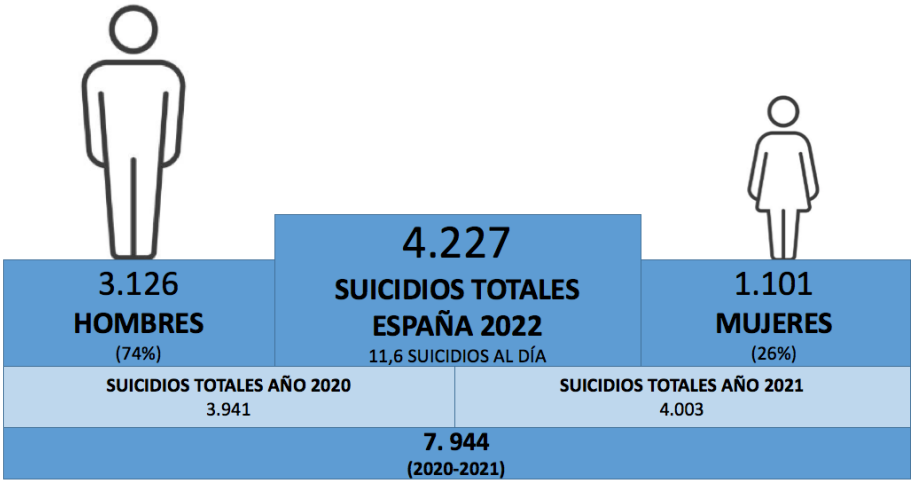


Figura 1. Número de suicidios en España años 2020, 2021 y 2022. Fuente: Elaboración propia.

supone la friolera de **11,6 suicidios al día** (siendo la tasa de suicidios femeninos del 26% frente a una tasa masculina del 74%). Las cifras van en aumento año tras año: 3.941 muertes en el año 2020, 4003 muertes en el año 2021 y 4.227 en el año 2022, un total de 12.171 persona, en estos tres últimos años que han decidido quitarse la vida. Lo terrible de esta situación es que no existe estadística alguna en España que muestre las causas ciertas del origen de tal decisión, de lo que se desprende: la poca transparencia, el desinterés y menor preocupación por parte del poder ejecutivo español ante una situación tan grave, a la que nuestra sociedad mira inmóvil e impasible.

Analizadas estas cifras por edades de suicidios en España, referido al **último dato publicado del año** 2022 y como se puede observar en la gráfica de figura 2, según datos ofrecidos por el portal de estadística alemán Statista GmbH[15], en todas las franjas de edades se confirma una tasa superior de suicidios para la variable hombres.

15 https://es.statista.com/estadisticas/819819/muertes-por-suicidio-y-lesiones-autoinfligidas-por-grupos-de-edad-en-espana/

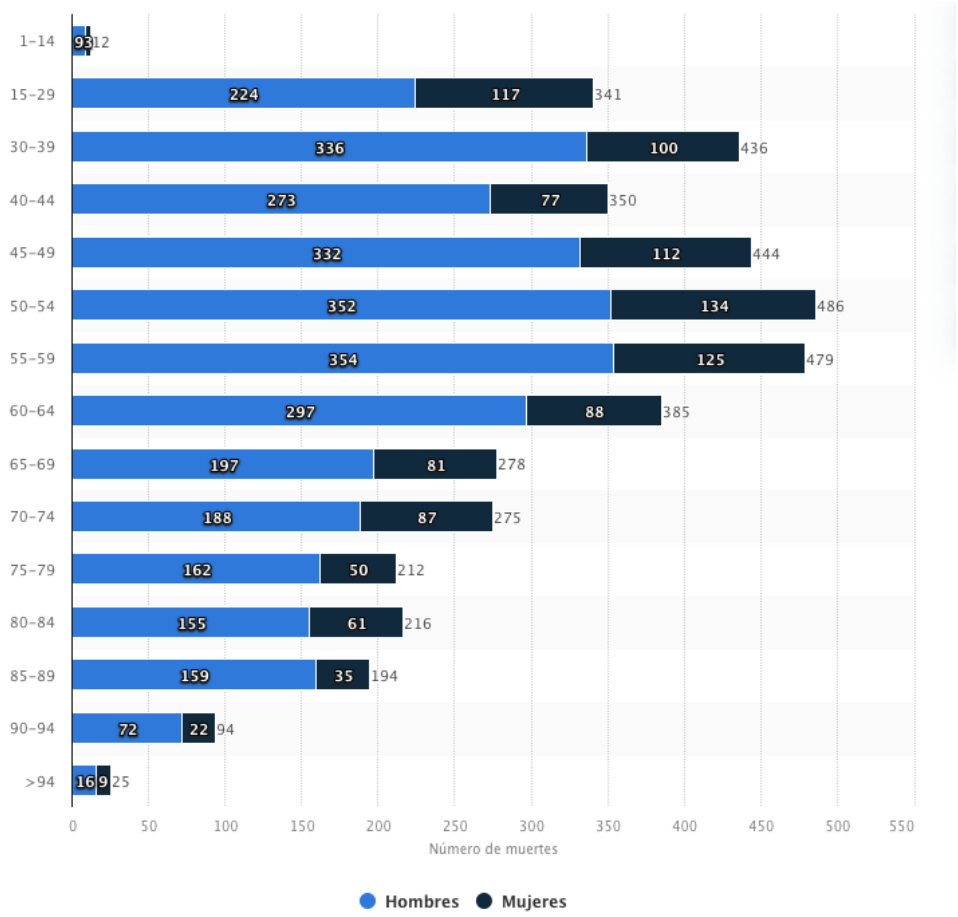


Figura 2. Suicidios en España, año 2022, género y edad. Fuente: Statista GmbH.

De los datos facilitados por Statista (año 2022) y poniendo ya el foco en averiguar en que edades la tasa de suicidios en España es mayor, se analiza y elabora la figura 3, en ella, destacamos que la banda de edad entre los 40/59 años refiere al 46% de los totales 4.227 suicidios comentados, edades que corresponden a personas en una fase de madurez laboral.

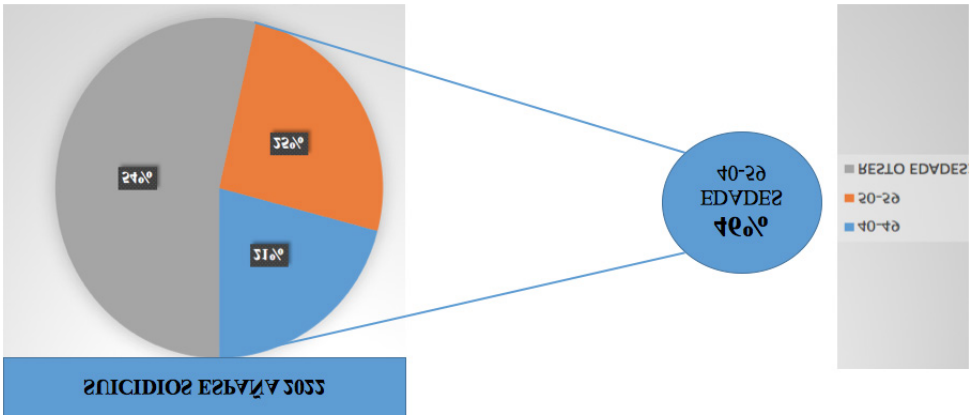


Figura 3. Edades con mayor % de suicidios en España, año 2022. Fuente: Elaboración propia.

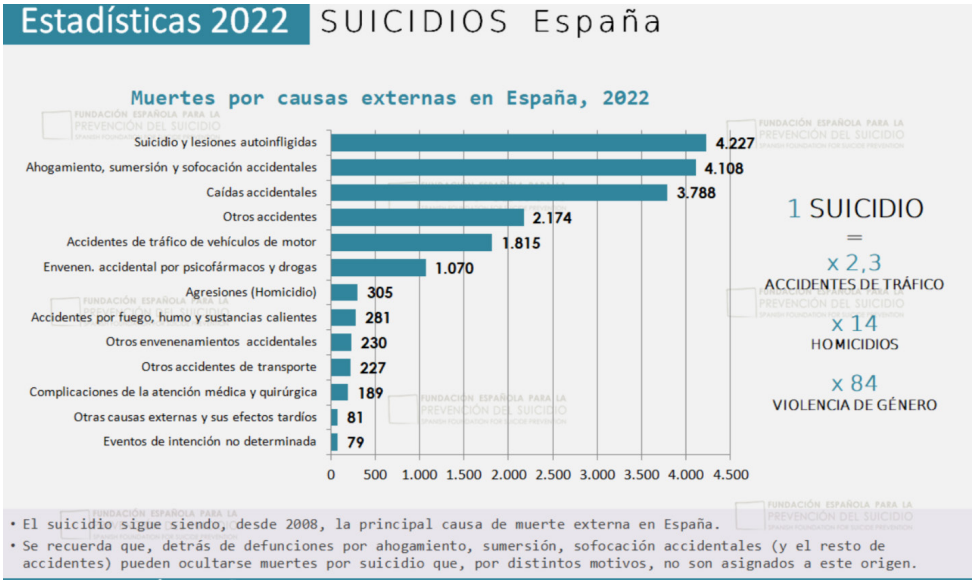


Figura 4. Muertes por causas externas en España 2022. Fuente: Fundación española para la Prevención del suicidio.

La fundación española para la Prevención del suicidio, en su publicación *Observatorio del suicidio en España 2022*[16], con datos tomados del INE, realiza una gráfica la cual podemos observar en figura 4 sobre las muertes por causas externas en España. En ella, la propia publicación apunta que las defunciones por ahogamiento, sumersión, sofocación accidental, así como resto de accidentes podrían ocultar muertes por suicidios que por distintos motivos no son asignados al origen citado. Realmente podríamos estar hablando de cifras mucho más elevadas que las registradas

16 https://www.fsme.es/

por el INE a cierre de 2022 y que superarían las 14.000 muertes al año.

La realidad diaria que se plasma en los medios de prensa de toda índole en nuestro país, así como la gran preocupación del gobierno español a través de sus Ministerios (Interior e Igualdad) se centra en las muertes por accidentes de tráfico y las muertes por violencia de género. En 2022, mil ciento cuarenta y cinco personas perdieron la vida en las carreteras españolas según informe de la Dirección General de Tráfico[17], lo que representa solo el 27,08% de las muertes que se produjeron por suicidio en la misma fecha. En referencia a 2022 también, el Ministerio de Igualdad español[18], informa que cuarenta y nueve mujeres han perdido la vida en nuestro país, a manos de sus parejas o exparejas, un 1,15% con respeto a los 4.227 suicidios informados por España.

Estamos de acuerdo que hablamos de dos realidades (accidentes de tráfico y violencia de género) cuyas cifras tenemos la obligación de dar visibilidad, concienciar y reducir, sin perder de vista la necesaria protección de la ciudadanía en estos aspectos tan importantes. Sin embargo, los suicidios en España, presentando una cifra muy superior, no se gestionan con el mismo enfoque sino todo lo contrario, se vive de espalda a ellos: ni son noticia, ni se miden correctamente, ni se previenen, ni se conciencia, ni se da visibilidad a la problemática y mucho menos se legisla a favor de buscar una solución.

De los 7.944 suicidios que se han registrado en España entre los años 2020 y 2021, **solo dos casos** han sido reconocidos como accidentes de trabajo por la justicia española (Sánchez, 2023, p.25). Realmente estamos frente a una cifra inverosímil, tan solo atendiendo al 46% de población madura laboral que se quita la vida, como hemos mencionado anteriormente.

Para entender la dificultad que ocasiona el reconocimiento del suicidio como causa laboral en España, debemos de referirnos al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 156.2.e) concepto de accidente de trabajo, el cual cita las enfermedades que tendrán consideración de accidente de trabajo y en las cuales no se refiere al suicidio, pero si dispone y dice que:

> Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por **causa exclusiva la ejecución del mismo**. (OIT. 2016, p.6)

Las enfermedades mentales a las que nos llevamos refiriendo en este artículo como factores psicosociales que propician el suicidio (estrés, ansiedad, depresión, etc.) vinculado al trabajo, son definidas por la disciplina de la psiquiatría y de la psicología como enfermedades de tipo multicausal y por lo tanto, probar o **demostrar el nexo entre una enfermedad mental originada como causa exclusiva el trabajo, es prácticamente inviable**. Por lo tanto, que a día de hoy, se mantenga vigente la redacción de este articulado es un verda-

17 https://www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/1.145-personas-fallecieron-en-siniestros-de-trafico-durante-2022/#:~:text=En%202022%20se%20produjeron%201.042,y%20previo%20a%20la%20pandemia.

18 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMujeres_2022_act_11_04_2024.pdf

dero disparate, a la par que muy injusto para nuestra sociedad. Los escasos fallos que vinculan suicidio y trabajo en nuestro país se deben a la interpretación jurisprudencial española, y determinan como causa determinante/preponderante la situación mental de la persona trabajadora en relación al origen del mismo, esto es, el entorno laboral. Es la interpretación jurisprudencial la que está facilitando el camino para, a pesar de la norma existente, establecer la posibilidad de que el suicidio alcance la consideración de accidente de trabajo.

Desde luego, todo por hacer en lo relativo al suicidio en España, a su transparencia en cuanto al origen, a su prevención y por supuesto, a su legislación que no debería ocasionar esfuerzo alguno de interpretación jurídica.

Y a pesar de que los suicidios suponen una prioridad gubernamental internacional, como hemos expuesto, seguimos con este gran tabú de no analizar el origen de los suicidios. Es cierto que, en cambio, países como Francia, Australia, Tailandia y Japón comienzan a visibilizar y a reconocer la vinculación existente entre los suicidios y el trabajo (prácticamente debida a los mencionados riesgos psicosociales) siendo el estrés y el acoso laboral las causas más señaladas. Preocupaciones estas que acontecen tras lo escandaloso de los suicidios masivos ocurridos en los países mencionados. Este punto se aborda a continuación destacando aquellos casos más estremecedores por el número tan elevado de suicidios que se han registrado en una misma organización.

5.1. Los suicidios en la esfera organizacional

En contraposición hasta todo lo aquí analizado, ciertos casos de suicidios reconocidos por la justicia con causa de origen en el entorno laboral, han tenido gran repercusión mediática de manera puntual y han conmocionado a la población en general. Sería muy difícil acallar una noticia de suicidio múltiple que deja al desnudo lo que sucede en las estructuras internas de algunas organizaciones. Nos referimos, entre otros, a los casos siguientes:

- **France Telecom**, actual Orange, donde sesenta personas trabajadoras se quitaron la vida entre el 2001 y 2008. Su exdirector ejecutivo Didier Lombard, su director de RRHH y cinco exdirectivos más, fueron declarados culpables de "acoso moral institucional". El 12 de diciembre 2019, el Tribunal Correccional de París señala además que lo que se condena no "es la estrategia empresarial sino los métodos utilizados en France Telecom."[19]
- **Foxconn**, la multinacional Taiwanesa, el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial (principal fabricante de los productos Apple, Sony, Nintendo, Microsoft y Amazon) en el año 2010 dieciocho personas trabajadoras se suicidaron, casi todos lanzándose al vacío en las propias instalaciones de Foxconn. La organización sin ánimo de lucro SACOM (Centre for Research on Multinational Companies and Students & Scholars Against Corporate Misbehaviour) en ese mismo año publicó un informe en

19 Redacción BBC News Mundo. 20 diciembre 2019

el que se detallan los acosos y atrocidades que se llevan a cabo en las instalaciones de Foxconn. Ante estos hechos tan graves, lo más sangrante, y tras las peticiones de sus clientes para solucionar la problemática, la compañía Foxconn en la actualidad obliga a las personas trabajadoras de la compañía a firmar un contrato con una serie de cláusulas relacionadas con el suicidio, de esta manera evita toda responsabilidad que pueda tener sobre los mismos.[20]

– **La Poste**, El servicio estatal de correos francés, en 2010, se convierte en sociedad anónima abriendo así la posibilidad de entrada de capital privado y con un nuevo plan estratégico para la empresa. Según citan varios medios de comunicación españoles[21] (*El Mundo*, *El País* y *ABC*) a principios de 2011, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) francés comunica que setenta y siete agentes de La Poste se han suicidado entre los años 2009 y 2010. Los sindicatos relacionaron las muertes con los cambios recientes en el capital social de la compañía y que han acarreado diversas reestructuraciones, señalando también la escasez de personal y las presiones a las que se han visto sometidos las personas trabajadoras de La Poste.

– **Renault**, En la década 2006/2016 una docena de empleados de la fabricante de automóviles francesa se suicidaron; Según el diario Le Parisien, en la empresa se viven condiciones laborales como estrés, exceso de trabajo y depresiones.

Avanzando en nuestro estudio, para intentar comprender si el fenómeno del *gaslighting* en el entorno laboral tiene relación con lo hasta aquí expuesto, abordamos, a continuación, las concordancias del análisis realizado, en primer lugar, respecto a dos de los primeros suicidios acontecidos en la empresa francesa Renault.

5.2. Concordancia en los suicidios del caso Renault en relación con el gaslighting organizacional

Tabares, A. (2011), dramaturgo canario, plasmó en su obra *La punta del Iceberg* otra realidad de la época que no difiere tanto del concepto de *gaslighting* revelado por Hamilton (recordamos, volver locas a las personas). En este caso, Tabares, nos muestra los primeros tres suicidios masculinos acontecidos en una planta de Renault, Technocentre, que la compañía francesa tiene al suroeste de París (Guyancourt). Los hechos reales ocurren en un intervalo muy corto de tiempo, tan solo cuatro meses, entre los años 2006-2007. En 2016 la obra de Tabares es adaptada al cine, con gran acogida y bajo el mismo título. La trama (bastante real) relata la locura que han tenido que vivir tres ejecutivos de esta compañía para terminar, finalmente, quitándose la vida.

La vida del primer suicidio del caso Renault, suicidio que analizamos en este

20 https://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/06/navegante/1304682711.html

21 https://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/19/economia/1366363024.html.

https://elpais.com/sociedad/2014/05/05/actualidad/1399317249_139610.html

https://www.abc.es/internacional/abci-francia-teme-nueva-suicidios-201203130000_noticia.html

estudio ,fue también ampliamente investigado por el periodista Hubert Prolongeau, el cual en 2022 y en formato de novela gráfica (recreado por el dibujante Gregory Mardon, y el escritor de novelas gráficas Arnaud Delalande) bajo el título *Cuando el trabajo mata* (2022) describe el terrible sufrimiento de un apasionado ingeniero por su trabajo, de origen muy humilde y que, con gran esfuerzo, alcanza su sueño de lograr ser responsable de departamento en la compañía Renault. A partir de ese instante, el trabajador sufre presiones, manipulaciones, jornadas de trabajo interminables y termina entrando en un bucle de comportamiento cercano a la locura en el que ya no admite consejo de nadie, incluido su círculo más íntimo. En 2006, decide terminar con esa situación, sin ver más salida, precipitándose al vacío en las instalaciones donde desarrollaba su trabajo.

El porqué de estas muertes, primer y segundo suicidio que clasificamos como M1 y M2 para nuestro estudio, lo deja bien claro el Tribunal de Apelación de Versalles en sus sentencias, fallando ambos suicidios como falta inexcusable de la empresa Renault[22], y concreta como origen una exposición colectiva de las personas trabajadoras a un **riesgo anormal** causado por la organización del trabajo. Entre las causas principales que apuntan ambas sentencias, destacamos para nuestro estudio:

- Jornadas de trabajo excesivas, sin control de horarios.
- Presiones a objetivos, en muchos casos inalcanzables.
- Responsabilidad técnica, sin formación adecuada.
- Riesgo a enfermedades psicosociales, sin prevención.

Para analizar la concordancia de nuestro estudio en M1 y M2, en relación al *gaslighting*, se realiza un análisis cualitativo de las siguientes fuentes: información en publicaciones, medios de comunicación y sentencias; extrayendo (clasificando y agrupando) de las mismas, las herramientas que utiliza un *gaslighter* señaladas en el marco teórico de estudio.

Sobre la muestra tomada se detectan los siguientes hechos coincidentes:

- Existe una preponderancia excesiva en la relación de poder entre la alta dirección de la compañía Renault y los trabajadores estudiados.
- Ambos trabajadores habían sido ascendidos de sus puestos por parte de la Compañía.
- Eran trabajadores con un alto rendimiento, con responsabilidad corporativa y alto deber del cumplimiento.
- Personas trabajadoras, sometidas al logro de objetivos muy cortoplazistas.
- Coincidentes, también, en una alta vinculación a la empresa, lo que les provoca un sentimiento de pertenencia a la misma**.**
- La organización parece estar siempre cubierta en sus decisiones, siempre tiene sobre quien depurar responsabilidades corporativas de cualquier índole.
- El señalamiento, las presiones, las mentiras y el secuestro de la vida familiar de los trabajadores, por parte de los mandos superiores de Renault,

22 CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 10-00954-CA Versailles, 5e ch., 10 mai 2012, n° 10-05488

son coincidentes también provocando sentimientos de angustia, depresión y caos mental.

En resumen, la concordancia en los casos M1 Y M2 y atendiendo al *gaslighting*, refiere a un deterioro progresivo de la persona trabajadora que clasificamos en ocho ítems como se muestra en figura 5. Un primer ítem: **Bombardeo de amor**, donde se produce un reconocimiento de la empresa hacia los trabajadores y que se concreta en ascensos que reportan a los mismos una mejor posición social y económica. Un segundo ítem: **dominio de poder**, donde la cultura de la empresa deja claro el franqueamiento de los límites (sin control alguno de horarios) lo que provoca el aislamiento de los trabajadores de su vida privada y familiar y comienzan las presiones a resultados. El tercer ítem: **comunicación oscilante**, viene cargado de una comunicación confusa entre, ¡tú puedes, eres el mejor y por eso te hemos ascendido! y un ¡prepárate con que mañana no esté resuelto!. El cuarto ítem, **chantaje emocional**, donde los trabajadores entran en una dinámica de vigilancia y seguimiento continuo por parte de la empresa y que desemboca en un inevitable quinto ítem: **distorsión de la realidad**, donde las personas afectadas por este fenómeno del gaslighting, comienzan a entrar en estado de confusión total por la realidad distorsionada que le muestra la empresa hacia ellos, que en algunos casos del análisis se ha concretado en realizar trabajos que no eran su desempeño laboral o no estaban facultados para el mismo (por ejemplo, despedir a compañeros/as) momento que la empresa aprovecha para señalarles como debilidad de los trabajadores en estudio.

Seleccionamos el sexto ítem: **amenazas y extorsiones**, en donde las exigencias profesionales, sin formación adecuada para su desarrollo, sirve a las organizaciones para demostrar la incapacidad del que había sido un buen empleado y donde las amenazas sobre los despidos y los traslados sobrevuelan constantemente las cabezas de los trabajadores provocándoles una parálisis total, parálisis que solo el miedo y el terror a quedarse sin ingresos económicos puede provocar. El séptimo ítem, **la ley del silencio**, refiere cuando los trabajadores se sienten ya señalados por parte de la empresa, aquella empresa a la que les unía un fuerte sentimiento de pertenencia y a la que, por más horas dedicadas, no terminan de contentar sino todo lo contrario, les castiga (traslados que ocasionan más distanciamiento de la vida privada, reuniones y supervisiones muy incómodas). Es aquí cuando los trabajadores entran en una confusión tal que no ven otra salida que sacarse del medio. Un último ítem, la llamada **cortina de humo**, en estos casos de análisis se concreta en hacer ver que son las propias condiciones y vidas personales de los trabajadores lo que realmente los lleva a sentirse estresados, deprimidos y angustiados. Todo lo que padecen tiene origen en su vida privada o familiares, no en el entorno laboral. Esta fase, sobremanera, se observa cuando la organización trata de defenderse de las demandas interpuestas por los familiares de los dos fallecidos objeto de estudio.

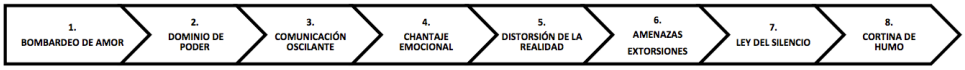


Figura 5. Fuente: Elaboración propia.

En figura 5, y de manera más esquemática, podemos observar los ocho ítems que se acaban de explicar con mayor detalle en relación a los medios utilizados por parte de la empresa Renault, así como el impacto que han ocasionado en los trabajadores las formas de proceder de esta.

	MÉTODO GASLIGHTING	MEDIOS	IMPACTO
1	BOMBARDEO DE AMOR IDEALIZACIÓN	ELOGIOS ASCENSOS MAYOR RETRIBUCIÓN POSICIÓN SOCIAL	RECONOCIMIENTO TE SIENTES IMPORTANTE
2	DOMINIO DE PODER FRANQUEAMIENTO DE LÍMITES	TIEMPOS DE RESULTADOS MUY CORTOPLAZISTAS HORARIOS SÍN CONTROL AISLAMIENTO FAMILIAR PRESIÓN PSICOLÓGICA	ESTRÉS CONFLICTOS FAMILIARES TE SIENTES AGOBIADO/A
3	COMUNICACIÓN OSCILANTE	COMUNICACIÓN EMBAUCADORA COMUNICACIÓN AGRESIVA	BAJA AUTOESTIMA TE SIENTES CONFUNDIDO/A
4	CHANTAJE EMOCIONAL	PRÁCTICAS ABUSIVAS MENOSPRECIO A LO PERSONAL VIGILANCIA	ARREPENTIMIENTO VERGÜENZA TE SIENTES CULPABLE
5	DISTORSIÓN DE LA REALIDAD	MENTIRAS DESPRECIOS EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD	CONFUSIÓN TE SIENTES DESORIENTADO/A
6	AMENAZAS EXTORSIONES	CUESTIONAR EL DESEMPEÑO LABORAL DESPIDOS FUTUROS PALABRAS GRUESAS INSULTOS	MIEDO PÁNICO TE SIENTES ATERRADO/A
7	LEY DEL SILENCIO	AISLAMIENTO SEÑALAMIENTO DESPIDOS DISCIPLINARIOS	SUFRIMIENTO EMOCIONAL SENTIMIENTO DE INJUSTICIA CONFUSIÓN MENTAL
8	CORTINA DE HUMO	DESVIAR EL FOCO A LAS CONDICIONES PERSONALES Y VIDAS PRIVADAS	DUDAS TE SIENTES SEÑALADO/A

Figura 6. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Comparación del método "gaslighting Renault" con el caso de suicidio español empresa Aldi

Para dar mayor fiabilidad al estudio, aunque ello no suponga la prevalencia de todos los casos de suicidio laboral en relación al *gaslighting* organizacional, se han comparado los ocho ítems descritos en el caso Renault con el caso de suicidio de un empleado de la compañía Aldi, con nomenclatura M3, suicidio acontecido el 12 de abril de 2021. Este suicidio está sentenciado también como accidente laboral por la justicia española, el 27 de febrero 2023, en sentencia firme que falla el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), "sentencia número 118/2023".

La sentencia, al margen de otras probatorias, según transcribe Lousada, J.F. (2023), Ilmo. Magistrado de la jurisdicción social de Galicia en la *Revista de Jurisprudencia Laboral* número 4/2023 (BOE: 090-21-213-4) bajo el título "El suicidio como accidente de trabajo: ¿qué hay que probar y cómo probarlo?[23], se apoya en el informe de la inspección de trabajo de fecha 27/10/2021, el cual emite informe concluyente en que **el nexo causal del suicidio ha sido una situación laboral estresante**. La inspección de trabajo impone sanción a la empresa Aldi por falta de medidas de seguridad, atendiendo a la falta de evaluación de riesgos psicosociales y a la adopción de medidas preventivas como

23 Lousada, J.F. (2023). El suicidio como accidente de trabajo: ¿qué hay que probar y cómo probarlo?. Revista de Jurisprudencia Laboral número 4/2023 (BOE: 090-21-213-4).

exige en nuestro país la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 31/1995). La sanción por esta causa, supuso a la empresa Aldi la irrisoria cantidad de 8.196 euros, cantidad que una vez impugnada por parte de la empresa fue rebajada a la ínfima de 2.046 euros (Lousada, 2023, p.3). Otra prueba también fundamental y novedosa para esta resolución del TSJC fue la Autopsia Psicológica aportada por la parte denunciante, en ella se concreta que el suicidio no hubiese sucedido sin los episodios vividos de rechazo por parte de Sr. Bedia (Lousada, 2023, p. 7).

El Sr Bedia tenía 53 años, estaba casado y era padre de una niña. Su vinculación laboral con la empresa Aldi comienza hace 10 años cuando se le contrata con una categoría inicial de empleado de tienda. En marzo de 2020 es ascendido a responsable de tienda (con 18 personas a su cargo) y solamente un año más tarde se quita la vida.

Su viuda concreta en una entrevista realizada por la periodista Irene Sáinz[24] que su marido se suicidó después de que su empresa lo utilizara como cabeza de turco. Los hechos y sus antecedentes se muestran claramente en la mencionada sentencia, así como en la Revista de Jurisprudencia Laboral mencionada (Lousada, 2023, pp. 1-8).

Analizados los antecedentes de hechos referidos y comparándolos con los ítems seleccionados en los casos de suicidio Renault, podemos concluir que la concordancia de los mismos es claramente coincidente en ambos casos. Podemos observar en figura 5, como el ascenso, la dedicación excesiva a la empresa, la anulación de la vida personal, las presiones, el domino de poder y el señalamiento final llevaron al Sr. Bedia a un estado mental tan confuso que no encontró más salida que la muerte.

Fijémonos en lo acontecido en la parte final de su vida en relación a su trabajo, el Sr Bedia es obligado por su empresa a sindicalizarse, para resultar elegido como representante de los trabajadores. Esto le ocasionó un problema importante con sus compañeras de trabajo afiliadas a otro sindicato. Dos de ellas resultaron despedidas, y otra fue rebajada a la atención en caja del supermercado por orden indirecta de la empresa. Como consecuencia de los problemas que generaron las decisiones de la compañía, el Sr. Bedia resultó demandado por parte de una de las citadas compañeras de acoso laboral. La empresa, a la que tanta lealtad guardaba el Sr. Bedia, le envía una auditoría externa para finalmente señalarlo como **culpable de tal acoso**. Este señalamiento trae consigo una reunión con sus superiores, en la que le comunican un traslado forzoso de puesto de trabajo. La incertidumbre sobre su horizonte penal en la denuncia por acoso y la ausencia de apoyo de su empresa ante la problemática a la que se enfrentaba terminan de hundir al Sr. Bedia. Sus últimas búsquedas en internet, un día antes de su muerte, fueron significativas, claras y determinantes: condena a Alcalde a tres años de prisión… delito acoso laboral *mobbing*, consecuencias penales en acoso laboral, sentencia penal por acoso laboral, búsquedas que muestran la afectación tan grande que cursaba en la mente del Sr. Bedia la problemática laboral descrita.

24 https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/suicidio-accidente-laboral-marido-hizo-despues-empresa-utilizara-cabeza-turco_1_10652896.html

	MÉTODO GASLIGHTING	MEDIOS	IMPACTO
1	BOMBARDEO DE AMOR IDEALIZACIÓN	✓ ASCENSO 2020 ✓ MAYOR RETRIBUCIÓN ✓ POSICIÓN SOCIAL	RECONOCIMIENTO SE SENTÍA IMPORTANTE PARA LA EMPRESA
2	FRANQUEAMIENTO DE LÍMITES	✓ REDOBLE DE HORARIOS (6H-22H) ✓ ANULACIÓN DE LA VIDA PERSONAL ✓ PROBLEMAS CON SU MUJER ✓ PRESIÓN PSICOLÓGICA	ESTRÉS PROBLEMAS FAMILIARES SE SENTÍA ALTERADO Y AGOBIADO
3	COMUNICACIÓN OSCILANTE AMENAZAS	✓ COMUNICACIÓN EMBAUCADORA/AGRESIVA ✓ OBLIGADO A SINDICALIZARSE Y PRESENTARSE A LAS ELECCIONES SINDICALES ✓ REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES/AS	BAJA AUTOESTIMA SE SENTÍA CONFUNDIDO
4	DOMINIO DE PODER	✓ TAL DECISIÓN DE LA EMPRESA OCASIÓNÓ QUE SUS COMPAÑERAS DE TRABAJO SE LO TOMARAN COMO IMPOSICIÓN DE LA EMPRESA ✓ GUERRA DE BRAZOS CAIDOS ✓ DOS DESPIDOS ✓ CASTIGO=UN AISLAMIENTO A CAJA DE UNA COMPAÑERA	CONFUSIÓN DESORIENTACIÓN MALESTAR GENERAL SE SENTÍA AGOBIADO
5	PROBLEMA	➢ LA COMPAÑERA DENUNCIA AL SR. BEDIA POR ACOSO LABORAL	MIEDO, TERROR SE SENTÍA EN PARTE CULPABLE Y ATERRADO
6	SOLUCIÓN DE LA EMPRESA MÁS PRESIÓN PSICOLÓGICA	➢ ORDENÓ AUDITORIA EXTERNA AL SR. BEDIA QUE NO DECIDIÓ LOS DESPIDOS, NI EL AISLAMIENTO ➢ RESULTADOS AUDITORIA CONCLUYÓ QUE HABÍA INDICIOS SUFICIENTES DE ACOSO LABORAL POR PARTE DEL SR. BEDIA	YA TENEMOS AL CABEZA DE TURCO
7	DECISIÓN TRAS AUDITORIA LEY DEL SILENCIO	✓ AISLAMIENTO ✓ SEÑALAMIENTO ✓ SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y SUELDO ✓ TRASLADO DE SANTANDER A LAREDO	SUFRIMIENTO EMOCIONAL SENTIMIENTO DE INJUSTICIA SENTIMIENTO DE VERGÜENZA SENTIMIENTO DE ABANDONO Y SOLEDAD HUNDIMIENTO PERSONAL
	11/04/2021	BÚSQUEDA EN INTERNET DEL SR. BADIA "condena a Alcalde a tres años de prisión...delito acoso laboral mobbing", " consecuencias penales en acoso laboral" , "sentencia penal por acoso laboral"	
	12/04/2021	SUICIDIO	
8	CORTINA DE HUMO	LA DEFENSA DE LA EMPRESA DESVIA EL FOCO A LAS CONDICIONES PERSONALES Y VIDA PRIVADA DEL SR. BEDIA (Enfermedad de su padre, problemas con su mujer, su hija..)	YA NO PUEDE SENTIR NADA

Figura 7. Fuente: Elaboración propia.

Ergo, podemos concretar en este comparativo de casos de estudio que los ocho ítems son fases progresivas de un método de actuación ejecutado por parte de la alta dirección de la compañía hacia estos tres trabajadores de muestra M1, M2 y M3.

6. Concepto *Gaslighting* organizacional

Por lo tanto, del estudio se desprende que el Gaslighting Organizacional es un método de progresión gradual que utilizan algunas organizaciones para evitar responsabilidades empresariales, consistente en someter a una persona trabajadora a un estado de confusión mental elevado que, sostenido en el tiempo, acarrea graves daños a la salud, incluso autolesionándose de manera letal la persona trabajadora que lo padece.

Dicho método es señalado directamente por el Tribunal de Apelación de Versalles en las sentencias mencionadas en este artículo, como un proceder arraigado en la compañía Renault. Esta praxis organizacional atiende a determinadas culturas organizacionales donde el punto de apoyo, no nace de la ética aplicada sino de la amoralidad del **que todo vale** para obtener un beneficio o para eludir una responsabilidad, incluso la exposición del ser humano a quitarse la vida.

7. Conclusiones

De la investigación presentada se extraen las siguientes conclusiones:

1. El *gaslighting* organizacional, en los casos de estudio, no se puede valorar como un mero hecho aislado porque es un **proceso gradual** de confusión mental y utilización de las personas trabajadoras para evitar responsabilidades corporativas de diversa índole.
2. En ocasiones, esa confusión mental lleva a la persona trabajadora a quitarse la vida. Es, por lo tanto, una puerta abierta al suicidio y, por ende, una situación muy grave a erradicar.

3. Ciudadanos, éticos, expertos, empresas y gobiernos deberían de prestar atención, analizar y dar solución a esta realidad social de 12.171 suicidios en España acontecidos entre los años 2020-2022. Dar visibilidad, concienciar y reducir los suicidios en España es una obligación de toda la Comunidad Ética.
4. Es necesaria una revisión urgente de la ley de PRL 31/1995, atendiendo a la adhesión de España al Convenio 190 de la OIT, y por lo tanto se deben tratar los riesgos psicosociales y las obligaciones empresariales (como protectores de las salud de las personas trabajadoras) de manera explícita y clara. Determinando, para ello, un plan de prevención efectivo que contemple la evaluación, el seguimiento y la planificación de los riesgos psicosociales en protección de la salud de las personas trabajadoras.
5. La evaluación de los riesgos psicosociales deberá tener en cuenta si los mismos provienen de una praxis gradual organizacional o si atienden a un hecho puntual del momento de la evaluación.
6. El poder legislador debería de tipificar y revisar las sanciones correspondientes al no haber adoptado la empresa medidas preventivas en lo concerniente a los riesgos psicosociales. Estamos hablando de enfermedades graves y de muertes de personas, cierto que ninguna cantidad repara el daño ocasionado a los familiares de las víctimas pero, si sancionamos con cantidades ridículas, el temor a la sanción por parte del entramado empresarial con estas praxis será sin duda mucho menor.
7. El poder legislador también debería tipificar como enfermedad el acoso laboral psicológico (mobbing) para que exista una Nota Técnica de Prevención (NTP) tal y como ya existe para el acoso sexual laboral, la NTP507. Esto mejoraría los tiempos de reconocimiento de las contingencias profesionales, y evitaría la revictimización de las personas trabajadoras aquejadas por mobbing.

Por último, y lo más importante a destacar dentro de estas conclusiones finales, es realizar un llamamiento de alerta a los poderes ejecutivos y legislativos de nuestro país, en su obligación de cuidado, control y prevención de la enfermedad de todos los ciudadanos españoles. Dos casos reconocidos en España de suicidio como accidentes de trabajo, entre 2020 y 2021, frente a 7.944 suicidios registrados en estos años, deberían de encender todas las alertas de estos poderes en su obligación de proteger la salud de nuestra ciudadanía.

Legislar y hacer cumplir la ley encaminada a que nuestra sociedad y en particular las personas trabajadoras, gocen de un bienestar y una vida saludable y por tanto no se vean sometidas a una "nuda vida" expuesta a la posibilidad de ser matada silenciosa e impunemente.

8. Futuras investigaciones

El caso del Sr. Bedia es coincidente con los casos franceses de suicidio que hemos tratado en este análisis. Para futuras investigaciones se debería ampliar la muestra lo máximo posible, con personas trabajadoras en activo (mandos intermedios) a fin de comprobar en qué medida el gaslighting organizacional está afectando a los suicidios laborales.

Aunque los casos de estudio y el mayor número de suicidios tenga una afectación mayor para los hombres y atendiendo

al trabajo doctrinal de Hernández et al., (2014) que centran el gaslighting como un comportamiento de género, deberían de ampliarse las futuras investigaciones en este terreno, tratando de vincular las causas y poniendo de relieve el padecimiento de las mujeres en esta problemática de manipulación organizacional.

La literatura existente sobre el tema del gaslighting es de naturaleza mayoritariamente cualitativa y enfocada hacia las relaciones de pareja. Es necesario avanzar en investigaciones cuantitativas, que presenten mayor muestreo y desde el posicionamiento epistemológico que nos ofrece la estructura y comportamiento organizacional, apoyado en el ejercicio de la ética aplicada.

9. Bibliografía

Abramson, K. (2014). "*Encendiendo las luces del gaslighting*". Perspectivas filosóficas. 28. 1-30.

Adkins, K. (2019). "*Iluminación de gas por multitud*". Filosofía Social Hoy 35. 75-87.

Agamben, G. (2010). *Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida*. Valencia, España. Pretextos.

Barton, R. & Whitehead, J.A. (1969). "*The gas-light phenomenon*". The Lancet 293 (7608). 1258-1260.

Cabero, M. (2023). "*El Gaslighting es violencia invisible*". Recuperado a 15/07/2024 de: https://www.nuvol.com/llibres/assaig/mireia-cabero-el-gaslighting-es-una-violencia-psicologica-invisible-299631

Calef, V. & Weinshel, E.M. (1981). "*Algunas consecuencias clínicas de la introyección: gaslighting*". Psycoanalytic Quartely, L. 45-66.

Carpenter, A. (2018). *Gaslighting America*. New York, USA. Harper Collins.

Catapang, P.M. (2020). "*Gaslighting, primer y segundo orden*". Hypatia 30. 207-227. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:218626254

Delalande, A., Mardon, G. & Prolongeau, H. (2022). "*Cuando el trabajo mata*". Barcelona, España. Garbuix Books.

Foucault, M. (2023). *Vigilar y castigar*. Madrid, España. Siglo XXI.

Foucault, M. (2022). *Microfísica del poder*. Madrid, España. Siglo XXI.

Galán J.S. & Figueroa, M.R. (2017). "*Gaslighting. La invisible violencia psicológica*". UARICHA Revista de Psicología 32 (14). 53-60.

Hernández, C., Magro, V. & Cuéllar, J.P. (2014). "*El maltrato psicológico. Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales. El problema probatorio*". Aequitas. 27-53.

Horkheimer, M. & Adorno, T. (2016). *Dialéctica de la Ilustración*. Madrid, España. Trotta.

Habermas, J. (2018). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid, España. Trotta.

Kukreja, P. & Pandey, J. (2023). "*Workplace gaslighting: Conceptualization, development, and validation of a scale*". Frontiers in Ppsychology. DOI 10.3389/fpsyg. 1-10.

Lesaca, T. (2023). "*Gaslighting and Healthcare*". Recuperado a 20/07/2024 de: https://www.researchgate.net/publication/367296054

Lousada, J.F. (2023). "*El suicidio como accidente de trabajo: ¿qué hay que probar y cómo probarlo?*". Revista de Jurisprudencia Laboral número 4/2023 (BOE: 090-21-213-4).

OIT (2016). "*Estrés en el trabajo. Un reto colectivo*". Recuperado a 10/09/2024 de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf

OIT (2019). "*Convenio sobre la violencia y el acoso*". (190). Recuperado a 10/09/2024 de: https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

OMS (2015). "*La depresión*" (Nota descriptiva N°369). Recuperado a 28/08/2024 de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

People at Work (2022). "*Una visión sobre el equipo humano global*". ADP® Research Institute. Recuperado a 12/07/2024 de: https://es.adp.com/recursos/insights/people-at-work-2022-una-vision-sobre-el-equipo-humano-global.aspx

Petric, D. (2018). "*Gaslighting and the knot theory of mind*".1-3. Recuperado a 27/07/2024 de: https://www.researchgate.net/publication/327944201

Reis, H.A., Stocker, F. & Cuba, R. (2023). "*Gaslighting: El arte de enloquecer a grupos minoritarios en el trabajo*". Revista de Administração de Empresas | FGV EAESP.1-18.

Ruíz, E. (2020). "*Iluminación cultural con gas*". *Hipatia* 35 (4). 687-713.

Tabares, A. (2011). *La punta del Iceberg*. Madrid, España. AECI.

Sacom.hk (2010)."*Workers as Machines:Military Management in Foxconn*". Recuperado a 10/09/2024 de: https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2010/08/military-management-in-Foxconn.pdf

Sánchez, J. (2023). "*Suicidio y trabajo: La insoportable realidad pendiente de una reforma inaplazable*". Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. University Pres 3 (11). 14-40.

Sarkis, S. (2011). "*Warning Signs of Gaslighting*". Psychology Today. Recuperado a 20/07/2024 de: https://www.psychologytoday.com/au/blog/here-there-and-everywhere/201701/11-warning-signs-gaslighting

Spear, A.D. (2020). "*Gaslighting, confabulación e inocencia epistémica*". Topoi 39. 229–241. https://doi.org/10.1007/s11245-018-9611-z

Sweet, P. L. (2019). "*The sociology of gaslighting*". American Sociological Review 84 (5). 851-875.

Referencias legales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Salud y Prevención.

CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 10-00954

CA Versailles, 5e ch., 10 mai 2012, n° 10-05488

Directiva Marco 89/391/CEE sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (2015/2107(INI))

ALGORITMOS, POLÍTICA Y EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI

ALGORITHMS, POLITICS AND THE PROBLEM OF THE TRANSFORMATION OF DEMOCRACY IN THE 21ST CENTURY

Daniel Santibáñez Guerrero
Universidad Miguel de Cervantes, Santiago, Chile
dsantibanez@corp.umc.cl

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: algoritmos, democracia, gobernanza, decisiones, legitimidad
Keywords: algorithms, democracy, governance, decisions, legitimacy

Resumen: El nuevo modelo de gobernanza basado en algoritmos (algocracia), involucra una modificación sustancial de principios y procedimientos de la democracia representativa moderna. Los atributos de rapidez, probidad, trasparencia e imparcialidad esgrimidos por sus partidarios generan, a juicio de sus detractores, una disminución radical del protagonismo ciudadano en los procesos deliberativos de la política, reemplazando la discusión pública de estos asuntos por procedimientos automatizados de análisis estadísticos de datos. Frente a estas posiciones de adhesión y rechazo, el fortalecimiento de la razón pública sustentaría una modalidad de algocracia moderada que, junto con restituir la relevancia de la participación ciudadana, resulta compatible con una democracia concebida fundamentalmente desde una concepción deliberativa de la misma.

Abstract: The new governance model based on algorithms (algocracy) involves a substantial modification of the principles and procedures of modern representative democracy. The attributes of speed, probity, transparency and impartiality put forward by its supporters generate, in the opinion of its detractors, a radical decrease in citizen protagonism in the deliberative processes of politics, replacing the public discussion of these matters with automated procedures of statistical data analysis. . Faced with these positions of adhesion and rejection, the strengthening of public reason would sustain a modality of moderate algocracy that, along with restoring the relevance of

citizen participation, is compatible with a democracy conceived fundamentally from a deliberative conception of it.

1. Introducción

El debate en torno al influjo de la tecnología computacional ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, particularmente respecto de los efectos en la política por parte de la IA, la programación algorítmica y la minería de datos, todas tecnologías de la denominada Cuarta revolución Industrial, Revolución Digital, Segunda Era de las Máquinas o Industria 4.0 (Schwab, 2017: 20-21). Esta discusión, mayoritariamente omitida por los desarrolladores, científicos y emprendedores tecnológicos (Coeckelbergh, 2022), coincide no sólo con el desarrollo vertiginoso de los artefactos computacionales en la era digital, sino también con un momento complejo de profundo cuestionamiento hacia la eficiencia de las instituciones de la democracia. Es en este contexto donde, desde lecturas favorables a la tecnología como el transhumanismo, el solucionismo tecnológico o la democracia aumentada, surgen posiciones que proponen ceder los procesos deliberativos de la política a programas algorítmicos y de IA, ampliando un uso ya presente en diversas instancias de toma de decisiones por parte de la sociedad actual.

En la actualidad, dada la presencia cada vez mayor de sistemas algorítmicos en la política, autores como Aneesh (2008), Danaher (2016) y Crawford (2021) plantean la existencia de una nueva modalidad de gobernanza denominada, de forma general, como algocracia. A diferencia de la noción representativa de democracia moderna, el proceso deliberativo de la algocracia no se sostiene en la discusión ciudadana de los asuntos públicos: se basa en el análisis automatizado de grandes volúmenes de datos que, procesados por los mismos sistemas computacionales, originan conjuntos finitos de alternativas entre las cuales la autoridad política escoge según su propio juicio. Mediante este procedimiento, desde la perspectiva de adherentes como Wu (2003), Gillespie (2014), Hidalgo (2018) o Bostrom (2016), las determinaciones políticas no sólo adquieren la eficiencia y eficacia propia de la tecnología digital, sino también la política y la democracia robustecen su fondo ético al dotar de imparcialidad, trasparencia y representatividad sus decisiones.

La solidez de esta interpretación es rebatida por estudiosos como Danaher (2016), Binns (2018), Morozov (2014) y Sadin (2018), para quienes la automatización de las decisiones políticas constituye un fenómeno complejo en las sociedades del presente, y cuyos efectos se perciben en la valoración de la organización política, sus formas de legitimación y el rol protagónico del ciudadano dentro del sistema democrático. De este modo, frente a las fortalezas que el discurso algócrata esgrime, estos autores destacan la opacidad y el ocultamiento como rasgos propios de los procedimientos decisionales algocráticos, hecho que, junto con su cercanía con el liberalismo capitalista, restaría asidero a la idea de su neutralidad e imparcialidad, como también a la legitimidad de sus determinaciones.

Circunscrito entonces al marco de esta discusión, el presente ensayo tiene por objetivo examinar los fundamentos de la tesis que defiende la posibilidad de robustecer la democracia a través del empleo de sistemas algorítmicos en los procedimientos de toma de decisiones de la política. Para ello, identificando la automatización del proceso deliberativo como un rasgo de la sociedad del siglo XXI, se abordan los argumentos que sustentan la imagen favorable del modelo de gobernanza algorítmica tanto desde la perspectiva de sus partidarios como de sus críticos: esta revisión nos permite bosquejar, como una suerte de tercera vía, la posibilidad de una algocracia moderada sostenida en el fortalecimiento de la razón pública, concebida como un espacio político que restituye la relevancia de la participación ciudadana bajo una concepción deliberativa de la democracia.

2. La sociedad algorítmica y el fenómeno de la automatización de las decisiones

En 1955, la revista de ciencia ficción *If, Worlds of Science Fiction*, publica un breve cuento titulado *Franchise* —traducido al español como *Sufragio universal*— de un parcialmente conocido Isaac Asimov. En su relato se describen las peculiares elecciones presidenciales de un futurista Estados Unidos del año 2008, donde el nombramiento de la máxima autoridad se realiza a partir del análisis de datos efectuado por la super computadora MULTIVAC. Debido al número cuantioso de información almacenada en su sistema, la máquina es capaz de predecir con exactitud al candidato que la mayoría de los ciudadanos habrían escogido mediante votación convencional, entrevistando a un único elector escogido al azar quien sólo debe limitarse a responder algunas preguntas aleatorias (Asimov, 2018: 71). A pesar de lo llamativo, el procedimiento cuenta con la venia de una ciudanía que acata las determinaciones de la computadora con una mezcla de admiración y temor frente a sus capacidades predictivas.

Como el propio Asimov señala, la principal fuente de inspiración de su historia se encuentra en UNIVAC I: el primer ordenador comercial en realizar con éxito una predicción electoral, vaticinando el triunfo de Dwight D. Eisenhower en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1952. Su acierto, en contra de los pronósticos entregados por los analistas y transmitido en vivo por televisión (Moreno, 2023), produce un impacto mediático considerable en el pueblo estadounidense, interpretándose como una clara evidencia de la superación de las capacidades reflexivas humanas. La inquietud generalizada, sin embargo, no impide el fomento de la investigación en informática por parte del mundo gubernamental, militar, académico y privado, impulsando, a partir de ello, opiniones de apoyo creciente por el empleo de tecnología computacional en la gestión del Estado y en los diversos procesos decisionales de la política.

En los últimos años las iniciativas de este tipo se han traducido en intentos concretos por instalar programas computacionales en cargos de elección popular, siendo probablemente el caso más representativo el de Michihito Matsuda: la IA que en 2018 logra presentarse en los comicios por la alcaldía de Tama (en Tokio, Japón), obteniendo el tercer lugar de las preferen-

cias con 4.013 votos (Calvo, 2019: 13). Dada las restricciones de la ley nipona, el programa es física y legalmente representado por Michihito Matsuda: anterior candidato a la misma alcaldía (y de quien la IA toma su nombre), bajo el compromiso público de acatar irrestrictamente sus determinaciones, reconociendo abiertamente la superioridad moral e intelectual de la máquina. Su convicción es que, a diferencia de una autoridad política humana, el algoritmo es insobornable: no cede frente a las presiones de grupos de interés político, económico o ideológico y, por lo mismo, puede tomar decisiones de forma imparcial, rigurosamente apegado a las normas y las leyes, y de manera más eficiente y eficaz (Urban, 2022: 195-196). Estos argumentos son planteados en los intentos fallidos del programa ALISA en las elecciones presidenciales rusas de 2017, SAM en las elecciones presidenciales neozelandesas de 2018 (Petitte, 2020; Wagner, 2020), y más recientemente en Dinamarca por parte de los fundadores de The Synthetic Party: el primer partido político dirigido íntegramente por Líder Lars, un programa de IA al que también se pretende hacer competir en los próximos comicios presidenciales de dicho país (Vicente, 2023: 603-604).

A pesar de que muchas de estas iniciativas son calificadas por sus detractores como montajes publicitarios con fines comerciales, el uso de programas algorítmicos para la toma de decisiones efectivamente corresponde a un fenómeno creciente en la sociedad del siglo XXI, al punto que autores como Sandvig (2015), Danaher (2016), Abiteboul y Dowek (2020) y Coeckelbergh (2022), hablan de una era o cultura algorítmica. En el caso de los usuarios particulares, un ejemplo de esta tendencia se observa en el uso de los software de aplicación móvil que, operables desde prácticamente cualquier aparato con conexión a internet, a través de sistemas de motores de búsqueda consiguen automatizar una amplia gama de decisiones que incluyen: elección de productos de consumo (Mercado libre, Amazon), entretención (Youtube, Netflix, Spotify) o movilización (Uber), generación de lazos profesionales (LinkedIn), de amistad (Facebook, Instagram), amplio acceso a información general (Google, Siri, Chat GPT), e incluso la identificación de posibles intereses amorosos (Tinder). Como explica Finn (2018: 160-161), las ventajas comerciales de esta tecnología se sostienen en la posibilidad de ofrecer alternativas de elección de forma rápida y personalizada, cercanas a las preferencias de los usuarios gracias al análisis del historial de navegación que algoritmos de minería de datos realizan de forma automatizada, logrando identificar patrones de conducta en base al examen de grandes volúmenes de información (Coeckelbergh, 2020: 85).

Operando bajo los mismos procedimientos, el empleo de algoritmos en los procesos decisionales de la política también revela una presencia significativa y cada vez mayor en los Estados del siglo XXI. Si bien el actual debate tiende a concentrarse en el desarrollo de las campañas electorales y la comunicación política, así como en las estrategias de manipulación de la opinión pública (Coeckelbergh, 2020: 180), en el marco específico del problema de la algocracia el foco de reflexión se concentra en el proceso deliberativo gubernamental apoyado en programas computacionales, pudiendo encontrar ejemplos de este tipo de procedimientos tanto en decisiones políticas excepcionales, como en determi-

naciones que los estados toman de manera regular y sostenida en el tiempo.

Un ejemplo del primer caso se percibe en las determinaciones que los gobiernos tomaron para el manejo de la crisis sanitaria mundial producida por el COVID 19 en 2020 y 2021, algunas de las cuales se apoyaron en el análisis de datos originados en las atenciones directas de los pacientes, como también a través de telemedicina, aparatos celulares y pulseras inteligentes. Este procedimiento entregó información que orientó la asignación de las dosis de las vacunas, los respiradores artificiales y los cupos para las atenciones y tratamientos médicos, facilitando el seguimiento de los enfermos y la proyección de los probables espacios territoriales donde el virus se extendería (Coeckelbergh, 2020: 119). Como precedente, durante la pandemia de virus A subtipo H1N1 en 2009 y 2010, las autoridades norteamericanas de salud también recurren a una tecnología similar: el programa predictivo Flu Trends de Google que, gracias a su sistema de algoritmos de búsqueda, logra anticipar el avance de los contagios mediante el examen de la correlación estadística entre la expansión territorial de enfermedades, y el aumento de las consultas realizadas en motores de búsqueda. Este procedimiento permite una anticipación de cerca de dos semanas en comparación con los pronósticos ofrecidos por los antiguos sistemas de recopilación física de datos, haciendo más eficiente la distribución de los recursos destinados por el gobierno para la gestión de la crisis (Mayer-Schonberger y Cukier, 2013: 12-14).

En el caso de las decisiones políticas regulares, el uso de programas algorítmicos para la evaluación de desempeño y la asignación de recursos públicos concitan críticas interesantes que, al igual que en la gestión de las políticas de seguridad interior y exterior, también se relacionan con la extracción y análisis de datos. Al respecto, y desde una posición crítica, O'Neil (2018: 11-20) examina las controversias suscitadas por el sistema de evaluación docente en Estados Unidos donde sistemas de algoritmos examinan los resultados obtenidos por los profesores y sus estudiantes en pruebas estandarizas, determinando, a partir de ellos, medidas como recomendaciones de mejora, incentivos económicos y desvinculaciones. De forma similar, el reclutamiento de estudiantes por parte de las universidades también se apoya en sistemas de minería de datos: empresas consultoras en educación como Noel-Levitz y RightStudent, ofrecen a las instituciones de educación superior paquetes de análisis predictivos que clasifican a los postulantes de acuerdo con su ubicación geográfica, género, origen étnico, ámbito de estudio o posición académica dentro de su promoción, incluyendo también información sobre su capacidad de pago o requisitos que podrían hacerlos merecedor de una beca (O'Neil, 2018: 78-79). Si bien la elaboración de estos perfiles responde a iniciativas privadas, también hay experiencias vinculadas con el sector público: en Chile, desde el 2017, los cupos de ingreso de los estudiantes a las instituciones de educación primaria y secundaria es realizada por el Estado a través de un sistema centralizado (SAE) que recurre a algoritmos, y cuyos criterios formales para la selección son definidos por la Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845 (Desormeaux, 2020).

Respecto de las políticas de seguridad interna y externa, los sistemas públicos y privados que emplean dispositivos de

alarmas, cámaras de seguridad, televigilancia satelital y rastreo por GPS, también recurren programación con algoritmos e IA al momento de coordinar las medidas de prevención y castigo de los delitos, así como para la anticipación de ataques terroristas o atentados a la seguridad pública (Coeckelbergh, 2020: 75). O'Neil (2018: 107-109) nuevamente destaca y examina críticamente una iniciativa norteamericana pionera en este punto: en 2013, el Departamento de Policía de los Ángeles comienza a utilizar el software de predicción de delitos Pred-Pol (desarrollado por la Universidad de California), el cual mediante algoritmos de minería de datos determina los sectores y horarios de mayor riesgo, junto con elaborar perfiles criminales examinando edad, barrio de residencia, nivel socioeconómico y antecedentes delictuales previos. Esta información orienta la distribución de los recursos económicos y humanos, concentrando en ciertos sectores y horarios específicos acciones tales como el reforzamiento de la seguridad con dispositivos adecuados, la realización de patrullajes preventivos, visitas domiciliarias disuasivas y la difusión de la identidad de los delincuentes más peligrosos. Los resultados exitosos de estas medidas impulsan la creación de programas similares, sumándose a Pred-Pol los sistemas CompStat y HunchLab, a pesar del surgimiento de voces críticas que acusan la fuerte presencia de sesgos etnográficos en los algoritmos utilizados (O'Neil, 2018: 127-128).

3. Gobernanza algorítmica y la crisis de la democracia

Los ejemplos recién descritos revelan de forma nítida cómo los algoritmos empleados actualmente en apoyo de la gestión del Estado no tienen la misión de tomar directamente una decisión: al igual que en el ya descrito caso de las aplicaciones móviles manejadas por usuarios particulares, su uso se concentra en la recolección de datos que, una vez procesados por los mismos sistemas, se plasman en el conjunto finito de alternativas dentro de las cuales la autoridad política escoge según su criterio. Por esta razón, si bien no es posible hablar aún de una automatización formal de la política, es a partir del crecimiento e influjo de estos sistemas algorítmicos, de minería de datos e IA en el funcionamiento del Estado contemporáneo que, para autores como Aneesh (2008: 5-12), Danaher (2016: 247-248) y Crawford (2021: 186), es posible hablar de una nueva modalidad de gobernanza: la ya mencionada algocracia.

La primera formulación conceptual de la algocracia corresponde a Aneesh, autor que utiliza dicho término en su estudio de la migración virtual de los trabajadores indios del rubro de la programación, quienes cumplen labores para empresas norteamericanas de software sin abandonar físicamente su propio país. La estructura organizativa de este rubro se sostiene íntegramente en el código de programación que, conectando a trabajadores de todas las partes del mundo, utiliza scripts de gobierno que definen los procedimientos automatizados mediante los cuales se desarrolla el trabajo a distancia. Dada su preponderancia, Aneesh (2008: 12) suma el poder algocrático a la tipología clásica que componen las formas de poder burocrático y panóptico, describiendo dicha algocracia como una forma pura de racionalidad que, sostenida en un conjunto de operaciones algorítmicas programadas con el lenguaje de la lógica simbólica, di-

seña las estructuras de razonamiento que orientan el funcionamiento del sistema productivo (Villarroel, 2023: 202-203).

Danaher profundiza en los aspectos políticos de esta forma algocrática de gobernanza, destacando su influjo gracias a la ya mencionada capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos. Esta capacidad, que para Bostrom (2016) implica la pérdida de la ventaja estratégica del ser humano frente a las demás especies, posibilita el uso descriptivo y predictivo de los algoritmos: es decir, tanto para explicar o comprender racionalmente lo que sucedió en el pasado, como para anticipar un comportamiento o acontecimiento del futuro (Danaher, 2016: 248). En ambos casos, es la tecnología de minería de datos la que facilita el control y moldeamiento de la conducta de las personas, modificando de forma sustancial los principios y procedimientos fundamentales de la democracia representativa al reemplazar la deliberación ciudadana pública de los asuntos políticos, por procedimientos decisionales asentados en el examen estadístico y automatizado de información. Por este motivo, el autor se preocupa por resaltar la actualidad del problema político de la algocracia, pues, más que la futura presencia de una entidad robótica que amenace con someter a la humanidad a un régimen distópico dictatorial, es en el presente donde la utilización de sistemas computacionales en apoyo de la gestión del Estado produce una ruptura con la tradición democrática representativa (Danaher, 2016: 248).

Respecto de la democracia, y a modo de breve encuadre conceptual, Bobbio (2020: 14) caracteriza a la democracia por su contraposición con toda forma de gobierno autocrático, propiciando espacios para la definición pública de las normas fundamentales destinada a regular: a) quién puede tomar las decisiones políticas, y b) bajo qué procedimientos. Dahl (2022: 44) complementa esta descripción destacando como rasgos distintivos la participación efectiva de ciudadanos adultos con una comprensión clara del espacio político del cual forman parte, incidiendo en la dirección de la agenda pública y escogiendo a las autoridades mediante el voto igualitario y libre. Por ello, la fortaleza moral y la legitimidad de la democracia se sostendrían directamente en el consentimiento de los ciudadanos, quienes no sólo escogen a sus representantes en el ejercicio del poder, sino también determinan las necesidades, inquietudes, preocupaciones y focos que las decisiones de las autoridades políticas deben atender (Estrada, Cerón, 2021: 274).

Desde la perspectiva de sus pilares normativos y de sus procedimientos fundamentales, los actuales sistemas democráticos son resultado del trabajo reflexivo de los pensadores de la modernidad (más que de los pensadores clásicos griegos). Esta modalidad representativa de la democracia busca subsanar varios de los problemas inherente en el primer prototipo de democracia directa ateniense, donde el poder político es ejercido por una minoría de varones que privan de derechos políticos a otros estamentos de la sociedad, sin la existencia de un cuerpo de normas coherente ni legítimamente establecido (Touraine, 2000: 35), y legitimando la práctica masiva de la esclavitud que sostienen económicamente a este sistema democrático. Por este motivo, un eminente estudioso del mundo clásico como Fustel de Coulanges (2020: 223) es enfático al descartar que el régimen democrático

de Atenas pudiera incluir algo parecido a una noción de libertad individual.

Frente a este sistema restrictivo y excluyente, la noción de representatividad que el pensamiento moderno aporta a la teoría política busca: primero, ampliar la participación ciudadana mediante la elección de personas que deliberen en nombre de segmentos específicos de la ciudadanía (representando de forma más completa a la pluralidad de visiones y puntos de vista presentes en la sociedad); y segundo, respetar de manera más efectiva los principios de libertad e igualdad que dan cuenta de la dignidad de la condición humana (Bobbio, 2020: 34). Por ello, como sostiene Touraine (2001: 35-36), la democracia no se limita a la existencia de una serie de procedimientos o instituciones, sino más bien consiste en la fuerza social y política que se empeña en transformar el Estado de derecho y orientarlo en la dirección de los intereses de los gobernados.

Junto con la participación, la representatividad, la existencia de normas claras y el apego por principios éticos como la libertad y la igualdad, la existencia de mecanismos formales de rendición de cuentas (accountability) aparece como una condición imprescindible para la legitimación de las determinaciones del poder político democrático (Cortés, 2014: 15-16). Estos procedimientos presentan dos grandes dimensiones (Juárez, Romeu y Pineda, 2016: 97): answerability, u obligación de las autoridades políticas y públicas de informar a los ciudadanos y entregar explicaciones racionales sobre su proceder; y enforcement, o aplicación de sanciones a aquellos funcionarios y servidores que no cumplan con las obligaciones consignadas en la ley. Siendo así, la accountability reúne la dimensión práctica de la democracia (vinculada con la implementación de ciertos procedimientos), con su contenido sustancial normativo definido por la búsqueda del bien común y el respeto de la libertad individual: ello explicaría, por lo menos en parte, la aceptación que la democracia recibe frente a los demás regímenes políticos, percibiéndose como un orden que ayuda a evitar el surgimiento de gobiernos autócratas y tiránicos, además de resguardar derechos fundamentales, permitir el ejercicio de la libertad individual y la responsabilidad moral, fomentar la igualdad, la prosperidad y minimizar los conflictos bélicos con las demás naciones democráticas (Dahl, 2021: 54-70).

El beneplácito general que disfruta la democracia corresponde a un fenómeno reciente: entre los filósofos y pensadores clásicos griegos del siglo V y IV a. C., la democracia fue objeto de una dura crítica por su caracterización con una régimen demagógico, violento y destemplado, mientras que para la mayor parte de los teóricos modernos de los siglos XVII y XVIII la forma óptima de organización política se identificó con la república, entendida bajo la concepción roussoniana como el gobierno de la ley (Rousseau, 2022: 68). Esta lectura se mantiene entre los círculos filosóficos e intelectuales hasta mediados del siglo XX (Dahl, 2022: 53-54), momento en que el contraste con el totalitarismo incide en la consolidación de la imagen de superioridad ética de la democracia (Sartori, 2007: 27).

Obtenida su hegemonía en el escenario político internacional (por lo menos entre la naciones occidentales), la actual crisis de la democracia involucra diversas aristas relacionadas con los principios que la sustentan, como con la efectividad del funcionamiento de sus instituciones.

Siendo numerosas las explicaciones sobre las causas de este declive, Bobbio tiende a concentrarlas en torno a la diferencia y tensión existente entre los principios normativos de la democracia y su funcionamiento empírico, hecho que permite reprocharle la formulación de seis falsas promesas: el nacimiento de una sociedad pluralista; la reivindicación de los intereses colectivos mediante la formula de la representación; la derrota del poder oligárquico; la conquista de los espacios políticos; la eliminación del poder invisible (económico, religioso, delictual); y la formación de ciudadanos comprometidos con los asuntos públicos (Bobbio, 2020: 16-26). El incumplimiento del proyecto de sociedad subyacente en estas promesas incide en una percepción de ineficiencia de los procedimientos democráticos e insuficiencia de sus pilares normativos, lectura con la que Sahd, Zovatto y Rojas (2024) coinciden al explicar el debilitamiento de las democracias contemporáneas a partir de: a) la persistencia de reclamos no resueltos por décadas, emparentados con la escasa representatividad, una gobernabilidad frágil y la radicalización de las protestas sociales; b) el surgimiento de amenazas recientes ligadas al auge del crimen organizado, la inestabilidad política y el deterioro del clima para los negocios (especialmente en América latina), y cuya solución por la vía de la burocracia democrática parece excesivamente lenta.

Es este escenario donde, en paralelo con la polarización política, la manifestación de movimientos sociales masivos, la irrupción de discursos populistas y el auge de gobiernos autoritarios (todos fenómenos vinculados en algún nivel con la actual crisis de la democracia), surgen propuestas que defienden la posibilidad de robustecer el sistema democrático a través del uso de tecnología computacional. Dentro de las iniciativas que se adhieren a estos argumentos, la noción de un gobierno algocrático se concibe como una opción capaz de entregar eficiencia, eficacia y rapidez a los procesos de toma de decisiones de la política, de forma paralela a un aumento de la probidad, trasparencia y representatividad de sus determinaciones. De este modo, así como la democracia representativa se erige como una instancia de mejora respecto de la democracia directa, a juicio de sus partidarios la algocracia haría lo propio con la democracia representativa al subsanar los problemas centrales que hoy exhibe.

4. La tesis del fortalecimiento tecnológico de la democracia

Los enfoques partidarios de la algocracia aglutinan una serie de corrientes de pensamiento que comparten una lectura favorable de la tecnología que, a su vez, se sustenta en una concepción instrumental de la misma: esto es, la identificación de los artefactos tecnológicos con objetos materiales, factibles de ser controlados a voluntad por el ser humano y neutrales desde el punto de vista político y normativo (Santibáñez, 2022: 153). Desde esta interpretación, como explica Winner (1978: 28) en un estudio clásico del concepto, la ausencia de un trasfondo político en la tecnología se explica porque, al tratarse de un objeto manipulado por el ser humano, las consecuencias de su empleo se originan en la decisión de los individuos que lo utilizan: de ahí su imparcialidad política y ética que, en el contexto de la propuesta algócrata, lo convierte en un instrumento valioso para la gestión

política al operar desde la coherencia, imparcialidad y objetividad propias del conocimiento científico-técnico.

A pesar de su coincidencia en este punto, los autores afines con la algocracia no conforman un grupo de pensamiento homogéneo, pues, entre sus respectivos puntos de vista es posible identificar matices con diversos grados de diferencia. En orden cronológico, la primera corriente que ofrece argumentos en apoyo de una administración política sostenida en tecnología computacional es el solucionismo tecnológico, cuyo principal representante es Tim Wu. El autor destaca las fortalezas éticas de la web interpretándola como un nuevo espacio público que respeta la libertad individual, facilitando el acceso, distribución e intercambio de información y, con ello, democratizando el desarrollo del conocimiento (Wu, 2013). La posibilidad de expresar libremente los más variados puntos de vista, en el mismo sentido, entrega a los ciudadanos la posibilidad de monitorear el desempeño de sus gobernantes y exigir explicaciones a través de las redes sociales, incidiendo en la agenda publica con un grado de autonomía mayor al de la democracia actual. Adicionalmente, esta suerte de ágora digital también respeta el desarrollo de la libertad individual al facilitar el impulso de la creación, la innovación científica, el emprendimiento, la libre competencia y la realización de proyectos de vida en base a los talentos de cada individuo, todos rasgos de una sociedad que cumple con las características centrales del estándar liberal de la democracia (Morozov, 2014).

En relación al uso específico de algoritmos, Tarleton Gillespie identifica seis acciones de valor político que éstos aportan para el fortalecimiento de la democracia: primero, patrones de inclusión y selección de datos que, orientados a la búsqueda de las alternativas de acción más convenientes, hacen de la gestión política una actividad más eficiente; segundo, ciclos de anticipación precisos, basados en la posibilidad de examinar rápidamente un conjunto ingente de datos; tercero, evaluación de la relevancia, fijada según criterios que clasifican los datos y las herramientas disponibles en función del cumplimiento de los objetivos trazados; cuarto, promesa de objetividad asentada en la racionalidad lógica e imparcial del análisis estadístico; quinto, sentido de la realidad, sustentado en información actual, verídica y proveniente de diversas fuentes; y sexto, producción a partir de un cálculo con sentido público, es decir, con el propósito de lograr el máximo beneficio posible para todas y todos los ciudadanos (Gillespie, 2014: 168). La caracterización subyacente de la algocracia en torno a estos atributos permite identificar no sólo la eficiencia, eficacia y rapidez como atributos propios de la programación algorítmica, sino además la incorporación de esas fortalezas como nuevos principios para la política (similares en importancia a la libertad, igualdad, representatividad o rendición de cuentas).

Una propuesta altamente innovadora que vincula los beneficios de la web con algoritmos de minería de datos e IA es la democracia aumentada: suerte de mixtura entre la democracia directa clásica y democracia representativa moderna. Coincidiendo con las concepciones de democracia 4.0 o gobernanza líquida que empiezan a surgir en los últimos 15 años (Sierra, 2021), César Hidalgo (el impulsor de esta corriente) afirma que la implementación de un programa de data mining operado con IA, permitiría ampliar

la representatividad de la democracia a través del examen de las preferencias de los ciudadanos alojadas en gemelos digitales: una suerte avatar cargado en la web con información sobre las inclinaciones políticas, económicas, valóricas o del tipo que se definan como relevantes para la promulgación de leyes, la fijación de presupuestos, la realización de juicios o la elección de autoridades. Con este sistema no sería necesario convocar periódicamente a elecciones para que la ciudadanía exprese su voluntad, sino bastaría con que cada persona se preocupe de mantener su respectivo gemelo digital con información actualizada para que, cuando se requiera, el programa identifique las opiniones mayoritarias y fije líneas de acción acordes con ellas (Hidalgo, 2018). Por medio de esta vía, para Hidalgo sería factible subsanar un importante defecto implícito de los actuales sistemas democráticos, los cuales, junto con los problemas de representatividad, al circunscribir la participación política a la emisión del sufragio contribuye a la desafección y desapego del votante (quien únicamente se involucra en los procesos democráticos cuando corresponde realizar la elección).

Desde el transhumanismo, Nick Bostrom ofrece un apoyo más cauto a la algocracia, identificando fortalezas que bien encausadas superarían las amenazas inherentes de este orden político. Su aproximación contempla los riesgos y oportunidades de un gobierno dirigido por una superinteligencia artificial, la cual, por las características de la propia tecnología, probablemente surja de manera explosiva y bajo la forma de un gobierno centralizado (Bostrom, 2016: 116). El peligro de este nuevo régimen (denominado por el autor como Unidad) se relaciona con la superación y reemplazo de las capacidades reflexivas humanas, hecho que, no obstante, también explica las principales ventajas presentes en esta modalidad de gobierno: primero, Unidad podría lograr acuerdos y conciliar puntos de vista con mayor facilidad que un Estado convencional administrado por seres humanos, donde la presencia de sesgos, intereses particulares e inclinaciones políticas dificulta la generación de pactos sólidos; segundo, sus decisiones se sostendrían en el análisis eminentemente racional y lógico que permite el examen de datos a través programas computacionales, logrando resultados rápidos y certeros que el ser humano; y tercero, su capacidad de auto mejoramiento facilitaría la corrección y desarrollo los conocimientos necesarios para responder a amenazas de diversa índole, incluyendo aquellas generadas por otras tecnologías, crisis económicas, cambio climático, desarrollo de enfermedades de alcance mundial, etc. (Bostrom, 2016: 231-232).

Frente a estas oportunidades, Bostrom considera fundamental la definición de condiciones necesarias para una adecuada conducción del desarrollo tecnológico, asignando un rol preponderante a la colaboración entre las naciones, las cuales deben consensuar marcos jurídicos regulatorios y principios éticos ampliamente compartidos (Bostrom, 2016: 255-259). Su lectura, entonces, también contempla la eficiencia y eficacia como valores políticos que las nuevas formas de gobierno computacional traen consigo, sumándose a la imagen de imparcialidad política inherente de los artefactos tecnológicos y al carácter objetivo y estrictamente lógico de sus dictámenes. Desde este punto de vista, la democracia puede fortalecerse mediante procedimientos algocráticos que amplían la representatividad de sus jui-

cios, trasparentan sus procesos de toma de decisiones y, como consecuencia, recuperan la confianza de la ciudadanía en la política gracias al carácter incorruptible, insobornable y libre de sesgos que ofrece una gobernanza algorítmica.

5. El problema de la algocracia: los costos de la digitalización de la democracia

La crítica a la tesis del fortalecimiento algorítmico de la democracia que sus detractores formulan, también se presenta de manera no uniforme y con niveles distintos de radicalidad en sus cuestionamientos. Algunos enfoques, como los de Danaher o Binns, se abren a la posibilidad de fijar condiciones de legitimación para los procesos algocráticos, mientras otros como Sadin y Morozov recalcan las razones para su rechazo irrestricto. Ambas perspectivas, no obstante, coinciden en que la gobernanza algorítmica involucra una modificación importante de rasgos fundamentales de la democracia, haciendo notoria la existencia de una tensión político-normativa entre la algocracia y las teorías procedimentales participativas y deliberativas de la democracia (Villarroel, 2023: 226).

Al respecto, un primer problema que abordan estos autores se relaciona con la participación ciudadana, especialmente en lo referido al protagonismo y la incidencia del individuo en las decisiones políticas. Danaher (2016: 248) circunscribe esta cuestión bajo el problema de la interpretabilidad de la información, el cual, aparece a raíz de la diferencia presente entre información factible de ser examinada por el ser humano y aquella que supera su capacidad de análisis. Este último caso es el que impone la necesidad de utilizar programas computacionales para el examen de datos, labor que, como hemos señalado, por el grado de desarrollo que la tecnología computacional ostenta en la actualidad, los sistema algorítmicos pueden realizar con una eficiencia, velocidad y autonomía cada vez mayor.

Frente a estas ventajas prácticas que el procesamiento automatizado de datos ofrece, en el caso de las determinaciones políticas el problema surge a partir del rol secundario que el ser humano desempeña dentro del procedimiento decisional algocrático, espacio donde básicamente se limita a: primero, cargar la información que se requiere sea examinada por el programa y, segundo, escoger entre el número fijo de alternativas que dicho programa elabora a partir de los datos ingresados. Esta acotada intervención, sin embargo, puede disminuir aún más con la incorporación de algoritmos de aprendizaje programados para que asimilen los criterios de búsqueda y selección de información, no requiriendo entonces que una persona sea la encargada de incorporar los datos de entrada en el sistema (Binns, 2018: 545-546). Así, los arquetipos algocráticos de ciudadano, funcionario público y autoridad política, adquieren como rasgo común el desempeño de un papel eminentemente pasivo: dependen por completo del procesamiento de información que realiza el algoritmo para tomar una decisión, de la cual tampoco participan en su elaboración al no conocer ni examinar la totalidad de los datos involucrados en su diseño.

En continuidad con este punto, el hecho de que la devaluación de la capacidad ra-

cional humana frente al análisis algorítmico de información obedezca a razones de conveniencia práctica, refleja la preponderancia que la algocracia le atribuye a la eficiencia, eficacia y rapidez como nuevos valores normativos de la política. Más que el cuidado de principios como la participación ciudadana activa, sería la obtención de resultados con el menor costo y tiempo posible el criterio que prevalece al momento de evaluar su pertinencia, sustentando sus adhesiones bajo un somero cálculo costo-beneficio y no en el respeto de principios vinculados al bien común (Villarroel, 2023: 209). Esta inclinación pragmática (en el sentido general de la palabra), es la que lleva a Morozov (2014) y Sadin (2018) a remarcar la estrecha cercanía de la algocracia con la lógica económica del liberalismo capitalista, descartando entonces la idea de imparcialidad política de los algoritmos.

Al respecto, en opinión de Pedraza y Martínez (2022: 92), los datos que examinan los sistemas algorítmicos constituyen la materia prima fundamental en la reconfiguración neoliberal del mercado actual, siendo los programas computacionales su medio de producción. El uso de algoritmos en el mundo privado, así como en varios ámbitos de apoyo a la gestión del Estado, se concentra mayoritariamente en actividades de tipo comercial relacionadas, por ejemplo, con la compra de productos, el pago de cuentas, el costeo de servicios, el incremento de recursos o la búsqueda de entretenimiento. Estas acciones, a juicio de la crítica radical de Sadin (2018: 136), se revelan como las características propias de una sociedad de consumo, la cual, al fusionarse con un sistema de gobernanza algorítmica dan forma a un orden político que él denomina tecnolibertarismo: un régimen dirigido por una autoridad robotizada invisible, cuyas redes tecnológicas y comerciales le permiten un alcance global, y que emite sus dictámenes sin el consentimiento directo ni el conocimiento cabal de sus gobernados, los cuales sería identificables con la figura de usuarios-consumidores pasivos.

Por este motivo, junto con la tesis de la imparcialidad, el argumento sobre la alta representatividad de la algocracia encuentra como obstáculo la existencia subyacente de intereses y objetivos particulares en el uso de estas herramientas. En este sentido, García y Valle (2019: 24) son certeros al destacar que los algoritmos finalmente siguen las instrucciones de sus creadores humanos, no pudiendo considerarse como instrumentos objetivos, neutros y completamente libres de los propósitos específicos de las personas, grupos y consorcios económicos detrás de su implementación (Bodei, 2019: 276). En este punto, Crawford (2021: 8) recalca que la IA es un registro de poder: una herramienta diseñada para servir a los intereses de grupos que desea influir sobre otros grupos. Por ello, la presencia de sesgos no sólo se podría entender como un elemento constitutivo central del procedimiento de deliberación algorítmica: dicha presencia corresponde, en definitiva, a una de sus características más definitorias (Binns, 2018: 546).

Al respecto, Binns (2018: 546) identifica dos vías a través de las cuales sesgos de diverso tipo pueden incorporarse en un sistema algorítmico y condicionar su juicio: primero, en el momento del ingreso de datos, donde la información seleccionada por parte del programador puede responder a los intereses de los diseñadores o los patrocinadores del programa; y segundo, mediante los ya mencionados

sistemas basados en aprendizaje automático, los cuales pueden asimilar criterios marginadores vinculados con la raza, género, edad, nacionalidad, identidad sexual, ingreso económico u otros (Cantarini, 2023: 122-124), tal como ocurre (de acuerdo a sus detractores) con el uso de programas predictivos de delitos o de reclutamiento de estudiantes para la universidades en Estados Unidos. La existencia de sesgos en la deliberación algocrática, así, debilita la objetividad de sus juicios fortaleciendo, en cambio, la posibilidad de que sus determinaciones no tengan como prioridad la representación de las preferencias de los gobernados, sino la de los sectores que impulsan su implementación (Villarroel, 2023: 203).

Finalmente, en relación con los intereses ocultos de los promotores del procesos deliberativo algocrático, junto con la inmaterialidad de sus autoridades, la oscuridad, ocultamiento y opacidad del funcionamiento de la algocracia emergen como características que dificultan aún más su identificación como un orden político acorde con valores democráticos como la trasparencia y la rendición de cuentas. El concepto que la literatura crítica suele emplear en este punto es el de black box: metáfora que alude a la falta de claridad con la que se percibe el funcionamiento de los artefactos y redes tecnológicas por parte de los usuarios y la ciudadanía en general, dificultando la identificación de sus efectos y eventuales perjuicios (Gutiérrez, 2022: 41). El concepto como tal es estudiado por Frank Pasquale, quien lo emplea para referirse a tecnologías percibidas como oscuras, pues, en las ramificaciones que conforman su estructura es posible percibir el momento de entrada (input) y salida (output), pero no el funcionamiento propiamente tal (Pasquale, 2015: 3). Este ocultamiento no corresponde a una característica accidental ya que se asocia a una estrategia deliberada que, instituciones públicas y privadas, realizan para mantener la seguridad y protección de sus operaciones. Entre ellas, Pasquale (2015: 6-7) identifica tres acciones como las más recurrentes: real secrecy, donde se establece una barrera entre el contenido oculto y el acceso a través de contraseñas o procedimientos de ingreso; legal secrecy, que consiste en la protección de la información mediante contratos de confidencialidad; y obfuscation, que corresponde acciones intencionales de ocultamiento de información emparentadas con la implementación de secuencias de pasos extensas, acceso a dominios informáticos erróneos o indicaciones falsas de ingreso.

En el marco de la algocracia, un punto de reflexión que el concepto de la black box abre es el límite estrecho que existe entre un ocultamiento de información para fines de protección de las instituciones, de aquel ocultamiento originado con la intención de manipular a la población. Pasquale (2015: 8) ubica en el centro de la cuestión la inteligibilidad de los procedimientos decisionales algorítmicos, identificando la exigencia de trasparencia de estos procesos como un primer paso para la apertura de las black box. Danaher (2016: 249), en cambio, concibe el fenómeno como mucho más complejo, vinculado a la fase de la recolección de datos donde las dos principales fuentes de extracción revelan problemas éticos y políticos. Estas fuentes son: a) las publicaciones que los usuarios realizan en redes sociales, aplicaciones móviles, páginas web, motores de búsqueda y sistemas de almacenamiento y comunicación digital; y b) la interacción voluntaria e involuntaria

que los individuos realizan con artefactos que almacenan información audiovisual, tales como cámaras de seguridad vial, cajeros automáticos, drones, videojuegos, celulares, Smart TV, sistemas de tecnología satelital, etc.

Junto al fuerte conflicto ético relacionado con la violación de la privacidad individual y la comercialización de información obtenidos sin consentimiento (Coeckelbergh, 2020: 97-98), en la segunda fuente de datos su origen resulta difícil de indagar al desconocer los criterios de búsqueda de la extracción de datos y su justificación, quedando ocultos al escrutinio público y originando lo que Danaher (2016: 249) denomina cuestión del ocultamiento (Hiddenness concern). Este problema, sin embargo, emerge de forma paralela al aspecto intrincado con el cual la tecnología se presenta a los usuarios que no disponen de los conocimientos técnicos ni profesionales sobre su funcionamiento: no se trataría entonces de la oscuridad con la que la tecnología es percibida (black box), sino de la imagen opaca con la que dicha tecnología opta por presentarse a las personas.

Esta segunda dificultad, que también compromete la trasparencia de los procedimientos algocráticos, es la que Danaher (2016: 249) define como la cuestión de la opacidad (Opacity concern). Su origen se vincula con la base intelectual y racional de los programas computacionales, los cuales, como hemos destacado, operan de formas difíciles de comprender por parte del ciudadano sin formación especializada (Villarroel, 2023: 204). Esta oscuridad epistemológica subyacente a la tecnología es la descrita por Morozov (2014) mediante la metáfora de un alambre de púas invisible: una red intrincada que, a pesar de no ser divisada empíricamente, restringe la libertad individual de los ciudadanos al limitar su acceso al conocimiento de los datos que originan las decisiones de la política, fomentando así una aceptación acrítica de sus dictámenes bajo la aparente percepción de beneficios convenientes desde una lógica de consumo.

Tanto el problema del ocultamiento como el problema de la opacidad, en palabras de Villarroel (2023: 204-203), se encuentran estrechamente ligados a la cuestión de la legitimidad de las determinaciones algocráticas. Su aspecto poco nítido, así como su tendencia a esconder su funcionamiento, comprometen la participación, la representatividad y la trasparencia que los partidarios de este régimen le atribuyen como fortalezas. Dichas fortalezas, por otra parte, parecen suficientes para justificar la modificación de procedimientos básicos de la democracia contemplados en el sistema representativo, y que afectan el protagonismo ciudadano y la generación de espacios para la discusión pública de los temas de interés colectivo, así como principios normativos básicos como libertad, la igualdad y la rendición de cuentas.

6. Conclusiones

El problema de la algocracia, en tanto modificación de los valores y las formas del ejercicio de la democracia por parte de los ciudadanos, involucra también una transformación de la imagen que el ser humano tiene de sí y de su rol dentro de la organización política. Los efectos de la automatización del proceso deliberativo (fenómeno ampliamente presente en la sociedad del siglo XXI), ya resultan obser-

vables en los actuales empleos de algoritmos, minería de datos e IA en la gestión de Estado, incidiendo de forma determinante en la asignación de recursos, el diseño de políticas públicas, la evaluación de desempeño, la gestión de emergencias, las estrategias de seguridad y el desarrollo de la comunicación política. En estos ejemplos anteriormente examinados, se percibe el mismo procedimiento decisional: sistemas computacionales recaban y examinan datos para, posteriormente, ofrecer opciones a las autoridades que eligen una de esas alternativas sin haber participado del proceso de análisis de la información que la originó. La automatización del procedimiento deliberativo (basada en una extracción de datos que, en muchos casos, trasgrede la privacidad de las personas), impone entonces una actitud pasiva por parte del ciudadano y las autoridades, quienes acatan las determinaciones algocráticas persuadidos por las ventajas prácticas que ésta trae consigo (vinculadas con la eficiencia, eficacia y rapidez de su funcionamiento), y con la imagen de sustento ético de sus determinaciones (a parir de los rasgos de probidad, neutralidad y trasparencia que se le atribuyen). Desde esta perspectiva el aporte a la democracia parece claro, contribuyendo tanto a la ampliación de la representatividad como al fomento de la participación y la rendición de cuentas, pasando por alto (como resaltan los críticos) la cercanía de la algocracia con el liberalismo capitalista, la presencia de sesgos en la programación algorítmica y la oscuridad y opacidad inherente a su funcionamiento.

En este escenario, tanto las posiciones de aceptación entusiasta como de rechazo enérgico enfrentan dificultades importantes: el actual avance de la tecnología computacional, como certeramente se infiere del punto de vista de Bostrom (2016), hace improbable que acciones de resistencia y sabotaje como las defendidas por Morozov (2014) y Sadin (2018) puedan tener éxito; mientras que la distancia entre la gobernanza algocrática con los valores y procedimientos fundamentales de la democracia tampoco permitiría aceptar la optimista visión de Wu (2003), Gillespie (2014) e Hidalgo (2018). Sin embargo, en el actual punto de desarrollo de esta discusión, la posibilidad de una tercera vía entre ambas posiciones parece factible en la identificación de las condiciones de aceptabilidad de la algocracia, aludida y bosquejada (con sus respectivas diferencias) por Danaher, (2016: 252), Binns (2018: 550) y Bostrom (2016: 259), y que autores como Sierra (2021: 40), Gutiérrez (2021: 21) y Cantarini (2023: 125) vinculan con principios de comprensibilidad, inteligibilidad, accesibilidad, transparencia y claridad. La fijación de estos criterios de aceptabilidad plantea la necesidad de una ética de la IA que oriente de forma clara y robusta el desarrollo de las tecnologías en la era de digitalización, así como un fortalecimiento de la razón pública mediante la generación de espacios de evaluación de las decisiones políticas que sean participativos, democráticos y deliberativos (Villarroel, 2023: 209).

Dentro de las iniciativas para la regulación normativa de la IA, Floridi (2023: 59) destaca los Principios de Asilomar (2017), la Declaración de Montreal para un Desarrollo Responsable de la IA (2017), la Declaración sobre Inteligencia Artificial, Robótica y Sistemas Autónomos del Grupo Europeo de Ética en la Ciencia y Nuevas Tecnologías (2018), y los Cinco Principios Generales para un Código de IA propuestos por el Comité de Inteligencia Artificial

de la Cámara de los Lores (2018), entre otros. Los principios contemplados en estos documentos, que incluyen el respeto por los derechos humanos, la privacidad de los datos personales, el fomento a la trasparencia, la existencia de procedimientos de rendición de cuentas efectivos, el cuidado de la sostenibilidad y la prohibición de usos perjudiciales para la humanidad, finalmente son incluidos en la reciente Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea aprobada en 2024: primera normativa legal sobre esta materia en el mundo. Esta ley intenta conciliar desarrollo e investigación tecnológica con el cuidado por derechos y principios éticos fundamentales: coincide en este punto con la posición de Coeckelbergh (2020: 7-8), para quien la ética de la IA guarda relación el cambio tecnológico y su impacto en las vidas individuales humanas, pero también con la transformación de la sociedad en sus ámbitos político y económico.

Un marco conceptual adecuado para el examen ético de la algocracia puede sustentarse en los principios bioéticos fijados por Beauchamp y Childress a finales de la década de 1970 (autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia), tal como sugiere Floridi. El mismo autor, sin embargo, propone la incorporación de un quinto principio que él denomina como explicabilidad (Floridi, 2023: 60): éste reúne el sentido epistemológico de la inteligibilidad (ligado con la eliminación de la opacidad y el ocultamiento), con el sentido ético de la responsabilidad (referido a los compromisos que las personas responsables de elaborar y utilizar la tecnología digital deben adquirir con la sociedad). Este principio de explicabilidad complementa los demás principios bioéticos al sustentar el conocimiento que se requiere para una identificación clara de la beneficencia o no maleficencia de la tecnología computacional, así como fortalecer el respeto por una verdadera autonomía humana y la asignación justa de sanciones a los responsables (éticos o legales) del uso de la IA (Floridi, 2023: 60-63).

En complemento con los marcos para la discusión ética, el espacio político donde desarrollar este examen cobra relevancia especialmente en relación con el rol de la razón pública. Para Binns su fortalecimiento dentro del orden político algocrático y no algocrático resulta indispensable, pues, constituye la instancia legítima para el examen de las determinaciones de un procedimiento deliberativo basado en programas computacionales. En coincidencia con autores modernos como Rousseau y Kant, y contemporáneos como Rawls y Habermas, Binns se adhiere a una noción de razón pública donde a pesar de las diferencias y desacuerdos presentes en la sociedad, las leyes e instituciones políticas deben ser justificables para todas las personas razonables en referencia a algún punto de vista común (Binns, 2018: 549). El espacio para esta discusión pública razonable desarrollada por la ciudadanía, en sintonía con la concepción habermasiana de democracia deliberativa, se encuentra fuera de la institucionalidad formal del Estado y del sistema económico: es espacio público autónomo donde habita la pluralidad de visiones presentes de la sociedad, y cuyo ejercicio de la democracia se realiza mediante el diálogo racional que se institucionaliza en el derecho (Habermas, 2023: 375-376). Por este motivo, esta razón pública dialógica constituye el espacio frente al que los involucrados en el proceso de toma de decisiones de la algocracia (programadores, científicos, autoridades políticas), deben rendir cuentas de acuer-

do con criterios epistémicos y estándares normativos aceptables para todas las personas razonables, orientando las leyes que ejercen un contrapeso legítimo a las determinaciones algocráticas y, según sea el caso, puedan restringirlas, modificarlas o suprimirlas (Binns, 2018: 550).

La opción por una algocracia moderada, de esta manera, aparece como una posible tercera vía que al resultar compatible con: a) la definición de criterios de aceptabilidad exigidos por Danaher, Binns y Bostrom (y que, como principios normativos, pueden ser delimitados de acuerdo con el principio de explicabilidad de Floridi); y b) la presencia de una razón pública que, de acuerdo a Binns, evalué las determinaciones de la algocracia bajo la forma de una democracia cercana a modelos deliberativos (por ejemplo del tipo habermasiano). Esta modalidad de algocracia, si bien no subsana la totalidad de los problemas presentes en ésta, ofrece alternativas interesantes a partir de la relevancia que asigna a la participación ciudadana: participación que, en la teoría, permite minimizar la tensión entre la algocracia no moderada con algunos de los principios normativos fundamentales de la democracia (como la libertad, la igualdad, la participación y la rendición de cuentas). Desde esta lectura, lo político también implica una acción constante y abierta: una instancia de evaluación racional permanente por parte de la ciudadanía sobre las determinaciones de sus autoridades y que, como espacio, contrasta con la forma cerrada con la que operan los sistemas computacionales, rasgo origina el problema de la interpretabilidad de la información, la cuestión de la opacidad, el ocultamiento, el debilitamiento general del peso efectivo de la participación política y otras de sus dificultades centrales.

7. Bibliografía

Abiteboul, S., Dowen, G. (2020). *The age of algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press.

Aneesh, A. (2006). *Virtual migration. The Programming of Globalization*. Dirham: Duke University Press.

Asimov, I. (2018). *Cuentos completos* I. Barcelona: Penguin Random House.

Binns, R. (2018). "Algorithmic Accountability and Public Reason". *Philosophy & Technology*, 31, pp. 543–556. https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-017-0263-5

Bobbio, N. (2020). *El futuro de la democracia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Bodei, R. (2019). "Capitalismo algoritmo y democracia. Máquinas, inteligencia artificial y trabajo". En (coord) Villar, S., y de Guadalupe, M. *Poder, democracia y derechos. Una discusión con Michelangelo Bovero*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM: 275-289.

Bostrom, N. (2016). *Superinteligencia. Caminos, peligros, estrategias*. Zaragoza: TEELL Editorial.

Cantarini, P. (2023). "Gobernanza algorítmica explicación por medio del diseño y justicia del diseño". *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 57: 121-141.

Calvo, P. (2019). "Democracia algorítmica: consideraciones éticas sobre la datificación de la esfera pública", *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 74, 5-30.

Coeckelbergh, M. (2020). *AI Ethics*. Massachusetts: MIT Press.

Coeckelbergh, M. (2022). *The Political Philosophy of AI: An Introduction*. Cambridge: Polity Press.

Cortés, A. (2014). "El concepto de accountability: una mirada desde la Ciencia Política". *Cuadernos de Ciencias Políticas*, 6: 15-25.

Coulanges, F. (2020). *La ciudad antigua*. Ciudad de México: Porrúa.

Crawford, K. (2021). *Atlas of AI Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. New Haven: Yale University Press.

Dahl, R. (2022). *La democracia*. Barcelona: Ariel.

Danaher, J. (2016). "The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation", *Philosophy and Technology*, 29 (3), pp. 245-268. https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-015-0211-1

Desormeaux, P. (2020). La polémica tras el algoritmo que busca mejorar la equidad en el acceso a la educación en Chile. Chequeado: https://chequeado.com/investigaciones/la-polemica-tras-el-algoritmo-que-busca-mejorar-la-equidad-en-el-acceso-a-la-educacion-en-chile/

Estrada, A., Cerón, W. (2021). "Un acercamiento al concepto de democracia desde los presupuestos sociales, políticos y filosóficos". Analecta Política, 11 (21): 272-298.

Finn, E. (2018). *Imaginación en la era de la informática*. Barcelona: Alpha Decay.

Floridi, L. (2023). *The Ethics of Artificial Intelligence Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press.

García, D., Valle, D. (2019). "Los impactos de la ideología técnica y la cultura algorítmica en la sociedad: una aproximación crítica". *Revista de Estudios Sociales*, 71: 15-27.

Gillespie, T. (2014). "The Relevance of Algorithms". En Gillespie, T. et. al (ed), *Media Technologies*. Cambridge, MIT Press, 167-193.

Gutiérrez, M. E. (2021). "Administraciones inteligentes y acceso al código fuente y los algoritmos públicos. Conjurando riesgos de cajas negras decisionales". *Revista Derecom*, 31: 19-105,

Habermas, J. (2023). *Facticidad y validez*. Madrid: Trotta.

Hidalgo, C. (2018). *Augmented Democracy*. https://www.peopledemocracy.com/

Juárez, G., Romeu, J., Pineda, C. (2016). "La accountability pública: un concepto abierto". *Praxis Sociológica*, 21: 95-119.

Magnani, E. (2017). "Big data y política. El poder de los algoritmos". Nueva Sociedad 269: 45-55.

Mayer-Schönbergger, V., Cukier, K. (2015). *Big data. La revolución de los datos masivos*. Madrid: Turner.

Moreno, A. (2023). "Datos, algoritmos y política en los procesos electorales". *Revista PPV*. https://revistappv.com.ar/datos-algoritmos-y-politica-en-los-procesos-electorales/

Morozov, E. (2014). "The Real Privacy Problem". *MIT Technology Review*. https://www.technologyreview.com/2013/10/22/112778/the-real-privacy-problem/#:~:text=As%20Web%20companies%20and%20government,because%20democracy%20is%20at%20risk.

O'Neil, C. (2018). *Armas de destrucción matemática*. Madrid: Capitán Swing.

Pascale, F. (2015). T*he black box society: the secret algorithms that control money and information*. Cambridge: Harvard University Press.

Pedraza, E., Martínez, P. (2022). "Algoritmos y democracia: impacto, peligro y propuestas regulatorias". *Revista Pensamiento Jurídico*, 56: 91-113.

Petitte, H. (2020). "Could Russia's president one day be a ROBOT? Alisa AI software that claims 'enemies of the people will be shot' wins the backing of 40,000 to stand against Vladimir Putin", *Mail Online*. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5166847/Russian-AI-Alisa-wins-backing-40-000-election-run-up.html

Rousseau, J. J. (2022). *El contrato social*. Barcelona: Editorial Alma.

Sartori, G. (2007). *¿Qué es la democracia?* Madrid: Taurus.

Sadin, E. (2018). *La humanidad aumentada*. Buenos Aires: Caja Negra.

Sahd, J., Zovatto, D., y Rojas, D. (2024). *Riesgo político América Latina*. Santiago: Ediciones Centro Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sandvig, C. (2014). "Seeingthe Sort: The Aesthetic and Industrial Defense of the Algorithm", *Media-N: Journal of the New Media Caucus*, 10, 3. http://median.newmediacaucus.org/art-infrastructures-information/seeing-the-sort-the-aesthetic-and-industrial-defense-of-the-algorithm/

Santibáñez, D. (2022). "El debate en torno a la noción instrumental de tecnología". Revista *ETHIKA+*, 6: 149-168.

Schwab, K. (2017). *La cuarta revolución industrial*. Madrid: Debate.

Sierra, F. (2021). "Ciudadanía digital y democracia 4.0. Un programa de investigación". En Sierra, F., Leetoy, S., Gravante, T. (Ed.), Democracia inconclusa: Movimientos sociales, esfera pública y redes digitales: 23-62.

Touraine, A. (2000). *¿Qué es la democracia?* Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Urban, B. (2022). "Pensar y Procesar. Una crítica a los sistemas democráticos basados en Inteligencia Artificial desde el reconocimiento, el compromiso y la justicia". *Revista de Filosofía*, 79: 190-200.

Vicente, M. (2023). "Inteligencia Artificial y política: los casos de The Synthetic Party y Tama", en Dafonte-Gómez, A., Míguel-González, M. (Coords). *El fenómeno de la desinformación: reflexiones, casos y propuestas*. Madrid: Dykinson, 603-617.

Villarroel, R. (2023). "Algocracia. Decisiones políticas y representación ciudadana en una gobernanza algorítmica". *Otrosiglo*, Revista de filosofía, 7 (2): 193-212.

Wagner, M. (2020). "This virtual politician wants to run for office", *CNN Businnes*. https://edition.cnn.com/2017/11/23/tech/first-virtual-politician-trnd/index.html

Winner, L. (1978). *Autonomous Technology: Technics out of Control as a Theme in Political Thought*. Massachusetts: MIT Press.

Wu. T. (2003). "Network Neutrality, Broadband Discrimination". *Journal of Telecommunications and High Technology Law*, 2, 141-176.

DEMOCRACIA DE LA VIGILANCIA: DATOS, ACTIVISMO Y CONTRAPODER

SURVEILLANCE DEMOCRACY: DATA, ACTIVISM, AND COUNTER-POWER

Patrici Calvo[1]
Univeristat Jaume I, Castellón de la Plana. España
calvop@uji.es

Carlos Saura García[2]
Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. España
saurac@uji.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: democracia de la vigilancia; vigilancia social masiva; despotismo democrático; despotismo tecnológico; datactivismo; datahackerismo
Keywords: surveillance democracy; mass social surveillance; democratic despotism; technological despotism; datactivism; datahackerism

Resumen: Esta investigación analiza críticamente el actual contexto sociopolítico y económico de vigilancia masiva para reconstruir las claves y condiciones de posibilidad que orientan su desarrollo en sentido justo y responsable. El estudio, por un lado, advierte del peligro de los impactos disruptivos que produce sobre la sociedad y sus diferentes esferas funcionales la vigilancia social masiva ejercida por los estados y las grandes corporaciones tecnológicas. Por otro, de forma más concreta, sugiere que esta vigilancia social masiva está dando lugar a prácticas despóticas que pervierten los procesos democráticos, reducen los espacios de libertad y aumentan la brecha de las desigualdades. Finalmente, desde sus presupuestos normativos y condiciones de posibilidad, ofrece orientaciones para hacer frente a la vigilancia social masiva: la promoción de una sociedad civil fuerte, dinámica y crítica que actúe como contrapoder frente al estado y las grandes tecnológicas.

1 Esta publicación es parte del proyecto PID2022-139000OB-C22, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, así como de las actividades del grupo de investigación de excelencia CIPROM/2021/072 de la Comunitat Valenciana.

2 Esta publicación es parte del proyecto PID2022-139000OB-C22, financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE y ha sido posible gracias a la financiación recibida de la Universitat Jaume I a través de un contrato predoctoral (PREDOC/2022/08).

Abstract: This research critically analyses the current socio-political and economic context of mass surveillance in order to reconstruct the keys and conditions of possibility that guide its development in a fair and responsible sense. The study, on the one hand, warns of the dangers and disruptive impacts underlying the mass social surveillance currently exercised by states and large technological corporations. On the other, it suggests that this mass social surveillance is giving rise to despotic practices that pervert democratic processes, reduce spaces of freedom and increase the inequality gap. Finally, it offers guidelines for confronting mass social surveillance: the promotion of a strong civil society that acts as a counter-power to the state and big tech.

1. Introducción

Durante las dos primeras décadas de siglo XXI, la convergencia sinérgica de varias disciplinas científico-técnicas como el Internet de las Cosas, el Big data, la Robótica, la Inteligencia artificial e incluso la neurotecnología ha dado lugar a la posibilidad de generar, recopilar y explotar datos masivos de todo mediante la recreación y puesta en marcha de ecosistemas ciberfísicos[3]. Este hecho ha propiciado toda una revolución, un momento disruptivo sin precedentes cuyos impactos y consecuencias se están dejando sentir con fuerza en la sociedad y sus diferentes esferas funcionales.

En el ámbito democrático[4], este hecho resulta especialmente significativo. Los datos y metadatos masivos son utilizados por los estados y los mercados para predecir y controlar, incluso manipular en algunos casos, los comportamientos de la ciudadanía y la competencia política o económica con la finalidad de maximizar sus objetivos estratégicos. Los resultados cosechados por aquellos países como China y USA o aquellas organizaciones económicas como Google, Amazon, Meta, Apple y Microsoft (las GAMAM) en occidente y Alibaba, ZTE, Huawei, Baidu, Tencent y Hikvision en oriente, han propiciado toda una lucha global por el poder geopolítico y geoeconómico basado en el control de las tecnologías, los instrumentos y las plataformas que permiten la generación, recopilación y procesamiento de los datos y metadatos masivos disponibles o posibles de la ciudadanía (Helberg,

3 Los ecosistemas ciberfísicos recrean espacios artificiales de información que, estructurados alrededor de programas y dispositivos informáticos, tecnología biométrica e instrumentos de sensorización digitalmente interconectados y virtualmente organizados, controlados y gobernados por algoritmos (algunos dotados de inteligencia artificial), permiten la *hiperconectividad* y *datificación* de toda la realidad física y social, ya sean personas, animales, procesos, elementos o cosas, y los comportamientos asociados (Armenteras et al., 2016; Calvo, 2020).

4 Aquí, se entiende la democracia en un sentido amplio, es decir, no sólo aquellos sistemas políticos cuyos representantes son elegidos por la ciudadanía mediante sufragio, sino también aquellos sistemas de mercado y sociedad civil cuyas organizaciones y empresas implicadas y/o afectadas participan activamente en los procesos de generación de opinión pública.

2021; Hillman, 2021; Webb, 2021; Saura García, 2024).

No obstante, también la sociedad se está posicionado como contrapoder de las políticas y economías de vigilancia a través de movimientos civiles de vigilancia basados en los datos, como el activismo de datos, el ciberactivismo político y los *cyberblowers* (informadores cibernéticos), entre otros. Todo ello ha dado lugar a la irrupción de un nuevo modelo de democracia cuyo principal foco de atención es la vigilancia de sus elementos estructurales a partir de sus datos y metadatos, así como la vigilancia mutua entre las distintas esferas funcionales.

Esta *democracia de la vigilancia*, por consiguiente, hace referencia a la emergencia de un nuevo contexto político, económico y social digitalmente *hiperconectivizado*, *algoritmizado* y *dataficado*. Se trata de una nueva forma de organización del estado, el mercado y la sociedad forjada sobre el *tecno-solucionismo* y la generación, recopilación y explotación de los datos y metadatos que genera la ciudadanía que interactúa a través de los ecosistemas ciberfísicos.

2. Objetivos

Este estudio parte de la hipótesis de que un escenario democrático tan disruptivo como el generado por la transformación digital exige trabajar en la recreación de una sociedad civil fuerte, crítica y dinámica que actúe como contrapoder frente al estado y las grandes tecnológicas. Sólo un estado de equilibrio semejante permitiría la emergencia de democracias maduras capaces de hacer frente a cualquier tipo de despotismo y tiranía tecnopolítica y promover un desarrollo democrático en un sentido justo, responsable y *felicitante*.

Esta hipótesis se basa en un enfoque de democracia de doble vía como el propuesto por Alexis de Tocqueville en el siglo XIX (1990a, b) y desarrollado y ampliado por John Keane (1992),Jürgen Habermas (1998; 2023) o Domingo García-Marzá (2013) entre otros/as en el siglo XX y XXI. A través de este enfoque, Tocqueville y Habermas consiguieron implantar y articular en el núcleo de la teoría democrática el potencial transformador de la realidad social que atesora la sociedad civil, mientras que García-Marzá y Keane entre otros hicieron lo propio mostrando el potencial coercitivo y coordinador de la acción inherente a la sociedad civil e incluyendo a las organizaciones económicas, tanto públicas como privadas, en su entramado asociativo[5].

Apoyándose en esta propuesta de democracia de doble vía, el objetivo principal de este estudio es desvelar y comprender las estructuras y los intereses que subyacen a la democracia de la vigilancia, así como los impactos actuales o virtuales que esta produce sobre la sociedad y la ciudadanía, con el objetivo de proponer orientaciones para su desarrollo práctico. Para ello, en primer lugar, se profundizará en el comportamiento, funcionamiento y objetivos de los gobiernos y mercados de vigilancia más desarrollados basados en

5 Dadas las limitaciones de espacio, no es posible profundizar en la propuesta actual y desarrollada de democracia de doble vía. Para un mayor conocimiento del enfoque, ver Keane (1992), Habermas (1998, 2023) y García-Marzá (2013) entre otros. También es muy aconsejable el concienzudo y esclarecedor estudio realizado por Robinson Dos Santos (2023) sobre la reflexión habermasiana alrededor de la transformación digital de la esfera pública.

los datos y metadatos masivos de la ciudadanía. En segundo lugar, por un lado, se analizará críticamente la expansión de las tecnologías de vigilancia masiva alrededor del mundo y su uso político y económico por parte de organismos gubernamentales y grandes tecnológicas. Y, por otro, se abordarán las características, el funcionamiento y los objetivos de las infraestructuras de vigilancia creadas por las grandes corporaciones tecnológicas y sus impactos sobre la ciudadanía, la opinión pública y los sistemas democráticos. En tercer lugar, se mostrará la emergencia y potencialidad de diferentes movimientos de contrapoder de la sociedad civil frente a los estados y mercados de vigilancia masiva. Finalmente, por un lado, se reflexionará sobre las causas de la asimetría de poder de los sistemas democráticos basados en la vigilancia masiva y sus consecuencias —el empobrecimiento de la capacidad de cambio y transformación de la realidad social de la sociedad civil mediante imperativos sistémicos como el poder y el dinero— y, por otro, se ofrecerán orientaciones para intentar revertir esta tendencia.

3. Metodología

Para conseguir el objetivo, este estudio del ámbito de la filosofía política se ha llevado a cabo en el marco de una propuesta hermenéutico-crítica de análisis, comprensión y prescripción de democracia y sus procesos. Se trata de una metodología propia de las ciencias humanas y sociales que, desde el estudio e interpretación de fuentes bibliográficas y casos prácticos, analiza críticamente el actual contexto sociopolítico y económico de vigilancia masiva para reconstruir los presupuestos normativos que permiten orientar su desarrollo en el marco de una democracia de doble-vía[6], así como las condiciones de posibilidad que permiten su recreación fáctica. Es decir, un enfoque metodológico que se aleja de aquellas posturas cientificistas basadas en la neutralidad y la objetividad para abordar el interés del conocimiento por una mayor emancipación y autonomía del ser humano a través de la comprensión y la crítica.

Para ello, partiendo del problema detectado —el uso de la vigilancia masiva con fines instrumentales, despóticos y tiránicos por parte de corporaciones gubernamentales y grandes tecnológicas— y la hipótesis de partida —la necesidad de promover una sociedad civil de la vigilancia capaz de ejercer como contrapoder del estado y del mercado que utiliza la vigilancia masiva con fines poco democráticos—, en un primer momento se han recopilado y analizado críticamente distintas fuentes bibliográficas especializadas e informes del estado de la cuestión alrededor de la democracia de la vigilancia. Posteriormente, se han recopilado y estudiado casos prácticos sobre la realidad e impactos actuales de la democracia de la vigilancia en la política, la economía y la sociedad civil. Finalmente, mediante la reflexión y comprensión crítica de toda la información generada durante los dos primeros momentos, se ha procedido a la reconstrucción de los presupuestos normativos y condiciones de posibilidad de una democracia de la vigilancia a la altura de lo exigible y deseable por una ciudadanía

6 Por limitaciones de espacio, este estudio no puede abordar en profundidad el método hermenéuticocrítico. Para mayor conocimiento de este método, ver Habermas (1984), Apel (1985), Cortina (1985), Conill (2006, 2008), Cortina et al. (2008) y Nicolas et al. (2023), entre otros.

madura; es decir, con un nivel posconvencional de desarrollo moral.

4. Nacimiento de la vigilancia social masiva

La incapacidad de detectar y predecir las intenciones de los terroristas de los *Atentados del 11S* en 2001 supuso una verdadera consternación para las autoridades de los Estados Unidos. A partir de este momento se produjo un aumento exponencial del interés de estas autoridades por la recopilación, almacenamiento y procesamiento de los datos y metadatos que produce la ciudadanía, así como las naciones y sus diferentes instituciones y organizaciones. El informe realizado por expertos encargado por el gobierno de los Estados Unidos años después sobre los *Atentados del 11S* subraya que en aquel momento,

> Los atentados del 11 de septiembre fueron una demostración gráfica de la necesidad de contar con información detallada sobre las actividades de terroristas potenciales […]. Una parte de esa información, que podría haber resultado de utilidad, no se recopiló, y otra, que podría haber ayudado a impedir los atentados, no fue compartida entre los departamentos[7] (Clarke et al., 2014: 27).

Este informe pone en evidencia que una de las principales causas que impidió pronosticar y anunciar estos atentados fue la falta de intercambio de datos entre los organismos de seguridad de la *Intelligence Community* de los Estados Unidos, entre los que destacan instituciones como el FBI, la CIA y la NSA. A raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que los atentados se hubieran podido evitar si hubiera existido una infraestructura de recopilación, almacenamiento, intercambio y análisis de datos y metadatos dentro de sus organismos de defensa y de seguridad. Por ello, desde el ejecutivo de George W. Bush se promovió la creación de un nuevo escenario mundial donde la recopilación, el intercambio y el análisis de datos y metadatos masivos fuera la base del control de las amenazas de la sociedad estadounidense (Greenwald, 2014; Snowden, 2019). Este nuevo escenario se basó en dos grandes pilares: la creación de una estructura de vigilancia social masiva gestionada por la *Intelligence Community* y la promoción de grandes corporaciones digitales que nutrieran de datos a esta estructura de vigilancia.

Por una parte, se pusieron en marcha un conjunto de herramientas y sistemas de vigilancia social masiva por parte de la *Intelligence Community* de los Estados Unidos y de sus principales países aliados (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido), los llamados *Five Eyes*, con seis premisas fundamentales: "Husmea en todo, Entérate de todo, Recógelo todo, Procésalo todo, Aprovéchalo todo, Asócialo todo" (Snowden, 2019). En el centro de este entramado de vigilancia destacan los programas de gestión de datos y metadatos PRISM, Upstream, Trailblazer y XKEYSCORE. En líneas generales estos programas se dedicaban a recopilar y extraer grandes conjuntos de datos de las plataformas e infraestructuras tecnológicas de internet y a combinar, entrelazar y analizar grandes conjuntos de datos y metadatos con el objetivo de vigilar y controlar las actividades de la ciu-

7 Traducción extraída de *La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (Zuboff, 2020: 737)

dadanía mundial, las empresas nacionales y extranjeras, los estados extranjeros en general y la ciudadanía de los Estados Unidos en particular (Greenwald, 2014; Lyon, 2015; Snowden, 2019).

Por otra parte, la necesidad de disponer de flujos de datos y metadatos de forma constante para poder alimentar a los programas de vigilancia social masiva provocó la necesidad de desregular el contexto de internet y potenciar el crecimiento de corporaciones digitales que estaban empezando a ofrecer multitud de servicios y actividades en el ciberespacio que implicaban a una gran cantidad de usuarios (Snowden, 2019; Zuboff, 2020). Estas corporaciones digitales eran las llamadas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) que con el paso de los años se han convertido en las dominadoras de los grandes conjuntos de datos de las sociedades modernas y en las máximas exponentes del capitalismo de la vigilancia y de su modelo de negocio. Esta situación fue aprovechada por las GAFAM para generar unos grandes beneficios económicos a partir de un nuevo modelo de negocio basado en los datos y metadatos e introducirse y consolidarse entre las principales corporaciones del planeta, y por la *Intelligence Community* estadounidense para obtener acceso a los datos y metadatos de estas corporaciones ya sea a través de resoluciones judiciales, acuerdos entre las corporaciones y el gobiernos ocultos a la opinión pública o por medio de acciones clandestinas (Greenwald, 2014; Snowden, 2019).

El nuevo escenario de explotación de datos y metadatos por parte de los gobiernos y del mercado posterior a los *Atentados del 11S* provocó multitud de interdependencias entre estos grupos y fue el pistoletazo de salida de la utilización política y económica de los grandes conjuntos de datos y metadatos, que ha ido evolucionando y perfeccionándose hasta nuestros días. Por un lado, el desarrollo de los ya citados programas de vigilancia social masiva permitió a la *Intelligence Community* rastrear y analizar todos los comportamientos, acciones o actividades presentes o pasadas de cualquier persona que utilizase cualquier dispositivo digital enmarcado dentro de un ecosistema ciberfísico a partir de los datos y metadatos de las grandes corporaciones digitales. Por otro lado, el crecimiento de las GAFAM dio lugar a un capitalismo de la vigilancia que ha colocado a los datos y metadatos como materia prima de las principales compañías del planeta y ha provocado una mercantilización de los datos privados de los ciudadanos con el objetivo de conseguir beneficios económicos. Snowden profundiza en la gravedad que supone esta situación,

> No podemos permitir que la «vigilancia de Dios» a la que estamos sometidos se use para «calcular» nuestros puntos de ciudadanía o para «predecir» nuestra actividad criminal; para decirnos qué clase de educación podemos recibir, o qué tipo de trabajo podemos tener, o si podemos recibir educación o tener un trabajo, directamente; para discriminarnos por nuestros historiales económicos, legales y médicos, por no mencionar nuestra etnia o raza, constructos que a menudo los datos asumen o imponen. Y con respecto a nuestros datos más íntimos, es decir, a nuestra información genética, si permitimos que la utilicen para identificarnos, entonces la utilizarán para acosarnos, e incluso para modificarnos: para rehacer la esencia misma de nuestra humanidad a imagen de la tecnología que pretende hacerse con su control. Por supuesto, todo eso ya ha pasado (Snowden, 2019: 437-438).

Este fragmento subraya que el contexto de vigilancia social masiva permanente originó una situación, prolongada hasta la actualidad, en la que los centros de poder tanto políticos como económicos conocen y explotan prácticamente la totalidad de los datos y metadatos de la ciudadanía con el objetivo de controlar a cada ciudadano e influenciar y manipular su com-portamiento, su ideología y su opinión. A pesar de que la infraestructura de vigilan-cia ilegal, clandestina y oculta de la *Intelli-gence Community* de los Estados Unidos fue descubierta y parcialmente desman-telada a partir del 2013 (Gellman et al., 2013; Greenwald et al., 2013; Macaskill y Dance, 2013; Emmerson, 2015), las GA-FAM (ahora GAMAM, debido al cambio de nombre de Facebook por Meta) y otras grandes corporaciones digitales orientales han desarrollado nuevas y potentes infraestructuras de vigilancia y control que utilizan para influenciar y manipular a la ciudadanía que afectan directamente a la democracia y a su correcto funcionamiento.

5. Política y economía en un contexto de vigilancia social masiva

El informe realizado en 2019 por Steven Feldstein titulado *The Global Expansion of AI Surveillance* analiza la utilización y la expansión de las tecnologías de vigilancia disruptivas vinculadas con el *big data* y la Inteligencia Artificial en el mundo durante la última década (Feldstein, 2019). Este informe destaca especialmente tres as-pectos.

El primero de ellos, es que se ha produ-cido un gran crecimiento de la utilización de infraestructuras de vigilancia social por parte de una gran cantidad de gobiernos de países. Al menos 75 de los 176 países del mundo utilizan activamente este tipo de infraestructuras para propósitos como son la vigilancia, monitorización y control indiscriminado de la ciudadanía, las restricciones y desconexiones de internet en determinadas zonas y periodos, la personalización de contenidos, la difusión de desinformación o la manipulación de procesos electorales. El segundo y más sorprendente es que las democracias avanzadas son las mayores usuarias de las tecnologías de vigilancia social masiva[8]. El tercero de ellos es que China y sus grandes corporaciones digitales se han convertido en importantes suministradoras de tecnologías en todo el mundo, especialmente en el campo de las tecnologías de vigilancia social masiva. Durante los últimos años el gobierno chino ha copiado el modelo de los Estados Unidos y ha potenciado a un conjunto de corporaciones digitales, entre las que destacan Alibaba, ZTE, Huawei, Baidu, Tencent y Hikvision, las cuales monopolizan y dominan el contexto digital en China y se han introducido en multitud de países alrededor del mundo (Webb, 2021).

Los tres aspectos que subraya este informe describen una situación global en la cual las infraestructuras y las tecnologías relacionadas con la vigilancia social masiva se están desarrollando y extendiendo a una gran velocidad por multitud de estados que van desde las democracias avanzadas hasta los estados autocráticos. Detrás de esta situación que se podría

8 El 51% de las democracias avanzadas, el 41% de los estados autocráticos competitivos, el 41% de las democracias iliberales y el 37% de los estados autocráticos cerrados implementa sistemas de vigilancia social masiva (Feldstein, 2019).

describir como de vigilancia global masiva, se esconde una cruenta guerra geopolítica y geoeconómica entre las corporaciones tecnológicas de los Estados Unidos y las corporaciones tecnológicas de China por el suministro de tecnologías disruptivas basadas en la explotación de grandes conjuntos de datos y metadatos y por la colonización y dominación de estos conjuntos de datos y metadatos a nivel global (Saura García, 2024).

La batalla entre los dos grupos de corporaciones digitales se juega en diversos campos como son las aplicaciones, las infraestructuras de software, los sistemas de hardware o la infraestructura de transporte de datos y metadatos (cables submarinos, redes de fibra óptica, redes de telefonía y de internet o estaciones de 5G) (Hoffman y Attrill, 2021) y en la aplicación y expansión de todo este conjunto tecnológico a través de planes y proyectos tanto gubernamentales como comerciales que permitan a estas corporaciones dominar grandes conjuntos de datos y metadatos con el objetivo de lograr propósitos estratégicos tanto políticos como económicos (Cave et al., 2019; Ryan et al., 2019).

Las grandes corporaciones digitales de los Estados Unidos, pioneras de la utilización de tecnologías de explotación de grandes conjuntos de datos y metadatos, han logrado una fuerte penetración en la economía mundial como consecuencia de la amplia gama de servicios, plataformas e infraestructuras de software, de hardware y de transmisión de datos y metadatos de las GAMAM utilizados diariamente por miles de millones de personas y en la política gracias al desarrollo de proyectos militares o de vigilancia social masiva en colaboración con múltiples gobiernos (Feldstein, 2019; Snowden, 2019; Zuboff, 2020).

La dominación y utilización conjunta de grandes paquetes de datos y metadatos vinculados con la comunicación, la economía y la política han permitido a las GAMAM crear una potente infraestructura de producir beneficios económicos basada en la monetización de datos y en la vigilancia de la ciudadanía denominada capitalismo de la vigilancia (Bartlett, 2018; Moore, 2018; Zuboff, 2020; Han, 2021). El actual modelo de negocio de las GAMAM hace posible el control y modificación de la conducta y la ideología de la ciudadanía en beneficio propio a partir de métodos disruptivos que eluden la decisión humana, la autonomía o la autodeterminación personal incidiendo de forma decisiva en la opinión pública y los procesos democráticos (Zuboff, 2020; Han, 2021). Durante la última década se han podido confirmar multitud de operaciones de influencia, manipulación y modificación de opinión pública y de procesos democráticos, que han implicado en mayor o menor medida a las GAMAM, como por ejemplo los casos de Polonia, Alemania, Brasil, Canadá, Taiwán, Ucrania, Reino Unido o Estados Unidos (Woolley y Howard, 2018; Howard, 2020; Woolley, 2023).

Las grandes corporaciones tecnológicas de China, escoltadas y potenciadas en todo momento por el gobierno y el Partido Comunista de China[9], se han desarrolla-

9 El sector de las grandes corporaciones tecnologías dispone de múltiples acuerdos de colaboración en diversas materias con el gobierno chino y es el que contiene la mayor proporción de dirigentes del Partido Comunista Chino en sus puesto directivos de todos los sectores económicos del país (Cave et al., 2019; Hoffman y Attrill, 2021).

do ampliamente dentro y fuera de China desde la llegada al poder de Xi Jinping (Hannig, 2019; González, 2021). En un primer momento, las tecnologías y los grandes conjuntos de datos y metadatos de estas corporaciones fueron utilizadas por el gobierno chino para constituir la infraestructura de vigilancia social masiva más desarrollada del planeta hasta el momento dentro de sus fronteras. Las principales herramientas de control, vigilancia y represión de esta infraestructura son el sistema de crédito social digital, el cual otorga una puntuación a cada uno de los ciudadanos chinos en relación a sus comportamientos, los sistemas de vigilancia orwelliana desarrollados en grandes ciudades y vías de comunicación y el programa denominada *The Great Firewall* dedicado a la censura, control y vigilancia de contenidos, opiniones y comportamientos de la ciudadanía en la red (Jiang y Fu, 2018; Hannig, 2019; Lee, 2020).

Una vez logrado esto, China ha potenciado el crecimiento internacional de sus corporaciones a través de la llamada *Belt and Road Initiative* (BRI) (Kliman et al., 2019; Helberg, 2021; Hillman, 2021). Esta iniciativa hace referencia a la creación de una amplia red de infraestructuras físicas y digitales en el resto del mundo que abarca desde la difusión de plataformas sociales y el desarrollo de infraestructuras comerciales y de telecomunicaciones hasta la puesta en marcha de proyectos de vigilancia social masiva encargados por otros estados[10] (Feldstein, 2019; Kliman et al., 2019). La punta de lanza del BRI es la difusión del modelo digital chino más allá de sus fronteras con la intención de exportar su modelo de autoritarismo digital. El avance del autoritarismo digital a través de las grandes corporaciones tecnológicas chinas «is being promoted as a way for governments to control their citizens through technology, inverting the concept of the internet as an engine of human liberation» (Shahbaz, 2018). La expansión de la tecnología china aparentemente es beneficiosa política y económicamente tanto para los gobiernos como para la ciudadanía proveída de sus infraestructuras, pero suscita importantes preocupaciones relacionadas con la pérdida de soberanía de los gobiernos y de la ciudadanía, la imposición de las normas morales y éticas chinas y la manipulación de los procesos democráticos en favor de los objetivos políticos y económicos del gobierno chino (Feldstein, 2019; Helberg, 2021; Hillman, 2021)

El avance del modelo digital chino en realidad supone la pérdida del control de las operaciones, las gestiones, las infraestructuras digitales y los grandes conjuntos de datos y metadatos producidos por los ecosistemas ciberfísicos y la ciudadanía por parte de los gobiernos nacionales y de otras grandes corporaciones tecnológicas a nivel mundial, mayormente estadounidenses, para ser asumido directamente por las grandes corporaciones chinas e indirectamente por el Partido Comunista de China (Cave et al., 2019; Kliman et al., 2019; Helberg, 2021).

10 Dentro de la BRI destacan proyectos como el desarrollo de *Smart City-Public Security projects* en ciudades alemanas y francesas como son Gelsenkirchen, Duisburgo, Valenciennes o Marsella, programas de vigilancia y control de la ciudadanía en Venezuela, Zimbabue o Bielorrusia, el desarrollo de una zona económica portuaria especial en Myanmar, la concesión de la gestión del puerto de Atenas en Grecia, la construcción de líneas de alta velocidad en países como Rumania, Serbia y Hungría o la difusión mundial de la plataforma social Tik Tok (Cave et al., 2019; Kliman et al., 2019).

Las grandes corporaciones estadounidenses y las grandes corporaciones chinas están dirigidas hacia propósitos muy diferentes. Mientras las corporaciones americanas se centran en obtener a toda costa beneficios económicos, las corporaciones chinas tienen como objetivo difundir y potenciar el autoritarismo digital (Zuboff, 2020; Webb, 2021). Ambos formatos implican grandes asimetrías de conocimiento y poder entre las corporaciones y la ciudadanía y suponen un verdadero peligro para el correcto funcionamiento de las democracias.

En el formato de las corporaciones estadounidenses se promociona un capitalismo de la vigilancia que pone a disposición de los intereses de los mercados sus grandes conjuntos de datos y metadatos y sus tecnologías disruptivas (Zuboff, 2020). Esta situación pone al abasto de cualquier actor la posibilidad de adquirir grandes conjuntos de información de la ciudadanía e influenciar y manipular sus comportamientos, su ideología o sus opiniones de forma interesada. Hay que destacar que después del escándalo de espionaje de la *Intelligence Community* de los Estados Unidos destapado por Snowden en 2013 el gobierno estadounidense tiene más dificultades para acceder y utilizar los conjuntos de datos de estas corporaciones (Snowden, 2019). En cambio, las grandes corporaciones digitales chinas son utilizadas como infraestructuras de promoción del autoritarismo digital promulgado por el Partido Comunista Chino basado en la exportación de sus normas morales y éticas, en la erosión de la soberanía de los países y en socavar las democracias por medio de la vigilancia ubicua de la ciudadanía y la explotación de grandes conjuntos de datos y metadatos (Cave et al., 2019; Ryan et al., 2019; Webb, 2021).

6. Hacia una democracia de la vigilancia: estado, mercado y sociedad civil

La vigilancia, *per se*, no tiene por qué ser una práctica maliciosa. De hecho, tal y como sugirió Tocqueville en sus trabajos (1990a, b), el escrutinio mutuo y continuado entre las diferentes esferas implicadas en y afectadas por las democracias modernas (estado, mercado y sociedad civil), es condición de posibilidad de su buena salud y desarrollo. Por un lado, el escrutinio mutuo promueve el ejercicio de la libertad, principal antídoto frente a la tiranía de las mayorías y el despotismo democrático. Por otro, el escrutinio mutuo fomenta estados óptimos de equilibrio entre libertad e igualdad, pero también fraternidad (hoy solidaridad), condición necesaria contra la deriva democrática que provoca la priorización o el olvido de cualquiera de estos tres principios[11]. No obstante, el principal problema del contexto actual de la democracia de la vigilancia es la tiranía algorítmica y el des-potismo de los datos que el estado y el mercado ejercen sobre la sociedad civil. Dicho de otro modo, los imperativos

11 Para Tocqueville, cuando las democracias priorizan la libertad frente a la igualdad, producen sistemas anárquicos con niveles de caos, desorden e incertidumbre tan inasumibles que impiden su gobernabilidad. Cuando las democracias priorizan la igualdad frente a la libertad, generan sistemas mudos y despóticos con niveles de tiranía, despotismo y anacronismo tan inasumibles que producen pérdida de sentido y déficits de credibilidad entre la ciudadanía. Cuando las democracias dan la espalda a la fraternidad (solidaridad), generan sistemas paternalistas con niveles de individualismo tan inasumibles que producen desafección y lastran el progreso (Tocqueville, 1990a).

sistémicos que, como el poder y el dinero, tra-dicionalmente han hecho servir el estado y el mercado para colonizar el *mundo de la vida* —mundo objetivo, intersubjetivo y subjetivo— (Habermas, 1987), hoy son complementados —incluso superados— por el monopolio de los datos y metadatos masivos tanto públicos como privados e íntimos de la ciudadanía digitalmente hiperconectada y sus herramientas digitales de *dataficación*, extracción y explotación.

En las últimas décadas, la sociedad civil también ha utilizado los ecosistemas ciberfísicos y los datos y metadatos masivos que produce para ejercer el contrapoder sobre la esfera gubernamental y econó-mica, examinando, controlando y visibi-lizando sus movimientos, actividades e impactos. Destacan al respecto algunos movimientos de vigilancia y contrapoder corporativo y gubernamental que utilizan los datos y metadatos (van Dijck, 2014), como el activismo de datos, el activismo digital[12], el *whistleblowing*, el *hackerismo* ético, el *cyberpunk* o el *cypherpunk*, por citar algunos de los más influyentes.

12 Como afirma Mary Joyce, "The context of digital activism refers both to the digital technology that is used in a given activism campaign and to the economic, social, and political context in which such technology use occurs. Digital technology infrastructure—the combination of networks, code, applications, and devices that make up the physical infrastructure of digital activism—is a starting point but not an ending point. Differences in economic, social, and political factors ultimately alter how activists use this technology. (…) The media have recently been abuzz with cases of citizens around the world using digital technologies to push for social and political change—from the use of Twitter to amplify protests in Iran and Moldova to the thousands of American nonprofits creating Facebook accounts in the hopes of luring supporters" (Joyce, 2010, p. 2).

Datactivismo

El *activismo de datos* es un movimiento ciudadano de carácter científico-técnico y social que ha cogido fuerza en la última década por diferentes motivos e intereses, pero todos ellos complementarios y alineados. Por un lado, como forma de promover el cambio social a través de los medios de comunicación (Sampedro, 2014; Liboiron, 2014, 2015; Gutiérrez, 2018; Milan y Gutiérrez, 2020). Por otro lado, como respuesta frente a las nuevas técnicas de control basadas en algoritmos inteligentes que están haciendo tambalear los cimientos de la democracia y las bases de la ciudadanía (Caffarena, 2017; Sastre y Gordo, 2019). Finalmente, como contrapoder frente a la vigilancia masiva que los gobiernos y las corporaciones ejercen sobre la sociedad civil a través de los ecosistemas ciberfísicos y los fenómenos que le subyacen: *hiperconectividad, dataficación* y *algoritmización* (van Dijck, 2014; Morozov, 2018; Calvo 2020; García-Marzá y Calvo, 2024). Como argumenta Max Liboiron,

> If activism is about changing the relations, assumptions, and contests pertaining to power, then data activism is about using data as a central tactic to make these changes. "Data activism" is not a term of art academia, but it is used in activism, where it usually refers to persuasively leveraging data to launch action (Liboiron, 2014).

Para ello, centrándose especialmente en el último de sus intereses, el *(ciber)activismo de datos* se apropia de la misma infraestructura de vigilancia masiva que utilizan los gobiernos y las corporaciones —como las TIC, los ecosistemas ciberfísicos, las redes sociales, las nubes y las grandes bases de datos, las tecnologías de procesamiento y análisis de datos ma-

sivos, los algoritmos de IA, etcétera— con el objetivo de desvelar y denunciar la tiranía y el despotismo de los datos y otros casos de mala praxis económica y política, concienciar sobre los peligros de la vigilancia masiva y la *datificación* de las relaciones sociales, generar opinión pública y sembrar sentimientos *pro-* y *re-* activos entre la ciudadanía que estimulen su activismo político y corporativo, promuevan su empoderamiento digital y fomenten su compromiso e implicación en los procesos de transformación social.

> If activism is the activation of groups of individuals to achieve a collective aim, then activism in a fundamental sense relies on engaging the underlying forces of community and culture at work in a particular media or space. An activist trying to get the word out about a particular issue in traditional media, for example, will be best equipped when armed with the knowledge of how communities and cultures form around television broadcasts and how best to present information within that medium (Hwang, 2010: 122).

De esta forma, el *(ciber)activismo de datos* se convierte en una actividad de contrapoder democrático que promueve estados óptimos de equilibrio entre libertad, igualdad y solidaridad a través de la crítica, la participación, la afectividad, el asociacionismo, el acuerdo intersubjetivo y el cambio social.

Al respecto, destaca el caso francés durante el último lustro. En este país europeo, el primero en legislar la vigilancia masiva (Labonde, Malhuret, Piedallu y Simon, 2021; La Quadrature du Net, 2023), la ciudadanía de varios núcleos urbanos importantes como Valenciennes, Marsella, Niza, Montpelier o París, pero también de algunas pequeñas localidades como Vallon de Aveyron, se han movilizado e incluso revelado contra el programa *Big Data Public Tranquility* financiado con dinero de la Unión Europea y aplicado gracias a corporaciones tecnologías chinas como Huawai y ZTE y francesas como Engie Ineo y SNEF. Estas herramientas, similares a la controvertida PredPol que utilizan ciudades como Los Ángeles: "(...) analiza los datos proporcionados por la policía, las estaciones de bomberos y los hospitales de la ciudad para anticipar dónde y cuándo podría ocurrir un crimen futuro" (Meaker, 2022), pero también, como en el caso de Niza, detectar y codificar emociones entre los viajeros de los medios de transportes (Violaine, 2019).

> Es el tecno-solucionismo. Existe un problema político y prometen encontrar una tecnología, una app, para controlarlo (...). Es muy costoso y utiliza una parte del dinero de los contribuyentes para implementar soluciones que son peligrosas para las libertades, aumentan el control y son en parte ineficaces (Macdonald, 2022).

Como contrapartida, han surgido movimientos activistas como *Technopolice*, dedicado a mapear y difundir en su plataforma digital la ubicación de las cámaras de vigilancia de las ciudades francesas, y *La Quadrature du Net*, preocupado por defender los derechos digitales de la ciudadanía y detener el uso de la videovigilancia en Marsella. La presión de estos y otros grupos ha sido tal, que ha logrado concienciar y movilizar grandes grupos de ciudadanos y ciudadanas para su causa y llamar la atención de la prensa mundial (Labonde, Malhuret, Piedallu y Simon, 2021).

Datahackerismo

Tradicionalmente, el *hackerismo* es un término que suele vincularse con un agre-

gado de acciones autointeresadas, ilegales y maliciosas, especialmente aquellas que atacan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos de organizaciones gubernamentales, económicas y financieras, pero también de la ciudadanía expuesta, para conseguir algún tipo de recompensa personal en clave de beneficio o utilidad. No obstante, el *hackerismo* no puede vincularse sólo ni mayoritariamente con comportamiento dañinos para la sociedad y sus diferentes esferas funcionales[13]. Como describió y definió Kenneth Einar Himma en *Internet security: hacking, counterhacking, and Society* (2007), los móviles de la acción del *hacker* también pueden estar vinculados con algún tipo de resultado positivo para los estados, las economías y, sobre todo, las sociedades. Por ejemplo, con una mejora de los sistemas de seguridad de las instituciones y organizaciones pública y privadas; con la alfabetización digital de la ciudadanía y con una visibilización y/o corrección de aquellos abusos que, como la vigilancia masiva con fines despóticos, cometen algunos gobiernos y organizaciones corporativas sobre la sociedad, produciendo vulnerabilidades y debilitando su progreso (Semenzin, 2017).

En este caso, el *hackerismo* se aleja del *free-rider informático*, aquellas personas que se aprovecha en su propio beneficio de las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de las organizaciones económicas y gubernamentales, y se asemeja a una especie de *centinela* o *protector informático* de la sociedad que actúa en la sombra. En este caso, a la acción se la denomina *hacktivismo ético* y a las personas implicadas se les llama *hackers éticos.*

Entre los muchos casos de *hacktismo ético*, destacan iniciativas como *Cryptoparty* (Semenzin, 2017) por su vinculación con la vigilancia masiva. *Cryptoparty*, que se define a sí mismo como "(...) un movimiento descentralizado con eventos alrededor de todo el mundo" que pretende llevar conocimiento e información a la sociedad acerca de cómo proteger su espacio digital y sus datos (Cryptoparty, 2024), surge en 2012 fuertemente motivada por el shock que produjo en la sociedad la filtración sobre la vigilancia masiva perpetrada durante años por la NSA estadounidense y como respuesta al proyecto de ley *Cybercrime Legislation Amendment Bill* del gobierno australiano (Semenzin, 2017). El principal objetivo de la red consiste en "(...) introducir en la sociedad las herramientas básicas necesarias para la protección de la privacidad, el anonimato y la seguridad en Internet" (Semenzin, 2017). Para ello, ofrece información y orientación a la ciudadanía sobre cómo incluir comunicaciones encriptadas, evitar el seguimiento y vigilancia durante las búsquedas web, e integrar mecanismos de seguridad en los ordenadores personales y terminales móviles (Cryptoparty, 2024).

Datawhistleblowing

En todo ello ha jugado un papel muy importante el *activismo whistleblowing*[14], un movimiento vinculado con aquel "(…)

13 Esta dualidad ha generado un concepto alternativo, el del *crackerismo*, para definir a los hackers maliciosos o autointeresados.

14 El neologismo *whistleblowing* fue acuñado por Ralph Nader durante la *Conference on professional responsibility* celebrada en Washington D.C. el 30 de enero de 1971 (Boffey, 1971: 549-551).

acto de un hombre o una mujer que, creyendo que el interés público prevalece sobre el interés de la organización a la que sirve, públicamente «hace sonar el silbato» si la organización está involucrada en actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o perjudiciales" (Nade, Petkas y Blackwell, 1972, VII). Las personas vinculadas con el movimiento se conocen como *whistleblowers*, y se definen como todo aquel ciudadano crítico que, comprometido con los principios y valores de la organización en la que trabaja y de la sociedad en la que vive, es capaz de alertar y/o denunciar públicamente las irregularidades ético-legales que se cometen en el ejercicio de una actividad concreta aun cuando son conscientes del alto coste que puede llegar a pagar por ello, como la pérdida del puesto de trabajo, el fin de una prometedora carrera, el desprecio y descrédito del sector y sus profesionales, el exilio, el ostracismo, la cárcel o, incluso, la muerte (Calvo, 2016). Ernest Fitzgerald y el fraude en las Fuerzas aéreas de EE.UU., Frank Serpico y la corrupción policial en la ciudad de New York, Daniel Elsbergs y los Papeles del Pentágono; Peter Buxton y la protección de los sujetos de investigación en el experimento Tuskegee, William Mark Felt y el caso Watergate, Philip Agge y las malas prácticas de la CIA, Karen Silkwood y las irregularidades en salud y seguridad de Kerr-McGee, Mordechai Vanunu y el programa nuclear israelí, Jeffrey Wigand y los problemas de salud pública de la industria del tabaco; Juan Walterspiel y los ensayos clínicos de la farmacéutica Pfizer, Sherron Watkins y las prácticas contables de la energética Enron; Cynthia Cooper y las prácticas contables de Worldcom; Bradley Manning y los documentos clasificados publicados en WikiLeaks; Edward Snownen y el espionaje masivo de la NSA; Coolen Rowley y las fallas e inacción del FBI en la prevención de los Atentados del 11S; Kostas Vaxevanis y la lista Lagarde, Eric Ben-Artzi y la contabilidad fraudulenta del Deutsche Bank, Jaime González y el cártel del fuego, Brittany Nicole Kaiser y Christopher Wylie y el escándalo de Cambridge Analytica[15] (Nader, Petkas y Blackwell, 1972; Vandekerckhove, 2006; Calvo, 2016, Calvo y Osal, 2018; Vaughn, 2020; Mueller, 2020; Saura García, 2023), son algunos de los casos que mayor impacto han tenido en la sociedad y sus distintas esferas funcionales[16], pero no los únicos[17].

En general, la cultura *whistleblowing* y el interés de los *whistleblowers* no tiene por qué encajar con los parámetros actuales del llamado *activismo de datos* y el *hackerismo ético*. Éste se centra en informar sobre todo tipo de irregularidades y malas prácticas institucionales y corporativas, y su actividad emergió en la década de los 70 (Calvo, 2016; Calvo y Osal, 2018), va-

15 A diferencia de antaño, cuya actividad externa estaba basada casi exclusivamente en los medios de comunicación de masas tradicionales, especialmente los periodísticos y, en menor medida, la televisión, en la actualidad el *whistleblowing* se encuentra estrechamente ligado con el ciberespacio y la esfera pública digital. Al respecto, véanse casos de *whistleblowing* desde 2010.

16 En algunas ocasiones, como el caso de Jack Teixeira y su filtración de documentos del Pentágono sobre la guerra de Ucrania entre 2022 y 2023, se confunde el *narcisismo de datos* con el *activismo de los whistleblowers*. El caso de Jack Teixeira nada tiene que ver con el *whistleblowing*.

17 En muchos casos *whistleblowing*, la identidad de los *whlistleblowers* continúa siendo desconocida, como los que destaparon los sonados escándalos *Luxleaks*, *Panamá papers* y *Paradise papers* entre otros.

rias décadas antes de los fenómenos de la vigilancia masiva y la algoritmización de las esferas funcionales de la sociedad. No obstante, actualmente su actividad está intrínsecamente relacionada con el *(ciber)activismo de datos* (Gutiérrez-Rubí, 2014), puesto que ofrece pistas, datos o información relevante al *(ciber)activismo de datos* para poder desarrollar su actividad en sus diferentes facetas: denuncia, concienciación, transformación social, contrapoder, empoderamiento, etcétera.

Activismo de datos, *hackerismo* ético y *whistleblowing* son algunos ejemplos de la capacidad de la sociedad civil para postularse como contrapoder en la era de la vigilancia masiva. No obstante, durante la última década las grandes corporaciones gubernamentales y corporaciones tecnológicas han aumentado su despotismo sobre la sociedad civil para garantizar la asimetría de poder y el control efectivo de la sociedad de la vigilancia a través, como diría Habermas (1987), de imperativos sistémicos como el poder y el dinero, pero hoy también los datos masivos y las tecnologías inteligentes.

7. Del despotismo democrático al ludismo de datos

Para Tocqueville, la clave de una buena democracia se halla en el correcto equilibrio entre sus principales esferas —el estado, el mercado y la sociedad civil— y valores —libertad y igualdad—. Los desequilibrios funcionales y axiológicos producen altos niveles de desincronización y entropía social en las democracias modernas, generando su deriva hacia sistemas despóticos basados en la tiranía de las mayorías, el estatismo intelectual, el individualismo social, el paternalismo institucional y la servidumbre legislativa (Tocqueville, 1990a, b). Este despotismo democrático, como afirma Tocqueville, genera la bajeza y vulgaridad moral de las instituciones democráticas y la degeneración de las costumbres públicas y los procesos democráticos (Tocqueville, 1990b).

En la última década, tanto los organismos gubernamentales como las grandes corporaciones tecnológicas han puesto en marcha prácticas despóticas de captación y contratación de *datactivistas*, *hackeréticos (ethical hackers)* y *cyberwhistleblowers*, así como con otros grupos implicados en el activismo político y corporativo, basadas en suculentos beneficios económicos, fiscales y/o legales para que colaboren con ellos y para ellos.

En la esfera estatal, destaca el *Launches Pilot Project Challenging* Hackers *to Test Federal Cyber Security* y otras llamadas para la contratación de hackers *(Call for hackers)* llevadas a cabo por el Pentágono y otros organismos gubernamentales de los EE.UU. en la última década para mejorar su ciberseguridad y minimizar sus cibervulnerabilidades (CNN, 2012; Moser, 2016; Jiménez, 2016; Syeed, 2017). Como desveló Nafeesa Syeed, "The Pentagon is paying hackers to test its key internal systems for vulnerabilities—and they are finding weaknesses faster than expected" (Syeed, 2017).

En la esfera mercantil, destacan los casos de contratación, reconocimiento público e incentivación de hackers éticos por parte de grandes tecnológicas como Apple, Google, Amazon, etcétera (La Información, 2011; AppleInsider Staff, 2016). Por ejemplo, los *Pwnie Award* (2007-2022) a las mejores prácticas *hacker* en el ám-

bito de la ciberseguridad (Pwnie Award, 2023), el reto Google retribuido con 2,7 millones de dólares como máximo a quien consiguiera *hackear* el sistema Chrome OS (2013-2016).

Estas prácticas despóticas vacían la esfera de la sociedad civil de sus entidades y elementos digitalmente más empoderados, limitando su libertad y debilitando su capacidad de acción y contrapoder frente a las prácticas de vigilancia de esferas como el estado y el mercado. De ahí la emergencia de movimientos neoluditas —como el ludismo 4.0, el dataludismo o el Camover— contra el despotismo de los datos.

Indicios de este renacer del movimiento ludita se han podido observar y sentir en las protestas hongkonesas de 2019 contra el despotismo y la opresión del gobierno chino, cuando un grupo de manifestantes tumbó una torre con cámaras de reconocimiento facial instalada por el gobierno chino para vigilar a la ciudadanía, así como en la retirada del robot Digidog que utilizaba el Departamento de Policía de Nueva York para patrullar las calles ante las reacciones muy negativas que empezaba a suscitar entre la ciudadanía. Pero, sobre todo, destaca el movimiento Camover surgido de las calles de Berlín y exportado a otros lugares y países[18] cuyo objetivo es destruir o inutilizar cámaras de vigilancia masiva. Como explica Oliver Stallwood en *The Guardian*,

> The rules of Camover are simple: mobilise a crew and think of a name that starts with "command", "brigade" or "cell", followed by the moniker of a historical figure (Van der Lubbe, a Dutch bricklayer convicted of setting fire to the Reichstag in 1933, is one name being used). Then destroy as many CCTV cameras as you can. Concealing your identity, while not essential, is recommended. Finally, video your trail of destruction and post it on the game's website — although even keeping track of the homepage can be a challenge in itself, as it is continually being shut down (Stallwood, 2013)

Evitar que estas prácticas *dataludistas* suban en número e intensidad y se conviertan en un lastre para la buena salud de las democracias modernas, exige la erradicación del despotismo democrático y corporativo imperante, así como del *dataempoderamiento* de la sociedad civil. Porque, como argumentaba Tocqueville (1990b), una de las misiones más importantes de un sistema democrático radica en enseñar a la ciudadanía a prescindir del sistema político, a sentir y ejercer la libertad, a participar de lo público, a no ser dependientes del estado para encontrar solución a los problemas y proyectarse una vida buena.

> Se diría que los soberanos de nuestra época sólo intentan hacer grandes cosas con los hombres. Quisiera que pensasen un poco más en hacer grandes hombres, que concedieran menos valor a la obra y más al obrero, que recordasen constantemente que una nación no puede permanecer fuerte mucho tiempo cuando cada hombre es individualmente débil y que no se han encontrado formas sociales y combinaciones políticas que puedan hacer enérgico a un pueblo compuesto de ciudadanos pusilánimes y lánguidos (Tocqueville, 1990b: 386).

Para ello, cabe dejar de coartar la libertad de acción, participación y cooperación de y entre los diferentes grupos implicados en el activismo político y corporativo, promover su activismo como un bien democrático que merece ser potenciado

18 En otros países, como España, y ciudades, como Badajoz, ya se han registrado casos similares (Reigadas, 2022).

y preservado y empoderar a los/as activistas a través del acceso y la mejora a los recursos y los datos (*open resources* y *open data*) que permiten la vigilancia como contrapoder de la sociedad civil y, con ello, el equilibrio óptimo mutuamente beneficioso entre las tres esferas de la democracia.

8. Conclusiones

Como se ha intentado mostrar en este estudio, las democracias se centran cada vez más en el control, explotación y uso de los datos y metadatos masivos que produce la ciudadanía digitalmente hiperconectada. Disponer de un acceso ilimitado a los datos y metadatos y de una tecnología inteligente capaz de recopilarlos, almacenarlos y procesarlos para convertirlos en información relevante primero y conocimiento aplicable después, es visto por los gobiernos estatales como el principal instrumento de mejora y desarrollo político, económico y social. No obstante, el fenómeno de la vigilancia masiva se ha convertido en un arma de doble filo para las democracias.

Por un lado, los gobiernos y las grandes corporaciones tecnológicas justifican la puesta en marcha de técnicas y tecnología de vigilancia masiva por los grandes beneficios extrínsecos que produce para la sociedad, como un aumento y mejora de la salud y seguridad de la sociedad; de la capacidad de captación y comprensión de la opinión pública; de la posibilidad de elaborar leyes y políticas públicas más objetivas, eficientes y cercanas a las expectativas y necesidades de la ciudadanía; de establecer procesos democráticos más inclusivos, participativos y robustos, y del diseño de mercados más competitivos, responsables y sostenibles.

Por otro, se observa que el uso actual de la vigilancia masiva por parte de los gobiernos y las grandes corporaciones tecnológicas ha derivado o está derivando hacia prácticas despóticas que pervierten los procesos democráticos y aumentan la tiranía de los grandes centros de poder, la instrumentalización de la ciudadanía y la bajeza e inopia moral de las instituciones y organizaciones democráticas. Destacan al respecto aspectos como el uso fraudulento e indiscriminado de tecnología de reconocimiento facial, la manipulación de la opinión pública mediante la producción masiva de datos sintéticos en la esfera pública, la reducción de los espacios de libertad y participación ciudadana, o la generación de oligopolios de datos masivos que concentran la mayor parte de los beneficios derivados de la vigilancia masiva y aplicación en el contexto democrático, entre otras cosas**.**

Esta deriva democrática se percibe claramente a través del aumento exponencial de los casos de aplicación de imperativos sistémicos que, como el poder, el dinero, el control y la opinión sintética y artificial son puestos en marcha por los estados y los mercados para controlar y constreñir la actividad de la sociedad civil con fines meramente instrumentales.

No obstante, como se ha intentado mostrar en este estudio, una democracia madura y robusta exige de una sociedad civil fuerte, comprometida y participativa que sea capaz de introducirse y aportar en aquellos procesos democráticos que, como la vigilancia del resto de esferas que componen la democracia, velan por su buena salud y correcto desarrollo. Pero para ello, es necesario abrir espacios de libertad, cooperación y empoderamiento donde la sociedad civil pueda desplegar

su actividad y actuar como contrapoder democrático. Prácticas como el *activismo de datos*, el *hackerismo* ético y el *whistleblowing* son algunas de las actuales capacidades de la sociedad civil para cooperar, empoderarse y postularse como contrapoder del actual escenario de vigilancia masiva basada en datos y metadatos masivos. Las instituciones democráticas tienen el deber de velar por el acontecer y por el conocimiento de los espacios de libertad, cooperación y empoderamiento, puesto que, como afirmó Tocqueville (1990a, b), es condición de posibilidad de una democracia madura de, por y para la ciudadanía.

En suma, este trabajo ha intentado abordar críticamente la emergencia e impactos de un nuevo orden geoestratégico (político y económico) basado en la vigilancia masiva de la ciudadanía y los datos y metadatos que esta produce con el principal objetivo de ofrecer orientaciones sobre cómo capacitar a la sociedad civil para establecer un contrapoder frente a los gobiernos políticos y los mercados económicos de vigilancia.

9. Bibliografía

Apel, K-O. (1985). *La transformación de la filosofía*. Madrid: Taurus.

AppleInsider Staff (2016). "Apple hires firmware security experts who worked on Thunderstrike 2 exploit". *AI*, 03/02/2016. https://appleinsider.com/articles/16/02/03/apple-hires-firmware-security-experts-who-worked-on-thunderstrike-2-exploit. Fecha de consulta: 09/10/2023

Armenteras, D., González, T. M., Vergara, L. K., Luque, F. J., Rodríguez, N., y Bonilla, M. A. (2016). "A review of the ecosystem concept as a "unit of nature" 80 years after its formulation". *Ecosistemas*, vol. 25, n. 1, pp. 83-89.

Bartlett, J. (2018). *The People Vs Tech: How the internet is killing democracy (and how we save it)*. Londres: Penguin Random House.

Boffey, Ph.M. (1971). "Nader and the Scientists: A call for responsibility", *Science*, vol. 171, n. 3971, pp. 549-551.

Caffarena, V. A. (2017). "El valor del activismo de datos en el trabajo de la sociedad civil",*Dígitos*, vol. 1, n. 3, pp. 199-220.

Cave, D., Hoffman, S., Joske, A., Ryan, F., y Thomas, E. (2019). *Mapping China's technology giants* (N.º 15/2019). Sydney: Australian Strategic Policy Institute. https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2019-05/Mapping%20China%27s%20technology%20giants.pdf?EINwiNpste_FojtgOPriHtIFSD2OD2tL. Fecha de consulta: 25/03/2023

Clarke, R. A., Morell, M. J., Stone, G. R., Sunstein, C. R., y Swire, P. (2014). T*he NSA Report: liberty and security in a changing world*. Princeton: Princeton University Press.

Calvo, P. (2016): "*Whistleblowing ante la miseria moral de instituciones y organizaciones", en:* J. V. Meseguer y M. Avilés (dirs.). *Empresa, Derechos Humanos y RSC. Una mirada holística desde las Ciencias Sociales y Jurídicas. Pamplona: Aranzadi Thomson Reuters, pp. 135-153.*

Calvo, P. (2020). "Democracia aumentada. Un ecosistema ciberético para una participación política basada en algoritmos", *Ápeiron. Estudios de Filosofía*, vol. 12, pp. 129-141.

Calvo, P. y Osal, C. (2018). "Whistleblowing y datos masivos: monitorización y cumplimiento de la ética y la responsabilidad social". *El profesional de la información, vol. 27, n. 1, pp. 137-184.*

Conill, J. (2006). Ética hermenéutica. Crítica desde la facticidad. Madrid: Tecnos.

Conill, J. (2008). "Hermenéutica crítica desde la facticidad de la experiencia", *Convivium. Revista de filosofía,* vol. 21, pp. 31-40.

Cortina, A. (1985). "La hermenéutica crítica en Apel y Habermas ¿Ciencia reconstructiva o hermenéutica trascendental?", *Estudios Filosóficos*, vol. 34, n. 95, pp. 83-114.

Cortina, A., García Marzá, D. y Conill, J. (2008). *Public reason and applied ethics. The ways of practical reason in a pluralist society*. New York: Rainer Hampp Verlag.

Cryptoparty (2024). Cryptoparty 2024. https://cryptoparty.ucm.es

Dos Santos, R. (2023). "A mudanca estrutural digital da esfera publica observacoes sobre a atualizacao do diagnostico de Habermas". en: D. J. Volpato y E. Gusmão de Góes (Coords.), *Habermas e a esfera pública: diagnósticos do tempo presente.* Pelotas: NéfilOnline, pp. 406-431.

Emmerson, B. (2015). *Two Years After Snowden: protecting human rights in an age of mass surveillance*. London: Privacy International and Amnesty International.

Feldstein, S. (2019). *The Global Expansion of AI Surveillance*. Washington: Carnegie Endowment for International Pace.

García-Marzá, D. (2013). "Democracia de doble vía: el no-lugar de la empresa en la sociedad civil", *Revista del CLAD. Reforma y democracia,* vol. 57, pp. 67-92.

García-Marzá, D. y Calvo, P. (2024). *Algorithmic democracy. A critical perspective based on deliberative democracy*. Cham: Springer.

Gellman, B., Blake, A., y Miller, G. (2013). "Edward Snowden comes forward as source of NSA leaks". *The Washington Post,* 09/06/2013. https://www.washingtonpost.com/politics/intelligence-leaders-push-back-on-leakers-media/2013/06/09/fff80160-d122-11e2-a73e-826d299ff459_story.html. Fecha de consulta: 30/06/2022.

González, C. F. (2021). *El gran sueño de China: tecno-socialismo y capitalismo de estado*. Madrid: Tecnos.

Greenwald, G., MacAskill, E., y Poitras, L. (2013). "Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations". *The Guardian,* 11/06/2013. https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance. Fecha de consulta: 30/06/2022

Greenwald, G. (2014). *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State.* Nueva York: Metropolitan Books.

Gutiérrez, M. (2018). *Data activism and social change*. Cham: Palgrave Hardcover.

Gutiérrez-Rubí, A. (2014). "Hablemos claro ¿y si forzamos la apertura? Protección a los whistleblower, *Actualidad administrativa,* n. 7-8, pp. 864-869.

Habermas, J. (1987). *Teoría de la Acción comunicativa. Vol. II*. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (1984). *Conocimiento e Interés*. Madrid: Trotta.

Habermas, J. (1998). *Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso.* Madrid: Trotta.

Habermas, J. (2023). *Un nou canvi estructural en l'esfera* pública *i la política deliberativa*. Barcelona: Edicions 62.

Han, B. C. (2021). *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Barcelona: Herder.

Hannig, S. (2019). *Distopía Digital: Cuatro herramientas que China utiliza para controlar a su población*. Santiago: Fundación para el Progreso (FPP). https://fppchile.org/distopia-digital-cuatro-herramientas-que-china-usa-para-controlar-a-su-poblacion/. Fecha de consulta: 02/08/2022.

Helberg, J. (2021). *The wires of war: technology and the global struggle for power*. Nueva York: Avid Reader Press.

Hillman, J. E. (2021). *The digital Silk Road: China's quest to wire the world and win the future.* Londres: Harper Collins.

Himma, K. E. (2007). *Internet security: hacking, counterhacking, and Society.* Sudbury: Jones and Bartlett.

Hoffman, S., y Attrill, N. (2021). *Mapping China's Tech Giants: Supply chains and the global data collection ecosystem* (N.º 45/2021). Sydney: Australian Strategic Policy Institute. https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2021-06/Supply%20chains.pdf?VersionId=56J_tt8xYXYvsMuhriQt5dSsr92ADaZH. Fecha de consulta: 28/03/2023

Howard, P. N. (2020). *Lie Machines: How to Save Democracy from Troll Armies, Deceitful Robots, Junk News Operations, and Political Operatives*. Yale: Yale University Press.

Hwnag, T. (2010). "Digital transforms activims: The web ecology perspective", en: M. Joyce (Ed.), *Digital Activism Decoded. The New Mechanics of Change*. Nueva York: International Debate Education Association, pp. 119-136.

Jiang, M., y Fu, K. W. (2018). "Chinese Social Media and Big Data: Big Data, Big Brother, Big Profit?". *Policy & Internet*, vol. 10, n. 4, pp. 372-392. https://doi.org/10.1002/POI3.187

Jiménez, R. (2016). El Pentágono quiere contratar háckers. *El País, 02/03/2016.* https://elpais.com/internacional/2016/03/02/estados_unidos/1456956517_636637.html?event_log=oklogin. Fecha de consulta: 08/09/2022.

Joyce, M. (2010). "How to Think About Digital Activism". en: M. Joyce (Ed.). *Digital Activism Decoded The New Mechanics of Change.* Nueva York: International Debate Education Association, pp. 1-14.

Keane, J. (1992). *Democracia y sociedad civil*. Barcelona: Alianza.

Kliman, D., Doshi, R., Lee, K., y Cooper, Z. (2019). *Grading China's Belt and Road*. Washington: CNAS.

La Información (2011). El hacker que desbloqueó el iPhone ficha por Apple. *La Información,* 26/08/2011. https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-hacker-que-desbloqueo-el-iphone-ficha-por-apple_7zu20ZTSV7QYoi3tJeLo36/. Fecha de consulta: 06/10/2022

La Quadrature du Net (2023). "La france, premier pays d'europe à légaliser la surveillance biométrique". *La Quadrature du Net,* 23/03/2023. https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-

hacker-que-desbloqueo-el-iphone-ficha-por-apple_7zu20ZTSV7QYoi3tJeLo36/. Fecha de consulta: 23/04/2023.

Labonde, M., Malhuret, L., Piedallu, B. y Simon, A. (2021). *Internet et libertés: 15 ans de combat de la Quadrature du Net*. París: Vuibert.

Lee, K. F. (2020). *Superpotencias de la inteligencia artificial: China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial*. Bilbao: Deusto.

Liboiron, M. (2014). "Data activism: Occupy Sandy's canvassing practices after Hurricane Sandy". *Superstorm Research Lab,* 11/08/2014. https://superstormresearchlab.org/2014/08/11/data-activism-occupy-sandys-canvassing-practices-after-hurricane-sandy/. Fecha de consulta: 10/11/2022

Liboiron, M. (2015). "Disaster data, data activism. Grassroots Responses to Representations of Superstorm Sandy". en: J. Leyda y D. Negra (Eds), *Extreme Weather and Global Media*. Nueva York & Londres: Routledge, pp. 145-162.

Lyon, D. (2015). *Surveillance after Snowden*. Cambridge: Polity Press.

Macaskill, E., y Dance, G. (2013). "NSA files decoded: Edward Snowden's surveillance revelations explained". *The Guardian,* 01/11/2013. https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1. Fecha de consulta: 08/06/2022.

Macdonald, F. (2022). "Marseille's battle against the surveillance state". *MIT Technology Review,* 13/06/2022. https://www.technologyreview.com/2022/06/13/1053650/marseille-fight-surveillance-state/. Fecha de consulta: 25/07/2022

Meaker, M. (2022). "La lucha contra la vigilancia de Marsella y el interminable debate sobre la sensibilidad de la IA". *Heaven 32.* https://www.heaven32.com/la-lucha-contra-la-vigilancia-de-marsella-y-el-interminable-debate-sobre-la-sensibilidad-de-la-ia/amp/. Fecha de consulta: 03/09/2023

Milan, S. y Gutierréz, M. (2015). "Medios ciudadanos y big data. La emergencia del activismo de datos", *Mediaciones*, vol. 11, n. 14, pp. 10-26.

Moore, M. (2018). *Democracy Hacked: How Technology is Destabilising Global Politics*. Londres: Oneworld Publications.

Morozov, E. (2018). *Capitalismo big tech ¿welfare o neofeudalismo digital?*. Madrid: Enclave.

Moser, C. (2016). "Pentagon Launches Pilot Project Challenging Hackers to Test Federal Cyber Security". *IGN,* 02/05/2017. https://www.ign.com/articles/2016/03/03/pentagon-launches-pilot-project-challenging-hackers-to-test-federal-cyber-security?fbclid=IwAR1bGx2-G6DFT6o1PXIoY7PWTc3eRMwD-MwCXKusu6Ho8V-8aBM2kiROv4cY. Fecha de consulta: 05/10/2023.

Mueller, T. (2020). *Crisis of Conscience. Whistleblowing in an age of fraud*. Londres: Penguin.

Nader, R., Petkas, P., Blackwell, K. (Eds.) (1972). *Whistle Blowing*. Nueva York: Bantam.

Nicolás, J. A., Domingo, A., y García-Marzá, D. (Eds.) (2023). *Hermenéutica crítica y razón práctica. Homenaje a Jesús Conill*. Granada: Comares.

Pwnie Award (2023). The 2022 Pwnie Awards Nominations. https://www.pwnie-noms.live

Reigadas, N. (2022). "Si atacan las cámaras de seguridad del Casco Antiguo es porque funcionan". *Hoy,* 18/05/2022. https://www.hoy.es/badajoz/atacan-camaras-seguridad-20220518210356-nt.html. Fecha de consulta: 14/07/2023

Ryan, F., Cave, D., y Xu, V. X. (2019). Mapping more of China's technology giants (N.º 24/2019). Sydney: Australian Strategic Policy Institute. https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2019-12/Mapping%20more%20of%20Chinas%20tech%20giants.pdf?VersionId=wpDVHIKgXJHzeK8rZ.kmy0Ei63RxXMO. Fecha de consulta: 28/03/2023

Sampedro, V. (2014). *El cuarto poder en red. Por un periodismo (de código) libre*. Barcelona: Icaria.

Sastre, P. y Gordo, A. J. (2019). "El activismo de datos frente al control algorítmico. Nuevos modelos de gobernanza, viejas asimetrías", *IC: Revista Científica de Información y Comunicación*, vol. 16, pp. 157-182.

Saura García, C. (2023). "El big data en los procesos políticos: hacia una democracia de la vigilancia", *Revista de Filosofía*, vol. 80, pp. 215-232.

Saura García, C. (2024). "Digital expansionism and big tech companies: consequences in democracies of the European Union", *Humanit Soc Sci Commun,* vol. 11, n. 448.

Semenzin, S. (2017). "Hacktivismo y ética hacker: el caso del cryptoparty". En: R. Cotarelo y J. Gil (Eds.), *Ciberpolítica. Hacia la cosmópolis de la información y la comunicación*. Madrid: INAP, pp. 618-642.

Shahbaz, A. (2018). *The Rise of Digital Authoritarianism*. Washington: Freedom House.

Snowden, E. (2019). *Vigilancia Permanente*. Barcelona: Planeta.

Stallwood, O. (2013). "Game to destroy CCTV cameras: vandalism or valid protest?". *The Guardian,* 25/01/2013. https://www.theguardian.com/theguardian/shortcuts/2013/jan/25/game-destroy-cctv-cameras-berlin. Fecha de consulta: 05/06/2023.

Syeed, N. (2017). "Pentagon Hires Hackers to Target Sensitive Internal Systems". *Bloomberg,* 13/02/2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-13/pentagon-hires-hackers-to-target-sensitive-internal-systems?leadSource=uverify%20wall. Fecha de consulta: 29/09/2023.

van Dijck, J. (2014). "Datafication, Dataism and Dataveillance: Big Data between Scientific Paradigm and Ideology", *Surveillance & Society,* vol. 12, n. 2, pp. 197-208.

Vandekerckhove, W. (2006). *Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment.* Nueva York: Ashgate Publishing Ltd.

Vaughn, R. G. (2020). *The Successes and Failures of Whistleblower Laws*. Northampton: Edward Elgar Pub.

Violaine (2019). "Un logiciel pour décoder les *émotions* des usagers du tramway de Nice". *ICI. Par France Bleu Et France 3,* 04/01/2019. https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-logiciel-pour-decoder-les-emotions-des-usagers-du-tramway-

de-nice-1546621455. Fecha de consulta: 06/09/2023.

Webb, A. (2021). *Los nueve gigantes: cómo las grandes tecnológicas amenazan el futuro de la humanidad.* Madrid: Península.

Woolley, S., y Howard, P. N. (Eds.) (2018). *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. Oxford: Oxford University Press.

Woolley, S. (2023). *Manufacturing consensus: understanding propaganda in the era of automation and anonymity*. Yale: Yale University Press.

Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder.* Barcelona: Paidós.

IDEOLOGÍA Y POLÍTICA DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: EUROPA, PALESTINA-ISRAEL Y CUBA

PRESIDENT DONALD TRUMP'S IDEOLOGY AND POLICY IN INTERNATIONAL RELATIONS: EUROPE, PALESTINE-ISRAEL AND CUBA

María Luisa Soriano González
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
mlsorgon@upo.es

Recibido: septiembre de 2024
Aceptado: octubre de 2024

Palabras clave: Donald Trump, Relaciones internacionales estadounidenses, Populismo, Europa, Palestina-Israel, Cuba
Keywords: Donald Trump, American International Relations, Populism, Europe, Palestine-Israel, Cuba

Resumen: El artículo es continuación de un libro anterior en torno a tres temas del programa político del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump: los musulmanes, los inmigrantes y el cambio climático. En el presente artículo se completa la investigación con otros tres apartados relevantes de la ideología y política de Trump en el ámbito de las relaciones internacionales: Europa, Palestina-Israel y Cuba. Antes se dedica un apartado al difícil encuadramiento de Trump en las teorías políticas. Me inclino por considerar a Trump un ultra-conservador nacionalista y populista. Respecto a los tres campos de las rela-ciones internacionales indicados se sigue la siguiente estructura: a) Hechos, b) Justificación del expresidente Trump y c) Crítica de la autoría del artículo.

Abstract: The article follows an earlier book on three issues of United States President Donald Trump's political agenda: Muslims, immigrants and climate change. This article completes the research with three other relevant sections of Trump's ideology and policy in the field of international relations: Europe, Palestine-Israel and Cuba. Before that, a section is dedicated to the difficult framing of Trump in political theories. I am inclined to consider Trump an ultraconservative nationalist and populist. With respect to the three fields of

international relations indicated, the following structure is followed: a) Facts, b) Justification of President Trump and c) Criticism of the authorship of the article.

1. Introducción

Creo que el tema que voy a tratar no puede tener mayor actualidad. Donald Trump ha irrumpido de nuevo en las elecciones presidenciales estadounidenses, pretendiendo conquistar un segundo mandato, con un fuerte apoyo social, a pesar de ser un candidato condenado por la justicia. No es un caso insólito. Son ya muchos los candidatos condenados judicialmente en muchos países, que consiguen el cargo público, a veces barriendo en la votación. No es, por otra parte, un problema del candidato, sino del legislador que permite la candidatura y de la sociedad que le apoya, a la que parece interesarle bien poco la honestidad de sus gobernantes y responsables. En noviembre de este año, 2024, veremos el desenlace de la contienda electoral: si Trump alcanza su segundo mandato presidencial o Harris se convierte en la primera mujer presidenta de Estados Unidos.

Publiqué el libro *Donald Trump, Barak Obama y George Bush* (2018), en el que trataba la posición del entonces presidente Trump en tres materias: inmigrantes, musulmanes y cambio climático. En el tercer punto adoptando una posición totalmente contraria al demócrata A. Gore (2006), candidato a la presidencia de Estados Unidos, que ganó el republicano George Bush en unas elecciones de resultados discutibles. Ahora intento completar el cuadro temático desarrollado por Trump en relación con Europa, Palestina-Israel y Cuba, es decir, en el ámbito de las relaciones internacionales.

Donald Trump se ha dedicado desde el inicio de su mandato y sin tregua a enmendarle la plana a su antecesor en la Casa Blanca, intentando derribar los pasos dados por él y los pactos conseguidos. Se dice del nuevo presidente que es imprevisible, pero creo que es totalmente previsible en dos aspectos. El primer aspecto es la durísima e incesante crítica contra los medios de comunicación. M. Pellicer narra que "en los primeros cien días el presidente Donald Trump y su administración se enzarzaron en una guerra sin precedentes contra la prensa y los medios de comunicación en general. Había sido una tónica durante su campaña electoral y en el periodo de transición." (Pellicer, 2017, 84-85). El segundo aspecto es la demolición de la obra de su predecesor Barack Obama en prácticamente todas sus facetas: alianzas en las relaciones internacionales, extensión del seguro médico, regulación de millones de inmigrantes ilegales, política de apertura con Cuba, pacto de desnuclearización con Irán, acuerdo contra el cambio climático, etc. Y actúa de esta manera, porque se siente apoyado por amplias bases sociales de su país —no únicamente por la sociedad rural, a la que tanto aluden los medios, sino por importantes cinturones industriales de las ciudades—. Se ha comprobado que era un error creer que Trump iba por libre y que era una rareza que hubiera conseguido la presidencia de Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. M. Bassets, escritor y corresponsal

en Estados Unidos, entrevistó a muchos ciudadanos/as de Estados Unidos antes y durante la campaña electoral a la presidencia de 2016, compendiando después en un libro algunas frases de sus encuestados de diversos Estados del país: "Los acuerdos de libre comercio provocan el cierre de fábricas de Estados Unidos y dejan sin oportunidad a la clase trabajadora", "Los inmigrantes nos quitan el trabajo y amenazan nuestra identidad", "Estamos hartos de guerras y el próximo presidente debe dedicarse a resolver nuestros problemas, no los de los demás" (Bassets, 2017, 202 y ss.).

Por otra parte, algunos comentaristas europeos presentaron a Trump como un político de punto cero en sus ideas y proyectos políticos. Comentarios también lejos de la realidad, porque Trump ya venía proclamando desde años atrás la necesidad de repliegue de Estados Unidos en la esfera internacional y de concentración en sus propios intereses, la ideología que podemos resumir en *First America*. Una serie de obras suyas con anterioridad al acceso a la presidencia de Estados Unidos lo demuestran, además de otras posteriores (2000, 2011, 2015, 2023). Trump era en el momento de inscribir su candidatura a la presidencia de Estados Unidos un afamado empresario, que ya había escrito algunos libros en lenguaje sencillo y dirigido al gran público sobre estrategia económica y comercial (2016, 2017, 2018).

Considero que Trump es un político empresarial o un empresario metido a político. Es más: no ha dejado de ser empresario en su actividad política, lo que tiene una extraordinaria relevancia, ya que nos encontramos ante el caso excepcional de un mandatario-empresario del planeta. El mismo Trump nos facilita el trabajo, ya que antes de alcanzar la presidencia ha escrito —sólo o en compañía— varios libros —uno de ellos un *best-seller*— donde vuelca su experiencia empresarial de la que se atreve a deducir una serie de consejos, principios y reglas para obtener el éxito. De estas obras pedagógicas se ha escrito bastante, pero no de la aplicación de las mismas a las actuaciones políticas del que ha sido además de empresario el presidente de Estados Unidos.

Obama practicaba la empatía y el diálogo con los adversarios; sabía ponerse en su lugar e intentaba convencerles ofreciendo puntos de convergencia; en la toma de decisiones acudía a sus asesores y departamentos afectados antes de decidir; frecuentemente meditaba y reflexionaba largo tiempo antes de tomar sus decisiones, que se construía en un proceso participativo en el que tomaban parte todos los interesados; cuando llegaba a una decisión, la comunicaba por los procedimientos pertinentes y salvo raras excepciones no daba marcha atrás.

Trump ha cambiado la forma de tomar decisiones; frecuentemente él las asume directamente y las comunica a sus asesores y departamentos; la mayor parte las anuncia en su cuenta de *twitter* con un lenguaje directo. Sus asesores y responsables políticos tienen que dedicarse a atemperar sus exageraciones; posteriormente él mismo matiza sus duras y poco concesivas palabras anteriores. Es una forma de hacer política ciertamente desordenada y a veces caótica, porque no sigue unas reglas en el proceso. La lista de los exabruptos de Trump es enorme, tanto en lo que dice como a quien se lo dice: mandatarios de Reino Unido, Alemania, China, Corea del Norte, Corea del

Sur, las instituciones europeas... han tenido que salirle al paso sorprendidos por las bravatas del presidente estadounidense, impropias de la diplomacia al uso.

Trump aplica el método de los grandes empresarios con éxito a la política. Se dejan guiar por su intuición y únicamente piden consejo a sus asesores cuando les interesan. No es el modo de proceder de todos los grandes empresarios, pero sí de una parte importante de ellos. En una de sus obras pedagógicas sobre cómo llegar a ser un gran empresario Trump da diez consejos, de los que destaco el quinto —Visualízate como ganador— junto con el octavo —Cree en ti mismo— (2017). Con frecuencia lleva estos dos consejos al ámbito de la política. En sus discursos habla de sus éxitos producto de su fe en sí mismo, y pretende que crean que la política es un campo semejante al mundo de las empresas; por ello también alude a la negociación y renegociación en la política como medios ordinarios para conseguir éxito, que él ha practicado con frecuencia; de algunos acuerdos importantes de su antecesor en la Casa Blanca, de los que se ha salido por atentar a los intereses de Estados Unidos según su parecer, después ha pretendido una renegociación del acuerdo o un acuerdo nuevo.

Junto a los consejos las reglas, de las que entresaco la quinta, que dice: "No te dejes limitar por las expectativas" (2017, 14) que detalla con un ejemplo: "No existen reglas exactas, y a veces he cambiado de rumbo en la mitad de una negociación. Mantente flexible y abierto a nuevas ideas". Trump ha aplicado estas reglas a su política. Varias veces ha dado marcha atrás en la negociación política, donde al principio acostumbra a situar sus propuestas en una cota alta para después ante la protesta de sus adversarios bajar a un punto medio entre la alta cota y la cota baja de las exigencias de sus adversarios.

En otras de sus obras de pedagogía empresarial plantea una regla práctica que me parece interesante. A la pregunta sobre qué ha aprendido como gran empresario, él contesta que "ser un visionario, predecir lo que va a pasar en el futuro y mantener esa visión sin claudicar esperando a que se pueda realizar". (2018). También en política se comporta como un visionario que aplica sus reglas empresariales, porque se plantea metas inalcanzables, que sabe que van a encontrar una fuerte oposición. El caso más estridente fue el del muro de México, que no sólo pretendía construirlo, sino que lo pagara el Estado de México. Lo mismo cabe decir de su retirada del Acuerdo de París sobre cambio climático, firmado por casi la totalidad de los Estados del planeta bajo el amparo de Naciones Unidas.

El problema de la aplicación a la política de las reglas del mundo empresarial estriba en que se trata de dos campos con principios y limitaciones diferentes. Cuando un proyecto empresarial fracasa, se perjudica a un determinado número de personas. Cuando lo hace un proyecto político, son muchos más los afectados. El mundo de las empresas y las finanzas siguen unas reglas de competitividad ciertamente duras en la ejecución y poco altruistas en sus fines. En la política hay limitaciones fuertes legales y éticas, y se persigue el objetivo del bienestar de los ciudadanos. Fracasar en las empresas no tiene el calado y consecuencias que un fracaso en la política. Motivos por los que me parece que el intento de Trump de gobernar la primera potencia mundial como si se tratara de una gran empresa no tiene

sentido. Asume un alto riesgo de fracaso y además sus consecuencias negativas pueden ser inenarrables.

Del conjunto de sus consejos, principios y reglas del mundo de los negocios, que Trump considera vigentes para en el escenario de la política, me atrevo a derivar una regla general, que vamos a ver verificada en los tres campos seleccionados de la actividad política del presidente: una regla general, a la que podríamos denominar vulgarmente como regla de "tira y afloja", consistente en que Trump se sube a una cota máxima en un asunto controvertido para después bajar a un punto medio entre lo que él exige y lo que requieren sus adversarios.

El objetivo de este artículo es señalar el cambio de política e incluso de rumbo desde la Administración Obama a la Administración Trump en tres apartados relevantes del programa de gobierno del segundo: Europa, Israel-Palestina y Cuba. La hipótesis principal es precisar el calado del cambio en estos campos; si se trata de reformas o de alternativas, pues hay que tener en cuenta que suele haber una distancia considerable entre la teoría y la práctica, el lenguaje y los hechos, cuando se valoran y contrastan los caracteres y aportaciones de las presidencias estadounidenses, ya que con frecuencia las declaraciones rupturistas no van acompañadas de un distanciamiento real en la política práctica. J. Tovar ha estudiado la política exterior de los presidentes de Estados Unidos y concluye su análisis afirmando: "La agenda (de los presidentes) ha sido solo cumplida en parte y los hechos posteriores han mostrado cierta diferencia entre el discurso electoral y las decisiones producidas una vez asumido el poder" (Tovar, 2017, 191).

La estructura en el desarrollo de los epígrafes de este trabajo sigue el mismo patrón: en primer lugar los hechos, es decir, el relato de las normas, decisiones y acciones más relevantes de la presidencia Trump; en segundo lugar, la justificación proporcionada por el presidente Trump respecto a los hechos; en tercer lugar, mi apreciación crítica, teniendo en cuenta los hechos y su justificación. Los hechos de cada apartado suele comenzar con la política llevada a cabo por el presidente Obama, que sirve de contraste con la política alternativa desarrollada por el presidente Trump.

2. Donald Trump: un presidente difícil de calificar

No procede Trump de las filas de los neoconservadores ni de las de los liberales, sino del conservadurismo nacionalista, que tiene su ejemplo más claro en las palabras que acostumbra a citar en sus alocuciones: *First America*, las palabras que repitió en su discurso de toma de posesión en enero de 2017. La idea fundamental de su filosofía es que América debe atender a sus propios intereses y al bienestar de sus ciudadanos, dejando de intervenir y prestar ayuda en el exterior que no le beneficia. De donde procede su exigencia de que los europeos gasten más en defensa, la imposición de aranceles para no perjudicar la economía doméstica a Europa y China, el abandono de guerras en el exterior que ocasionan la muerte de los soldados del país, el cierre de las fronteras a inmigrantes, que se aprovechan de las prestaciones sociales de Estados Unidos y que —muchos de ellos— son según él delincuentes, el abandono del pacto por el cambio climático que trae-

rá para su país enormes sanciones y el hundimiento de las empresas, etc., etc. Trump en un ultraconservador nacionalista íntegro, porque su nacionalismo afecta a todas las dimensiones.

Es además un ultraconservador populista, que mantiene una relación directa con sus votantes al tiempo que critica las instituciones y el *establishment* —Washington, en sus palabras—, que los tiene olvidados y miran a sus propios intereses.[1] Entiendo que Trump es populista por esa apelación al pueblo estadounidense directamente, al que quiere proteger y atender al margen de los políticos y las instituciones. Es el apartidista que sin partido gana las elecciones para defender a sus conciudadanos de los partidos políticos que les han olvidado. Por ello prefiere emplear su cuenta de *twitter* para sus declaraciones y relaciones, ya que es de fácil acceso. Y como buen populista promete lo que difícilmente puede alcanzar y se ve obligado a dar marcha atrás respecto a sus promesas iniciales. Su forma de comunicar y comunicarse es la de un consumado populista. Antes de presentarse a las elecciones ya era un experto comunicador, con un discurso y lenguaje propios, en el que destacaría los siguientes elementos: crítica al adversario provocándole, apelación a las emociones de la gente poniéndose de su lado, emisión de mensajes directos y comprensibles (como *First America*), muestra de que es el único salvador capaz de solucionar sus problemas, proclamación de que han sido abandonados y olvidados por las instituciones y los políticos, crítica durísima al establishment , denuncia de una conspiración contra su política porque los privilegiados no soportan el cambio.

Y también finalmente Trump es un exponente de la ultraderecha estadounidense, calificación que se ha ganado a pulso por su tratamiento de los inmigrantes, con unos claros matices de xenofobia, que llegan a la cota más alta cuando afirma sin más que los inmigrantes son delincuentes.

En resumen, Trump es en mi opinión un ultraconservador nacionalista y populista.

La escuela liberal, bien representada por su antecesor en la Casa Blanca, defiende los derechos humanos, la cooperación internacional de Estados Unidos, el multilateralismo en las relaciones internacionales. Los neoconservadores, que tuvieron al presidente Bush como uno de sus discípulos, consideran que Estados Unidos debe desarrollar un papel de liderazgo en el mundo, porque es la primera potencia mundial predestinada con una alta responsabilidad ante Dios, la historia y los ciudadanos del país, teniendo como obligación la extensión por el mundo de los valores, la democracia y las libertades. Los nacionalistas defienden el repliegue de Estados Unidos hacia sus propios y concretos intereses coyunturales, abandonando una política exterior intervencionista, especialmente cuando ésta puede acarrearle perjuicios e incertidumbres. Trump forma parte de este tercer grupo, que conecta con la sociedad rural y núcleos industriales de su país, que ven que el sueño americano es difícil de alcanzar

1 "Populismo" es una expresión versátil, quizás demasiado manoseada como etiqueta que se coloca a personajes que nada tienen que ver entre sí. Para conocer la versatilidad del concepto "populismo", con una completa abarcabilidad de sus matices y puesta al día, interesa leer el monográfico "Populismo: la democracia en cuestión" de la *Revista Internacional de Pensamiento Político*, vol. 12, 20017, 127-283.

para ellos y que los inmigrantes contribuyen a que sea un mero espejismo.

El neoconservador George Bush era partidario de la propagación de los valores y la democracia de su país por el mundo, siendo Estados Unidos el líder mundial indiscutible. Obama descendía a un papel más humilde: Estados Unidos como *primus inter pares*, como líder en una coalición de Estados, donde se tomaran las decisiones importantes. Trump rechaza la idea de líder mundial indiscutible y de líder de coalición. Estados Unidos es la gran potencia mundial que debe de atender a sus beneficios e intereses, y éstos deben ser los rectores de su política interior y exterior. Es más: piensa que un liderazgo mundial con las obligaciones y prestaciones, que supone el ejercicio de este papel, únicamente contribuiría a que Estados Unidos fuera más pobre y menos fuerte, siendo rebasado por otras potencias. El nacionalismo conservador lleva a Trump a replegar a Estados Unidos sobre sí mismo y a abandonar su papel de líder mundial intervencionista. Como afirma Carlota García Encina la política de "América primero" hace que se resienta el liderazgo mundial de Estados Unidos. Estas son las palabras de la autora: "El nuevo presidente ha prometido "hacer América grande otra vez" ("Make America great again") renegociando los acuerdos internacionales que consideraba injustos y perjudiciales para el país y cuestionando el valor de las instituciones internacionales. Así, desde enero de 2017 la política de "América primero" (America first) ha comenzado a llevar al país a una paulatina abdicación en su papel de potencia global y de líder del mundo libre." (García Encina, 2018, 8). La consecuencia de este conservadurismo nacionalista de Trump fue el progresivo aislacionismo de Estados Unidos, que se retiró en tiempos de la presidencia de Trump de la escena internacional, de los pactos y acuerdos con sus aliados e incluso adversarios, como Irán y Cuba.

He definido a Trump como un ultraconservador nacionalista y populista, pero estratégicamente carece de reglas de procedimiento fijas. Esta forma de estrategia hace que algunos estudiosos le consideren falto de ideología, de cuyo calificativo discrepo. Álvaro Vargas Llosa dice de Trump que no tiene una ideología definida, como es frecuente en los populistas. "Como populista -dice- Trump no tiene una definición ideológica cabal. Por eso hay contradicciones flagrantes en sus políticas y no pocas contramarchas tácticas" (Vargas, 2017). Por otro lado, J. Tovar asegura que carece de una ideología estable y que no es posible identificar en política exterior una doctrina, por lo que cabe decir que representa una "anti-doctrina". Afirma de Trump que "teniendo en cuenta la considerable modificación de planteamientos y posicionamientos, es muy difícil identificar una ideología o posicionamiento doctrinal estable". (Tovar, 2017, 192-193). Quizás sea este autor demasiado exigente con Trump, pues la mayoría de los presidentes estadounidenses se han caracterizado por no aplicar una doctrina concreta en política exterior.

Tampoco participo de la singularidad con la que algunos han caracterizado al personaje. Trump se ha ganado las calificaciones de narcisista, ególatra, extravagante, incoherente, impredecible, de gruesas palabras, etc.; con éstas y otras adjetivaciones semejantes le han calificado los comentaristas. Incluso algunos calificativos lindan con la injuria o son directamente injuriosos. Así A. James dice de él que

reúne los requisitos de la imbecilidad y sigue el proceder del imbécil, que "actúa impulsado por la firme convicción de ser especial y no estar sujeto, por lo tanto, a las normas de conducta comunes a todos los demás" (James, 2016, 13).

En mi opinión, mirando las declaraciones y discursos de los presidentes de Estados Unidos desde el presidente Kennedy, que he analizado cuidadosamente, Trump se caracteriza por dos exageraciones expresivas: respecto a él mismo una admiración desmedida[2] y respecto a sus adversarios una descalificación brutal, especialmente de los medios de comunicación.[3] Pero esto no debe llevarnos a sostener que es un presidente singular en la gran política, la de altos vuelos, pues Trump no hace sino responder a los ciclos históricos de la alternancia de las presidencias demócrata y republicana en la Casa Blanca. D. Estulin utiliza los términos "periodos de expansionismo" y "periodos introspectivos" (Estulin, 2017, 4). No es la primera vez que en Estados Unidos a una política expansiva le siga una política retraída y replegada sobre sí misma. Son ciclos históricos en la alternancia presidencial, que va más allá del tránsito de una presidencia a otra. Así, p. e., Obama se preocupó de ejercer un liderazgo mundial, como otros presidentes que le precedieron, y de atender a los problemas del mundo, pero Trump renuncia a este liderazgo y se centra en que Estados Unidos sea la primera potencia mundial en competencia con las demás; *First America* en su frase consabida. A veces los estudiosos sitúan la expansión en los presidentes demócratas y el retraimiento en los presidentes republicanos. Pero no es cierto. Hay muchas excepciones. Ahí tenemos el caso de un presidente republicano expansivo, como es George W. Bush, quien asumía el papel de líder mundial y pretendía extender los valores de su país —la democracia y las libertades— por todo el mundo, incluso derrocando dictaduras.

2 Ambas actitudes de auto-admiración y negación del adversario no aparecen con la evolución de su mandato, como resultado de los sinsabores de la contienda política, sino ya desde el principio; transcurrido menos de un mes de su toma de posesión del cargo en una extensa rueda de prensa decía lo siguiente: "Hemos hecho un progreso increíble… Ningún presidente ha hecho lo que nosotros hemos conseguido… Nunca ha habido un presidente que haya hecho tanto en tan poco tiempo". Repare el lector que cuando Trump pronuncia estas palabras no ha pasado ni un mes desde que tomó posesión. (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-press-conference/

3 De Trump puede afirmarse que es imprevisible en sus decisiones, pero dos cosas no cambian en él hasta la fecha, como he indicado: la crítica contumaz a los medios y a la política llevada a cabo por el presidente Obama. La crítica durísima a los medios es persistente; ya pocas semanas después de tomar posesión del cargo arremetía contra los medios en la rueda de prensa citada en la nota anterior, de 16 de febrero de 2017, afirmando: "La prensa se ha vuelto tan deshonesta que, si no hablamos de eso, estamos haciendo un flaco favor al pueblo estadounidense, un tremendo perjuicio. Tenemos que hablar sobre eso para descubrir qué está pasando, porque la prensa sinceramente está fuera de control. (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-press-conference/

3. Europa

3.1. Hechos

El presidente Obama apenas después de haber tomado posesión de su primer mandato marchó a Bruselas para reunirse con sus socios europeos para pedirles colaboración y ayuda mutua y asegurar-

les que venía con la intención de restaurar "las alianzas rotas"; se refería a las alianzas rotas por su antecesor en la Casa Blanca, el presidente Bush. Bush estaba muy molesto con Europa, porque no le había seguido en su guerra contra Irak emprendida en marzo de 2003. Únicamente encontró el apoyo del primer ministro inglés, Tony Blair, y del presidente español, José María Aznar. Obama consiguió recomponer las alianzas y convenció a los europeos de que mutuamente se necesitaban, Estados Unidos y Europa frente a peligros comunes, especialmente por aquellas fechas el peligro del fanatismo y el terrorismo musulmán.

También Trump, apenas tomada posesión de su mandato, se adelantó a criticar a la Unión Europea por entender que en sus relaciones con Estados Unidos aquélla salía ganando injustamente tanto en materia económico-comercial como en estrategia militar. Había un desequilibrio entre lo que aportaban. Europa se beneficiaba económicamente y además no invertía en gastos militares lo que le correspondía. El distanciamiento de Trump con Europa ha sido progresivo desde el comienzo de su mandato. Hay tres hitos importantes; primero, el abandono del pacto sobre el cambio climático; después la ruptura del pacto nuclear iraní junto con los Estados europeos (que tanto le costó conseguir al presidente Obama); finalmente, la imposición de nuevos aranceles en las relaciones comerciales de Estados Unidos con Europa. Bien es verdad que en materia de aranceles y de una nueva política comercial no ha sido únicamente Europa el blanco de la diana del presidente norteamericano, pues también ha dirigido sus críticas e impuesto nuevos aranceles a sus vecinos –Canadá y México- del Tratado del Atlántico Norte y a China.

El periódico digital *El Comercio* denota la animosidad del presidente estadounidense contra Europa acudiendo a todos los frentes posibles; no sólo arremetió en Bruselas directamente contra sus socios europeos, sino que aprovechó su estancia en Londres para aconsejar a la primera ministra que plantara cara a Europa con un recurso judicial. "En Bruselas —afirma— Trump convirtió a sus aliados de la UE y de la OTAN en enemigos y no se cansó de repetirlo. Y a su paso por Londres alentó un Brexit duro y hasta se permitió 'aconsejarle' a la primera ministra, Theresa May, que entablara un juicio contra la UE".[4] Pero ahí no quedó la cosa, pues poco después desde Reino Unido Trump saltó a Helsinki para tener una reunión programada con el presidente ruso Putin, en la que los resabios contra Europa claramente manifiestos dio paso a una amigable y hasta cómplice conversación, prometiéndose ambos futuras reuniones, entendimiento y acuerdos; en esta animada conversación Trump llegó a afirmar que le prestaba credibilidad a las palabras del presidente ruso sosteniendo que Rusia no había intervenido en las últimas elecciones estadounidense frente a las pesquisas de las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Daba más crédito a las palabras de Putin que a los servicios de seguridad de Estados Unidos.

La actitud de Trump en su reunión con Putin desató la caja de los truenos en su propio país, ya acostumbrado a las algaradas de su presidente, pero que en este caso ha visto que ha tocado fondo en sus desafíos. Se han levantado contra Trump no solo, como era de esperar y ya es una

4 https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/gira-donald-trump-europa-peor-esperaba-virginia-rosas-noticia-537222

línea constante en la esfera pública estadounidense, los demócratas, sino un número significativo de republicanos, y además el tono de la voz de los críticos ha sido más alto, llegando algunos al punto de llamar "traidor" a su presidente.

3.2. Justificación del presidente Trump

En realidad no es la suya una actitud nueva y aislada. Tiene un claro precedente en el presidente George Bush, quien también se enfrentó a Europa por no acompañarle en la guerra contra Irak y en su lucha contra el terrorismo islámico. Bush, apoyado por los neoconservadores que ocuparon importantes puestos en su administración, tenía un programa de guerras sucesivas contra el eje del mal, en el que situaba a Irak, Irán y Corea del Norte, y esperaba el apoyo de Europa, que, sin embargo, se apartó de proyecto bélico. Bush criticaba a Europa por su renuncia a la lucha contra el terrorismo en el grado que él esperaba tras los sucesos de 2001.

La crítica a Europa de Trump presentaba otra motivación: su escasa contribución a los gastos de defensa bélica gestionada por la OTAN. Consideraba injusto que el gran peso presupuestario cayera en la espalda de Estados Unidos. El problema de Trump fue que al tiempo que criticaba a Europa, la tradicional aliada de Estados Unidos desde la guerra fría, también se entrevistaba y hablaba bien de quien ha-bía sido la enemiga tradicional de Estados Unidos, Rusia, con el agravante de las sospechas sobre la implicación de Putin en las elecciones presidenciales, que precisamente llevaron a Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La justificación en último caso es la consecuencia del eslogan que Trump esgrime en todos sus discursos y que probablemente le llevó a la presidencia de Estados Unidos: *First America*. Eslogan que aplica a cualquier asunto. El enorme gasto exterior —desde la guerras emprendidas y mantenidas hasta las generosas ayudas a los países en desarrollo— se convierte en un palo entre las ruedas para que Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial.

3.3. Crítica

La actitud y palabras de Trump son incomprensibles para los europeos y buena parte de los estadounidenses, pues se oponen a la línea de política exterior de sus antecesores, que han visto en Rusia no un aliado, sino un enemigo siempre acechante y muy exigente con el dominio absoluto de su zona estratégica de control. En tiempos de Obama Putin se apoderó de Crimea y apoyó al presidente sirio Asad en contra de Europa y de Estados Unidos. Llamar "enemigo" a Europa y buscar la alianza con Putin es trastocar la tradicional política exterior estadounidense. Pero lo importante para Europa es que este cambio de política afecta más si cabe a los europeos que a Estados Unidos, pues son éstos los más cercanos y vulnerables a la presión del presidente ruso.

¿Qué podía traer consigo esta nueva política europeo-rusa de Trump? La editorial del periódico *La Tercera* desvelaba las consecuencias de las imprudentes actuaciones del presidente en Europa "Por ello, lo sucedido en Helsinki, además de debilitar el mandato de Trump y minar su rol en la escena internacional,

puede terminar afectando al apoyo a los republicanos en las próximas elecciones de noviembre, donde se renueva toda la Cámara de Representantes y parte del Senado. Y una eventual pérdida del control del Congreso por parte del Presidente abre un escenario de imprevisibles consecuencias para la segunda mitad de su mandato".[5] No fue así. Trump siguió teniendo el apoyo de sus bases sociales y los líderes republicanos adoptaron el papel de convidados de piedra ante los acontecimientos. Ahora, ante las elecciones presidenciales de 2024, Trump continúa apoyado por el partido republicano, que le ha nominado para la presidencia y nuevamente se ha doblegado a su política. La fuerte personalidad de Trump ha colocado al partido republicano en un segundo plano.

4. Palestina-Israel

Este apartado del artículo tiene especial interés ante la posibilidad de que Trump alcance un nuevo mandato presidencial en las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Teniendo en cuenta sus actuaciones de protección y defensa incondicional de Israel frente a Palestina durante su mandato presidencial, que se describen a continuación, es de presumir que siga la misma política, si accede de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. El fiel amigo Israel —como le llama Trump— contará con el no menos amigo fiel Estados Unidos, que le ayudará en su programada política de exterminio genocida de los palestinos.

4.1. Hechos

Donald Trump sorprendió el 6 de diciembre de 2017 declarando que la embajada de Estados Unidos en Israel se trasladaría desde Tel Aviv a Jerusalén.[6] La declaración era como mentarle al diablo a los palestinos, para los que Jerusalén es su ciudad mítica y capital, injustamente robada por los israelíes en la guerra de 1967. Por si esto fuera poco, además posteriormente Trump declaró que en mayo de 2018 se ejecutaría el traslado coincidente con la fecha del aniversario de la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 ¿Qué necesidad había de llevar a este punto un conflicto histórico en cuyo proceso interminable Estados Unidos había al menos guardado las formas desempeñando el papel de mediador?

En enero de 2018 el Gobierno israelí apoyado por las leyes votadas en el Parlamento aprobó nuevos asentamientos de israelíes en territorio palestino de Gaza y Cisjordania con un evidente plan de ir dominando y fragmentado el hábitat de las poblaciones palestinas. Política permitida por Trump (frente a la reconvención de algunos de sus antecesores en la Casa Blanca)

Posteriormente con ocasión de las visitas y reuniones con el presidente israelí Netanyahu en Washington y Jerusalén Trump ha renunciado al tradicional papel de mediador entre las partes en conflicto despachando el asunto diciendo que aceptará lo que decidan las partes, que es tanto como dejar las manos libres a Israel para que siga practicando su política de dominio y acorralamiento de los pales-

5 https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-cuestionada-gira-trump-europa/251400/

6 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/

tinos mediante nuevos asentamientos en las zonas palestinas de Gaza y Cisjordania. El presidente habla de la necesidad de mejorar las relaciones entre las partes, de llegar a un pacto de paz definitivo y ahí se queda. El mismo guión en las primeras reuniones (que continúa en las siguientes): la reunión en la Casa Blanca de 15 de febrero de 2017 y la reunión en Jerusalén de 23 de mayo de 2017.[7] Evasivas a preguntas sobre el tema en todas las reuniones sucesivas celebradas con Netanyahu, primer ministro israelí: 18 de septiembre de 2017, 25 de enero de 2018, 5 de marzo de 2018. En tanto que la respuesta del primer ministro israelí a las preguntas sobre la cuestión de los dos Estados es siempre la misma: es necesario que Palestina cumpla dos requisitos: reconocer el Estado de Israel y crear una zona de seguridad de Israel.

Bastante menos se ha reunido Trump con el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, quien siempre le ha propuesto la necesidad de la creación de dos Estados, encontrando el silencio de Trump como respuesta.[8] Como muestras las reuniones de 23 de septiembre de 2017 y 20 de septiembre de 2017. Obama, en cambio, siempre insistía que la creación de los dos Estados debería ser el resultado de las negociaciones de paz.

Para compensar Trump ha propuesto una vía de comercio entre israelíes y palestinos, que les ha sonado a mofa a los líderes palestinos.

Trump es sin dudas uno de los presidentes más proteccionistas de los intereses israelíes. Su afán proteccionista le ha llevado a un hecho sin precedentes: retirarse del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por sus constantes sanciones a Israel en su lucha contra Palestina. Ninguna protesta contra el amigo fiel Israel. Silencio ante la continuación de los asentamientos israelíes en tierras palestinas. Israel es un amigo especial y por ello la web de la Casa Blanca le dispensa un trato de evidente favor, publicando la historia de amistad de Estados Unidos e Israel y dando cuenta de la participación de aquél en los actos de celebración del centenario de la creación del Estado judío el 16 de mayo de 1948. Las autoridades palestinas se han opuesto con durísimas críticas a la nueva política rompedora de Trump, en el que ya no ven un mediador, sino un protagonista de parte y fomentador exclusivo de los intereses de Israel contra los palestinos.[9]

7 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-netanyahu-israel-joint-press-conference/ En esta primera reunión de 15 de febrero de 2017 Trump sienta las bases de su actitud con el problema palestino-israelí, que seguirá en las demás declaraciones futuras

8 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-abbas-palestinian-authority-joint-statements-2/; https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-abbas-palestinian-authority-bilateral-meeting/

9 El diario *El País* recoge las palabras del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat: "Tras la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el traslado de la Embajada… muestra la determinación de la Administración de EEUU de violar la legislación internacional, destruir la solución de los dos Estados y de herir los sentimientos de los palestinos, así como de todos los árabes, musulmanes y cristianos en todo el globo". https://elpais.com/internacional/2018/02/23/actualidad/1519413545_786171.html

4.2. Justificación del presidente Trump

Trump repite hasta la saciedad que el problema palestino es cosa de las partes implicadas y que a él le parecerá bien la decisión que tomen. Ya en la primera reunión citada del presidente con el primer ministro de Israel, celebrada antes de un mes desde su toma de posesión de la presidencia, expresa que la paz entre Israel y Palestina es asunto de ambas partes. "Estados Unidos trabaja hacia un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos —afirma—. pero son las partes mismas las que deben negociar directamente tal acuerdo".[10] Subrayo la palabra "directamente". A la intervención de un periodista, que le pregunta si ha abandonado la solución de los dos Estados, contesta que "le parece bien lo que prefieran ambas partes".

Las anteriores presidencias se habían propuesto como meta lo que parecía claramente justo, sobre todo después de la guerra de 1967, en la que Israel arrebató a Palestina la mayor parte de su territorio, dejando arrinconados a los palestinos en las zonas de Gaza y Cisjordania, es decir, la creación de un Estado palestino junto al ya creado Estado de Israel en 1948.

La percepción de Trump sobre los palestinos aparece a veces en sus declaraciones y en las webs de la Casa Blanca. Muy ilustrativo el pasaje de esta web, de fecha 9 de febrero de 2018, titulado "Para salvar a Gaza, enciende las luces", donde se destacan los crímenes de los palestinos, el uso para la lucha terrorista de las ayudas recibidas por Palestina y la complicidad de Irán, en tanto se guarda un absoluto silencio sobre la política de dominio de Israel contra Palestina y sus periódicas incursiones de exterminio en territorio palestino, asesinando a civiles, mujeres y niños. En el pasaje se dice: "Esta crisis (la palestino-israelí) es responsabilidad de Hamas, el grupo terrorista fundamentalista que ha controlado el área desde 2007. Mientras que los ataques de Hamas contra Israel están bien documentados, la explotación de Hamas del pueblo que dice gobernar es espantosa en sí misma… Solo cuando el respeto por la vida humana y la dignidad humana reemplacen al terrorismo, la población de Gaza comenzará a reconstruir su sociedad y a hacer crecer su economía, y encenderá las luces".[11]

4.3. Crítica

Fin del papel de mediador de la única potencia que puede asegurar una política de paz entre israelíes y palestinos. Comportará también el fin de la solución de los dos Estados, la única razonable y garantía para una paz futura. El fin de la mediación es también el fin de la solución razonable y el fin de esta solución el fin de la paz entre dos pueblos. Y también el final del objetivo perseguido por la política exterior de los últimos presidentes estadounidenses, partidarios de la coexistencia de dos Estados, esto es, la creación un nuevo Estado palestino junto al ya existente Estado de Israel desde 1948. La presencia de un doble Estado contentaría a los palestinos y aportaría seguridad a los israelíes (adver-

10 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-netanyahu-israel-joint-press-conference/

11 https://www.whitehouse.gov/articles/save-gaza-turn-lights/

tencia muy presente en las alocuciones del presidente Obama)[12].

Pero en la práctica Trump no se ha quitado de en medio de las negociaciones y se ha lavado las manos, sino que se ha puesto de parte de Israel contra Palestina. Hay dos acciones clave: la retirada del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la supresión de la ayuda y fondos a los palestinos.

Por otro lado, la respuesta del primer ministro israelí: es necesario que Palestina cumpla dos requisitos: reconocer el Estado de Israel y crear una zona de seguridad de Israel, tiene acentos demagógicos, porque Palestina reconoce el Estado de Israel desde hace mucho tiempo y lo recuerda el presidente palestino en sus reuniones con el presidente Trump. Pretender una zona de seguridad esconde cierto cinismo cuando Israel no para de establecer asentamientos en territorio palestino.

El problema de la decisión de Donald Trump de mantenerse al margen de las negociaciones permite que Israel, con un ejército y tecnología militar bien pertrechados, continúe su política de asentamientos en los pocos territorios que le queda a Palestina. La decisión de Trump es como poner al lobo a guardar las ovejas. Se trata en mi opinión de la declinación de una responsabilidad histórica, porque es Estados Unidos el único país con capacidad para alcanzar la paz.

Todos los presidentes de Estados Unidos han sido unilaterales, unos más y otros menos, en función de las circunstancias externas. Todos hablan de multilateralidad, de actuar en coalición con los aliados y Naciones Unidas, pero también de actuar unilateralmente, si es necesario cuando los intereses nacionales están en juego. Pero Trump se lleva la palma del unilateralismo. Y Palestina es el mejor ejemplo. No atiende a las resoluciones de Naciones Unidas en los casos de Palestina, Cuba e Irán. El de Palestina es el caso más sangrante, porque existía una línea de actuación de Naciones Unidas y las presidencias de Estados Unidos, que ahora ha quebrado Trump estrepitosamente, acabando con el proyecto de los dos Estados y permitiendo que Israel siga con su política de dominio sobre los palestinos. Consecuencia del unilateralismo es la vulneración de una norma internacional, la resolución 478 del Consejo de Seguridad, según la cual el destino de Jerusalén dimanará del acuerdo de Israel y Palestina y no la imposición de una parte sobre la otra.

5. Cuba

5.1. Hechos

Después de más de cincuenta años de guerra fría y hostilidades entre Estados Unidos y Cuba las relaciones diplomáticas se reiniciaron en julio de 2015. Ya medio año antes, a finales de 2014 anunció Obama el comienzo de una nueva relación de amistad rompiendo el deshielo imperante. Las nuevas relaciones se consolidaron con la visita de Obama a Cuba en marzo de 2016, el último año de su segundo mandato. Obama presentía que la

12 El papel mediador de Estados Unidos se había iniciado con los Acuerdos de Oslo de 1993 entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, en los que se firmó por ambas partes que el territorio palestino se repartiría entre dos Estados, Israel y Palestina. Es la solución defendida por Naciones Unidas.

nueva situación necesitaba consolidarse cuanto antes y por eso daba rápidos pasos en el último tramo de su presidencia, para que su sucesor en la Casa Blanca encontrara una política ya estable y unas relaciones firmes. Lejos estaría de la mente de Obama lo que iba a suceder a su política cubana con el nuevo presidente Trump. Desgraciadamente Hillary Clinton, que hubiera sido con seguridad la albacea de la política de distensión diseñada por Obama, no ganó las elecciones presidenciales.

Obama tomó una serie de medidas en el marco de estas nuevas relaciones: Cuba dejó de ser declarado un país cómplice del terrorismo, se restablecieron relaciones diplomáticas, se iniciaron vuelos comerciales y se permitió a los estadounidenses hacer turismo en la isla con una lista de motivos que no eran controlados, entre otras medidas.

La situación cambió con la llegada al poder de Trump. Casi mes antes de su visita a Miami y la "Pequeña Habana" celebró el 20 de mayo de 2017 la independencia política de Cuba con un mensaje en el que diferenciaba al régimen cubano opresor del pueblo cubano amante de las libertades, al que se comprometía a ayudar. Éstas eran las palabras esenciales del mensaje: "El despotismo cruel no puede extinguir la llama de la libertad en los corazones de los cubanos, y la persecución injusta no puede alterar los sueños de los cubanos de que sus hijos vivan libres de la opresión. El pueblo cubano merece un gobierno que defienda pacíficamente los valores democráticos, las libertades económicas, las libertades religiosas y los derechos humanos, y mi Administración se compromete a lograr esa visión"[13].

Poco después aprovechó su visita el 16 de junio de 2017 a la Pequeña Habana en Miami, lugar de residencia de los cubanos exiliados y anticastristas, para pregonar el cambio de rumbo de Estados Unidos con Cuba y adelantar una serie de medidas contra la política de su antecesor[14]. Estaba obligado a ello porque contribuyeron estos cubanos al éxito presidencial de Trump, a los que había prometido en la campaña electoral el fin de la política de apertura de Obama. Su discurso es el emblema ideológico del cambio de rumbo de la política estadounidense. El presidente firmó un memorándum tras terminar su discurso con el anuncio de estas medidas, que serían implementadas a corto plazo.

El mismo día de la visita de Trump a Miami la web de la Casa Blanca publica una hoja informativa resumiendo los puntos de la nueva política con Cuba, que por su relevancia transcribo a continuación en sus partes esenciales:

1. Canalización de las actividades económicas lejos del monopolio militar cubano, Grupo de Administración Empresarial (GAESA), incluyendo la mayoría de las transacciones relacionadas con viajes, mientras se permite a las personas y entidades estadounidenses desarrollar vínculos económicos con el sector privado y de pequeñas empresas en Cuba. La nueva política deja en claro que el principal obstáculo para

13 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-cuban-independence-day/

14 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-policy-united-states-towards-cuba/

la prosperidad y la libertad económica del pueblo cubano es la práctica del ejército cubano de controlar prácticamente todos los sectores rentables de la economía.

2. Continuación de las restricciones de viaje para hacer cumplir mejor la prohibición legal del turismo de Estados Unidos a Cuba. Los viajes con fines educativos no académicos se limitarán a viajes en grupo. El viaje individual permitido por la administración de Obama estará prohibido.
3. Reafirmación del embargo estatutario de los Estados Unidos a Cuba y oposición a los llamamientos en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su terminación[15].

Resalto la relevancia que Trump y su Administración conceden al primer punto indicado: que las relaciones económicas con Cuba contribuyan a enriquecer al ejército y a los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos. Un día antes de la visita y discurso del presidente en Miami tuvo lugar una larga reunión de los técnicos del nuevo proyecto de política con Cuba con los periodistas, donde aquéllos recalcaron la especial preocupación de que la apertura con Cuba únicamente comporte beneficiar a los opresores del régimen y no a los cubanos[16].

Las medidas fueron ejecutadas en noviembre de 2017 con la prohibición de los viajes individuales a Cuba (exigencia de viajes en organizaciones autorizadas) y el señalamiento de empresas concretas ligadas a las autoridades cubanas con las que los estadounidenses no podrían llevar a cabo relaciones comerciales (entre ellas una larga lista de hoteles) También en noviembre de 2017 nuevamente el Gobierno de Estados Unidos rechazó la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas prohibiendo el embargo a Cuba.

5.2. Justificación del presidente Trump

Se exponen en el discurso citado pronunciado en el teatro Manuel Artime, que lleva el nombre de un líder cubano participante en el desembarco de la bahía de Cochinos, las razones de este cambio de política propiciado por Trump: el fracaso de la política de Obama, la lucha contra la dictadura, la ausencia de libertad de los cubanos, la inexistencia de elecciones libres y de partidos, el alineamiento internacional de Cuba[17].

Como en otras materias, Trump critica con palabras gruesas la política aperturista de Obama con Cuba. Es para él un desastre -término que suele utilizar contantemente para desacreditar las políticas de su antecesor-, porque piensa que contribuye a sostener al régimen castrista. “Es difícil

15 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/fact-sheet-cuba-policy/

16 En este sentido el director de los técnicos afirmaba: “El motivo básico de la política era su preocupación (del presidente) de que la política anterior fuera a enriquecer al ejército cubano y los servicios de inteligencia que contribuyen tanto a la opresión en la isla. Y eso es lo contrario de lo que quería lograr, que es que los beneficios de cualquier comercio económico con Estados Unidos vayan al pueblo cubano. Entonces ese sería nuestro principio rector”. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/background-briefing-presidents-cuba-policy/

17 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-policy-united-states-towards-cuba/ Las citas que siguen en este epígrafe pertenecen a este discurso de Trump, de gran resonancia en la zona del exilio cubano.

pensar —asegura— en una política que tenga menos sentido que el acuerdo terrible y equivocado de la administración anterior con el régimen de Castro… Hicieron un trato con un gobierno que propaga la violencia y la inestabilidad en la región". La política de Obama es perversa porque alimenta al régimen y no a los cubanos. "La disminución de las restricciones de viaje y comercio —continúa— por parte de la administración anterior no ayuda al pueblo cubano, solo enriquecen al régimen cubano. Las ganancias de la inversión y el turismo fluyen directamente hacia el ejército. El régimen toma el dinero y es dueño de la industria. El resultado de la acción ejecutiva de la última administración ha sido solo más represión y un movimiento para aplastar el movimiento pacífico y democrático."

El argumento básico es la crítica a un régimen dictatorial donde están ausentes las garantías democráticas. "No levantaremos las sanciones contra el régimen cubano —afirma Trump— hasta que todos los presos políticos sean liberados, se respeten las libertades de reunión y expresión, se legalicen todos los partidos políticos y se programen elecciones libres y supervisadas internacionalmente". Un régimen falto de democracia y libertades, que además se caracteriza por su brutalidad, del que Trump afirma ante el auditorio entregado de Miami: "Muchos de ustedes fueron testigos de terribles crímenes cometidos al servicio de una ideología depravada. Vieron los sueños cautivos de generaciones… caras que desaparecieron, inocentes encerrados en prisiones y creyentes perseguidos por predicar la palabra de Dios… las Mujeres de Blanco magulladas, ensangrentadas y capturadas en su camino hacia la Misa… los gritos escalofriantes de los seres queridos o los sonidos de los escuadrones de fuego que atraviesan la brisa del océano".

También aparece el motivo del alineamiento de Cuba con potencias enemigas como Corea del Norte y Venezuela, a las que cita en su discurso: "El régimen de Castro ha enviado armas a Corea del Norte y ha alimentado el caos en Venezuela".

5.3. Crítica

La pregunta obligada y derivada de esta política de cierre de Trump es la siguiente: ¿A quién beneficia? ¿Es más positiva para la transición a la democracia que la política de apertura del presidente Obama? Obama justificaba su política porque: a) seis decenas de años de embargo y ausencia de relaciones en un ámbito de guerra fría no había hecho sino justificar al régimen cubano debido a la presión y hostilidad externa e impedir la transición a la democracia, y b) había creado una mala imagen de Estados Unidos en América Latina. Por ello se imponía un cambio de política, una política de apertura e intercambio que ha disfrutado de menos de dos años y no sabemos qué frutos hubiera podido aportar. Una política lamentablemente *in albis*, que ha sido inmediatamente desmontada por la nueva administración estadounidense. En mi opinión hay tres argumentos: estratégico, ético y jurídico (basado en la legalidad internacional) contra la política de cierre de relaciones del nuevo presidente. Respecto al primero la nueva política de Obama habría llevado a los cubanos a contemplar nuevos aires, valores, actitudes, ideas, que les habría conducido a cuestionar la filosofía y estrategias del régimen cubano en una época en la que precisamente este régimen por obra de Raúl Castro iniciaba

a su vez los pasos hacia el aperturismo con limitados márgenes de libertad y de liberalismo económico (especialmente la política de pequeños empresarios autónomos o "cuentapropistas" en el argot de la isla). El endurecimiento de la política contra Cuba auspiciada por Trump ha provocado ahora en cambio el cierre del régimen sobre sí mismo. Por otro lado hay un argumento moral contra la política de embargo desde 1965 llevada a cabo por los presidentes de Estados Unidos, ahora retomada por Trump: no deben los cubanos cargar con la culpa de sus autoridades; no se justifica su empobrecimiento y condiciones miserables de vida debido a las políticas de unas autoridades que ellos no han tenido la oportunidad de elegir en unas elecciones libres y con garantías. Finalmente el tercer argumento de carácter jurídico-internacional: Estados Unidos es miembro de Naciones Unidas y por lo tanto está obligado a respetar las normas que de ella dimanan. Pero es el caso que constantemente mantiene el embargo y bloqueo contra las decisiones tomadas por este organismo en resoluciones constantes. Y además no faltan las declaraciones de los altos cargos de la administración Trump desprestigiando a Naciones Unidas. Como anteriormente George Bush, Trump se rodeó de neoconservadores, que defienden una política exterior agresiva contra las dictaduras y el unilateralismo de Estados Unidos en política exterior, como Jhon Balton[18], secretario de Seguridad Interior, y de ultraderechistas estadounidenses, como Marco Rubio, senador por Florida[19].

La razón fundamental de Trump y la que más esgrime, la falta de democracia y libertades en Cuba, presenta un grado de cinismo, porque Estados Unidos mantiene relaciones de todo tipo con regímenes tiránicos. Siempre ha sido así. También durante las presidencias más progresistas, como las de Kennedy y Obama. Por lo tanto, el argumento se cae por su base. Más plausible es la razón de su compromiso en la campaña electoral ante los cubanos de Florida, a los que en parte debe su victoria presidencial. Hay una razón expresa y otra encubierta, y probablemente pesa más en su ánimo la segunda que la primera. Prueba de ello es que a Trump no le preocupa nada negociar con regímenes tiránicos, con menos rubor que a otros presidentes, y de su ideario no forma parte la difusión de la democracia y las libertades —los valores americanos— por el mundo, como fue el caso de George W. Bush y sus maestros neoconservadores. Tras los acontecimientos del 11S de 2001 Bush cambió y se rodeó de personas pertenecientes al movimiento ideológico neoconservador, que tenía como uno de sus principales principios la propagación de los ideales americanos de democracia y libertad por el mundo, con la convicción de que Estados Unidos era una nación predestinada para esta función, y por consiguiente tenía una espe-

18 Balton ya había sido embajador ante Naciones Unidas en la Administración de George W. Bush. Causó sensación el nombramiento, porque en la prensa repetidas veces había declarado que Estados Unidos no tenía que someterse a los dictados de Naciones Unidas, defendiendo un crudo unilateralismo de su país en las relaciones internacionales.

19 El senador envió un tuit con estas palabras: "Nikki Haley le recuerda a la ONU que no tiene poder sobre EE. UU. y por tanto ningún poder sobre el embargo a Castro". Se refería a la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. https://www.nytimes.com/es/2017/11/08/eeuu-cuba-embargo-hoteles-trump/

cial responsabilidad antes Dios, la historia y los ciudadanos estadounidenses[20].

Tampoco figura en su ideario la preocupación por los derechos humanos de Barack Obama, habitual en sus discursos, aunque en los supuestos de conflicto siempre prevalecían los intereses nacionales sobre los derechos humanos. J. Cepedello ha analizado este conflicto entre derechos humanos e intereses nacionales en las guerras y grandes decisiones políticas de Obama[21].

La razón del alineamiento de Cuba con regímenes políticos dictatoriales, como Corea del Norte y Venezuela, es también cínica, porque Estados Unidos mantiene relaciones importantes con dictaduras crueles, a las que provee de ayuda y armamento. La más significativa: Arabia Saudita.

La política de cierre con el argumento de que la ayuda estadounidense beneficia al ejército y al régimen cubano es de un carácter circunstancial, porque en las negociaciones y acuerdos quien presta ayuda puede establecer condiciones y asegurar el buen uso de las prestaciones. Es el argumento habitual de quienes desean romper un acuerdo que ya no le interesa.

20 Véase Soriano, R., Mora, J.J., 2006 (especialmente las voces "Estados Unidos" "excepcionalismo americano", "pax americana", "democracia", "libertad").

21 Véase del autor "Obama y las Primaveras Árabes: el influjo de una concepción neocolonial del mundo islámico en la actuación política del presidente Barack H. Obama", en vol. col. coordinado por Ramón Soriano, Barack Obama: Política y Derechos, Aconcagua Libros, Sevilla, 2015, pp. 13-33.

6. Conclusiones

Europa ha recibido un trato de favor de Estados Unidos, que no se merece, según Donad Trump. Debe contribuir a los gastos de defensa de la seguridad internacional, que no debe recaer exclusivamente en manos de Estados Unidos. Igualmente en comercio y aranceles debe contribuir en proporciones razonables y justas.

El problema palestino-israelí no es asunto de Estados Unidos, sino de ambas partes, Palestina e Israel, que deben ponerse de acuerdo. Trump interrumpe la prédica de los dos Estados sostenida por los anteriores presidentes del país y el papel de moderador llevado a cabo por Estados Unidos. El abandono de Trump deja todo el campo libre a Israel, para que siga su política tradicional de hostigamiento y control de los palestinos, ahora convertida en genocidio, y de asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino -Gaza y Cisjordania-, que son ilegales y contrarios a las resoluciones de Naciones Unidas. En el momento de la firma de este escrito se está produciendo una presión del ala de extrema derecha del Gobierno israelí para que grupos de colonos israelíes se establezcan en el territorio de Gaza. No es raro que sin autorización alguna bandas de colonos israelíes se apropien de zonas del territorio gazatí desvastado. Posteriormente, como ha hecho tantas veces, el Gobierno israelí lo aprobará.

En cuanto a Cuba Trump tiene muy claro que debe respaldar y ayudar a los cubanos exiliados, que tanto colaboraron para conseguir la victoria presidencial. Por lo demás, Trump se deshace en proclamas contra el tirano régimen castrista, que sojuzga a su pueblo. Los argumentos de Trump tienen una buena dosis de cinis-

mo, porque aplica a Cuba una serie de caracteres —tiranía, supresión de las libertades, opresión del pueblo cubano, etc.—, que son los mismos de los que adolecen otros países, que por el contrario son bien considerados por Trump y la gran potencia mundial, con los que mantiene excelentes relaciones de cooperación. La doble vara de medir de Estados Unidos, que mete o saca de su lista de Estados amigos a discreción y según le convenga. Llama terroristas a Estados simplemente díscolos con Estados Unidos y Estados amigos a Estados fallidos e incluso terroristas.

Nada de solidaridad internacional, nada de cooperación internacional al desarrollo, de protección de los derechos humanos. En sus discursos, declaraciones, acciones y decisiones políticas todo es sencillo, plano y egocéntrico: *First America*. Y fuera de América y su interés nada que contemplar. América es el único punto de mira. Y es posible que en enero de 2025 tome posesión Donad Trump de un segundo mandato como presidente de Estados Unidos y que repita la misma política que ya referí en un anterior libro mío citado al principio respecto a los musulmanes, inmigrantes y el cambio climático y en este segundo trabajo en relación con Europa, Palestina-Israel y Cuba.

7. Bibliografía

Bassets, M. (2017). *Otoño americano*, Barcelona: Elba.

Cepedello, J. (2015). "Obama y las Primaveras Árabes: el influjo de una con-cepción neocolonial del mundo islámico en la actuación política del presidente Barack H. Obama", en vol. col. coordinado por Ramón Soriano, *Barack Obama: Política y Derechos*, Sevilla: Aconcagua Libros.

Cay, D. (2016). *Cómo se hizo Donald Trump*, Madrid: Capitán Swing.

Estulin, D. (2017). *La trastienda de Trump*, Madrid: Planeta,

García Encina, C. (2018). "Trump y el mundo: un año de política exterior", *ARI*, 5. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari5-2018-garciaencina-trump-y-el-mundo-un-ano-de-politica-exterior

Gómez Trejos, I. (2017). *El muro ya empezó. La paranoia salvadoreña frente a Trump*, San Salvador: UFG editores.

Gore, A, (2006). *An inconvenient truth. The planetary emergency of global warming and what we can do about it*, Londres: Bloomsbury Publishing.

James, A., Trump (2026). *Ensayo sobre la imbecilidad*, México: Malpaso.

Kiyosak, R., Trump, D. (2018). *Queremos que seas rico*, editor digital Titivillus.

Morgenfeld, L. (2016). "Estados Unidos: Trump y la reacción xenófoba contra la inmigración hispana", *Revista Conflicto Social*, núm 15.

Pellicer, M. (2017). *La comunicación en la era de Trump*, Barcelona: Editorial UOC.

Rodríguez, F. (2022). *Trump: Breve historia de una presidencia singular*, Granada: Comares.

Soriano, M. L. (2018). *Donald Trump, Barak Obama y George Bush*, Valencia: Tirant lo Blanc

Soriano, M. L. (2017). *De George Bush a Barack Obama. Filosofía jurídico-política y Política práctica*, Sevilla: Aconcagua Libros.

Soriano, M. L. (2014). "El derecho a la igualdad de oportunidades y la reforma migratoria del presidente estadounidense Barack Obama", en el vol. col. *Alianza de Civilizaciones, Políticas migratorias y Educación*, Sevilla: Aconcagua Libros, 113-137.

Soriano, R. (2015). *Barack Obama: Política y Derechos*, Sevilla: Aconcagua Libros.

Soriano, R., Mora, J.J. (2006). *Los neoconservadores y la Doctrina Bush. Diccionario crítico ideológico*, Sevilla: Aconcagua Libros,

Tovar, J. (2017). *La doctrina en la política exterior de los Estados Unidos*, Madrid: Libros de la Catarata.

Trump. D., Hall, W., Schweizer, P., McIver, M. (2011). *Time to get tought. Making America Great Again*, Washington: Regnery Publishing.

Trump, D., Shiflett, D. (2000). *The America we deserve*, Los Ángeles: Renaissance Books.

Trump, D. (2015). *Crippled America: How to Make America Great Again,* Nueva York: Simon and Schuster.

Trump, D. (2017). *Nunca tires la toalla. Cómo convertir mis mayores retos en grandes éxitos*, editor digital Titivillus.

Trump, D (President Donald J. Trump). (2023). *Letters to Trump*, Hardcover.

Vallés, V. (2017). *Trump y la caída del imperio Clinton*, editor digital No tan malo.

Vargas, A. (coord.) (2017). *El estadillo del populismo*, editor digital Titivillus.

Wolff, M. (2017). *Fire and Fury. Inside the Trump White House*, Nueva York: Henry Holton and Company.